UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

LE CORPS ABSENT COMME SUJET POLITIQUE. LE PROCESSUS DE CONSTRUCTION DES DISPARITIONS FORCÉES AU MEXIQUE COMME UN PROBLÈME D'ACTION PUBLIQUE (1969-2018)

THÈSE
PRÉSENTÉE
COMME EXIGENCE PARTIELLE
DU DOCTORAT EN SCIENCE POLITIQUE

PAR
ASTRID ADRIANA POZOS BARCELATA

DÉCEMBRE 2018

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Service des bibliothèques

Avertissement

La diffusion de cette thèse se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire *Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs* (SDU-522 – Rév.10-2015). Cette autorisation stipule que «conformément à l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour des fins pédagogiques et non commerciales. Plus précisément, [l'auteur] autorise l'Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété intellectuelle. Sauf entente contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.»

AGRADECIMIENTOS

Esta tesis es el resultado de un largo proceso que ha sido acompañado de múltiples solidaridades. En primer lugar, quiero agradecer a mis supervisoras, Nancy Thede y Anahi Morales Hudon, por su seguimiento cercano, su disponibilidad, sus lecturas detalladas y rigurosas y su respaldo en todas las etapas del doctorado. Desde mi llegada a Montreal, Nancy Thede me acogió en la Cátedra Nycole Turmel, que devendría el *Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations politiques* (GREPIP), donde además de un equipo de trabajo, encontré un espacio de confianza, de colaboración, donde se forjaron relaciones y aprendizajes que durarán para toda la vida. Las oficinas de la Cátedra con mis compañeros y compañeras, que ahora son amistades entrañables, contribuyeron de manera determinante a que mi estancia en Quebec sea una de las etapas más importantes de mi formación académica y de experiencias personales. Además, Nancy siempre estuvo disponible para escuchar mis preocupaciones y orientarme en mis elecciones académicas, con respeto de mis decisiones y con un respaldo constante que valoro profundamente. En el mismo contexto conocí a Anahi Morales Hudon, con quien desde un principio compartí preocupaciones políticas y con quien emprendí colaboraciones de diferentes tipos, siempre apoyadas por la Cátedra y luego por el GREPIP. A Anahi le agradezco en particular sus enseñanzas generosas en caminos que ella ya había recorrido y su disponibilidad y presencia que van mucho más allá de una relación meramente académica. Las largas conversaciones sobre la situación política de México, su apoyo, orientación y relecturas incluso antes de ser mi supervisora y sus reflexiones sobre el quehacer y la ética académica marcan la pauta en mi camino ¡Muchas gracias a ambas!

Además de mis supervisoras quiero reconocer los aportes que brindaron a esta tesis las 54 personas que me concedieron entrevistas. Las reflexiones aquí vertidas son en buena parte producto de esas largas conversaciones que tuvimos. Además de reconocerles la generosidad de las reflexiones y la información compartida, les agradezco sinceramente el trabajo cotidiano y valiente que hacen para denunciar los crímenes de lesa humanidad que se analizan en esta tesis, para que los eventos del pasado no se repitan ¡Nunca más!

Quiero agradecer también al equipo del GREPIP *in extenso*, pero muy particularmente a Julián Durazo Herrmann y a Pierre Beaucage, con quien tuve la oportunidad de tener colaboraciones más cercanas y de quienes aprendí mucho. Además, con Julián tuve la oportunidad de tener interesantes discusiones sobre el tema de esta tesis. La recomendación de la novela *Le Ministère des affaires spéciales* de Nathan Englander (2010), en parte inspira el parangón que establezco con la obra de Wagner en la tesis. Le agradezco además el hecho de haber facilitado mi participación en actividades académicas como el Congreso de la ACELC 2018. En el mismo sentido, agradezco a otros profesores de la Université du Québec à Montréal (UQÀM) que de múltiples maneras me han apoyado y han contribuido a mi formación, con acciones que también van más allá de una relación meramente académica. En particular agradezco a Nora Nagels con quien he tenido la oportunidad de trabajar como auxiliar de enseñanza y asistente de investigación en diferentes proyectos, y que, gracias a estas colaboraciones y acomodo de calendarios de su parte para que pudieran coincidir con la realización de mi trabajo de campo, fue que en parte fue financiado. Lo aprecio mucho. De igual manera agradezco a Leila Celis por su escucha activa y las largas conversaciones en torno al tema, su solidaridad entrañable en mi último mes de estancia en Montreal y los contratos de colaboración, además de su compromiso con las causas que se abordan en este trabajo, su quehacer y compromiso personal son fuente de inspiración. Finalmente, agradezco a Bernard Duhaime por haberme aceptado de oyente en su curso *Actualidad del derecho internacional – desapariciones forzadas* y su generosidad al compartirme

sus reflexiones y conocimientos sobre este tema. En esta misma línea, pero en CIESAS-Golfo en México, agradezco a Ernesto Isunza Vera, quien me recibió durante el último año de redacción, en el marco del programa de *estudiantes huéspedes* y que me facilitó un espacio de trabajo y la integración a diversas actividades de la institución.

En el plano material, el realizar este proyecto doctoral en Quebec fue posible gracias a la obtención de la Beca de Excelencia para Estudiantes Extranjeros del *Fonds de recherche nature et technologie de Quebec*, que me permitió financiar parte de mis estudios y de mi estancia en Montreal. Agradezco también a las múltiples personas que confiaron en mí y que a través de diferentes contratos y subvenciones contribuyeron al financiamiento de este proyecto. Agradezco a Nancy Thede por su apoyo en este sentido a través de los contratos en la Cátedra, en el GREPIP y el financiamiento para mi asistencia a la VII conferencia de CLACSO 2015 en Colombia, al igual que a Anahi Morales Hudon, quien en parte contribuyó a financiar mi trabajo de campo y junto con Philippe Dufort mi participación en LASA 2016. Asimismo agradezco a Nora Nagels, Leila Celis, Charmain Levy, Pierre Beaucage, Julián Durazo y Ximena Cuadra Montoya al igual que a Catherine Rodriguez y Simon Morin por los respectivos contratos. Agradezco también muy sinceramente a Angélica Padilla y a Elena Moreno, quienes me recibieron en sus hogares durante la realización del trabajo de campo y a mi hermana Olivia por prestarme su departamento en Xalapa para vivir durante los últimos meses de redacción, al igual que a César Guevara González por su apoyo en múltiples dimensiones, incluso prestándome su computadora laptop cuando la mía *rindió el alma* en la última etapa de redacción.

Muchas veces se dice que redactar una tesis es como *atravesar el Atlántico en solitario*, tuve la fortuna de que no fuera mi caso. Siempre hubo una oreja amiga para escuchar mis preocupaciones y reflexiones y ojos prestos para hacer relecturas atentas de mi trabajo, además de tener siempre alguien disponible para tener largas conversaciones en torno al tema. Además de Nancy y Anahi, quiero agradecer muy enfáticamente por

su escucha y sus relecturas críticas y constructivas a César Guevara González, Marc-André Anzueto, Ximena Cuadra Montoya, Fernanda Gutiérrez y Luz Marcela Rocha. De igual manera agradezco su retroalimentación en torno al primer capítulo a Ariel Dulitzky y a Javier Yankelevich, así como a las y los miembros del Seminario Permanente de Políticas Públicas, Gobernanza y Redes de Poder de CIESAS Golfo y del Seminario Diálogos Interdisciplinarios entre la Antropología Social y Forense de CIESAS Ciudad de México, espacios donde tuve la oportunidad de presentar parte de mis resultados de investigación y obtuve comentarios que me hicieron avanzar en mi reflexión.

Además de estas dimensiones que ya fueron mencionadas, en mi cotidianidad, de cerca y a la distancia, tuve muchos otros tipos de apoyo que no quiero pasar por alto. En Montreal, en primer lugar, agradezco a mis amistades con quienes compartía el cotidiano en la Cátedra y nos acompañamos en esta empresa de los estudios superiores. Simon Morin, Marc-André Anzueto y Ximena Cuadra: gracias por las aventuras y desventuras compartidas, el apoyo, la solidaridad, la escucha, las largas pláticas académicas y todo el cariño, ustedes son parte fundamental de mis recuerdos de Montreal, a Marc-André y Simon también les agradezco por las correcciones en francés de los textos y a Marc-André, además, por su hospitalidad. Ludivine Tomasso también es parte de esta aventura y siempre se mostró muy solidaria, gracias. A Marie-Dominik Langlois le agradezco por su hospitalidad y generosidad en los últimos días antes de la defensa. A Étienne Roy-Grégoire, lo tengo presente por acompañar este proceso, por ser amigo, por sus reflexiones y críticas constructivas. A Luz Marcela Rocha, y familia, les agradezco profundamente por su apoyo constante, por ser una extensión de mi familia en Montreal. Agradezco también a Catherine Rodriguez, mi *coloc* por los casi tres últimos años de estancia en Montreal, por facilitarme el cotidiano y con quien comparto también muchos recuerdos. Mis compañeras y amigas del Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), merecen también una mención especial, en particular Marie-Ève Marleau, Eva Mascolo Fortin y Ximena Cuadra

Montoya: muchas gracias por las horas y horas de reflexión, de acompañamiento y de implicación y de militancia política juntas, pero también por sus relecturas y correcciones de francés y los múltiples momentos compartidos. A Jesús Rendón y Fernanda Gutiérrez también les dirijo un agradecimiento especial por su amistad y acompañamiento, pero particularmente por ayudarme a resolver situaciones logísticas —y a Fer con el inglés también—, mientras estaba en Montreal y a la distancia, todo su apoyo también lo aprecio mucho. Otras personas a las que quiero agradecer son a Erandy Vergara por los momentos y proyectos compartidos y a Mireya Landero por su apoyo durante el trabajo de campo. Philippe Fortin, Daniel Legault y Angela Duhamel, también les agradezco profundamente su hospitalidad y cariño. A Janett Vallejo le agradezco su solidaridad y las pláticas amenas que mantuvimos durante los últimos meses de redacción en Xalapa. A Mayra Ledesma Arronte y Arturo Márquez Murrieta por acompañar desde la reflexión y la militancia la última parte de este proceso. A Ximena Cuadra Montoya, le agradezco además todas las gestiones para hacer el depósito de la tesis, pero sobre todo por su amistad fuera del ámbito académico y acompañamiento cotidiano en ese local del GREPIP compartido. Finalmente, agradezco a César Guevara González por estar siempre presente de cerca y a la distancia durante tantos años, con tanto cariño y siempre solidario.

A Susana, Raúl, Olivia, Rosario, Gracie, Gaby y Lúa, por siempre estar.

DEDICATORIA

A las *nornas del pasado, del tiempo presente* y *del futuro*: ¡Hasta encontrarles! En particular a Lupita Fernández Martínez, Blanca Hernández, Hilda Legideño, Lucy Díaz Genao, Lucía Baca, Patricia Manzanares, Ana Enamorado, Beatriz Flores Santoyo, Hilda Hernández Rivera, Nadin Reyes Maldonado, Citlalli Miranda, Catalina Hernández.

A *Susana*, como siempre.

PREFACIO

En México, desde 2006, la desaparición de personas es un fenómeno que rebasa por mucho las cifras oficiales: 37,441 al 30 de abril de 2018 según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) y, por ejemplo, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre enero del 2007 y septiembre del 2018, han sido localizadas más de 1307 fosas clandestinas con alrededor de 3926 cuerpos, la gran mayoría de ellos está aún sin identificar (N. Jiménez y Castillo, 2018; Proceso, 2018b). Por otra parte, de acuerdo con estimaciones de organismos de derechos humanos y colectivos de familiares de personas desaparecidas, por cada denuncia de desaparición, hay al menos otras 8 que no se denuncian por miedo o por desconfianza en las instituciones y sus funcionarios (MVS Noticias, 2017; Proceso, 2017a). Esto sin contar las miles y miles de personas centroamericanas que en su proceso migratorio deben atravesar el país y desaparecen en esta travesía, sin que haya ningún conteo que pueda ser confiable. En 2016, el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) estimaba que alrededor de 70 mil personas habían desaparecido en el país en 10 años (2006-2016) (Guzmán, 2016). Es decir, casi el doble de las y los mexicanos. El origen de estas desapariciones puede responder a varios crímenes: secuestros, trata de personas con fines de explotación sexual y/o trabajo forzado, desaparición forzada, etc. Incluso entre estas cifras puede haber personas —las menos, sin duda—, que se fueron por su propia voluntad.

El acceso a una verdad jurídica de cada caso es ilusorio debido a que por un lado, la gran mayoría de estos crímenes no se investigan, ya sea por ineficiencia administrativa o por complicidad de funcionarios públicos con los perpetradores, además de que México encabeza la lista de países del continente con el más alto índice de impunidad

(Le Clerck Ortega y Rodríguez Sánchez Lara, 2018). Efectivamente, el 93.2% de los delitos en el país no se denuncian (ENVIPE, 2018), del 6.4% que sí se denuncian, apenas el 12% son investigados y menos del 4% finaliza con alguna sentencia (Le Clerck Ortega y Rodríguez Sánchez Lara, 2018). Es decir, hay una impunidad generalizada. Además, de acuerdo con Carlos Martín Beristain, experto internacional en atención psicosocial de víctimas de violaciones a los derechos humanos y miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, una de las especificidades en México en cuanto a este fenómeno de desaparición de personas tiene que ver con el grado de imbricación de los agentes del Estado con las redes criminales. A la pregunta expresa sobre si existe una especificidad en México en torno a las desapariciones forzadas, respondió:

> Existen varias especificidades. Una tiene que ver con la participación de los agentes del Estado junto con la delincuencia organizada y la connivencia de agentes del Estado con la delincuencia organizada a diferentes niveles, tanto municipal, como estatal o federal. Y esto es una característica diferente, también se da en la actualidad en otros lugares, pero no se da con la masividad ni con el nivel de impacto que tiene en el caso de México. Y esto lo diferencia también de las desapariciones de los años 70 en México, que eran desapariciones digamos más en el contexto de la Guerra Sucia o de las desapariciones de la lucha contrainsurgente u otra cuestión política como en países como Chile o Argentina, Guatemala o El Salvador. [...] Eso muestra un fenómeno más complejo en el que las razones que subyacen a la desaparición, pues siempre hay dos tipos de razones. Uno es, la razón propiamente de la acción contra las víctimas, tiene que ver con el control de población y el territorio. En el caso de México es un control territorial por razones de corrupción, de narcotráfico, de tráfico de personas, fundamentalmente o la mayoría, ¿no? Y en otros casos obviamente la razón del control del territorio o de la población tiene que ver más con la lucha contrainsurgente en otros países o ha tenido que ver más históricamente con eso (Entrevista, el 3 de febrero del 2017).

Efectivamente, tal como es desarrollado en esta tesis, en el caso mexicano las desapariciones en la actualidad parecen responder a intencionalidades diferentes a las que ocurrieron durante la Guerra Sucia (1964-1982), sin embargo, por nebuloso que

parezca el escenario, desde el análisis politológico y sociológico, la responsabilización de este fenómeno de desapariciones debe apuntar hacia el Estado y esto por varias razones. Una de ellas es, por su sistematicidad y generalidad, otra, tal como fue señalado por Carlos Martín Beristain, por el nivel de imbricación y connivencia de agentes del Estado con grupos criminales que se ha podido señalar en múltiples casos y que algunos de ellos son analizados en este texto (ver capítulo III, *infra*). De hecho a nivel mundial, cada vez más las desapariciones forzadas son cometidas por agentes que juegan un doble rol, de funcionarios públicos y de agentes con vínculos con organizaciones criminales (Duhaime, 2017), éste sería el caso de México. Otra de las razones es que, a imagen de lo que fue dictado en la sentencia acusatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el marco del Campo Algodonero en Ciudad Juárez, ante la masividad actual de este fenómeno, el Estado puede considerarse responsable por haber violentado los derechos que fueron ratificados por el país en tratados internacionales, como son por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal, así como el acceso a la justicia y a la protección judicial (CoIDH, 2009).

A partir de estos argumentos, y ante la imposibilidad de la judicialización del conjunto de los casos, la orientación de análisis de esta tesis apunta a la definición de desaparición forzada de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (ONU, 2006), el cual es un instrumento de carácter vinculante y ratificado por México el 18 de marzo de 2008 y entrado en vigor el 23 de diciembre de 2010. En éste se define la desaparición forzada como sigue:

> El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley (ONU, 2006).

Así, en esta definición es necesario observar que, además de la privación de la libertad bajo cualquier forma, está la negativa de reconocer la privación y que por este hecho, se sustrae a la persona de la protección de la ley. Además, interesa subrayar aquí, que para que se pueda considerar como una desaparición forzada, debe haber participación de agentes del Estado o personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. En este caso, el hecho de que en la cadena de mando de la desaparición haya implicado algún agente del Estado, o se actúe con su aquiescencia, o contribuya con su ocultamiento, es suficiente para que se considere como una desaparición forzada mientras estén presentes los otros tres elementos. Es decir, si la desaparición fue efectuada por grupos narcotraficantes o por grupos criminales en general, que actuaron con la venia de algún funcionario público es suficiente para que se considere, en el marco de la Convención de la ONU, como una desaparición forzada y ante su masividad, de acuerdo con el Artículo 5 de la misma, se pueden considerar incluso como crímenes de lesa humanidad.

En fin, toda esta reflexión era necesaria para concluir que esta tesis está basada en un análisis politológico y sociológico del fenómeno de la desaparición de personas en México. En ese sentido, y ante la masividad de éstas, la inacción del Estado para frenarlas y los vínculos estrechos entre agentes del Estado y grupos criminales que en su gran mayoría han podido ser evidenciados por trabajos de investigación académica y periodística y muchas veces por los propios familiares —a falta de un sistema de justicia en capacidad o voluntad de dar respuesta efectiva a las investigaciones—; en este texto, el análisis de las desapariciones en el país está orientado a considerarlas en su globalidad como un fenómeno de desapariciones forzadas. Efectivamente, al igual que las desapariciones en la Guerra Sucia que, a excepción de la desaparición forzada de Rosendo Radilla (CoIDH, 2009), al momento de la redacción de esta tesis tampoco han sido juzgadas y son otras verdades las que han podido reconstruirlas como desapariciones forzadas, en esta construcción de lo público, esta tesis tiene entonces

como finalidad analizar las desapariciones de personas como un fenómeno de desapariciones forzadas para abonar a la responsabilización del Estado sobre ellas.

ÍNDICE

PREFACIO ix

RESUMEN xxiv

RÉSUMÉ xxvi

ABSTRACT xxviii

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO I LA *RE*SUBJETIVACIÓN DE QUIEN BUSCA: LA CONSTRUCCIÓN DIALÉCTICA DEL CUERPO AUSENTE COMO SUJETO POLÍTICO 24

Introducción 24

PRIMERA PARTE: GÉNESIS Y OBJETIVOS DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 29

1.1 El *Tarnhelm*: Génesis de un dispositivo desaparecedor 30

1.2 La desaparición forzada como despojo de la subjetividad del sujeto 39

1.3 Noche y niebla: ¡Ya no hay nadie! 48

1.4 La gestión de la ausencia: la aliteración del limbo, el estado liminal y la catástrofe de sentido 51

SEGUNDA PARTE: EL SURGIMIENTO DE UN NUEVO SUJETO POLÍTICO, LAS MUJERES-MADRES EN BÚSQUEDA DE LAS Y LOS DESAPARECIDOS 58

1.5 Las *Valquirias*: las mujeres-madres y su entrada en política 59

1.6 El cuerpo ausentado en la niebla o su estadía en el reino del *Nibelheim* 67

1.7 La cabalgata de las valquirias 73

Conclusión 80

CAPÍTULO II TRAYECTORIAS DE LA DESAPARICIÓN: EVOLUCIÓN DE LOS ACTORES, DE LOS DISCURSOS Y DE LOS MOTIVOS DE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO 82

Introducción 82

PRIMERA PARTE: *LAS CONDICIONES SOCIALES DE LA CIRCULACIÓN INTERNACIONAL* DEL TERROR. LA EXPANSIÓN DE LA DESAPARICIÓN FORZADA POR AMÉRICA LATINA 86

2.1 La socialización de las doctrinas militares en América Latina o del cómo gobernar por el terror 87

2.2 La doctrina francesa antisubversiva: preparar a Fafner para convertirse en dragón 93

2.3 La Doctrina de Seguridad Hemisférica: el miedo a la desposesión y la sed de avaricia, *el despertar del dragón* 97

2.3.1 La Escuela de las Américas: la secreción del dragón con cola de serpiente 99

SEGUNDA PARTE. TRAYECTORIAS DE LA APROPIACIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL DISPOSITIVO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO 105

2.4 La desaparición forzada en México: construir al enemigo para desaparecerle mejor. 107

2.5 La desaparición en la Guerra Sucia 109

2.6 La desaparición de personas en el giro neoliberal mexicano 121

2.6.1 Las reminiscencias de la Escuela de las Américas. La desaparición forzada en el contexto de los levantamientos armados del EZLN y del EPR 126

2.6.2 La desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua 135

Conclusión 142

CAPÍTULO III El (*QUASI-*) OCASO DE LOS DIOSES. LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN EL CONTEXTO DE LA ALTERNANCIA POLÍTICA 145

Introducción 145

3.1 La alternancia política y la llamada *Guerra contra el Narcotráfico*: el tercer periodo de las desapariciones forzadas en México 149

3.2 La expansión de las economías criminales. Sobre la macrocriminalidad y el uso de los cuerpos en las economías predatorias 161

3.2.1 Las desapariciones forzadas para debilitar a grupos criminales asociados con otros agentes de Estado 170
3.2.2 Desaparición de mujeres, los usos sexuales del cuerpo en el centro de la acción..... 174
3.2.3 Las desapariciones de niñas y niños: reclutamiento forzado, adopciones ilegales, explotación sexual y otros usos predatorios de sus cuerpos 180
3.2.4 Desapariciones en el marco del trabajo forzado especializado 183
3.2.5 Perderse en la niebla, la desaparición forzada de personas en situación de desplazamiento y migración..... 184
3.2.6 Las desapariciones colectivas, de la negación de la singularidad en el espacio social a los crímenes de lesa humanidad..... 187
3.2.7 Desaparecer a las y los mensajeros: la desaparición de periodistas en el ejercicio de la denuncia pública y de su profesión..... 191
3.2.8 Desvanecerse en la economía extractivista y las acciones paramilitares 192
3.2.9 Las desapariciones forzadas de los disidentes políticos, una continuidad 193

3.3 Los métodos de la desaparición de los cuerpos 198

3.4 Ayotzinapa, toda la furia de los dioses sobre un mismo actor social 206

Conclusión 216

CAPÍTULO IV GÉNESIS E INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS SUJETOS POLÍTICOS EN TORNO A LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN MÉXICO 220

Introducción 220

PRIMERA PARTE: *LAS NORNAS DEL PASADO*. GÉNESIS DE LOS SUJETOS POLÍTICOS EN TORNO A LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN MÉXICO 222

4.1 El Comité de familiares de presos, perseguidos y exiliados políticos..... 224

4.2 El Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México — Comité Eureka..... 230

4.3 La Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM) 235

4.4 El Telar de las *nornas* 240

SEGUNDA PARTE: NUEVOS ACTORES Y NUEVAS ESTRATEGIAS. LA CONSTITUCIÓN DE SUJETOS POLÍTICOS PROFESIONALIZADOS Y LA VINCULACIÓN CON LOS PROCESOS INTERNACIONALES 248

4.5 Los organismos de derechos humanos y su profesionalización, un nuevo sujeto político en torno a las desapariciones forzadas 248

4.6 El *feminicidio* como causa: los asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua durante la década de 1990 256

Conclusión 268

CAPÍTULO V Los cuerpos ausentes toman la arena pública. La politización de las desapariciones forzadas en el periodo de la alternancia política 272

PRIMERA PARTE: LAS VÍCTIMAS TOMAN LA ESCENA PÚBLICA. EL MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD 275

5.1 La congregación de las víctimas: El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 276

5.2 *Comunidades de dolor*, comunidades de lucha: la concatenación de los sujetos políticos 280

5.3 Activistas del MPJD en la interacción de la relación movimiento social/ sociedad civil organizada/Estado 284

5.4 El Ocaso del MPJD y la disgregación de las víctimas: la colectivización de la búsqueda 292

SEGUNDA PARTE: El CASO AYOTZINAPA Y LA RECONFIGURACIÓN Y FOCALIZACIÓN DE LA LUCHA 299

5.5 El impulso del movimiento por los 43 estudiantes de Ayotzinapa a la agenda de las víctimas: una relación en tensión 302

5.6 *Coaliciones de causa*, la agenda legislativa por una ley general de desaparición forzada 314

5.7 Las *nornas del tiempo presente* al rescate de las almas del *Nibelheim*. Las búsquedas ciudadanas: del "vivos los queremos" al "cómo los encontraremos" 327

5.8 Las *nornas del pasado* vs. *las nornas del tiempo presente*, entre el *Nibelheim* y el *Walhala*: la disputa por las formas del regreso de los cuerpos ausentados 342

Conclusión 352

CONCLUSIÓN 356

ANEXO A: *Damnatie memoriae* 373

ANEXO B: La utopía está(ba) en el horizonte… y servía para caminar 374

ANEXO C: La (*¿fallida*?) transición a la democracia: la aceleración del proceso democrático, transitar en la circunferencia del círculo 380

ANEXO D: Características de los primeros colectivos de familiares de personas desaparecidas de la llamada "guerra contra el narcotráfico" 394

ANEXO E: El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 410

ANEXO F: Ayotzinapa, fue el Estado 422

APÉNDICE A: Lista de personas entrevistadas 436

APÉNDICE B: Guía de entrevista para trabajo de campo 441

APÉNDICE C: Casos de desaparición forzada en México aceptados por el GTDFI de la ONU (1972-2016) 445

BIBLIOGRAFÍA 446

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ACNR	Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
ACNUDH	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
AFADEM	Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas a los Derechos Humanos en México
AFDD	Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
AMDH	Academia Mexicana de Derechos Humanos
AMORES	Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León
ASG	Asociación Cívica de Guerrero
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BMV	Bolsa Mexicana de Valores
CADHAC	Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C.
CCIH	Comisión Científica de Identificación Humana
CdMx	Ciudad de México
CDNE	Controles Democráticos No Electorales
CEAV	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
CEDIMAC	Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer
CEIS	Centro de Estudios en Investigación en Seguridad
CEPAD	Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.
CERPE	Comité de ética de la investigación para proyectos de estudiantes que involucran seres humanos
CETLAC	Comité de Lucha contra la Violencia, Centro de Estudios y Taller Laboral A.C.
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CfC	Ciencia Forense Ciudadana
CIA	*Agencia Central de Inteligencia*

CICH	Comité Independiente de los Derechos Humanos de Chihuahua
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIESAS	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
CISEN	Centro de Investigación y Seguridad Nacional
CISO	Centro de Investigación y Solidaridad Obrera
CMDPDH	Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C.
CNC	Confederación Nacional Campesina
CNDH	Comisión Nacional de Derechos Humanos
CNI	Congreso Nacional Indígena
CNI	Comité Nacional Independiente Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos, Asesinados y Exiliados por Razones Políticas
CNOP	Confederación Nacional de Organizaciones Populares
COCOPA	Comisión de Concordia y Pacificación
CoIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
COMO	Centro de Orientación de la Mujer Obrera
CPDM	Coordinadora en Pro de los Derechos de la Mujer
CTM	Confederación de Trabajadores de México
DEA	Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos
DFS	Dirección Federal de Seguridad
EAAF	Equipo Argentino de Antropología Forense
EMAF	Equipo Mexicano de Antropología Forense
ENVIPE	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
EPR	Ejército Popular Revolucionario
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FEDEFAM	Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos

FEMOSPP	Fiscalía Especial para la Investigación de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado
FGE	Fiscalía General del Estado
FJEDD	Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
FLACSO	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FLN	Fuerzas de Liberación Nacional
FMLN	Farabundo Martí para la Liberación Nacional
FSLN	Frente Sandinista de Liberación Nacional
FUNDEBC	Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Baja California
FUNDEM	Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de México
FUNDEM	Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de México
FUNDENL	Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León
FUUNDEC	Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila
GAFE	Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales
GIASF	Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense
GIEI	Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
GIEI	Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
GTDFI	Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias
H.I.J.O.S.	e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
IFE	Instituto Federal Electoral
IGI-MEX	Índice Global de Impunidad-México
INEGI	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia
MESA	Mecanismo Especial de Seguimiento del asunto Ayotzinapa
MMM	Movimiento Migrante Mesoamericano
MNDM	Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México
MORENA	Movimiento de Regeneración Nacional

MPJD	Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
MRP	Movimiento Revolucionario del Pueblo
NN	Noche y Niebla
OCSS	Organización Campesina de la Sierra del Sur
OEA	Organización de Estados Americanos
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OPI	Organización Popular Independiente
OPM	Organización Política Militar'
OSS	Oficina de Servicios Estratégicos
OTAN	Organización del Tratado del Atlántico Norte
PAN	Partido Acción Nacional
PCM	Partido Comunista Mexicano
PDPL	Partido de los Pobres
PDPR	Partido Democrático Popular Revolucionario
PGJEC	Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila
PGR	Procuraduría General de la República
PMS	Partido Mexicano Socialista
PMT	Partido Mexicano de los Trabajadores
PPR	Partido Patriótico Revolucionario
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido de la Revolución Institucional
PRODH	Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
PRT	Partido Revolucionario de los Trabajadores
PST	Partido Socialista de los Trabajadores
PSUM	Partido Socialista Unificado de México
PT	Partido del Trabajo
Red TDT	Red Todos los Derechos para Todas y Todos
REDIM	Red por los Derechos de la Infancia en México
REPUPEDES	Registro Público de Personas Desaparecidas del Estado de Veracruz

RNPED	Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas
SADEC	Salud y Desarrollo Comunitario
SEDENA	Secretaría de la Defensa Nacional
SEGOB	Secretaría de Gobernación
SEMAR	Secretaría de Marina
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEMEFO	Servicios Médicos Forenses
SERAPAZ	Servicios y asesoría para la paz
SIEDO	Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
SIL	Sistema de Información Legislativa
SOA	School of Americas [Escuela de las Américas]
SSPF	Secretaría de Seguridad Pública Federal
TADECO	Taller de Desarrollo Comunitario
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UACJ	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
UACM	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
UAdeC	Universidad Autónoma de Coahuila
UAEM	Universidad Autónoma del Estado de Morelos
UDLAP	Universidad de las Américas Puebla
UIC	Unión de la Izquierda Comunista
UPOEG	Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero
UQÀM	Université du Québec à Montréal (Universidad de Quebec en Montreal
URSS	Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

RESUMEN

A partir de la pregunta de investigación ¿Qué actores, procesos y acciones lograron poner en la agenda pública y construir como problema de acción política el fenómeno de las desapariciones forzadas en México?, en esta tesis se analizan los procesos por los cuales los colectivos de búsqueda de personas y de acompañamiento a familiares, las organizaciones de derechos humanos, y sus aliados y aliadas, lograron en los últimos años posicionar las desapariciones forzadas como un problema de intervención pública, luego de un largo proceso que abarca casi 50 años. Teniendo el ejercicio del poder como análisis transversal (Agamben, 2005; Foucault, 1985), la tesis tiene por objetivo comprender en un primer momento en qué consiste el dispositivo de la desaparición forzada (Calveiro, 1998, Gatti, 2008) y reconstruir su genealogía. Esto con el objetivo de discernir cómo opera en México y qué cambios ha habido entre los años 1970, en el contexto de la Guerra Sucia, y a partir del 2006 en el contexto de la Guerra contra el Narcotráfico, ambas consideradas como estrategias de seguridad nacional.

En una segunda parte, a partir del aparato conceptual de la sociología política de la acción pública (Hassenteufel, 2011; Lascoumes y Le Galès, 2012; Muller, 2009; Sabatier, 2010), el objetivo es analizar la irrupción del cuerpo ausente como un problema de la acción pública y qué elementos y actores entran en disputa para mantenerlo en la agenda pública. De esta manera, a partir del caso particular de la puesta en agenda de la desaparición forzada de personas, analizo cómo se constituyen los sujetos políticos (Foucault, 1988; Retamozo, 2011b, 2011a; Samaddar, 2014) en torno a esta problemática y el proceso de construcción de un problema público, así como las relaciones de fuerza de las y los actores que entran en disputa.

Con respecto a las contribuciones, éstas van en tres sentidos: teórica, metodológica y empírica. A nivel de la reflexión teórica, uno de los aportes de esta tesis es analizar la desaparición forzada como un mecanismo de terror que apunta en dos direcciones. En primer lugar, hacia el sujeto-sujetado —la persona desaparecida en sí misma—, al despojarle de todos sus derechos y de su humanidad. El segundo, y esta es la novedad del análisis, hacia quien observa la acción. Es decir, para mostrar el *poder soberano* alguien debe ser ocultado u ocultada, ocasionando zozobra y desconcierto en quien observa la escena y es ahí donde radica la efectividad de esta técnica de control de las poblaciones. Por otra parte, a nivel metodológico, el aporte va en el sentido del recurso

al análisis genealógico, el cual explora, con sus respectivas continuidades y rupturas, la trayectoria de las desapariciones forzadas en México: cómo llega, cómo se vernaculiza y cómo se dan las reapropiaciones de los actores y actrices en el marco de las transferencias de esta pedagogía del terror en el país. Finalmente, en cuanto a los aportes a nivel empírico se pueden enumerar tres principalmente. El primero es el análisis diacrónico y sincrónico de la construcción de este problema de la acción pública a través de la emergencia e interacción de sujetos políticos particulares nucleados en torno a comunidades políticas donde el eje rector es el dolor. La segunda es la categorización de los tipos de desaparición y usos que se les da a los cuerpos en el pico histórico de desaparición de personas en el México actual, a partir de la alternancia política y del giro neoliberal mexicano. Por último, el análisis de la conformación de alianzas y rupturas en cuanto a las fuerzas políticas en presencia, así como las tensiones que se dan en torno a la búsqueda de los cuerpos: búsqueda en escenarios de vida y búsqueda en escenarios de muerte.

Palabras clave: Desapariciones forzadas, sujetos políticos, acción pública, México

RÉSUMÉ

Quels acteurs, quels processus et quelles actions ont réussi à construire le phénomène des *disparitions forcées* comme problème d'action publique au Mexique, et à le placer au centre de l'agenda politique? À partir de cette question de recherche, cette thèse analyse les processus par lesquels les associations de familles des personnes disparues, les organisations de défense des droits humains et leurs alliés et alliées ont réussi à positionner les disparitions forcées comme un problème d'action publique au cours des dernières années. En prenant l'exercice du pouvoir comme analyse transversale (Agamben, 2005; Foucault, 1985), cette thèse vise à comprendre, dans une première partie, ce qu'est le dispositif de la disparition forcée (Calveiro, 1998). Pour ce faire, nous reconstruisons sa généalogie afin de comprendre comment ce dispositif fonctionne au Mexique et ainsi savoir quels changements se sont produits durant les années 1970, dans le contexte de la « Guerre sale », et à partir de 2006 dans le cadre de la « Guerre contre le narcotrafic », deux périodes considérées comme clé pour les stratégies de sécurité nationale.

Dans une deuxième partie, en s'appuyant sur l'appareil conceptuel de la sociologie politique de l'action publique (Hassenteufel, 2011; Lascoumes y Le Galès, 2012; Muller, 2009; Sabatier, 2010), l'objectif est d'analyser l'irruption du corps absent comme un problème de l'action publique. Ici, nous cherchons à savoir quels sont les éléments et les acteurs qui entrent en dispute pour le maintien de ce sujet politique dans l'agenda public. Ainsi, à partir du cas particulier de la mise en agenda des disparitions forcées, nous analysons comment se construisent les sujets politiques (Foucault, 1988; Retamozo, 2011b, 2011a; Samaddar, 2014) autour de cette problématique et du processus de construction d'un problème public, ainsi que les rapports de force des acteurs et actrices en dispute.

En ce qui concerne les contributions à la recherche, ces dernières se situent sur le plan théorique, méthodologique et empirique. Au niveau de la réflexion théorique, l'une des contributions de cette thèse est d'analyser la disparition forcée en tant que mécanisme qui génère de la terreur allant dans deux directions. En premier lieu, vers le sujet-assujetti —la personne qui *s'est fait disparaitre*— en la dépouillant de tous ses droits et de son humanité. La seconde, et c'est la nouveauté de l'analyse, la terreur est adressée aussi vers ceux et celles qui observent l'action. C'est-à-dire, pour montrer le pouvoir souverain, il faut que la personne soit cachée, ce qui provoque de l'anxiété et de la confusion chez ceux et celles qui observent la scène. C'est-là que réside l'efficacité de

cette technique de contrôle des populations. Au niveau méthodologique, la contribution s'inscrit dans l'analyse généalogique, qui explore, avec ses continuités et ses ruptures respectives, la trajectoire des disparitions forcées au Mexique: son arrivée, sa domestication et son appropriation par des acteurs et actrices dans le cadre des transferts de cette pédagogie de la terreur. Finalement, en ce qui concerne les contributions au niveau empirique, nous en faisons ressortir trois principales. La première est l'analyse diachronique et synchronique de la construction de ce problème d'action publique à travers l'émergence et l'interaction de sujets politiques particuliers, concentrés autour de communautés politiques où l'axe rassembleur est la douleur. La seconde est la catégorisation des types des disparitions et des utilisations qui sont données aux corps à l'apogée de la disparition de personnes au Mexique, dans le cadre de l'alternance politique et au tournant néolibéral mexicain. Enfin, l'analyse de la conformation d'alliances et de ruptures des forces politiques en présence, ainsi que des tensions autour de la recherche des corps: recherche dans des scénarios de vie et recherche dans des scénarios de mort.

Mots clés : Disparitions forcées, sujets politiques, action publique, Mexique

ABSTRACT

What actors, processes and actions have succeeded in constructing the phenomenon of enforced disappearances in Mexico as a problem of public action, and putting it at the center of the political agenda? Starting from this research question, this thesis analyzes the processes by which groups of disappeared persons' relatives, human rights organizations and their allies have managed to position enforced disappearances as an issue for public action. The thesis aims, first of all, to understand enforced disappearance as a dispositif of power (Calveiro, 1998) and to recreate its genealogy through a transversal analysis of the exercise of power (Agamben, 2005, Foucault, 1985). The objective is to trace how this dispositif works in Mexico and the changes that have occurred between 1970 (in the context of the "Dirty War") and 2006 (in the "War against drugs"), two conflicts seen as components of national security strategies.

The second part of the thesis is inspired by the political sociology of public action (Hassenteufel, 2011; Lascoumes y Le Galès, 2012; Muller, 2009; Sabatier, 2010), and analyzes the emergence of the missing body as a problem of public action; it identifies the factors and actors contending to maintain the issue on the public agenda. In this way, on the basis of the specific case of the transformation of enforced disappearance into an issue for the public agenda, I analyze how political subjects construct themselves (Foucault, 1988; Retamozo, 2011b, 2011a; Samaddar, 2014) around this issue, the complexities of the processes of redefining it as a public problem as well as the power relationships between the different actors.

Thesis contributes to existing research on three levels: theoretical, methodological and empirical. Theoretically, it analyzes enforced disappearance as a mechanism of terror. This area has previously been explored as concerns the subject-subjected—the disappeared person in him or herself— stripped of all his rights and humanity. The new aspect of the analysis concerns those who observe the action. That is, in order to demonstrate sovereign power, someone must be absent, causing anxiety and bewilderment in those observing the scene: herein lies the effectiveness of this technique of population control. As for the methodological contribution, it is in the use of genealogical analysis, exploring the continuities and ruptures in the trajectory of enforced disappearances in Mexico: how it emerged, how it spread and it is appropriated by agents in the framework of the transfer of this pedagogy of terror in Mexico. Finally, three main empirical contributions can be identified. The first is the diachronic and synchronic analysis of the construction of this problem of public action

through the emergence and interaction of specific political subjects aggregated in political communities whose central axis is pain. The second is the categorization of the types of disappearance and the uses that are made of bodies during the present historical peak of forced disappearances in Mexico from the political alternance to the neoliberal turn. The third is the analysis of the process of alliance and rupture amongst political forces, and the tensions that occur around the search for bodies: the life scenario versus the death scenario.

Keywords: Enforced disappearances, political subjects, public action, Mexico

INTRODUCCIÓN

Cuando en septiembre de 2014 fueron víctimas de desaparición forzada 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa México salió a la luz pública a nivel internacional. Mismo si las desapariciones de personas habían aumentado considerablemente desde la puesta en marcha de la política de seguridad nacional del presidente de derecha, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), y que había habido movimientos de denuncia que antecedieron a las movilizaciones de 2014 como por ejemplo el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) en 2011, el ataque a los estudiantes conmocionó al país. Desde entonces, en parte gracias a esta movilización, la desaparición de personas devino un problema de la acción pública más allá de los grupos directamente afectados.

En México las desapariciones forzadas, bajo la figura del detenido-desaparecido, fueron objetivadas desde la Guerra Sucia (1964-1982) cuando *so pretexto* de la seguridad nacional ante la "amenaza" del comunismo, comenzaron a implementarse de manera orquestada y planeada. Éstas se mantuvieron latentes a lo largo de los años, con algunos periodos donde se exacerbaron presentando rupturas y continuidades con su implementación originaria. Desde los primeros casos de desaparición forzada, organizaciones conformadas por familiares de detenidos-desaparecidos comenzaron a reclamar el regreso de las personas ausentadas, una demanda que se ha mantenido vigente por casi cincuenta años sin que ésta hubiera logrado, más allá de ciertas coyunturas, ser percibida como un problema de interés público hasta recientemente, luego de la desaparición de los estudiantes.

En ese sentido, esta tesis tiene por objetivo indagar sobre este proceso de construcción de lo público en torno a la desaparición de personas en el país y en particular de la desaparición forzada, entendida ésta como la privación de la libertad de una persona bajo cualquier medio, ejecutada por agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con su aquiescencia, además de la negación del hecho y de ocultar el paradero de la persona, que por esta acción, la sustraen de la protección de la ley (Asamblea General ONU, 2006). En virtud de ello, me interesaba investigar: *¿Qué actores, procesos y acciones lograron poner en la agenda pública y construir como problema de acción política el fenómeno de las desapariciones forzadas?* Esto con el objetivo de analizar los mecanismos de la construcción de una agenda pública en torno a las desapariciones forzadas, a partir de la interacción de diferentes actores con posicionamientos, reivindicaciones, intereses colectivos y relaciones de fuerza disimétricas.

Enfoque teórico

La pregunta de investigación de esta tesis es abordada desde un enfoque crítico de la construcción del conocimiento partiendo del supuesto que la realidad se construye socialmente (Berger y Luckmann, 1968), en diálogo con la perspectiva postestructuralista, es decir, desde una mirada en torno al discurso, el poder y la producción de la subjetividad (Rifà Valls, 2003). Efectivamente, tanto el constructivismo como el postestructuralismo plantean preguntas y producen teorizaciones sobre el sujeto, la realidad y el conocimiento. En ese sentido, y de acuerdo con Martin Retamozo (2012), el postestructuralismo y el constructivismo tendrían como puntos de encuentro, a) el reconocimiento del papel activo del sujeto, tanto individual como colectivo y su centralidad en el campo de estudios; b) el análisis de esta realidad en función del conocimiento; y c) el proceso de producción de conocimiento. De igual manera, Retamozo (2012) asevera que el postestructuralismo de Foucault (1988) —uno de los autores cuya teoría guía este

análisis—, fue una contribución importante en el debate de la epistemología constructivista debido a que a partir de una lógica deconstructivista contribuyó a develar las formas de construcción política del saber y la verdad (Retamozo, 2012, p. 375).

En ese sentido, la perspectiva teórica de esta tesis es abordada desde tres dimensiones. La primera está vinculada con el estudio del poder, eje transversal de este análisis. De esta manera es aquí analizada la génesis, la afinación y la circulación del dispositivo mismo de la desaparición forzada como una tecnología represiva (Calveiro Garrido, 1998) de control de las poblaciones, que recae sobre el sujeto-sujetado —al que se hace desaparecer—, pero también en quien observa la escena. Es decir, el *derecho de muerte o poder sobre la vida*: Biopoder (Foucault, 2007a). En ese sentido, a partir del aparato teórico de Michel Foucault (1985, 1985, 1988, 1989a, 1989b, 2005, 2007) analizo cómo este mecanismo está diseñado para despojar al sujeto de su subjetividad en el ejercicio de un *poder soberano* (Agamben, 2005) que recae sobre la persona que se hace desaparecer en sí misma. Pero además, en un ejercicio que se aparenta al *suplicio* (Foucault, 1989b), el flanco de ataque también es el "pueblo" —quien observa la desaparición—, a quien se demuestra la prebenda del poder sobre la vida o la muerte (Agamben, 2005; Foucault, 1989b), fuera del marco del Estado de Derecho.

En virtud de ello, la segunda dimensión que se explora es cómo a través de la *catástrofe de sentido* (Gatti, 2008) que representa la desaparición forzada en quien la observa, surgen *sujetos políticos* (Foucault, 1988; Retamozo, 2011b, 2011a; Samaddar, 2014) específicos para hacerle frente. Destaca en particular la figura de la mujer-madre en busca de su progenitura desaparecida quien, a través de la gestión de esta ausencia, en un proceso de *de*subjetivación y *re*subjetivación (Foucault, 1988), establece una relación dialéctica con quien no está para reclamar su regreso. En ese sentido se analizará cómo este mecanismo estructura las relaciones sociales entre grupos específicos y en momentos históricos determinados, tal como es el caso por

ejemplo de los gobiernos autoritarios latinoamericanos —y más específicamente en este caso el mexicano— y el impacto que tiene esta relación conflictual específica en esferas de socialización más amplias.

La tercera dimensión es abordada bajo el enfoque de la sociología de la acción pública (Boltanski y Thévenot, 1991; Hassenteufel, 2011; Lascoumes y Le Galès, 2012; Muller, 2010), la cual parte del supuesto de que los problemas públicos son construidos. El análisis se centra en la interacción entre actores y actrices y la acción institucional y cómo estás se coconstituyen. Así, desde esta perspectiva, un problema público se fundamenta a la vez en una convocación a la responsabilización colectiva y en la presunción de la capacidad de las actrices y actores de intervenir sobre este problema específico para encausar posibles soluciones desde la acción pública (Hassenteufel, 2011; Lascoumes y Le Galès, 2012). Estas interacciones son estudiadas desde una óptica constructivista en términos de relaciones de poder, las cuales están vinculadas elementos y capacidades dinamicas que emergen en el proceso mismo de la lucha (de posición, materiales, cognitivos, políticos, sociales y temporales), así como las representaciones y los intereses de éstas y éstos y el contexto político e institucional en el cual se inscriben (Hassenteufel, 2011, p. 24).

Además, la sociología de la acción pública —inspirada de los estudios de política pública— demuestra que entre el diseño de una política de Estado y su puesta en marcha se dan una serie de efectos inesperados, de lagunas y de realidades emergentes que escapan a la lógica de intervención social planificadora, como es la libertad de acción de las y los agentes, por ejemplo. De igual forma, el Estado además de diseñar formas de intervención social, también responde y canaliza las demandas que surgen de las y los propios actores sociales que no se sienten incluidos o beneficiados por las acciones de éste. Bajo esta perspectiva, las acciones del Estado se analizan por sus efectos pragmáticos y por las diferentes apropiaciones que los actores y actrices hacen de ellas, más que delimitarse a estudiar solamente la

planeación racional de la intervención pública o las acciones de movilización ciudadana. Esta desmitificación de la acción del Estado me parece que es muy conveniente para el caso mexicano, en donde incluso se presenta una imbricación entre agentes del Estado y grupos criminales, la cual reconfigura los antagonismos (Beristain, 2017; Garay Salamanca, 2008; Meyer, 2009; Snyder y Durán Martínez, 2009).

Estructura de la tesis

Para cumplir con los objetivos planteados, esta tesis está dividida en cinco capítulos. El primer capítulo tiene un doble propósito. Por un lado, historiar el surgimiento de las desapariciones forzadas como tecnología represiva en el marco del plan *Noche y Niebla* de los nazis primero. Luego, en el marco de la escuela francesa antisubversiva, desde donde primero en la Guerra de Indochina (1945-1954) y luego en la Batalla de Argel (1956) afinaron esta técnica y la expandieron por el mundo, en particular en América Latina en el marco de las acciones de contrainsurgencia ante la "amenaza" del comunismo. El segundo objetivo es analizar cómo la práctica de la desaparición forzada en Latinoamérica hizo emerger un sujeto político particular, simbólicamente potente, en torno a la búsqueda de las personas desaparecidas. Efectivamente, a pesar de que la desaparición forzada es un mecanismo planeado para generar terror en quienes la observan (Huhle, 2015) y llevar a la inmovilización, los efectos tan fuertes que genera llevaron a la emergencia de un nuevo sujeto político en América latina, —quizá una de las imágenes más potentes en la defensa de derechos humanos en el subcontinente—: las madres buscando a sus hijos. La performatividad de esta figura de la mujer-madre aparece siempre como antípoda del poder desaparecedor (Calveiro Garrido, 1998). A través de los lazos consanguíneos como un parentesco naturalizado, el reclamo por la ausencia de la persona desaparecida se *encarna* (Irazuzta, 2017, p. 155) en la figura de la mujer-madre, la cual se desprende de su yo individual —se desubjetiva (Foucault, 2001)— para *re*subjetivarse en una relación dialéctica con el

cuerpo desaparecido y reclamar su regreso. La corporalidad de quien no está toma así una dimensión relevante en esta reconstrucción de la subjetividad para reclamar el regreso de quienes están ausentados y ausentadas.

El segundo capítulo también está dividido en dos partes. En la primera parte, el objetivo es analizar cómo la desaparición forzada formó parte de una estrategia continental para contrarrestar a los grupos *subversivos* que emergieron en el contexto de la Guerra Fría y se implementó en el marco de las guerras sucias latinoamericanas, de las que México formó parte. En segundo lugar, se analiza cómo este dispositivo, una vez que fue reapropiado en los contextos nacionales, *tomó vida propia* y se comenzó a echar mano de él en otros contextos que van más allá del objetivo de neutralizar a los enemigos políticos como fue el caso en su concepción originaria.

En la segunda parte, se abordan dos de los tres periodos que fueron identificados en esta investigación en donde la desaparición de personas se ha exacerbado. En cuanto al primer periodo que se sitúa durante la Guerra Sucia (1964-1982) en el marco del "combate" a los grupos guerrilleros en el país, se analiza cómo personal de las fuerzas públicas recibieron entrenamiento militar en el extranjero para "combatir" a los grupos subversivos en el territorio nacional y echaron mano de técnicas muy similares a las utilizadas durante las dictaduras militares del Cono-Sur como los vuelos de la muerte, etc. El segundo se sitúa en la década de los años 1990 en un periodo llamado de "transición a la democracia" —así entre comillas—, la cual también formaba parte de una política continental bajo la directiva del país hegemónico, Estados Unidos. En este periodo en el país, la recurrencia a la desaparición forzada apunta a diferentes tipos de actores con diferentes objetivos. El primero con la intención de desarticular a los movimientos guerrilleros que surgieron en esta década, en concreto al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y al Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Guerrero. Es decir, al igual que en la Guerra Sucia, el objetivo era desarticular a los actores armados mismos y a

sus bases de apoyo, tal como fue el caso de los detenidos-desaparecidos del Ejido Morelia en Chiapas, por ejemplo.

Pero además, en esta misma década asistimos a una ampliación del uso de esta tecnología de poder de apropiación de los cuerpos —y de las voluntades— de quienes desaparecen y de sus allegados y allegadas. Efectivamente, en esta misma época en el marco de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), comienzan a hacer desaparecer mujeres en la frontera norte de México, concretamente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este fenómeno social fue conocido en sus primeros años como *las muertas de Juárez* y/o *las desaparecidas de Juárez*. De esta manera, en un escenario de rupturas y continuidades con el objetivo primario de las desapariciones forzadas, comienza aplicársele este dispositivo a un nuevo sujeto (sujeta[s] en este caso) *desaparecibles* en el marco del giro neoliberal mexicano: mujeres, pobres, trabajadoras, desarticuladas de sus redes sociales y que además no benefician de la protección del sistema. Las desapariciones de mujeres en ese contexto entonces se ejecutaban ya no bajo el pretexto de una *Razón de Estado* (Foucault, 1989) en el sentido liberal del término, la seguridad nacional o para mantener el orden político establecido. Ni siquiera porque las personas fueran consideradas una amenaza para la instauración o permanencia del sistema económico en curso de implementación. Es decir, es a partir de este periodo que comienza a darse este desplazamiento mencionado renglones más arriba, de la figura del detenido-desaparecido donde la motivación de desaparición es política y la responsabilidad de las fuerzas públicas es claramente identificable, al de *desaparición* donde la responsabilidad del Estado busca difuminarse en el aire. Así, esta última categoría de desaparición, la cual se ha mantenido impune durante años —al igual que la de los detenidos-desaparecidos de la Guerra Sucia, de hecho— fue el preludio de un tercer periodo que se identifica en el marco de este trabajo.

Así, en el tercer capítulo se aborda el periodo de desapariciones forzadas más crítico por el que ha atravesado el país. Es el que comienza en el contexto de la *alternancia partidista* en la presidencia de la República, con Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional (PAN) a la cabeza del ejecutivo, el cual llegó al poder en el marco de una controversia de fraude electoral. Éste, declaró en su primera semana de gobierno la "Guerra contra el narcotráfico" y decidió enviar al ejército a las calles a cubrir funciones de seguridad pública. A partir de entonces —y esta tendencia se mantiene con su sucesor, Enrique Peña Nieto del Partido de la Revolución Institucional (PRI)—, asistimos a un tercer periodo histórico donde la desaparición forzada se generaliza en el país y se vuelve masiva, donde siguen presentes las desapariciones por motivos políticos, pero también aquellas por motivos económicos, vinculadas a organizaciones criminales en el marco de prácticas políticas que benefician estas acciones. En ese sentido, recurro al concepto de *Macrocriminalidad,* es decir, el de un sistema complejo criminal en el que interactúan funcionarios públicos, agentes del sector privado y agentes criminales, en donde el entramado de estos vínculos llevan a prácticas de impunidad y a una reconfiguración del poder político (Salcedo-Albarán y Garay Salamanca, 2016), para analizar que en este marco, aunado a una economía neoliberal y una ausencia de Estado de Derecho, casi cualquier persona se convierte en *desaparecible.*

De esta manera, una vez que ha sido analizado qué es el dispositivo de la desaparición forzada y cómo ha operado a lo largo del tiempo, los capítulos cuarto y quinto tienen por objetivo analizar los *sujetos políticos* que han emergido en los tres periodos estudiados para hacerle frente. Se analiza así, cómo a través de un trabajo sostenido, apoyados en eventos coyunturales, es que luego de casi cincuenta años estas sujetas y sujetos políticos lograron colocar en la agenda pública la desaparición de personas como un problema prioritario en cuanto a violaciones graves de los derechos humanos en el país. En ese sentido, el objetivo del cuarto capítulo es comprender cómo surgen estos primeros *sujetos políticos* en torno a la denuncia de

las desapariciones forzadas en el marco de la Guerra Sucia, en qué momento se *objetivizó* la figura del detenido-desaparecido, cuál era el repertorio de acción colectiva de las primeras décadas y cómo estas acciones contribuyeron a llevar a la arena pública la disputa por los cuerpos ausentes. Posteriormente se analiza qué actores y actrices se sumaron a los esfuerzos de denuncia en la década de 1990, entre ellos los centros de defensa de derechos humanos, su profesionalización e internacionalización. En esta misma década una atención particular está dirigida a los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua para analizar cómo a pesar de que estas desapariciones tienen todas las características de las desapariciones forzadas, la articulación de actores y actrices fue en torno a la denuncia de la figura del *feminicidio* como una *construcción de causa* (Gaïti e Israël, 2003). Esto debido, entre otras cosas, a la violencia sistémica de género que caracteriza a estos crímenes de la frontera norte de México, pero también debido a las características específicas de las actrices y actores que se congregaron en *coaliciones de causa* (Sabatier, 2010) específicas en torno a este fenómeno.

Finalmente, en el quinto capítulo es analizada la *subida en generalidad* (Boltanski y Thévenot, 1991) de las desapariciones forzadas como *causa* (Gaïti y Israël, 2003), a partir de dos eventos de violaciones graves a los derechos humanos que llevaron a movilizaciones mayores: como el asesinato de Juan Francisco Sicilia en marzo del 2011, que dio origen el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Entre ambos sucesos, colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada se mantuvieron de manera constante en la arena pública empujando la agenda de derechos humanos con el objetivo de que sus demandas permearan en las instituciones. En ese sentido, en este capítulo el objetivo es comprender el proceso de *politización* de las desapariciones forzadas, los *sujetos políticos* que surgieron y se afirmaron en torno a este proceso y los marcos de acción específicos que movilizaron para denunciar estas violencias de Estado. Se analizará

también, cómo a partir de esta apertura de oportunidades políticas se logró permear en la agenda legislativa en vista de que se promulgara una ley general en materia de desaparición forzada, objetivo que luego de dos años de trabajo y cabildeo continuo se alcanzó en noviembre del 2017. Finalmente, para concluir, se analizarán los marcos de acción contemporáneos de algunos colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas en inhumaciones clandestinas y las tensiones y disyuntivas que se generaron entre los mismos colectivos de familiares y otras racionalidades, como por ejemplo las institucionales que interactúan en torno a este proceso.

Finalmente, en la conclusión retomo las contribuciones más importantes de este trabajo tanto a nivel teórico, como empírico y metodológico. Al mismo tiempo que señalo las limitaciones de esta tesis y planteo nuevas perspectivas de investigación en el marco del nuevo contexto mexicano que se avecina en la perspectiva de la alternancia partidista en el Ejecutivo Federal para el sexenio 2018-2024.

Cabe señalar que la dimensión del análisis de género es aquí abordado desde dos dinámicas. Por un lado, al señalar que son las mujeres quienes buscan a las personas desaparecidas. El énfasis está puesto en la voluntad política de recurrir a los estereotipos de género asociados a los cuidados —el *care*—, a su rol de madres y lo que se espera de ellas, puesto que a partir de estas atribuciones que apelan a los valores mínimos de la idiosincrasia mexicana y latinoamericana de la maternidad, ha sido conjeturado por muchas de ellas, que estarían más protegidas del poder represor y *desaparecedor* del Estado mexicano. Por otro lado, la cuestión de género es abordada desde la perspectiva de los usos posibles de los cuerpos de las mujeres, tanto en el marco de las desapariciones de Ciudad Juárez como en el periodo actual. Efectivamente, mientras es cierto que la mayoría de las personas desaparecidas en México son hombres —más del 70% (RNPED, 2018), y esta tendencia se mantiene a nivel mundial (CNDH/HCHR, 2015, p. 123)—, también es cierto que de acuerdo con

el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres que son víctimas de desaparición forzada, de manera desproporcionada con respecto a los hombres, son víctimas de violencias sexuales (CNDH/HCHR, 2015). Es decir, dentro de las categorizaciones que se hacen en el capítulo tercero sobre los probables usos de los cuerpos de las personas que se hacen desaparecer, las dinámicas de género se mantienen, siendo nuevamente el cuerpo de las mujeres la materialización de represiones y violencias específicas a su condición de mujer.

De esta manera, a partir de esta *historicidad de la acción* (Laborier y Trom, 2003) del proceso de politización de las desapariciones forzadas en México, es decir, desde la problematización de estos vínculos multiformes entre acción pública y temporalidad histórica; el propósito es analizar cómo las prácticas políticas se relacionan con el tiempo histórico y cómo estas relaciones se involucran en el presente de la acción (Laborier y Trom, 2003). Así, como toda *narrativización* —interpretación historiográfica (White, 1992)— la trama de esta narrativa histórica aquí fue construida en torno al hilo conductor de las violencias de Estado, en particular las desapariciones forzadas y los sujetos políticos que surgen para hacerles frente. Se sostiene así que éstas fueron desarrolladas y perfeccionadas en el marco de las acciones contrainsurgentes continentales donde la variable común parece ser la transferencia de conocimientos —*pedagogía del terror*— del personal formado en racionalidades militares, destructivas por antonomasia. Así, entre otras cosas se sostiene aquí que la impunidad del pasado favorece las redes de *macrocriminalidad* y la impunidad actual. Como toda narrativa, esta no es unívoca y está determinada por la interpretación de quien la articula.

Metodología

Dado que la pregunta de investigación busca interrogar los procesos por los cuales las desapariciones forzadas devinieron en un problema de acción pública y en congruencia con el marco teórico, el cual es de corte constructivista, en diálogo con la perspectiva postestructuralista y la sociología de la acción pública; la metodología utilizada en esta investigación es de corte cualitativo, situándome en un *middle range* (Merton, 1965). En otras palabras, traté de conciliar la teoría y los datos empíricos sin necesariamente pretender llegar a generalizaciones (Bélanger, 1998, p. 42). De igual manera, el análisis empírico está centrado también en los procesos, es decir, en el cómo y no tanto en los porqués. Para elegir tanto la pregunta de investigación como su metodología, antes de emprender este proyecto de investigación como tal, hice una revisión de publicaciones académicas y de organizaciones de denuncia sobre las desapariciones de personas en México y en Latinoamérica. Asimismo, establecí un monitoreo cotidiano en medios de comunicación y redes sociales y activé el sistema de alertas de Google sobre el tema, proceso que me permitió construir un estado de la cuestión y detectar las aristas de este fenómeno que aún no habían sido estudiadas en México. Por lo mismo, al momento de comenzar el proyecto de investigación propiamente dicho, partí de una idea previa de lo que significan las desapariciones forzadas y los impactos sociales que éstas tienen. Además, en una suerte de investigación exploratoria, ya me había entrevistado con personas que forman parte de movimientos sociales y de organizaciones de búsqueda, incluso con familiares de personas desaparecidas, lo cual me hizo tener algunas nociones de lo que me interesaba ir a buscar en mi trabajo de campo.

Procedimiento

En primer lugar, realicé una investigación documental de fuentes primarias y secundarías, pero también, durante la primera fase de investigación documental y

bibliográfica, de manera virtual "participé" en diversos foros y seminarios que fueron transmitidos por las redes sociales, principalmente Facebook, o de plataformas como Youtube que, de igual manera, me permitieron adentrarme en el tema e identificar actores y actrices clave. Una vez que mi proyecto de investigación fue aprobado y defendido ante el jurado designado por el Comité de Estudios Avanzados del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Quebec en Montreal (UQÀM) y que obtuve mi certificado de aprobación ética, CERPE [1], comencé con la preparación del trabajo de campo para recabar la información empírica y entrevistarme con las y los actores solicitados en este estudio.

El primer paso entonces fue realizar un mapeo de actrices y actores a partir de la investigación hemerográfica y de seguimiento en redes sociales a actores y actrices clave, así como personas de mi red personal. En base a ello, realicé una lista preliminar de personas a contactar. Durante cuatro meses, diciembre-marzo de 2017, realicé una estancia de investigación en México para efectuar dichas entrevistas y realizar trabajo de investigación documental y de archivo sobre todo hemerográfico.

Sobre el trabajo de campo

Con respecto al trabajo de campo, en ciencias políticas, el método de investigación favorecido en las investigaciones es el cuestionario, el cual privilegia las preguntas cerradas (Anduiza Perea *et al.*, 2009, p. 89). Es decir, las posibilidades de respuesta son preestablecidas por quien diseña la investigación. Si bien es cierto que una de sus ventajas es poner en pie de igualdad a todas las personas entrevistadas, esta opción presentaba más desventajas que ventajas para el estudio aquí propuesto. Debido a que, por una parte, acota las respuestas a categorías prediseñadas en la fase exploratoria de

[1] Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains [Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains].

la investigación, por otra, no permite explorar las subjetividades de cada persona frente al problema de estudio, lo cual era uno de los objetivos de esta tesis.

En virtud de ello, el tipo de entrevista que se se eligió fue la semiestructurada. Este instrumento de recolección de datos consiste en la creación de una matriz de entrevista con el objetivo de obtener respuestas a preguntas abiertas comparables entre sí para contar con un patrón común de los datos que responden a los objetivos de la investigación (Vieytes, 2004, p. 503) (ver guía de entrevista en el Apéndice B). Además, puesto que decidí como un componente de la metodología de investigación recurrir a la realización de un gran número de entrevistas para tener acceso a fuentes de información primaria de personas que son consideradas como clave, este tipo de entrevista es pertinente. No obstante, me interesa mencionar que según Gilles Pinson y Valérie Sala Pala, la entrevista semidirigida (o semiestructurada) es desvalorizada frente a dos modelos supuestos como puros: la entrevista etnográfica y la entrevista no dirigida. La primera porque pasa por la observación que es reconocida como más fiable ya que supuestamente da un acceso directo a las prácticas sociales y la entrevista no dirigida porque ayuda a mantener el mito de la neutralidad de quien investiga (Pinson y Pala, 2007, p. 555; Savoie-Zaic, 2003).

Empero, en la práctica de la sociología de la acción pública, la entrevista semidirigida es mucho más utilizada porque los objetivos son diferentes a la investigación de tipo etnográfico donde lo que importa es introducirse en el "medio" que se investiga (Pinson y Pala, 2007, p. 556). Así, para los objetivos que se propone la sociología de la acción pública, como por ejemplo, reconstruir los procesos de la acción pública en su historicidad, por una parte, y por la otra, comprender las prácticas constitutivas de la acción pública y las representaciones que las orientan (Pinson y Pala, 2007, p. 556), las entrevistas semidirigidas parecen ser las que se presentan como más adecuadas, puesto que permiten dirigir el intercambio de la información en función de objetivos

preestablecidos, dejando lugar a que mientras se responde libremente a la matriz prediseñada, se obtengan datos que no habían sido pre-intuidos por quien investiga.

De esta manera, realicé 54 entrevistas, 48 de ellas en una sola sesión y 6 en profundidad y en diversas sesiones (cuatro en dos sesiones, una en tres sesiones, una en cuatro sesiones) con personas miembras de colectivos de familiares, organismos de defensa de derechos humanos, ONG, fundaciones, miembros de organismos multilaterales —ONU, OEA—, periodistas, senadora, exsubprocuradores, profesionistas en acompañamiento psicosocial, investigadoras, especialistas en técnicas forenses, artistas, documentalistas, etc. (Para una lista completa de las personas entrevistadas ver el apéndice A). La finalidad de entrevistar a esta diversidad de actrices y actores fue recoger sus perspectivas, estrategias y posicionamientos en cuanto a la desaparición forzada y su politización desde la posición que ocupan.

La elección de quiénes serían las personas a entrevistar estuvo determinada por diversos factores. El primero fue que busqué que hubiera una representación de actores y actrices tanto de los cohortes de la periodización de desapariciones forzadas previamente identificadas durante la investigación documental, así como de diferentes roles dentro de esta puesta en agenda. El segundo, fue su participación en la arena pública, cuyos nombres habían sido recogidos en el mapeo de actores y actrices. Finalmente, el tercer factor, fue la facilidad de acceso tanto geográficamente, como de su disposición para la entrevista. Las entrevistas fueron realizadas en la Ciudad de México; en Cuernavaca, Morelos; en Chilpancingo y Tixtla, Guerrero; así como en Xalapa Veracruz. Cabe mencionar que entre las entrevistas que fueron realizadas en la Ciudad de México, hubo personas cuyo activismo se sitúa en los estados de Nuevo León, Coahuila, Michoacán, Morelos, Veracruz y Ciudad de México y que se encontraban en desplazamiento en la Ciudad de México, ya sea por cuestiones personales o por reuniones relativas a su labor. Posteriormente, en

diciembre de 2017 y enero del 2018, regresé a la Ciudad de México a realizar un par de entrevistas que habían quedado pendientes y realizar el seguimiento a algunas otras de las que se realizaron en varias sesiones.

Para establecer contacto con los y las actrices identificadas tuve varios puntos de entrada. En general el primer punto de contacto fue el envío de un correo electrónico, previamente aprobado en mi formulario para el certificado de aprobación ética. Cabe señalar que el medio privilegiado para continuar el contacto con estas personas, la mayoría de las veces fue por medio de la aplicación Watsapp y no por lo medios tradicionales como el correo electrónico o el teléfono. Es decir, una vez que el primer contacto había sido establecido, la sugerencia casi unánime, sobre todo por parte de las personas activistas, era continuar las comunicaciones por medio de esta aplicación, de manera más personal. La mayoría de las veces tuve respuesta positiva para establecer una cita, solo en un caso fue postergada varias veces, por lo que decidí desistir. Otra de las estrategias para establecer el contacto con nuevas personas a entrevistar es que al final de cada entrevista solicitaba dos cosas. Por una parte, recomendación de bibliografía respecto al tema. Esto, por un lado, para referenciar nuevas fuentes bibliográficas, pero, por otro lado, para saber si las y los actores se nucleaban en función de comunidades epistémicas específicas de acuerdo a su posicionamiento político. Por otra parte, solicitaba recomendaciones de personas a entrevistar, por un lado, para completar mi mapeo de actores y actrices, pero también, por otro lado, para identificar cómo se estaban conformando las redes de acción en cuanto a los posicionamientos institucionales y políticos y quiénes eran sus referentes. Finalmente, otra de las entradas con algunas de las personas entrevistadas fue por medio de puesta en contacto directo con alguien a quien yo ya había entrevistado o por personas que conocía previamente.

El consentimiento a desarrollar la entrevista y a grabarla fue solicitado sistemáticamente de forma verbal y quedó registrada en las grabaciones. A cada

persona se le ofreció una copia del audio y/o de la transcripción de la entrevista, algunas personas sí la requirieron y se les hizo llegar, otras personas expresaron no requerir una copia, pero el compromiso fue hacerles llegar la tesis una vez que ésta hubiera sido defendida. Con respecto al anonimato, a las 54 personas les pregunté directamente si preferían el anonimato, a excepción de una persona, que posteriormente cambió de opinión y que finalmente sí es citada, me solicitaron ser citadas por su nombre y el de la organización a la que pertenecen. Asimismo, en el caso de los familiares de víctimas de desaparición forzada, me solicitaron hablar expresamente de sus casos y *denunciar* lo que está pasando en México. Por lo mismo las entrevistas no fueron codificadas y aparece a lo largo del texto el nombre de la persona que es citada, así como la organización a la que pertenecen. Las entrevistas fueron transcritas con la ayuda del software *Dragon Naturally Speaking*, y fueron analizadas y sistematizadas casi a la par que se iban realizando individualmente, y luego al final de trabajo de campo, como conjunto. Cabe mencionar que durante mi trabajo de campo y etapa de análisis de datos y redacción, también asistí, de manera presencial y virtual, a alrededor de 30 eventos y seminarios académicos, organizados por colectivos de víctimas, por organizaciones que les acompañan, por ONG, etc. Asimismo, tuve la oportunidad de tomar un curso en la Facultad de derecho de la UQÀM titulado *Actualidad del derecho internacional – desapariciones forzadas*, impartido por el profesor Bernard Duhaime. Algunos extractos de lo analizado en el diario de campo recogido en esos eventos y aprendido en este curso, son citados en la tesis.

Finalmente, durante la última etapa de redacción (enero-octubre 2018), realicé una estancia académica en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), unidad Golfo, en el marco del programa "estudiante huésped". Por otra parte, interesa mencionar aquí que la bibliografía fue referenciada con la ayuda del software libre *Zotero* de colecta, organización y exportación de bibliografía.

Notas metodológicas

Me interesa destacar algunas reflexiones personales en este apartado. En primer lugar mencionar que realizar el trabajo de campo fue un proceso complejo por dos razones. Obtener las entrevistas fue relativamente fácil, ese no fue el problema. Las personas en general respondieron de manera pronta y con la mejor disposición, respetando las citas y con gran disposición de tiempo, el promedio por entrevista es de dos horas y media. Sin embargo, lo complejo radica en mi primera aproximación a la problemática, ya que partí del supuesto de que en las entrevistas podría separar el relato de las vivencias personales en torno al evento mismo de la desaparición y sus efectos en su vida cotidiana, de su activismo político. Por ejemplo, en mi proyecto de investigación, había escrito literal que, al carecer de las herramientas psicosociales para acompañar los relatos, evitaría entrar en esos detalles:

> Lo que también me preocupa es evitar entrar en detalles que no serán politizados en esta investigación y que pudieran ser prioritarios para estas personas. En otras palabras, me gustaría evitar que las y los interlocutores centren el diálogo en el cómo y el por qué desapareció la o las personas a las que buscan, cuáles han sido las falencias burocráticas a las cuales han tenido que enfrentarse, o cómo y por qué se involucraron con esas organizaciones. Mi intención de evitarlo es porque la verbalización conduce muchas veces a una revictimización al revivir la situación de violencia en su narración (Arévalo Naranjo, 2010, p. 31). Por lo mismo, las preguntas serán planteadas siempre en plural, apelando a un sujeto colectivo, para tratar de evitar —en la medida de lo posible— la personalización de las respuestas. Por ejemplo: ¿qué estrategias desarrolla su organismo para reclamar la atención de las y los funcionarios públicos?, ¿a quién consideran ustedes que hay que dirigir las denuncias públicas sobre la desaparición de las personas?, etc. Por supuesto, el no querer escuchar estos relatos no quiere decir que no me sean importantes, lo que quiero enfatizar es que no cuento con las herramientas psicosociales para acompañar estas narraciones y además esta información no la utilizaré en mi trabajo final. En primer lugar por cuestiones del orden de la ética, pero también por seguridad de las y los interlocutores y la mía propia. Por todo lo anterior, considero que la entrevista semiestructurada me permitirá delimitar los temas a tratarse durante el encuentro y la manera de introducirlos (Pozos

> Barcelata, proyecto de investigación de tesis doctoral, noviembre de 2016, p. 49).

Pues bien, esto no fue posible. Estas reflexiones que había escrito mientras preparaba mi trabajo de campo fueron inmediatamente desmontadas una vez que comencé a realizar las entrevistas. Sistemáticamente los y las familiares de las víctimas, sobre todo las que fueron desaparecidas en los últimos años, indefectiblemente orientaban las respuestas a sus casos particulares. Además, los relatos les eran tan dolorosos que las lágrimas surgían al hablar sobre el proceso, tanto de la desaparición misma como de la *revictimización* por parte del personal de las instituciones de gobierno o por la criminalización. Para mí misma era difícil evitar las lágrimas ante la empatía de relatos que mostraban tanto dolor. Luego de un par de entrevistas y de dialogarlo con diferentes personas, tenía dos opciones. Ya sea que detenía el proceso e iba a tomar técnicas de contención para orientar mejor las entrevistas y yo misma tomar distancia de los relatos o, continuaba con este proceso y reorientaba mi guía de entrevista. Opté por la segunda opción (ver Apéndice B). La estrategia fue entonces, en un primer momento, preguntar por sus casos particulares, siempre preguntando si ellas y ellos querían hablar sobre el tema y que por supuesto hablaran únicamente de lo que quisieran mencionar y esto si y solo si querían hacerlo. Entre los relatos había dos constantes. El primero es que nadie quiere escucharles, que normalmente no hablan de sus casos y de sus sentires porque son relatos difíciles de escuchar por la violencia activa y pasiva que representan, así que se sentían cómodas y cómodos de hablarlo con alguien a pesar de que fuera doloroso. El segundo fue la insistencia en señalar la estigmatización de la que son víctimas las personas desaparecidas y ellos y ellas mismas como familiares y la necesidad para ellas de *limpiar* la imagen de la víctima.

De esta manera, la reflexión de esta situación no prevista de no querer entrar en relatos de su condición de víctimas que fueran personalizadas, por no contar con las herramientas psicosociales para acompañar estos relatos tuve que resolverlo sobre la

marcha. Una vez que el relato sobre sus propios casos había sido abordado y que en general las lágrimas de ambas partes habían cesado, la mayoría de las veces se estableció una relación de confianza y empatía en la que era más fácil abordar las preguntas de mi guía de entrevista, la cual se fue ampliando con preguntas específicas que fueron surgiendo conforme avanzaba el trabajo de campo y que me hacían descubrir vetas de la investigación que no había podido prever mediante la investigación hemerográfica y bibliográfica. Por otra parte, tanto al momento de solicitar la entrevista como al comenzarla, cada vez les dejé claro que este trabajo es de corte académico y que por lo mismo tenía que responder a ciertos criterios del campo de la ciencia política, por lo mismo tenía sus limitaciones para poder denunciar ampliamente sus casos específicos. Por otra parte, les hice saber también que los alcances de difusión podrían ser muy limitados, pero que en la medida de mis posibilidades, en cada foro donde me fuera posible hablar, denunciaría la grave crisis de los derechos humanos por la que atraviesa el país, esto sin comprometer el análisis de tipo académico. La relación establecida con muchas de las personas que fueron entrevistadas continúa por medio de las redes sociales, principalmente por Facebook y Watsapp y con mi participación en algunas actividades muy puntuales que he acompañado.

Por otra parte, la segunda reflexión que me gustaría resaltar en el marco de estas notas metodológicas es que antes de emprender la investigación de campo y durante la misma, diferentes personas me preguntaron si no tenía miedo o temor de investigar sobre estos temas. La respuesta es sin duda, sí. Sin embargo, consideré que, por un lado, a pesar del miedo y los posibles riesgos quería hacerlo como proyecto de investigación doctoral con la finalidad de contribuir a la comprensión de esta problemática y por otro lado, como una oportunidad de reflexión profunda sobre el tema para mi implicación personal más allá de la práctica académica. Sin duda, este "riesgo" si quiere llamársele así, está muy lejano del riesgo que deciden afrontar las personas que buscan directamente a las personas desaparecidas y quienes les

acompañan cotidianamente, que son quienes se exponen directamente. En mi reflexión, consideré que al ser un trabajo académico, respaldado por una entidad universitaria, además extranjera, y que indagaba procesos y no responsables, eran de alguna manera elementos de protección. Cabe señalar, sin embargo, que ya en el terreno, en algunos momentos sí experimenté situaciones de miedo, vinculadas más a imaginarios, y seguidas a las narrativas de las entrevistas que a amenazas reales. Aún así, a pesar de los temores repentinos, decidí continuar con el proyecto.

Por otra parte, para ir cerrando estas notas metodológicas, me interesa señalar que a pesar de que en el lenguaje popular muchas veces se les llama "levantones" a las privaciones de la libertad a las que incurren personas asociadas al crimen organizado, ya sea que correspondan a desapariciones, secuestros, etc., y pocas veces se asocia este concepto a las que son realizadas por agentes del Estado en sus funciones de Estado, evité esta palabra a lo largo de la tesis. Las únicas veces en las que ésta es mencionada es porque las mismas personas entrevistadas hicieron alusión a ella. La elusión de este término obedece a dos reflexiones. La primera, como ya fue mencionado es porque se asocia principalmente a las acciones de privación de la libertad que no son obra de agentes del Estado directamente, la segunda es porque durante mi trabajo de campo, diferentes personas entrevistadas a quienes agradezco particularmente esta reflexión —(Mastrogiovanni, 2017; Reveles, 2017; Reyes Maldonado; 2017; Cerezo Contreras, 2017)— hicieron hincapié en los riesgos de despolitización que trae consigo este concepto puesto que, por una parte no corresponde a ninguna categoría jurídica y por otro lado, descarga de su responsabilidad a los agentes del Estado.

Por último, cabe señalar que como licencia estilística de redacción me permití establecer un diálogo con la tetralogía de Richard Wagner *El anillo del nibelungo* (Der Ring des Nibelungen) ya que existen fuertes indicios de que Adolf Hitler se inspiró de esta ópera para crear su decreto Noche y Niebla (Nacht und Nebel), el cual

marca el origen de la desaparición forzada como un dispositivo planeado de sumisión de las poblaciones. Esta analogía está presente en todos los capítulos de la tesis, en particular las figuras femeninas, las *Valquirias*, quienes en la mitología germánica representan la fuerza de las mujeres organizadas para el rescate de las almas caídas. En ese sentido, me interesa señalar aquí que el escuchar narrativas tan difíciles, sí tuvo efectos directos en mi percepción del problema, pero también en la manera en que quería abordarlo. A pesar del entusiasmo con el que regresé a Montreal, después de una primera estancia de trabajo de campo tan prolífica a inicios del 2017, me estaba costando mucho trabajo comenzar a escribir a pesar de que la sistematización de entrevistas y el análisis avanzaba a buen ritmo. Los primeros días, cada vez que comenzaba a escribir, tenía tendencia a borrarlo debido a diversas preocupaciones. Por un lado, no es fácil escribir sobre el terror, sobre crímenes de lesa humanidad después de haber escuchado hablar a las personas que sufren cotidianamente sus consecuencias. Por otra parte, tenía temor de no ser capaz de dar cuenta en lenguaje académico de estas reflexiones, de despolitizarlas, etc. Después de mucho cavilar, pensé que el recurrir al arte podía ayudarme en dos sentidos. Por una parte me ayudaría a mí misma escribir más fácilmente si establecía un parangón con una obra literaria como guía de narrativa. Por otra parte, sería mucho más fácil para las y los lectores adentrarse en el tema y rebasar los límites del lenguaje académico al mediarlo por algún tipo de expresión artística. De esta manera, al recurrir a estas figuras retóricas, para mí fue mucho más fácil establecer el proceso de escritura luego de escuchar relatos de dolor tan fuertes, para rebasar los límites del lenguaje académico y para hacer más fácil la lectura, todo esto sin despolitizar un mecanismo tan perverso como es el de la desaparición forzada.

Algunos de los límites de la investigación

En cuanto a los límites de investigación, en primer lugar interesa destacar que no todas las personas que afrontan la desaparición de una persona cercana deciden cruzar

la barrera del dolor privado al reclamo público del regreso de los cuerpos. De hecho, frente a las masivas desapariciones forzadas que se han ejecutado a lo largo de América Latina desde finales de la década de 1960 hasta la fecha, la gente que se moviliza y los colectivos que se dedican al reclamo de su regreso son ínfimos. Desafortunadamente, los motivos que originan esta diferenciación entre quienes deciden hacer de su búsqueda un evento político y quienes no, escapan a los objetivos de esta investigación por lo que no serán aquí abordados.

Por otra parte, otro de los límites tiene que ver con los tiempos y recursos para haber podido desarrollar un trabajo de campo de más alcance. En primer lugar, el tiempo aceptable para concluir un proyecto doctoral está delimitado, por lo mismo, tanto las metas de tiempo dedicado al trabajo de campo, así como el de redacción, tienen que ser fijados con base en un calendario. De haber contado con el tiempo y los recursos, hubiera sido pertinente observar las diferencias regionales y/o estatales de este proceso de politización de las desapariciones forzadas con el objetivo de compararlas entre sí y, posiblemente, establecer correlaciones.

Finalmente, otra de las dimensiones que está aquí ausente es el proceso de politización propio de los colectivos de familiares de las personas migrantes —principalmente centroamericanas— que han sido desaparecidas en su paso por México y que desde sus países han emprendido procesos de búsqueda, visibilización y politización en coalición con organismos aliados locales, nacionales y multilaterales. El análisis de estos procesos trasnacionales sería meritorio de una investigación en sí misma.

CAPÍTULO I

LA *RE*[2]SUBJETIVACIÓN DE QUIEN BUSCA: LA CONSTRUCCIÓN DIALÉCTICA DEL CUERPO AUSENTE COMO SUJETO POLÍTICO

Introducción

Los sujetos políticos son "objetos epocales" (Retamozo, 2011b)[3] en el sentido que sintetizan el pasado y el presente y se articulan con el futuro: llevan inscritos el signo de su tiempo y espacio cultural. Surgen de relaciones conflictuales con quien o quienes detentan el poder. De acuerdo con Ranabir Sammadar (2014) los sujetos políticos compartirían una serie de características: Parten de un discurso de disposiciones que ayudan a "desaprender" su estado presente del conocimiento y se preparan para hacer política a partir de nuevos conocimientos sobre la sociedad y sus relaciones de poder. La pedagogía política se concibe como indispensable puesto que se considera que el conocimiento tiene una función de lucha. El sujeto político

---

[2] Gabriel Gatti habla de *melodías en clave de re* para referirse a las acciones que se ponen en marcha con respecto a eventos traumáticos del pasado: "(reconocer, reconciliar, relatar, recordar, rehacer, reequilibrar y, claro está, reparar) y es de lógica sencilla: *si lo que ocurrió, sea lo que sea, desgarró, cosemos; si la catástrofe, sea cual sea, deshizo, reponemos; si lo que nos devastó, tenga la forma que tenga, nos cambió, intentamos regresar las cosas a su estadio ex ante*. Es la música del bien, y se toca, sí, *en clave de re-: rehacer* científicamente las identidades deshechas por la represión; *restituir* lo que queda (memoria, restos óseos...) a quien queda; *reparar* el daño realizado y al individuo que lo sufrió... Las melodías en clave de re- construyen una ficción de clausura que quiere cerrar heridas y refundar consensos". (Gatti, 2016, p. 182. En itálicas en el texto original).

[3] Agradezco a Ximena Cuadra Montoya por la sugerencia de esta referencia bibliográfica.

emerge de las resistencias a las técnicas existentes del ejercicio del poder. Pone en marcha la innovación de un conjunto de prácticas de resistencia tanto discursivas como institucionales y finalmente, las prácticas que ejerce son esencialmente colectivas, es decir, dialógicas por un lado, conflictivas por otro, puesto que como afirma Michel Foucault, donde hay libertad hay relaciones de poder (Foucault, 2005).

Este primer capítulo trata sobre la emergencia de un sujeto político particular, el de la "mujer-madre" en busca de las personas desaparecidas y tiene un doble objetivo. El primero es historiar el origen de la desaparición forzada como mecanismo de control de las poblaciones y, el segundo, reflexionar cómo, paradójicamente, la desaparición forzada hizo emerger un sujeto político particular, simbólicamente potente, en torno a la búsqueda de las personas desaparecidas. Es decir, ante las múltiples violencias políticas en el continente, entre ellas el recurso a la desaparición forzada de personas como dispositivo de control contrainsurreccional, surge la imagen simbólica de la mujer-madre como un sujeto político que se enfrenta al poder en una relación dialéctica con su progenie desaparecida para reclamar su regreso y el respeto de sus derechos.

Con respecto al primer objetivo, efectivamente, la desaparición forzada surgió como un mecanismo de contrainsurgencia, el cual buscaba inmovilizar los enemigos del Reich primero —a través del plan Noche y Niebla de los Nazis—, y de los grupos *subversivos* después, —la doctrina francesa de la lucha antisubversiva—. El éxito que este mecanismo demostró tener para quienes lo perpetraban contribuyó a su propagación por el mundo y adquirió especificidades de uso y aplicación en diferentes países. Cabe señalar que esas especificidades no serán aquí abordadas, de lo que se trata en este primer capítulo[4] es de exponer, desde un punto de vista más

[4] El caso mexicano, objeto de esta tesis, será abordado ampliamente en el segundo capítulo.

conceptual, cuáles son los objetivos que la desaparición forzada persiguió desde su diseño como mecanismo de sometimiento y los impactos que ésta genera en quien experimenta sus consecuencias.

En ese sentido, evidentemente, el efecto más grave está dirigido a la persona a quien se hace desaparecer, a través de la sujeción total que se le infringe. Así, a partir del aparataje teórico de Michel Foucault sobre el poder y la construcción de las subjetividades, analizo cómo, en muchos de los casos, a través de la obturación de los sentidos por medio de la tortura, el sujeto es desposeído de todos sus referentes y por ende de su subjetividad. Sin embargo, los objetivos —y las repercusiones— que persigue este mecanismo no se detienen en el sujeto-sujetado. Los círculos cercanos de la persona que desaparece se enfrentan a una serie de consecuencias que apuntan a por lo menos dos dimensiones.

La primera dimensión tiene que ver con cuestiones materiales tangibles, por ejemplo, algunas tienen que ver con la imposibilidad de la persona que desapareció a ejercer su personalidad jurídica y por ende el acceso a sus pertenencias y prestaciones sociales queda bloqueado. La segunda dimensión tiene que ver con la construcción y deconstrucción de subjetividades que la desaparición forzada altera, es decir, tiene que ver con los horizontes de sentido. La incertidumbre de no saber qué fue lo que pasó con quien se llevaron genera terror en quienes la observan (Huhle, 2015) y trae consigo un trastrocamiento del mundo de vida— una *catástrofe de sentido* (Gatti, 2008)— que lleva a cuestionar todos los referentes del *cuidado de sí* y de las *tecnologías del yo* (Foucault, 1985). Y es aquí que aparece el segundo objetivo de este primer capítulo, la especificidad del sujeto político que emerge de esta *experiencia límite* (Ramírez Zuluaga, 2015).

Efectivamente, paradójicamente, a pesar de que la desaparición forzada tiene su origen en un mecanismo planeado para generar terror y llevar a la inmovilización, los

efectos tan fuertes que genera llevaron a la emergencia de un nuevo sujeto político en América latina —quizá una de las imágenes más potentes en la defensa de derechos humanos en el subcontinente—: las madres buscando a sus hijos. Desde Argentina (Madres de la Plaza de Mayo) hasta México (Rosario Ibarra de Piedra del Comité Eureka), pasando por Uruguay (Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos), Colombia (Madres de la Candelaria), Guatemala (Grupo de Apoyo Mutuo), El Salvador (Comadres), etc., la performatividad de esta figura de la mujer-madre aparece siempre como antípoda del poder desaparecedor (Calveiro, 1998). A través de los lazos consanguíneos como un parentesco naturalizado, el reclamo por la ausencia de la persona desaparecida se *encarna* (Irazuzta, 2017, p. 155) en la figura de la mujer-madre, la cual se desprende de su *yo* individual —se *desubjetiva* (Foucault, 2001)— para *re*subjetivarse en una relación dialéctica con el cuerpo desaparecido y reclamar su regreso. La corporalidad de quien no está toma así una dimensión relevante en esta reconstrucción de la subjetividad. De esta manera, a partir de idas y vueltas con diferentes experiencias latinoamericanas y en particular con las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, pero sobre todo a partir de ilustraciones con el caso mexicano, analizo el surgimiento de este sujeto político que comparte rasgos característicos en todo el continente.

El capítulo está dividido así en dos partes. En una primera parte analizo los orígenes del dispositivo desaparecedor (Calveiro, 1998), con el plan Noche y Niebla de los nazis, primero, y con la Escuela Francesa Antisubversiva, después. Posteriormente el objetivo es desentrañar el funcionamiento del dispositivo en sí, sobre el *sujeto-sujetado* pero también en quienes observan su ejecución: la desubjetivación de los referentes de sentido y las repercusiones que ésta tiene en los círculos cercanos de las personas que se hacen desaparecer. De igual manera analizo las diferentes maneras de conceptualización que se han intentado dar, desde diversas disciplinas, a los efectos que produce la desaparición en quien la observa, la zozobra constante de pensar que la persona desaparecida está en un *no lugar*.

En la segunda parte analizo cómo la desaparición forzada de personas, a pesar de que es un mecanismo planeado para llevar a la inamovilidad social, llevó a la emergencia de este sujeto político particular, el cual hace su entrada en política a partir de la reproducción de las imágenes estereotipadas de los roles de género: la mujer-madre en busca de sus hijos. Posteriormente desarrollo cómo en el caso específico de la desaparición de personas, esta entrada en política se hace a través de una relación dialéctica con la corporalidad de su progenitura desaparecida y que desde este posicionamiento se enfrenta al Estado para reclamar su regreso.

PRIMERA PARTE: GÉNESIS Y OBJETIVOS DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

En este primera parte el objetivo es comprender qué es, cómo surgió, cómo se expandió y cuáles son las repercusiones del dispositivo de la desaparición forzada de personas. Así, en un primer momento desarrollo cómo surgió con el plan Noche y Niebla de los Nazis y su diferencia con la *Damnatio Memoriae* de la URSS. En un segundo momento abordo cómo este dispositivo es retomado y "legitimado" por la Escuela Francesa Antisubversiva y a partir de ahí ésta hace su diseminación por el mundo como técnica de contrainsurgencia. En un segundo apartado el objetivo es desentrañar cómo este dispositivo tiene por objetivo despojar de su subjetividad al sujeto a través de su sujeción total y la pérdida de los horizontes de sentido: *las tecnologías del yo* y *el cuidado de sí* (Foucault, 1985). Pero además, desarrollo que el dispositivo es una técnica de *biopoder* ya que no está únicamente dirigido a quien es víctima directa de la desaparición. Éste, también tiene como objetivo original desarticular los vínculos sociales de los círculos cercanos de la persona a la que se hace desaparecer. Posteriormente, una vez que el dispositivo y su funcionamiento han sido analizados, desarrollo cómo desde diferentes disciplinas se ha intentado dar una explicación a los efectos de la desaparición en quien observa la acción: *pérdida ambigua*, *estado liminal*, *catástrofe de sentido*, etc. Finalmente, analizo cómo las repercusiones de este dispositivo se cristalizan de manera permanente en los círculos cercanos de la persona que desapareció, ya que la desaparición es el acto ejecutante pero ésta provoca diferentes consecuencias en los círculos cercanos de la víctima en por lo menos dos dimensiones: en el orden de lo material y las complicaciones jurídicas en torno a la persona desaparecida, pero además también en el orden psicosocial a través de la ausencia que se hace siempre presente, el aislamiento social, la incertidumbre, los sentimientos de culpa, etc.

1.1 El *Tarnhelm*: Génesis de un dispositivo desaparecedor

> (*Albérico se coloca el yelmo mágico*)
> El yelmo se ajusta a la cabeza: ¿ocurrirá el hechizo?
> (*En voz muy baja:*)
> Noche y Niebla: ¡Ya no hay nadie!
> (*Su figura desaparece y en su lugar surge una columna de niebla.*)
> ¿Puedes verme, hermano?
> (*Mime mira sorprendido a su alrededor,*)
> ¿Dónde estás? ¡NO puedo verte!
>
> Richard Wagner. El oro del Rin (escena III)[5]

Tarnhelm es el nombre del yelmo mágico que permite hacerse invisible a Albérico en la leyenda germánica *El cantar de los nibelungos.* La leyenda data del siglo XII e inspiró a una de las óperas más famosas de Richard Wagner: El anillo de los nibelungos (Wagner, 1965). En la leyenda se personifica a las fuerzas vitales de la conciencia humana, en particular la codicia por el poder. Esta codicia es encarnada en el personaje de Albérico, a través de la obsesión por la posesión del oro, valiéndose para alcanzarlo de las prácticas más anti-éticas y deleznables que pueden ser imaginadas. El *Tarnhelm* simboliza la capacidad de engaño con artilugios, representa la negación de la identidad de las cosas. Representa además el poder de desaparecer o de hacer desaparecer para causar confusión y obnubilar los sentidos de quien observa la escena: Nacht und Nebel, / Niemand gleich (Noche y Niebla, ya no hay nadie)[6].

---

[5] En (Huhle, 2015).

[6] En la tercera escena de la ópera, Albérico se pone el yelmo delante de su hermano Mime para desaparecer frente a él y con esto aterrorizarlo. Una vez invisible y ante el desconcierto logra someterlo.

Wagner era el músico predilecto de A. Hitler (Kater y Riethmüller, 2003; Mastrogiovanni, 2016, p. 196) y según Edward W. Said en muchas personas hay la idea de que existe una vinculación muy estrecha entre los dramas musicales de Wagner y la ideología nazi (Said, 1993, p. 41). No es casualidad que siglo y medio más tarde de la muerte de Wagner al decreto *Directivas para la persecución de las infracciones cometidas contra el Reich o las fuerzas de ocupación en los territorios ocupados* firmado el 7 de diciembre de 1941 por Wilhem Keitel, en cumplimiento de las ordenes de Hitler, se le conozca eufemísticamente con el nombre de Noche y Niebla (Nacht und Nebel). Tampoco es casualidad que los efectos que produce el *Tarnhelm* en los nibelungos cuando Albérico lo usa para desaparecer, tenga por objetivo el mismo principio que la desaparición forzada de personas (Huhle, 2015, p. 252).

El decreto nazi *Noche y Niebla* (NN) buscaba eliminar todo rastro de existencia de un ser humano y de todos sus documentos. Buscaba prolongar el control por medio del daño psicológico ya que al no haber un cuerpo al cual darle sepultura no era posible cerrar el ciclo de la existencia de la persona desaparecida, de hacer el duelo. La directiva estipulaba que no se informara a sus familiares, que nadie supiera nada de esta persona, mismo si fallecía, su muerte debería quedar en la secrecía. Estas medidas tenían como objetivo sembrar terror en el círculo cercano de la persona desaparecida, principalmente de sus familiares y con ello llevar a la inmovilización social, a frenar cualquier tipo de acción contra el *Reich*.

> Las personas que en los territorios ocupados cometan acciones contra las fuerzas armadas han de ser transferidas al Reich para que sean juzgadas por un tribunal especial.
> Si por alguna razón no fuese posible procesarlas, serán enviadas a un campo de concentración con una orden de reclusión válida, en términos generales, hasta el final de la guerra.
> Parientes, amigos y conocidos han de permanecer ignorantes de la suerte de los detenidos: por ello, estos últimos no deben de tener ninguna clase de contacto con el mundo exterior.

> No podrán escribir ni recibir paquetes ni visitas.
> No deben transmitirse a ningún organismo extranjero informaciones sobre la vida de los detenidos.
> En caso de muerte, la familia no debe de ser informada hasta nueva orden. Falta todavía una reglamentación definitiva sobre este aspecto de la cuestión.
> Las disposiciones anteriores son válidas para todos aquellos detenidos sobre los que, durante las diligencias de la reclusión por razones de seguridad realizadas por la Oficina Central de Seguridad del Reich, haya la anotación Nacht und Nebel" (Noche y Niebla, citado por Manjón-Cabeza Olmeda 2012, 12:10).

De acuerdo con Rainer Huhle es probable que durante el régimen Nazi se hayan detenido bajo este decreto a unas 7000 personas en total. A finales de 1944 como consecuencia del colapso militar y de los bombardeos, el procedimiento *Noche y Niebla* (NN) habría dejado de funcionar (Huhle, 2015, p. 256) e incluso la denominación NN[7] desapareció de los documentos oficiales (2015, p. 259). Cabe destacar que en el decreto *Noche y Niebla* se describían y precisaban los principales componentes de lo que hoy en día se considera una desaparición forzada. Sin embargo, "el objetivo final de las acciones Noche y niebla [*sic.*] no era la eliminación de los prisioneros, sino su aislamiento hasta que acabara la guerra, además del terrorismo psicológico que provocaba en las familias y en la población afectada" (Huhle, 2015, p. 261).

---

[7] Con respecto a las siglas NN, Kristen Mahlke señala que éstas son homólogas a las de *nomen nescio,* locución latina que significa "desconozco el nombre". En inglés, las siglas también coinciden: No Name. Este acrónimo fue durante las dictaduras, y sigue siendo, frecuentemente utilizado en las Américas para designar a los cadáveres que no pueden ser identificados. Se clasifican entonces como NN: "Un código conocido de la desaparición es el pleonasmo 'noche y niebla', una figura retórica que duplica la obscuridad. Parece ser una fórmula mágica porque además la abreviación N. N. se fusiona con el acrónimo *nomen nominandum* (o *nomen nescio*): el espacio vacío del nombre está así inscrito como premonición de la desaparición y de las fosas comunes que dejan entrever sus restos" (Mahlbe, 2017, p. 79).

La desaparición de personas también fue una práctica ampliamente utilizada por la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en la década de 1930 (Anstett, 2017, p. 44), particularmente en los gulags, aunque no exclusivamente [8]. Efectivamente, en abril del 2010 se descubrió una fosa clandestina con más de 22 000 restos de la llamada matanza de Katyn la cual tuvo como propósito el exterminio, que muchos consideran un verdadero genocidio, de la élite polaca por considerarlos enemigos acérrimos del régimen (Reuters, 2010). Es probable que un número importante de esos restos pertenezcan a personas desaparecidas. Sin embargo, muchas veces se ilustran las desapariciones forzadas cometidas por los soviéticos con la foto tomada el 22 de abril de 1937 a Joseph Stalin, Kliment E. Voroshílov y Viacheslav M. Mólotov al lado de Nikolai Yezhov quien fue director de la policía secreta soviética, el cual fue acusado de traición y posteriormente fue fusilado (Jansen y Petrov, 2002). Paradójicamente a Yezhov se le aplicaron muchas de las estrategias de represión que él mismo había puesto en práctica (*Op cit.*, 2002). En 1939, una vez ejecutado, el régimen quiso borrarle de la historia. Negarle incluso la identidad. La foto del 22 de abril en la que aparece al lado de Stalin, Voroshílov y Mólotov fue retocada y Yezhov eliminado de ella (ver Anexo A), así como sucedió con muchas otras de él, puesto que aparentemente la modificación de fotografías era una práctica más o menos común en la URSS (de las Heras Herrero, 2009, p. 118-123). Sin embargo, en este caso específico el objetivo no era el de la desaparición forzada tal como es definida hoy en día (ver definición en las páginas siguientes), ya que se sabía cuál era el paradero de los restos de Yezhov luego de su fusilamiento. Lo que se

---

[8] De acuerdo con Élisabeth Anstett, una orden emitida en 1922 por el Tribunal Supremo del Comité Ejecutivo Central Pan-Ruso dictaba con respecto al destino de los opositores que fueran ejecutados: "El cuerpo del fusilado no deberá ser entregado a nadie; será enterrado sin formalidad ni ritual alguno, con las ropas que vista en el momento del fusilamiento, en el mismo lugar de la ejecución de su sentencia o en cualquier otro lugar disponible, a fin de que no haya señal de tumba, o podrá ser enviado a la morgue para ser incinerado" (Anstett, 2017, p. 44).

buscaba en realidad era aplicarle la *Damnatio Memoriae*, alocución latina que significa "condena de la memoria".

En la antigua Roma la *Damnatio Memoriae* se le aplicaba a los enemigos del Estado tras su muerte y consistía en eliminar todo aquello que pudiera evocar o recordar al condenado (registros, imágenes e incluso se llegaba a prohibir mencionar su nombre) (Pailler y Sablayrolles, 1994). Si bien es cierto que la condena de la memoria es un rasgo que los aparatos desaparecedores se plantean como objetivo, la *Damnatio Memoriae* y la desaparición forzada no persiguen exactamente los mismos objetivos. Es muy probable que el régimen soviético haya echado mano de la desaparición forzada con objetivos de neutralización política y/o de causar terror en la población, así como otros regímenes antes de estos. Sin embargo la sistematicidad y la metodología de la desaparición forzada escritas negro sobre blanco se le atribuyen al régimen nazi primero y a la doctrina francesa después.

Efectivamente, a pesar de ser una invención nazi, fue Francia quien se encargó de diseminar por el mundo la desaparición de personas como estrategia de terror. Comenzando por su intervención en Argelia y formando a los militares de las dictaduras sudamericanas, "el país de los derechos humanos" fue el encargado de formar a los cuadros militares, incluso estadounidenses, que harían de la desaparición forzada un instrumento de Terrorismo de Estado muy popular en la década de los años 1970. Marie-Monique Robin (2004)[9] a principios de la década de los años 2000 realizó una profunda investigación sobre la historia de la lucha antisubversiva, en la que concluye que ésta se remonta a la Guerra de Argelia en 1956. Así es, estando ofuscado por las estrategias de lucha de la Liga para la independencia de Vietnam

[9] Agradezco a Vincent Romani por la sugerencia de esta referencia bibliográfica.

(Viet Minh) en el marco de la guerra de Indochina (1945-1954), el coronel Charles Lacheroy se propuso teorizar sobre lo que ellos llamaron la "guerra revolucionaria" también llamada *guerra subversiva* o *guerrilla*. Ésta se caracteriza porque al menos una de las partes beligerantes es un grupo social (no estatal) que se organiza con el objetivo de reformar o modificar el sistema político y/o económico y/o social. Entre otras cosas la guerra subversiva se caracteriza porque ya no se puede identificar una línea de frente, se considera que "el enemigo" está en todas partes porque puede ser cualquier civil. Con esta nueva concepción de la batalla, las poblaciones se hicieron *a priori* sospechosas porque se consideraban susceptibles de ser o de apoyar a "los rebeldes" y en consecuencia se consideró que era necesario desarrollar innovadoras estrategias de ataque militar para desarticular al "nuevo enemigo" que se gestaba al interior de las poblaciones.

A partir de 1954 la teoría de la "guerra revolucionaria" comenzó a enseñarse en la Escuela Superior de Guerra de París. Sin embargo, fue hasta la batalla de Alger donde las nuevas estrategias se pusieron en marcha sin restricciones. El general Paul Aussaresses fue clave ya que participó él mismo en la guerra de Indochina y formó a parte de los soldados que participarían en la Batalla de Argel en 1956. Al igual que Albérico, lo único que le importaba a la armada francesa era ganar la batalla y no importaban los medios para llegar al objetivo. El despliegue de más de 400 000 franceses en el territorio, el allanamiento a casas particulares, las detenciones arbitrarias, la tortura[10], las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada, es

---

[10] Tal como consta en el documental *Los escuadrones de la muerte. La escuela francesa*, en palabras dichas por el mismo Aussaresses y Marcel Bigeard, un teniente coronel francés miembro de los paracaidistas franceses quien participó también en la batalla de Argel y las guerras de Indochina:
Aussaresses: –Había que quebrar la capacidad del FLN [Frente de Liberación Nacional] para cometer atentados y para eso era necesario obtener información, a cualquier precio.
Robin: –¿Para ustedes eso incluía el uso de la tortura?
Aussaresses: –¡Qué pregunta! Incluida la tortura, claro.
Bigeard: –Yo di la orden: ustedes deben actuar en forma contundente contra los que colocaban las

decir, todos los crímenes de lesa humanidad[11], los consideraban legítimos para destruir al enemigo. Tal como consta en este diálogo que estableció la periodista-investigadora Marie-Monique Robin con el mismo general Aussaresses para el documental *Los escuadrones de la muerte. La escuela francesa*, en el cual él sin ninguna muestra de desasosiego o de cuestionamiento sobre sus prácticas, dice abiertamente ante las cámaras cómo procedían para aniquilar al enemigo en el marco de la estrategia de la lucha antisubversiva.

> Robin: –¿Ya se hablaba de los escuadrones de la muerte?
> Aussaresses: –Sí, sí, me decían "tu escuadrón de la muerte" para referirse a mi equipo... De hecho era una veintena de oficiales que Massu[12] había puesto a mi disposición, de los cuales nunca diré ni el número ni su nombre para no afectarles... Les llamaban "escuadrón de la muerte" porque trabajaban conmigo.
> Robin: –¿Concretamente cuál era su rol?
> Aussaresses: –Nuestro trabajo comenzaba cuando caía la noche: yo iba a ver a los coroneles y oficiales de inteligencia de los regimientos para liberarlos de las tareas más desagradables y cubrir aquellas que habían hecho ellos mismos. Digamos que si habría habido el mínimo problema, todo habría recaído sobre mis espaldas... Ya sea que yo me cargaba a los prisioneros de los que no habíamos obtenido nada y, en general, ya sea que hubieran hablado o no, no

---

bombas, interrogarlos duramente, no sacarles los ojos ni cortarles las orejas pero aplicarles la picana, electrodos para pasarles corriente eléctrica. La llamábamos "la gehgene". No lo hice yo sino los hombres a mis órdenes, pero como jefe del regimiento yo soy el responsable. (Robin, 2008, minutos 7'56 - 8'38).

[11] La definición de un crimen de lesa humanidad está establecida en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, el cual fue adoptado el 17 de julio de 1998. En ese sentido, para que un crimen sea considerado como de lesa humanidad es necesario que "se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque". Entre los crímenes de lesa humanidad contemplados en esta definición están el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la desaparición forzada, entre otros. (Corte Penal Internacional, 1998, Art. 7).

[12] General de paracaidistas franceses que encabezó la aniquilación del Frente de Liberación Nacional durante la batalla de Argel.

> salían vivos de las Torretas; o ya sea que me confiaban a los prisioneros que ya estaban muy mal y en ese caso...
> Robin: –¿Los hacían desaparecer?
> Aussaresses: –Desaparecían
> Robin: –¿Esta técnica de la desaparición fue inaugurada durante la batalla de Argelia?
> Aussaresses: –¡Sí! No era posible hacer una acción judicial para todas las personas que nos llevábamos. Durante los seis meses de la batalla de Argelia arrestamos a 24,000 personas...
> Robin: –¿Cuántos desaparecieron?
> Aussaresses: –Alrededor de 3000...
> Robin: –¿Sus superiores estaban informados de lo que hacían?
> Aussaresses: –¡Qué pregunta! Yo tenía un cuaderno con 4 copias de papel carbón, yo escribía sobre una página y se copiaba en las otras tres: la primera era para Massu, la segunda para Salan, la tercera para Lacoste y la última para mí.
> Robin: –¿Qué hacían con los cadáveres?
> Aussaresses: –Yo mismo hice desaparecer en las trincheras de la defensa aérea en Argel. Sino, mis hombres se iban a una veintena de kilómetros de Argel, nunca en el mismo lugar[13] (Robin, 2008. Ver también Robin, 2004, p. 106-107).

De esta manera se instituiría la desaparición forzada de personas como práctica "legitimada" para el regimiento francés con el objetivo de deshacerse de sus prisioneros, "técnica" que tal como será desarrollado líneas más adelante,

---

[13] Incluso, el coronel Roger Trinquier escribió un manual llamado *La guerre moderne* (La Guerra Moderna) (1961) en la que recopiló los métodos y estrategias empleados en la Guerra de Argelia. Este libro fue un estandarte de la "guerra revolucionaria" e inspiró a lo que años más tarde fue el yugo de tantas poblaciones latinoamericanas y de muchas otras partes del mundo: la doctrina francesa en la "lucha contra el enemigo interno". Se le conoce así ya que estos generales y coroneles formaron ellos mismos a militares de más de 14 nacionalidades de las Américas, incluidos los argentinos, quienes manejarían la estrategia de desaparición con gran maestría, y los estadounidenses que después formarían la Escuela de las Américas en Panamá en donde perfeccionaron las técnicas y estrategias francesas (Robin, 2004, p. 237-255). En este manual Trinquier explica claramente cuáles son las características de lo que él llama la guerra moderna que básicamente consiste en guerrillas que son apoyadas por la misma población. En consecuencia, en el texto el coronel enuncia las estrategias necesarias para desestructurar las guerrillas en su propio territorio, sea cual sea el precio, incluido el terror y los ataques a la población civil de ser necesario. Ver en particular las páginas 73-74 (Trinquier, 1961).

transmitirían a través de una pedagogía del terror. Debido a la reproducción de esta práctica en diferentes partes del mundo y gracias a la denuncia constante de los sujetos políticos en torno a este tema, décadas más tarde se crearían instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos para definir esta práctica y sancionarla[14]. La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas define la desaparición forzada como sigue:

> "[El] arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o por grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley" (Asamblea General ONU, 2006)[15].

De acuerdo con esta definición, hay cuatro rasgos que son necesarios de retener. Para que se considere que se está efectuando una desaparición forzada es necesario que se prive de su libertad a la persona bajo cualquier forma, sustrayéndola así a la protección de la ley, que ésta se realice por agentes del Estado, con su apoyo y/o su aquiescencia, pero sobre todo que se niegue dicha privación de la libertad. Tal como

---

[14] Para una evolución de la norma sobre desaparición forzada de personas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional, ver: (Ansolabehere *et al.*, 2017).

[15] Para el caso específico de México, en la *Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas* publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre del 2017, en el Artículo 27, la desaparición forzada es definida de esta manera: "Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero" (DOF 17-11-2017, 7). Para que la desaparición de una persona sea considerada como forzada debe haber participación de agentes del Estado o de grupos que actúan en colusión. El secuestro o la desaparición de personas sin participación de agentes del Estado es considerado como un delito del fuero común y no es considerado como desaparición forzada.

será desarrollado líneas más adelante, es a partir de esta negación del paradero de la persona que la desaparición forzada es considerada como tal. Pero además de estos rasgos *objetivables*, la desaparición forzada de una persona implica una serie de dimensiones subjetivas para la persona que desaparece, para su círculo cercano, e incluso cuando son masivas para su sociedad de pertenencia en general, tal como será desarrollado en los siguientes apartados.

1.2 La desaparición forzada como despojo de la subjetividad del sujeto

Tal como fue desarrollado en los párrafos anteriores, la creación de la desaparición forzada de personas como mecanismo de terror y dominación fue planeada. Una vez creada, arraigada y legitimada por algunos sectores como "estrategia de combate", ésta evolucionó, se expandió y se complejizó en cada contexto donde se adoptó[16]. La consigna era clara desde un principio, a armas nuevas, técnicas militares nuevas; mismo si estas últimas deberían chocar a la conciencia humana (Drouin, 2012, p. 147)[17]. Así, la desaparición forzada somete al individuo a la suspensión de todos sus derechos, a la más alta vulnerabilidad porque se encuentra en un lugar que tiene por objetivo negarle la existencia y se vale de todos los mecanismos al alcance para lograrlo. Es en el cuerpo a través de la obturación de los sentidos (ojos vendados, pérdida del sentido del tiempo, tortura, etc.) donde se cristaliza la sujeción total de la persona que le despoja al mismo tiempo de su humanidad.

---

[16] Posterior a la guerra de Indochina y en el marco del "Proceso de Reorganización Nacional" (1976-1983) la misma división de paracaidistas franceses se instaló en Argentina para formar en las técnicas de la guerra moderna, entre ellas la desaparición, a la élite militar en Argentina y Brasil en un primer momento, para posteriormente ser reproducida en todo el continente. La formación en reproducción de esta técnica incluyó a los militares estadounidenses quienes fundarían la Escuela de las Américas después. El viaje de este mecanismo de reproducción será abordado en el capítulo II.

[17] Agradezco a Marc-André Anzueto la sugerencia de esta referencia.

Es decir, este dispositivo convierte la corporeidad de la persona cautiva en el repositorio de lo controlable[18]. Tal como lo afirma M. Foucault: el cuerpo es el blanco por excelencia del poder soberano, de las técnicas disciplinarias y del biopoder (Foucault, 1994). En el momento de la sujeción, los ejecutores gozan de un *poder soberano*. Es decir, tienen en sus manos la prebenda del poder de la vida o de la muerte sobre el otro sometido. Además, en este mecanismo en el cual por definición participan agentes del Estado, la sujeción sucede a la vez al interior y al exterior del orden jurídico tal como advierte Giorgio Agamben en su estudio sobre el poder soberano (2005)[19]. Es decir, éste es legitimado como un *Estado de excepción* en donde debe reducirse al *enemigo* que, en el discurso, representa un daño potencial al orden establecido. De esta manera, esta "excepción" se transforma en la estructura de la soberanía. El individuo no solamente ya no está protegido por la ley, sino que es abandonado por ella (Chebili, 2009, p. 66)[20]. Su vida adquiere el estatus de *Homo*

---

[18] En *Vigilar y castigar : nacimiento de la prisión*, Michel Foucault afirma que una determinada lógica del poder toma lugar en los ritos punitivos: "de un poder que no sólo no disimula que se ejerce directamente sobre los cuerpos, sino que se resalta y se refuerza con sus manifestaciones físicas; de un poder que se afirma como poder armado, y cuyas funciones de orden, en todo caso, no están separadas enteramente de las funciones de guerra; de un poder que se vale de las reglas y las obligaciones como vínculos personales cuya ruptura significa una ofensa y pide una venganza; de un poder para el cual la desobediencia es un acto de hostilidad, un comienzo de sublevación que no se funda en un principio muy diferente al de la guerra civil; de quiénes son sus enemigos y qué desencadenamiento de fuerza los amenaza, de un poder que a falta de una vigilancia ininterrumpida, busca la renovación de su efecto de resonancia de sus manifestaciones singulares; de un poder que cobra nuevo rigor a hacer que se manifiesta ritualmente su realidad de sobrepoder" (Foucault, 1989b, p. 68).

[19] En los testimonios de quienes sobrevivieron a los campos de desaparición en Argentina, hay por ejemplo una constante referencia a una condición divina de los desaparecedores: "Nosotros somos todo para vos. La justicia somos nosotros. *Nosotros somos Dios*". Liwsky, Norberto. Testimonio (CONADEP, 1984, p. 31). En (Calveiro, 1998, p. 54).

[20] En ese sentido, Michel de Certeau desarrolla en *La Invención de lo Cotidiano* (*L'invention du quotidien*) (1990), que no hay derecho que no se inscriba sobre los cuerpos. Afirma que desde el nacimiento hasta la muerte, el derecho se "apropia" de los cuerpos para hacerlos su texto. Por diferentes mecanismos (escuela, rituales, etc.), los transforma en cuadros vivos de reglas y costumbres. Los articula en un corpus jurídico (de Certeau, 1990). En el caso de la desaparición forzada, por el contrario, la negación de todos los derechos se inscribe en el cuerpo también. El no-derecho —la

sacer, es decir, de un individuo que es sacrificable sin que esto sea considerado como algo cuestionable para quienes operan el poder.

Esta sujeción de quien está aprehendido busca entre sus principales objetivos despojarle de su subjetividad[21]. En otras palabras, en la teoría desarrollada por Michel Foucault, la *subjetivación* es el proceso por el cual se constituye un sujeto o una subjetividad. El sujeto es un "efecto" de las formaciones discursivas situadas en el tiempo —contexto histórico, político y social donde se desenvuelve el individuo— por lo mismo lleva en sí mismo el signo de su tiempo y de su espacio cultural. Para Foucault, este proceso está permeado por un conjunto de técnicas, ciencias y otros tipos de dispositivos que permiten la fabricación de un individuo disciplinario (Aquino Moreschi, 2013, p. 261), entendido éste como el mecanismo de normalización y aceptación de las reglas y de las normas culturales existentes. En la "modernidad" occidental este proceso se da a través de un sujeto "sujetado" donde se controlan y vigilan todas sus conductas (biopoder) a partir dos engranajes que han sido interiorizados: *las tecnologías del yo* y *el cuidado de sí.*

Mientras que las *tecnologías del poder* someten a los individuos a través de la coacción, las *tecnologías del yo* permiten a través de una comprensión situada de lo que es lo ético, la construcción del sujeto desde el interior. En otras palabras, es la concepción de lo que este individuo comprende por la ética y cómo la relaciona con la libertad: las conductas y los comportamientos a través de los cuales el sujeto se

---

ausencia de derecho de un campo, en este caso un cuerpo, que estuvo normado por él— se inscribe sobre quien es abandonado o abandonada por la ley. Agradezco a Nancy Thede por la sugerencia de esta referencia bibliográfica.

[21] "Un cuerpo anulado y reducido a polvo y arrojado al viento, un cuerpo destruido trozo a trozo por el infinito poder soberano, constituye el límite no sólo ideal, sino real del castigo" (Foucault, 1989b, p. 61).

gobierna a sí mismo. Por su parte el *cuidado de sí* es el conocimiento de las reglas de conducta que se convierten en prescripciones sociales, es la regulación consciente del poder sobre sí mismo y sobre los otros. Este doble engranaje, se propone por un lado dotar al individuo de una subjetividad que le es única y al mismo tiempo le somete a una "socialización consensuada" en la que las reglas del juego están dadas por un contrato social que le preexiste. La *sujeción* es percibida así como un mecanismo *natural* que está sometido al orden jurídico que regula un Estado de Derecho. Sin embargo, tal como afirma Gabriel Gatti (2008), la desaparición forzada es una *catástrofe de sentido* ya que este tipo de sometimiento no corresponde a ningún referente del *cuidado de sí.* La subjetivad del individuo pierde entonces todo punto de anclaje. En palabras de Pilar Calveiro (1998):

> La desnudez, la capucha que escondía el rostro, las ataduras y mordazas, el dolor y la pérdida de toda pertenencia personal eran los signos de la iniciación en este mundo donde todas las propiedades, normas, valores, lógicas del exterior parecen canceladas y en donde la propia humanidad entra en suspenso. La desnudez del prisionero y la capucha aumentan su indefensión pero también expresan una voluntad de hacer transparente al hombre, violar su intimidad, apoderarse de su secreto, verlo sin que pueda ver, que subyace a la tortura, y que constituye una de las "reglas de la casa". La capucha y la consecuente pérdida de la visión aumentan la inseguridad y la desubicación pero también le quitan al hombre su rostro, lo borran; es parte del proceso de deshumanización que va minando al desaparecido y, al mismo tiempo, facilita su castigo. Los torturadores no ven la cara de su víctima; castigan cuerpos sin rostro; castigan subversivos, no hombres. Hay aquí una negación de la humanidad de la víctima que es doble: frente a sí misma y frente a quienes lo atormentan. (Calveiro, 1998, p. 62).

Así, la desaparición forzada como tecnología de poder se planteó como objetivo originario, someter al sujeto, deshumanizarlo y extraerle toda la información posible —transparentarlo—. Pero más aún, el objetivo planteado también fue desarticular *en*

el terreno[22] las redes de las cuales pudiera valerse, o en otras palabras, causar pánico en la población para inmovilizarla, lo que conduciría, idealmente, a una renegociación de la subjetivación de quien observa también. En ese sentido coincide con el objetivo de los suplicios, según Michel Foucault:

> En las ceremonias del suplicio, el personaje principal es el pueblo, cuya presencia real e inmediata es un requisito para su realización. Un suplicio que hubiese sido conocido, pero cuyo desarrollo se mantuviera en secreto, no habría tenido sentido. El ejemplo se buscaba no sólo suscitando la consciencia de que la menor infracción corría el peligro de ser castigada, sino provocando un efecto de terror ante el espectáculo del poder cayendo sobre el culpable (Foucault, 1989, p. 69).

Así, a través de este "espectáculo" del suplicio, además del sometimiento total del individuo, el uso del dispositivo de la desaparición forzada, como mecanismo de control de las poblaciones, persigue por lo menos otros dos objetivos: primero, desarticular la cohesión social de los círculos allegados de quien desaparece (familia – comunidad) y cuando las desapariciones se hacen masivas, inmovilizar a la sociedad en su conjunto. El primer blanco son los círculos más cercanos de la persona que está en situación de aprehensión, en particular su familia, ya que afrontan un proceso de pérdida en diferentes dimensiones, incluidos los referentes de su subjetividad. Este proceso puede ser prolongado o incluso establecerse de manera permanente si la persona no regresa o no se tiene acceso a la verdad de lo que pasó con la persona que desapareció. Tal como lo expresa Jorge Gálvez, quien es familiar

---

[22] De hecho, el coronel Trinquier en repetidas ocasiones hace alusión al peligro que representa para los objetivos de su *guerra moderna*, el apoyo que las poblaciones puedan brindarle a "los enemigos" y prescribe varias estrategias de "terreno" para desarticular el apoyo de la población a los *subversivos*: "El objetivo de la operación policiaca no será únicamente de buscar a algunos individuos que hayan cometido atentados, sino de extirpar del núcleo mismo de la población la totalidad de la organización que haya podido infiltrarse y que la manipula a su antojo" (Trinquier, 1961, p. 74. Traducción personal).

de Jesús Piedra Ibarra, desaparecido por miembros del ejército desde el 18 de abril de 1975:

> ¿Por qué considero que la desaparición forzada es la más grave? Sin irme a la parte académica te lo voy a decir, la parte de la experiencia, de la vivencia con ese crimen todos los días en casa. Destruye o intenta destruir la paz que hay en el seno familiar. Provoca el distanciamiento con los amigos porque muchos son temerosos de que les ocurra eso en casa y entonces evitan cualquier acercamiento de las familias que han tenido un detenido-desaparecido cuando está clara la motivación política con la que han cometido ese crimen. Entonces es tan grave, que es peor que un asesinato porque aparte así está ya establecido [en el derecho internacional], de que es un crimen que no prescribe tanto la detención-desaparición[23] como el genocidio. Aquí estamos hablando de un crimen perfectamente planificado [...] Entonces la detención-desaparición lo que busca es amedrentar a la sociedad en su conjunto, pero sobre todo ese núcleo familiar que busca que nos callemos, que tengamos terror, que los vecinos también así lo hagan, los compañeros de aquellos que fueron víctimas de detención-desaparición, sus amigos y toda la sociedad en su conjunto". (Entrevista, el 12 de enero del 2017).

Con el paso del tiempo y su socialización en diferentes aparatos represores, las desapariciones de personas se sofisticaron y se adaptaron a los tiempos y contextos sociales en donde se implementan, sin embargo los rasgos esenciales permanecen[24]. Dependiendo del país, del periodo histórico y de los objetivos, el mecanismo de la desaparición forzada de una persona pasa por diferentes fases. En las dictaduras latinoamericanas de las décadas de los años 1970 y 1980 y en el México actual, este mecanismo funciona con una secuencia de por lo menos 5 etapas (González Villarreal, 2012) donde cada una puede apostar por uno o varios de los objetivos que se buscan

---

[23] Esto es impreciso. Es imprescriptible mientras la persona continúa desaparecida. El plazo para la prescripción comienza a correr desde que la persona, viva o muerta, es localizada. Agradezco a Javier Yankelevich la sugerencia de hacer esta acotación en pie de página.

[24] Sobre una problematización de cómo evolucionaron los usos de la desaparición y sus diferentes conceptualizaciones, ver: (Gatti, 2017).

alcanzar con el dispositivo de la desaparición forzada. La primera es la identificación de la persona. Se le investiga, se sabe que es alguien a quien se le puede desaparecer. La investigación puede ser exhaustiva por sistemas de inteligencia o, por ejemplo, con un par de preguntas en un retén militar. Se determina así que la persona es *desaparecible,* ya sea por su situación de vulnerabilidad, por su actividad e implicación política o porque posee un rasgo particular que interesa al mecanismo desaparecedor (edad, fenotipo, conocimiento específico, etc.).

En un segundo momento viene la aprehensión que generalmente se da en condiciones violentas y, dependiendo de los objetivos, puede ser en un lugar público para acentuar en quien observa la sensación de vulnerabilidad[25]. Posterior a la aprehensión viene una etapa de detención —si fue realizada directamente por agentes del Estado por supuesto que es en condiciones arbitrarias—, acompañada de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes[26]. Los periodos de la retención son inciertos, ya que pueden

---

[25] Por ejemplo, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de julio de 1988 del Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras se afirma: "Tales desapariciones tenían un patrón muy similar, que se iniciaba mediante el secuestro violento de las víctimas, muchas veces a la luz del día y en lugares poblados, por parte de hombres armados, vestidos de civil y disfrazados, en vehículos sin identificación oficial y con cristales polarizados, sin placas o con placas falsas. Al respecto, la población consideraba como un hecho público y notorio que los secuestros se perpetraban por agentes militares, o por policías o por personal bajo su dirección". (CoIDH, 2015, p. 8) Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33824.pdf (consultado el 24 de abril del 2017).

[26] Por ejemplo en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22 de septiembre del 2006 del Caso Goiburú y otros *vs.* Paraguay, se afirma: "Durante la dictadura existió una práctica sistemática de detenciones arbitrarias, detención prolongada sin juicio, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, muertes bajo tortura y asesinato político de personas señaladas como 'subversivos' o contrarias al régimen. En este marco, tuvo lugar la llamada 'Operación Cóndor', nombre clave que se dio a la alianza que unía a las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur en su lucha y represión contra personas designadas como 'elementos subversivos'. [...] A mediados de la década de los años setenta se inició un proceso represivo sumamente duro por espacio de tres años. [...] Respecto de las desapariciones ocurridas en el marco de la Operación Cóndor, las fuerzas armadas y policiales del Cono Sur, unidos en su "cruzada anticomunista", detenían a ciudadanos de otros países sin enjuiciarlos, los sometían a apremios físicos, los dejaban interrogar por policías de su misma nacionalidad y los remitían clandestinamente a las cárceles de su país de origen o los 'desaparecían' directamente". (CoIDH, 2015, p. 8) Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33824.pdf. (Consultado el 24 de abril del 2017).

comprender desde algunas horas o incluso años en caso de que la desaparición se lleve a cabo por objetivos de trabajo forzado por ejemplo. Para finalmente desaparecer el cuerpo de diferentes maneras: vuelos de la muerte, fosas clandestinas, etc.[27].

Seguido al proceso de desaparición del cuerpo o del destino de la persona viene la negación del hecho. Ésta puede ir desde refutar que la persona fue retenida arbitrariamente ya sea por agentes del Estado o por grupos que trabajan con su aquiescencia, hasta el hecho mismo de negar que la persona existió alguna vez[28] (Cuevas *et al.*, 2003, p. 205; Epstein, 2009, p. 4). Es decir, aplicarle una especie de *Damnatio Memoriae.* Además, la negación puede ser también burocrática para desestructurar la existencia física, civil, moral y política de las y los sujetos desparecidos mismos, pero también de quienes les buscan. En palabras de Roberto González Villarreal:

> Se basa en la confusión del cuerpo y el nombre, en el traspapeleo, en la mentira de oficina. La desaparición efectiva se reviste de incertidumbre técnico-jurídica, se vuelve una suerte de indeterminación fáctica que impide localizar a los detenidos, ubicar su paradero o saber su suerte: si los nombres se cambiaron, su destino es nebuloso, más aún: su misma existencia se pone en duda. [...] La información se pierde, no sólo por ausencia o débil cualificación profesional de los desaparecedores, sino por el enredo, por la maraña burocrática, por el caos —deliberado o no—, que producen las agencias de seguridad interior. [...] Se trata de una práctica inmanente a la

---

[27] Por ejemplo en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de julio del 2004 del Caso de los 19 Comerciantes Vs. Colombia. Se afirma: "Los cuerpos de las víctimas fueron descuartizados y lanzados a un río, con el propósito de hacerlos desaparecer para que no fueran encontrados ni identificados, lo cual efectivamente sucedió". (CoIDH 2015, p.8) Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33824.pdf. (Consultado el 24 de abril del 2017).

[28] Un ejemplo de esta negación de que la persona desaparecida existió alguna vez será desarrollado en el capítulo 2, al evocar el caso del Ejido Morelia, municipio de Altamirano en Chiapas.

> racionalidad administrativa, de un conjunto de procedimientos utilizados para desaparecer a las personas en la cárcel o en la oficina; es la misma información, en su profusión o exigüidad, la que produce incertidumbre: con ellos jugaron los represores, en eso también consiste la desaparición (González Villarreal, 2012, p. 27).

Esta negación "burocrática" de la desaparición, que no necesariamente es realizada por quienes fueron los perpretadores, cristaliza la desaparición forzada de la persona, la "mentira de oficina" a la que hace alusión González Villarreal (2012). Por ejemplo, Ana Enamorado, comenta sus desventuras con la Procuraduría General del Estado de Jalisco, al quererle dar cenizas y hacerlas pasar por los restos de su hijo Oscar Antonio López Enamorado, desaparecido en el estado de Jalisco en enero de 2010:

> Entonces le dije, licenciado tengo muchas dudas con esto. Me van a dar toda la información, ¿a ver dónde están estas cosas? ¿Dónde están las pertenencias? —"No, pues es que nosotros no las tenemos". Entonces, ¿dónde están? ¿Quién las tiene? ¿Quién hizo levantamiento de ese cadáver? Muéstremelo, tienen que mostrarme, quiero ver el teléfono celular. Quiero ver las llamadas, quiero ver los contactos. Quiero ver todo, quiero todo. Entonces me dice, —"no pues es que yo no tengo nada. No le puedo, no lo podemos dar nada". Le dije me tienen que dar toda esa información, yo no me voy a quedar con esa duda, ni le voy a aceptar cenizas que le quede claro que no le voy a aceptar cenizas. Salí de ahí, me vine y sigo insistiéndole al abogado. Bueno, ¿dónde está el oficio [que ordena la incineración]? —"No pues que lo tienen en Puerto Vallarta de allá me lo van a mandar". Entonces le digo, debe tenerlo en sus archivos, búsquelo ¿Sabes lo que hizo? Sacó un oficio, me lo entregó sin fecha y sin firma. Entonces le dije yo, ¿este es el oficio? Me dice —"sí". ¿Este lo acaba de hacer, verdad? No importa, me quedo con él. Me hice la loca. Dije yo, esto me va a servir. Lo voy a demandar". (Entrevista, el 11 de marzo del 2017).

Así, el ocultamiento del destino de la personas es el que consuma la desaparición forzada. Es esta quinta etapa lo que la distingue, ya sea por intencionalidad o por ineficiencia. Es aquí donde se da el paso de un mecanismo represor a una *tecnología del poder* (Foucault), entendida ésta como el mecanismo planeado y sofisticado que reproduce en relaciones concretas los mecanismos de sometimiento. Es decir, sin

necesidad de ejercer una coacción directa sobre el cuerpo de los individuos, la tecnología del poder actúa sobre ellos, sobre su comportamiento. En ese sentido, además de favorecer la impunidad[29] y el ejercicio del *poder soberano*, éste es el que genera la catástrofe de sentido. El ocultamiento es entonces la técnica que permite, en palabras de Gabriel Gatti, la transmutación entre lo sucedido (la desaparición) y lo producido por eso (el desaparecido) (2017, p. 17). Es decir, la acción de la sustracción de la persona y el fenómeno social que se desprende de ésta.

1.3 Noche y niebla: ¡Ya no hay nadie!

> Desaparecer, "ya no ser perceptible a la vista, al oído, al olfato. Estar oculto. Dejar de estar de manera inexplicable. Ausencia. Eliminar algo, alguien. Hecho de no existir más...
>
> En: (Escudero Chauvel y Lia, 2000, p. 157).

Una vez que ha sido expuesta la mecánica de la desaparición y los objetivos que persigue, interesa destacar que desde diferentes disciplinas y modos de discernimiento, como son la psicología, la antropología o la sociología, pero también desde el mismo aparato represor, se ha intentado comprender lo que significa y los efectos que provoca en quien la observa. El proceso es tan complejo que muchas veces se tiene que recurrir a figuras retóricas para intentar captar el espacio que deja

---

[29] La desaparición del cuerpo de las personas favorece sin duda la impunidad tal como lo comenta el General Ramón Genaro Díaz Besonne, quien estuvo a cargo de desaparecer a miles de personas durante el "Proceso de reorganización nacional" en Argentina (1976-1983): "Supóngale que hubiera habido 7000 desaparecidos —que no hubo 7000—, pero póngale que hubiera habido 7000, ¿usted cree que hubiéramos podido fusilar 7000? Desde el Papa, con fusilar 3 nada más, mire el lío que le armó a Franco con tres ¡Se nos viene el mundo encima! ¡Usted no puede fusilar 7000 personas! ¿Y si los metía a la cárcel qué? Ya pasó acá, venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad porque esta es una guerra interna. No es el enemigo que quedó del otro lado de la frontera salían otra vez a tomar las armas, otra vez a matar. [...] Con mucha eficacia se actuó y en no más de tres años fue aniquilada la subversión" (Robin, 2008, minuto 35'15).

quien ya no está. Por ejemplo, en teología católica hay un concepto para nombrar un sitio temporal a donde se dirigen las almas que carecen de estatus de fe, el *limbo*. A este sitio que es un *no lugar* se llega ya sea porque se falleció antes de la resurrección de Cristo o porque la existencia terrenal se agotó antes de ser bautizados en la creencia cristiana. Cuando una persona desaparece, en el mundo de los vivos, su ausencia, la falta de conocimiento de dónde se encuentra su presencia corporal hace que en sus círculos cercanos se tenga la impresión de que esta persona se encuentra en una especie de *limbo*, es decir, de *no lugar*.

Por su parte, Jorge Rafael Videla, presidente de Argentina —por golpe de Estado— (1976-1981) y en cuyo mandato desaparecieron miles de personas, afirmó en una entrevista televisada en 1979: "Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento equis. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento zeta. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene identidad. No está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido" (*Pregunta a Videla sobre desaparecidos*, 1979).

En otro registro, desde la psicología, Pauline Boss (2001) desarrolló una teoría para referirse a la sensación que provoca en una persona el hecho de no saber del paradero de una persona cercana, en particular de un o una familiar, a este estado le llamó la *pérdida ambigua*, es decir, una situación de pérdida confusa que es consecuencia de no saber si un ser querido está vivo o muerto, ausente o presente (Boss, 2001). Esta pérdida se da en casos de Alzheimer, de catástrofes naturales o de desaparición. La autora sostiene que para cerrar un ciclo de vida, para los seres humanos resulta muy importante enterrar a sus muertos. Sostiene además que importa de manera significativa saber dónde está el cuerpo o sus restos, aunque estos se reduzcan a cenizas. Al no existir tales, las y los deudos no pueden cerrar el ciclo y se mantienen en la incertidumbre de manera permanente en la expectativa de un posible retorno.

Desde la antropología, por su parte, se habla de un estado liminal, un lugar-intersticio que permite el paso de una condición social a otra en procesos ritualizados. Víctor Turner define a quienes se encuentran en este estado como sigue: "[l]os seres liminales no están ni aquí ni allá y hasta pueden no estar en ninguna parte y se encuentran al margen del margen, flotando sin relación a los puntos fijos reconocidos del espacio-tiempo de la clasificación estructural" (Turner, 1973, p. 58)[30].

Desde la sociología, a partir de un análisis semiótico, Gabriel Gatti reflexiona sobre la relación entre lenguaje y violencia y su co-construcción. En ese sentido, a partir de un enfoque de marcos interpretativos, el autor afirma que la desaparición forzada de personas es una *catástrofe* —una quiebra de sentido sin retorno posible al orden previo—, concepto que será recurrente en sus obras. Jugando con una jerarquización de conceptos, en este sentido, una *catástrofe* es una herida más profunda que un *trauma*, más duradera que un *evento*. "Una inestabilidad estable: el desajuste permanente entre palabras y cosas convertido en estructura" (Gatti, 2008, p. 28). En su obra afirma que ante este quiebre de sentido surgen dos posibilidades. La primera, intentar reparar lo quebrantado, es decir, restituir las "narrativas de sentido" aportadas por los "agentes de la memoria" —organizaciones de derechos humanos, las y los archiveros, las y los antropólogos forenses, las y los psicólogos— quienes se encargan de darle sentido al *sin sentido*: cuerpos ausentes, ruptura de "tramas de familia", la disputa por la verdad.

Sin embargo, Gatti es crítico de estas acciones porque le dan materialidad a lo que no está. La segunda, la que él considera más "justa", es no intentar restituir sino explorar las "narrativas para la ausencia de sentido" (Gatti, 2008, p. 126). Éstas son las que

---

[30] Para la aplicación concreta de este concepto en la desaparición de personas ver: (Panizo, 2011; Robledo Silvestre, 2017).

surgen de las y los hijos de las personas desaparecidas y se producen desde una situación enunciativa inédita, el *no sentido*. De ahí la importancia de inventar nuevas palabras para esta paradoja (Gatti, 2008). Gatti da como ejemplo el caso de los archiveros que no se esfuerzan por reponer los datos que faltan y que proponen considerar la ausencia de dato —el *no* dato— como un dato en sí (Gatti, 2008, p. 126), o los juristas ante lo *ajurídico* "¿Cómo tipificar jurídicamente un hecho, la desaparición forzada de personas, que describen por su resistencia a la lógica de lo jurídico, por su *ajuricidad*?" —un delito sin cuerpo ni pruebas— (Gatti, 2008, p. 127). En otras palabras, la obra de Gatti se centra en la construcción de los horizontes de sentido de algo que en sí mismo no puede tenerlo: "para eso qué pasó no hay palabras y no obstante tiene que haberlas" (Gatti, 2008, p. 65).

1.4 La gestión de la ausencia: la aliteración del limbo, el estado liminal y la catástrofe de sentido

Las implicaciones para las redes familiares de quien desaparece son varias. Las más tangibles tienen que ver con la ausencia de personalidad jurídica. No hay cadáver, pero la persona no está. Por ejemplo, sus deudas no se congelan pero tampoco se puede tener acceso a sus bienes. La patria potestad de sus hijos y su estatus conyugal está en un limbo jurídico, etc. (Yankelevich, 2017, p. 138). Además de estas complicaciones jurídicas[31], muchas veces comienza un proceso de empobrecimiento del núcleo familiar, sobre todo si quien está ausente era uno de los principales

[31] No todas las legislaciones prevén la personalidad jurídica de las personas desaparecidas. Solo algunas contemplan poder realizar una declaración de ausencia por desaparición para garantizar la salvaguarda y el ejercicio de los derechos jurídicos de la persona desaparecida. En México, hasta hace algunos años la declaración de ausencia y la declaración de presunción de muerte era una competencia de los juzgados civiles o familiares de primera instancia de cada estado (Yankelevich, 2017, p. 138). Coahuila fue el estado pionero en legislar en esta materia, a través de la Ley para la declaración de ausencia por desaparición de personas del Estado de Coahuila de Zaragoza, el 2 de mayo del 2014. Para un análisis comparativo internacional de las mejores prácticas de declaración de ausencia, ver: (Muñoz Martínez, 2014). Agradezco a Carolina Robledo Silvestre el envío de este último texto.

sustentos de la familia. Pero, más allá de las dificultades que tienen que ver con la gestión de las cuestiones materiales, la desaparición trae consigo una serie de dimensiones que escapan al orden de lo material y que hacen que las consecuencias de la desaparición forzada se mantengan en una presencia constante de este crimen que se considera de lesa humanidad (OEA, 1994).

En ese sentido, las personas cercanas a alguien que fue desaparecido o desaparecida, además de tener que lidiar con la ausencia que se hace siempre presente, de ahí una de las paradojas, a nivel del núcleo familiar las afectaciones se dan en varios sentidos. Por lo mismo, la desaparición forzada es considerada un crimen complejo debido a que la condición de desaparición es el acto ejecutante, pero provoca diferentes tipos de daños en los círculos cercanos de la víctima (López Merino, 2015, p. 81). En palabras de Clemencia Correa, experta en peritaje psicológico en víctimas de conflictos armados y especialista en acompañamiento psicosocial de víctimas de desaparición forzada, una de estas afectaciones es la incertidumbre ante la ausencia:

> La ausencia es como la incertidumbre del estar vivo o muerto, yo creo que es la primera. La ausencia es recordar permanentemente la historia, la ausencia tiene que ver con el pasado, presente y futuro. O sea, la ausencia no es solamente hacer referencia a lo que fue, sino a lo que no está siendo y lo que quién sabe si podrá ser. Pienso que la ausencia también implica, esto que decíamos que es la culpa y por qué no está presente [la persona desaparecida]. Porque si miramos detrás de la ausencia es la permanencia, detrás de la ausencia es el presente. Detrás de la ausencia es lo tangible. Detrás de la ausencia es el cuestionarte el futuro y los sueños. Porque te queda permanentemente la incertidumbre. Es quedarse. No sé si lo has escuchado también es quedarte en un momento de tu historia y no poder evolucionar o rehacerte. (Entrevista el 17 de febrero del 2017).

Efectivamente, entre las múltiples dimensiones que implica la desaparición forzada para quienes la observan, está el quedarse marcado por el momento de su historia personal en el que ocurrió la desaparición. Por ejemplo, en diferentes relatos de familiares de víctimas de desaparición forzada se habla de un paréntesis en su vida a

partir de la desaparición. Como si su historia se hubiera quedado suspendida al momento en que dejaron de tener noticias de sus familiares. Mónica González Islas, periodista de investigación que lleva varios años trabajando con familiares de víctimas de desaparición, lo interpreta de la siguiente manera:

> ¿Tú has pasado por algún accidente en algún momento? Lo tratan mucho en cine, ¿no? Hay como un silencio, o sea cuando pasas como por un accidente y alguien muere o hay una tragedia. Incluso cuando tú tienes un accidente hay como un *lapsus*, cápsulas de falta de memoria, de ausencia. Así lo definen los psicólogos, como un choque en el que se te borra lo que piensas. Entonces en cine en un accidente se interpreta mucho como un silencio, como que es un momento incómodo y como el vacío, como el silencio y luego ya sigue la cotidianidad. Yo les preguntaba a estas personas precisamente por esa ausencia en la que están luchando y estaban llevando y siguen llevando esta lucha de manera aislada porque la sociedad sigue caminando, el tiempo sigue pasando y cada una de estas personas se detienen en fechas de desaparición o de asesinato. Se detienen y se fracturan en esta cotidianidad y ellos se quedan en este limbo, como en este espacio y esta atmósfera, para ellos sigue siendo su cotidianidad y todos los demás seguimos viviendo y circulando. Ellos se quedan en ese evento. (Entrevista, el 3 de febrero del 2017)[32].

Pero además, de la incertidumbre que trae la ausencia y el quedarse fijo en un momento de su historia, a nivel psicosocial hay otras implicaciones que en el caso latinoamericano han sido ampliamente estudiadas (Antillón Najlis, 2018; Arévalo Naranjo, 2010; Lira, 2010; Pérez-Sales y Navarro, 2007). Entre ellas está el sentimiento de culpa en las y los familiares cercanos. En palabras de Clemencia Correa:

> La primera es la dificultad de nombrar lo que sucede. La otra es la incertidumbre permanente, porque si algo tienen las desapariciones es que

---

[32] Por ejemplo, ante la desaparición de su hermano "Ramiro recuerda ver cómo su mamá se quebró. Esa palabra que usa significa 'separarse con violencia'. Como si su familia se rompiera en dos pedazos: antes de esa noche y después de esa noche" (Balderas, 2016).

> vives en la incertidumbre. Y la incertidumbre, los impactos que te van generando son muy complejos. Porque no puedes rehacer tu vida, porque si llega, porque si se fue. Entonces estamos hablando de que queda abierta la herida de manera permanente. No tienes una forma de elaborar el duelo [...] Porque la culpa siempre está ahí. Ese es otro de los efectos muy complicados a nivel psicosocial: la culpa. Y la culpa desde varios sentidos, o sea si algo permanece en el proceso de desapariciones es también la culpa. La culpa porque no le ayudé, la culpa porque no lo cuidé, la culpa porque antes de que se fuera le dije o no le dije cualquier cosa. La culpa porque no ha hecho lo suficiente para encontrarlo. La culpa porque me equivoqué y lo hizo mal. O sea es una carga moral impresionante. (Entrevista, el 17 de febrero del 2017).

Pero además de los elementos mencionados líneas más arriba, está el aislamiento social al que las familias hacen frente como otro de los efectos de la desaparición (Rodríguez Ramírez, 2011)[33]. Es un efecto buscado, esperado. Como no se sabe quién se la o se lo llevó está siempre el miedo de que si te acercas puedes ser tú quién siga en la lista o alguien de tu entorno cercano, por lo mismo se pone una barrera, marca, estigmatiza. En palabras de Eloísa Diez, directora y productora documentalista:

> En particular por la desaparición como no se sabe quién se lo llevó, por qué se lo llevó, a dónde se lo llevó, qué pasó. Entonces vienen como todas las cosas de por algo se lo llevaron, no te acerques a él porque a lo mejor también te llevan a ti. O sea los hijos, me lo han dicho, hijos de desaparecidos, que crea un vacío social. Eres el apestado porque está esa como amenaza latente de que al papá se lo llevaron, a lo mejor lo vienen a buscar a él y si tú estás tomando una *chela* con él, igual te llevan. Entonces se da el aislamiento, aislamiento social y dentro de la propia familia también. Cuentan mucho los familiares cómo se les deja de invitar a los eventos familiares y así porque es como,

---

[33] De acuerdo con Rodríguez Ramírez, el dolor de los familiares es vivido en un entorno de aislamiento social: "los familiares más cercanos son prácticamente abandonados por el resto, que teme sufrir el 'contagio' y ser desaparecidos" (2011, 249). En ese sentido la autora cita a una de las madres del Comité Eureka: "[Me quedé] sin el apoyo de mis hijos. Ellos estaban bien molestos. Tengo una hija que es maestra, ella tenía mucho miedo de venir para acá —vive en Coyoacán— porque decía que por el apellido, por eso tenía miedo: "que me vaya a pasar a mí también", pues yo la dejé mucho de ver y mi hijo Ernesto también se me desapareció. No venían para acá, tenían miedo (Entrevista a Esperanza Galoz)" (Rodríguez Ramírez, 2011, p. 249).

> porque es eso, vienes trayendo a tu desaparecido todo el tiempo. No lo pudiste enterrar va a estar contigo ahí todo el tiempo aunque no hables de él. (Entrevista, el 13 de enero del 2017).

En el mismo sentido que tiene que ver con el aislamiento social, otra de las dimensiones que toman estas preocupaciones es el interés por parte de las y los familiares de resarcir la dignidad de la persona que ha sido desaparecida, para que su identidad no quede dañada en el espectro social. Efectivamente, por medio de las instituciones oficiales —y eso parece ser una característica presente en todo el continente— se busca criminalizar y responsabilizar a la propia víctima de su desaparición. El discurso que se propaga sistemáticamente desde los organismos de Estado, el cual ha logrado introyectarse en la sociedad, y que incluso permea en algunos de las y los familiares de quien ha desaparecido, es que si a alguien se le hace desaparecer es porque "en algo andaba metido", de ahí que en el discurso de los familiares haya una prioridad por resarcir la honorabilidad de quien no está. Por ejemplo, en las palabras de Daniel Espinoza, padre de Daniel Espinoza, desaparecido el 7 de julio del 2013, del cual fueron encontradas partes de su cuerpo en Lagos de Moreno un mes después:

> Aprendes a vivir como poniendo una pantalla para decir "yo estoy bien, no pasa nada" pero por la forma en que fueron las cosas de esa manera tan brutal, con unos jóvenes totalmente ajenos a la delincuencia y todas esas cosas. A nuestros hijos los quisieron involucrar y nosotros tuvimos que enfrentar a las autoridades. Tuvimos que alzar la voz y soportar también la señalización de la sociedad porque al criminalizarlos el presidente municipal, pues todo el pueblo de Lagos se va contra uno, contra la familia y todo eso te lastima. Por eso fue que demandamos al presidente municipal para que los hiciera ver. Yo le decía al presidente que yo sabía lo que tenía como hijo, que él no me tenía que decir dónde andaba ni qué andaba haciendo. Que él me lo tenía que comprobar. No pudo comprobarnos nada. Tuvimos que recurrir a [la Comisión de] Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Víctimas para lograr que él diera la disculpa pública y limpiar un poco, limpiar totalmente la imagen del muchacho. Después de que le hicieron todo lo que le hicieron, las autoridades nos mentían. [...] Sobre [la Comisión de] Derechos Humanos, cuando fuimos a Lagos de Moreno para pedir la ayuda, para que ofreciera la

> disculpa pública el presidente municipal, el encargado de derechos humanos nos dijo que no procedía nuestra demanda, que eso no tenía sentido. Entonces yo le decía que por qué no y me decía "es que no tiene caso, ¿ya qué ganas con eso?" [...] Entonces yo no me quedé callado y me moví a la Comisión Nacional de Víctimas, a la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Jalisco y ahí fue donde le dieron el seguimiento y ahí fue donde nos atendieron y se logró la disculpa, pero no con el resultado que nosotros queríamos porque el Estado de Jalisco solamente le indicó al presidente que diera una aclaración, que aclarara la criminalización que [le] hizo a los muchachos. Entonces nosotros insistimos e insistimos e insistimos y acosamos al presidente municipal por vía telefónica, por vía personal. Nos le aparecíamos en todos los lugares. Yo iba y lo buscaba en su casa, con sus resguardos que nos retiraban y yo siempre iba a la presidencia municipal y hasta que lograba acercármele. Y yo pienso que, yo le decía a él, este, 'discúlpate' y me decía el presidente municipal 'Armando ya déjalo en paz, él ya está descansando'. Y le dije yo, 'sí yo sé que él está descansando, el que no descanso soy yo porque tú tienes mi paz, quiero que des públicamente [las disculpas] o quiero oírte que te disculpas'. Y lo logramos, lo hizo. Nos pidió perdón y salió a la luz pública y todo. Entonces yo por eso digo que sí se puede, si uno lucha sí se puede". (Versión estenográfica personal de la Mesa: Los rostros de la guerra: Víctimas y Victimarios, en el marco del Foro México: Seguridad Sin Guerra, organizado por la Red Retoño el 6 y 7 de marzo del 2017, en el Museo de la Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México).

El punto aquí no debería ser si la persona desaparecida andaba "metida en algo o no". En un régimen de Estado de Derecho, si se cometió algún delito, la persona en cuestión debería ser sometida a un debido proceso. El hecho de que la sociedad "justifique" de la manera que sea, que si alguien desapareció fue por no comportarse "correctamente", habla ya de un fracaso del contrato social. El discurso por parte del Estado al sistemáticamente criminalizarles —aún sin haber realizado una investigación efectiva—, no hace más que reforzar el mecanismo, el cual tiene por objetivo originario, entre otras cosas, desarticular la cohesión social.

Entonces, en torno a este limbo, pérdida ambigua, estado liminal o catástrofe de sentido, se presenta una disyuntiva que apunta a por lo menos dos sentidos. Ya sea que el mecanismo logra sus objetivos y el miedo, la culpa, la incertidumbre, el

aislamiento social paralizan el entorno de quien desaparece y llevan a la inmovilidad social, a un estado pasivo donde todas estas experiencias se experimentan en el espacio doméstico o privado, —como de hecho sucede en muchísimos casos de desaparición—, o bien se comunalizan y se llevan del espacio privado a la arena pública. Y es aquí donde surge otra paradoja (Gatti, 2008). A pesar de que el mecanismo desaparecedor tiene como objetivo la inamovilidad social, la búsqueda desde las y los primeros desaparecidos en las dictaduras de América Latina, llevó a la emersión de uno de los movimientos de defensa de los derechos humanos más importantes en el continente[34] que se reforzó y expandió durante la segunda mitad del siglo XX. La imagen más emblemática de este andar es el de las Madres de la plaza de mayo que con un pañal de sus hijos desaparecidos en la cabeza reclamaban su regreso[35].

---

[34] De acuerdo con Kathryn Sikkink, la primera red de defensa de derechos humanos que se forma en las Américas, es la de activistas que reclamaban la presentación de las personas desaparecidas: "En América Latina, aunque existían instrumentos legales de carácter internacional enfocados a la protección de los derechos humanos, y pese a la reiterada violación de los mismos, éstos no constituían una categoría importante en la agenda política de los gobiernos ni de los movimientos sociales. La primera red de derechos humanos fue formada por los familiares de los desaparecidos, perseguidos y presos políticos; fueron ellos los primeros en denunciar las violaciones a los derechos humanos, concentrados principalmente en los llamados derechos de las personas, entre ellos la libertad de no ser ejecutado, torturado y encarcelado arbitrariamente" (Sikkink, 1996, p. 76).

[35] Efectivamente, al principio las Madres de la Plaza de Mayo utilizaban un pañal de sus hijos para identificarse: "En todas estas cuestiones, en todas estas demostraciones, en todos estos actos, las Madres todavía no usábamos el pañuelo, y nos comunicábamos solamente los jueves en la Plaza, y en alguna pequeña reunión que hacíamos en un bar o a veces en el atrio de una iglesia. Cuando llega el mes de octubre entre los organismos que estábamos funcionando se prepara una marcha. Los primeros días de octubre también la Iglesia preparaba su marcha a Luján con un millón de jóvenes. Y las Madres decidimos ir a las dos marchas: a la de los organismos, que era para el Día de la Madre, y a la de los primeros días de octubre que hacía la Iglesia. Pero no sabíamos cómo identificarnos, todas no podíamos caminar tantos kilómetros, entonces cómo nos íbamos a identificar; unas iban a ir desde Luján, las otras iban a entrar en Castelar, otras en Moreno, otras en Rodríguez. Entonces empezamos a ver cómo nos identificaríamos, y una dijo 'vamos a ponernos un pañuelo'. '¿Un pañuelo..., y de qué color?, porque tiene que ser del mismo color'. 'Y bueno, blanco'. 'Y, che, y si nos ponemos un pañal de nuestros hijos' (que todas teníamos esa cosa de recuerdo, que una guarda). Y, bueno, el primer día en esa marcha a Luján, usamos el pañuelo blanco que no era otra cosa, nada más ni nada menos, que

SEGUNDA PARTE: EL SURGIMIENTO DE UN NUEVO SUJETO POLÍTICO, LAS MUJERES-MADRES EN BÚSQUEDA DE LAS Y LOS DESAPARECIDOS

En esta segunda parte desarrollo cómo la experiencia límite que representa la desaparición forzada de personas, llevó a la creación de una figura que es ícono en la defensa de los derechos humanos en el continente: las mujeres-madres en busca de sus hijas e hijos desaparecidos. En ese sentido analizo cómo las mujeres-madres movilizaron de manera consciente estos estereotipos de los roles de género en su entrada en política, es decir, la "vocación" abnegada de las madres que no hacían más que cumplir con lo que se "esperaba" de ellas, mismo si esto implicaba abandonar la esfera privada para llevar a la arena pública el reclamo por el regreso de sus hijos desaparecidos. Posteriormente analizo cómo en el caso específico de la desaparición de personas, este reclamo público del regreso de las personas que han sido desaparecidas se da en una relación dialéctica de quienes reclaman su regreso. Esta relación dialéctica se da a través de la representación de la corporeidad de quien no está, entendiendo esta doble naturaleza que habita el cuerpo: carne/alma pero también entidad social. De esta manera concluyo que los efectos tan fuertes que experimenta el círculo cercano de las personas que desaparecen, llevaron a una *re*subjetivación de los horizontes de sentido, los cuales sumados a otras subjetividades de quienes experimentan situaciones similares, llevaron a la emergencia de un nuevo sujeto

---

un pañal de nuestros hijos. Y así nos encontramos, porque ese pañuelo blanco nos identificaba. En el tiempo en que llegamos a Luján nos dimos cuenta que mucha gente se acordó, después de algunos días, que esas mujeres de pañuelo blanco habían sido capaces, alrededor de la plaza de Luján, de gritar y pedir —rezando, por supuesto— por los desaparecidos. O sea que todo el mundo que estuvo esa vez en Luján se enteró que había desaparecidos en el país y que las Madres, rezando, pedíamos por ellos". (Asociación Madres de Plaza de Mayo, 1996, p. 11-12).

político, la imagen de las *valquirias*, en el rescate de los héroes caídos para llevarlos al *Walhalla*.

1.5 Las *Valquirias*: las mujeres-madres y su entrada en política

La experiencia límite que experimentan quienes se enfrentan al dispositivo de la desaparición forzada llevó a la creación de un movimiento social muy potente, incluso trasnacional de quienes reclamaban el regreso de quienes habían sido desaparecidos. Esta búsqueda se representaba en una nueva figura que se convirtió en ícono de la defensa de derechos humanos en el continente, las madres organizadas en busca de sus hijas e hijos en una relación dialéctica con quien no está.

Así, para seguir con el parangón de la tetralogía de Wagner, la Valquiria es la segunda ópera, viene justo después del Oro del ring y retoma el significado que en la mitología germánica tienen las *valquirias*. Éstas son divinidades menores, son femeninas, son guerreras y son las encargadas de rescatar las almas de los guerreros caídos para llevarlas al *Walhalla* (la morada de los dioses). El nombre ha servido de inspiración para representar actos u operativos que, por lo menos en el objetivo que se ha hecho público, tienen por finalidad derrocar el poder en turno o el rescate de víctimas[36]. Pero más allá de eso, en la mitología germánica las valquirias representan la fuerza guerrera de las mujeres organizadas en el rescate de quienes no pueden hacerlo por sí mismos.

---

[36] Por ejemplo, al atentado que sufrió Adolf Hitler el 20 de julio de 1944 y que tenía por objetivo ejecutarle un golpe de Estado, se le denominó Operación Valquiria (J. H. Martínez, 2010). En Colombia el nombre también fue retomado para organizar una operación policiaca en contubernio con la DEA (Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos) que duró casi un año y donde detuvieron a 12 socios de cárteles mexicanos (Jalisco y Nueva Generación) y el cual fue calificado como uno de los golpes más contundentes contra organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico, secuestro y extorsión (D. A. García, 2017).

La Cabalgata de las Valquirias es el tercer acto de la segunda ópera y es el punto culminante, representa la preparación y la organización de las *valquirias* para transportar hacia el *Walhalla* a los héroes caídos, organizan su rescate. Además de ser uno de los fragmentos que más se representan de la obra de Wagner y que ha sido retomado en diferentes expresiones de la cultura popular —particularmente en películas de diferentes géneros—, este fragmento muestra cómo esta representación de un rol femenino de cuidado —de *care*[37]—, puede transformarse en una actitud guerrera, organizativa, para lograr un objetivo: el rescate de los cuerpos de la cólera de los dioses —de la condición divina de los desaparecedores—.

Específicamente en lo que respecta al *care* y la entrada en política, de acuerdo con Elsa Chaney (1979) es común que la primera entrada en la arena pública de las

---

[37] Con respecto a esta dimensión de los cuidados, en el marco de las teorías en el campo de estudios feministas y de género, existe un debate sobre las dinámicas de género en torno al *care*. De acuerdo con Mari Luz Esteban (2017), el concepto de cuidados ocupa un lugar central en los estudios feministas al lado de las violencias machistas. Concretamente en cuanto al concepto del *care*, existe un continnum de posicionamientos que van desde el sobredimensionamiento del término "cuidados" al de la "sentimentalización" de la mirada feminista. Al interior de esta panoplia, las combinaciones de posicionamientos tienen diferentes matices los cuales no escapan a los límites culturales e históricos de la construcción del concepto. En ese sentido, Esteban (2017) hace una revisión de las propuestas que entran en este continuum. Por un lado están los estudios pioneros en torno a la "ética del ciudado" cuyas principales representantes son Carol Gilligan (1982) y Sara Ruddick (1989), esta ética del cuidado es también llamada del "pensamiento maternal". En esta perspectiva existe una supuesta orientación ética y política específica de las mujeres, con valores que les son propios y que habría que reconocer y universalizar. En el otro extremo de estas perspectivas estaría el enfoque materialista y no diferencialista en lo que concierne a la atención y los cuidados. Éste último centra el análisis en los problemas que conlleva la división sexual del trabajo y la distribución y reparto de tareas y la corresponsabilidad entre hombres, mujeres y generaciones. Sin embargo, Esteban afirma que a pesar de todos estos posicionamientos, en los estudios feministas existe una "hipertrofia" de la dimensión emocional y afectiva de los cuidados. Para la autora, al dejar de lado la dimensión sobre las connotaciones emocionales de los cuidados se desatiende la discusión sobre el hecho de que las mujeres seamos consideradas seres más emocionales, y por ello más "capaces" para cuidar. Esteban considera central esta discusión en torno al *care* debido a que estas enunciaciones son una construcción social y uno de los principales instrumentos de la subordinación de género, puesto que diferencia y jerarquiza las aportaciones y los espacios que son ocupados por las unas y por los otros. En ese sentido, la autora aboga por redimensionar la importancia de las emociones y hacer la distinción entre afectos, emociones y cuidados como ámbitos diferenciados y diferenciables con respecto a las tareas relacionadas con los cuidados (Esteban, 2017). Agradezco a Aida Hernández Castillo la sugerencia y envío de este texto.

mujeres se haga enfatizando valores morales y respondiendo a su "vocación" de esposa y madre y que las percepciones asociadas a la maternidad las utilice para protegerse y como herramientas en su lucha (Chaney, 1979). En ese sentido, con respecto a las *éticas de los cuidados*, en el marco de la búsqueda de las personas desaparecidas, las mujeres-madres asumen de manera voluntaria llevar este rol de "madre" a la arena pública al pasar del dolor privado de la ausencia de sus hijos y la incertidumbre sobre su paradero, al reclamo público por el regreso de sus hijas e hijos desaparecidos. Los trabajos de Valeria Fabj (1993), Andrea Malin (1994) y Pieper Mooney (2007) apuntan en este sentido.

El primero, el de Fabj, argumenta que en el caso de las Madres de la Plaza de Mayo en el ámbito público movilizaron esta imagen del cuidado, tan asociado a la maternidad en Latinoamérica, para protegerse en su actividad política. La autora argumenta que las mujeres utilizaron el mito latinoamericano del *marianismo* —asociado a la imagen de la abnegación maternal de María, la madre de Cristo—, el cual define a las mujeres-madres como apolíticas y no confrontativas. Así, de acuerdo con el análisis de la autora, las Madres de la Plaza de Mayo, en la arena pública, al movilizar la imagen del *marianismo* proyectaban que estaban cumpliendo con su rol de madre al buscar a sus hijos desaparecidos y que por lo tanto era "justificable" su presencia en la arena pública. De esta manera, las Madres de la Plaza de Mayo decidieron mantener esta imagen tradicional asociada a la maternidad y al cuidado, mientras actuaban públicamente con el objetivo de evitar ser reprimidas, puesto que su acción se legitimaba al afirmar que no hacían más que "cumplir con su rol" de cuidadoras de su progenitura (Fabj, 1993).

En el mismo sentido, Malin (1994) enfatiza en el hecho de que las Madres de la Plaza de Mayo movilizaron políticamente este rol de la maternidad al denominarse ellas mismas como madres, no como militantes ni activistas, recurriendo a las connotaciones y valores religiosos y seculares de la maternidad y los cuidados:

caminando pacíficamente, aferrándose fuertemente a las fotografías de sus hijos, lo que contribuyó a legitimar su presencia en la arena pública y en la defensa de derechos (Malin, 1994).

Pieper Mooney (2007), por su parte, argumenta que en los casos argentino y chileno, la movilización de la figura de la "madre", si bien apeló a la imagen tradicional de su rol, ésta fue mucho más allá de la reivindicación privada-particular del regreso de sus hijos en singular, ya que al ser una acción organizada y mantenida en el tiempo, les llevó a asegurar su presencia continua como actrices políticas que innovaron en el campo de lo público al movilizar esas características de madre que normalmente las confinarían al espacio privado. De esta manera, podemos ver que en lo que respecta a lo político y en particular a la búsqueda de personas desaparecidas, estas características que esencializan a los roles de género, en algunos casos, como los evocados anteriormente, pueden ser movilizados para posicionarse en la arena pública y devenir en sujetos políticos a partir de la movilización de herramientas y acciones de cuidado estereotipadas por los roles de género[38].

En ese sentido, una observación relevante que tuvo lugar en el marco del trabajo de campo para esta tesis es que la problematización del género en la búsqueda de las personas desaparecidas genera malestar en la mayoría de las personas a las que en la entrevista se les hizo la pregunta expresa: ¿por qué creen que en México —pero también en todo el continente— son sobre todo las mujeres quienes buscan a las personas desaparecidas? Muy probablemente interpretando que la pregunta llevaba implícita una reivindicación de la equidad de género, las respuestas obtenidas fueron más del orden de la justificación de la ausencia de los hombres en la imagen activa de

[38] Con respecto al rol de las madres en la búsqueda de las personas desaparecidas, ver también: (Bejarano, 2002; Edmonds, 2010; Schoellkopf, 2017).

la búsqueda. Por ejemplo, Nadin Reyes Maldonado, hija de Raymundo Reyes Amaya, detenido-desaparecido el 25 de mayo del 2007 en el Estado de Oaxaca, evoca principalmente cuestiones de seguridad para justificar la ausencia de los hombres en las búsquedas activas y su presencia en la arena pública:

> Somos nosotras las que tenemos que salir a buscarlos, porque también se corre el riesgo de que al ser una cuestión política, de que también por ser hombres, puedan ser desaparecidos. Que también es otra situación de riesgo que hay y que también a veces por una cuestión de decisión política se decide que sean las mujeres quienes salgan a buscar a los hombres, que en muchos años así se dio también ante la terrible situación de perseguimiento que había en contra de los hombres por su activismo político. Las mujeres eran las que salían y en muchas comunidades aquí pasa, las mujeres son las que dicen nosotras salimos a enfrentarnos al ejército mientras cuidamos que los maridos se refugien porque era una situación terrible de persecución. En algunos casos se da por una cuestión también de estrategia y de pensar, igual de protección también porque se da a veces esa parte, porque no queremos que le pase alguien más de la familia, con el riesgo de que son hombres y es así como salen en la lucha las mujeres. Pero sin duda también decimos que cuando la represión se dirige, es igual, al Estado no le importa si sean hombres o sean mujeres; cuando tiene una estrategia o algo planeado arrasa, ya sean hombres o mujeres pero en el caso de ahorita yo creo que mayormente somos mujeres [las que buscamos] porque el fenómeno se da a jovencitos, son hombres a quienes más se han llevado" (Entrevista, el 18 de enero del 2017).

Janet Carmona, experta en acompañamiento psicosocial vincualda a Serapaz y del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, por su parte, evoca en primer lugar los roles de género en los cuidados, pero también en la reproducción de la vida cotidiana al tener que ser el hombre quien se encargue de proveer los recursos. Aunque al igual que Nadin Reyes Maldonado, evoca también cuestiones de seguridad y de un rol de cuidados aún más acentuado, en el que las mujeres prefieren, por una decisión personal y reflexionada, exponerse ellas mismas, entes que exponer a alguien más de su familia:

> La mayoría, una gran mayoría son mamás. Mamás de chicos o de chicas que están desaparecidos. Bueno, no sé, ahí tiene que ver con toda una construcción

> social, ¿no? Del papel que tiene la mamá hacia sus hijos, de este vínculo fuerte que hay. Y tal vez ahí apuntar que a veces lo que ellas dicen es que una se tiene que dar la tarea de buscar, pero no quiere decir que el esposo no esté buscando. Sin embargo, el esposo tiene que ver la forma en seguir manteniendo esta estabilidad económica. Entonces ahí no se da, no es generalizada, pero aunque la cara visible sean las mamás y las hijas o las abuelas. O sea esta otra parte que son los papás. Son los papás que tal vez no están tan activos pero que sí hay una participación por parte de ellos. Y más como estas dinámicas, hay casos diversos, la verdad es que hay muchos casos, pero pues el final son ellas las que, este vínculo tan fuerte con sus seres queridos son las que las mueven. Algunas juegan el doble papel no sólo de estar buscando sino también de sostener a la familia. Algunas por ciertas cuestiones de seguridad, por ejemplo. En este caso también ahí se juega un papel muy importante por parte de las compañeras y es para que a sus familias no les pase nada o les siga pasando. Porque reciben amenazas por lo que están haciendo, por eso deciden ir solas en la lucha protegiendo, para proteger un poco más a su familia. Entonces es una decisión a veces de ellas muy clara. Es una decisión muy clara y es un compromiso. Recuerdo algunas frases, es un dolor tan fuerte, pero que se tiene que convertir y es un amor tan fuerte por sus hijos que eso es lo que las hace seguir y las hace hacer lo que hacen. Inquebrantables. Entonces en algún momento una compañera dijo una tiene que decidir qué hace y cómo tiene que canalizar ese dolor, y muchas hemos decidido que nuestro dolor nos sirva como una fuerza para seguir buscando a nuestros hijos. (Entrevista, el 21 de enero del 2017).

Clemencia Correa, experta en acompañamiento psicosocial en víctimas de violencias políticas e integrante de Aluna, por su parte evoca el rol tradicional de las mujeres en general en torno a los cuidados, pero en el caso de las desapariciones de personas también. Sin embargo, en el marco de las búsquedas y del reclamo de regreso de las personas desaparecidas, Correa estima que se le da un lugar primordial al rol de madre, pero que esto invisibiliza otros roles de mujeres que también buscan como por ejemplo pueden ser hermanas, tías, etc., que quedan invisibilizadas. Aún así, la acción política sigue recayendo en las mujeres:

> Está toda la discusión, bueno tengo varias compañeras feministas, no soy feminista pero creo que es interesante de todas formas, el rol que tiene la mujer en la sociedad. No solamente de cuidadora, que creo que también hay que preguntarse qué es lo positivo y lo negativo [de eso]. Pero pienso que es

> también el rol de quien mantiene lazos muy fuertes, quien construye lazos. Que los hombres también, pero no necesariamente en las familias. [...] Creo que en este caso el rol de las mujeres es tejedor, de cuidadora, pero creo que también en el marco de la desaparición quien tiene un rol muy importante en la construcción de los lazos son las mujeres. Si bien es cierto que el rol de las madres políticamente tiene un impacto muy fuerte. También se ha invisibilizado el rol de las hermanas, el rol de otros miembros de la familia. [...] O sea obviamente el rol más importante y el más difícil es el de la mamá, por lo que implica la relación del vínculo entre una madre y una hija obviamente. Pero creo que también hay otras personas que giran alrededor o porque la mamá no puede, porque la mamá está enferma, porque la mamá ya no puede física y emocionalmente seguirlo haciendo. Entonces sí hay otros roles que es el de la tía, que es el de la hija, no sé hasta la prima. Que pienso que también se hace invisible. (Entrevista, el 17 de febrero del 2017).

Tal como puede observarse, a pesar de reconocer la acción voluntaria y consciente de estas mujeres que deciden emprender acciones públicas en la búsqueda de sus allegadas y allegados desaparecidos, estas respuestas apuntan una vez más a la función de las mujeres de cuidadoras y protectoras que les es asignado por su identidad de género y rol de madre. Por otra parte, tal como muestran las entrevistas, al parecer existe la idea más o menos generalizada de que el hecho de que sean las mujeres quienes buscan las protege más del régimen represor: la pregunta, ¿por qué madres y no padres? remite a dos respuestas habituales: primero, que ser madre otorga más seguridad frente al terror ya que todos —inclusive los militares— respetan la maternidad como algo "sagrado"; además, que alguien (el hombre jefe de hogar) debe seguir trabajando para mantener a la familia.

Sin embargo, con respecto al primer argumento, si bien es cierto que la movilización de la imagen de madres en general protegió a las Madres de la Plaza de Mayo, esto no las hizo invulnerables. Como la trágica realidad lo mostró pocos meses después de la primera ronda de las Madres, su status materno no las protegió del todo: en diciembre de 1977 desaparecieron a un grupo de doce personas vinculadas a las Madres de la Plaza de Mayo, entre ellas a tres de sus fundadoras: Azucena Villaflor, Esther

Ballestrino y María Ponce de Bianco. También hay que recordar que no todas ellas eran amas de casa, como la imagen popular ha cristalizado para reproducir la imagen de rol de cuidadoras (Jelin, 2011, p. 562). Por su parte, en México, los asesinatos o desapariciones de madres que comienzan una búsqueda activa no han estado ausentes. Por ejemplo, en mayo del 2017 fue asesinada Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, madre de Karen Alejandra Salinas Rodríguez quien fue desaparecida en enero de 2014 en San Fernando, Tamaulipas (Hernández Castillo, 2017).

De esta manera, la imagen de defensa de mujeres-madres que se organizan para reclamar los derechos y el regreso de sus cercanos y cercanas en América latina, se palpa desde los primeros casos en que se denunció la desaparición forzada en el continente[39]. Desde Argentina (Madres de la Plaza de Mayo) hasta México (Rosario Ibarra de Piedra junto con el Comité Eureka), pasando por Uruguay (Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos), Colombia (Madres de la Candelaria), Guatemala (Grupo de Apoyo Mutuo), El Salvador (Comadres), etc., una imagen acompaña este dispositivo: las madres organizadas buscando a sus hijos e hijas. Tal como fue desarrollado líneas más arriba, si bien el sentimiento de pérdida por una persona desaparecida no es exclusivo de las madres, la imagen sí lo es. La performatividad[40] con la que las mujeres-madres se apropiaron de la plaza pública y

---

[39] Las desapariciones forzadas no son exclusivas de América Latina, evidentemente. Sin embargo, es gracias a la lucha que las mujeres han llevado avante la que la hecho visible, tal como lo señala Rainer Huhle: "El hecho de que las desapariciones forzadas estén actualmente relacionadas sobre todo con América Latina no se debe al número de seres humanos que allí fueron víctimas de este crimen, sino más bien a que, en este caso, las víctimas y sus allegados han analizado, en el seno de las organizaciones de derechos humanos, las características específicas de este tipo de crímenes. Han sido además capaces de organizar numerosos actos de protesta en todo el mundo, y de este modo han contribuido a que, al fin, el derecho internacional haya definido y proscrito esta técnica represiva especialmente pérfida de las "desapariciones forzadas" (Huhle, 2015, p. 275).

[40] El concepto de performatividad hace referencia al poder que tiene el discurso para *producir* eso que enuncia. Fue acuñado por John Austin en 1955 y el ejemplo clásico que se utiliza para ilustrarlo es cuando un juez enuncia a una pareja "les declaro marido y mujer", al enunciar esta frase el matrimonio

el papel simbólico —naturalizado— de los vínculos familiares, obligaron a la *re*negociación de los horizontes de sentido llevando a la creación de un nuevo sujeto político que responde a la ética del *cuidado de sí* —como recordatorio: la regulación consiente del poder sobre sí mismo y sobre los otros— la cual activa su agencia y les *res*ubjetiva a través de una o un otro que no está y cuya ausencia se materializa en su corporalidad, tal como será desarrollado en la siguiente sección.

1.6 El cuerpo ausentado en la niebla o su estadía en el reino del *Nibelheim*

"Aunque sea. Aunque sea en pedacitos que me lo devuelvan.
Aunque sea con gusanos".
Madre de desaparecido, Caravana por la paz; México septiembre del 2011[41].

En la modernidad occidental —caracterizada, entre otras, por la categorización en relaciones binarias—, la cual es hereditaria de la tradición judeocristiana, el cuerpo es percibido como una dualidad cuerpo-alma (la *res extensa* y la *res cogitans*[42])[43]. El

---

se instituye, el discurso lo produce (Austin, 1998). Posteriormente Judith Butler lo retoma y redefine como "ese poder reiterativo del discurso para producir los fenómenos que regula e impone" (Butler, 1998). Para un análisis de la performatividad en las Madres de la Plaza de Mayo ver: (V. Morales, 2015).

[41] La Nota completa puede consultarse en el siguiente vínculo:
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/aunque-sea-en-pedacitos-que-me-lo-devuelvan
(Consultado el 16 de junio del 2017).

[42] Por una análisis de la dualidad cuerpo y alma en Heidegger y Descartes, ver: (Bello, 2017). En relación con esta distinción en la tradición judeocristiana y la tradición filosófica occidental, ver: (Le Goff, 2003).

[43] En la actualidad, en la cosmogonía de muchos pueblos indígenas de las Américas se ha producido un sincretismo de esta distinción cuerpo-alma, muy posiblemente por la interrelación impuesta que tuvieron con el catolicismo. Sin embargo, a pesar de que cada cosmovisión tiene sus especificidades, el cuerpo humano sigue siendo concebido como el repositorio de la vida terrestre y de la materialidad concreta de la existencia. Para un análisis de esta integración de la dualidad cuerpo/alma en una

alma es intuida como incorpórea, excelsa, en contraposición al cuerpo que es caracterizado por su materialidad, por su componente carnal. El alma es entonces lo que anima la materia carnal: el cuerpo, como vivo y habitado (Veloso Roman, 2015, p. 34), la materia inanimada. En ese sentido, de acuerdo con Michel Foucault, desde finales del siglo XVIII, la justicia punitiva ya no se conformaba con aplicar puniciones al cuerpo, es decir, el encierro, la racionalización de los alimentos, a ocasionar un dolor físico —carnal—, sino que se dio un desplazamiento del objetivo: ya no sería más el cuerpo el objetivo del castigo, sino el *alma*. Es decir, el castigo debería estar enfocado al corazón, al pensamiento, a la voluntad, a las disposiciones (Foucault, 1989b, p. 26). En el caso de la desaparición forzada, tal como está desarrollado en los renglones anteriores, la punición física, el sometimiento directo se hace sobre la persona desaparecida, sobre su individualidad materializada en su cuerpo[44]. Sin embargo, la punición sobre el *alma* es colectiva al ser un mecanismo de terror que obnubila los sentidos, y en particular el sentido de la orientación a través de la *catástrofe de sentido,* sin siquiera tener que tocar el cuerpo. El cuerpo, la *materia habitada* (Veloso Roman, 2015, p. 34) se redobla en la colectividad. Es en ese sentido que García Selgas afirma que es necesario entonces distinguir esta doble naturaleza que habita el cuerpo: carne/alma pero también entidad social —es decir, símbolo primario del *yo* pero también de la comunidad— (García Selgas, 1994, p. 45).

---

tradición indígena tzeltal, ver: (Pitarch, 2000); para esta misma integración en los pueblos mayas y su reinterpretación de acuerdo con su cosmogonía, ver: (Pitarch, 2011). Para un análisis de los seres animados en la cosmovisión mesoamericana y su relación con el cuerpo humano, ver: (López Austin, 2009).

[44] Por ejemplo, la analogía de la sociedad como el cuerpo al que hay que doblegar o "curar" fue recurrente en varios episodios de represión dictatorial, como por ejemplo en la dictadura argentina: "El cuerpo social del país está contaminado por una enfermedad que corrompe sus entrañas y forma anticuerpos. Esos anticuerpos no deben ser considerados igual que los microbios. A medida que el gobierno controlará y destruirá la guerrilla, la acción de los anticuerpos va a desaparecer [...] se trata solamente de un cuerpo enfermo (Contraalmirante | César A Guzzeti, 3 de octubre de 1976)". (Verstraeten, 2009, p. 5. Traducción personal).

En palabras de Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí desaparecida el 7 de septiembre del 2012 en Orizaba, Veracruz; al momento de interpelar al gobernador Javier Duarte sobre la búsqueda de su hija y que éste la ignoró: "Fue muy fuerte porque yo le grité [al gobernador] que no me ignoraba a mí, sino que estaba ignorando a mi hija y mi hija no tiene en este momento voz para defenderse, por eso estaba yo ahí, exigiendo sus derechos de mi niña". (Entrevista, el 10 de febrero del 2017)[45].

De acuerdo con esto, hay por lo menos dos imágenes que se reproducen de manera constante en el movimiento contra las desapariciones forzadas en América latina: en primer lugar, como ya fue mencionado, la figura de la mujer-madre —la *valquiria*— organizada al frente de la búsqueda y de las acciones políticas y la segunda, la representación de una persona desaparecida a través de su corporeidad (Verstraeten, 2009)[46]. La representación de la búsqueda de la persona desaparecida toma así diferentes formas. La más fecunda es a través del dispositivo de la fotografía, la cual logró constituirse como un ícono de circulación internacional[47] (Da Silva Catela,

---

[45] El caso de la desaparición de Fernanda Rubí fue muy mediatizado cuando su madre, la señora Araceli Salcedo Jiménez, interpeló frente a videocámaras el 23 de octubre del 2015 al gobernador Javier Duarte de Ochoa y éste la ignoró, siguió caminando y se rió de ella en su cara (G. L. Díaz, 2015). La nota y el vídeo están disponibles en el siguiente enlace: http://www.proceso.com.mx/419324/exigen-disculpa-publica-a-duarte-por-trato-a-madre-de-joven-desaparecida (Consultado el 4 de abril del 2017).

[46] "Esta presencia incesante del cuerpo durante el testimonio, en el pasado y presente, es al mismo tiempo una presencia constante de la ausencia, de lo invisible, de lo inefable. El cuerpo es un signo y símbolo del afloramiento del no-sentido o de la ruptura que deja en el pensamiento el crimen de la 'desaparición forzada'". (Verstraeten, 2009, p. 9. Traducción personal).

[47] En Argentina, por ejemplo, la génesis del uso de este dispositivo puede situarse en 1983 cuando se realizaron las primeras marchas con fotografías-pancarta: "[Fue] una iniciativa del matrimonio de Santiago Mellibovsky y Matilde Saidler de Mellibovsky, padres de Graciela, una economista desaparecida en 1976. Estos dos activos militantes en el CELS [Centro de Estudios Legales y Sociales, organismo no gubernamental fundado en 1979] y en Madres de Plaza de Mayo tenían un pequeño estudio fotográfico, e idearon, acometieron y financiaron la titánica tarea de reunir las fotografías

2009; Gatti, 2015; Longoni, 2010). De hecho, a la figura de la mujer-madre que busca a sus hijos e hijas le acompaña constantemente el retrato de esta persona ausente[48]. Tradicionalmente el retrato aparece colgado del cuello o sostenido a la altura del pecho durante las protestas, la fotografía muestra así la singularidad de quien se llevaron[49]. Una existencia de este ser que marca un antes y un después. Una representación "fiel" de la imagen de la persona. Pero, más allá de esta denotación de particularidades de a quien le han sido negados todos los derechos (libertad, identidad, verdad, protección judicial, etc.), el acento está puesto en el cuerpo de quien no está. Es entonces el cuerpo desaparecido como receptáculo del alma, de la materialidad delimitada por la piel, en el que se concreta la ausencia. Aunque, la realidad corpórea

---

disponibles de desaparecidos, ampliarlas a un buen tamaño (70 x 50 cm. aprox.), y luego montarlas en cartón sobre una 'T' de madera. Ese sencillo procedimiento convertía las fotos en impactantes pancartas individuales." (Longoni, 2010, p. 45). El uso de este dispositivo se ha estandarizado en diferentes contextos para la búsqueda de desaparecidos. Para un análisis de la representación de los desaparecidos en obras artísticas fotográficas ver: (Diéguez Caballero, 2016; Gatti, 2006, p. 33-35, 2017).

[48] Henry Lefebvre en su obra *La presencia y la ausencia,* con respecto a la fotografía se puede afirmar que esta "imagen trata de tener acceso a la presencia. Quiere sor-prender o re-tomar una presencia perdida, o sus-pender la ausencia. De ahí su lado mágico que compensa el efecto destructor y autodestructor del verbo (apolíneo)" (Lefebvre, 1983, p. 257).

[49] Tal como señala Ana Longoni (2010, p. 44) al citar a Ludmila Catela a propósito del uso de los retratos de las Madres de la Plaza de Mayo: "la foto era una estrategia para individualizar al ser querido de cuyo destino nada se sabía [...] con la esperanza de que alguien lo reconociera y pudiera dar algún dato" (2009, p. 343). Sin embargo, a pesar de que el acceso a este dispositivo en esta época *moderna* —40 años después de la dictadura argentina—, pudiera parecer banal, entre las y los excluidos de los excluidos, quienes al final terminan siendo las y los más vulnerables ante estos aparatos desaparecedores, el acceso a este ícono de búsqueda y reconocimiento trasnacional sigue siendo marginal o inexistente. Por lo que la representación de la persona por la fotografía no termina siendo ni tan democrática, ni tan universal, aunque lo que representa —el dispositivo de la desaparición— sí lo sea: "Cuando el director de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos abrió la puerta de su oficina para recibirlos los encontró desesperados: los indígenas estaban cansados y sin dinero para seguir su viaje. Al entrar al despacho, el padre observó las fotos de niños desaparecidos que están colgadas en las paredes de la fundación; se tapó la cara y se echó a llorar. 'Ni siquiera tengo foto de mi hijo, ni documentos, ni nada, dijo el hombre en un limitado español'". (Romandía y Covarrubias, 2011).

se encarna también en lo etéreo, en lo inasequible, como por ejemplo señala Bárbara Ybarra en *Geografía del dolor* (González Islas, 2015): "Todos tenemos un olor. Los hijos siempre tienen un olor. Lo más angustiante es que se va perdiendo. Ese olor fue desapareciendo. Es esa ausencia"[50]. Por lo tanto, también la corporalidad se *encarna*[51] en lo concreto de las relaciones humanas, en la aprehensión de la realidad que pasa por los sentidos. Nuevamente, en la mitología germánica retomada por *El anillo de los nibelungos*, esta alteración de los sentidos por la desconcertación del alma ante la ausencia de los cuerpos, puede ser equiparada con el *Nibelheim* que es el lugar contrario al *Walhalla*, es decir, es el reino de la oscuridad y de las tinieblas, el cual está envuelto por niebla perpetua. Es la niebla del *Nacht und Nebel*, el lugar donde habitan los nibelungos, el lugar donde se crea el *Tarnhelm* que le permite a Albérico desaparecer. La niebla representa la obturación del sentido de la vista, de la profundidad y de la orientación, un sentimiento de extravío, de no encontrar el camino. Cuando se está inmerso en la niebla, se piensa estar en desolación, los puntos de referencia se difuminan. Representa el intersticio entre lo corpóreo y lo etéreo.

Esta representación de lo corpóreo y lo etéreo del cuerpo ausente se hace presente, además, en otras expresiones que no muestran tanto la singularidad de las personas —como puede hacerse a través de un retrato o una pintura—, sino de la materialidad de quien no está en general. Es decir, la ausencia se hace verbo: "[r]epresentar es sustituir a un ausente, darle presencia y confirmar su ausencia. Por una parte,

---

[50] "Bárbara Ybarra Martínez es originaria de Xalapa, Veracruz y mamá de Gabriela Arlene Benítez Ybarra, una joven de 17 años que desapareció el día 13 de junio del 2011. Gaby había salido a hacer ejercicio en un bosque cercano a su casa, Bárbara denunció la desaparición de su hija Gaby, pero el ministerio público ignoró el protocolo argumentando "violencia intrafamiliar". Tres meses después, el cuerpo de Gaby fue localizado en el mismo lugar donde ya se habían realizado diligencias de búsqueda". (González Islas, 2015). En: http://www.geografiadeldolor.com/espacio/veracruz/ (Consultado el 30 de mayo del 2017).

[51] En el sentido de una conformación dinámica de la corporalidad. Ver: (García Selgas, 1994).

transparencia de la representación: ella se borra ante lo que muestra. Gozo de su eficacia: es como si la cosa estuviera allí" (Enadeau, 1999, p. 142). Es el caso por ejemplo de las siluetas de la Argentina dictatorial. Efectivamente, casi a la par del dispositivo de la fotografía apareció la representación de la corporeidad ausente a través de siluetas de papel a escala humana que se pegaban en las ciudades, las cuales "buscaban ser una restitución de la imagen como sustitución del cuerpo ausentado" (Longoni, 2010, p. 48). El 21 de septiembre de 1983, a iniciativa de tres artistas — Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores, Guillermo Kexel— se llevó a cabo en Buenos Aires una acción colectiva denominada *El Siluetazo* (Longoni y Bruzzone, 2008), la cual consistió en representar los cuerpos de los desaparecidos a través de siluetas humanas que se pegaron en las plazas públicas. Partiendo de un llamado a un mitin, los manifestantes colocaban su propio cuerpo para que su contorno fuese dibujado reconstruyendo así el espacio vacío, la niebla, que deja esta ausencia (Amigo, 2008, p. 218). Es en este sentido que se puede sugerir que la representación de la persona que ha sido desaparecida toma forma de una anatomía de lo político: "Se trataría en él el 'cuerpo político' como conjunto de los elementos materiales y de las técnicas que sirven de armas, de relevos, de vías de comunicación y de puntos de apoyo a las relaciones de poder y de saber que cercan los cuerpos humanos y los dominan convirtiéndolos en objetos de saber" (Foucault, 1989b, p. 38).

Así, esta primera acción colectiva de representación de los cuerpos políticos ausentes, etéreos, impersonalizados, se reprodujo un sinnúmero de veces, al mismo tiempo que se diversificó. Por ejemplo, el 29 de marzo de 1990 las Madres de la Plaza de Mayo convocaron a una marcha con la misma idea de las siluetas a escala humana, pero esta vez de cartón blancas y en movimiento. El mensaje era claro: los desaparecidos están presentes, están marchando con nosotros. Pero más aún, nuevamente el mensaje visual potente era la vinculación dialéctica con esta mujer-madre que les busca: "[e]n primera fila se alternaban una silueta y una madre, el blanco del pañuelo se asociaba

inmediatamente con el blanco de las siluetas. Éstas, al estar hechas con un mismo molde, acentuaban la uniformidad" (Amigo, 2008, p. 237).

En ese aspecto, Alice Verstraeten sostiene con respecto a las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina: "Conscientes de esta alteración ahora presente en el pensamiento y en el lenguaje, las familias y los sobrevivientes se expresan a nombre de [...] [quienes no están], por ellos, confirmando esta idea de Valérie Joubert-Anghel (2002) según la cual toda sobrevivencia es desde ahora una 'libertad bajo palabra'" (Verstraeten, 2009, p. 5). Efectivamente, en los casos latinoamericanos en general —incluido el mexicano—, las mujeres-madres han asumido ese rol del reclamo del regreso de sus personas cercanas desaparecidas y el respecto de sus derechos en una relación dialéctica que pasa por la corporalidad de quienes no están, conformándose así como sujetos políticos, tal como será desarrollado en la siguiente sección.

1.7 La cabalgata de las valquirias

> "Yo parí a mi hijo físicamente, pero políticamente fui parida por él".
> Rosario Ibarra de Piedra [52]

La figura potente de la mujer-madre activa su agentividad[53] a través del reclamo por la restitución de los derechos de quienes no están, establece entonces una relación

---

[52] Rosario Ibarra: 40 años de búsqueda. En (Carrión, 2015a). Rosario Ibarra de Piedra, madre de Jesús Piedra Ibarra detenido-desaparecido el 18 de abril de 1975 en Monterrey Nuevo León. Rosario Ibarra se convirtió en un ícono de la búsqueda de los desaparecidos en México, fue candidata a la presidencia de la República Mexicana dos veces y nominada al premio Nobel de la Paz en al menos 3 ocasiones (ver capítulo IV, *infra*).

[53] Para los fines de este trabajo la agentividad es comprendida como "la relación causal entre una entidad agente, una acción intencionada y el estado de quien sufre los efectos de la acción" (De Cock y Maturana, 2014, p. 126) . En otras palabras, la entidad agente tiene un cierto control intencional sobre las acciones que produce —mediadas y limitadas por las relaciones de poder en interacción—, dichas acciones tienen efecto —deseado o no— en otras entidades agentes o en sí mismas y éstas modifican el

dialéctica que le permite hablar en *nombre de* para reclamar los derechos para otro u otra como si fueran para sí. Pero, para que ese proceso pueda darse es necesario primero renegociar sus subjetividades. En ese sentido, para Michel Foucault la *de*subjetivación es una forma de "desprendimiento de sí" que cumple una función emancipadora, la cual lleva a una experiencia límite del sujeto y activa un carácter transgresor en una "actitud límite" (Ramírez Zuluaga, 2015, p. 141). En otras palabras, la *de*subjetivación sería una manera de renegociar la *subjetivación* "impugnar y rebasar la idea de sujeto en tanto que categoría original" (*Idem*, p. 141). En *El sujeto y el poder* (Foucault, 1988) el autor sugiere el estudio de nuevas formas de resistencia al poder que sean más empíricas y que tengan como eje de análisis las diferentes estrategias que se ponen en marcha para confrontarlo, esto en el entendido de que las formas de ejercicio de poder encuentran siempre expresiones de resistencia: solamente donde hay libertad puede haber relaciones de poder[54]. En el mismo texto, Foucault hace un breve análisis sobre algunas de estas expresiones de resistencia en occidente y de algunas de sus características —que son transversales, es decir, que no se limitan a un solo país; que interrogan los efectos del poder sobre los cuerpos; que no buscan al enemigo principal sino al enemigo inmediato, etc.—. En ese sentido, lo que interesa aquí de este orden argumentativo son aquellas luchas que objetan el

---

estado *ex ante* de las subjetividades implicadas en la relación causal (Mariottini, 2013). Si bien a través de la agentividad individual no se pueden modificar las estructuras, dependiendo del posicionamiento de la entidad agente en éstas, su acción intencional sí puede tener un efecto al interior de ellas.

[54] "En referencia al primer sentido indicado, puede llamarse 'estrategia de poder' al conjunto de medios establecidos para hacer funcionar o para mantener un dispositivo de poder. También puede hablarse de estrategia propia de las relaciones de poder en la medida en que éstas constituyen modos de acción sobre la posible, eventual, supuesta acción de los otros. Los mecanismos puestos en práctica en las relaciones de poder pueden, entonces descifrarse en términos de 'estrategias'. Pero el punto más importante es obviamente la relación entre las relaciones de poder y las estrategias de enfrentamiento. Puesto que si bien es verdad que en el corazón de las relaciones de poder y como condición permanente de su existencia, hay una 'insumisión' y libertades esencialmente obstinadas, no hay una relación de poder sin resistencia, sin escapatoria o huida, sin un eventual regreso" (Foucault, 1988, p. 19).

estatus del individuo como eje central y que cuestionan lo que hace a los individuos "verdaderamente" individuales, es decir, los mecanismos que llevan al individuo a romper sus vínculos comunitarios, recogerse sobre sí mismo y que les fijan en una identidad de manera coercitiva (Foucault, 1988, p. 6). Es en este sentido en el cual el autor afirma que en la era actual son las luchas contra las formas de sujeción —contra la sujeción de la subjetividad— las que prevalecen cada vez más (Foucault, 1988, p. 7).

En otras palabras, una de las subjetividades actuales más presentes —impuesta por una visión de occidente— está arraigada en técnicas de individuación que pasan por el poder del Estado de manera totalizante y que crean una identidad individualizante (Foucault, 1988, p. 6). Es en ese aspecto que Michel Foucault, en un postulado normativo, afirma que la desubjetivación "tiene por función desprender al sujeto de sí mismo" (Foucault, 2001, p. 862)[55]. En el caso de las desapariciones forzadas, el estado de *liminalidad* que el cuerpo que no está produce en los círculos de socialización de la persona que ha sido desaparecida, al crear una "situación límite", esta *catástrofe de sentido*, lleva a una renegociación de la subjetividad[56]:

---

[55] De acuerdo con Luis Antonio Ramírez Zuluaga, durante la década de los 1960 Foucault otorgaba a la literatura una posición privilegiada ya que percibía en ella la posibilidad de cumplir una función subversiva donde el *sujeto era capaz de desaparecer.* En ese sentido, Ramírez Zuluaga transcribe una cita de Foucault cuando reflexiona sobre el principio de la impugnación que Michel Blanchot puso sobre la mesa: "Esta filosofía de la afirmación no positiva, es decir, de la prueba del límite, es la que, según creo, Blanchot definió como principio de contestación (*contestation).* No se trata de una negación generalizada, sino de una afirmación que no afirma nada: en plena ruptura de transitividad. La contestación no es el esfuerzo del pensamiento por negar unas existencias o unos valores, es el gesto que conduce a cada uno de ellos a sus límites, y por ello al límite en que se cumple la decisión ontológica: contestar es ir hasta el corazón vacío donde el ser alcanza su límite y donde el límite define el ser" (Foucault, 1999, p. 168-169. En itálicas en el texto original. En Ramírez Zuluaga, 2015, p. 142).

[56] Ver por ejemplo: (Irazuzta, 2017, p. 142; Jelin, 2011).

> La desubjetivación sería así otro modo diferente de subjetivación en la cual la resistencia al poder partiría de aquel nodo del poder que es el sujeto mismo, con la búsqueda propia de su variación, de su discontinuidad, y con el fin de crear otras formas de subjetivación y de relación con otros (Ramírez Zuluaga, 2015, p. 144).

Lo que se afirma aquí entonces es que la experiencia de la desaparición forzada ha llevado a algunos agentes a la renegociación de los marcos de sentido característicos de la modernidad que construyen a un sujeto a partir de su yo individual. Efectivamente, en los círculos cercanos de quien desaparece, el carácter transgresor del reclamo público —político— del regreso de los cuerpos ausentes ha tenido como efecto inesperado —para sus perpetradores, claro está— la constitución de un nuevo sujeto político que se construye a partir de una relación dialéctica con esa o ese otro que no puede activar la agentividad por sí misma o por sí mismo. La activación de este "carácter trasgresor" que significa el reclamo de los cuerpos en el espacio público, en Latinoamérica, en particular, parte de la fuerte construcción identitaria de la relación madre-hijo(a) que se *encarna* (García Selgas, 1994; Irazuzta, 2017, p. 155) en la desubjetivación de un ente individual que recae en la figura de la mujer-madre.

Efectivamente, tal como fue mencionado renglones más arriba, la socialización de quienes son identificadas con el género femenino se asocia a una ética del *cuidado de sí* —la reflexividad del poder sobre sí y sobre los otros—, pero sobre todo en su dimensión de la ética del cuidado de *los otros* —ética del *care* (Gilligan, 2000)—, la cual se potencia en su rol de madres (Lagarde, 2003). Es en ese sentido que la socialización de la que han sido objeto las mujeres hace de ellas —nosotras— agentes más proclives al "desprendimiento de sí" que requiere la desubjetivación. Es decir, la capacidad de desprenderse de una construcción del yo individual para reinterpretarlo en una función colectiva. Pero aún más, efecto de la socialización, la condición de cuidadoras gratifica (Idem, 2003, p. 2) —o por lo menos hace menos pesada la carga— a un número importante de mujeres afectiva y simbólicamente, es decir, dota

de sentido a la acción. Así, tal como ha sido mencionado renglones más arriba, la imagen de la búsqueda de quienes están desaparecidos recae en la performatividad de la figura de la mujer-madre[57] —en la activación de su agentividad—[58], mismo si —se insiste— el posicionamiento público y político no es exclusivo de ellas, pero sí el impacto de su performatividad[59]. Ya sea porque la búsqueda activa les ayude a lidiar con la *pérdida ambigua* o por el rol asumido de manera activa del *cuidado sí* —que por definición implica el cuidado de los otros—, asistimos entonces a la emersión de una sujeta individual que se desubjetiva para reemerger en una relación dialéctica con su progenie desaparecida.

Así, esta renegociación de la subjetividad, de algo que parece una pena individual se entrelaza con el descubrimiento de otros y otras que están en la misma situación. En

---

[57] De acuerdo con Elizabeth Jelin: "Si cerramos los ojos, hay una imagen que domina la escena "humana" de las dictaduras: las Madres de Plaza de Mayo y otras mujeres, Familiares, Abuelas, Viudas, Comadres de detenidos-desaparecidos o de presos políticos, reclamando y buscando a sus hijos (en la imagen, casi siempre varones), a sus maridos o compañeros, a sus nietos. Del otro lado, los militares, desplegando de lleno su masculinidad. Hay una segunda imagen que aparece, específicamente para el caso argentino: prisioneras mujeres jóvenes embarazadas, pariendo en condiciones de detención clandestina, para luego desaparecer. La imagen se acompaña con la incógnita sobre el paradero de los chicos secuestrados, robados y/o entregados, a quienes luego se les dará identidades falsas. De nuevo, del otro lado están los machos militares. El contraste de género en estas imágenes es claro, y se repite permanentemente en una diversidad de contextos. Los símbolos del dolor y el sufrimiento personalizados tienden a corporizarse en mujeres, mientras que los mecanismos institucionales parecen 'pertenecer' a los hombres" (Jelin, 2002, p. 99).

[58] De acuerdo con Ignacio Irazuzta: "El desaparecido produce agencia en quienes lo buscan. Una agencia que se estructura en la quiebra, en la catástrofe individual y social, en una pérdida fundamental del sentido de la existencia y que activa a los allegados que buscan a la persona desaparecida en la gestión de nuevas formas asociativas". (Irazuzta, 2017, p. 142).

[59] Mismo si los colectivos de familiares están principalmente compuestos por mujeres, en la búsqueda de las personas que han sido desaparecidas, además de las y los familiares, intervienen otros actores como son organismos de defensa de derechos humanos, periodistas, abogados, que se involucran de igual manera en el proceso (ver capítulos IV y V, *infra*). Al parecer, el mismo escenario se presentaba en Argentina de la década de 1970. Ver: (Jelin, 2011).

el caso de las Madres de la Plaza de Mayo, el momento fundador se sitúa el sábado 30 de abril de 1977 cuando un grupo de 14 madres que se habían ido encontrando en la búsqueda de sus hijos en las comisarías, deciden ir a la *Casa Rosada* a preguntarle al presidente Videla dónde estaban sus hijos desaparecidos (Cubero, 2001, p. 19). En el caso mexicano, se pueden situar diferentes momentos fundadores dependiendo del momento histórico y la región (ver capítulo 4 y 5, *infra*), pero se puede afirmar que el surgimiento de las mujeres-madres como sujeto político también se da en el contexto de la convocación a la acción de diferentes subjetividades individuales que buscan fusionarse en una misma interpelación colectiva: ¿Dónde están los desaparecidos? Así, esta *conciencia de ruptura*[60] llevó a la creación de alianzas estratégicas —coyunturales o más o menos permanentes—, de lo que Retamozo (2011) llama una subjetividad colectiva, la imagen de la cabalgata de las *Valquirias*.

Efectivamente, en el entendido de que las subjetivaciones individuales están en constante proceso de renegociación puesto que responden a una construcción histórico-política "que tiene su origen en la experiencia colectiva, en la apropiación de la historia, la elaboración de las demandas, acciones, proyectos e identidades" (Retamozo, 2011a, p. 85); la constitución de un sujeto político sería la subjetivación individual coarticulada con la *subjetividad colectiva* entendida ésta como los "códigos de sentidos, imaginarios, formas de sentir y representaciones que se articulan en momentos determinados para hacer significativa una situación" (Retamozo, 2011a, p. 61). Es así que surge la performatividad de la imagen de la

---

[60] De acuerdo con Martínez Pineda: "La conciencia de ruptura implica voluntad para ubicarse en el mundo, capacidad de reactuar, de reconocer un nuevo ángulo desde el cual leer la realidad y orientar las nuevas acciones. Implica también reconocer el valor de la utopía como condición para esa reactuación sobre las circunstancias actuales, y esto hace parte de una conciencia participativa porque implica un rompimiento con la racionalidad analítico-instrumental que reproducen los modos de subjetivación no participativos y partidarios de una subjetividad débil, deformada y funcional respecto a la lógica del poder hegemónico" (Martínez Pineda, 2006, p. 129).

mujer-madre que se enfrenta en la arena pública al poder del Estado autoritario, al que confronta, lo interpela para reclamar el regreso de los cuerpos, mismo si esta mujer-madre está consciente de los efectos que puede tener sobre ella o sobre sus seres cercanos el poder desaparecedor al cual *decide* enfrentarse.

Conclusión

La desaparición forzada de personas es un mecanismo planeado y sofisticado que surgió con el plan *Noche y Niebla* y que posteriormente fue retomado y expandido por América Latina por la Escuela Francesa Antisubversiva. Éste tiene dos objetivos principales: despojar al sujeto-sujetado de su subjetividad y de todos sus horizontes de sentido y causar terror en los círculos cercanos de quien desaparece con el objetivo de llevar a la inamovilidad social y desarticular la cohesión social. Paradójicamente, esta experiencia límite que representa la desaparición forzada hizo emerger un sujeto político simbólicamente potente, el de la mujer madre en busca de su progenitura desaparecida, al pasar del dolor privado que causa esta ausencia que se hace siempre presente, al reclamo público del regreso de los cuerpos ausentes. Sin embargo, este paso del espacio privado a la arena pública, se hizo a través de la reproducción de los roles de género que les son asociados a las mujeres: los cuidados. Estas mujeres-madres movilizaron esta figura para justificar y proteger su acción política: estaban cumpliendo con el rol que socialmente se le ha asignado a la maternidad al reclamar, incluso públicamente, el regreso de sus hijos desaparecidos.

Por otra parte, otra de las especificidades de este sujeto político es que el reclamo público del regreso de los cuerpos ausentados y de la restitución de sus derechos, se estableció a partir de una relación dialéctica con la corporalidad de la persona desaparecida que se expresa al hablar en *nombre de*. Tal como será desarrollado en capítulos posteriores, en México esta especificidad se mantendrá a lo largo de los años, incluso cuando el dispositivo fue reapropiado por otros actores y los motivos de la desaparición forzada se adaptaron a nuevos contextos.

En ese sentido, fue analizado el proceso de *de*subjetivación, es decir, de pérdida de los horizontes de sentido que han sido introyectados en el proceso de *subjetivación* (interiorización de las *tecnologías del yo* y del *cuidado de sí*), pero en este caso, la

desubjetivación sería el desprendimiento, la emancipación de estos mecanismos que han sido interiorizados para una transformación de sí (Ramírez Zuluaga, 2015). Efectivamente, ante la *experiencia límite* que representa la desaparición forzada, este desprendimiento ocurre en los círculos cercanos de la persona que es desaparecida, en particular en quienes deciden llevar su reclamo de regreso de las personas ausentes al terreno de lo político. En virtud de ello, quienes deciden pasar del sufrimiento privado al reclamo público del regreso de las personas que les han sido desaparecidas, desde la teoría de Michel Foucault (1988), podríamos evocar un proceso de *re*subjetivación —en los términos de Gabriel Gatti (2016): en clave de *re* (*re*hacer, *re*construir, etc.)—. Es decir, ese desprendimiento de la subjetividad individual para coarticularse en una identidad colectiva, en la cual comparten nuevos códigos como resultado de nuevas maneras de aprehender el mundo a raíz de esta *experiencia límite* y que les son propios únicamente a las personas que han pasado por un proceso similar.

De esta manera, en este primer capítulo analicé lo que es la desaparición forzada de personas, desde el origen del mecanismo hasta cómo opera y cuáles son sus objetivos y consecuencias y sobre el sujeto político particular que surgió para hacerle frente: las mujeres madres. En los siguientes dos capítulos el objetivo será observar cómo se dio la trayectoria de la desaparición forzada por América Latina como mecanismo de contrainsurgencia y cómo es que llegó a México. Se tratará de analizar también cómo la implementación de la desaparición forzada formó parte de la investida de contrainsurgencia a nivel continental en el marco de la Guerra Fría y cómo una vez implementada, ésta adquirió especificidades vinculadas a los contextos sociales, espaciales y temporalidades particulares en las que se hizo uso de ella, así como se modificaron los motivos por los que se desaparece a las personas y la identidad de los perpetradores.

CAPÍTULO II

TRAYECTORIAS DE LA DESAPARICIÓN: EVOLUCIÓN DE LOS ACTORES, DE LOS DISCURSOS Y DE LOS MOTIVOS DE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO

Introducción

Dado que parto de que los sujetos políticos son "objetos epocales" (Retamozo, 2011b), que se configuran de relaciones conflictuales con quienes detentan el poder, situadas en un tiempo y espacio específicos, el propósito de los siguientes dos capítulos es analizar cuáles son los tipos de desaparición de personas que se han gestado en los últimos 40 años en México. Esto con el objetivo de acercarnos a sus características específicas para poder analizar en los capítulos posteriores, los tipos de sujetos políticos que se conforman en torno a esta trayectoria. Así, este segundo capítulo tiene un doble objetivo. En primer lugar se trata de mostrar cómo la desaparición forzada formó parte de una estrategia continental —meditada y planeada— para contrarrestar a los grupos *subversivos* que emergieron en el contexto de la Guerra Fría en el continente americano y de la que México fue parte. En segundo lugar, se trata de mostrar que este dispositivo de apropiación de los cuerpos, una vez que se instituyó como parte de una estrategia de Estado, *tomó vida propia* y fue reapropiado por otros actores que sin necesariamente buscar neutralizar a los enemigos políticos, han recurrido a la desaparición de personas con el mismo proceso.

Es decir, se da una ampliación de esta categoría en la que en un primer momento, en el marco de la llamada Guerra Sucia[61], se contemplaba únicamente a quienes eran directamente sustraídos por agentes del Estado —los *detenidos-desaparecidos*—, al de *desaparición forzada* en el sentido amplio de su acepción. Es decir, de acuerdo a la definición contenida en la *Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desaparición forzadas* (Asamblea General ONU, 2006) —de la que México es signatario— para considerar que se trata de una desaparición forzada no necesariamente se requiere que ésta sea efectuada por agentes del Estado directamente, sino basta con que se realice con su autorización, apoyo y/o aquiescencia (*Ibidem*, 2006).

En función de estos objetivos, en la primera parte del capítulo la intención es entonces reflexionar sobre cuáles fueron las condiciones políticas que favorecieron el surgimiento de las doctrinas de *Seguridad Nacional y Hemisférica*, la *Doctrina de Contrainsurgencia* y la *Doctrina del Enemigo Interno,* las cuales tuvieron repercusiones directas en la aplicación de la desaparición forzada en el marco de las guerras sucias en América Latina y en la formación de los perpretadores. Efectivamente, la desaparición forzada fue enseñada por diferentes escuelas de

[61] Este término es muy controvertido. Si bien es cierto que es ampliamente utilizado en la historiografía y que denota la intervención de grupos especiales del ejército y grupos paramilitares en un entramado de operaciones que comprende acciones legales e ilegales para neutralizar a oponentes políticos (Calveiro, 2010), en México diferentes autores y autoras prefieren llamarle *terrorismo de Estado*. Esto debido a que el término de *Guerra Sucia* relativiza la intención y la responsabilidad del gobierno ejecutante. Lo que se discute es que la palabra guerra designa al menos dos partes en disputa y no una acción unilateral. En ese sentido, durante este periodo, la acción represora del Estado se dirigió no solamente a los combatientes, sino también a parientes, a bases de apoyo y a personas totalmente ajenas al conflicto y por lo tanto no incluye únicamente a las partes beligerantes. Por lo mismo, se considera que el término de *terrorismo de Estado* refleja de mejor manera la acción del Estado en contra de la población a la cual buscaba amedrentar para desarticular a las bases de apoyo de quienes eran considerados enemigos del Estado debido a que luchaban por modificar las condiciones estructurales de pobreza y marginación (Radilla Martínez y Rangel Lozano, 2012, p. 18). En este texto académico yo decanto por el término más utilizado en la historiografía, el de Guerra Sucia, lo que no quiere decir que no adscribo a la reflexión de Andrea Radilla Martínez[†] y Claudia Rangel Lozano.

pensamiento militar principalmente estadounidense, pero éstos no actuaron solos, la *escuela francesa antisubversiva* jugó un rol mayor en su reproducción a lo largo del continente y después cada país con actores específicos contribuyó a su diseminación.

En la segunda parte está desarrollado el segundo objetivo de este capítulo. Este es que, una vez que el dispositivo de la desaparición forzada comenzó a ejecutarse en México, éste se adaptó a las características propias del país. En un primer momento se implementó con la finalidad de desarticular movimientos *subversivos* en el marco de la Guerra Sucia, para luego ser utilizada por otros actores, obedeciendo a objetivos diversos. De manera analítica se identifican así tres periodos históricos donde ha estado presente la desaparición forzada: la Guerra Sucia, la década de los años 1990 conocida como "la década de la transición a la democracia" y finalmente un tercer periodo que se da entre 2006 y 2018 llamado el de la "alternancia política" —en este segundo capítulo serán únicamente abordados los dos primeros, para en el tercer capítulo ahondar en el período actual—.

Los cohortes que hago en esta periodización, como todos los cohortes, son arbitrarios y responden a una voluntad de categorización analítica. Como se sabe, en la realidad los procesos no son lineales e incluso los fenómenos pueden disociarse o traslaparse. En cuanto a las desapariciones existe un continuum que no es tan fácil de disociar[62]. A lo largo de las décadas posteriores a la Guerra Sucia, algunos agentes del Estado federales o estatales, o poderes fácticos vinculados al Estado como los caciquiles, recurrieron a la desaparición de personas por motivos personales, políticos o económicos. Como por ejemplo, los cuerpos encontrados en la Procuraduría de

---

[62] De acuerdo con Pilar Calveiro (2018), entre 1979 y el año 2000 la incidencia de desaparición forzada, que ha sido documentada, descendió a una incidencia de menos de diez casos por año (Calveiro Garrido, 2018).

Justicia del Distrito Federal luego del sismo de 1985 (ver *infra*), o del luchador social por el derecho de acceso a la tierra Tomás Pérez Franco, quien fue desaparecido el 1^{ero} de mayo de 1990 en las inmediaciones de las comunidades de Ameluca e Ignacio Zaragoza, en el estado de Puebla (Pérez Rodríguez, 2017). También se puede citar, entre otros, el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo quien, hacia la segunda mitad de la década de 1990, mientras era jefe de la 5ta Zona Militar cometía desapariciones selectivas de personas en el norte del país, en particular en Tijuana, en connivencia con líderes del cártel de Ciudad Juárez en el marco de la disputa por el territorio que mantenían con el cártel de los Arellano Félix (Robledo Silvestre, 2017, p. 96). Sin embargo, a pesar de estos eventos —que no se pueden considerar aislados, ni menores por la gravedad que implica desaparecer a cualquier persona— considero que la periodización establecida permite dar cuenta de las tendencias de este fenómeno.

PRIMERA PARTE: *LAS CONDICIONES SOCIALES DE LA CIRCULACIÓN INTERNACIONAL*[63] DEL TERROR. LA EXPANSIÓN DE LA DESAPARICIÓN FORZADA POR AMÉRICA LATINA

En la primera ópera de la tetralogía de Wagner (1965), *Fafner* y *Fassolt* son dos gigantes, hermanos, que representan el trabajo obrero. Son contratados por el dios *Wotan* para construir el *Walhalla*, la morada de los dioses. Después de varias negociaciones al no obtener el pago inicial convenido por su trabajo, se apoderan del oro preciado del Ring, entre ello, del anillo y del yelmo mágico de Albérico. Estos dos últimos son objeto de una maldición que incluye el miedo a la desposesión. Con la ayuda del yelmo mágico y movido por la sed de avaricia y envidia, *Fafner* se convierte en dragón y asesina a *Fassolt* —fratricidio—, para poseer él solo el oro. Tras el asesinato la maldición se encarna en él y se transforma de manera permanente en una bestia horrible, feroz y con cola de serpiente. La secreción que exhala de su boca es un veneno ponzoñoso que cuando toca un ser vivo le corroe hasta la sangre y los huesos. Es un arma letal.

---

[63] Pierre Bourdieu tituló una conferencia que dictó en la Universidad de Friburgo el 30 de octubre de 1989, *Les conditions sociales de la circulation internationale des idées* (*Las condiciones sociales de la circulación internacional de las ideas*) (2002). En ella analiza las condiciones sociales de la circulación internacional de textos o como él mismo lo dijo, la "importación intelectual" de éstos. Uno de sus argumentos es que los receptores de las obras "al estar ellos mismos insertos en un campo de producción diferente, reinterpretan los textos en función de su propia posición en el campo de recepción" (Bourdieu, 2002, p. 3). Es en ese sentido que retomo su título para esta primera parte del segundo capítulo. Tal como será desarrollado líneas más adelante, las Juntas Militares y otros organismos de gobiernos dictatoriales y autoritarios en América Latina importaron, entre otros, la técnica de desaparición forzada como mecanismo de represión, pero precisamente sus posicionamientos en el campo, sus mundos posibles de reproducción, los niveles de impunidad que variaban de un país a otro, entre otros factores, determinaron las condiciones sociales de su circulación internacional e hicieron que el mecanismo haya sido reapropiado de manera diferente en cada contexto. Para un análisis comparado de cómo operó el mecanismo en diferentes países en América Latina ver: (Frey, 2009 ; Molina Theissen, s.f.).

Así, en esta primera parte del capítulo el objetivo es comprender cómo es que se formaron las racionalidades militares, los *fafners*, que implementaron a nivel continental las técnicas de contrainsurgencia, entre ellas la desaparición forzada y la tortura. En un primer momento, se trata de analizar cómo se hizo el viaje de la Guerra de Indochina hasta Argentina y de ahí a todo el continente. Posteriormente se observan las racionalidades militares que estaban detrás de las nuevas perspectivas de intervención de la guerra no convencional (guerrilla y acción paramilitar), de la guerra contra-insurreccional y la guerra psicológica —los tres componentes de la "guerra especial"—. Finalmente, el análisis se centra en la Escuela de las Américas, la cual fue considerada el culmen de la implementación de estas técnicas formando entre sus filas a célebres dictadores. También, muchos de sus egresados estuvieron detrás de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad en prácticamente todo el continente. Este recorrido genealógico de la primera parte, permitirá comprender mejor en la segunda parte del capítulo cómo es que estas técnicas llegaron a México y fueron implementadas en el marco de las guerras sucias de América Latina y que, a lo largo de los años, fueron reapropiadas por otros actores, otras racionalidades y otros objetivos.

2.1 La socialización de las doctrinas militares en América Latina o del cómo gobernar por el terror

A Epifanio Avilés Rojas lo desaparecieron en Coyuca de Catalán, Guerrero, el 18 de mayo de 1969. Con su desaparición, la primera de la que se tiene registro en México, el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) implementó al interior de las fronteras mexicanas lo que más tarde se conocería en todo el subcontinente latinoamericano como desaparición forzada, una de las tácticas principales de la guerra antisubversiva. Desde entonces nada se sabe de Epifanio Avilés Rojas, pero sí del aparato represor que ordenó su captura y los motivos por los que se lo llevaron.

En el marco de la Guerra Fría e inspirados en los ideales de la revolución cubana, diferentes grupos subversivos contra los gobiernos autoritarios y/o dictatoriales de Latinoamérica vieron la luz. Las potencias occidentales influenciadas por la hegemonía de Estados Unidos, asumieron que el *fantasma* también *recorría América* y se autonombraron garantes de la liberación de los pueblos de la "amenaza del comunismo" a través del establecimiento de una serie de mecanismos para combatirlo. Estos mecanismos serían implementados en toda América Latina y marcarían la instauración de la política del terror como control de la población en el subcontinente, entre ellos, la *Doctrina de Seguridad Nacional*, la *Doctrina Antisubversiva*, la *Doctrina del Enemigo Interno*, etc. La historiografía destaca como el inicio de esta nueva era en defensa continental la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual tendría como *mito fundacional*[64] el discurso del presidente estadounidense Harry S. Truman (1945-1953) de marzo de 1947.

> Uno de los objetivos fundamentales de la política exterior de Estados Unidos es la creación de condiciones en las cuales nosotros y otras naciones podamos forjar una manera de vivir libre de coacción. [...] Sin embargo, no alcanzaremos nuestros objetivos a menos que estemos dispuestos a ayudar a los pueblos libres a preservar sus instituciones libres y su integridad nacional frente a los movimientos agresivos que tratan de imponerles regímenes totalitarios. Esto es simplemente reconocer con franqueza que los regímenes totalitarios impuestos a los pueblos libres, por agresiones directas o indirectas,

---

[64] Utilizo el término de *mito fundacional* porque efectivamente a partir de esta fecha en la bibliografía se marca un antes y un después en las políticas de defensa —o ataque— militar en el marco de la Guerra Fría. En sociología y antropología se entiende como mito fundacional un relato que tiene como función cohesionar a la colectividad. Éste dota de un relato común que legitima el orden y la permanencia que el mismo relato establece (Ver: Campbell, 1991; Olave Arias, 2013). En este caso, el discurso de Harry S. Truman es un *actante* que se interpreta como el mito fundacional que marca un antes y un después en la Doctrina de Seguridad Nacional. Sin embargo, la Doctrina de Seguridad Nacional se construyó a partir de una serie de acontecimientos desordenados que se concatenaron alrededor de una política que se fue estructurando al mismo tiempo que se construía la hegemonía estadounidense. Fue el mismo caso con los discursos posteriores, como el de Richard M. Nixon que supuestamente marca un giro en las políticas de seguridad continentales.

> socavan los fundamentos de la paz internacional y, por tanto, la seguridad de los Estados Unidos. [...] Creo que la política de los Estados Unidos debe ayudar a los pueblos que luchan contra las minorías armadas o contra las presiones exteriores que intentan sojuzgarlos. Creo que debemos ayudar a los pueblos libres a cumplir sus propios destinos de la forma que ellos mismos decidan. Creo que nuestra ayuda debe ser principalmente económica y financiera, que es esencial para la estabilidad económica y política. [...] Ayudando a las naciones libres e independientes a conservar su independencia, Estados Unidos habrá de poner en práctica los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
>
> [...] Si vacilamos en nuestra misión de conducción podemos hacer peligrar la paz del mundo y, sin lugar a dudas arriesgaremos el bienestar de nuestra propia nación. (Traducción de la versión estenográfica del discurso del presidente Harry S. Truman, 12 de marzo de 1947)[65].

Independientemente del análisis que podría hacerse del discurso, el cual construye al socialismo como antítesis de los "valores" de la democracia liberal, de los cuales Estados Unidos dice ser el garante, —pero que en los hechos, al menos en Latinoamérica, los gobiernos que se instauraron con el apoyo de Estados Unidos durante la Guerra Fría fueron dictatoriales y/o autoritarios—, este discurso marca el paso a una serie de medidas que tuvieron como objetivo establecer mecanismos de cooperación continental en materia de seguridad, en particular de la Doctrina de Seguridad Nacional. Ésta tenía como objetivo la intervención directa estadounidense y de las potencias occidentales en territorios soberanos para garantizar la seguridad al interior de las fronteras de sus países aliados[66], en particular de los menos potentes

---

[65] La traducción integral de la versión estenográfica del discurso está disponible en el siguiente vínculo. (Consultado el 21 de agosto del 2017): http://historialimagen.blogspot.ca/2007/06/guerra-fria-fase-1-1947-1953.html-.

[66] Incluso al interior de las fronteras de Estados Unidos esta "cacería de brujas" se materializó en lo que se conoce como el "macartismo". Entre 1950 y 1956, el senador republicano Joseph McCarthy, como presidente del senado, encabezó una campaña sin fundamento contra diferentes personajes públicos (escritores, funcionarios, de medios de comunicación, del medio del espectáculo), los cuales fueron "acusados" de ser simpatizantes del comunismo y/o de colaborar con el espionaje soviético. En esta serie de acusaciones se violentó el debido proceso, la presunción de inocencia, etc. Ver: (Schrecker, 1998).

militarmente hablando. Sin embargo, en la coyuntura de la derrota que este país estaba experimentando en la Guerra de Vietnam (1955-1975), los decidores políticos contemplaron que la Doctrina de Seguridad Nacional, tal como había sido concebida, estaba alcanzando sus límites y consideraron que un cambio de estrategia era indispensable. Así, el *mito fundacional* que marca el giro discursivo hacia la *lucha contra el enemigo interno* en el continente —mismo si ya se enseñaba desde antes en la Escuela de Guerra de Buenas Aires, ver *infra*— es el de Richard Milhous Nixon (1969-1974) del 3 de noviembre de 1969, conocido como la *Doctrina Nixon* o *vietnamización.*

> El plan de vietnamización fue emprendido por el Secretario Laird durante su visita a Vietnam en marzo. En este plan, ordené primero un incremento sustancial en el entrenamiento y el equipamiento de las fuerzas vietnamitas. En julio, durante mi visita a Vietnam, cambié las órdenes del General Abram, para que fueran consistentes con los objetivos de nuestras políticas. Bajo estas nuevas órdenes, la misión principal de nuestras tropas será preparar a las fuerzas survietnamitas para asumir la responsabilidad total de la seguridad de Vietnam del Sur [...].
> Los survietnamitas continuarán ganando fuerza. Como resultado, ellos tendrán la capacidad de asumir [sus propias] responsabilidades militares. [...].
> [...] Como resultado de esto, nuestro calendario de retirada es más optimista ahora que cuando fue planteado por primera vez. (Traducción de la versión estenográfica del discurso televisado del presidente Richard Milhous Nixon del 3 noviembre de 1969)[67].

---

[67] A este discurso se le llamó también eufemísticamente de la *Mayoría Silenciosa* (*Silent Mayority*) debido a que a pesar de que había grandes acciones colectivas de la población para manifestar su oposición a la guerra, el presidente Nixon aseguró que una mayoría de estadounidenses la apoyaba. La traducción de la versión estenográfica del discurso está disponible en el siguiente vínculo. (Consultado el 3 de agosto del 2017):
https://es.wikisource.org/wiki/Discurso_de_Nixon_de_3_de_noviembre_de_1969. El vídeo de la emisión televisiva del discurso en el siguiente: (Nixon, 1969) (Consultado el 3 de agosto del 2017): https://www.c-span.org/video/?153819-1/silent-majority-speech.

De este discurso se puede resaltar que la política estaría orientada a que cada Estado asumiera la responsabilidad de su propia defensa nacional y para lograrlo se establecerían tres principales estrategias de intervención estadounidense frente a sus aliados: 1) este país mantendría los compromisos previamente establecidos; 2) proveerían de protección a sus aliados o a una nación cuya supervivencia consideraran esencial para la propia seguridad de Estados Unidos, si una amenaza nuclear fuera inminente y; 3) les proporcionarían asistencia militar y económica, pero sobre todo, Estados Unidos asumiría la responsabilidad de capacitar a los cuerpos militares de sus aliados para que éstos fueran capaces de asumir su propia defensa frente al enemigo.

La aplicación de estas estrategias tuvo como resultado la generalización de la *vietnamización* como táctica de intervención en diferentes áreas geográficas, entre ellas América Latina. Es decir, se favoreció por primera vez una estrategia de defensa multipolar a través del desarrollo de circunscripciones de poder regionales que tenían por objetivo reforzar las capacidades del personal militar de los países aliados (Ruiz Tovar, 2011). En ese sentido es de destacar que al menos por segunda vez en la historia, la aguerrida defensa que la población de la península de Indochina hizo de su territorio —la primera en la guerra contra los franceses (1945-1954), la segunda contra los estadounidenses (1955-1975)— empujó a dos grandes potencias a innovar en sus técnicas de intervención militar cuyas consecuencias directas se experimentaron en América Latina. Los franceses con las directivas de la *Guerra Moderna* para el combate a las guerrillas, los estadounidenses con la *vietnamización* y el *refuerzo de capacidades* del personal militar de sus aliados. Es así como se implementaron y posteriormente se reforzaron dos principales doctrinas a nivel continental, la primera de origen francés llamada *Doctrina Antisubversiva* y la segunda de origen estadounidense llamada *Doctrina de Seguridad Hemisférica*.

Posteriormente, durante el periodo del presidente Ronald Wilson Reagan (1981 – 1989) las políticas de seguridad hemisféricas se reforzaron. Su régimen estaba resuelto a acabar con la "amenaza" del comunismo en el continente. Durante su campaña presidencial le fueron entregados los primeros Documentos de Santa Fe, Santa Fe I, los cuales fueron redactados por un grupo de intelectuales cercanos al partido republicano y a la Heritage Foundation, conocido como el Comité de Santa Fe [68] . Estos documentos tenían por objetivo orientar la política extranjera estadounidense en diferentes ámbitos (económicos, sociales, culturales, etc.) y consistían en una serie de recomendaciones de corte neoliberal y de seguridad militar dirigidas al presidente —las cuales, junto con otras iniciativas similares, contribuyeron al posterior nacimiento de los programas de ajuste estructural y del *Consensus de Washington*—.

En materia de seguridad, entre otras destacan: Revitalizar el sistema de seguridad hemisférica; estimular acuerdos de seguridad regional; reactivar las "tradicionales" vinculaciones militares ofreciendo entrenamiento militar y ayuda a las fuerzas armadas del continente americano; colocar al Canal de Panamá bajo la protección de la Junta Interamericana de Defensa, para garantizar que los países del continente

---

[68] La introducción a los primeros documentos la hizo Ronald F. Docksai, presidente del Consejo para la Seguridad Interamericana. Entre los miembros del equipo destaca Jeane Kirkpatrick, quien pertenecía a un grupo autodenominado "neoconservadores" y era una persona de confianza de Reagan. De hecho, fue delegada del gobierno estadounidense ante la ONU durante su gobierno. Kirkpatrick, al tener un doble rol como tecnócrata y universitaria, puesto que al mismo tiempo era profesora de ciencias políticas en la universidad católica de Georgetown (Georgetown University), logró legitimar ciertos tipos de conocimientos que favorecían el posicionamiento "ambiguo" de Estados Unidos ante los regímenes dictatoriales y autoritarios mientras fueran sus aliados. De hecho a través de textos académicos, Kirkpatrick argumentó y fundamentó lo que se conoció más tarde como la "política del doble estándar" aplicada por Reagan. Es decir, valorar las acciones políticas de los Estados a partir de los intereses de Estados Unidos. En ese sentido, Estados Unidos "relativizaba" las acciones de sus aliados —incluida la violación de los derechos humanos— y condenaba enérgicamente las mismas acciones cuando eran ejecutadas por sus opositores. Para un análisis de este rol de Kirkpatrick en particular en la ONU, ver: (Guest, 1990, p. 247-260).

tengan un acceso libre al Atlántico y al Pacífico (Selser, 1990). A partir de estas recomendaciones, el presidente Reagan hizo de América Latina su prioridad en política extranjera —la primera vez desde la Doctrina Monroe (1823)— y articuló las estrategias de la guerra contrainsurgente y la del combate al enemigo interno con los inicios del combate al narcotráfico a nivel continental (Roitman, 2005; Selser, 1988), lo cual tiene repercusiones en todo el continente hasta el día de hoy. Sin embargo, Estados Unidos no lo hizo solo, la *escuela francesa antisubersiva* jugó un rol mayor.

2.2 La doctrina francesa antisubversiva: preparar a Fafner para convertirse en dragón

Tal como se mencionó en el primer capítulo, después de la defensa que las poblaciones locales hicieron durante la guerra de Indochina (1945-1954), los franceses, derrotados, desarrollaron nuevas técnicas de intervención militar que implementaron en la Batalla de Argel (1956) donde *refrendaron* como técnicas de ataque los escuadrones de la muerte, la tortura y las desapariciones forzadas entre otros crímenes de lesa humanidad. Desde mayo de 1958 las técnicas probadas y perfeccionadas durante la Batalla de Argel comenzaron a enseñarse en la Escuela de la Guerra de París donde formaron a militares franceses pero también portugueses, israelís y argentinos, entre ellos al General argentino Alcides López Aufranc (1921-2015), quien participó años más tarde en el golpe militar de 1976 (Robin, 2004b, 2008).

Todos estos nuevos conocimientos los plasmaron en un manual llamado *La Guerra Moderna* (Trinquier, 1961) y se conocieron posteriormente en América Latina como *La Doctrina Francesa Antisubversiva.* En el marco de la Guerra Fría y en concordancia con las políticas continentales de "combate al comunismo" —dictadas por el país hegemónico en el continente—, por primera vez, en 1959 los métodos franceses fueron exportados a la Escuela de Guerra de Buenos Aires gracias a un

acuerdo de colaboración firmado entre Francia y Argentina. En palabras del general argentino Martín Antonio Balza en entrevista con Marie-Monique Robin el 12 de mayo del 2003, esta nueva doctrina cambió radicalmente la percepción de quién era el enemigo a vencer:

> Porque los franceses trajeron a Argentina una concepción nefasta y perversa que literalmente envenenó el espíritu de los oficiales de mi generación: la del "enemigo interior". Hasta antes de su llegada, nuestro ejército, como cualquier otro en el mundo, se preparaba para defenderse contra la eventual agresión de un enemigo exterior, para nosotros en este caso, de un país vecino como Chile o Paraguay. A partir del momento que se introdujo el concepto del "enemigo interior", todos, y yo incluido, interiorizamos el hecho de que el enemigo contra el cual deberíamos luchar era nuestro propio conciudadano: era aquel con el cual tal vez estábamos desayunando, el profesor de nuestros hijos, nuestro vecino, en resumen todos aquellos con los cuales no compartíamos las ideas y que podían tener de lejos o de cerca afinidades con el comunismo, presentado como el mal absoluto, o con el movimiento peronista, considerado como un subproducto del primero. En otros términos, a lo largo de las conferencias, de artículos en revistas militares y ejercicios de entrenamiento, los asesores franceses, y sus estudiantes argentinos, que de hecho terminarían por superar a sus "maestros", no paraban de decirnos que desde ahora el campo de batalla era el territorio argentino mismo y que para destruir las ideas subversivas que ponían en peligro los valores cristianos de nuestra civilización occidental, era necesario destruir al hombre mismo. De hecho, a partir de finales de 1950 hasta la víspera del golpe de Estado de marzo de 1976, el ejército se preparó a llevar una guerra fratricida y a comportarse como un verdadero ejército de ocupación en su propio país (Robin, 2004, p. 201.Traducción personal).

Efectivamente, mientras que en las "guerras tradicionales" las técnicas militares se implementaban para neutralizar a los enemigos en un escenario de ocupación bélica, en el marco de la doctrina del enemigo interno, el enemigo era el hermano mismo, si se sospechaba que podía simpatizar con algún tipo de idea o movimiento de transformación social. Las élites militares de todo el continente se formarían en esta ideología y terminarían por masacrar a sus propios conciudadanos.

En ese sentido, en octubre de 1961 se llevó a cabo en Buenos Aires el *1er Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria* en el que participaron 37 oficiales de 14 países, entre ellos de Estados Unidos. Los países representados fueron además Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Robin, 2004b, p. 212). En estos últimos 13 países, años más tarde se aplicarían todos los preceptos de la doctrina francesa, en particular la desaparición forzada y la tortura[69]. Pero además, la intervención gala tendría implicaciones directas en los procedimientos a futuro de la potencia hegemónica continental ya que a decir de los franceses, los estadounidenses tenían resquemor de la amplitud que su doctrina militar estaba tomando en el Cono Sur. Tal como lo menciona Armand de Blanquet du Chayla, embajador de Francia en Buenos Aires en una carta enviada al Ministro de Asuntos Extranjeros el 6 de octubre de 1961 (Documento de los archivos del Quai d'Orsay):

> El rol de los asesores militares franceses en la concepción y la preparación de este curso ha sido determinante y debemos destacar la presencia de Estados Unidos entre los participantes de este taller donde un lugar preponderante está reservado al estudio de la lucha antimarxista en un espíritu y según los métodos que [se] benefician ampliamente de la experiencia [que ha sido] adquirida, en ese ámbito, por la armada francesa. Podemos congratularnos

---

[69] El primer país donde fueron aplicadas las enseñanzas de esta doctrina fue en Guatemala. En 1966 se tiene el primer registro de desapariciones forzadas masivas ahí ocurridas (Drouin, 2012 ; Galeano, 1967b ; Grandin, 2011). Tal como será desarrollado párrafos más adelante, los aprendizajes de la doctrina francesa su sumaron a los de la Seguridad Hemisférica estadounidense dando como resultado un "cocktail" mortal. De acuerdo con Greg Grandin, el dispositivo de la desaparición forzada se asocia generalmente con Argentina y Chile durante las dictaduras de la década de 1970, pero archivos que han sido desclasificados en Estados Unidos señalan que Washington asesoró al ejército de Guatemala para desarrollar esta práctica en ese país a partir de 1966, en lo que se llamó la Operación Limpieza (Grandin, 2011). Así, en el marco de una transición gubernamental en marzo de 1966 fueron capturados y desaparecidos 28 dirigentes políticos. Posteriormente se supo que fueron aprehendidos por órdenes del Ministro de Defensa, torturados y sus cuerpos fueron arrojados al mar desde aviones militares, es decir, desde los famosos vuelos de la muerte franceses (Drouin, 2012 ; Galeano, 1967b ; Molina Theissen, s.f.). Agradezco a Marc-André Anzueto por las sugerencias bibliográficas de Drouin (2012) y Grandin (2011).

> todavía más que los medios militares norteamericanos han recientemente manifestado un cierto recelo con respecto a[l trabajo de] los asesores franceses en el Estado Mayor argentino y en la Escuela Superior de Guerra de Buenos Aires. La naturaleza de esos cursos y su carácter interamericano manifiestan suficientemente un "compromiso anticomunista". [...] El general Carlos Túrolo desarrolló en su discurso inaugural el tema de la indispensable coordinación entre los países americanos para prevenir y llevar a cabo eventualmente la "guerra sin escrúpulo" que prepara "tanto contra los espíritus que contra el cuerpo[70]" [...] el "más grande enemigo de nuestra forma de vida" (Robin, 2004b, p. 212-213).

Entre otros, el coronel francés Bernard Cazaumayou (1917-2011) se lo reiteró una vez más a Marie-Monique Robin el 17 de abril del 2003:

> Cazaumayou: —Estábamos allá a petición del ejército argentino, para enseñarles la guerra revolucionaria. La misión no tenía ningún otro objetivo. Lo demás no nos interesaba.
> Robin: —¿Entonces era un rol muy diferente al de la misión americana?
> Cazaumayou: —No tenía nada que ver: en esa época, los americanos estaban todavía en una concepción clásica de la guerra, con los tanques y los aviones. De hecho, comprendieron rápidamente que estábamos ocupando un terreno con mucho futuro y eso les molestaba mucho. Había una anécdota que circulaba en aquel entonces en el Estado Mayor argentino: en un cocktail, un general americano que estaba un poco ebrio propuso el material de una división blindada en intercambio de la partida de los asesores franceses (Robin, 2004, p. 214. Traducción personal).

De esta manera, fueron los franceses quienes introdujeron en América Latina estas técnicas de la *Guerra Revolucionaria*, técnicas que serían reapropiadas incluso por el país hegemónico a partir de sus enseñanzas de la *doctrina francesa antisubversiva*, tal como será desarrollado en las siguientes secciones.

---

[70] Y nuevamente aparece aquí el llamado al suplicio: castigar tanto al alma como al cuerpo. Esta alegoría se llevaría en varias ocasiones hasta la sociedad, representada como el cuerpo social.

2.3 La Doctrina de Seguridad Hemisférica: el miedo a la desposesión y la sed de avaricia, *el despertar del dragón*

Estos supuestos celos de los estadounidenses no durarían mucho tiempo, puesto que ellos tenían sus propios métodos de transformación en *fafners*, es decir, en perpetradores. Por ejemplo, la creación de grupos paramilitares les rondaba en la cabeza desde 1941, año de la creación de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) siendo ésta la primera iniciativa americana de actividades de espionaje, propaganda y anti-insurrección —acciones que criticó en los otros países Harry S. Truman en su discurso de marzo de 1947—. Es a partir de aquí que surge la idea de la guerra psicológica. El general William Donovan (1883-1959) quien fue el primer dirigente de la OSS definiría en septiembre de 1942 la guerra psicológica de la siguiente manera:

> La coordinación y la utilización de todos los medios, físicos y morales [...] que tienen por objetivo destruir la voluntad de combatir del enemigo, de menoscabar sus capacidades políticas y militares con la finalidad de privarles del apoyo, la ayuda o la simpatía de sus aliados o de países neutros, o que tienden a crear, mantener o aumentar la voluntad de ganar de nuestro pueblo y nuestros aliados" (Robin, 2004, p. 241-242).

De la misma manera, Donavan defendía la idea de "crear un cuerpo de guerrilla independiente y separado del ejército y de la marina caracterizado por un espíritu ofensivo e imaginativo" (Robin, 2004b, p. 242). Es decir, proponía la creación de grupos paramilitares. A este tipo de operativos le llamarían "guerra no convencional"[71]. En esa época, esta iniciativa encontraría resistencias en una buena

---

[71] Por ejemplo en 1943 en Birmania agentes de la OSS capacitaron a reclutas civiles locales para llevar a cabo acciones de guerrilla paramilitar contra los japoneses. El "Destacamento 101" habría reclutado más de 10 000 hombres y se distinguirían por su red de información, canales de evacuación y la organización de sabotajes. Es así como se asiste al nacimiento de los grupos paramilitares aún

parte de los generales del ejército americano (*ídem*, 242), pero fue gracias a la intervención del presidente Roosevelt que pudieron llevarse a cabo algunas operaciones y de ahí abrir paso a la era de la guerra psicológica y paramilitar. Sin embargo, debido a la impopularidad al interior del ejército mismo, la OSS sería disuelta en 1945. Ya en el marco de la Guerra Fría, como resultado de la doctrina Truman que tenía un doble objetivo, la batalla anticomunista y la seguridad nacional, en septiembre de 1947 la Asamblea estadounidense votó a la unanimidad el Acto Nacional de Seguridad (National Security Act) del cual emanaría la *Agencia Central de Inteligencia* (*Central Intelligence Agency* —CIA por sus siglas en inglés—). En este contexto, la guerra psicológica ganó popularidad y en mayo de 1952 se creó el Centro de Guerra psicológica (*Psychological Warfare Center*) del Fuerte Bragg, especializado en el "arte" de la guerra psicológica y de la guerra no convencional.

Una década más tarde, debido al éxito de la revolución cubana de 1959, en 1961 al centro del Fuerte Bragg se le atribuyó una tercera misión, la de la guerra contra la insurrección[72]. De acuerdo con Marie-Monique Robin, esta última atribución se debería al interés que el mismo presidente John Fitzgerald Kennedy (1953-1963) manifestaba hacia la doctrina francesa. Influenciado por la *Guerra Moderna*, en 1962 Kennedy cambió la orientación de defensa continental por la de seguridad interna, es decir, la guerra contra la población (Leal Buitrago, 2003, p. 79). A partir de ese momento se hablaría de "guerra especial", la cual comprendería "todas las medidas militares y paramilitares vinculadas a la guerra no convencional, la guerra

---

presentes en la mayoría de países de América Latina. En particular ver el capítulo 16 de (Robin, 2004b, p. 237-256).

[72] Mientras los franceses hablaban de contrainsurgencia, los estadounidenses preferían hablar de contra-insurrección (Robin, 2004b, p. 241).

contrainsurgente y la guerra psicológica[73]". Es así que la cooperación entre expertos norteamericanos y franceses se intensificó: "Es precisamente en el ámbito de la guerra contra la insurrección que el aporte de los franceses va a ser determinante, al punto que de hecho hicieron pasar a segundo término los dos otros componentes de la guerra especial" (Robin, 2004b, p. 245). Los ideólogos franceses Bernard Fall (1926-1967) y Paul Aussaresses habrían jugado una influencia mayor en la reproducción de estos nuevos fundamentos de combate y en la formación de los agentes (*ídem*, 246).

2.3.1 La Escuela de las Américas: la secreción del dragón con cola de serpiente

En el marco de esta "guerra especial", la Doctrina de Seguridad Hemisférica tomó fuerza. Desde 1946 una vez cerrada la OSS, las fuerzas armadas estadounidenses instalaron en Panamá —en el centro del continente—, el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad en un intento de cooperación intercontinental entre armadas, el cual se iría concretando poco a poco. Por ejemplo con el *Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca* firmado en Rio de Janeiro en 1947 o con la creación de la *Organización de Estados Americanos* (OEA) en Bogotá en 1948. De hecho, en esta última iniciativa, los Estados Unidos manifestaron su interés por crear una armada intercontinental, lo cual no se logró debido a la oposición manifestada por México y por Argentina (Robin, 2004b, p. 260). A partir de 1963 —inmediatamente después a la crisis de los misiles—, con las alianzas

---

[73] "La guerra no convencional cubre las operaciones de guerrilla y de subversión a llevar a cabo al interior del territorio del enemigo o controlado por el enemigo por el intermediario de un personal local apoyado y dirigido por Estados Unidos. La guerra contrainsurgente, por su parte, incluye todas las acciones militares o políticas, dirigidas por las fuerzas americanas, solas o conjuntamente con un gobierno legal, para prevenir o eliminar la insurrección subversiva. Finalmente, la guerra psicológica designa todas las actividades planificadas y dirigidas para influenciar las opiniones, las emociones, las actitudes y el comportamiento del enemigo, la población local, los grupos extranjeros neutros o benevolentes, con la finalidad de ayudar a Estados Unidos a cumplir con sus objetivos". *Dictionnary of Us Military Terms for Joint Usage,* Washington D. C. Agosto de 1968. En (Robin, 2004, p. 245-246. Traducción personal).

estratégicas afianzadas, el liderazgo continental de Estados Unidos y las nuevas perspectivas de intervención de la guerra no convencional, el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad se reorganizó adquiriendo un nuevo nombre: Escuela del Ejército de Estados Unidos de América (*United States Army School of the Americas*), la cual se conocería en todo el continente como *Escuela de las Américas*. La escuela del terror.

En este centro de entrenamiento se formaron al menos diez militares que devendrían dictadores latinoamericanos (Smihula, 2003), entre los cuales destacan Manuel Noriega (1934-2017) de Panamá, Leopoldo Galtieri (1926-2003) y Roberto Viola (1924-1994) de Argentina, Hugo Banzer (1926-2002) de Bolivia, Juan Velasco Alvarado (1910-1977) y Guillermo Rodríguez (1924-) de Perú, Efraín Ríos Montt (1929- 2018) de Guatemala. Así como jefes de escuadrones de la muerte, como es el caso de Roberto d'Aubisson Arrieta (1944-1992) de El Salvador (Robin, 2004, p. 272 ; Smihula, 2003, 18'50). Posteriormente, con Reagan como presidente de Estados Unidos y con el énfasis puesto en América Latina y en particular en Centroamérica, estas estrategias se vieron reforzadas, en particular a través del armamento y capacitación de grupos paramilitares como por ejemplo los *Contras*[74] en Nicaragua.

---

[74] Los *Contras* se les llamaba, a los miembros del movimiento de Resistencia Nicaragüense que se oponían a las bases sandinistas del movimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El nombre de Contras era una contracción de contrarrevolucionarios. En julio de 1979 el FSLN logró derrocar a Anastasio Somoza Debayle, el cual era miembro de una familia que había mantenido el poder desde 1934, luego del asesinato de Augusto Nicolás Calderón Sandino, el cual dio origen al movimiento sandinista. De acuerdo con diferentes fuentes (Rivas, 1993; Smihula, 2003; Webb, 1999), más de 5000 Contras "a quien el presidente Reagan llamaba guerreros de la libertad, se adiestraron en la Escuela de las Américas. En consecuencia, el Tribunal de Justicia Internacional condenó a Estados Unidos por delitos de terrorismo internacional" (Smihula, 2003,19'16). Los *Contras* habrían sido especialmente sanguinarios, responsables de varias masacres contra la sociedad civil con la anuencia de los Estados Unidos de América (Rivas, 1993). Sin embargo —como ya se mencionó—, Estados Unidos no actuaba solo en la región. Por ejemplo, en 1977 un sector del ejército argentino, en colaboración con la CIA, comenzó una serie de operaciones encubiertas en América Central con el objetivo de abatir el comunismo internacional participando incluso del entrenamiento a los *Contras* en

Pero además, las enseñanzas tanto de la Escuela de las Américas como de la Doctrina Francesa serían adoptadas por otros centros de entrenamiento militar, tal como es el caso del Centro de Instrucción de Guerra en la Jungla, Manaos[75], creado el 31 de marzo de 1964 por un decreto del mariscal Castelo Branco (1897 - 1967), el cual había llegado al poder por golpe de Estado. Desde su creación se convirtió en el centro de capacitación de la contraguerrilla, la mayoría de sus instructores se habrían formado en la Escuela de las Américas (Robin, 2004b, p. 277). De hecho, a México, los primeros militares extranjeros que llegaron a dar formación en el territorio nacional en técnicas de contra-insurgencia, serían brasileños (FEMOSPP, 2006, capítulo 5, p. 86), muy probablemente egresados de esta escuela de Manaos.

Resultado de la formación en estas técnicas de la guerra especial y por poner el ejemplo de un solo país, de acuerdo con Joseph Moakley, diputado demócrata por Massachusetts: "cada vez que había un asesinato espantoso en El Salvador, siempre había sido un egresado de la Escuela de las Américas" (Smihula, 2003, 16'07). Por ejemplo, el informe de la Comisión de Verdad de las Naciones Unidas sobre El Salvador (ONU, 1992a) reveló que quienes asesinaron a Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (Monseñor Romero) el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba una misa, así como 47 de los 60 militares que cometieron las peores atrocidades durante la guerra civil, incluidos los que aniquilaron a más de 900 civiles en la masacre de

---

Nicaragua después del triunfo del sandinismo en julio de 1979, a esta operación se le dio el nombre de Operación Charlie. Ver: (Uncos, 2015).

[75] En 1973, después de una estancia en el Forte Bragg de Estados Unidos, el general Paul Aussaresses —quien había sido recientemente promovido a coronel y asignado a la sección francesa del Estado Mayor Internacional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)— fue enviado a Brasil como agregado militar. Según el mismo Aussaresses, él enseñaba en Manaos las técnicas de la Batalla de Argel. A pregunta expresa de Marie-Monique Robin sobre si el embajador de Francia en Brasil estaba informado, Aussaresses responde: "Pero claro: Era mi jefe y él sabía que yo era un especialista de ese tipo de cuestiones" (Robin, 2004b, p. 276).

Mozote de diciembre de 1981[76], habían pasado por las filas de la Escuela de las Américas (Smihula, 2003,18'02). Asimismo, el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad de Centroamérica de El Salvador, fueron asesinadas seis personas, entre ellas 6 sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y su hija de 15 años. De los 26 soldados responsables, 19 habían sido adiestrados en la Escuela de las Américas" (Smihula, 2003, 17'32).

Este patrón de formación quedó de manifiesto en 1996, cuando los manuales de la Escuela de las Américas fueron desclasificados. En palabras de Eduardo Galeano (2003):

> En septiembre de 1996, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos formuló una confesión interesante que tuvo poca o ninguna repercusión pública. El poder militar norteamericano admitió que había cometido lo que llamó un error. El error consistía en haber entrenado militares latinoamericanos en las técnicas de la tortura, el secuestro, el asesinato, la desaparición forzada. En fin, un error, un errorcito. Un errorcito que ha costado miles y miles de vidas en América Latina (Priest, 1996; *Hidden in Plain Sight*, 2003).

Efectivamente, desde 1992 gracias a una fuerte movilización social en varios países del continente, cuyo líder moral fue el exmilitar y exsacerdote católico Roy Bourgeois[77], el Departamento de defensa de Estados Unidos instruyó una

---

[76] La masacre de Mazote fue una serie de ataques contra la población civil de los cantones de El Mozote, La Joya y Los Toriles los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, los cuales fueron perpetrados por el batallón Atlácatl del ejército de El Salvador, el cual se había formado en la Escuela de las Américas. Alrededor de 900 personas, incluidos niños y ancianos, fueron asesinados en esta masacre. La Comisión de la Verdad para El Salvador determinó que quienes lideraban el batallón Atlácatl en el momento de la masacre eran el teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios, el lugarteniente José Azmitia y el teniente coronel Natividad de Jesús Cáceres (ONU, 1992a), los tres habían sido alumnos de la Escuela de las Américas.

[77] Roy Bourgeois (Luisiana, 1938-), fue oficial de la Marina durante la Guerra de Vietnam. En 1972 se ordenó como sacerdote y fue asignado a Bolivia. Por su labor por los derechos humanos, en 1977

investigación sobre los métodos de enseñanza en la Escuela de las Américas, como resultado de esta investigación varios de los manuales de entrenamiento de la Escuela fueron desclasificados[78]. Entre otras cosas, en los manuales se podía leer que los agentes de la contrainsurgencia podían utilizar el:

> [T]emor, dar pago de recompensas por asesinar enemigos, golpizas, detenciones arbitrarias, ejecuciones arbitrarias y [proporcionar] el suero de la verdad [...] El agente de contrainsurgencia [para obtener información] podría arrestar a los padres del propio informante, aprisionarlo o golpearlo" (Priest, 1996. Traducción personal).

Debido a los escándalos por la infiltración de los manuales y la documentación de las violaciones a los derechos humanos de los egresados de la Escuela de las Américas, en mayo del año 2000, 204 diputados votaron a favor de que se cerrara la Escuela contra 114 que aún se oponían. La Escuela de las Américas cerró el 15 de diciembre

---

durante el segundo mandato de Hugo Banzer (1971-1978) —uno de los egresados de la Escuela de las Américas—, fue expulsado del país. En 1990 fundó el "Observatorio de la Escuela de las Américas" (SOA Watch), cuyo principal objetivo era hacer cerrar la Escuela. Del 17 al 19 de noviembre del año 2000, convocó a una manifestación basada en simbolismos de los crímenes de lesa humanidad cometidos por egresados de la Escuela, con el objetivo de exigir su cierre, la cual contó con la participación de más de 10 000 personas. Más de 3500 se introdujeron en el Fort Benning, sede de la Escuela, incluidos menores de edad, en un acto civil pacífico. Cada persona llevaba una cruz con el nombre y datos personales como son la edad o la nacionalidad de una de las miles y miles de víctimas de los egresados de la Escuela de las Américas. La respuesta del Estado fue detener a más de los 1700 manifestantes. A finales de 2002, 99 de esos manifestantes habían cumplido penas de prisión de alrededor de 6 meses. Roy Bourgeois estuvo más de 4 años de prisión (Smihula, 2003 ; SOA Watch, s.f.).

[78] Gracias a la desclasificación de estos manuales se pudo acceder a mucha información sobre el origen de la represión en el continente. Por ejemplo, de acuerdo con uno en sus cursos, el "0-47", especializado en las operaciones subversivas: "[l]a subversión no se limita a la insurrección armada, también incluye —explícitamente— la 'acción no violenta' como las manifestaciones, las huelgas o el trabajo pastoral de la iglesia católica –teología de la liberación- o la promoción de las ciencias sociales comprometidas. Es decir, 'cualquier tentativa de analizar las causas históricas, sociológicas o económicas de la pobreza en América Latina se considera como subversiva'" (Robin, 2004b, p. 271). La totalidad de los manuales desclasificados están disponibles en el sitio web "SOA Watch: Close the School of the Americas": http://soaw.org/about-the-soawhinsec/soa-manuals/98-soa-manuals-index (Consultado el 30 de agosto del 2017).

del año 2000, 20 días después de la magna manifestación de más de 10 000 personas que se introdujo en el Fort Benning, convocada por Roy Bourgeois (ver nota 79). Sin embargo, en esa misma sesión de mayo del 2000, el Congreso votó la creación de una nueva escuela, el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (WHISC, por sus siglas en inglés), el cual fue inaugurado el 17 de enero del 2001 y que de hecho ocupa el mismo edificio que la Escuela de las Américas ocupó desde 1984 —cuando fue trasladada de Panamá— hasta su cierre (Smihula, 2003, 45'13). Es decir, la "Escuela" abolida por el Congreso solo estuvo cerrada un mes, antes de la apertura de la "nueva" escuela en el mismo lugar.

SEGUNDA PARTE. TRAYECTORIAS DE LA APROPIACIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL DISPOSITIVO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO

Esta segunda parte tiene por objetivo analizar la apropiación que se hizo de la desaparición forzada en México y de sus trayectorias, una vez que ésta fue domesticada. Para ello, a nivel analítico, se identifican tres periodos, el de la Guerra Sucia (1964-1982), el de la década de los años 1990 conocida como "la década de la transición a la democracia" y un tercer periodo que se da entre 2006 y 2018 llamado el de la "alternancia política"[79]. En esta segunda parte del capítulo serán abordados los dos primeros. El tercero, por tratarse del periodo actual y dado la cantidad de información que se maneja, será abordado en el siguiente capítulo.

Cabe mencionar que la desaparición forzada, una vez que se adoptó como técnica en el país, y que fue transmitida a través de una pedagogía militar, ésta se mantuvo presente de manera intermitente a lo largo de los años (Calveiro Garrido, 2018), en diferentes regiones y con diferentes objetivos, que apuntaban más a la impunidad que a una estrategia planeada como mecanismo de terror. Sin embargo, en la periodización que aquí se establece debido a su masividad, sistematicidad e involucramiento de agentes del Estado en su ejecución —directa o por

---

[79] Esta periodización se inspira de la información obtenida en las entrevistas con Héctor Cerezo (entrevista, el 10 de enero del 2017), Eloísa Diez (entrevista, el 13 de enero del 2017), Nadín Reyes Maldonado (entrevista, el 18 de enero del 2017), Janet Carmona (entrevista, el 21 de enero del 2017) y Santiago Corcuera Cabezut (27 de febrero del 2018). Además de la ponencia "La desaparición forzada en México: De marchas y huelgas de hambre a la juricidad de la ley general sobre desaparición forzada" (Rangel Lozano y Sánchez Serrano, 2017).

aquiescencia— o en su ocultamiento, es que de manera arbitraria establezco estos cohortes de temporalidad.

De esta manera, en un primer momento abordaré la desaparición forzada de personas durante la Guerra Sucia, cómo ésta se legitimiza[80] a partir de una construcción del enemigo a vencer, un alguien —y sus familias y bases de apoyo— que en la construcción discursiva representaban un "peligro" para la seguridad nacional. Posteriormente, durante la década de 1990, la de la "transición a la democracia", abordo cómo la desaparición forzada apuntó a dos tipos de actores y actrices disímbolos. El primero es en una continuidad con el periodo anterior, el de la Guerra Sucia, en el cual se atacó a las bases de apoyo de los movimientos guerrilleros de esta década, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y al Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Guerrero. El segundo, representa una ruptura con el primero y un desplazamiento de la figura del detenido-desaparecido, al de desaparición forzada en el sentido amplio de su acepción. Efectivamente, en el marco de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en la frontera norte de México, asistimos al surgimiento de nuevas sujetas *desaparecibles* en el marco del giro neoliberal del país: mujeres pobres, trabajadoras de las maquilas. En este marco, las desapariciones comenzaron a ejecutarse ya no bajo el pretexto de una *Razón de Estado* (Foucault, 1989a), sino bajo parámetros meramente economicistas donde la responsabilidad del Estado buscaba eludirse. Estas desapariciones serían el preludio del tercer periodo, apenas un poco más de una década después, en el contexto de la "Guerra contra el narcotráfico".

---

[80] El uso del participio pasado del verbo legitimar (legitimizado) no quiere decir en ningún sentido que haya alguna justificación válida, de ningún tipo, para desaparecer a alguien. El uso de esta palabra tiene como objetivo destacar que el Estado, a través de una serie de mecanismos como son las estrategias mediáticas discursivas, demoniza algunas acciones individuales o colectivas (terrorismo, vandalismo, etc.) para justificar su inacción o incluso su participación a través de agentes específicos en la comisión de crímenes de lesa humanidad tal como es la desaparición forzada.

2.4 La desaparición forzada en México: construir al enemigo para desaparecerle mejor

Tal como fue desarrollado en la primera parte de este capítulo, los crímenes de lesa humanidad se legitimaron en Latinoamérica durante las Guerras Sucias con el pretexto de la lucha contra el enemigo interno. Éstas en realidad eran guerras parciales en el marco de la Guerra Fría (Calveiro Garrido, 2010, p. 44). La disputa por el cuerpo ausente como sujeto político en este contexto, comenzó entonces entre otras técnicas, con la desaparición forzada para aniquilar a los supuestos opositores políticos. Calveiro Garrido explica cómo se manifiesta esta disputa:

> En el caso latinoamericano, el *Otro* a eliminar se construyó por su identidad política bajo la categoría genérica de subversivo. Bajo esta denominación se asimiló a una serie de *otros*, compuesta por todos aquellos que representaran una alternativa para el proyecto hegemónico estadounidense. Las guerras sucias se propusieron eliminar a toda una generación de disidentes políticos, sociales, sindicales, militares nacionalistas, sacerdotes progresistas, intelectuales alternativos, descabezando, desarticulando, vaciando las sociedades para penetrarlas y controlarlas. Se combinaron y fusionaron las ideas de delincuente a castigar, enemigo a exterminar y *Otro* a desaparecer, haciendo del disidente político, al mismo tiempo, un delincuente, un enemigo y el *Otro*. Esta serie de suposiciones fue la que orientó a toda la maquinaria en torno a la persecución primero, la eliminación después y la desaparición por último del *Otro subversivo*" (Calveiro, 2010, p. 41-42. En itálicas en el texto original).

En diferentes países la aplicación de la desaparición forzada a los *Otros* —como lo expresa Calveiro—, fue incluso décadas después una táctica reconocida oficialmente para quienes eran considerados como "terroristas". Por ejemplo, el cable diplomático 7578 que envió la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires a Washington, fechado en septiembre de 1980 (Guest, 1990, p. 459), da cuenta que la desaparición forzada continuaba siendo una práctica consuetudinaria en las fuerzas armadas argentinas, aún en la postdictadura, y reconocía que incluso se encontraba en sus manuales, legitimando además, la tortura.

> La desaparición es todavía la táctica estándar para las Fuerzas de Seguridad Argentinas en relación con los terroristas capturados. [...]. Mismo si se han reducido drásticamente los números de niveles anteriores. La desaparición continúa siendo una táctica estándar de las Fuerzas de Seguridad Argentinas al tratar con personas que creen que pertenecen a organizaciones terroristas. La desaparición es un eufemismo para la detención no reconocida [arbitraria] de un individuo por las fuerzas de seguridad. Basados en todo lo que sabemos, creemos que los detenidos suelen ser torturados como parte del interrogatorio y finalmente ejecutados sin nada que se le parezca al debido proceso. [...] Las directrices actuales para las fuerzas de seguridad utilizan este procedimiento sólo contra miembros activos de organizaciones terroristas. El resultado ha sido que prácticamente todos los desaparecidos este año probablemente hayan sido Montoneros (Guest, 1990, p. 430-431. Traducción personal) [81].

Tal como fue mencionado párrafos más arriba, este uso de la técnica de la desaparición forzada en Argentina, primero para los "subversivos", luego para los "terroristas", es una herencia de la doctrina francesa *antisubversiva* y de la doctrina estadounidense de *Seguridad hemisférica*. Ésta fue reapropiada en todo el continente con especificidades de reproducción en cada país y se práctica por diferentes actores y con diferentes objetivos hasta nuestros días. Un ejemplo icónico del recurso a la utilización de este dispositivo durante la década de 1970 y 1980, fue durante la operación del Plan Cóndor. Los servicios de inteligencia de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay, con asesoría de los países mencionados más arriba —Francia y Estados Unidos—, en un traslapamiento de las soberanías nacionales y de la política hegemónica, utilizaron la detención, deportación, tortura, ejecución y/o desaparición forzada de presos políticos[82]. Sin embargo, este recurso de control de la población por el terror, no es exclusiva de las dictaduras militares, países como

---

[81] Montoneros fue una organización guerrillera argentina originalmente inclinada hacia el nacionalismo católico. Posteriormente esta organización se identificó como peronista adoptando postulados del socialismo. Fue fundada en 1967 y estuvo activa hasta 1980. Ver: (Donatello, 2003).

[82] Sobre el modo de operación del Plan Cóndor, ver: (Slack, 1996).

Colombia y México que oficialmente no eran considerados como dictaduras, también habían recurrido —y lo siguen haciendo— a la utilización de este dispositivo de control de los cuerpos. En México, en particular, la desaparición forzada de personas comenzó a utilizarse como estrategia de Estado a partir del periodo que se conoce como la Guerra Sucia (1964-1982) donde el *Otro* a desaparecer, eran los miembros de los grupos llamados subversivos, y sus familias y bases de apoyo, debido a que buscaban modificar las condiciones estructurales de pobreza y marginación de muchos sectores del país a quienes no les había cumplido sus promesas la Revolución Mexicana (ver anexo B).

2.5 La desaparición en la Guerra Sucia

La Dirección Federal de Seguridad (DFS) se creó en México en 1947 a inicios de la Guerra Fría, bajo el primer régimen presidencial encabezado por un civil en México, Miguel Alemán Valdez (1946 – 1952) y con asesoría del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) (López de la Torre, 2013, p. 60): "A finales de enero de 1947, Miguel Alemán llamó al coronel Marcelino Inurrieta de la Fuente y le ordenó consolidar el proyecto de un organismo policiaco y de seguridad de élite. Le recomendó: 'Quiero a los mejores. Algo así como un FBI de huaraches'" (Ravelo, 1998; Rodríguez Castañeda, 2013).

La DFS tendría por objetivo "[m]antener informado al presidente sobre la situación política y social del país, además de cuidar de su seguridad personal" (Ravelo, 1998). En sus inicios estuvo conformada por militares y policías de élite[83] que dependían de

[83] Personajes como Fernando Gutiérrez Barrios, Melchor Cárdenas, Florentino Ventura, Medardo Molina que participaron de su fundación, se mantendrían cerca de la Dirección a lo largo de su carrera. Cabe destacar que de los 22 agentes que fundaron la DFS, Margarita Romero Muñoz era la única mujer (Aguayo Quezada, 2014).

la Presidencia de la República, luego pasó a depender de la Secretaría de Gobernación hasta su disolución en 1985 (López de la Torre, 2013, p. 60)[84]. Entre sus funciones principales estuvieron el espionaje, la infiltración y el acoso de opositores e incluso de miembros del propio régimen para asegurarse de mantener el control gubernamental (López de la Torre, 2013). Es decir, poner en práctica los componentes de la Guerra Especial[85].

Durante su existencia, el único marco legal que regía en la DFS era el reglamento interno de la Secretaría de Gobernación (Rodríguez Castañeda, 2013). Miguel Nazar Haro (1924 – 2012), uno de los personajes centrales en la represión y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Sucia, quien se formó en la Escuela de

---

[84] Desde sus inicios, la Dirección Federal de Seguridad estuvo envuelta en escándalos de corrupción y arbitrariedades (detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas). Por citar solo un ejemplo, en el sexenio de Miguel de la Madrid, el exdirector de la DFS, José Antonio Zorrilla, fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía, además de tener nexos con el narcotráfico. También, narcotraficantes como Caro Quintero, portaban credenciales de la DFS firmados por Zorrilla. El 29 de noviembre de 1985 la DFS y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales se fusionaron para dar lugar al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN)" (Ravelo, 1998).

[85] De hecho, en un vídeo promocional que el director de la DFS durante el sexenio de José López Portillo (1978-1982), Miguel Nazar Haro, envió él mismo a hacer para promover la imagen de la DFS afirman: "El departamento de archivo es un órgano fundamental de las labores y base del éxito de múltiples investigaciones. Contiene información política, económica, social, terrorista, subversiva y de actividades clandestinas desde 1947 a la fecha. Sus integrantes están capacitados para evitar el reclutamiento de grupos contrarios y son vigilados permanentemente por el Departamento de Investigación de Asuntos Internos. Por razones de seguridad se cuenta con dos tipos de archivo. Uno mecánico y otro en microfilm [...]. El subdirector operativo tiene a su cargo fundamentalmente la captura de información en el área metropolitana y en las entidades federativas en los aspectos político, económico y social. Se vale para este fin de la *infiltración* de agentes en las áreas sujetas a conflicto. Esta subdirección cuenta con seis departamentos. El departamento de información e investigación local tiene nueve secciones divididas en múltiples grupos que recaban la información del Distrito Federal y zonas aledañas [...]. Sus áreas de investigación son Secretarías de Estado y organismos descentralizados, organizaciones obreras, organizaciones estudiantes y profesionales, organizaciones campesinas, iniciativa privada, partidos de derecha y clero, organizaciones de izquierda, control de institutos culturales, Cámaras y partidos políticos". (Demos Desarrollo de Medios SA, 2012, 15'55. Las itálicas son mías). La totalidad del vídeo está disponible en el vínculo siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=oPeMar6I744 (Consultado el 9 de octubre del 2017).

las Américas (SOA Watch, 2006), se integró a la DFS el 16 de febrero de 1960, luego de haber fungido 10 años como patrullero en el Servicio Secreto Mexicano. En 1965 fue enviado becado a Washington a formarse en la Academia Internacional de Policía. A su regreso, en noviembre del mismo año, fue designado para crear el Grupo de Investigaciones Especiales C-047[86], un grupo secreto destinado a infiltrar a los "enemigos del régimen" (López de la Torre, 2013, p. 63). Así, en un contexto de postrevolución cubana y a través de la elaboración del perfil del "enemigo interno mexicano", el objetivo era legitimizar ante la opinión pública nacional e internacional —puesto que no querían que México tuviera tintes de dictadura[87]—, la adopción de la Doctrina de Seguridad Hemisférica al interior del país[88]. Ésta tenía entre sus principales objetivos el ataque frontal a los movimientos guerrilleros que se estaban

---

[86] Cabe subrayar que son las mismas siglas que el curso de la Escuela de las Américas el "0-47" especializado en acciones de contra-insurgencia. Ver nota de pie de página 80 de este mismo capítulo.

[87] A diferencia de la mayoría de los países centro y sudamericanos que durante el periodo de la Guerra Fría, con el apoyo de Estados Unidos, las Juntas Militares se hicieron del poder, México siempre quiso proyectar hacia el extranjero la imagen de país democrático. Si bien es cierto que algunos autores afirman que el país cumplía con las características de un Estado autoritario (Meyer, 2005), existía también un cierto consenso de que en México el "riesgo" de que se estableciera una dictadura militar era lejano. Entre otras cosas porque existía una estructura de poder fuerte e independiente de las fuerzas armadas y se llamaba a elecciones en los periodos establecidos por la ley electoral, aunque en los hechos durante 71 años se mantuvo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la presidencia de la República. Además, México mostraba hacia el extranjero una política diplomática de conciliación. Por ejemplo, muchos de los acuerdos de paz centroamericanos se firmaron en México —Acuerdos de Paz de Chapultepec en enero de 1992 entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); 5 de los 12 Acuerdos de Paz del Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca que se firmaron entre 1991 y 1996 — y se mantuvo al margen del conflicto entre Estados Unidos y Cuba. Por si fuera poco, el presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) tenía una política de puertas abiertas para refugiados políticos latinoamericanos: "La política del presidente Echeverría abría ampliamente las puertas para dar asilo a los militantes sudamericanos se hizo legendaria, pero al interior de México mostraba otro rostro" (Castellanos, 2009, p. 157. Traducción personal).

[88] Durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970 - 1976) "28 oficiales mexicanos son enviados a la Escuela de las Américas para recibir cursos de inteligencia militar, de contra-espionaje, de contra-insurrección, de guerra irregular y de operaciones en zonas de selva o de montaña y esos oficiales serían sobre todo asignados a Guerrero" (Castellanos, 2009, p. 157).

gestando a lo largo del territorio nacional (ver Anexo B). Por ejemplo, en una entrevista al mismo Miguel Nazar Haro[89], quien fue el creador de la Brigada Blanca[90] (Proceso, 2000b) y jefe de la Dirección Federal de Seguridad (FDS) entre 1978 y 1982, afirmó con respecto a los miembros de los grupos insurgentes en México:

> No había la delincuencia que hay ahora, hasta que surgieron estos señores entrenados en Corea del Norte[91] que, inspirados por aventuras guerrilleras de

---

[89] Para conocer más datos biográficos de este controvertido personaje que murió en total impunidad, entre otros ver : (López de la Torre, 2013; Rodríguez Castañeda, 2013).

[90] La Brigada Blanca fue un grupo de élite creado en 1972 y cuya dirección estaba integrada por los jefes de los diferentes cuerpos policiacos: Federal, Servicio Secreto, Militar y DFS (Castillo García, 2012). Su nombre se debe a que una de las brigadas del grupo subversivo Liga Comunista 23 de septiembre (la Liga) (ver anexo B), llevaba por nombre Brigada Roja. Dado que uno de los principales objetivos de este grupo era acabar con la Liga a como diera lugar, decidieron tomar por nombre un significado opuesto a ésta (Castellanos, 2009; Castillo García, 2012; Proceso, 2000b) —Cabe mencionar que en la misma época la Policía Federal Argentina tenía un grupo de élite que también se llamaba Brigada Blanca, aunque no era el encargado de las desapariciones y, en Guatemala había otro grupo de élite llamado Mano Blanca, que sí lideraba las acciones de contrainsurgencia—. La Brigada Blanca mexicana estaba formada por 240 personas y todas las corporaciones contaban con instalaciones en el Campo Militar Número 1. Los miembros de este grupo fueron conocidos por sus graves violaciones a los derechos humanos. Ellos estarían detrás de los vuelos de la muerte, de múltiples detenciones arbitrarias y de desapariciones forzadas. Por ejemplo, Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo estuvieron formalmente acusados por la desaparición forzada de Rosendo Radilla ocurrida en 1974 (Castillo García, 2005). Por lo mismo, estos dos últimos estuvieron vinculados a proceso a demanda de la Fiscalía Especial para la Investigación de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) por crímenes de lesa humanidad contra 143 personas y por contubernio con el crimen organizado, en particular con el Cártel de Juárez (Proceso, 2006). Sin embargo, el caso fue remitido al fuero militar y fueron exonerados (G. L. Díaz, 2012). Ambos murieron en total impunidad, Quirós Hermosillo a causa de un cáncer (Proceso, 2006) y Acosta Chaparro murió acribillado en la Ciudad de México (Proceso, 2012a). El resto de los miembros de la Brigada Blanca, incluido Miguel Nazar Haro, nunca fueron vinculados a Proceso por los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia.

[91] Al igual que Estados Unidos, algunos países aliados del bloque soviético llevaban a cabo estrategias militares para infiltrar los regímenes con el propósito de derrocarlos. En México, el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) —el cual fue creado por estudiantes becados en Rusia— (ver Anexo B), envió a 60 jóvenes mexicanos a formarse en Corea del Norte (Castellanos, 2009, p. 218). Cabe mencionar, que la formación no la recibieron en Rusia puesto que el Estado soviético no defendía la vía revolucionaria. "Éste asumía la tesis estaliniana según la cual la caída del capitalismo, llegada la hora, crearía las condiciones que permitirían al proletariado desencadenar la transición pacífica hacia

> otros países, buscaron el poder. [...] Pusieron bombas, perpetraron secuestros, asaltaron bancos, mataron policías con alevosía y ventaja. Todo con una bandera de guerrilleros. [...] Eran organizaciones que ponían bombas en gobernación, en la Confederación de Trabajadores de México, en Televisa, en el PRI, en diferentes delegaciones. Quisieron hacer entender en otros países que el movimiento estudiantil era una revolución en México, y entonces se expuso el prestigio de nuestro país en el extranjero. [...] La investigación de estos asuntos no es muy fácil, es una entrega completa. Hace muchos años, en una entrevista, cuando agarré a los que estaban entrenados en Corea del Norte, dije a la revista Contenido, que los terroristas y la guerrilla se deben combatir con el mismo fanatismo que ellos tienen. (Venegas, 2004).

Nazar Haro, a través de este discurso, buscaba legitimar el ataque a los grupos del movimiento armado socialista mexicano, construyéndolos como los *Otros*. De hecho, en su decir, incluso evoca la extranjerización de sus prácticas para desacreditarles aún más, para construirles como el enemigo interior, además de que los clasifica como fanáticos, es decir, de facto deslegitima su lucha. En ese sentido, Umberto Eco (Italia, 1932-2016) en su texto *Construir al enemigo* (2012) reflexiona que Italia —al igual que México en el contexto de la Guerra Fría, de hecho— no tiene enemigos externos puesto que no se encuentra en riesgo de Guerra, pero que en realidad los enemigos son internos y que son tantos que no logran identificar un enemigo común —"Pisa contra Lucca, güelfos contra gibelinos, nordistas contra sudistas, fascistas contra partisanos, mafia contra Estado, gobierno contra magistratura" (Eco, 2012, p. 14)—. Al no tener verdaderos enemigos ya que no hay un potencial ataque extranjero, hay que crearlos de alguna manera debido a que a partir de la alteridad se construye la identidad y los valores comunes.

En ese sentido, Eco sostiene que la creación discursiva que acompaña a esta alteridad —la cual sostiene que "el enemigo siempre hace mal"—, la imagen que se tenga del

---

el socialismo" (Castellanos, 2009, p. 218. Traducción personal). Es por ello que se desplazaron hacia Pyongyang.

enemigo debe ser de algo feo, puesto que se identifica lo bueno con lo bello (*Ibidem*, p. 18), pero además, en la percepción sensorial —muchas de las veces imaginada porque ocurre que ese enemigo está en el imaginario y no se ha tenido contacto con él— el enemigo es hediondo, siempre huele mal. Pero el énfasis en esta construcción del enemigo está puesto en las costumbres, ajenas a las propias las cuales refuerzan la alteridad. Incluso Eco habla de que a veces el enemigo se construye como distinto y feo porque es de clase inferior. Pero además, en un mundo patriarcal y misógino la "obra maestra [de la creación de enemigos] de la civilización moderna" (Eco, 2012, p. 27) es la bruja, representación máxima de la alteridad: mujer, fealdad, hedor, pobreza, marginación y pésimas costumbres[92]. De ahí la expresión, caza de brujas. Acabar con el enemigo antes de que "potencialmente" pueda atacarnos o acabar con nosotros.

En el contexto de la Guerra Fría, el enemigo de las potencias aliadas era el comunismo. En las guerras parciales, las "sucias", la alteridad mayúscula del Estado era el subversivo representado en su expresión máxima como guerrillero. El cual, para poder *socialmente* negarle todos los derechos, tenía que encarnar todo lo denostable que en el discurso se había creado para esa sociedad: delincuente, terrorista, entrenado por los comunistas, etc. Así, en el contexto de la Guerra Sucia en México, la cual abarcaría tres periodos presidenciales, el de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), el de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y el de José López Portillo (1976-1982) —y siguiendo los preceptos franceses y estadounidenses—, el enemigo no era ese extranjero que amenazaba con invadir. El enemigo se construía como todo aquel que se oponía a las ideas liberales o que quería debatirlas. El enemigo era todo

[92] Eco continúa su disertación diciendo que no se puede hacer abstracción de los enemigos. Incluso sostiene que la figura del enemigo no ha podido ser abolida por los procesos de civilización en donde se da además un desplazamiento de un objeto humano a una fuerza natural o social —la explotación capitalista, la contaminación ambiental o el hambre en el sur global—. [...] sostiene que podemos reconocernos a nosotros mismos solo en presencia de Otro. A ese otro lo encontramos insoportable porque no es nosotros. (Eco, 2012, p. 39).

aquel que amenazaba la posición de poder. El guerrillero encarnaba el miedo a la desposesión y la sola manera de eliminarlo es entrenar a *Fafner* para convertirlo en dragón, mismo si esto se diera fuera de un Estado de derecho. Al subversivo entonces se le perseguía, se le aniquilaba, se le desaparecía. En ese contexto es que se objetiviza la primera desaparición forzada —detenido-desaparecido— de la que se tiene registro en México, la de Epifanio Avilés Rojas, el 18 de mayo de 1969. A partir de ese momento las desapariciones forzadas en México entrarían al mundo de lo posible y se cometerían sistemáticamente en ese periodo[93].

José Reveles comenta cómo le tocó cubrir la nota de la primera desaparición forzada de la que se tiene registro en México y cómo ésta se dio en respuesta a una acción de un grupo guerrillero:

> Yo estaba trabajando como reportero, tenía 24 años, en Novedades, un periódico bastante gris. Más bien tirando a derechozo. Y de todas maneras yo cubría cuestiones de los estados, a veces policiales, a veces la guardia, a veces reportajes especiales. Pero ese día me tocó estar en *estados* y llegó una nota de Guerrero, hablando de que había sido capturado un guerrillero, ¿no? Que lo atrapó el ejército y se lo trajo al Campo Militar Número 1 en avión. Y según el ejército, según la SEDENA [Secretaría de la Defensa Nacional], lo quisieron capturar y en un enfrentamiento lo mataron. Pero según la versión de la municipalidad y del Estado de Guerrero, era que ese hombre, que era Epifanio Avilés Rojas, lo capturan y se lo traen en un avión al Campo Militar Número 1. Entonces estamos viendo una contradicción que se da en muchísimos casos de desaparición forzada. En otros ni siquiera hay datos, pero aquí está el dato preciso. Y bueno publicamos la versión un poco hasta irónica y así se publicó, ¿no? Que de ser cierto, se convertiría en el primer

---

[93] El año de la muerte de Lucio Cabañas —otro de los íconos guerrilleros de Guerrero (ver anexo II)—, 1974, fue el año donde hubo más desapariciones forzadas del periodo de la Guerra Sucia y se generalizaron a todo el país (Castellanos, 2009, p. 283). De hecho, el mismo cuerpo de Lucio Cabañas estuvo desaparecido por más de 28 años, inhumado de forma clandestina por militares de la 27^{ava} zona militar en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Sus restos fueron identificados hasta agosto del año 2002 (Muñoz Ríos, 2002).

> mexicano que al mismo tiempo que muere en un enfrentamiento con el ejército, está en un avión vivo siendo trasladado al Campo Militar Número 1. Y eso fue, es mayo de 1969 ¿Quién era Epifanio? Epifanio había participado en un asalto bancario que se denominaba en la época por parte de la guerrilla una expropiación. Al General Renato Vega Amador, quien era jefe de la policía, le metieron dos balazos en el estómago. Un caso muy sonado porque pues estuvo muy grave el jefe de la policía. [...] La persecución contra este grupo fue bastante feroz y lo fueron a perseguir hasta El Paraíso, allá cerca de Tecpan, porque era de por allá. Averiguaron y pues tenía el apellido, era Epifanio Avilés Rojas. Entonces era de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y era de apellido Rojas. Por tanto, no sospechoso, sino en efecto, pariente de Genaro Vásquez Rojas[94], ¿no? Entonces la persecución se dio en Guerrero y ocurre lo que ya te platiqué, que o lo matan o se lo llevan al Campo Militar, creemos que se lo llevaron al Campo Militar Número 1, porque no exhibieron a ningún cadáver. Entonces es el primer desaparecido que aparece en la lista del Comité Eureka. (José Reveles. Entrevista, el 16 de marzo de 2017).

A partir de la objetivación de esta primera desaparición, vendrían muchas más. De acuerdo con la Fiscalía Especial para la Investigación de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP)[95], durante

---

[94] Genaro Vásquez Rojas fue uno de los guerrilleros con mayor trascendencia en el estado de Guerrero. Ver anexo B.

[95] La FEMOSPP fue creada en el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y tenía como objetivo establecer una clara ruptura entre los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien había gobernado el país por más de 71 años con el Partido Acción Nacional (PAN), recién llegado al poder del ejecutivo federal. Las administraciones en cuestión eran las de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982) (Doyle, 2006). Sin embargo, las agendas políticas primaron sobre las de la justicia y la FEMOSPP fue disuelta el 30 de noviembre del 2006 —un día antes de la toma de posesión de Felipe Calderón—, sin haber sentenciado a ninguna persona por los crímenes del pasado. El informe nunca fue publicado oficialmente, *The National Security Archive* hizo público un borrador de éste titulado *Informe histórico presentado a la Sociedad Mexicana* (2006). En este borrador de más de 900 páginas, dividido en 12 capítulos, el capítulo 2 fue vetado y no es accesible. Para un análisis de los obstáculos políticos para el buen funcionamiento de la FEMOSPP y de la impunidad de los crímenes del pasado, ver: (Aguayo Quezada y Treviño Rangel, 2007; Treviño Rangel y Valdivia, 2015).

este periodo se tiene un registro de alrededor de 797 víctimas de desaparición forzada oficialmente reconocidas[96], las cuales principalmente estarían vinculadas directa o indirectamente a movimientos de reivindicación política tanto armados como no armados. El proceso de desaparición tuvo relativamente las mismas características que en otros países de América Latina en el mismo periodo: la privación de la libertad por agentes del Estado en lugares públicos y a la vista de familiares, como en el caso de la desaparición de Rosendo Radilla[97], o en el espacio doméstico como en el caso de Eliazar Castro Molina[98], pero con la característica de que la mayoría de las veces

---

[96] El número de desapariciones forzadas en el país durante la Guerra Sucia es controversial. De acuerdo con González Villarreal (2012), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sostiene que son 532 casos. De los cuales, 232 estarían documentados hasta el momento en que se le detiene, incluso con actas de detención. Por su parte, hasta 1978, el Comité Eureka tenía registrados 480 casos. La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas a los Derechos Humanos en México (AFADEM) 1200 y la FEMOSPP 797 (González Villarreal, 2012, p. 20). A pesar de estas discrepancias, todas las fuentes de información coinciden en que la gran mayoría de las desapariciones forzadas tuvieron lugar en Guerrero. Según la misma FEMOSPP, se estaría hablando de más del 60% (FEMOSPP, 2006).

[97] Rosendo Radilla Pacheco nació el 20 de marzo de 1914 y fue desaparecido cuando tenía 60 años, el 25 de agosto de 1974 por miembros del Ejército Mexicano mientras se encontraba con su hijo Rosendo en un autobús. Fue presidente municipal de Atoyac de Álvarez de 1955 a 1956 —año en el que, por cierto, se inauguró el Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez—. Era un líder social que estaba implicado en diferentes causas, en particular algunas relacionadas con la salud y la educación, pero también con los cafeticultores y campesinos de la sierra de Atoyac. Además era compositor de corridos —género musical mexicano que consiste en musicalizar una narrativa popular. Ha jugado un papel muy importante en diferentes movimientos sociales, al igual que la canción de protesta latinoamericana— que denunciaban la situación social y política de Guerrero (Para un perfil biográfico y su implicación social ver: Radilla Martínez, 2002 ; Radilla Martínez y Rangel Lozano, 2012 ; Sánchez Serrano *et al.*, 2014). Posterior a su detención fue visto por última vez en el Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, con signos de tortura. La tenacidad de sus familiares, en particular de sus hijas Andrea y Tita, además de organizaciones de la sociedad civil aliadas como es el caso de AFADEM, FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos), CMDPDH (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.), entre otros, lograron llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que México fuera sentenciado por primera vez por un caso de desaparición forzada. Ver: (CoIDH, 2009; CoIDH, 2015).

[98] "De acuerdo al testimonio obtenido por la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero en torno al caso de desaparición forzada de Eliazar Castro Molina, quien fue sustraído del domicilio ubicado en Calle Trece, lote 1833 esquina con avenida Silvestre Castro, de la colonia Juan R. Escudero, en la Ciudad y Puerto de Acapulco. Fue detenido el nueve de enero de 1975 cuando la Policía Preventiva

era perpetrada por agentes del Estado que se identificaban como tal al momento de la detención, seguida de la negativa de haber cometido la aprehensión (CIDH, 2015). Este procedimiento tenía como objetivo mostrar la impunidad del Estado como agente desaparecedor y así desarticular las bases de apoyo de los movimientos subversivos en las poblaciones. Al mismo tiempo, el mecanismo buscaba tener un mejor control sobre los cuerpos, incluso de los familiares cercanos de quienes desaparecían, tal como lo afirmó para el informe de la FEMOSPP el piloto teniente Margarito Monroy Candia sosteniendo que "la detención forzada era utilizada para obligar a las mujeres de los detenidos a tener relaciones sexuales con los militares de la Base Aérea Militar" (FEMOSPP, 2006, capítulo 5, p. 132). La Base Militar 27 en Atoyac, Guerrero; La Base Aérea No. 7, Pie de la Cuesta, Guerrero; la Base Naval de Icacos en Acapulco Guerrero, y principalmente El Campo Militar No. 1 —el más grande centro clandestino de detención y tortura de la historia de México (Castellanos, 2009, p. 157) —, serían los centros de detención clandestina por excelencia (FEMOSPP, 2006)[99]. Por otra parte, todo parece indicar que en Latinoamérica, México, junto con Guatemala, fue pionero en realizar los vuelos de la muerte —técnica privilegiada por la *Doctrina francesa antisubversiva*—. Esta técnica consistía

---

ingresó al interior del hogar para detener a Eliazar, quien dormía en la azotea de la casa, misma que se encontraba debajo de la Calle Trece, por lo que a los Policías se les facilitó brincar de la calle a la azotea, encontrando dormido al adolecente de sólo diecisiete años. Cabe mencionar que ya con anterioridad los agentes policiacos se llevaron a Guadalupe Castro Molina y Petronilo Castro Hernández. Esto sucedió el 20 y 22 de abril de 1972, respectivamente sin que hasta ahora las autoridades hayan informado de su paradero de ellos; Seis días después de la detención de Eliazar, fue detenido Daniel Martínez García, es decir el quince del mismo mes y año, y al otro día a Fabiola Castro Molina, quienes militaban en una organización armada y clandestina denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias, mismos que igual que Guadalupe y Eleazar, permanecen en calidad de desaparecidos" (Comverdad, 2014, p. 100).

[99] Mismo si estos centros controlados por el ejército eran efectivamente los centros clandestinos por excelencia, en la penitenciaría de Lecumberri, mejor conocida como el Palacio negro —la cual estuvo activa desde 1900 hasta 1976 y que hoy alberga el Archivo General de la Nación—, también se cometían graves violaciones a los derechos humanos de los presos políticos, así como desapariciones forzadas "temporales" y torturas. (Hernández, 2017).

en tirar los cuerpos al mar de las personas detenidas de manera arbitraria para "desvanecer" los cuerpos y garantizar que no fueran localizados (Mendoza García, 2015). Al menos 4 vuelos de la muerte se habrían realizado el 6, 7 y 23 de agosto y el 5 de septiembre de 1975 (Proceso, 2002b), por lo menos 7 meses antes del inicio del Proceso de Reorganización en Argentina, iniciado el 24 de marzo de 1976 y que utilizó este método como estrategia privilegiada para desaparecer a los "enemigos" del régimen[100].

> [L]os 'vuelos de la muerte' se siguieron haciendo con cierta periodicidad, hasta el final del periodo de Echeverría. La mayor parte de estos vuelos se realizaría en 1976. Del total de 30 vuelos denunciados, 19 se habrían hecho durante el periodo de Echeverría [...] Con el cambio de administración de gobierno y el consiguiente cambio de Secretario de la Defensa se nota, al principio, cierta cautela y apertura. Por principio, en los reportes militares —como radiogramas, telegramas y oficios—, los detenidos regresan a ser 'individuos' o 'maleantes' conforme a la muy subjetiva apreciación del ejército. Para entonces ya habían dejado de ser 'paquetes'[101]. Lo mismo, los

[100] Los vuelos de la muerte para deshacerse de las personas en detención arbitraria también fueron una práctica sistemática en América Latina. En Argentina en particular fueron masivos, aproximadamente 2700 según los registros en torno al Plan Cóndor (El Observador, 2011). El *modus operandi* se hizo público, en parte gracias a la entrevista que Horacio Verbitsky le hizo a Francisco Adolfo Scilingo, un exmilitar argentino que fue de los primeros en confesar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina —enjuiciado en España y condenado a más de mil años de prisión (El Observador, 2011)—. La entrevista fue publicada en el libro *El Vuelo* (Verbitsky, 2004) y gracias a estas revelaciones se pueden hacer paralelos con lo que estaba sucediendo en todo el continente. En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desclasificó una serie de fotografías, que corresponden a 20 cadáveres que fueron encontrados en las playas de Montevideo entre 1976 y 1979: "Todos los cuerpos tenían ataduras en las manos y los pies con cintas y cables. En la piel lucían señales de torturas con 'picana'" (Irigaray, 2011). Es decir, los métodos enseñados por la Doctrina Francesa Antisubversiva (Robin, 2004b). En Chile se estima que al menos 400 personas habrían sido arrojadas al mar entre 1974 y 1978 por medio de los helicópteros Puma (BBC Mundo, 2004).

[101] El término "paquete" se utilizaba para referirse a los detenidos que, seguido de una detención arbitraria, ilegalmente quedaban en manos del ejército para ser interrogados fuera de la protección de la ley y ser sometidos a tortura. A este tipo de operación se le llamó Luciérnaga. El 22 de julio de 1973 es la primera vez que el eufemismo "paquete" aparece en uno de los registros (FEMOSPP, 2006, capítulo 5, p. 73).

> primeros detenidos que reporta el ejército en esta nueva administración serían remitidos a la autoridad civil, práctica diferente a la que se evidencia en el último periodo de Echeverría. Los "vuelos de la muerte", conforme a denuncia de hechos, se reanudarían hasta fines de agosto de 1977, casi 10 meses después de que tomó posesión de su mandato (FEMOSPP, 2006, p.129 -130).

A pesar de que ha habido diversos esfuerzos por parte de las familias, de la sociedad civil e incluso por parte del gobierno, a través de la FEMOSPP, por ejemplo, hasta la fecha (octubre de 2018), no ha habido ninguna sentencia a nivel nacional para castigar por la vía jurídica los crímenes de lesa humanidad cometidos durante este periodo. Entre el fin de la Guerra Sucia, 1982, y principios de 1990, el recurso a la desaparición forzada para neutralizar a los disidentes políticos disminuyó considerablemente. No fue, hasta 1994, en el marco del levantamiento armado zapatista en Chiapas, que el recurso a estas técnicas y la formación en ellas, regresó con fuerza[102].

2.6 La desaparición de personas en el giro neoliberal mexicano

A finales de la década de 1980, el bloque de occidente liderado por Estados Unidos, fue quien resultó victorioso al finalizar la Guerra Fría, con la disolución de la Unión Soviética y la imposición de una economía neoliberal en la mayoría de los países del

---

[102] Por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la ONU, en su informe anual de 2018, publicó algunas gráficas históricas por país de los casos que han sido denunciados ante este organismo, entre ellos está México. Si bien estas gráficas no dan cuenta de la magnitud del fenómeno por país, ya que no todos los casos de desaparición forzada son dirigidos hacia y/o recibidos por el GTDFI —entre otras cosas para que sean recibidos debe haber manera de demostrar *a priori* que realmente están involucrados agentes del Estado en la desaparición—, sí dan cuenta de las dinámicas de las desapariciones forzadas en los países desde una perspectiva histórica. En el caso de México los picos están en los periodos de la Guerra Sucia (que es donde inicia el conteo), entre 1994 y 1997, y a partir de 2007 con un pico entre 2009 y 2010 (ver Apéndice C) (GTDFI, 2018, p. 43).

planeta. Estados Unidos consideró que en el continente americano el *fantasma* del comunismo había sido neutralizado —salvo en Cuba, claro—, en parte gracias a las diferentes estrategias que ellos mismos implementaron y apoyaron, para crear las condiciones para la instalación de regímenes dictatoriales y guerras civiles instigadas por grupos paramilitares a lo largo de Latinoamérica[103]. A partir de este giro, de finales de la década de 1980, desarrollaron nuevas estrategias para mantener su ideología capitalista y el avance estratégico de la economía neoliberal, a través de una nueva imposición a los países latinoamericanos: la transición de los regímenes dictatoriales y autoritarios hacia democracias liberales en todo el continente, para lo cual, las recomendaciones de los Documentos de Santa Fe I, se consideran como que fueron cruciales (Selser, 1990)[104].

---

[103] Paraguay (1954-1989), Guatemala (1960- 1996), Bolivia (1971-1978), Chile (1973-1990), Uruguay (1973-1985), Argentina (1976-1983), Colombia (1978-1982), El Salvador (1979-1992), son algunos de los ejemplos más estudiados.

[104] Una vez que Estados Unidos se fue afianzando como país hegemónico, el uso de la fuerza directa dejó de ser la principal estrategia de consolidación hemisférica, abriendo el paso a las "transiciones democráticas" de la década del1990 reguladas por el Consenso de Washington de 1989 y los Contratos de Ajuste Estructural. Estos fueron establecidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en cada uno de los países, para negociar esta "transición a la democracia" bajo la coacción de los intereses vinculados a los préstamos solicitados y/o a su deuda externa. Ver por ejemplo (Marichal, 2008). Otra de las estrategias fue la persuasión de élites económicas e intelectuales. Para lograrlo recurrieron a diferentes tácticas, entre ellas a la formación de élites políticas e intelectuales en la ideología económica neoliberal, siguiendo las recomendaciones de los Documentos Santa Fe I, entre ellas estaban: Exportar ideas que alentaran la libertad individual, la responsabilidad política y el respeto a la propiedad privada. Captar a la élite iberoamericana a través de medios de comunicación y publicaciones y fomentar la concesión de becas y premios para introducirse en el estudio de estos ejes prioritarios, etc. (Santa Fe Group y Heritage Foundation, 1980, p. 19). La formación de políticos en la universidades norteamericanas, los "Chicago boys" por ejemplo, formó parte de esta estrategia. Ver (Dezalay y Garth, 2002). Sin embargo, a pesar de este giro, el apoyo a grupos desestabilizadores nunca dejó de ser utilizado como mecanismo de control continental por Estados Unidos —mismo si ya no era el principal—, tal como fue el caso del Golpe de Estado en Honduras en 2009. Esta intervención se supo gracias a la infiltración de cables diplomáticos emitidos por la Secretaria de Estado Hillary Clinton, quien de hecho asumió y "justificó" su intervención en una entrevista con Juan González realizada en 2016. El vídeo está disponible en el vínculo siguiente. Democracy Now! ("Hillary Clinton defiende su rol en el golpe de Estado en Honduras al ser cuestionada por Juan González", 2016)

En este contexto, en México, los primeros pasos para el giro neoliberal se dieron en el mandato de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) —en lo que respecta a la democracia, la alternancia partidista en el Poder Ejecutivo Federal[105], llegaría casi veinte años más tarde, sin que la transición haya aún podido concrectarse—. En materia económica, este sexenio estuvo marcado por la pauperización de la economía y la caída significativa de la capacidad adquisitiva del conjunto de la población. Es decir, una vez que se creía haber dejado atrás la Guerra Sucia, vino un contexto de crisis económica muy severa: retroceso del PIB del -0.2%, un índice inflacionario del 100%, la deuda externa estuvo en su máximo nivel (80 mil millones de dólares), hubo un importante déficit de la cuenta corriente y una caída significativa de los precios del petróleo, el cual era la principal fuente de ingresos del país (Guillén Romo, 1984, p. 74-82; Salazar, 2004, p. 126).

Parecía que la única salida posible era dar un giro trascendental en la política económica en curso. Para ello, el gobierno se planteó como objetivo comenzar el paulatino retroceso en el gasto público, descentralizar las empresas paraestatales y afianzar la transición de la política de la sustitución de importaciones, hacia el crecimiento hacia afuera (liberalización de la economía). Sin embargo estas estrategias fracasaron y como corolario, hacia finales del sexenio —en 1987—, se dio el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lo que condujo a la fuga masiva de capitales y obligó al gobierno a implementar el Pacto de Solidaridad

---

(Consultado el 3 de agosto del 2017).
https://www.democracynow.org/es/2016/4/13/hear_hillary_clinton_defend_her_role.

[105] Utilizo aquí el término de alternancia partidista porque considero que la consolidación de la democracia en México sigue sin ser una realidad. En el año 2000, el Partido de Acción Nacional (PAN) accedió al pódium del Ejecutivo Federal después de 71 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder. Sin embargo, eso no significó que la democracia hubiera sido consolidada. Entre otros ver: (Meyer, 2013).

Económica (PASE), firmado entre los sectores productivos y el gobierno. Es decir, dar marcha atrás con el *Laissez faire, laissez passer* tan valorado por la filosofía liberal y por la economía neoliberal. El objetivo era evitar que siguiera en aumento la hiperinflación y que la población mermara aún más su poder adquisitivo. Se quería evitar una revuelta social.

En el siguiente sexenio, el de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se concretó el giro neoliberal, pero éste se dio en el marco de una crisis política debido a que Salinas de Gortari llegó a la presidencia en medio de una importante crisis de legitimidad acusado de fraude electoral[106]. En ese momento fue la transición más controvertida en el país, —hasta ahora solo superada por la de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), ver capítulo 3 *infra*—. En ese sentido, el gobierno de Salinas de Gortari debió hacer frente a la oposición de una importante coalición de las izquierdas que, posterior a este reclamo de fraude electoral, dio origen al Partido de la Revolución Democrática (PRD)[107], unas de las fuerzas políticas del país que durante casi tres décadas fue una de las más importantes.

---

[106] Entre las irregularidades que se dieron durante el proceso electoral, es que el sistema de conteo de votos "se cayó". Entre reclamos de los principales candidatos —Cuauhtémoc Cárdenas por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), quien se presume fue quien obtuvo la mayoría de votos; Manuel Clouthier por el PAN, Rosario Ibarra por el Partido Mexicano de los Trabajadores (madre de Jesús Piedra Ibarra, desaparecido en 1974 por fuerzas del ejército mexicano, quien ya había sido candidata en 1982 por el mismo partido); Heberto Castillo por el Partido Mexicano Socialista (PMS) —; el 13 de julio se dieron a conocer los resultados oficiales de la elección: 50.36% para Carlos Salinas de Gortari; 31.12% Cuauhtémoc Cárdenas y 17.07% para Manuel Clouthier. La Comisión Federal Electoral —en ese entonces aún no era un órgano descentralizado y dependía de la Secretaría de Gobernación con Manuel Bartlett a la cabeza—, no permitió la apertura de las urnas electorales para su reconteo y se procedió a su quema (Proceso, 2003b).

[107] El PRD se fundó el 5 de mayo de 1989 y surgió de una coalición de partidos políticos y movimientos sociales que se habían fortalecido como respuesta a la ineficaz actuación del Estado frente a la emergencia del sismo de la ciudad de México de 1985 (M. F. Somuano, 2007). Antes de rebautizarse como PRD, tras el reclamo de fraude electoral de la contienda presidencial de 1988, el partido que agrupaba las izquierdas en México se conocía como el Partido Socialista Mexicano, el cual

Entre los cambios más notorios en cuanto al quehacer político, es que con Carlos Salinas de Gortari se inició en el país el desplazamiento de las élites políticas provenientes de una formación en derecho a las formadas en economía, mayoritariamente egresadas de universidades estadounidenses y europeas (Dezalay y Garth, 2002; Salas Porras, 2014), tendencia que se mantiene hasta la actualidad. Salinas de Gortari, él mismo egresado de Harvard, se planteó como objetivo la "modernización" del país. Durante su sexenio la economía se estabilizó e incluso se recuperó —contención de la inflación[108], crecimiento de la población y renegociación de la deuda externa (Salazar, 2004, p. 126)—. Al mismo tiempo consolidó la reforma del Estado con la privatización de las empresas paraestatales comenzada sin éxito por su antecesor (banca, telecomunicaciones, televisión y la refinería del petróleo, etc.).

Entre otros de los proyectos ambiciosos de consolidación de la instauración del modelo neoliberal del país, fue la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre México, Estados Unidos y Canadá. Este tratado tripartita tenía para México 5 objetivos principales: promover las exportaciones (la consolidación del crecimiento hacia afuera), atraer la inversión extranjera y al mismo tiempo revitalizar el empleo a través de la instalación de la industria extranjera en México (mano de obra barata), apoyar la estabilidad en materia macroeconómica del país y tratar de lograr una convergencia con sus socios comerciales y finalmente; a partir de este *capital simbólico* (Bourdieu y Passeron, 1978) que le otorgaba la

---

estaba conformado por 6 fuerzas políticas: el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido Patriótico Revolucionario (PPR), el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y la Unión de la Izquierda Comunista (UIC). Al que se unió posteriormente el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Desde su fundación fue considerado como una de las tres principales fuerzas políticas del país al lado del PRI y del PAN. Entre otros ver: (V. H. M. González, 2005; Modonesi, 2011).

[108] Mientras que en 1987 la inflación fue de 167%, durante el primer año de Salinas bajó a 80% y para el fin de su mandato, en 1994, era de 7.1% (Salazar, 2004, p. 126).

asociación con sus poderosos vecinos del norte, establecer una red de tratados de libre comercio alrededor del mundo (Granados, 2016).

Mientras que la instauración de estas medidas económicas parecía ser un éxito antes de la grave crisis económica de 1994, a nivel social, el descontento de la población marginalizada aumentó. Las reminiscencias del movimiento armado socialista mexicano estaban aún latentes y las brechas sociales no hacían más que ampliarse. Esto dio origen al movimiento armado zapatista, —el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)—, en Chiapas, y al Ejército Popular Revolucionario (EPR), en Guerrero, cuyo brazo político es el Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR). En ese sentido, Carlos Montemayor (2010), sostuvo que en una reunión con el primer comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP) durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), el almirante Wilfrido Robledo, y con quien fuera el Coordinador general de inteligencia para la prevención —quien en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) sería el Secretario de Seguridad Pública—, Genaro García Luna; Montemayor les cuestionó sobre que a qué atribuían que los movimientos guerrilleros hubieran resurgido. El autor narra así sus respuestas, comenzando por la del almirante Robledo: "'A que no se acabó por completo con el grupo inicial', contestó. '¿No influye más que permanezcan las condiciones sociales en las que surgió la guerrilla?', repliqué. El almirante no respondió; García Luna quedó por unos segundos desconcertado: 'No había pensado en eso', comentó." (Montemayor 2010, 260). Aí, este resurgimiento de los grupos armados guerrilleros, dio nuevamente origen a una respuesta atroz por parte del Estado y, al resurgimiento también, de la desaparición forzada como ténica de neutralización política.

2.6.1 Las reminiscencias de la Escuela de las Américas. La desaparición forzada en el contexto de los levantamientos armados del EZLN y del EPR

A pesar de la importante ofensiva emprendida por el Estado mexicano para erradicar los grupos subversivos durante la Guerra Sucia, no lo lograron del todo. Algunos miembros de una célula de las Fuerzas de Liberación Nacional (FNL) como Fernando Yáñez —Comandante Germán—, junto con otros compañeros como Rafael Sebastián Guillén —Subcomandante Marcos, ahora Subcomandante Galeano— o Salvador Morales Garibay; se habían internado en la selva desde finales de la década de los años 1970 para preparar junto con los pueblos indígenas de los Altos de Chiapas una revolución armada.

Así, como heredero de la ideología de los militantes del FLN (principalmente marxista y del socialismo libertario), en un contexto de clandestinidad por las luchas guerrilleras en el territorio nacional, el 17 noviembre de 1983 surgió el EZLN, integrado por representantes de pueblos indígenas de Chiapas y mestizos excombatientes del FLN. Entre sus principales reivindicaciones estaban la autonomía de los territorios de los pueblos indígenas que se habían unido a esta lucha —llamados territorios zapatistas—, la construcción de un nuevo modelo de nación y la conformación mundial de una red de resistencias al modelo neoliberal. Durante diez años desarrollaron su estrategia y táctica militar para finalmente, el 1^{ero} de enero de 1994, iniciar la insurrección armada en varias cabeceras municipales de Chiapas, entre ellas San Cristóbal de las Casas, en el marco de entrada en vigor del TLCAN.

Así, miles de indígenas que usaban pasamontañas para proteger su identidad, en el estado más pobre del país y en un intento de demostración de fuerza, tomaron las armas. Pero además, en un contexto de post-Guerra Fría donde las juventudes habían dejado detrás de sí las luchas armadas y los movimientos masivos de transformación social, un movimiento que movilizaba con una maestría sin igual un simbolismo

poético e invitaba a la utopía: "un mundo donde quepan muchos mundos" —eslogan principal del movimiento altermundialista—, se mostraba como particularmente peligroso para el contexto político de desencanto que se presentaba en esa época. En ese sentido, la respuesta del Estado fue implacable. Se procedió a una estigmatización de sus líderes y militantes acusándolos de terroristas y se militarizó todo su territorio. Con muchas carencias se intentó establecer un proceso de diálogo entre las partes en disputa. En 1996 se firmaron unos acuerdos en San Andrés Larráinzar, los cuales el gobierno nunca cumplió[109].

Es en este contexto que reaparecen las desapariciones forzadas como técnica de contrainsurgencia en México. La mirada internacional estaba puesta en Chiapas debido a la simpatía y solidaridad que representaba este movimiento a nivel mundial. Sin embargo, no era el único lugar del país donde la potencialidad del conflicto estaba latente. Debido a las condiciones estructurales de pobreza y discriminación en las que vivía la población indígena y campesina del país, Oaxaca y Guerrero, que junto con Chiapas eran —y siguen siendo— de los estados más pobres del país, también amenazaban con levantarse en armas. Por lo mismo, el Estado mexicano estaba urgido a "resolver" el problema, y más en ese momento que el mundo estaba viendo para México a causa del conflicto. Si durante casi una década —fin de la Guerra Sucia y durante el sexenio de Miguel de la Madrid—, las desapariciones forzadas parecían no haber sido parte de una política sistemática de Estado —aunque sí habían

---

[109] El 16 de febrero de 1996 el gobierno mexicano de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), a través de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), después de varios meses de diálogo firmó en la ciudad de San Andrés Larráinzar unos acuerdos con el EZLN con el objetivo de darle una salida al conflicto. En dichos acuerdos se estableció que se harían modificaciones mayores a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgarle mayor autonomía a los pueblos indígenas: que contaran con mayor representación política en los órganos nacionales, garantizar el acceso al sistema de justicia y a la justicia misma, asegurar educación, protección y empleo, dar protección a los indígenas migrantes, etc. Dichos acuerdos cayeron en letra muerta puesto que nunca se cumplieron. Ver: (Hernández Navarro, 1998).

continuado a ejercerse de manera mucho más "selectiva"[110]—, durante el salinismo se volvieron a practicar con la finalidad de neutralizar —otra vez— la acción guerrillera, solo que esta vez, la del EZLN y la del EPR. La recurrencia de nuevo a este dispositivo, en un contexto de conflicto bélico, se explica debido a que había demostrado su "eficacidad" durante su implementación en México —y en Latinoamérica— durante las guerras sucias para desarticular movimientos subversivos.

---

[110] De acuerdo con el Comité Eureka, a partir del final de la llamada Guerra Sucia, en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) se habrían cometido 56 desapariciones forzadas plenamente documentadas; 12 en el periodo de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994); 9 en el periodo de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-1998) y 6 en los inicios del gobierno de Vicente Fox Quezada (2000-2006) entre su toma de poder el 1ero de diciembre el 2001 y el 19 de enero del 2002 (Alcántara, 2002). El registro del GTDFI es más amplio (ver apéndice C). Pero, además, existieron otras desapariciones forzadas que no entran en estas estadísticas puesto que aparentemente no se realizaron por motivos políticos. Por ejemplo, luego del terremoto de 1985 que devastó la Ciudad de México, entre los escombros se encontraron cuerpos desaparecidos con huellas de tortura: "Una de las personas que fueron encontradas muertas durante las labores de rescate tras los sismos de 1985 fue el penalista Saúl Ocampo, estaba amordazado, con los ojos vendados, cadenas en sus pies y manos, en la cajuela de un automóvil que apareció bajo los escombros del edificio de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, ubicado en la esquina de Niños Héroes y Doctor Liceaga. Su familia había reportado su desaparición desde el 12 de septiembre de ese año, fue encontrado diez días después, junto con las víctimas del terremoto, lo identificaron por tarjetas de presentación con teléfonos de su despacho y una credencial del Colegio de Abogados de México. [...] Diez días después, encontraron a otras seis personas muertas de nacionalidad colombiana, estaban en 'separos especiales' de la Policía Judicial del Distrito Federal. Dos de los cuerpos, hallados entre los escombros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, tenían muestras de tortura: un joven y una mujer. El primero fue identificado como Johnny Hernández Valencia, de 17 años, y el segundo era el de su madre Miriam Valencia Mariones, detenida cuando ella había ido a preguntar sobre el paradero de su hijo; sin embargo, sus muertes fueron censadas como parte del terremoto. Ambos fueron asesinados antes del temblor: el joven tenía heridas en el costado izquierdo y una de las versiones decía que el detenido había sido rescatado con vida, pero los judiciales los mataron al hacerle una herida profunda en el tórax. Por su parte, la madre del acusado, antes de ser privada de su libertad, fue extorsionada por los judiciales, quienes la condujeron a su domicilio en la calle Zempoala # 682, colonia Narvarte, para 'decomisarle' un Mustang con valor de 3 mil dólares y ropa. A pesar de haber descubierto estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la embajada de Colombia en México protestaron, mientras que las autoridades mexicanas negaron que se siguieran realizando este tipo de prácticas" (Delgadillo y Reyes, 2017). Durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y la de Enrique Peña Nieto (2012-2018) la desaparición forzada se practicará de manera exponencial generando una grave crisis de derechos humanos en México (ver capítulo 3 *infra*).

Un ejemplo *paradigmático* de esta reproducción de la desaparición forzada en este nuevo contexto, son los acontecimientos en el ejido Morelia, municipio Altamirano, Chiapas. Efectivamente, apenas una semana después del levantamiento armado, en este municipio, agentes del ejército mexicano tomaron el poblado, torturaron y desaparecieron a tres tzotziles que formaban parte de las bases de apoyo del EZLN. Tal como se relata en el estudio de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso 11.411:

> El día 7 de enero de 1994, agentes del Ejército mexicano penetraron violentamente en la comunidad indígena de Morelia, Municipio de Altamirano, Estado de Chiapas, en los Estados Unidos Mexicanos (en adelante el "Estado", "México" o el "Estado mexicano"), irrumpiendo en las casas, sacando a los hombres a golpes, reuniéndolos en la iglesia y en la cancha de básketbol del ejido y, en ese lugar, los obligaron a tirarse en el suelo con la cara contra el cemento. Mientras los tenían en esas condiciones, los soldados se dedicaron a saquear las casas y las tiendas del poblado, y a destruir la clínica de atención médica. Tres de los habitantes, Severiano y Hermelindo Santiz Gómez, y Sebastián Santiz López, fueron sacados del grupo de acuerdo con una lista que tenía un capitán del Ejército y trasladados a la sacristía de la Iglesia, donde fueron torturados y posteriormente subidos a un vehículo militar. El 11 de febrero de 1994 fueron encontrados los restos de los tres indígenas en el camino que une Altamirano con Morelia (CIDH, 1998)[111].

Es así que el ejército mexicano regresó a sus viejas prácticas de no atacar únicamente a los combatientes, sino también a sus familias y a comunidades enteras. De igual manera, es en este contexto del levantamiento armado en Chiapas —y dos años después con el levantamiento del EPR en Guerrero—, que la formación de agentes

---

[111] Dos meses después de firmados los Acuerdos de San Andrés (1996), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió el informe de admisión del caso del Ejido Morelia con el número 25/96. Dos años después, el 18 de febrero de 1998 emitió el informe final (48/97). Las recomendaciones de este informe tampoco han sido acatadas por el Estado mexicano. Ver: (M. Gómez, 2015).

del Estado mexicano en contrainsurgencia en la Escuela de las Américas regresó también con fuerza.

> En los primeros 49 años de la Escuela, México envió muy pocos estudiantes para recibir capacitación en la SOA [*School of Americas*, Escuela de las Américas] (766 en total). Ese número se incrementó considerablemente en 1996 y casi alcanzó los 315 en 1997. Es decir, 1/3 de la generación que se graduó. Los defensores de la SOA afirmaron que esta capacitación era necesaria debido a la mayor participación de México en la "Guerra contra las drogas". Sin embargo, eso era solo una cortina de humo. La verdad es que en 1997, solo el 10% de los estudiantes mexicanos tomaban cursos de antinarcóticos. El resto tomó las clases estándar de contrainsurgencia. En 1999, ningún soldado de México tomó cursos antinarcóticos, pero 40 de ellos tomaron los cursos de inteligencia militar. (Wood, s.f. Traducción personal).

En ese sentido, y de acuerdo con el mismo Wood (s.f.), varios de los generales enviados a Chiapas a combatir al EZLN, eran egresados de la Escuela de las Américas. La 31^{ava} Zona Militar, localizada cerca de San Cristóbal de Las Casas, habría sido la sede una especie de reunión de generación de egresados de la Escuela de las Américas. Por ejemplo, tres de los generales del ejército que fueron asignados al conflicto —Gastón Menchaca Arias, comandante de la Zona Militar, Miguel Leyva García y Enrique Alonso Garrido—, eran todos exalumnos de la Escuela de las Américas. De hecho, Menchaca Arias y Leyva García habían sido compañeros de clase en 1971. Luego se les uniría otro graduado de la *escuela del terror*, el general Juan López Ortiz, quien fue enviado a Chiapas con tropas bajo su mando desde los estados de Campeche y Tabasco. Éste último tenía una reputación sanguinaria desde 1974, cuando por primera vez había luchado contra el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas en las montañas de Guerrero.

Al igual que Nazar Haro cuando estaba frente a la DFS y que a través del discurso quería denostar a los *Otros* para construirlos como enemigos, López Ortiz dijo en 1994 en una entrevista con la revista Impacto que los miembros del EZLN eran: "gente muy criminal [que] se atreven a llamarse a sí mismos un ejército mientras

envían gente a la muerte, armados con rifles de madera, cuando usan personas inocentes como escudos humanos y se cubren la cara con pasamontañas" (Wood, s. d.). De hecho, en los medios de comunicación oficiales había toda una campaña de demonización —sustentada en gran parte en el racismo de la población mexicana—, contra las reivindicaciones zapatistas. En la imagen pública se les construyó entonces como los pobres, feos, hediondos que estaban en contra del progreso que representaba el TLCAN. Puestos así, prácticamente como subhumanos, el Estado buscada legitimizar todo atropello a sus derechos fundamentales. Para el Estado, los indígenas zapatistas eran así los *desaparecibles* del Sudoeste mexicano en este segundo periodo[112].

Un mes después de iniciado el levantamiento, en el marco de la invasión al territorio controlado por el EZLN por parte del ejército, llegaría un graduado más de la Escuela de las Américas a la escena. El general Manuel García Ruiz —clase de 1980, el mismo año y curso que el general Garrido—, quien se jactó ante periodistas del trabajo hecho por el ejército en la invasión de la selva lacandona y las masacres dejadas a su paso (Wood, s. d.). De acuerdo con el mismo Wood, en el mes de julio del mismo 1994, a la 31 zona militar también habrían llegado elementos de la armada argentina, para ayudar al ejército mexicano a perfeccionar sus tácticas de contrainsurgencia. Estos mismos argentinos habrían trabajado para la CIA en la formación de escuadrones de la muerte respaldados por Estados Unidos en Honduras,

---

[112] El capital de simpatía que los zapatistas atraían de diferentes partes del mundo, y no solo de los pueblos indígenas, sino de personas de diferentes horizontes, estratos sociales y la conformación que habían logrado de importantes redes de apoyo internacionales, dificultaba —aunque no impedía— la implementación de tácticas de contrainsurgencia, entre ellas la desaparición forzada. Sin embargo, a pesar de esta observación internacional, diferentes ataques y masacres se perpetraron en contra de las comunidades zapatistas. La Masacre de Acteal en el municipio de Chenaló, Chiapas del 22 de diciembre de 1997 donde miembros del grupo Las Abejas fueron atacados por grupos paramilitares asesinando a 45 indígenas tzotziles es una clara muestra de ello. Ver: (Bellinghausen, 2008).

dirigidos por el graduado de la Escuela de las Américas, el general Gustavo Álvarez Martínez (Wood, s.f.). De esta manera en Chiapas se conjuntaron, nuevamente, las dos escuelas clásicas del continente, la francesa antisubversiva y la estadounidense contrainsurreccional. De hecho, según Darrin Wood (1998), a partir del levantamiento armado, a petición del gobierno mexicano, la Escuela de las Américas puso en marcha en 1996 un curso especial para las fuerzas armadas mexicanas titulado "Curso de instrucción especial México", el cual formó a 59 oficiales mexicanos. Cabe destacar que desde el 1^{ero} de enero de 1994 cuando llegó el ejército para contrarrestar el levantamiento armado, nunca salió de allí.

Dos años después del levantamiento del EZLN, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), se levantó igualmente en armas. Éste era también heredero del movimiento armado de la década de los años 1970, en particular del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas (ver anexo B), integrado por militantes de Guerrero y de Oaxaca, el cual se autodenominó como una "autodefensa armada" frente a la guerra de baja intensidad del Estado mexicano. Al conmemorarse un año de la emboscada que dio origen a la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1995, hizo su primera aparición pública. En esta emboscada-masacre, diecisiete campesinos fueron asesinados por miembros del grupo motorizado de la policía guerrerense, bajo las órdenes del gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer[113]. Estas

[113] Esta matanza se mantiene en total impunidad. Esto a pesar de que hay un vídeo disponible, grabado en vivo por los mismos miembros del grupo policiaco y donde los perpetradores son fácilmente identificables. El vídeo de alrededor de 5 minutos está disponible en el link siguiente (Consultado el 23 de agosto del 2018): https://www.youtube.com/watch?v=wn1LJRaFoQ0&has_verified=1 (Canal 6 de Julio, 1995). Entre las pocas repercusiones que hubo, pero que están lejos de llevar a un proceso de justicia, es que el gobernador fue orillado a pedir licencia definitiva del cargo ante el Congreso, casi un año después de haber ocurrido la masacre, es decir, el 12 de marzo de 1996. Cabe señalar de igual manera que el general Adrián Maldonado Ramírez, igualmente formado en la Escuela de las Américas, fue destituido de su cargo en Guerrero, un mes después de la masacre de Aguas Blancas, es decir, en julio de 1995. (« Apuntes de The School of Americas », s.f.).

personas eran miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y se dirigían a una manifestación para exigir la aparición con vida de su compañero Gilberto Romero Vázquez, quien había sido detenido-desaparecido por agentes del Estado un mes antes en Atoyac de Álvarez Guerrero, en el marco de reivindicaciones por la salida del ejército y las corporaciones policiacas de la zona[114]. Benigno Guzmán, fundador de la OCSS recuerda en 2014, 19 años después, el contexto de esta desaparición forzada —y posterior masacre en su búsqueda—, que daría origen al levantamiento del EPR:

> El 24 de mayo [de 1995] fue el último día que su familia vio a Gilberto Romero. Nuestro compañero fue víctima de otra guerra sucia, la de los 90's, que aún no tiene una comisión de la verdad. El 28 de junio, cuando nuestros compañeros fueron masacrados en el vado de Aguas Blancas del municipio de Coyuca de Benítez nos dirigíamos a Atoyac para exigir su presentación con vida [...] ¿Cuántos años deben pasar para que este caso sea investigado?, ¿Se castigará a los responsables intelectuales y materiales?, ¿Cuál es la responsabilidad que tienen en esta desaparición la entonces presidenta municipal [María de la Luz Núñez Ramos] y Rubén Figueroa Alcocer [el gobernador]? [...] Como en todas las desapariciones por razones políticas los familiares, amigos y compañeros seguimos esperando para verlo con vida y nos preguntamos ¿Quién podrá devolvernos los años que nos robaron de su presencia?, ¿Cómo se puede resarcir el dolor de la ausencia? Mientras tanto, en la OCSS lo seguimos recordando para que el polvo del olvido no cubra su memoria y los responsables intelectuales y materiales no crean que podrán quedar impunes (El Sur, 2014).

Gilberto Romero Vázquez continúa desaparecido hasta el momento del depósito de esta tesis y la represión y persecución contra este grupo nunca cesó. El 25 de mayo del 2007 fueron víctimas de desaparición forzada dos más de los miembros vinculados con esta organización que dio origen al EPR, Edmundo Reyes Amaya y

---

[114] Agradezco a Claudia Rangel Lozano y Evangelina Sánchez haberme proporcionado esta información.

Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la última vez que fueron vistos con vida fue en el Campo Militar Número 1 (Reyes Mandonado, 2017). A pesar del establecimiento de una Comisión de mediación entre el EPR y el gobierno federal en el contexto de estas dos últimas desapariciones, tampoco ninguna de estas personas han sido presentadas[115].

De esta manera, en esta sección se pudo observar que luego de un periodo donde el recurso a la desaparición forzada disminuyó considerablemente después de la Guerra Sucia (1964-1982), en el marco de los levantamientos armados en Chiapas y Guerrero, la aplicación de las técnicas de contrainsurgencia regresaron con fuerza e incluso la formación en la Escuela de las Américas se intensificó —como nunca antes—, con el objetivo de neutralizar a los nuevos "enemigos internos". Si bien la desaparición forzada no fue una de las principales estrategias en ninguno de los dos casos, sí se les dio el mismo tipo de aplicación. En los ejemplos que aquí fueron desarrollados, primero se recurrió a ella para atacar a las bases de apoyo, luego para desarticular movilizaciones sociales que se oponían a la militarización y presencia policiaca en zonas tradicionalmente abandonadas por el Estado y donde éste se hace presente solo para reprimir.

Sin embargo, tal como se desarrollará en la siguiente sección, el recurso a la desaparición de personas tal como ha sido desarrollado hasta el momento, no fue el único. En esta segunda periodización, mientras que en el Suroeste mexicano habría

---

[115] La comisión de mediación entre el EPR y el gobierno federal mexicano estuvo integrada por Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor, Pablo Romo Cedano y Samuel Ruiz García. La compilación de este proceso de mediación, que en particular aborda una revisión histórica de las desapariciones forzadas en México, así como los aportes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es consultable en línea. (Serapaz, 2010): http://www.cedema.org/uploads/COMED.pdf.

una continuidad en el uso de la desaparición forzada durante la Guerra Sucia; en la frontera norte, cientos de mujeres estaban siendo desaparecidas y asesinadas y no necesariamente por una *Razón de Estado* (Foucault, 2007b), en el sentido que tradicionalmente se entiende, por una cuestión de "seguridad nacional" o de perpetración en el poder. Efectivamente, en la misma década de 1990, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el marco del giro neoliberal, cientos de mujeres fueron desaparecidas y/o asesinadas. Sin embargo, este recurso de la apropiación de los cuerpos por medio de la desaparición, ya no correspondía a una voluntad de neutralizar al *enemigo interior*. El objetivo era difuso, al menos en un primer momento. En este nuevo contexto, claramente se dio un desplazamiento de la figura del detenido-desaparecido en el sentido político al cual estaba asociado, al de desaparición forzada de personas en un sentido amplio. En los primeros, estaba clara la actuación directa de los agentes del Estado. Se sabían los objetivos. En el segundo, no necesariamente se da la actuación directa de los agentes del Estado, aunque pueden considerarse desapariciones forzadas, porque se realizan con su aquiescencia, su complicidad y, ante su masividad, se podría decir que incluso por su negligencia.

2.6.2 La desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua

Con el giro neoliberal mexicano asistimos a un nuevo fenómeno de apropiación de los cuerpos en donde la *Razón de Estado* en su sentido tradicional, liberal, ya no sería el principal móvil de la desaparición, sino sería la razón económica. En este contexto particular, los cuerpos de mujeres en situación de vulnerabilidad serían considerados como *homo sacer*, como mercancías en un sistema capitalista (Valencia Triana, 2016). Efectivamente, en paralelo a la entrada en vigor del TLCAN, en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, comenzó a denunciarse un "fenómeno" de desaparición y muerte masiva de mujeres sin precedente: entre 1993 y 2008 más de 400 mujeres habrían sido asesinadas en condiciones de alta violencia y más de 600

estaban desaparecidas (Segato, 2013, p. 2), en donde la gran mayoría de los crímenes continúan aún en la impunidad[116].

Ciudad Juárez es sede de la industria maquiladora de México desde 1965, cuando se inició su instalación a través de la implementación del Programa de Industrialización Fronteriza. Desde entonces la industria no ha dejado de crecer, presentando su mayor desarrollo a partir de la entrada en vigor del TLCAN (Turner Barragán, 2006). Diferentes empresas de procesamiento de materias primas y bienes intermedios se han establecido en la frontera mexicana con la finalidad de reducir los costos de producción a través del empleo de mano de obra barata (Carrillo Viveros y Hernández, 1985, p. 19). En paralelo, desde la época postrevolucionaria, pero con más auge desde la instalación de las maquilas, Ciudad Juárez desarrolló una fuerte industria del ocio nocturno para connacionales y estadunidenses que cruzando la frontera podían tener menos restricciones y un menor costo para su diversión (González Rodríguez, 2002). Ciudad Juárez fue así una de las ciudades pioneras en México donde se implementó una economía de corte neoliberal: poca —o casi inexistente— presencia del Estado, flexibilización de horarios con inexistentes o muy precarias prestaciones sociales. Precarización de las condiciones de vida de los y —sobre todo— de las trabajadoras que están en la escala más baja de la cadena de producción, etc. Lo anterior, aunado a la ausencia del Estado de Derecho, contribuyó

---

[116] Con el paso del tiempo, se han desarrollado diferentes teorías que intentan explicar qué es lo que pasa en Ciudad Juárez. Al principio se intentó inculpar a un ciudadano egipcio, Abdel Latif Sharif, quien fue acusado de haber cometido más de 20 feminicidios, pero solo fue juzgado por uno. Fue detenido el 3 de octubre de 1995. Sin embargo, mientras él estaba en prisión, centenas de mujeres seguían desapareciendo. Se decía entonces que era el autor intelectual. Sin embargo, Latif falleció en 2006 y los feminicidios no han cesado de aumentar (Breach y Villalpando, 2006). Además de haber culpado al ciudadano egipcio de los asesinatos en Ciudad Juárez, durante varios años circularon varias hipótesis del porqué de estos crímenes. Entre otras cosas se decía que podían corresponder a asesinos seriales, para tráfico de órganos, videos snuff, ritos satánicos, etc. Sin embargo, Diana Washington demuestra que estas hipótesis en sí mismas no se sostienen. Ver: (Washington Valdez, 2005).

de manera determinante para que mujeres que se encontraban ya en situación de vulnerabilidad, fueran objeto de las mayores atrocidades que pueden cometerse sobre los cuerpos. Las mismas que se practicaban para contrarrestar a la insurgencia: desaparición, tortura —incluida la tortura sexual y psicológica [117]— y muerte. Además de la negación del hecho y de la impunidad que caracteriza estos crímenes.

En definitiva esta violencia y desapariciones de mujeres en el contexto juarense, no pueden ser consideradas como una continuidad de aquellas perpetradas en el marco de la lucha antisubversiva. Éstas serían diferentes a las del contexto de la Guerra Sucia, del EZLN y del EPR —y un preludio a la masificación de las desapariciones en el segundo lustro de la década del 2000—, puesto que el objetivo no sería neutralizar a los opositores políticos. Efectivamente, contrario al recurso del dispositivo de la desaparición en los escenarios de guerrilla, el objetivo de las desapariciones en Ciudad Juárez, sería "simplemente" apropiarse de los cuerpos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a condiciones estructurales de pobreza y desvinculación social. En un contexto donde el Estado de Derecho —entendido como la sumisión del poder al derecho formal legal— es inexistente. En ese sentido Sayak Valencia Triana (2016) propone hablar de *capitalismo gore*:

---

[117] Para que en los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos se considere que se infligió una práctica de tortura deben presentarse tres elementos: presencia de dolor o sufrimiento físicos o mentales, que éstos hayan sido ejecutados con esa intencionalidad de infligir dolor y que éstos sean ocasionados por un agente que actúa en representación del Estado (Thede, 2003). En el caso de las mujeres en particular, el reconocimiento de formas específicas de tortura cometidas contra nosotras es relativamente reciente. Éste data de principios de la década de 1990 cuando se comenzó a señalar la ausencia de un enfoque de género. Es decir, la omisión del abuso sexual y la violación como formas de tortura dirigidas específicamente contra mujeres como recurso para aterrorizar, intimidar, castigar u obtener confesiones. La violación es así considerada como una forma de tortura física y mental. La dimensión psicológica comprende humillación, victimización y temor de ostracismo público (Thede, 2003).

> [E]ntendiéndolo como 'la dimensión sistemáticamente descontrolada y contradictoria del proyecto neoliberal.' Producto de las polarizaciones económicas, el bombardeo informativo/publicitario que crea y afianza la identidad hiperconsumista y su contraparte: la cada vez más escaza población con poder adquisitivo que satisfaga el deseo de consumo. Se crea de esta manera subjetividades capitalistas radicales que hemos denominado *sujetos endriagos* y nuevas figuras discursivas que conforman una *episteme de la violencia* y reconfiguran el concepto de trabajo a través de una agenciamiento perverso, que se afianza ahora en la comercialización necropolítica del asesinato, evidenciando las distopías que traen consigo el cumplimiento *avant la lettre* de los pactos con el neoliberalismo (masculinista) y sus objetivos (Valencia Triana, 2016, p. 19. En itálicas en el texto original).

Sayak Valencia entiende por sujetos endriagos —mitad hidra, mitad dragón, *fafners* pues—, a sujetos en sí mismos marginalizados, obedientes a la masculinidad hegemónica, que deciden hacer uso de la violencia para adquirir capital y empoderamiento. Para la autora, el uso excesivo de la violencia en el país, respondería a las demandas hiperconsumistas del capitalismo a las cuales los sujetos endriagos no pueden acceder por ser parte de la periferia. Así, este *capitalismo gore*, devendría en una exaltación del machismo donde las violencias son exacerbadas y que a través de prácticas sangrientas —la sumisión de los cuerpos—, comercia con las vidas de seres humanos con la finalidad de conseguir un mayor poder, no solo económico, sino también político (Valencia Triana, 2016). Solo que estos sujetos endriagos, no se atacan al gran capital, ni actúan en tanto que lobos solitarios. Se atacan al eslabón más "débil" —mujeres pobres, desarticuladas socialmente—, pero para que el aparato de Estado neoliberal no se active contra ellos —aquel que se somete al orden jurídico para regular las relaciones comerciales (Foucault, 2007b)—, su acción se supedita a redes previamente establecidas que actúan en connivencia con agentes del Estado.

En ese sentido y de acuerdo con los planteamientos de la periodista Diana Washington Valdez que durante más de 10 años investigó y documentó los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez —y que actualmente se encuentra exiliada y bajo

protección federal en Estados Unidos (Segato, 2013)—, es que estos crímenes serían planeados y en parte perpetrados, por motivos diversos, por miembros de las clases altas y políticas de ambos lados de la frontera. Que, además, tienen nexos con cárteles de la droga —en particular del Cártel de Juárez— y que compran la protección de la policía (Washington Valdez, 2005). Es decir, que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Así, las mujeres de Ciudad Juárez se convirtieron en las "nuevas" *desaparecibles*[118] de la economía neoliberal. O sea, fuerza de trabajo desvinculada de las redes de protección del Estado y de los círculos cercanos como es la familia —muchas de las mujeres víctimas de estos crímenes no son oriundas de Ciudad Juárez y se encuentran en situación de migración debido al polo de atracción de trabajo que representan las maquilas y la cercanía con la frontera con Estados Unidos—. De igual manera, en esta década la mayoría de estas mujeres que eran asesinadas y/o desaparecidas, respondía a un mismo patrón: "de familia pobre, menudas, morenas, de cabello largo" (González Rodríguez, 2002). Es decir, pertenecían a un mismo patrón de consumo (Valencia Triana, 2016, p. 15), fuere cual fuere su finalidad. En ese sentido, para estas mujeres, el poder económico se convertiría en una especie de *poder soberano* (Agamben, 2005) en el interregno donde triunfa la corrupción.

---

[118] En ese sentido, Achille Mbembe (1999) en su texto sobre la necropolítica desarrolla una crítica al concepto de *biopoder* en Foucault ya que considera que éste es insuficiente para reflejar las formas contemporáneas de sumisión de la vida al poder de la muerte en un estadio neoliberal de la economía donde existe una política de la muerte para quienes son excluidos o excluidas. Mbembe entiende por excluidos quienes no son rentables para el poder, ni para implementar sus políticas. Su ejemplo central es el del esclavo que experimenta una triple pérdida: de un hogar, de los derechos sobre su cuerpo y de su estatus político, lo que equivale a una dominación absoluta. En el caso de las *muertas y desaparecidas de Juárez* la explicación no es que no sean rentables al poder puesto que representan fuerza de trabajo explotable, pero sí son consideradas como "sacrificables" puesto que las condiciones de pobreza más su desarticulación social las hacen aún más vulnerables.

En el mismo sentido, mismo si en este contexto particular la intención de causar terror entre la población y llevar a la desmovilización social, pareciera no ser el principal objetivo, sí hay ciertas características que pueden asociarse a una voluntad de mostrar el nivel de impunidad y la vulnerabilidad de los cuerpos desarticulados socialmente para hacerles desaparecer. En primer lugar, a pesar de que hay muchas mujeres que se encuentran aún desaparecidas, el cadáver de muchas otras ha aparecido en parajes cercanos a las zonas conurbadas —campo algodonero[119], Lote Bravo, etc. — con la finalidad de mostrar su ejecución. Si bien es cierto que muchas de las veces el lugar del hallazgo del cuerpo no es el mismo que donde se cometió el crimen, lo que dificulta la trazabilidad del delito, también es cierto que en muchos de los casos no hay un interés de ocultamiento. Es decir, lo que se busca es mostrar el cadáver en condiciones de lo que Pamela Colombo (2017) llama una *entrehumación*. Es decir, el *poder desaparecedor* (Calveiro, 1998), al mismo tiempo que oculta, da a ver imágenes de muertes posibles. En ese sentido, la autora señala que este espectáculo de la muerte, sería un "espectáculo interrumpido", puesto que muestra solamente el final. Es decir, exhibe la manera en que se pueden deshacer de los cuerpos pero escamotea el proceso por el cual ese cuerpo apareció allí y en esas condiciones (Colombo, 2017). Lo que se busca entonces es dejar al descubierto los signos de tortura, el ensañamiento contra el cuerpo en total impunidad y en particular el de estas mujeres que en su mayoría se encuentran en el eslabón más débil en su contexto social.

---

[119] De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), emitió una sentencia contra México por los crímenes contra "la desaparición y ulterior muerte" de ocho jóvenes encontradas en el sitio llamado Campo algodonero el 6 de noviembre del 2001. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó ante la Corte la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de medidas de protección a las víctimas; la falta de prevención de estos crímenes, pese al conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género en la zona; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos; y la denegación de justicia y la falta de medidas de reparación adecuadas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009) (ver capítulo IV, *infra*).

En esta línea, este escamoteo del proceso de muerte dejándoles en condición de *entrehumación*, podría ser asociado a la finalidad del suplicio del que habla Michel Foucault donde el principal destinatario es el pueblo al cual se le muestra el poder del castigo que recae sobre los cuerpos (1989, p. 69). Laura Rita Segato en su texto *La escritura en el cuerpo de las mujeres* (2013) afirma con respecto a los cuerpos de estas mujeres muertas y desaparecidas en Ciudad Juárez:

> Su resto de existencia persiste sólo como parte del proyecto del dominador [...] Es por esto que una guerra que resulte en exterminio no constituye victoria, porque solamente el poder de colonización permite la exhibición del poder de muerte ante los destinados a permanecer vivos. El trazo por excelencia de la soberanía no es el poder de muerte sobre el subyugado, sino su derrota psicológica y moral, y su transformación en audiencia receptora de la exhibición del poder de muerte discrecional del dominador. Es por su calidad de violencia expresiva más que instrumental –violencia cuya finalidad es la expresión del control absoluto de una voluntad sobre otra– que la agresión más próxima a la violación es la tortura, física o moral. Expresar que se tiene en las manos la voluntad del otro es el *telos* o finalidad de la violencia expresiva. Dominio, soberanía y control son su universo de significación. Cabe recordar que estas últimas, sin embargo, son capacidades que sólo pueden ser ejercidas frente a una comunidad de vivos y, por lo tanto, tienen más afinidad con la idea de colonización que con la idea de exterminio. En un régimen de soberanía, algunos están destinados a la muerte para que en su cuerpo el poder soberano grabe su marca; en este sentido, la muerte de estos elegidos para representar el drama de la dominación es una muerte expresiva, no una muerte utilitaria. (Segato, 2013, p. 20-22).

Así, la práctica de la desaparición forzada de personas sería entonces utilizada en este contexto por nuevos actores y con nuevos objetivos. A diferencia de las desapariciones por motivos políticos, la impunidad de las desapariciones de mujeres del post-TLCAN en Ciudad Juárez, en un contexto maquilador fronterizo, abriría el paso a las desapariciones de la economía neoliberal —economías predatorias—, que aumentaron de manera exponencial en los años siguientes, en particular durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, del PAN (2006-2012) y Enrique Peña Nieto del PRI (2012-2018). Es decir, se dio una transición entre la figura del *detenido-*

desaparecido donde la responsabilidad del Estado es claramente identificable —el arresto, la detención, la negación y la desaparición de personas—, al de *desaparecidas*, así sin más, donde el Estado intenta difuminar su participación directa o indirecta —y su responsabilidad—, negando una vez más su participación.

Conclusión

En el imaginario social, prácticas tales como son la desaparición forzada y la tortura corresponden a regímenes dictatoriales de la segunda mitad del siglo pasado tal como existieron en Chile y Argentina. Sin embargo, éstas estuvieron presentes a lo largo del continente también en países con regímenes llamados autoritarios e incluso en otros que se reclamaban de la democracia liberal como México. Bajo esta lógica, difícilmente se logra pasar el mensaje de que estas técnicas formaron parte de una política continental con el pretexto de la lucha contra la amenaza del comunismo y en nombre de ella se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y, esto, sin necesariamente tener que ver con una amenaza real a la seguridad nacional, sino sobre todo en defensa de un orden económico establecido, el capitalismo. Países que se autodenominaron como garantes de la democracia como Estados Unidos e incluso como bastiones de la defensa de los derechos humanos, como Francia, fueron los artífices de estas prácticas entrenando a personal militar de la mayoría de países del continente.

En México, las desapariciones forzadas como política de Estado comenzaron a ejecutarse en el marco de la Guerra Sucia contra disidentes políticos que según la lógica de la *Doctrina del Enemigo Interno* representaban un riesgo para el régimen y esta concepción de disidencia no solo se aplicaba a las personas que decidían involucrarse en un rol activo como fue la lucha armada, a los guerrilleros, sino también a sus potenciales bases de apoyo como podía ser cualquier miembro de su comunidad, personas cercanas o familiares. Es decir, se aplicaban los preceptos

recopilados por el Coronel francés Trinquier en su manual La *Guerra Moderna* (1961), los cuales rezaban que el enemigo era todo aquel que pudiera arropar la subversión. Así, asistimos al nacimiento de un primer sujeto político en torno a las desapariciones forzadas —el cual también atraviesa el continente—, el que se moviliza en torno al detenido-desaparecido. Es decir, como detenido-desaparecido se nombraba —y se buscaba—, a las personas que eran aprehendidas por miembros de las fuerzas del Estado, ya fueran miembros de las policías, del ejército, pero sobre todo miembros de la Dirección Federal de Seguridad y que pasaban por el proceso del arresto, la detención —la mayoría de las veces arbitraria—, la negación de la detención y finalmente la negativa a revelar el paradero a sus familiares. En este tipo de desapariciones la acción directa del Estado era mucho más fácil de fincar puesto que muchas veces las detenciones se hacían en presencia de testigos como fue el caso de Rosendo Radilla a quien se llevaron en presencia de su hijo, caso que ya fue juzgado y sentenciado como una desaparición forzada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH, 2009).

Una vez que la eficacia de esta técnica para ocasionar terror en la población y desarticular a los *enemigos del régimen* fue probada, ésta se siguió reproduciendo incluso fuera del periodo de aplicación como política continental, es decir, de la Guerra Fría. Durante la década de 1990 otros movimientos disidentes que tomaron las armas como fueron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o el Ejército Popular Revolucionario también fueron flanco de la aplicación de las políticas de contrainsurgencia incluida la desaparición forzada. Pero además, a diferencia de otros países del Cono Sur, la impunidad que la desaparición de personas continuaba a representar en el país, llevó a otros actores a apropiarse de esta técnica. Es así que comienza a darse un fenómeno de gran amplitud de desaparición de mujeres en la frontera norte de México, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en connivencia con actores del Estado y en un contexto de total impunidad. De esta manera es como aparece un segundo sujeto político en torno a las desapariciones forzadas, el que se va a generar

en torno a las *muertas y desaparecidas de Juárez*, las cuales no figuraban como militantes ni representaban un peligro para el régimen, ni para el orden económico establecido. La impunidad de esta *nueva figura* (Gatti, 2008) de desaparición, abrirá la puerta a otras figuras posibles de las desapariciones que se harían masivas a partir del 2006, una vez que se da un nuevo giro en las políticas de seguridad de México, tal como será desarrollado en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO III

EL (*QUASI-*) OCASO DE LOS DIOSES. LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN EL CONTEXTO DE LA ALTERNANCIA POLÍTICA

Introducción

En *El Ocaso de los Dioses*, la cuarta ópera de la tetralogía, Richard Wagner hace alusión a la mitología germánica según la cual, la guerra profetizada entre los dioses conduciría al fin del mundo. Pero, Wagner, le da un giro a la historia en la cual el amor entre Sigfrido —héroe de la tetralogía y nombre de la tercera ópera— y Brunilda, la más representativa de las *valquirias*, tras la autoinmolación de esta última, y la muerte y cremación de ambos, sus cuerpos al incinerarse, expiarían la maldición del *Anillo del Nibelungo*, con lo cual ardería el *Walhalla* dejando al mundo sin la tiranía de los dioses, liberándole así para un nuevo comienzo. En México, el ocaso de los dioses se aparenta más a la mitología germánica —al menos por el momento— que al final de la tetralogía de Wagner, puesto que aquí se ha perdido todo punto de referencia de lo que debiera ser la institucionalidad del Estado, y con ello la esperanza de un nuevo comienzo, y esto a pesar de que han sido inmoladas miles de víctimas. La sed de avaricia por apropiarse del oro y del anillo de los nibelungos, en el caso mexicano se traduce en el intento de apropiación de los recursos naturales y sus derivados —incluidos los narcóticos y estupefacientes— e incluso de los seres humanos mismos, lo que ha llevado a la creación de miles de *fafners* que tienen asolada a la población, sin vislumbrar por el momento la posibilidad de una redención posible.

En ese sentido, la tercera periodización de desapariciones forzadas como práctica sistemática de Estado que identifico en esta tesis se da a partir del año 2006, en una fase avanzada de implantación del neoliberalismo y de instauración de megaproyectos en el territorio nacional. Todo esto sucede en un contexto de fracaso de la transición democrática debido, entre otras cosas, a que se dio una alternancia de partidos políticos pero no de transformación de prácticas institucionales y electorales (Nassif Aziz e Isunza Vera, 2017) (ver anexo C). El gobierno de derecha de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), el cual llegó al poder en el marco de una controversia por su legitimidad, declaró apenas una semana después de haber tomado el poder, la "Guerra contra el narcotráfico". Desde entonces en México, se exacerbó la *macrocriminalidad,* es decir, un complejo sistema criminal en el que converge la interacción de numerosos funcionarios públicos de diferentes niveles de gobierno y que ocupan diferentes funciones, agentes del sector privado y agentes estrictamente criminales. El entramado que crean estos vínculos conducen a un clima de impunidad, que a su vez produce en la población un clima de inseguridad, pero además lleva a una reconfiguración del poder político (Salcedo-Albaran y Garay Salamanca, 2016). Desde entonces, casi cualquier persona que se encuentra en el territorio nacional se convirtió en un *desaparecible*.

De acuerdo con cifras oficiales, en el país habría al 30 de abril del 2018, 37 mil 435 personas que figuran en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)[120]. Esta cifra está muy por debajo de ser una estimación

[120] Hasta el 30 de abril del 2018, el RNPED dependía de la Secretaría de Gobernación. Con la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que entró en vigor el 16 de enero del 2018, el registro nacional de personas desaparecidas quedó a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, por lo que el 30 de abril del 2018, fue la fecha de la última actualización del RNPED. Al momento del depósito de esta tesis, el 10 de octubre del 2018, el nuevo sistema de registro aún no ha sido dado a conocer.

certera, debido a que la mayoría de las personas que tienen un familiar desaparecido no denuncian por miedo o por falta de credibilidad en las instituciones[121]. La cifra tampoco toma en cuenta las personas que desaparecen en migración provenientes mayoritariamente de Centroamérica y que hasta 2016 se estimaba que eran alrededor de 70 mil (Guzmán, 2016). Por otra parte, el Estado mexicano concentró entre 2012 y 2017, el 77.7% de las acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Esto con relación a los 57 países que han ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Garduño, 2018). Estas cifras dan una idea de la emergencia humanitaria en la que se encuentra subsumido el país en materia de desaparición forzada y desaparición de personas, pero sin estar México en conflicto con otro país, ¿cómo es que llegamos ahí?

Este capítulo tiene por objetivo reflexionar, cómo en el marco de la expansión de las economías predatorias en un contexto de *macrocrminalidad* y de impunidad generalizada, se da un uso diferenciado del destino de los cuerpos en función de los objetivos por los que se les hace desaparecer. Efectivamente, de acuerdo con las cifras que se conocen, si bien la mayoría de las personas que desaparecen son hombres (73.7%) jóvenes (41.44%)[122], no todas las desapariciones tienen los mismos objetivos. En el contexto de la Guerra Fría, las desapariciones forzadas se realizaban *so pretexto* de una *Razón de Estado* (Foucault, 2007b), en el sentido liberal del

---

[121] A nivel nacional, el porcentaje de los delitos no denunciados, la llamada *cifra negra*, es decir, la diferencia entre la criminalidad real y la criminalidad aparente, se estima en 93.2% según los resultados del 2018 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los resultados completos están disponibles en:
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf (Fecha de consulta: 8 de octubre del 2018).

[122] Según los datos al 30 de abril del 2018 del RNPED.

término, en la que los perpetradores y los objetivos de la desaparición eran claramente identificables. En la actualidad, el destino de las personas desaparecidas, así como los *usos* que se hace de ellas, son más confusos, debido a que en las condiciones en las que suceden, no es fácil identificar una casuística de las desapariciones. Además, también hay mujeres y niñas y niños que desaparecen cuyos destinos tienen objetivos específicos. De esta manera, en este capítulo esbozo una tipología de los probables destinos de las víctimas. En la misma línea, identifico cómo los métodos para deshacerse de los cuerpos también se diversificaron en comparación con la Guerra Sucia. Mientras que en la década de los años 1970 se privilegiaban los vuelos de la muerte y las fosas clandestinas, el tratamiento que se le da a los cuerpos en la actualidad rebasa los límites de lo dantesco.

Finalmente, abordo brevemente el caso específico de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre del 2014, el cual refleja el nivel de connivencia de agentes del Estado con agentes de las economías predatorias y de la interdependencia del poder ejecutivo y judicial en México, lo que se refleja en la impunidad generalizada que asola al país.

Conocer estas especificidades de las desapariciones forzadas tanto del pasado como en el presente, permitirá comprender mejor, en el quinto capítulo, las particularidades de los sujetos políticos que se conforman en torno a las desapariciones forzadas en el México actual, donde confluyen actores y actrices de las tres periodizaciones identificadas en esta tesis, las y los cuales tienen posiciones y comprensiones no siempre convergentes en torno a quiénes son los agentes perpetradores, quiénes son las y los aliados y quiénes serían las y los antagonistas en la disputa por lo público y por conocer el destino de quienes están desaparecidas y desaparecidos.

3.1 La alternancia política y la llamada *Guerra contra el Narcotráfico*: el tercer periodo de las desapariciones forzadas en México

En la periodización de las desapariciones forzadas analizadas hasta el momento en esta tesis, se dieron dos fenómenos paralelos. Por un lado, las violencias políticas ejercidas en el marco de acciones de contrainsurgencia, primero en la Guerra Sucia (1964-1982), luego en la década de 1990 contra las acciones del EZLN y del EPR. Por otro lado, en esta misma década de 1990, de manera importante, comenzaron a desaparecer mujeres en la frontera norte de México, concretamente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Si en los dos primeros casos la actividad política era manifiestamente el móvil de la desaparición, y por lo tanto el agente perpetrador era claramente identificable, en el caso de la desaparición de mujeres del norte de México, aunque la violencia de género era evidente, era más difícil identificar el por qué del recurso a esta práctica. La impunidad que imperó en estos casos favoreció lo que vendría a partir de mediados de la década de los 2000: la desaparición masiva de personas en todo el país por motivos diversos y con destinos y *usos* específicos de estas desapariciones. Así, en esta primera sección, el objetivo es comprender las razones políticas que motivaron la puesta en marcha de la política de seguridad nacional llamada "Guerra contra el narcotráfico" para, en las secciones siguientes, analizar los diferentes casos de figura por los que se recurre a esta práctica en la actualidad.

De esta manera, luego de un proceso de "transición" a la democracia, acelerado por externalidades que respondían a una política continental de implantación de una economía neoliberal (ver anexo C), en el año 2000 se dio la alternancia política en el gobierno federal con Vicente Fox como jefe del Poder Ejecutivo (2000-2006). Después de este primer sexenio, en 2006, el PAN quería prolongarse en el poder a toda costa. El proceso electoral que declaró ganador a su candidato fue ampliamente cuestionado y diversos sectores de la población señalaban un fraude al estilo priista. Ante un importante descontento social y las fuerzas políticas en disputa, el presidente

entrante, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), entre las estrategias que implementó para poder gobernar, fue enviar a las fuerzas castrenses a las calles a ejercer labores de seguridad pública bajo el pretexto de una "Guerra contra el narcotráfico"[123]. Este sería el inicio del regreso de las violencias políticas con gran ímpetu.

Para Calderón esta Guerra contra el Narcotráfico fue la excusa perfecta para enviar al ejército a las calles. Esta misma estrategia de *seguridad* sería mantenida por su sucesor, esta vez del PRI, Enrique Peña Nieto (2012-2018). Sin embargo, la supuesta guerra de Calderón, lejos de combatir el tráfico ilícito de estupefacientes, trajo una mayor cartelización en el país, debilitando algunos cárteles como el de Juárez y Tijuana y ampliando la presencia de otros, que generaron incluso fracturas internas, como en los casos del Cártel del Golfo y de Sinaloa (Narco Data, Animal Político, 2015). Llama la atención que a quien eligió para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, había estado, y estuvo señalado durante todo el sexenio, de estar coludido con el crimen organizado (Esquivel, 2012)[124]. Es decir, en

---

[123] El 12 de enero del 2011, el presidente Felipe Calderón, intentaba desdecirse de haber declarado una « Guerra al narcotráfico ». A la letra sostuvo: "Yo no he usado y sí le puedo invitar a que, incluso, revise todas mis expresiones públicas y privadas. Usted dice: Usted ya eligió el concepto de GUERRA. No. Yo no lo elegí. Yo he usado permanentemente el término lucha contra el crimen organizado y lucha por la seguridad pública y lo seguiré usando y haciendo" (Redacción Nexos, 2011. En mayúsculas en el texto original). En respuesta a estas declaraciones, el Blog de la redacción de la revista Nexos, publicó "Una ayudadita de memoria para Felipe Calderón" en donde recuperan extractos de discursos, tomados de la página de Internet de la Presidencia de la República, en donde compilan las múltiples veces en las que el presidente, le llamó "guerra" a su política de seguridad nacional. Ver: (Redacción Nexos, 2011).

[124] De hecho, en una carta publicada en el periódico Reforma, Edgar Valdez Villarreal, *La Barbie* — preso desde el 30 de agosto del 2010—, miembro de Los Negros, un brazo del Cártel del Golfo y de Los Zetas, señala el 28 de noviembre del 2012 que por lo menos desde hacía 10 años, Genaro García Luna estaba en la nómina de su grupo: "*Genaro García Luna,* titular de *la Secretaría de Seguridad Pública Federal* (SSP), quien cuando menos desde el año 2002, primero en la AFI y luego en la PFP, *me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada*, al igual que un *grupo selecto* integrado por *Armando Espinosa de Benito*, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información; *Luis Cárdenas Palomino*, *Edgar Eusebio Millán Gómez*, *Francisco Javier Garza Palacios* (PF Colombia), Igor *Labastida Calderón*, *Facundo Rosas Rosas*, *Ramón Eduardo Pequeño*

ese sentido se daba una continuidad con el PRI (ver anexos B y C), solo que, casualmente, los grupos con los que se le acusaba de estar coludido, Beltrán Leyva, Los Zetas y el Cártel del Golfo, además de ser los más sanguinarios, fueron los que más se expandieron durante el sexenio del calderonato (L. Astorga Almanza, 2015).

Al mismo tiempo, esta estrategia de seguridad panista se alineaba con la política estadounidense que, al perfilarse el fin de la Guerra Fría, desde Reagan, Estados Unidos se propuso hacer del combate al narcotráfico su principal estrategia de Seguridad continental (Selser, 1990). En ese sentido, apenas cuatro meses de haber iniciado su mandato y de haber declarado la *Guerra contra el narcotráfico*, Felipe Calderón Hinojosa se reunió en Mérida Yucatán, en marzo del 2007, con el presidente de Estados Unidos George W. Busch (2001-2009). En dicha reunión convinieron en la importancia de combatir conjuntamente las bandas de narcotraficantes. Busch, salió de ahí con la promesa de que presentaría al Congreso de su país la "Iniciativa Mérida", la cual tenía por objetivo apoyar a México, Centroamérica, República Dominicana y Haití en el combate al narcotráfico en sus respectivos países. El apoyo convenido para México fue de 1,300 millones de dólares en tres ejercicios, para ser invertidos principalmente en vigilancia, intercepción e inteligencia, capacitación y asistencia técnica. Uno de los objetivos era reformar los cuerpos de policía y judiciales, para ello la formación de las fuerzas del orden en técnicas de combate fue una prioridad (Barrachina y Hernández, 2012; Wolf, 2011).

García y *Gerardo Garay Cadena*, quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí". Y concluye diciendo: "Yo pude haber hecho lo que haya hecho pero ellos, los funcionarios públicos que menciono, también son parte de la estructura criminal de este país" (Las *itálicas* están en *negritas* en el texto original). La integralidad de la carta está disponible en: (Aristegui Noticias, 2012b) (Consultado el 26 de agosto del 2018).
https://aristeguinoticias.com/2811/mexico/textual-carta-de-la-barbie-en-la-que-exhibe-a-la-pf-y-a-garcia-luna/

Por otra parte, para implementar esta estrategia, el gobierno de Felipe Calderón se hizo asesorar por inteligencia colombiana en el "combate al crimen organizado". En particular, por el expresidente Álvaro Uribe, quien fue asesor oficial de Los Pinos y de los gobiernos de Chihuahua y de Ciudad Juárez (Reveles, 2012, p. 27). Además, por el general de la Policía Nacional de Colombia Óscar Naranjo Trujillo, el creador de la política de *falsos positivos* (Mastrogiovanni, 2016, p. 12), la cual consistía en realizar ejecuciones extrajudiciales a ciudadanos comunes para hacerlos pasar como guerrilleros o narcotraficantes caídos en combate, por los cuales las "fuerzas del orden" recibían una prima (Mastrogiovanni, 2016; Reveles, 2012). En México a estas ejecuciones el presidente Calderón les llamó "daños colaterales", es decir, muertes de civiles en el "combate" al crimen organizado (Olivares Alonso, 2010). En este contexto, por lo menos 11 mil policías y militares mexicanos fueron entrenados por expertos (Reveles, 2012, p. 27):

> [L]a huella de Colombia estaba entonces y persiste y se acrecienta en México: en los cursos de adiestramiento de policías y militares, en los métodos de combate a la criminalidad, en la presentación de éxitos del combate antinarcóticos, en la réplica de las desapariciones forzadas que se multiplican por miles en México, en la aparición de fosas clandestinas con cuerpos cuyo origen y circunstancias de muerte son inciertos aquí y allá. (Reveles, 2012, p. 73-74).

En el mismo sentido que apuntala Reveles para Colombia, en el marco de la Iniciativa Mérida, México y Estados Unidos negociaron la contratación de 300 agentes del FBI para capacitar alrededor de 9000 policías mexicanos (Reveles, 2012, p. 75). Además, expertos de Estados Unidos, Colombia, Francia, España e Israel capacitaron a alrededor de 300 policías federales para convertirlos en mandos (Reveles, 2012, p. 75). Si a estas cifras se le suma la formación de personal de las policías y del ejército en centros de entrenamiento militar como el Fuerte Bragg o en la ex-Escuela de las Américas (Wood, 1998), la historia de la Guerra Sucia se repite: se forma a personal

en las técnicas de tortura y tratos crueles inhumanos y/o degradantes para "combatir" al enemigo —interno— convirtiéndoles en *fafners*, un arma letal.

En ese sentido, de acuerdo con un estudio realizado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (Galindo López *et al.*, 2017), el ingreso del Ejército y la Marina a ejercer tareas de seguridad pública desató en el país una violencia generalizada, mucho más grave que la que su presencia suponía que debería contrarrestar. En este contexto es que las fuerzas públicas recurrieron a crímenes de lesa humanidad (ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencias sexuales y desaparición forzada, entre muchos otros) *so pretexto* de neutralizar a los supuestos grupos que ponían en riesgo la "seguridad interior". Estas graves violaciones a los derechos humanos se hicieron masivas[125] y en lo que respecta a las desapariciones forzadas, éstas tuvieron un crecimiento exponencial nunca antes visto en el país[126]. Paradójicamente en México,

---

[125] La sistematicidad de estas violaciones a los derechos humanos, en particular de la tortura, fue puesta de manifiesto en el informe que el *Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes*, Juan Méndez, emitió sobre la visita que realizó a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014. En su informe publicado en diciembre del mismo año, el Relator afirmó que en México la tortura era una práctica generalizada: "La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación. El Relator Especial identificó varias causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención y recomienda medidas para atenderlas. Observó también serios problemas en las condiciones de detención, especialmente hacinamiento" (J. Méndez, 2014, p. 1).

[126] De hecho, en las observaciones de seguimiento al informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU —que obliga a los Estados signatarios a emitir un informe sobre las medidas que hayan adoptado en virtud de la Convención—, el Comité contra las Desapariciones Forzadas del mismo organismo sostuvo en febrero de 2015 que: "[l]a información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, incluso iniciadas a partir de la entrada en vigor de la Convención. El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas" (Comité contra las desapariciones forzadas ONU, 2015, p. 18).

a diferencia de Centro y Sudamérica, la masividad de las desapariciones forzadas se dio en un contexto, como ya fue mencionado, de lo que en su momento se llamaba de "transición a la democracia", —que en los hechos se limitaba, en muchos sentidos, a una alternancia partidista— y no en el contexto de dictaduras o toma de poder de Juntas Militares como fue el caso de los vecinos del sur.

Además, en este contexto habría una innovación de esta tecnología represiva. Si bien, como ya fue mencionado, durante las llamadas *guerras sucias*, el origen de las desapariciones forzadas era la implicación política de quienes eran víctimas de este crimen, por lo que era relativamente fácil identificar al ente perpetrador: agentes del Estado. En el contexto de la llamada *Guerra contra el narcotráfico* el escenario sería otro. En primer lugar, en el discurso oficial que reproducían sin mucho filtro los medios masivos de comunicación —sobre todo en los primeros años— y dado que muchas de las desapariciones no tenían un origen de implicación política—, muchas y muchos de las y los familiares —que no estaban politizados antes del *evento de desaparición*— estaban convencidos de que los perpetradores eran miembros de grupos criminales que actuaban en total independencia de la estructura del Estado. Lo cual la mayoría de las veces no había sido —y sigue sin ser— el caso. De hecho, muchos de los familiares han caído en cuenta de esta connivencia en el marco de la búsqueda de sus familiares. En palabras de Juan Carlos Trujillo, quien tiene a cuatro hermanos que fueron desaparecidos. Jesús Salvador y Raúl, desaparecidos en 2008 en Atoyac, Guerrero, por policías ministeriales en complicidad con grupos criminales y Luis y Gustavo, desaparecidos por la policía intermunicipal de Poza Rica, Veracruz, en 2010:

> Entonces dentro de la investigación social que hicimos, detectamos la vinculación entre policías ministeriales, procuración de justicia y todo el gobierno del estado de Guerrero con el crimen organizado. Nosotros antes de las búsquedas no teníamos ni idea de eso. Lo que hoy sabemos con el caso Ayotzinapa, ¿no? Eso nosotros lo estuvimos diciendo desde hace ocho años.

> Entonces, a raíz de esto, nosotros generamos una primera búsqueda que creo que es lo que normalmente hacen todas las familias, ¿no? Una primera búsqueda donde ellos creen que pueden encontrar a sus familiares. Posteriormente desaparecen otros dos de mis hermanos. En la primera ocasión fueron por policías ministeriales con los criminales que operaban en la zona. La segunda desaparición, fueron desaparecidos por la policía intermunicipal quienes los entregan a los Zetas [exmilitares]. Entonces en aquella segunda ocasión hicimos una búsqueda distinta a la primera, entendiendo que el gobierno estaba coludido y que no iba realmente a buscar a nuestros familiares. [...] Entonces la sensación de ver cómo se vive realmente en el país nos causó una conmoción muy grande (Entrevista, del 1 de marzo del 2017).

Efectivamente, en el marco de las búsquedas de sus familiares desaparecidos, muchos ciudadanos y sobre todo ciudadanas —porque las que más buscan son las mujeres—, que no estaban previamente politizadas, cayeron en cuenta de que las fuerzas del Estado, de todos los niveles de gobierno, eran las que estaban cometiendo estas desapariciones en colusión con grupos criminales. Es decir, estos agentes del Estado estaban jugando un doble rol. Así, en el contexto de esta supuesta *Guerra contra el narcotráfico*, entre finales de 2006 y finales de 2011, se llevaron a cabo 11 *operativos conjuntos* de gran envergadura, donde participaron diferentes fuerzas públicas: Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), Procuraduría General de la República (PGR), así como fuerzas estatales y municipales. Éstos se ejecutaron a lo largo del territorio nacional: Baja California (Tijuana), Chihuahua (Juárez), Frontera Sur (Istmo), Guerrero, Michoacán, Sinaloa (Culiacán-Navolato), Morelos, Tijuana, Triángulo Dorado (Chihuahua-Sinaloa-Durango), Noreste (Nuevo León – Tamaulipas) y Veracruz, los cuales dejaron a su paso una grave ola de violencia donde las tasas de asesinatos se dispararon, así como las personas que fueron desaparecidas[127]. Tan solo

---

[127] Al momento del depósito de esta tesis (octubre del 2018), se espera el veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso *Alvarado Espinoza y otros vs México*. La denuncia de este caso es sobre la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocio Irene Alvarado Reyes que se habría suscitado el 29 de diciembre del 2009 en el

en lo concerniente a la actuación de las "fuerzas del orden" en el marco de estos operativos, las quejas formales interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), pasaron de 182 en 2006 a 1230 en 2008. La misma tendencia se mantuvo en relación con las fuerzas de la seguridad pública civiles, de 369 quejas depositadas en 2006 ante la CNDH por detenciones y retenciones arbitrarias (sin orden de aprehensión o ilegales) se pasó a 2456 en 2011. Por tratos crueles y/o degradantes fueron interpuestas 330 en 2006, mientras que aumentaron a1642 en 2012 (Galindo López *et al.*, 2017, p. 2-3). Si se toma en cuenta que de acuerdo con el INEGI la cifra negra —los delitos no denunciados— en 2011 oscilaba alrededor del 91.6% (ENVIPE, 2012)[128], se puede inferir la magnitud del problema.

Por otra parte, en el marco de esta supuesta estrategia de seguridad nacional, servidores públicos y miembros de las fuerzas policiacas y del ejército en activo —en activo, no desertores—, han jugado un doble rol como servidores públicos y como miembros de los grupos criminales facilitándoles información sobre eventuales denuncias en su contra, sobre operativos oficiales, sobre acceso a mercancías, etc. Aquí también los ejemplos son vastos y a diferentes niveles. Por ejemplo, Claudia

---

marco del *Operativo conjunto Chihuahua* y que habría sido perpetrada por agentes del Estado —un grupo de entre 8 y 10 personas que portaban armas largas y vestían uniformes militares—. La audiencia pública por el caso se llevó a cabo el 26 y 27 de abril del 2018. De encontrarse culpable al Estado mexicano, esta sería la primera sentencia condenatoria de un tribunal internacional por desaparición forzada en el marco de la llamada Guerra contra el narcotráfico.

[128] Con el paso de los años y ante las "cajas vacías" que representan las instituciones de impartición de justicia del Estado mexicano, la cifra negra pasó de 91.6% en 2011 a 93.2% en 2017 (ENVIPE, 2018). Los delitos como secuestro, secuestro exprés y los delitos sexuales alcanzaron una cifra negra de 94.1% en 2017 (ENVIPE, 2018, p. 30). De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2018, "los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 34.2% y la desconfianza en la autoridad con 16.5 porciento" (ENVIPE, 2018, p. 1).

González López, subdelegada de la Procuraduría General de la República —quien recibía las denuncias de los familiares de las víctimas de desaparición forzada— y que fue detenida el 15 de febrero de 2012, fue acusada de brindar información y protección a los Zetas (Mastrogiovanni, 2016, p. 166). De igual forma, el alcalde de Cuétzala del Progreso, Guerrero, fue detenido en 2014 acusado de colaborar con el cártel de La Familia (Flores Contreras, 2014a). En abril de 2017, fueron procesados y sentenciados en un juzgado militar ocho castrenses que pertenecían al 69 batallón de infantería de Saltillo, Coahuila por nexos con Los Zetas (Mosso, 2017). Desde la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, Director General de Apoyo Táctico contra el Narcotráfico, trabajaba al servicio del cártel de los hermanos Beltrán Leyva cuando fue detenido (Vela, 2017).

De la misma manera, la Human Rights Clinic de la Universidad de Austin, presidida por Ariel Dulitzky, expresidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias, realizó una investigación a partir de las declaraciones de testigos en tres juicios federales de Estados Unidos entre 2013 y 2016, en los cuales muestran los nexos del cártel de los Zetas y funcionarios públicos como fue el caso de la financiación de la campaña a la gubernatura de Veracruz de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) o de sobornos millonarios a los hermanos exgobernadores del estado de Coahuila, Humberto Moreira (2005-2011) y Rubén Moreira (2011-2017), así como los Zetas aseguraron tener control sobre las prisiones y los procuradores de Coahuila, etc. (Dulitzky, 2017). Además, en repetidas ocasiones —lo que parecería ser un patrón—, en diversos casos de desapariciones forzadas que han llevado a una investigación efectiva y que han sido cometidas por cuerpos policiacos regionales y locales, se ha podido demostrar que estos cuerpos policiacos en realidad actuaban como operadores de grupos criminales a quienes le eran entregadas las personas luego de ser detenidas. Aquí también los ejemplos se multiplican. Por citar solo algunos: En Allende Nuevo León en enero de 2011 dos personas fueron detenidas por la policía local y fueron entregados al "jefe de plaza"

(Aguayo y Dayán, 2017). En Tierra Blanca Veracruz, 5 jóvenes fueron detenidos por la policía municipal y entregados a miembros del "crimen organizado" (Milenio, 2016a). En Culiacán policías municipales entregaron a un grupo criminal a un grupo de jóvenes que habían detenido (Proceso, 2017b). En Tecalitlán Jalisco, la policía local entregó a miembros del crimen organizado a 3 italianos que habían detenido (Animal político, 2018).

Pero, independientemente del doble rol que estaban jugando muchas de las fuerzas castrenses y policiales aún en funciones, la formación que estaban recibiendo estos actores en tácticas de "combate al narcotráfico", además de lo problemática que es en sí misma, se potencializa cuando algunos de estos sujetos que fueron formados —sujetos, sí, porque son principalmente hombres y en ese sentido la construcción de masculinidades debe jugar un rol—, desertan de las fuerzas oficiales para integrarse a las filas de las organizaciones ilegales. Al igual que en los casos citados anteriormente, aquí también los ejemplos se multiplican. La organización Los Zetas fue conformada por miembros desertores de las fuerzas de élite del Estado mexicano (L. Astorga Almanza, 2015; Grillo, 2012, p. 129) y de las fuerzas kaibiles guatemaltecas (L. Astorga Almanza, 2015; Ravelo, 2014, p. 41-49; Reveles, 2012). Por ejemplo, Heriberto Lazcano Lazcano, el Z-3 era miembro del grupo de élite Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), grupo especialmente creado para "combatir" al narcotráfico (Hernández, 2012a) era, además, también egresado de la Escuela de las Américas (Mejía Rivera *et al.*, 2016). Es decir, preparado para ejercer las prácticas de tortura más cruentas, así como otros métodos de contrainsurgencia que han sido en repetidas ocasiones categorizados como crímenes de lesa humanidad. Otro ejemplo es Manuel Alejandro Aponte Gómez, desertor del ejército, quien fuera jefe de seguridad de Joaquín Guzmán, *El Chapo*, el cual creó un escuadrón de

halcones en tácticas castrenses (Veledíaz, 2008)[129]. Finalmente, se puede citar también, a Óscar García Montoya quien se formó en la Secretaría de Marina (SEMAR) y en ese marcó combatió en Chiapas al EZLN y en Guerrero al EPR, además de haber sido instructor paracaidista y haberse especializado en explosivos. Cuando desertó de la SEMAR fue reclutado por el Cártel de los Beltrán Leyva y a partir de ahí comenzó una carrera "criminal" en la que cometió varios crímenes atroces. Entre los cuales reconoció haber ordenado el asesinato de alrededor de 600 personas, en los que él mismo participó directamente en alrededor de 300 (CNN Expansión, 2011)[130].

Sin embargo, en esta complejidad, ante una desaparición de personas, es muy difícil identificar quién es el ente perpetrador y exactamente por qué motivos se enconan con los casos individuales, sin ninguna relación aparente entre ellos. Puesto que, el personal de los diferentes cuerpos policiacos y castrenses, también han sido objeto de

---

[129] De hecho, entre 2004 y 2015, desertaron 548 militares de la unidad especial "del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército adiestrados para operaciones de rescate de rehenes, antiterrorismo y confrontación de criminales en cualquier tipo de terreno. Entre los desertores se encuentran expertos francotiradores, especialistas en desactivación de bombas, protección de funcionarios, operaciones anfibias, paracaidismo y manejo de cualquier tipo de armas y vehículos". (B. Jiménez, 2015). De acuerdo con una respuesta de solicitud de transparencia por parte de Plumas Atómicas dirigida a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR), entre enero de 2013 y diciembre del 2017 se registraron en total 6802 deserciones del Ejército y 2035 de la Marina (Plumas Atómicas, 2018). Si bien, no todos los desertores van a enrolarse en las filas del narcotráfico, sí hay muchos que lo han hecho. Por ejemplo: "Un informe del FBI dado a conocer en 2006 estableció que Los Zetas se crearon con un grupo de entre 31 y 67 desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), bajo el mando de Guzmán Decena" (B. Jiménez, 2015). De igual manera, en las calles de Tampico, por ejemplo, han aparecido anuncios para sugerir que exmiembros de cuerpos policiacos y del ejército se unan a filas narcotraficantes: "Paren de sufrir, ex militares, PFP (Policías Federales) y soldados de [Plan] Mérida, únanse a las filas del cártel del Golfo. [...] Aquí te pagamos en dólares, ofrecemos prestaciones, seguro de vida, casa para tu familia e hijos, deja de vivir en vecindad (vivienda popular) y de subirte en camión (autobús), tú escoges, carro o camioneta del año" (El Tiempo, 2008).

[130] Agradezco a César Guevara González el envío de esta última referencia.

desaparición en el marco de este contexto de *macrocriminalidad* donde el entramado de complicidades, donde los flujos de información, de complicidades y de doble posicionamiento, como ya se dijo, son muy difíciles de discernir. Por ejemplo en 2013 en el poblado de Úrsulo Galván, Veracruz, desaparecieron ocho policías y luego de esto el total del personal dimitió. El control de la localidad tuvo que ser tomado por miembros del ejército (Sinembargo, 2013). En el mismo sentido, entre 2007 y 2013 habrían desaparecido 141 militares en el "combate al narcotráfico" en 15 estados del país, concentrándose el mayor número de casos en la entidad federativa de Tamaulipas y teniendo como común denominador que fueron desaparecidos mientras se encontraban en día de descanso (Brito, 2013). Sin embargo, este *modus operandi* no siempre funciona así. El policía federal Juan Hernández Manzanares estaba acuartelado en un hotel con otros 300 policías cuando lo hicieron desaparecer a él y otro compañero mientras estaba comisionado en Nuevo León (Martínez, 2016). En palabras de su madre, Patricia Manzanares:

> Ahora es algo que yo peleo mucho, el derecho a la búsqueda de policías, de policías federales, militares, ministeriales, porque si bien es cierto que hay muchos que están coludidos con los delincuentes, también es cierto que ellos tienen un jefe y que a ellos los mandan y que simplemente como están bien criminalizados por la misma sociedad, nadie les hace caso, pero ellos son personas. Son personas, son seres humanos que tienen madre, que tienen padre, que tienen hijos, que tienen hermanos, que tienen una familia atrás de ellos y que si en dado momento ellos fueran culpables de algo, que los detengan, que los metan a la cárcel, ¿no?, pero que no los desaparezcan. Ahora yo peleo eso. Por eso digo que mi caso es un poquito diferente al de las otras, ¿no? Yo me tengo que lidiar con buscar, con andar de un lugar a otro y todavía peleo con la imagen que tienen de él. (Entrevista, el 13 de febrero del 2017).

En ese sentido, en el contexto mexicano actual se puede ver que al interior de las fuerzas del orden se pueden dar los dos casos de figura. Es decir, pueden ser *desaparecedoras*, al mismo tiempo que pueden desaparecer también. Así, y ante la variedad de escenarios en la actualidad, resulta muy difícil discernir una casuística

univoca de las desapariciones forzadas como podía establecerse durante la Guerra Sucia. Incluso, ante las diferentes facetas del involucramiento de agentes del Estado en éstas, es difícil establecer una clara distinción entre los crímenes que son perpetrados únicamente por grupos criminales, sin que actúen con un mínimo de aquiescencia del Estado, de aquellos que son perpetrados en connivencia. De hecho, en el ámbito de lo formal-legal, cada vez resulta más difícil establecer —tanto analíticamente, como judicialmente— cuándo se trata de una desaparición forzada —con participación directa o indirecta de agentes del Estado— ya sea por motivos políticos o no, y cuando se trata de una desaparición por particulares donde ningún agente del Estado haya tenido algo que ver. Es en ese sentido, que en la siguiente sección, se analiza el contexto de macrocriminalidad en el México actual, y el *uso* que se le da a los cuerpos en el marco de las economías predatorias.

3.2 La expansión de las economías criminales. Sobre la macrocriminalidad y el uso de los cuerpos en las economías predatorias

De acuerdo con Luis Astorga (2015), hacia finales de la década de los años 1990, pero sobre todo a partir de la era panista —muy probablemente por el reajuste en el reparto de territorio y afiliaciones—, los grupos criminales vinculados al tráfico de narcóticos diversificaron su mercado pasando de la producción y tráfico de estupefacientes al de la extorsión a negocios legales e ilegales, al secuestro, al tráfico de personas, el robo de combustible, la piratería, etc. (L. Astorga Almanza, 2015). Esta ampliación del mercado, aunado a la pérdida de hegemonía del PRI, junto con una reconfiguración geopolítica de la producción, consumo y trasiego de narcóticos, trajeron aparejado un aumento exponencial de la violencia (Flores Pérez, 2009; Garay Salamanca, 2008; Snyder y Durán Martínez, 2009)[131], en medio de una estrategia de

[131] Tal como lo analizan Durán Martínez y Snyder (2009), los mercados ilícitos no necesariamente son violentos, así como los lícitos no necesariamente son pacíficos. Incluso, el nivel de violencia de estos

seguridad nacional que legitimaba el envío masivo de las fuerzas públicas y castrenses a las calles con agentes que, muchas veces estaban coludidos o formaban parte de algún grupo criminal en disputa por el territorio, tal como fue ejemplificado líneas más arriba.

Ante este escenario, más que hablar de cárteles de droga o de delincuencia organizada, Salcedo-Albarán y Garay Salamanca proponen hablar en términos del concepto de *macrocriminalidad*, el cual está basado en el análisis de redes, para designar el entramado complejo de redes de criminalidad donde participan: "miles de nodos/agentes, entre víctimas y victimarios, que establecen miles de interacciones de distinto tipo, en comparación con una red criminal en la que participa un número relativamente reducido de nodos/agentes con pocas interacciones" (Salcedo-Albarán y Garay Salamanca, 2016). Este enfoque, que fue adoptado por la Fiscalía General de la Nación en Colombia (Salcedo-Albarán y Garay Salamanca, 2016, p. 21), resulta indispensable si lo que se busca es establecer un juicio legal de las desapariciones forzadas, como de hecho, es lo que buscan muchas de las organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas (ver capítulo 5, infra). Utilizar este enfoque permite entonces comprender los crímenes complejos –como el caso de la desaparición

---

mercados puede variar a lo largo del tiempo en el mismo país. Como ejemplo los autores ilustran que en Birmania se produjo una importante expansión del mercado de los narcóticos en la década de los años 1990 durante un periodo que también experimentó una baja considerable en los niveles de violencia, mientras que en México el aumento exponencial de la violencia en los últimos años vinculado a los narcóticos fue precedido por un largo periodo de violencia relativamente baja. De acuerdo con los autores, las redes de protección del Estado centralizadas pueden lograr un efecto pacificador llevando a una relativa calma, mientras que la fragmentación de éstas o su colapso puede causar un aumento —en el caso mexicano, significativo— de la violencia: "En México, una red de protección patrocinada por el Estado se formó durante la década de 1940 y se prolongó hasta finales de la década de 1980, lo que resultó en niveles relativamente bajos de violencia durante este período. El colapso de estas instituciones de protección en la década de 1990, en parte como consecuencia de las reformas administrativas [en particular de la Procuraduría General de la República] dirigidas a reducir la corrupción entre los funcionarios estatales, condujo a un fuerte aumento de la violencia" (Snyder y Durán Martínez, 2009, p. 73). Agradezco a Philippe Dufort por la sugerencia de esta bibliografía.

forzada en el México actual— para "rebasar el concepto de crimen organizado" (Salcedo-Albarán y Garay Salamanca, 2016, p. 25), el cual, según la definición del Artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional se entiende por "un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves" (ONU, 2004). Concepto que resulta insuficiente, tanto en la investigación, como en la penalización de entramados complejos donde agentes del Estado están insertos en la ejecución de los crímenes, rompiendo así la más esencial razón del Estado, que es la obligación de proteger.

En ese sentido, estos autores establecen una categorización analítica de tres tipos de estrategias de configuración de estas redes de macrocriminalidad. La primera estrategia sería *fortalecer estructuras violentas y mecanismos de corrupción tradicional*, la segunda es del orden de *Fortalecer estructuras políticas, institucionales y financieras de alto nivel*, como condición para transitar hacia la *Reconfiguración Cooptada del Estado* (RCdE). En el caso mexicano, más que hablar de una reconfiguración coptada del Estado se puede hablar de una reconfiguración del partido político que está en turno en el gobierno, puesto que como se desarrolló líneas más arriba, el Estado mexicano históricamente ha estado vinculado con los grupos criminales de tráfico de estupefacientes o contrabando de mercancías. Pero, en la categorización que hacen Salcedo Albarán y Garay Salamanca, explican este punto, en el sentido de que cuando una red criminal ya ha consolidado su liderazgo frente a otras redes del mismo tipo, y por lo mismo ya ha asegurado un poder fáctico en el territorio, entonces es que puede proceder a intentar capturar, cooptar y manipular las estructuras institucionales que les garanticen perdurabilidad. De esta manera, el acceso a información privilegiada aumenta, al igual que su poder sobre el territorio, y en ese sentido, pueden disminuir la preponderancia de sus estructuras violentas para enfocarse en fortalecer estructuras económicas, políticas y sociales articuladas con la

institucionalidad pública y privada" (Salcedo-Albarán y Garay Salamanca, 2016, p. 162).

Por otra parte, con respecto a *Mantener simultáneamente estructuras financieras y económicas, institucionales, políticas y violentas*, los autores afirman que, el ejercicio de la violencia es útil para conseguir objetivos de corto plazo, principalmente por vía del temor, pero resulta insuficiente para consolidar proyectos criminales de largo plazo. Salcedo-Albarán y Garay Salamanca, insisten que para cualquier red criminal es imposible, existir y operar de manera aislada de otras redes criminales y de las estructuras legales del Estado, del sector privado y la sociedad en general. Por lo mismo, para permanecer y fortalecerse, deben contar con una apariencia de legalidad y acceso a instancias del Estado y del sector privado, sin ejercer una violencia exacerbada (Salcedo-Albarán y Garay Salamanca, 2016, p. 162).

En México, estas configuraciones se han hecho presentes en los últimos sexenios, ante un *pacto de impunidad* (Buscaglia, 2013, 2014) entre las diferentes fuerzas políticas de "derecha", "centro" e "izquierda", entreveradas, además, con intereses de sucesión familiar y empresariales (González Islas, 2017). Esto ha llevado a una exacerbación de la violencia en general y la violencia política en particular, alentadas por un alto nivel de impunidad. Sobre todo en los últimos años, puesto que la complejidad de agentes que interactúan en estas redes van desde el poder judicial —magistrados, agentes del ministerio público, secretarios técnicos, etc.—, del poder legislativo —senadores y diputados[132]— y el poder ejecutivo. Además de agentes de

[132] Por ejemplo, la exdupitada por Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, fue conocida con el mote de "Chapodiputada" ya que se presumía que era pareja de Joaquín Guzmán Loera, *el Chapo*. Lucero Sánchez contendió en una coalición de partidos que incluían al PAN, el Partido Sinaloense y del Partido del Trabajo, por el distrito por el distrito XIV del municipio de Cosalá. Cuando la diputada aún estaba en funciones, visitaba a Joaquín Guzmán con otro nombre, presentando una credencial de elector y un acta de nacimiento falsas. Fue destituida en 2016 y actualmente está presa en Estados Unidos (Proceso, 2018a). De acuerdo con el periódico *El Universal*, en las tres últimas legislaturas al

la administración pública —alcaldes, funcionarios de diferentes niveles y fuerzas de seguridad, incluido el ejército, etc. (Animal Político, 2018; Esquivel, 2012; Flores Contreras, 2014; Zavaleta, 2018)—. Asimismo del empresariado, que también participa a través de la acción directa o indirecta con actividades de lavado de dinero, etc. (Flores Nández, 2012). En este sentido, y a pesar de este complejo entramado de interacciones entre actividades legales e ilegales, que debido al grado de violencia se pueden catalogar de criminales, no se puede hablar de *Estado fallido*[133], debido a que a pesar del nulo respeto a la institucionalidad, las estructuras del Estado siguen cumpliendo sus funciones, lo que de hecho aumenta la complejidad del fenómeno mismo y de su comprensión para quienes lo padecen —las víctimas directas y en muchos casos sus familiares—.

---

menos 43 diputados federales y senadores enfrentaron acusaciones de tener vínculos con grupos de narcotraficantes. Entre ellos el actual gobernador de Veracruz por el PAN cuando era senador (Rodríguez, 2016). Sin embargo, de acuerdo con Astorga (2015), a diferencia de otros países, como Colombia, por ejemplo, los grupos narcotraficantes nunca han aspirado a tener el control político del país.

[133] En los primeros años de la implementación de la política de seguridad calderonista y ante la explosión de la violencia, diversos analistas afirmaban que más que ir perdiendo la Guerra contra el narcotráfico como aseguraba el presidente Calderón, México en realidad se afrontaba a un *Estado fallido* donde la capacidad del crimen organizado rebasaba la capacidad de respuesta y contención de las estructuras institucionales y de todas las *fuerzas del orden.* Años después, cuando en repetidas ocasiones se ha demostrado que diferentes agentes de todos los niveles de gobierno han estado vinculados de una u otra manera en la cadena de la economía criminal, esta tesis resulta poco sostenible. Al respecto, Lorenzo Meyer prefiere hablar de México como algo más cercano a un *narcoestado* que a un *Estado fallido*: "Si un narcoestado es una sociedad nacional cuya estructura de poder, su economía y su cultura son dominadas por los cárteles de la droga, entonces se está hablando de Guinea-Bissau y no de México. Sin embargo, si el término se usa para destacar un problema de grado y en aumento —un sistema político donde los narcotraficantes cada vez ganan más influencia en las estructuras de gobierno, aumentan su influencia económica y hacen aceptables sus valores culturales—, entonces Colombia y México se acercan a la definición de narcoestados. Obviamente no todos los Estados fallidos son narcoestados, pero lo contrario sí que es verdad: lo narco se explica y se exacerba por lo fallido" (Meyer, 2009, p. 2).

Así, ante este nivel de corrupción e impunidad que se fortalece con la presencia de agentes institucionales que juegan un doble rol entre representación de la institucionalidad del Estado y agentes de las economías criminales (Garay Salamanca, 2017); al mismo tiempo que se presenta la coyuntura de la expansión y "diversificación del mercado" (trabajo forzado, trata y tráfico de personas, secuestro, extorsión, etc.), se puede analizar que en México se instauró entonces un flujo comercial basado en *economías predatorias* al tener su valor de cambio en el ser humano mismo. En este sentido, el cuerpo de quien habita o transita[134] por el territorio nacional, es susceptible de convertirse en una "mercancía" de estas economías: trata de personas, trabajo forzado, etc.[135]. Y para que esta economía funcione, la desaparición, y en particular la desaparición forzada —en el caso de que en alguna escala de estas redes esté implicado al menos un agente del Estado—, es clave. Al no saber el paradero de la persona, qué fue de ella, quién se la llevó y por qué, y sin que haya una investigación efectiva, este mercado de depredación puede existir. En ese sentido, Carlos Martín Beristaín ex-miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH para el caso Ayotzinapa, afirma en entrevista:

---

[134] México es un país de tránsito obligado para miles de personas de Centro y Sudamérica que tienen por objetivo introducirse de manera "irregular" en Estados Unidos y recientemente México se ha convertido también en país de destino. En este trayecto, muchas de estas personas están expuestas a diversas amenazas, entre ellas, el secuestro, la extorsión, el trabajo y la desaparición forzada, etc. (Ver III.2.5 Perderse en la niebla. La desaparición forzada de personas en desplazamiento o migración, *infra*).

[135] Muchos colectivos de búsqueda hablan incluso de tráfico de órganos, sin embargo, en el marco de esta investigación no he podido corroborar esta información. Incluso en entrevista con Mónica González Islas, periodista de investigación, me señala que de acuerdo con sus investigaciones esto sería un mito puesto que se han encontrado laboratorios donde se procesan estupefacientes, fosas clandestinas e incluso "cocinas" donde se deshacen de los cuerpos que han sido desaparecidos, pero que no se ha documentado ningún tipo de quirófanos o laboratorios "ilegales" que cuenten con la tecnología requerida para realizar trasplantes o extracción de órganos (Entrevista, el 3 de febrero del 2017).

> Sí, para mí el problema es la impunidad. Porque la desaparición es una estrategia de impunidad, tienes el ocultamiento del destino de la persona, borras la historia, borras a la persona del mapa, borras el delito. Aquí no pasa nada, generas terror y deslinde de responsabilidades. Entonces la impunidad es el mecanismo central que une esas dos formas, esas dos lógicas de la desaparición forzada. El mecanismo que las une es la impunidad. Y si no se quiebra la impunidad no hay salida. No va a haber salida, ¿no? Y si empieza a haber investigación efectiva de los casos y determinación de las responsabilidades, de la investigación de las fosas sobre dónde fueron llevados, en sí, ahí habrá un costo para quien lleve a cabo esas acciones y eso contribuirá a quebrar las redes que las llevan a cabo (Entrevista, el 3 de febrero del 2017).

Por supuesto, se puede suponer que entre más se encuentra la persona en situación de vulnerabilidad, más riesgo corre de que se haga un uso predatorio de su cuerpo (Valencia Triana, 2016). Pero, sin embargo, no se puede afirmar que esta condición de vulnerabilidad sea la única causa, ya que debido a los diferentes casos de figura no puede establecerse un patrón de desaparición, aunque sí haya algunas tendencias. Por ejemplo, de acuerdo con el RNPED —el cual de acuerdo con diversos organismos no refleja la cantidad real de personas desaparecidas, ya que muchos de los familiares no denuncia la desaparición por miedo a represalias o por falta de credibilidad en las instituciones—, al 30 de abril del 2018, estaban registradas 37 mil 435 personas desaparecidas, de las cuales el 73.7% son hombres y el 26.3% son mujeres.

De éstos, el rango de concentración más elevado se encuentra entre los 13 y los 45 años, representando el 83.8% en los hombres y 92.9 % en las mujeres. También de acuerdo con esta base de datos oficial —insisto incompleta porque no todos los familiares denuncian la desaparición—, el lugar de residencia también tiene una incidencia considerable en el volumen de desapariciones. Por ejemplo, Tamaulipas tiene una incidencia del 18%, seguido del Estado de México con 14% y Sinaloa con 10%. Los Estados donde menos personas han desaparecido de acuerdo con esta base de datos son Campeche con 0.1%, Nayarit con el 0.5%, Aguascalientes y Colima con

el 1%[136]. De esta manera, el lugar de residencia, el sexo y la edad serían variables importantes a considerar para poder establecer patrones analíticos.

Por otra parte y de acuerdo con el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad (Flacso México/ Human Rights Program de la Univesidad de Minnesota/ Universidad de Oxford), en los diagnósticos que se han realizado en dos estados del país, Nuevo León y Coahuila, con datos de organizaciones de la sociedad civil locales, CADHAC y Fray Juan de Larios principalmente, de los mil 961 casos de desaparición analizados, ser joven y transitar por carretera serían dos de los principales riesgos para ser víctimas de desaparición, al menos en esos dos estados del país (Observatorio sobre desaparición e impunidad, 2017, 2018). José Manuel Valenzuela Arce habla en ese sentido de *Juvencidio*, refiriéndose con este concepto a la "condición límite en la cual se asesina a sectores o grupos específicos de la población joven" (Valenzuela, 2015, p. 9) en el marco de precarización económica y social, pero también en "la construcción de cuerpos-territorios juveniles como ámbitos privilegiados de la muerte, el narcomundo y el despliegue de corrupción, impunidad, violencia y muerte que le acompaña y la condición cómplice de un Estado adulterado o narcoestado" (Valenzuela, 2015, p. 9). Si bien esta reflexión no sólo se aplicaría al asesinato, y en este caso a la desaparición, de jóvenes en particular, sino a toda la población que es flanco de estos fenómenos, también es cierto que las pocas estadísticas que existen, apuntan a que efectivamente la población joven, en particular los hombres —aunque no exclusivamente—, son flanco de estos crímenes que de acuerdo con lo estipulado por el Estatuto de Roma, por su sistematicidad y

[136] Se podría inferir que los Estados del centro, que no son limítrofes ni con la frontera norte, ni con alguna de las costas mexicanas son los que menos desapariciones representan, al igual que la Península de Yucatán y de Baja California, y el estado de Nayarit, las cuales serían las entidades con menos riesgo de desaparecer.

generalización, ya se podrían considerar como crímenes de lesa humanidad (Corte Penal Internacional, 1998).

Con respecto a la desaparición en carreteras, ese es uno de los sitios en donde se es particularmente vulnerable, la circulación por tierra. Si además a esto se le agrega otras políticas que se pusieron en marcha, al mismo tiempo que la política de seguridad nacional llamada de "Guerra contra el narcotráfico" de Calderón, como por ejemplo cobrar un impuesto por depósitos bancarios que excedieran mensualmente los $20,000 pesos mexicanos (en promedio 1000$ USD al tipo de cambio del 8 de octubre del 2018). Impuesto que también tenía supuestamente como objetivo combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Esto aumentaba la condición de vulnerabilidad de quienes se dedicaban al comercio y preferían viajar con el dinero en efectivo a pagar un impuesto más de los muchos que ya se habían implementado y aumentado en ese sexenio[137]. En palabras de Eliana García Laguna, exsubprocuradora de derechos humanos de la PGR (junio 2014 – mayo 2015), esta política les habría expuesto más:

> En 2009 empecé a trabajar con víctimas de desaparición cometidas por particulares. El primer grupo de personas desaparecidas ya por el crimen organizado, ya como un tema de particulares, fue un grupo de familiares de unos muchachos de "La Barca" que en Jalisco trabajaban en el Centro Joyero de Guadalajara y que su ruta de trabajo era que salían de Guadalajara e iban por toda la zona de Coahuila hasta llegar a la zona de Piedras Negras. De ahí se regresaban y entonces, llevaban mercancía física que iban dejando a consignación durante todo el trayecto de su viaje y llevaban mucho dinero en efectivo porque casualmente, y aquí es donde uno se da cuenta que los legisladores nunca valoran ni ven más allá de sus narices. Es el año en que entra en vigor el impuesto a los depósitos en efectivo y entonces mucha gente que trabajaba haciendo estos trabajos de dejar a consignación no depositaba el

[137] Como por ejemplo el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).

> dinero que les iban pagando en el trayecto porque había impuesto y entonces los patrones lo que hacían era, los hacían que cargaran el dinero en efectivo, grandes cantidades de dinero, más la mercancía. (Entrevista, el 27 de febrero del 2017).

De esta manera, tal cual fue expresado por Eliana García Laguna, el poner en marcha legislaciones que no tomaban en cuenta el nivel de violencia e impunidad en el país y que de facto ponían en mayor riesgo a quien de por sí ya lo estaba, contribuyó a que aumentaran las desapariciones. Pero, ser joven y transitar por carretera no son las únicas causas por las que se es susceptible de ser víctima de desaparición forzada y de desparición por particulaes en el país. Tal como ya fue mencionado, a diferencia de las primeras desapariciones en el país durante la Guerra Sucia en la cual la desaparición forzada tenía una motivación política, una supuesta *Razón de Estado* (ver capítulo II, *supra*), las desapariciones forzadas en la actualidad tienen diversos orígenes y destinos del uso de los cuerpos. Según la poca información que se tiene de las motivaciones y de los perpetradores de una desaparición, en los siguientes apartados realizo —a partir del trabajo de campo, de entrevistas con actores, de revisión hemerográfica y bibliográfica— un esbozo de clasificación, no exhaustiva ni excluyente, de los diferentes destinos de la desaparición forzada de una persona en el México actual.

3.2.1 Las desapariciones forzadas para debilitar a grupos criminales asociados con otros agentes de Estado

Tal como fue desarrollado líneas más arriba, desde el discurso del Estado, en México todas las muertes violentas y desapariciones de personas, se deberían a ajustes de cuentas entre grupos criminales, en particular de narcotraficantes, y las personas que perecen en esas condiciones o que son desaparecidas, serían de alguna manera "merecedoras" de estos crímenes por actuar "fuera de la ley". Como si la función del Estado no fuera ser garante de los debidos procesos ante cualquier "infracción", como si el contrato social estuviera regido por la *Ley del Tailón* y la llamada Guerra contra

el Narcotráfico lo justificara todo. Aquí también los ejemplos se multiplican. Pero traeré a colación la ejecución extrajudicial, el 10 de marzo del 2018, de dos menores de edad, Nefertiti de 16 años y Grecia de 14, donde hay fotografías que prueban que fueron abatidas por policías con uniforme (Hernández Borbolla, 2018). La versión del fiscal del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, fue que estas jóvenes eran miembras de grupos narcotraficantes —el nuevo "enemigo interno" por ende merecedor de todas las atrocidades— e inmediatamente procedió a discreditarlas, como si los relatos irrelevantes justificaran su ejecución:

> Winckler Ortiz dijo que tanto Nefertiti como Grecia hacía muchos meses habían abandonado sus estudios, poco más de un año; así como el domicilio materno, "para asociarse en actividades ilícitas junto con José Eduardo [otra de las personas abatidas por la policía en el mismo evento]. [...] Otro símbolo de identidad de la célula delictiva, es el tatuaje que presenta la menor Grecia 'N' en su mano derecha, con forma de la mitad inferior de una calavera, que presumiblemente se complementa con la mitad superior de otro miembro de la misma célula delictiva (...) familiares, amistades y vecinos que detallan que las mismas no estudiaban, no trabajaban, eran agresivas, y habían abandonado el hogar y por lo menos una de ellas se autoflagelaba, haciendo alegoría a su próxima muerte y tenía tendencias suicidas; lo cual, concluye el análisis, generó las condiciones para que participaran ellas en estas actividades ilícitas" (Ávila, 2018).

Discursivamente entonces, para el fiscal basta con ser miembro de una "célula delictiva" para que puedas ser abatido en total impunidad. La criminalización de quien es víctima de una violación a los derechos humanos, incluida la desaparición forzada, es la moneda corriente del Estado y por ende hay una preocupación por parte de las y los familiares de quienes son víctimas de desaparición forzada de restituir su dignidad (ver capítulo I *supra*). Por lo general, antes de investigar la desaparición en sí, se investiga a las y los familiares de quien está desaparecido para encontrar el "error" que puede llevarles al escarnio público. Se investiga, incluso, a las víctimas para encontrar en ellas mismas la culpabilidad de su propia desaparición (ver capítulo I *supra*). Esta tarea discursiva se facilita, además, cuando la desaparición tiene por

objetivo debilitar a las "bandas" rivales, y por ende, se hace desaparecer a personas sospechosas de, o efectivamente, vinculadas con un grupo opositor.

En el marco de la política de seguridad interior de los dos últimos sexenios (Calderón Hinojosa y Peña Nieto), ha habido casos en que estas desapariciones forzadas se han ejecutado directamente por agentes del Estado, en su función de Estado —con uniforme, en horario de trabajo y bajo supervisión de un superior— pero no precisamente por una *Razón de Estado*. Sino para debilitar a grupos rivales, en este caso, cárteles rivales para liberar "la plaza" y favorecer a las redes de *macrocriminalidad* en las que operan. En ese aspecto ejemplificaré con el caso específico del Estado de Veracruz dado que, por antagonismos surgidos en el marco de la alternancia política[138], en esta región se pueden observar dinámicas que están presentes en todo el país. Por ejemplo, en tiempos electorales, en un proceso de construcción de una *verdad jurídica* llevó, el 14 de febrero del 2018, a la detención

---

[138] Efectivamente, en diciembre de 2016, en el Estado de Veracruz fue elegido un gobierno de transición de dos años, con la intención de homologar los periodos del gobierno estatal con el nivel federal. Tras 86 años del PRI en el Ejecutivo estatal, por primera vez éste perdió oficialmente las elecciones, cediendo la plaza a un gobierno panista liderado por Miguel Ángel Yunes Linares. Éste último tomó como estandarte político llevar ante la justicia a Javier Duarte de Ochoa y sus allegados en el gobierno. Cabe acotar que independientemente de que los gobiernos de los dos últimos sexenios, el de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) y el de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), habían estado señalados de haber incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, delitos de corrupción, desvío de recursos, delincuencia organizada, etc.; además de que la violencia aumentó exponencialmente durante estas dos gestiones; el trato que dio el gobierno de Yunes a estos asuntos se aparentaba más a una cacería de brujas que a una aspiración legítima de hacer justicia. Sobre todo porque ésta fue particularmente encarnizada con el gobierno precedente, el de Duarte de Ochoa, y muy laxa con el antecesor de éste, Herrera Beltrán. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz —en esta imbricación de poderes característica del sistema político mexicano—, retomó la agenda política del Ejecutivo y se sumó a esta cruzada, en sí misma legítima pero eclipsada por su origen político. En ese sentido, el caso del Estado de Veracruz es movilizado en esta sección porque, debido a estas circunstancias políticas, se pudieron hacer visibles algunos *usos* de la desaparición, gracias a la vía de la judicialización que se dio en esta coyuntura. Cabe señalar, sin embargo, que la gestión de esta Fiscalía mantuvo las mismas prácticas de criminalización de las víctimas que sus antecesores, tal como fue mencionado líneas arriba en el caso de las menores de edad ejecutadas por la policía, Nefertiti y Grecia, el 10 de marzo del 2018.

por desaparición forzada de 16 personas que fungieron como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016). Entre ellos, quien fuera el mismo director de la SSP, así como el director general de la fuerza civil de la SSP, quien además había sido miembro del Ejército Mexicano. Así como también 12 policías de élite, del grupo Fuerza Especial, apodados *Los Fieles*, todos exmilitares. Según el Registro Público de Personas Desaparecidas del estado de Veracruz (REPUPEDES), durante el sexenio de Duarte de Ochoa, se registraron oficialmente 3600 desapariciones en el estado (FGE, 2017). Sin embargo, estas 16 personas están siendo vinculadas a proceso únicamente por 15 desapariciones forzadas (Zavaleta, 2018a). De acuerdo con la investigación, estas 15 personas habrían sido desaparecidas por considerarse sospechosas de ser *halcones* —informantes— del grupo de los Zetas, pero no habrían sido desaparecidas en el marco de la "lucha contra el narcotráfico", sino con la finalidad de abrir paso al posicionamiento de un nuevo cártel. Tal como lo señala el periodista de investigación Jacobo García:

> ¿Es posible que un Gobierno desesperado, desbordado por el narco y escaso de recursos creara un grupo paramilitar para terminar con los narcotraficantes? "No hay que ser ingenuo", responde el investigador, "no es casualidad que todos los desaparecidos, presuntamente, colaboraban con los Zetas. La policía no limpiaba de narcotraficantes la zona sino que hacía el trabajo sucio para el cártel Jalisco Nueva Generación" (García, 2018) [139].

---

[139] De hecho, este cártel Jalisco Nueva Generación, antes de independizarse del cártel de Sinaloa, surgió como un brazo armado llamado los *Mata Zetas*, el cual como su nombre lo indica, tenía por objetivo debilitar este grupo. El 23 de septiembre del 2011, mientras se celebraba en la Ciudad de Veracruz el XI Encuentro Nacional de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia, fueron arrojados 35 cuerpos desnudos en un paso a desnivel muy cerca de donde se llevaba a cabo el evento. En menos de 48 horas sumarían 49 cuerpos mancillados arrojados en las vías públicas de la ciudad. Estos hechos se les adjudicaron a los *Mata Zetas*. Las primeras declaraciones del procurador del estado de Veracruz, en las primeras horas y antes de haber hecho investigaciones a profundidad, fueron: "Se ha confirmado, a través de Plataforma México, que todos ellos tenían antecedentes penales y se dedicaban a actividades del crimen organizado, tales como

En ese sentido, las fuerzas del Estado, bajo órdenes expresas, estarían desapareciendo personas desde la propia institución con la finalidad de deshacerse de bandas rivales y esto independientemente de los tiempos políticos. Efectivamente, pareciera que las lógicas de las economías predatorias tienen sus propias racionalidades, las cuales no necesariamente compaginan con aquellas de los tiempos políticos, ya que luego de la primera alternancia política en el estado, del PRI de Duarte de Ochoa, al PAN de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018), las desapariciones forzadas siguieron ejecutándose y esto en plena campaña electoral. El 5 de marzo del 2018, fueron puestos a disposición de la fiscalía 8 policías más, quienes habrían detenido arbitrariamente, y luego desaparecido, el 21 de febrero del 2018, a un joven cuyo cuerpo apareció días después flotando en un río con señas de tortura (Zavaleta, 2018b). Además, el Secretario de la SSP del gobierno yunista, está él mismo siendo investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) por tener vínculos estrechos con una operadora de los Zetas en Veracruz (Reforma, 2018). De lo cual se infiere, además, que la colusión persistente de los agentes en turno en los órganos de Estado con agentes "ilegales", es prácticamente una colaboración orgánica, y que, sin embargo, estos agentes no conforman un bloque monolítico y que al interior de las mismas estructuras, incluso de la misma afiliación política, puede haber colaboraciones ya sea con distintos grupos criminales o incluso colaboraciones múltiples desde la posición de poder que les confiere el cargo.

---

secuestro, extorsión, homicidio y narcomenudeo, entre otros delitos" (Sin Embargo, 2011). Sin embargo, luego se supo que los cuerpos que fueron arrojados no necesariamente tenían que ver con personas vinculadas con actividades ilícitas (Sin Embargo, 2011).

3.2.2 Desaparición de mujeres, los usos sexuales del cuerpo en el centro de la acción

Desde 1993 y en parte debido a la impunidad que caracterizó los crímenes contra el cuerpo de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, quedó establecida la permisividad del Estado ante crímenes cometidos en contra de las mujeres que se encontraban en situación de vulnerabilidad y muchas de las veces en situación de migración (ver capítulo 2, *supra*). La impunidad de estos asesinatos y desapariciones abrirían el paso al uso predatorio de los cuerpos (Valencia Triana, 2016) que devendría masivo apenas una década después. En noviembre del 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), deliberó sobre la responsabilidad de México por la "desaparición y ulterior muerte" en Ciudad Juárez de Claudia González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Ramos Monárrez cuyos cuerpos fueron encontrados en noviembre del 2001 luego de haber permanecido en calidad de desaparecidas. La responsabilidad del Estado se fincó por:

> [L]a falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición [...]; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos [...], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada" (CoIDH, 2009).

A pesar de esta sentencia, el Estado aún no ha puesto en marcha mecanismos efectivos de protección y las desapariciones de mujeres han seguido presentándose e incluso han ido en aumento considerable.

De acuerdo con *la Observación general sobre las mujeres afectadas por las desapariciones forzadas* del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) (A/HRC/WGEID/98/2), en el numeral 8:

> De manera desproporcionada, las mujeres víctimas de desaparición forzada son objeto de violencia sexual y están expuestas a sufrimientos y humillaciones. Debido a sus características biológicas, en particular su capacidad de reproducción, las mujeres víctimas de desaparición forzada suelen emplearse como herramienta o instrumento para alcanzar objetivos específicos. Su cuerpo es utilizado como parte de una estrategia de control social. De acuerdo con la experiencia del Grupo de Trabajo, en particular los testimonios de muchas testigos y sobrevivientes, las mujeres que son víctimas de desaparición forzada son objeto de actos de violencia de género, por ejemplo violencia física y sexual, incluida la violación, que pueden considerarse tortura, o de amenazas de sufrir esos daños. (Citado en CNDH/HCHR, 2015, p. 124).

De esta manera, y de acuerdo con el mismo GTDFI, si bien es cierto que a nivel mundial la proporción de mujeres que son víctimas de desaparición forzada es mucho menor a la de los hombres (CNDH/HCHR, 2015, p. 123) y en México esta tendencia se mantiene (73.7% hombres y 26.3% mujeres, según el RNPED, 2018), también es cierto que estas desapariciones de mujeres tienen características específicas. A pesar de que no hay elementos para llevar a cabo investigaciones en profundidad sobre los diferentes motivos y usos de las desapariciones de mujeres en el México actual, sí hay algunos datos que permiten establecer patrones en los cuales los usos sexuales del cuerpo serían una constante. Por ejemplo, la trata de personas, con objetivos de explotación sexual, sería una de las principales causas de desaparición de mujeres. Según de Santiago, Castolo, Peña y Martínez (2016) y de acuerdo con información de organismos internacionales y la misma Procuraduría General de la República (PGR), en México estarían operando al menos 47 grupos delictivos involucrados con la trata de personas. Si bien es cierto que la trata de personas es un crimen complejo, el cual es muy difícil de determinar (Ulloa Ziáurriz, 2017), también es cierto que en la mayoría de los casos el paradero de estas personas es ocultado o negado por los perpretadores —que muchas veces actúan en connivencia con agentes del Estado—, por lo que se les considera también como desaparición forzada mientras no se pueda determinar el paradero de la víctima y si la persona permanece en esas condiciones contra su voluntad (Corcuera Cabezut, 2015). De acuerdo con el observatorio *Cero*

Trata, las entidades federativas con mayor grado de vulnerabilidad para ser víctimas de desaparición y trata son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas (Cero Trata, s. d.). Al mismo tiempo, de acuerdo con una investigación regional en Puebla, las causas estructurales para la desaparición de mujeres estarían originadas por la violencia de género contra nosotras y por la falta de procuración de justicia. El grupo más vulnerable son las niñas de entre 13 y 17 años de edad (Pérez Oseguera y Espíndola Pérez, 2015, p. 71). Recientemente, el Estado de México se ha convertido en uno de los territorios más peligrosos para la integridad de las mujeres y donde además los feminicidios y las desapariciones se mantienen en total impunidad (Milenio, 2017). Los procedimientos para comenzar con el lenocinio pueden ser de manera violenta a través de sustracción forzada de la persona de su entorno familiar o a través de *enganchadores* que recurren al amor romántico para desarticular a las víctimas de su entorno social y familiar, seguido de su ocultamiento (Morales y Hernández, 2018).

Sin embargo, a pesar de que la trata de personas es una de las principales causas de la desaparición de mujeres ésta no es la única. Por ejemplo, en el contexto de los ajustes entre actores de la criminalidad en el cambio de gobierno en Veracruz entre los priistas Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) —señalado de haber financiado parte de su campaña con dinero proveniente del grupo criminal Los Zetas (Dulitzky, 2017)— y Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) —actualmente preso por diversos delitos entre ellos por enriquecimiento ilícito y su vinculación con grupos criminales—, y a menos de un año de haber tomado el poder este último, en noviembre de 2011, fueron desaparecidas en tan solo 3 noches 50 mujeres en la capital del estado de Veracruz:

> Algunas eran madres solteras, otras trabajadoras sexuales a tiempo completo, y otras eran estudiantes y aspirantes a reinas de belleza [...] muchas de ellas trabajaban como edecanes de alto nivel, contratadas para eventos políticos, así como para fiestas más exclusivas a las que acudían funcionarios del gobierno y líderes del temido cártel de Los Zetas (Lakhani, 2016; Torliere, 2016).

A pesar de la criminalización que se suele hacer de las víctimas de la violencia de Estado y de la desaparición forzada en particular, al indefectiblemente asociarles a grupos criminales, en este caso particular citado arriba, esto sí pareciera ser cierto. De acuerdo con la investigación periodística de Lakhani (2016) —que se confirmó dos años después con el arresto de 16 altos mandos policiacos de ese gobierno mencionados en la sección anterior—, durante el mandato de Javier Duarte se dispuso que se hicieran nuevos acomodos y acuerdos entre los agentes del Estado y los narcotraficantes que operarían en la región:

> Cuando Javier Duarte de Ochoa llegó a la gubernatura de Veracruz, en 2010, integrantes de la Secretaría de Marina se desplegaron en la entidad. Se les ordenó "limpiar el estado, detener o matar a cualquier persona sospechosa de trabajar con Los Zetas, rápidamente, antes de que interfirieran los medios, los defensores de derechos humanos y las organizaciones internacionales", dijo al diario un exprocurador (Lakhani, 2016; Torliere, 2016).

De esta manera, estas 50 mujeres que desaparecieron en tres noches formaban parte de un "mercado de damas de compañía" que el mismo padre de una de ellas ha ido descubriendo en sus investigaciones por dar con el paradero de su hija (Ernst, 2017). Al parecer formaban parte de las bases de apoyo de un grupo criminal en particular, al que en el presente mandato gubernamental regional se quería debilitar. "Sabían demasiado" de las relaciones entre agentes del Estado —políticos de altos mandos— y los miembros de los grupos criminales (Lakhani, 2016; Torliere, 2016).

Este sería entonces otro de los motivos de la desaparición de mujeres. El cuerpo *sacrificable* luego de una prestación de servicios. Es decir, estas desapariciones de mujeres, las cuales tenían una relación de orden sexual con las redes de criminalidad, forman parte de lo *sacrificable* cuando ya no les son útiles a estos mercados. Si bien la mujer como cuerpo-objeto está presente en diferentes esferas de la sociedad, en el caso de las desapariciones forzadas esta relación se exacerba porque el trabajo sexual de la mujer rebasa una relación de prestación de servicios mercantilizada. Se

convierte entonces en una relación de mujer-cuerpo-objeto-mercancía-desechable despojándole de toda humanidad y garantizando aún más la impunidad.

Por otra parte, cuando las mujeres no son las víctimas directas de una desaparición forzada pero que tienen algún/a familiar cercano desaparecido, muchas veces también son objeto de diferentes tipos de vejaciones y tortura sexual y psicológica por parte de los perpetradores de la desaparición de sus familiares. Al igual que durante la Guerra Sucia cuando la detención forzada era utilizada para obligar a las mujeres de los detenidos-desaparecidos a tener relaciones sexuales con los militares que les retenían (FEMOSPP, 2006, capítulo 5, p. 132), en la actualidad esos patrones se repiten. Por ejemplo, otra vez en Veracruz, durante la audiencia de vinculación a proceso de 16 policías y ex-mandos policiacos por múltiples desapariciones forzadas en este estado, fue conocido que estos agentes "solían contactar a las esposas de las personas a quienes habían privado de la libertad para violarlas [...] entre sus víctimas había menores de edad. Se mencionó un caso en que infligieron tortura a un bebé de 10 meses" (E. Gómez, 2018).

Así, a pesar de que en el país se han puesto en marcha diferentes sistemas de alerta para la búsqueda inmediata y efectiva de mujeres en caso de desaparición: Alerta Amber para niñas, el Protocolo Alba en Jalisco, la Alerta Roja de CATWLAC o el mismo Programa de Niñas y Mujeres Desaparecidas "Dar Contigo" que fue creado para responder a la CoIDH con respecto a la sentencia emitida por los crímenes del Campo Algodonero (Observatorio Nacional Ciudadano, 2017), la reciente implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (16 de enero del 2018) no contempla ninguna disposición particular para este grupo especialmente vulnerable. Los únicos dos numerales donde se hace alusión a este grupo es en el Artículo 32 numeral II. Donde se estipula: "Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser

aumentadas hasta en una mitad cuando: La Persona Desaparecida sea niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor". Y en el Artículo 134 numeral VI. Donde se indica que el Programa Nacional de Búsqueda y Localización, a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, deberá contener, como mínimo:

> Las estrategias específicas a seguir con base en la información y el análisis de contexto, para la búsqueda de personas migrantes, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores u otras personas o grupos que dadas sus características requieran medidas o mecanismos diferenciados de búsqueda (*Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas*, 2018).

De esta manera podemos ver, que a pesar de que las mujeres no representan porcentualmente una mayoría de las personas que se hacen desaparecer, las dinámicas de género hacen que se haga de ellas un uso específico de sus cuerpos. Muchas de las veces, estos usos son con fines de explotación sexual, por lo que, entre otras, cosas, deberían establecerse mecanismos especiales para su búsqueda. Es el mismo caso que ocurre con las niñas y los niños, las condiciones de indefinición en la que se encuentran por ser un grupo particularmente vulnerable, les hace proclives a usos de desaparición específicas como es la adopción ilegal, pero también, al igual que las mujeres, de explotación sexual, tal como será desarrollado en la siguiente sección.

3.2.3 Las desapariciones de niñas y niños: reclutamiento forzado, adopciones ilegales, explotación sexual y otros usos predatorios de sus cuerpos

Si bien es cierto que las y los niños por definición pertenecen a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad por su condición de "menores" ante la ley y por ende el Estado tiene una obligación particular de protegerles, también es cierto que en México la desaparición de menores no ha gozado de una atención particular por parte del Estado. De acuerdo con datos de la PGR, de 644 Alertas Amber que fueron

emitidas entre 2012 y 2016, 429 habían tenido éxito. Es decir, el 66% de estos infantes habrían sido localizados y localizadas, mientras que el 33%, no (El Universal, 2016). Sin embargo, al igual que en el resto de los casos de desaparición cometida por particulares y de desaparición forzada, el número de casos denunciados no corresponde a las cifras reales. En primer lugar, muchas personas, como ya fue expuesto, no denuncian la desaparición por miedo o por falta de confianza en las instituciones. En segundo lugar, los agentes de los ministerios públicos generalmente minimizan la desaparición y se rehúsan a lanzar la Alerta Amber, criminalizando a la persona desaparecida y/o responsabilizándola por su desaparición y más aún si es una adolescente. Como por ejemplo fue la postura que demostró el Procurador del Estado de Veracruz, Reynaldo Escobar Pérez (mayo-octubre del 2011), cuando respondió a la madre de Gabriela Arlene Benítez Ybarra al momento de denunciar su desaparición —y aún sin haber hecho ninguna investigación— "[S]e van con el novio" (Reyes Isidoro, 2012). En ese sentido, la revictimización por cuestiones de género sería otras de las razones disuasorias para no denunciar o para retrasar la búsqueda.

En cuanto a la desaparición específica de infantes, al igual que la de las mujeres, ésta puede estar vinculada a delitos de carácter sexual (pedofilia, trata de personas) o de violencia de género en el caso de las niñas (Ulloa Ziáurriz, 2017), pero no son los únicos casos de figura. Por ejemplo, por lo menos desde el año 2011 la misma Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, emitió un informe donde reconocía que al menos 25 mil niños y adultos jóvenes menores de 25 años habían sido víctimas de reclutamiento forzado vinculado a otros delitos como la venta o trata de personas (Gil Olmos, 2011; P. Martínez, 2012a; REDIM, 2014). De acuerdo con Ariel Dulitzky, expresidente del GTDFI en entrevista con Carmen Aristegui, en Coahuila, el cártel de los Zetas, —siempre en connivencia con altos rangos de agentes del Estado— recurriría de manera sistemática a esta práctica.

> Es el reclutamiento forzado de menores de edad, de niños, fundamentalmente niños estadounidenses porque tienen pasaporte era más fácil que pudieran pasar la frontera con menos control y el cálculo que hacían los Zetas es que siendo menores de edad no iban a ir a la cárcel o iban a tener penas menores para traficar. ¿Y cómo hacían el reclutamiento forzado? El reclutamiento forzado era en base a la intimidación. Hay testimonios que dicen, me secuestraron a mí y a cinco amigos. Dijeron quién quiere trabajar para los Zetas. Al primero dijo: —Yo no quiero trabajar. Lo mataron ahí mismo enfrente de los otros. Los otros cuatro dijeron: —Sí vamos a trabajar. (« Ariel Dulitzky: Los Zetas descuartizaban vivas a sus víctimas en Coahuila », 2017). Ver también: (Dulitzky, 2017, p. 46-48).

Si bien no en todos los casos se puede afirmar que se trata de desapariciones forzadas. Sí existen diversos casos documentados en donde la familia no sabe nada del o la menor que fue sustraída con fines de reclutamiento forzado (P. Martínez, 2012a). De acuerdo con el informe "La infancia cuenta en México 2017" de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de 35 mil 410 personas registradas desde 1979 y hasta enero de 2018, 6 mil 330 serían infantes o adolescentes, es decir, el 17.9% del total de las desapariciones. El 70% de las desapariciones que aparecen en este registro habrían ocurrido durante los primeros 5 años de la administración de Enrique Peña Nieto. Es decir, un total de 4394 desapariciones de menores oficialmente reconocidas solamente en este sexenio (REDIM, 2017, p. 7-11). Nuevamente, al igual que con las mujeres, el Estado de México es el que concentra mayor denuncia de desaparición de menores en el país. Además, hay que recordar que este es un subregistro debido a que de acuerdo con el mismo informe, el 96% de los delitos cometidos contra infantes no se denuncian (REDIM, 2017, p. 7-11). Este porcentaje se acentúa si pensamos que muchos menores viajan solos en la ruta migratoria trasnacional del Centroamérica-México-Estados Unidos y que las y los niños son aún más vulnerables que los adultos (REDIM, 2017, p. 7-11).

Entre las causas de las desapariciones de menores se puede identificar también la adopción ilegal de éstos y éstas tanto en el ámbito nacional como internacional con aquiescencia de agentes del Estado. Los ejemplos también se multiplican. Entre los más mediatizados se puede citar el de Casitas del Sur en 2008, donde alrededor de 15 menores estuvieron en calidad de desaparecidos por varios años —algunos todavía no han sido localizados— y que contra su voluntad y sustrayéndoles de la protección de la ley, con connivencia de las autoridades, fueron entregados a una secta evangélica (Milenio, 2014). Es decir, en este caso la desaparición forzada tenía como objetivo el tráfico de menores con fines de adopción.

Por otra parte, en el caso de menores, también la trata infantil con fines sexuales y pornografía infantil es una de las causas de las desapariciones forzadas. Nestora Salgado, una de las líderes de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, estuvo en calidad de presa política por tres años acusada de secuestro por denunciar este negocio predatorio millonario. Denunció públicamente tener dos vídeos donde aparecen 3 niñas de entre 9 y 13 años. En sus declaraciones dijeron que tenían los vídeos en la Casa de Justicia El Paraíso. Luego de estas declaraciones, el ejército llegó y lo quemó todo. La policía indígena comunitaria de Olinalá tenía más copias de estos vídeos distribuidos en diferentes puntos para asegurar su protección. Hasta la fecha nadie ha sido procesado por estos crímenes (Petrich, 2016). Antes de Nestora Salgado, la periodista Lydia Cacho había publicado en 2005, reeditado en 2015, un libro titulado *Los demonios del Edén* (Cacho, 2015), un análisis sobre pornografía infantil y trata de menores en Cancún, Quintana Roo donde documentaba la participación en esta red constituida por políticos de altos cargos y empresarios muy importantes en el país. La publicación de este libro le valió una detención arbitraria

que tenía por objetivo desaparecerla y durante la cual fue víctima de tortura física y psicológica (Soto, 2015)[140].

3.2.4 Desapariciones en el marco del trabajo forzado especializado

Por otra parte, además de las desapariciones para debilitar a los rivales en las economías militares, la desaparición de mujeres e infantes, en el marco de estas economías criminales y predatorias, también se presentan muchos casos de desapariciones de profesionistas, que se presume, tienen por finalidad la realización de trabajo forzado especializado. Éste sería necesario para la operación de las economías ilegales y predatorias. Entre este trabajo forzado profesional podemos citar el de médicos que han sido desaparecidos de manera temporal o que continúan estándolo para prestar sus servicios a actores que están en la clandestinidad, ya sea porque debido al tipo de heridas serían inmediatamente dirigidos hacia los agentes del Ministerio Público —heridas de bala, quemaduras graves, golpes contusos, etc.— o de las personas que están retenidas contra su voluntad. Aquí también los ejemplos se multiplican. En noviembre de 2017 un grupo armado privó de su libertad a un médico de Gómez Farías, Chihuahua "para supuestamente atender a miembros heridos de un grupo criminal" (L. Fierro, 2017). En Coahuila, en diciembre de 2017 otro médico "fue secuestrado para atender a un jefe de un cártel de narcotraficantes de sufría de neumonía" (Meza y Gallo, 2017). En 2011 en Nuevo León, al menos 10 estudiantes de medicina que realizaban su servicio social en el norte de la entidad, fueron secuestrados para "atender a integrantes del crimen organizado que resultan heridos

---

[140] En agosto de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, emitió una resolución por el caso de la periodista, donde determina que la detención de la que fue objeto violó sus derechos humanos y fue discriminatoria por razones de género, por lo que insta al Estado mexicano a realizar una investigación imparcial sobre los hechos denunciados por Lidia Cacho, pronta y exhaustiva. Además de procesar y castigar con penas adecuadas a los responsables y establecer medidas compensatorias a la víctima, así como adoptar medidas para la no repetición (Aristegui Noticias, 2018).

en distintos enfrentamientos" (La Policiaca, 2011), etc. En ese sentido, ingenieros, técnicos en telecomunicaciones, expertos en informática, son también algunos de los profesionistas que han sido víctimas trabajos forzados y/o de desaparición (Anderson, 2015; P. Martínez, 2012b; Takahashi, 2011). En virtud de ello, las desapariciones tendrían un fin de explotación de conocimiento, que una vez colmada la necesidad de su *expertise*, y ante la posibilidad de delación, estas y estos sujetos serían desaparecidos.

3.2.5 Perderse en la niebla, la desaparición forzada de personas en situación de desplazamiento y migración

Otra de las emergencias humanitarias que se viven en el país —y quizá una de las más agudas—, es el de la desaparición forzada de las personas que se encuentran en situación de migración, en particular centroamericanas, y esto además de la desaparición en sí, por el volumen abominable que se estima que representan. Si las cifras oficiales de las y los ciudadanos mexicanos que han sido desaparecidos en el país son deficientes, las de personas migrantes desaparecidas en el territorio nacional son raquíticas e incluso inexistentes (Montalvo, 2014). Aproximadamente al año ingresan al país entre 150 mil y 400 mil personas migrantes "en situación irregular", la mayoría de ellas centroamericanas (CNDH, 2011, p. 5). El Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) estimaba en noviembre del 2016 que había en el país en los últimos 10 años, alrededor de 70 mil personas migrantes centroamericanas desaparecidas en su tránsito por México (Guzmán, 2016). Es decir, casi el doble de las personas connacionales que están registradas en el RNPED.

De acuerdo con la CNDH, "la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes es extrema" (CNDH, 2011, p. 3). Desarticulados del entorno social que les rodea y transitando por el territorio nacional sin haber realizado trámites migratorios "oficiales", las personas migrantes centroamericanas que están obligadas a atravesar

el territorio nacional por tierra con la esperanza de llegar a Estados Unidos, están particularmente expuestas a ser objeto de delitos y de crímenes y no solo por parte de las redes criminales, sino también por agentes del Estado. En cuanto a esta situación, el GTDFI dedicó su informe del 2017 a la desaparición forzada de personas en situación de migración, concretamente con respecto a las desapariciones de migrantes en México, a la letra dice:

> Se han reportado casos en México donde los migrantes son presuntamente capturados por la policía federal, estatal o municipal, o por funcionarios de migración, y entregados a organizaciones delictivas que los detienen en busca de rescate, o que son secuestrados en rutas migratorias conjuntamente por funcionarios y miembros de organizaciones delictivas. En otros casos, según los informes, las organizaciones delictivas capturaron a migrantes con el apoyo, el consentimiento o la aquiescencia directos o indirectos del Estado (GTDFI, 2017, p. 10).

En el sentido que lo señala el GTDFI, por lo mismo de su situación "irregular", los delitos y crímenes de los que son objeto las personas migrantes tienen prácticamente una "garantía" de impunidad ya que incluso los derechos más elementales les son negados por el Estado mexicano y donde los abusos constantes por personal policial y migratorio han sido ampliamente documentados (CIDH, 2013; CNDH, 2011; Duhaime y Thibault, 2018; Minera y Solalinde, 2017; Suárez *et al.*, 2017). En la misma línea, cuatro años antes, la CIDH en su informe especial sobre "Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de movilidad humana en México" (2013), señalaba que la desaparición de personas en situación en migración se habría convertido en una práctica común en México:

> La Comisión [Interamericana de Derechos Humanos] observa con suma preocupación que la desaparición de personas se ha convertido en una práctica común, la cual ha tenido un impacto extremadamente grave en los migrantes y mexicanos que transitan por México con destino hacia Estados Unidos, así como en mexicanos que son deportados desde los Estados Unidos a algunas zonas fronterizas. Con base en la información recabada, la Comisión observa que en muchas ocasiones los migrantes que son secuestrados por grupos del

> crimen organizado suelen ser víctimas de violencia física, psicológica y sexual, prostitución ajena, explotación sexual y laboral, asesinatos y desapariciones (CIDH, 2013, p. 74).

En ese sentido, de acuerdo con este informe de la CIDH, la desaparición de personas migrantes en México, en particular ocurriría con fines predatorios (prostitución ajena, explotación sexual y laboral, etc.), debido a las casi nulas consecuencias de las que eventualmente serían objeto sus perpetradores ya que no existen garantías de protección. Concretamente en lo concerniente a la desaparición de personas migrantes se ha documentado que éstas desaparecen luego de ser víctimas de secuestro para reclamar a sus familiares —en su país de origen o en Estados Unidos— un pago por su rescate pero en la mayoría de los casos no son liberados (Minera y Solalinde, 2017). Los perpetradores ya sea que se deshacen de sus cuerpos luego de cobrado el rescate o les obligan a prostituirse en el caso de las mujeres (CIDH, 2013; CNDH, 2011; Minera y Solalinde, 2017). También, por ejemplo, les obligan a actuar como *enganchadores* de otras personas migrantes o son obligados a realizar trabajos forzados en la producción de las economías ilegales: cultivo y transformación de estupefacientes, extractivismo ilegal, construcción de túneles para trasiego de drogas, etc.

3.2.6 Las desapariciones colectivas, de la negación de la singularidad en el espacio social a los crímenes de lesa humanidad

Muy de la mano de la desaparición en tránsito y de migrantes, están las desapariciones masivas de personas. De acuerdo con la información del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, de los 549 casos de desaparición registrados por la organización CADHAC en Nuevo León entre 2009 y 2017, se habían presentado 56 eventos de desaparición colectiva (Yankelevich, 2018). De igual manera, el segundo informe que versó sobre el estado de Coahuila con información recabada por los organismos Fray Juan de Larios, CADHAC, Familias Unidas, Grupo Vida y Alas de

Esperanza, entre 2001 y 2017, de las 729 desapariciones registradas, 65% de los eventos habrían sido colectivos. (Notas de diario de campo, presentación del informe el 13 de marzo del 2018 en FLACSO Ciudad de México).

De igual manera, directamente vinculado con la desaparición de personas migrantes y en eventos colectivos, están los hechos que han sido ampliamente documentados en San Fernando Tamaulipas en 2010 y 2011. El 25 de agosto del 2010, miembros del grupo criminal Zetas con aquiescencia de miembros del Estado, ejecutaron por la espalda a 72 migrantes que tenían secuestrados, principalmente de Centro y Sudamérica, 58 hombres y 14 mujeres, una de ellas embarazada, puesto que no pudieron pagar el rescate que pedían por ellos y haberse negado a formar parte del grupo delictivo. Los cuerpos fueron localizados a la intemperie, muchos de ellos con el tiro de gracia, debido a la denuncia de un ecuatoriano que sobrevivió a la masacre, fingiendo estar muerto, y que pudo dar aviso a la Marina (Aguayo y Dayán, 2017; Aranda, 2010; CNDH, 2013; Turati, 2016).

Menos de un semestre después, en marzo de 2011, en el mismo municipio, miembros de los Zetas detuvieron diversos autobuses de pasajeros e hicieron descender a las personas migrantes para secuestrarles. Para junio del mismo año, representantes del Estado que investigaban sobre el secuestro en esos autobuses, habían descubierto más de 40 fosas clandestinas con 193 cadáveres (Open Society Foundations, 2016, p. 101). Tan solo en Tamaulipas, entre el 2007 y el 2014, entre la Policía Federal y el Ejército rescataron con vida a 4030 personas que estaban retenidas en grandes grupos, contra su voluntad, e incomunicadas con sus familiares (Turati, 2016).

Estos eventos están lejos de ser aislados y si bien las maneras de hacer desaparecer y los usos que se hacen de los cuerpos no parecen ser homogéneos en todo el país, sí se puede observar que los eventos masivos de desaparición son recurrentes en los estados del norte del país, en Tabasco y en Veracruz. Es decir, donde tiene mayor

presencia el grupo de los Zetas. Otro evento de desaparición que no puede dar cuenta de una finalidad específica del para qué desaparecen a personas en eventos masivos es el de un grupo de cinco personas, vendedoras ambulantes, con discapacidad auditiva que se encontraban de paso en Piedras Negras, Coahuila y que fueron desparecidos, sin más, de una esquina donde intentaban vender sus productos. En ese sentido, Beatriz Flores Santoyo, madre de uno de ellos, de José Antonio Ángeles Flores, explica este evento de desaparición:

> El 12 de febrero del 2012 fueron desaparecidos mi hijo y cuatro amigos más. Fue gente armada, vestidos de negro y fueron subidos a una camioneta entre 5:00 y 7:00 de la noche del crucero, estaban trabajando. Los cinco son discapacitados, son sordomudos, por su discapacidad de ellos, se ven con la necesidad de salir fuera de la ciudad a trabajar, porque no hay un trabajo estable para ellos, es muy difícil. Si ellos querían entrar a trabajar al metro, los sacaban. Si ellos querían entrar a trabajar a un establecimiento como este, los sacaban, son muy marginados, no entiendo por qué. Cuando se los llevaron estaban de paso en la ciudad, nadie los conocía, no sé por qué se los llevaron (Entrevista, el 13 de febrero del 2017).

El caso de José Antonio Ángeles Flores y sus compañeros están lejos de ser aislados. Los ejemplos como estos de casos masivos de desaparición de personas sin motivo aparente se multiplican. Solo que en algunos casos, la "verdad jurídica" pudo establecer que fueron policías quienes realizaron la detención y luego pasaron la estafeta de su desaparición a civiles miembros de la misma red criminal. En estos casos su participación en la desaparición se pudo determinar ya sea porque había vídeos en el momento en que fueron sustraídos, como en el caso de 5 jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz (Zavaleta, 2107) o porque son ciudadanos del Norte Global en donde la desaparición está lejos de ser normalizada y sus Estados tienen más capacidad de presión sobre México, por lo que obligan a que se realice una investigación efectiva, como es el caso de 3 italianos que hicieron desaparecer en Tecalitlán Jalisco en febrero del 2018 (Animal político, 2018).

Si bien la desaparición de una persona es trágica en sí misma por la sujeción total que se le infringe a la persona misma y los efectos en sus familiares y entorno cercano, donde además se violan múltiples derechos. Por ejemplo, en toda desaparición de personas se violan el derecho al trato digno, el derecho a la libertad, el derecho la integridad y seguridad personal, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la legalidad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y al debido proceso, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho al acceso a la justicia, etc. (CNDH, s. d.). En el caso de una desaparición masiva, a nivel social lo que puede leerse es que además de negarle su humanidad como el crimen complejo que es, sin una motivación política específica o que ataña directamente a la persona que se hace desaparecer, le niega adicionalmente a quienes desaparecen su singularidad.

En el momento actual, se tiene muy poca información sobre los usos que se hace de esos cuerpos que son sustraídos —sin que eso quiera decir que se pierde la esperanza de que el derecho a la verdad sea establecido en un futuro cercano—. Sin embargo, lo que sí sabe es que las personas que fueron sustraídas en estas desapariciones masivas no fue por un rasgo de su fenotipo específico, ni por su agentividad política, tampoco por su *ente* en sí, si no por su corporalidad misma, por los usos —aún inciertos para el común— que se puede hacer de éstos, como una mercancía más —casi "cualquiera"— en el marco de las economías predatorias, en el marco de una fase avanzada de implementación de la economía neoliberal, donde la función original del Estado ha sido prácticamente borrada. En la reflexión de Valencia Triana (2016) este uso predatorio de los cuerpos, rompería incluso con las lógicas mismas del proceso de producción de capital:

> Cuerpos concebidos como productos de intercambio que alteran y rompen las lógicas del proceso de producción del capital, ya que subvierten los términos de ésta al sacar del juego la fase de producción de la mercancía, sustituyéndola por una mercancía literalmente encarnada por el cuerpo y la

> vida humana a través de técnicas predatorias de violencia extrema como el secuestro o el asesinato por encargo (Valencia Triana, 2016, p. 15).

Pero esto no quiere decir que sea una fase avanzada cualquiera, tampoco homogénea a cualquier geografía del globo. Es una fase avanzada de la periferia, de donde se extraen las materias primas, el extractivismo en su estado más puro, en donde el contrato social dejó de ser útil al capital y en nombre de la acumulación de unos cuantos —miembros de la cúpula del poder, gobierno y ciertos empresarios— se extrae hasta la esencia misma del ser humano, esa que representa su singularidad. El cuerpo en un punto tal de *fetichización* que Marx ni siquiera alcanzó a imaginar.

Hasta aquí han sido analizados algunos usos de la desaparición forzada en el México actual, y en el marco de las economías predatorias. Por ejemplo para debilitar a grupos rivales y liberar los territorios para la operación de economías ilícitas vinculadas al narcotráfico, pero no únicamente: trata de personas, derecho de piso, trata de personas con fines de explotación sexual, etc. Sin embargo, tal como lo veremos en las secciones siguientes, las desapariciones forzadas también siguieron siendo utilizadas, al igual que en la Guerra Sucia, con fines de gobernabilidad. Por ejemplo, para desarrollar megaproyectos extractivistas y a partir de medidas disuasorias, como por ejemplo la desaparición de personas, entre otras estrategias, reducir las movilizaciones sociales de oposición.

3.2.7 Desaparecer a las y los mensajeros: la desaparición de periodistas en el ejercicio de la denuncia pública y de su profesión

En cuanto a periodistas, por ejemplo, la organización Artículo 19 tiene documentadas 23 desapariciones de periodistas en el marco del ejercicio de su profesión entre 2003 y 2018, es decir, aproximadamente dos por año. Tamaulipas sería el estado con más incidencia, con cuatro casos, seguido de Michoacán y Veracruz con dos cada uno. Si bien, el recurso a la desaparición no sería una de las principales violencias contra

periodistas tomando en cuenta que México es uno de los países del mundo y de Latinoamérica donde se asesinan a más periodistas para acallar la libertad de expresión (Flores, 2017; Forbes, 2015); también es cierto que de estos casos documentados, la mayoría cubría delitos que implicaban a funcionarios públicos. Por ejemplo, 96% cubría notas relacionadas con corrupción y seguridad en las que se involucraba a militares, a agentes federales, estatales y/o municipales (Artículo 19, 2018).

Al igual que en los demás casos, estas cifras están lejos de reflejar la magnitud del problema. Si bien en el caso de las agresiones a las defensoras y defensores de derechos humanos y de defensa del territorio, incluso de periodistas, son más fácilmente documentables por la denuncia pública que se hacen de ellas, debido al nivel de politización de las redes de muchas de estas personas; también es cierto que a falta de una base de datos nacional donde se documente la posible desaparición de las personas por su actividad profesional y/o política —análisis de contexto—, estos casos también van a continuar teniendo un subregistro, debido a que cada organización las documenta a partir de sus redes, tal como se podrá observar en la dos siguientes secciones en cuanto a la documentación que hace la Red TDT, que no necesariamente coincide con la del Comité Hasta Encontrarlos.

3.2.8 Desvanecerse en la economía extractivista y las acciones paramilitares

Tal como fue desarrollado en los parágrafos precedentes, muchas de las desapariciones forzadas podrían tener su origen en economías predatorias, debido a la diversificación del mercado de redes criminales que trabajan en connivencia con agentes del Estado y que al mismo tiempo están jugando un doble rol, como funcionarios que mantienen la institucionalidad en pie y como miembros de estas redes de depredación de cuerpos que puentean entre lo legal y lo ilegal. Sin embargo, no todas las desapariciones en la actualidad tendrían su origen en las economías

predatorias. También estas redes de macrocriminalidad, muchas veces entre ellas en disputa, estarían cumpliendo funciones paramilitares para liberar los territorios donde se presenta algún tipo de resistencia a la instauración de megaproyectos, en particular de modelos extractivistas de uso y/o explotación del territorio (Avilés, 2014; Mastrogiovanni, 2016). Es decir, nuevamente la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas se presentan como mecanismo de terror para ejercer una política de Estado y en este caso provocar el desplazamiento forzado para instaurar megaproyectos (Avilés, 2014; Celis Sánchez y Aierdi Urraza, 2015; Fazio, 2016). Sin embargo, esta vez no *so pretexto* de la seguridad nacional, sino para dejar libre paso a la apropiación del territorio por economías criminales como el extractivismo tanto el regulado como el no regulado, el cultivo y la explotación de narcóticos ilegales, o la apropiación de los cultivos de exportación como es el caso del aguacate en Michoacán, etc.

De acuerdo con lo que la Red *Todos los Derechos para Todas y Todos* (TDT) ha podido documentar, tan solo en los primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre del 2016, se tiene conocimiento de 302 casos de personas y colectivos que han sido objeto de violaciones a sus derechos humanos por su labor de defensa y periodística (P. Morales, 2017). De éstos, el 29% de los casos (113) se dieron en los rubros de defensa de derechos humanos y del territorio en 114 comunidades del país y el 36% (139 casos) en los casos de acompañamiento a personas defensoras y colectivos en defensa de la criminalización y la defensa social. De estos 302 crímenes, se estiman 106 ejecuciones forzadas y 81 personas desaparecidas. De hecho, tan solo entre enero de 2013 y diciembre de 2016 fueron desaparecidas 73 personas por su labor de defensa. Los Estados con más incidencia son Chiapas con 24 casos, Oaxaca con 24, Jalisco con 10, Chihuahua con 8 y Guerrero con 7. Otra vez son los hombres quienes más han sido flanco de desaparición presentando de 73 casos, 71 incidencias. Las dos

mujeres que han sido desaparecidas en este marco fueron una en Guerrero y otra en Veracruz.

3.2.9 Las desapariciones forzadas de los disidentes políticos, una continuidad

Finalmente, también hay una continuidad en las desapariciones forzadas debido a la implicación política de las personas, al igual que en la Guerra Sucia. Los casos que han sido más documentados fueron los de dos miembros del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (EDPR-EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez quienes fueron desaparecidos por miembros del ejército mexicano en la Ciudad de Oaxaca el día 25 de mayo del 2007. Estas desapariciones llevaron incluso a la instauración de una comisión de mediación entre el PDPR-EPR y el gobierno mexicano. En este marco, fueron emitidos tanto por el gobierno como por el PDPR-EPR varios comunicados. El del PDPR-EPR del 13 de julio del 2008, señala directamente al gobernador del estado de Oaxaca como principal responsable.

> *El 13 de julio* [del 2008], circuló un comunicado del PDPR-EPR dirigido "al pueblo de México" en el que señaló que "tanto el gobierno federal como el del Estado de Oaxaca, se empeñan en tratar la desaparición forzada de los dos eperristas, como casos de secuestro con la finalidad de eludir su responsabilidad en estos delitos imprescriptibles de *lesa humanidad*, y a lo sumo castigar a sus peones, que aunque son piezas desechables cuentan con el manto protector del Estado que los mantiene en impunidad. Denunció que "Ulises Ruiz no deja de ser represivo, sanguinario y corrupto" debido a que durante su régimen se han cometido cinco desapariciones forzadas documentadas, realizadas por los cuerpos policíacos y paramilitares que cuentan con su aquiescencia. [...] Afirman no tener duda de quiénes los detuvieron, ni tampoco Ulises Ruiz que sabe quién los detuvo y a quienes se los entregaron, fue en el contexto de los operativos policíaco-militares que se instrumentaron contra el movimiento magisterial popular, en esos meses Ulises Ruiz y el gobierno federal estaban empeñados en exterminar la protesta popular al costo que fuera como parte de su alianza para apuntalarse mutuamente en el poder. (Serapaz, 2010, p. 23-24. En itálicas en el texto original).

De hecho, fue la primera vez que el gobierno federal reconoció que existían en el país desapariciones forzadas y que la Procuraduría Federal de la República (PGR) las estaba investigando (Serapaz, 2010, p. 23-24). También fue la primera vez que por medio de un amparo se tuvo acceso al Campo militar Número 1 para la búsqueda de desaparecidos porque ahí fue la última vez que se les vio con vida (Reyes Maldonado, 2017). Sin embargo, no tuvieron acceso a todas las áreas y los miembros del ejército fueron avisados con antelación de dicha visita, tal como lo narra Nadin Reyes Maldonado, hija de Raymundo Reyes Amaya y cofundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta encontrarlos Hasta Encontrarlos:

> Haz de cuenta que nosotros nos enteramos en agosto que nuestros familiares habían sido vistos ahí y dos semanas antes, una semana antes anuncia la CNDH, bueno por medio de un amparo solicitamos que el actuario vaya a las instalaciones del campo militar porque se dijo que ahí están. O sea tú no puedes hacer eso, no puedes avisarle a una autoridad que tú vas a ir porque mueves todo y eso fue lo que pasó. Ellos dijeron sí pasen. Obviamente no se dio acceso a todo el campo que es enorme, les dieron acceso a algunas partes del campo dijeron no pues aquí no hay nada. Cerraron y dijeron no pues no, no hay nada. (Entrevista, el 18 de enero del 2017).

En el mismo sentido, que lo señala Nadin Reyes Maldonado y de acuerdo con la documentación del Comité Hasta Encontrarlos, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fueron desaparecidas por su actividad política 54 personas defensoras de derechos humanos y 2 pertenecientes a un grupo insurgente (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez), siendo los policías estatales los principales ejecutores de estas desapariciones (29%), seguido de grupos paramilitares (25%), policías municipales (14%) y militares (12%). Los hombres representan 85% y las mujeres 15%. Durante los primeros 4 años (2012-2016) del sexenio de Enrique Peña Nieto, habrían desaparecido 83 personas defensoras de derechos humanos y luchadores sociales. De éstas, el 98% son hombres y 2% mujeres. La policía estatal es uno de los principales perpetradores de estas desapariciones por motivos políticos (44%), pero esta vez estará seguido de la policía federal (23%) y del ejército (22%).

La mayoría de estas desapariciones tanto en el sexenio de Calderón Hinojosa como en el de Peña Nieto, se concentran en las entidades del sudoeste: Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, etc. (Hasta Encontrarlos, 2016).

De esta manera, hasta aquí ha sido analizado que en el México actual se experimenta un contexto de macrocriminalidad en el sentido de que converge la interacción de funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno confundidos, con agentes criminales y agentes con intereses económicos privados, que en teoría su vocación no sería la criminalidad (Salcedo-Albaran y Garay Salamanca, 2016). El entramado de estos vínculos conduce a un clima de impunidad generalizado en el que se desarrollan economías predatorias donde algunos seres humanos, y el uso que se hace de sus cuerpos, son moneda de cambio. La desaparición de personas en este contexto y en particular la desaparición forzada —debido a la participación de agentes del Estado en esta red *macrocriminal*—, es uno de los recursos para apropiarse de estos cuerpos. Así, en los parágrafos y secciones anteriores fueron pasados en revista, a partir de la poca información que en la actualidad se tiene al respecto, algunos de los motivos por los que se ha recurrido a la desaparición de personas en este período de análisis y los posibles usos de sus corporalidades. Si bien ésta no puede ser una revisión exhaustiva debido a la misma complejidad del fenómeno, gracias a la documentación y reflexión que al respecto han hecho los mismos colectivos de víctimas, algunos organismos académicos como el Observatorio de Desaparición e Impunidad u organizaciones de la sociedad civil como la Red TDT, Comité Hasta Encontrarlos, Artículo 19, un trabajo periodístico extraordinario, y trabajo de campo propio, es que podemos tener una aproximación al fenómeno.

De esta manera, a partir de este análisis se pudo observar que algunos grupos de personas serían más proclives a ser víctimas de desaparición debido a encontrarse en condiciones de vulnerabilidad por razones de género y/o edad y/o desarticulación social debido, entre otras cosas, a un proceso migratorio. Muchas de estas

desapariciones tendrían como objetivo el usufructo mercantil por actividades vinculadas a la trata de personas con fines de explotación sexual o el trabajo forzado. Pero también, en el caso específico de las y los infantes, las adopciones ilegales mediadas por un intercambio monetario. En el marco de las economías criminales en general, pero también en el marco de actividades ilegales vinculadas con el narcotráfico y/o el extractivismo, el recurso a las desapariciones forzadas podría corresponder a trabajos forzados que requieren *expertises* particulares para la implantación, el funcionamiento y/o el mantenimiento de estas industrias. Tal como han sido los casos de las desapariciones de profesionistas especializados en tecnologías específicas como por ejemplo las diferentes ingenierías y/o telecomunicaciones o incluso para atender en salud a personas que se encuentran en clandestinidad, forzada o voluntaria, o que han sido heridas en el marco de actividades ilícitas.

En este mismo periodo, tal como fue desarrollado en los parágrafos precedentes, también se ha recurrido a la desaparición forzada de personas para debilitar a bandas delincuenciales vinculadas a redes adversas a las personas que en ese momento estaban en puestos de poder y/o para desarticular movimientos sociales que se oponen a la implantación de megaproyectos, además del recurso "tradicional" a la desaparición forzada para debilitar a grupos *subversivos* que cuestionan las condiciones estructurales de pobreza y exclusión. Además de todo lo anterior, tampoco se puede excluir del análisis que en un clima de impunidad generalizado —la *vida nuda* en su estado más puro—, se puedan dar desapariciones "porque sí", debido a la "brutalidad policiaca" en el marco de las detenciones o las torturas o por "arreglo de cuentas personales" que terminan en un asesinato y el ocultamiento de los restos, por ejemplo. Si bien, todas estas acciones pueden derivar en múltiples violaciones a los derechos humanos y/o a otros crímenes complejos, también es cierto que todos estos casos de figura comienzan con el acto ejecutante de la desaparición y

se mantienen como tal mientras quienes les buscan no conozcan el paradero de la persona en cuestión.

De esta manera, en función de lo que aquí ha sido señalado y en la misma línea que Salcedo-Albarán y Garay Salamanca, podemos citar al jurista italo-francés Luigi Ferrajoli, para el cual el fracaso de las democracias —y yo agregaría de la inobservancia del respeto del Estado de Derecho— en muchas partes del mundo se debe a lo que él llama la criminalidad del poder y que se expresa de tres maneras: la criminalidad vinculada a la delincuencia organizada y con los centros de poder político, la apropiación de los recursos naturales y la devastación del ambiente y, la tercera, es la criminalidad del poder que actúa desde las estructuras del Estado que utilizan las técnicas de las *guerras sucias*: desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, etc. Es decir, de acuerdo con Luigi Ferrajoli el fracaso de la democracia se debería: al triunfo de la ilegalidad, la quiebra del Estado de Derecho y la violación sistemática de las constituciones nacionales (López y Rivas, 2012). En función de lo que aquí fue analizado, se podría sostener entonces que todas estas características señaladas por Ferrajoli se presentan en el México de la actualidad. Es decir, en este contexto de *macrocriminalidad* y de inobservancia del Estado de Derecho, ya no es tan fácil establecer una casuística de los casos de desaparición o determinar un patrón. Basta con que se tenga un rasgo que interesa al mecanismo desaparecedor para ser víctima de este asolamiento, casi en total impunidad. Así, en esta sección fueron analizados los posibles usos por lo que se recurre a la desaparición de personas en el país en función de la documentación existente, con la finalidad de comprender en el capítulo V cómo estas lecturas complejas son desconcertantes para los sujetos políticos que emergen en este contexto puesto que, a diferencia de la Guerra Fría, es difícil discernir quiénes son los agentes perpetradores y porqué recurren a esta técnica.

3.3 Los métodos de la desaparición de los cuerpos

Hasta aquí han sido analizados los motivos por los que se han desaparecido las personas como política de Estado y como fenómeno social masivo en México, desde la primera desaparición que se tiene objetivada, la de Epifanio Áviles Rojas en mayo de 1969, hasta la actualidad. En esta sección, el objetivo será entonces examinar las técnicas de la desaparición de los cuerpos y cómo éstas han evolucionado con el paso del tiempo. Así, durante las Guerras Sucias, parecía haber un patrón para deshacerse de los cuerpos de las personas que habían sido desaparecidas. Entrenados en las dos principales doctrinas, la francesa antisubversiva y la estadounidense contra-insurreccional, el personal militar reprodujo en varios países los "vuelos de la muerte". En América Latina, mismo si no fueron tan sistemáticos como en Argentina (Verbitsky, 2004), uno de los países pioneros en implementar estos "operativos" fue México (Proceso, 2002b). La FEMOSPP pudo documentar que se realizaron 30 vuelos de la muerte durante la Guerra Sucia, 19 de ellos en el periodo de Echeverría (FEMOSPP, 2006, p. 129-130). La Comisión de la Verdad de Guerrero, Comverdad, también determinó que los vuelos de la muerte eran una práctica recurrente en ese estado (Comverdad, 2014) (Ver capítulo 2, *supra*).

De acuerdo con investigaciones de colectivos de búsqueda de familiares desaparecidos, más de 40 años después, esta "técnica" sigue vigente en México y gobiernos recientes, como el de Javier Duarte en Veracruz, también han recurrido a ella para deshacerse de los cuerpos de las personas que sus policías hicieron desaparecer. Helicópteros de la Fuerza Civil de Veracruz eran utilizados para arrojar desde el aire los cuerpos en un lugar conocido como La Olímpica —por su forma de alberca—, en el municipio de Emiliano Zapata (La Silla Rota, 2018; A. Ramírez, 2018; Valdez, 2018). Una variación de los vuelos de la muerte originales puesto que en este caso se utilizarían helicópteros en lugar de aviones y los cuerpos serían arrojados en tierra firme y no al mar. Y esto en un terreno de difícil acceso muy cerca

del Centro de Estudios en Investigación en Seguridad (CEIS), mejor conocido como la Academia de Policía, señalado de ser un centro de tortura, ejecuciones y desapariciones (Ernst, 2017; García, 2018; Topete, 2018). Quien fuera el Secretario de Seguridad Pública en el gobierno duartista, así como 15 colaboradores cercanos, están presos al momento del depósito de esta tesis y sujetos a proceso por estos crímenes.

Por otra parte, los Servicios Médicos Forenses también han incurrido en desapariciones forzadas al realizar cremaciones de cuerpos sin un debido tratamiento de los cuerpos, sin un registro adecuado y sin resguardo de pruebas de ADN, ni de su placa dental para su posterior identificación. Es el caso, por ejemplo, del Servicio Médico Forense de Jalisco, donde entre 2006 y 2015 incineraron a más de 1570 personas, sin haber observado todos los requisitos antes mencionados (Enamorado, 2017). Además, en Coahuila, por ejemplo, el Gobierno del Estado realizó un convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) para que los estudiantes practicaran con cuerpos donados por la Procuraduría. El problema es que esos cuerpos eran de personas sin identificar. Así, entre 2012 y 2016 la facultad recibió 47 cuerpos que fueron disueltos en formol (Mejía y Pérez, 2018) y de los cuales no se guardó el debido registro que permita llevar a determinar su identidad en vida, por lo que siempre serán unos *NN*, por tanto, desaparecidos.

Por otra parte, las inhumaciones clandestinas también han sido un mecanismo recurrente desde la Guerra Sucia para deshacerse de los cuerpos. Por ejemplo, el mismo cuerpo de Lucio Cabañas fue inhumado clandestinamente por militares de la 27^{ava} zona militar en Atoyac de Álvarez. Su cuerpo estuvo en calidad de desaparecido hasta agosto de 2002 cuando fueron identificados sus restos (Muñoz Ríos, 2002; Proceso, 2002a). En la actualidad, las inhumaciones se hacen en fosas clandestinas por diferentes actores, pero también en fosas comunes del Estado. Con respecto a las

fosas clandestinas, éstas se han esparcido por todo el país. El problema es de tal magnitud que entre 2006 y noviembre del 2017 habían sido exhumados más cuerpos en fosas clandestinas que en Argentina, Chile o Perú durante sus dictaduras. Es decir, se estima que habían sido descubiertas más de mil 1307 fosas clandestinas con alrededor de 3926 cuerpos que contendrían al menos 11 mil 429 fragmentos óseos aún sin identificar (García Rodríguez y Keller, 2017, N. Jiménez y Castillo, 2018; Proceso, 2018b). Además, cada región tiene su particularidad. Mientras que en Veracruz en general se inhuman los cuerpos completos, en Nuevo León se inhumarían mayoritariamente "pedacitos carbonizados" (González, 2018). Además, las inhumaciones serían cada vez más profundas y por ende más difíciles de localizar. En palabras de Marisela Orozco Montalvo, madre de Gerson Quevedo Orozco secuestrado y luego desaparecido desde el 15 de marzo de 2014 en Medellín, Veracruz[141] y que forma parte de colectivos que buscan los cadáveres de sus ausentes en fosas clandestinas:

> Ahora nos topamos con que parece ser que la delincuencia está ahora trabajando con *retros* [retroexcavadoras] y están haciendo los hoyos más profundos, sí. Entonces ahora se oye que hay que buscar a más de seis metros abajo. Entonces como verás es casi imposible ahora, nada más. O sea, sí nos hemos topado con mucha gente que nos dicen dónde creen que hay personas pero ahora nos tienen que decir el lugar exacto para poderlos encontrar. (Entrevista, el 17 de febrero del 2017).

Con respecto a las fosas comunes del Estado, también es común —valga la redundancia—, inhumar cuerpos sin identificar. Ya sea porque las morgues y los servicios médicos forenses están rebasados ante la cantidad de cuerpos que tienen que

---

[141] Gerson fue secuestrado y se pagó el rescate requerido pero no fue liberado. Su hermano Alan de 15 años y su cuñado, Miguel Calderas, salieron en su búsqueda. Ambos fueron acribillados durante la búsqueda de Gerson. Desde entonces, la familia Quevedo Orozco vive en desplazamiento forzado (Entrevista, el 17 de febrero del 2017).

gestionar, ya sea por una voluntad política de ocultamiento y de inobservancia de los mecanismos legales y/o humanitarios del tratamiento de los restos humanos no reclamados y/o no identificados, pero el problema de la inhumación de cuerpos identificados como *NN* en fosas comunes también es mayor. Esto quedó manifiesto en las fosas de Tetelcingo, Morelos, que ante un arduo trabajo de presión por parte de colectivos de búsqueda de familiares, en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Movimiento por la paz con justicia y dignidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo que abrir la fosa de la cual fueron exhumados 117 cuerpos, entre los cuales estaban algunos que la FGE tenía reportados como desaparecidos (Brito, 2017a).

Lo mismo sucedió con las fosas de Jojutla, en Morelos también. Entre el 21 de marzo y el 21 de abril del 2017, fueron exhumadas 84 personas de una fosa común estatal, en la cual supuestamente únicamente había registrados 35 cadáveres (H. R. González, 2017). Antecedentes de este tipo también se conocen en otros estados del país como en Veracruz (G. L. Díaz, 2017), Tamaulipas (García, 2016), en Coahuila (Cedillo, 2017), etc. Tan solo en octubre del 2011, hacia el final del sexenio de Calderón, 24 mil 102 personas habrían sido inhumadas sin identificar en fosas comunes en medio de la vorágine de la "guerra contra el narcotráfico" (Animal Político, 2012b; Michel, 2012, 2013). Si bien no se puede afirmar que todos esos cuerpos hayan tenido como objetivo original ser desapariciones forzadas, al ser inhumados clandestinamente por funcionarios públicos se vuelven una desaparición forzada en sí misma, además, los casos de Tetelcingo y Jojutla demuestran que las fosas comunes sí se utilizaron para deshacerse de cadáveres producto de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales.

Otro método de desaparición de cuerpos "poco sofisticado" pero de una crueldad dantesca, es arrojar los cuerpos a animales depredadores como son cocodrilos, leones, tigres, etc. En 2013 se publicó en varios periódicos de circulación tanto nacional

como local que un proxeneta de Tenancingo, Tlaxcala —poblado ampliamente conocido por estar habitado por diversas familias que se dedican al proxenetismo y a la trata de personas, con aquiescencia de las fuerzas públicas locales (Hernández Duarte, 2015)— llamado Ernesto, apodado *el caimán*, arrojaba a un cocodrilo que tenía en su mansión a las mujeres que no cubrían con la cuota establecida de $5000 pesos diarios (Balderas, 2013; de Miguel Sanz, 2013; Zamora, 2013) (aproximadamente 250$ Dólares estadounidenses al tipo de cambio del 8 de octubre del 2018). Mujeres que muchas de ellas trabajaban en la sede nacional del PRI, o por lo menos ahí las recogían (Balderas, 2013). Durante el duartismo en Veracruz, el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermudez Zurita —aún preso al momento del depósito de esta tesis (octubre del 2018)—, tuvo durante varios meses en la Academia de Policía de Veracruz —lugar que, como ya fue señalado, se ha denunciado por ser un centro de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas— un león, un jaguar, y cuatro cocodrilos entre otros animales pequeños (E. Ramírez, 2016). La versión oficial es que estaban en ese sitio bajo resguardo mientras la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) les asignaba un lugar (Laertes, 2014). Sin embargo, ahora que han sido detenidos 16 altos mandos policiacos por desaparición forzada, muchas voces apuntan a que los animales en la Academia también tenían por función desaparecer los cuerpos (Pavón, 2018; Ruiz, 2018; Topete, 2018). Por ahora, evidentemente estas son suposiciones basadas en patrones de comportamiento. En su momento la verdad jurídica establecerá si este fue el caso o no.

Siguiendo en la línea de lo dantesco, con el paso del tiempo, las "tecnologías" de desaparición se sofisticaron. Si antes, durante la Guerra Sucia, los principales métodos de desaparición eran las inhumaciones clandestinas de los cuerpos completos y los vuelos de la muerte, también aparecían cuerpos que habían sido torturados, desfigurados y quemados con la intención de que no fueran identificados (Comverdad, 2014, p. 24). En el México actual esas atrocidades se han complejizado

y perfeccionado exponiendo los cuerpos a mancillamientos que escapan a lo decible. En *Cadena de Mando*, el equipo de Pie de Página, entre otros casos, documenta el del joven Jethro Ramsés el cual fue atraído por la CNDH y quien fue detenido por la policía municipal con participación de la policía federal y entregado a miembros del ejército. Luego de torturarle por varios días, para desaparecerle fue enterrado vivo y rociado con ácido muriático (Pie de Página, s. d.).

Esta técnica de disolver en ácido a las personas, no es exclusiva del ejército. En Tijuana, Baja California, en 2009 fue detenido Santiago Meza López, un albañil que recibió el mote de *pozolero* por haber disuelto en sosa caústica a más de 300 personas como parte de sus funciones en el cártel de Sinaloa (Nájar, 2014). El líquido de estos cuerpos era esparcido en terrenos baldíos y los restos óseos y dentadura, eran inhumados en una fosa clandestina en la comunidad de Ojo de Agua. Este hombre habría aprendido la técnica de Mario Alberto García Simental, detenido en 2004, y Santiago Meza a su vez habría formado a al menos 4 personas más (Robledo Silvestre, 2012, p. 103-104). Es decir, el conocimiento se transmitía a través de una *pedagogía del terror*.

Otro método de disolución de cuerpos son las *cocinas*: "¿Cómo se eliminaban los cuerpos? Lo que llamaban cocinarlos, a través de barriles que se incendiaban o se tiraba ácido para eliminarlos y no quedara ningún resto para poder identificarles" (« Ariel Dulitzky: Los Zetas descuartizaban vivas a sus víctimas en Coahuila », 2017). De acuerdo con un testigo protegido, cuya clave de identificación es *Karem*, las cocinas de los zetas consistirían en "meter (el cuerpo) en un tanque metálico de 200 litros y después rociarle con diesel, prenderlo y constantemente rociarle diesel para que continúe el fuego [...] Hay que utilizar una pala en forma de cuadro, con mango largo, para estar destrozando el cuerpo, para que se consuma más rápido hasta que se desaparezca" (Proceso, 2008).

Esta pedagogía del terror funcionaría como una especie de "vasos comunicantes" entre los nodos de estas redes de macrocriminalidad, puesto que al parecer la circulación de conocimientos entre los actores se transmite con cierta fluidez. Si bien es cierto que al menos la primera generación de los zetas está formada por desertores del grupo Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del ejército, también es cierto que éstos han adaptado sus tácticas a los diferentes terrenos en los que operan, y a su vez, pareciera que el ejército también ha recuperado estos saberes. Por ejemplo, integrantes del batallón de Ojinaga, en Chihuahua, también llamado "el pelotón de la muerte", durante el Operativo Conjunto Chihuahua en 2008, cometieron una serie de vejaciones a los derechos humanos también del orden de lo pavoroso. Por ejemplo, una de las personas a las cuales torturaron hasta la muerte fue incendiada por horas con diesel:

> El soldado de Infantería Santiago Luna fue al vehículo por el diesel, mientras los dos cabos bajaban el cuerpo. Luego rociaron el cadáver y la madera con el combustible. El cabo Carmen Omar Ramírez fue por pasto seco, lo prendió con un encendedor y lo aventó al montón. Pasaron entre cinco y seis horas para que se consumieran hasta los huesos del cadáver. Subieron las cenizas de la fogata a la camioneta y las fueron dispersando por el camino con palas. Luego, con un manojo de hierbas, limpiaron la caja (Carrasco Araizaga, 2013).

De acuerdo con Mónica González Islas, periodista de investigación de la Red de Periodistas de a Pie, este método se habría implementado ante la imposibilidad de seguir cavando fosas clandestinas por doquier:

> Entonces y luego pues enterrar y eliminar los cuerpos en fosas fue la primera parte pero después ya no podían estar enterrando en todos lados, entonces lo más fácil era eliminar los cuerpos, en cocinas de las formas más viles que pueden existir. ¿Quién enseñó ese procedimiento en México? Pues los militares, está documentado en el caso de Ojinaga. En Ojinaga el pelotón de la muerte, o sea que yo sepa fueron los pioneros en eliminar cuerpos incendiándolos en fogatas en el desierto (Entrevista, el 3 de febrero del 2017).

Finalmente, otra de las maneras de deshacerse de los cuerpos desaparecidos es arrojándolos al espacio público: el cuerpo como mensaje. Esta *entrehumación* (Colombo, 2017) muestra hasta qué punto puede ser vejado, torturado, deshumanizado un cuerpo. Este "espectáculo" puede tener diferentes intenciones. Una de ellas es enviar mensajes "personalizados" a grupos rivales o a miembros del mismo grupo: escarmientos o narcomensajes (Mastrogiovanni, 2016, p. 104). Pero puede tener como objetivo, además, mostrar a quien sea que aprecie la escena la impunidad del poder desaparecedor. Si en algunos casos hay una intención de ocultamiento del cuerpo para causar terror por medio de la zozobra, el mostrar el destino de los cuerpos tiene por objetivo mostrar las muertes posibles, la capacidad de crueldad de los perpetradores sin que nada pase y por este hecho alimentar el clima de terror, de zozobra y desamparo.

Así, en esta sección se pudo observar que las maneras de deshacerse de los cuerpos puede obedecer a diferentes intencionalidades y recurrirse para ello a varias técnicas. Desde el punto de vista de las instituciones, éstas pueden ser las inhumaciones, las cremaciones o incluso "ceder" los cuerpos a algún organismo como las facultades de medicina para que hagan uso de ellos. Las intencionalidades, desde esta perspectiva, pueden ir desde la complicidad con los perpetradores o con la red criminal, hasta cuestiones de negligencia e inoperancia de las instituciones. Por otra parte, están las inhumaciones y otras técnicas de gran crueldad que tienen por objetivo ocultar definitivamente el destino de los cuerpos para garantizar la impunidad, pero también para mantener la zozobra sobre el destino de las víctimas. Finalmente, está la *entrehumación* para mostrar escenarios posibles y con ello significar la impunidad y el *poder soberano ejercido* sobre los cuerpos inermes.

En la próxima sección, el objetivo será analizar un caso que es considerado como emblemático por varios motivos y que recoge varias de las violencias que hasta aquí han sido señaladas: desaparición colectiva, por motivos políticos, pero también

vinculada a las economías criminales, con participación de los tres niveles de gobierno, donde la versión oficial —que rechazan los familiares y el movimiento social que les acompaña— es que se deshicieron de los cuerpos de manera cruenta, quemándolos. Pero además, es un caso donde hubo un evento de entrehumación con desollamiento de una persona que mostraba escenarios posibles de los que sí se habían llevado: el cuerpo como mensaje.

3.4 Ayotzinapa, toda la furia de los dioses sobre un mismo actor social

Uno de los eventos de desaparición forzada que más han conmocionado al país fue la de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en 2014. Tal como fue analizado en los parágrafos precedentes, éste está lejos de ser un caso aislado ni por su carácter masivo, ni por la participación explícita de agentes del Estado. Ni porque el gobierno intentó darles cadáveres que no pertenecían a sus familiares. Tampoco por la criminalización que se intentó hacer de las propias víctimas. Ni por su vínculo con poblaciones y víctimas de la Guerra Sucia. Sin embargo, por el impacto que generó a nivel nacional e internacional, estos crímenes representan un parteaguas en la movilización en torno a las desapariciones forzadas en México.

Los estudiantes desaparecidos eran parte de la red de escuelas normales rurales, las cuales surgieron como parte de un proyecto de nación postrevolucionario que tenía por objetivo formar profesores líderes que promovieran el cambio educativo y cultural desde el medio rural para el medio rural con un enfoque regional (Civera Cerecedo, 2006). Los estudiantes de este sistema debían ser de origen campesino y las escuelas tendrían una estructura de cooperativa con el objetivo de que fueran autosuficientes y que subvinieran a las necesidades de las comunidades aledañas también (Padilla, 2009). Al ser al mismo tiempo internados —muchas de estas escuelas eran no mixtas—, eran propicias para que las y los jóvenes que ahí se

formaban articularan proyectos de más largo alcance y pronto se convirtieron en un asidero de líderes sociales contestatarios de un proyecto de nación que no cumplió con las expectativas y promesas de la Revolución (Civera Cerecedo, 2006). Un ejemplo de ello es la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero. Por sus aulas pasaron Genaro Vásquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos (Oikión Solano, 2007), dos de los íconos guerrilleros del estado de Guerrero durante la Guerra Sucia (ver anexo B).

Con el giro neoliberal mexicano, este proyecto de desarrollo y emancipatorio fue quedando de lado, al punto de que el Estado mexicano ya no subvenía ni a las necesidades más básicas de las escuelas y la consigna era ir transformándolas en otros proyectos educativos o cerrarlas. De las 29 instituciones originales, en 2014 subsistían únicamente 17 (Olmos, 2014). La normal rural de Ayotzinapa resistía a estos embates considerándose uno de los bastiones del proyecto original. Se consideraba que sus estudiantes, todos varones, mantenían ese espíritu combativo heredero de la revolución y de sus antiguos íconos. En ese contexto, el lunes 12 de diciembre del 2011 fueron asesinados por policías federales, estatales y agentes ministeriales los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús en el marco de una protesta que reivindicaba mejorar sus condiciones y en la cual junto con organizaciones indígenas de la región mantenían bloqueada la autopista del Sol México-Acapulco (Ocampo Arista, 2011). Nadie fue juzgado por estos crímenes (CEJIL, 2017).

Dos años después, en 2014, sus compañeros de la normal seguían clamando por justicia. Como cada año, habían decidido asistir a la Ciudad de México a la conmemoración de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 (ver anexo B) y ahí pedir la solidaridad de los estudiantes a nivel nacional para visibilizar el crimen de sus compañeros. El contingente de las normales rurales del país saldría de la normal de Ayotzinapa (GIEI, 2015, p. 21). Ante la falta de recursos de la escuela y de

ellos mismos, una práctica recurrente para los normalistas era el *secuestro* de camiones. Es decir, se subían a los autobuses, le pedían a la gente que se bajara y los choferes, la mayoría de las veces sin violencia, aceptaban llevarlos a donde requirieran[142]. El 26 de septiembre decidieron salir de la normal a hacer acciones de *boteo* para recaudar fondos con la finalidad de reunir lo requerido para el viaje a la ciudad de México y retener autobuses para la marcha. Se dirigieron a la ciudad de Iguala, donde por la noche habían tomado 5 autobuses en los cuales pretendían regresar a la normal y mantenerlos ahí hasta la marcha del 2 de octubre (GIEI, 2015, p. 38).

Seguido de esto, los estudiantes fueron flanco de ataques fuera de toda proporción. La policía municipal, estatal y miembros del ejército desataron una persecución feroz contra los estudiantes (GIEI, 2016). Esa misma noche asesinaron a seis personas. Dos de ellas regresaban de un evento deportivo en autobús, éste fue confundido por uno de los tomados por los estudiantes y les dispararon a mansalva. Ahí perecieron David Josué García Evangelista, integrante del equipo de futbol "Los Avispones" y Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer de ese autobús. Además pereció Blanca Montiel Sánchez, quien pasaba por el lugar. Tres estudiantes normalistas también fueron acribillados, Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes. Este último fue desollado con una precisión en los cortes que no puede ser innata. Quien desolló a Julio César fue entrenado, ese tipo de entrenamiento que sólo puede transmitirse a través de la pedagogía del terror —¿militar?— donde se aprende a torturar. También fueron víctimas de desaparición forzada 43 estudiantes normalistas. De dos de ellos ahora se tiene certeza de su muerte, Alexander Mora Venancio y

---

[142] Tal como se señala por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su informe sobre el caso: "Algunos choferes entrevistados afirman que cuando los autobuses son tomados por los estudiantes, la compañía les paga su sueldo y tienen la orden de quedarse resguardando el vehículo" (GIEI, 2015, p. 20).

Jhosivani Guerrero de la Cruz. Cuatro años después, 41 de ellos continúan desaparecidos[143].

Los acontecimientos de la noche del 26 de septiembre en Iguala provocaron una indignación sin precedente en la historia de México. Movilizaciones masivas en el país y prácticamente en todo el mundo tuvieron lugar y condujeron a una crisis política profunda. Ante la crisis, por primera vez en México se aceptó la implementación de un mecanismo internacional de expertos para la investigación del caso, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y gestionado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Los resultados de la investigación corroboran el grado de imbricación entre actores de las economías predatorias y agentes del Estado en donde no es posible delimitar las fronteras. La esposa del alcalde José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa, provenía de una familia de narcotraficantes vinculados a diferentes cárteles (Hernández Navarro, 2015). En la ciudad de Iguala, el alcalde era propietario del centro comercial llamado Tamarindos y de un centro joyero que servía de lavado de dinero (Grecko, 2015) que le había sido donado de manera ilegal por la Secretaría de Defensa Nacional (Flores Contreras, 2015b). El gobernador que estaba en turno, Ángel Aguirre Rivero y su familia, tienen

---

[143] Luis Ángel Abarca Carrillo, Marco Antonio Gómez Molina, Sául Bruno García, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Abel García Hernández, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Adán Abraján de la Cruz, Felipe Arnulfo Rosa, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, César Manuel González Hernández, Jorge Álvarez Nava, José Eduardo Bartolo Tlatempa, Israel Jacinto Lugardo, Antonio Santana Maestro, Christian Tomás Colón Garnica, Luis Ángel Francisco Arzola, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Benjamín Ascencio Bautista, Leonel Castro Abarca, Everardo Rodríguez Bello, Doriam González Parral, Jorge Luis González Parral, Marcial Pablo Baranda, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Abelardo Vázquez Peniten, Cutberto Ortiz Ramos, Bernardo Flores Alcaraz, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Mauricio Ortega Valerio, Martín Getsemany Sánchez García, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Giovanni Galindo Guerrero, José Luis Luna Torres, Julio César López Patolzin, Jonás Trujillo González, Miguel Ángel Hernández Martínez, Christian Alfonso Rodríguez, José Ángel Navarrete González, Carlos Iván Ramírez Villarreal, José Ángel Campos Cantor e Israel Caballero Sánchez.

un largo historial de corrupción y tráfico de influencias. En marzo de 2015, 9 personas de sus más allegadas, entre ellas dos de sus hermanos, estaban presas por diversos delitos (Flores Contreras, 2015a). Las policías de Iguala y las municipalidades aledañas, conformadas por algunos elementos del ejército retirados, estaban acusadas de colaborar estrechamente con grupos narcotraficantes de la región (A. Méndez, 2014), el ejército también (Hernández, 2016). Todo esto en un territorio rico en recursos naturales —El cinturón de oro donde se encuentra la mina de oro más grande de Latinoamérica está en ese perímetro (La Crónica de hoy, 2005)— y tierra fértil para diferentes tipos de cultivo, pero en particular cabe destacar el de goma de opio y de la heroína (Reveles, 2015).

Además, por si lo anterior fuera poco, muchos familiares de las víctimas históricamente ya habían sido objeto de similares violaciones a sus derechos humanos. Por ejemplo, entre los desaparecidos hay un descendiente de Lucio Cabañas Barrientos, familia que tiene 150 miembros que le fueron detenidos-desaparecidos durante la Guerra Sucia por el solo hecho de haber compartido una filiación con el guerrillero (G. L. Díaz, 2014). Así, Cutberto Ortiz Ramos, estudiante de Ayotzinapa es hijo de Óscar Ortiz Cabañas, primo de Lucio Cabañas. El hermano de su padre, homónimo de Cutberto, fue desaparecido durante la Guerra Sucia (Morales y Pigeonutt, 2014). Por otra parte, Margarito Guerrero, padre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, él mismo fue secuestrado y obligado a hacer trabajos forzados para siembra de mariguana en la década de los años 1980, en el estado de Chihuahua, en el rancho *El Búfalo* propiedad de Rafael Caro Quintero (Guerrero, 2017; Flores Contreras, 2016). Otro caso es el de Narciso Vásquez Arellano, el hermano de uno de los estudiantes que sobrevivieron el 26 de septiembre en Iguala y que se convirtió en uno de los líderes del movimiento, Omar Vásquez Arellano —conocido como Omar García, seudónimo que él mismo utilizó para proteger su identidad—, había sido asesinado dos meses y medio antes de los hechos de Iguala en una emboscada de grupos criminales rivales (García, 2016). Jorge Antonio Tizapa Legideño, otro de los

estudiantes normalistas, tiene un primo que también fue desaparecido un año antes. En palabras de la madre de Jorge Antonio, Hilda Legideño Vargas:

> En mi caso, mi hermana también, un año antes se llevaron a su hijo y fue un mismo hermano del presidente [municipal] de aquí, que apenas lo mataron, no tiene mucho. Pero aquí mi hermana dijo que no. No quiso hacer la denuncia, no quiso hacer nada porque la persona que se llevó a mi sobrino le dijo que pues él sabía quiénes eran su familia y pues que tenía más hijos que si quería a sus demás hijos que no denunciara, así. Pues ahora sí que la gente está con miedo aquí en Tixtla. No denuncian si se llevan a jóvenes porque aquí han levantado a demasiados jóvenes y no dicen nada por lo mismo de que están amenazados (Entrevista, el 14 de enero del 2017).

La versión sobre los hechos de Ayotzinapa de la PGR no es menos victimizante. En ésta, que en términos jurídicos le llamó *la verdad histórica*[144], miembros coludidos de la policía municipal habrían entregado a los estudiantes a miembros del crimen organizado al "confundirlos" con pertenecer a un grupo rival. Los estudiantes habrían sido incinerados en un basurero municipal de una comunidad aledaña, Cocula. Sin embargo, la investigación estuvo plagada de irregularidades. Quien fuera el titular de investigación criminal, Tomás Zerón, alteró él mismo la escena del crimen (Fierro,

[144] En derecho internacional el concepto de *verdad histórica* se aplica a la búsqueda de una "verdad procesal que emana del estatus que el sistema normativo de los derechos humanos ha otorgado a la voz y a la entidad misma de la víctima" (Rincón Covelli, 2005, p. 332). Ésta, por consiguiente, se establece desde el punto de vista de las víctimas: "[E]l relato de las víctimas, como modelo autorizado, se convierte en el relato no sólo articulador sino definidor de la verdad que se declara como verdad establecida. Verdad que no sólo se dice, sino que busca transformar la realidad (de instituciones y prácticas) que causan y producen el daño" (Rincón Covelli, 2005, p. 350-351). En el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, el Estado mexicano a través del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, no solo extirpó de la centralidad del relato a las víctimas, sino que se sirvió de este concepto para construir lo que los mismos familiares de los estudiantes han llamado "la mentira histórica". Relato que la PGR ha insistido en mantener a pesar de las evidencias científicas aportadas por el GIEI que demuestran la infactibilidad de los hechos que sostiene "la verdad histórica" de la PGR, que además, en lugar de darles la centralidad a las víctimas, las revictimiza al imaginar un destino tan cruento para sus familiares y que por supuesto no tiene ninguna voluntad de transformación ni de instituciones ni de prácticas. Esta narrativa que el Estado mexicano lleva 4 años repitiendo, fue construida además bajo tortura, tal como sostiene la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (ACNUDH, 2018) y el mismo GIEI (2016).

2016). El visitador de la PGR que emitió el informe de la alteración de la escena, César Alejandro Chávez, señalando las irregularidades con las que actuó Zerón, fue sustituido de su cargo por haber hecho la denuncia. En cambio, dos días después, el presidente Enrique Peña Nieto le dio un nuevo nombramiento, un ascenso, a Tomás Zerón (Fierro, 2016). Además, los testimonios de 34 personas procesadas por estos crímenes habrían sido obtenidos bajo tortura, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2018) y con el mismo GIEI (2016).

En contraparte, luego de un año de investigación, los miembros del GIEI avanzaron como hipótesis que uno de los autobuses de pasajeros que había sido tomado por los estudiantes normalistas habría estado cargado de heroína. Esta ruta de autobuses de pasajeros seguía cada noche un itinerario lícito improbable. Salía desde Iguala —población de 118 468 habitantes según el censo del 2010 y enclavada en las montañas de Guerrero— hasta la ciudad de Chicago, en ruta directa y sin escalas. Según la hipótesis del GIEI, la saña con la que se atacó a los estudiantes sería con la finalidad de recuperar el cargamento y además ejecutar un "castigo ejemplar" a los estudiantes. Además, todo esto habría sido con participación de las policías de los tres órdenes de gobierno y del ejército (Hernández, 2016).

Esta línea de investigación que echa abajo la *verdad histórica* de la PGR, y que apunta, además, directamente hacia el ejército, no pudo ser traducida en una verdad jurídica debido a la negativa del ejército, y del Estado mexicano, a ser interrogados por "extranjeros" y esto a pesar de las múltiples evidencias que los miembros del GIEI aportaron. Además, el GIEI demostró que la *verdad histórica* es insostenible gracias a diversos peritajes realizados por diversos expertos, entro otros en fuegos, etc. Luego de la negativa del Estado mexicano a permitir una inspección en el 27^{avo} Batallón Militar para corroborar que ese no había sido el destino de los estudiantes y diversas divergencias con el Estado mexicano, el mandato del GIEI no fue

prolongado en medio de una crisis diplomática y en su lugar fue instaurado un mecanismo de seguimiento también por parte de la CIDH. En palabras de Carlos Beristaín, miembro del GIEI, el Estado mexicano se negó a investigar la hipótesis avanzada por ellos y se intentó desacreditar su trabajo:

> Nosotros nunca tuvimos la conciencia, no podemos decir públicamente que el Estado mexicano hizo una campaña contra nosotros. Obviamente hubo gente de sectores de medios de comunicación y alguna gente dentro del Estado que hicieron una campaña contra nosotros, lo que son muestras del miedo a la verdad. Y ahí no solamente por el caso de digamos el quinto autobús, lo que nosotros descubrimos de otros niveles de implicación de agentes del Estado, de presencia en lugares en los que se estaba dando la detención y después desaparición de los chavos de otros niveles de agente, no sólo la policía municipal. El replanteamiento de un caso como agentes municipales vinculados con el narcotráfico, sino agentes de diferentes niveles coludidos con agentes del narcotráfico con intereses probablemente que nosotros señalábamos como ese quinto autobús y que por una parte tenía antecedentes. Hace unas semanas hemos conocido el antecedente de que la PGR tenía un jefe de Guerreros Unidos alias *El Uruguayo* detenido por un caso absolutamente similar con la hipótesis que nosotros planteábamos y no se nos dijo nada sobre eso. Se nos dijo que nuestra hipótesis no tenía base, que se había investigado que no tenía base. Entonces eso te muestra que algo que se oculta y eso tiene que ver evidentemente con ese quinto autobús, que no existe la investigación, etc. y tiene que ver también con nuestra revelación de que la pira infernal con la cual se hubiera acabado con la vida y los restos de los normalistas en el basurero Cocula, la noche del 27 septiembre, no se había producido en base a pruebas científicas que nosotros pusimos en la mesa y que después el Equipo Argentino [de Antropología Forense] añadió con sus propias pruebas, etc. Entonces es obvio que alguien tomó la decisión después del primer informe, a partir de nuestro trabajo, de nuestro segundo informe de desacreditar nuestro trabajo y tratar de desprestigiarnos. Cuando no se puede criticar un trabajo, para discutir el informe, ¿qué es lo que nosotros no hemos evaluado bien? Hay una falta de contraste de hipótesis o de testimonios de pruebas y eso no se hizo. Cuando no se puede se escupe el contenido, se trata de cuestionar la credibilidad de quien lo dice y eso fue un intento muy ramplón, muy rastrero de tratar de cuestionar nuestro trabajo. Cosa penosa puede ser, es evidente, pero es una forma que desgraciadamente mucha gente después en México nos dijo: "Es que les van a hacer así, es que les van a ser así" ¿no? En este país se ha hecho muchas veces así. (Entrevista, el 3 de febrero del 2017).

Por su parte, el Estado mexicano insiste en mantener la versión de la incineración en el basurero municipal de Cocula, una imagen además de revictimizante para las familias de las víctimas[145], únicamente puede esconder detrás de sí algo que puede ser peor que eso para la legitimidad del Estado: la demostración fehaciente del grado de implicación criminal de los tres órdenes de gobierno con las economías predatorias. La saña con la que fue tratado el cuerpo de Julio César Mondragón simboliza escenarios de destinos probables para quienes están desaparecidos que solo pueden venir de racionalidades entrenadas para exterminar. Un antecedente documentado de quema de cuerpos al aire libre para deshacerse de ellos es el del batallón de Ojinaga, una racionalidad militar. El mantener esta versión de los hechos contra toda evidencia verosímil y científica —esa noche, además, habría llovido en Cocula (Hernández, 2016)— solo puede confirmar la implicación de los agentes del Estado en estos hechos y la negativa del derecho al acceso a la verdad a los familiares.

En la ópera del *Ocaso de los Dioses*, los estudiantes de Ayotzinapa representarían a *Sigfrido*, el héroe que se sacrifica para regresar el orden al mundo. Sigfrido representa la juventud, la esperanza del cambio por medio de la valentía, el ímpetu de enfrentarse al monstruo aún a sabiendas de su poder destructor. La respuesta masiva de amplios sectores de la sociedad nacional con apoyo internacional, para denunciar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa —*la inmolación de Sigfrido*— representó para muchas y muchos la esperanza de que éste pudiera ser el

---

[145] Como por ejemplo, tal como afirma Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño en entrevista con Tryno Maldonado, esta versión mantenida por el Estado la agobia, la revictimiza: "De hecho, cuando se vino aquí [su hijo] me dijo que si a él no le alcanzaba el dinero para los gastos de su hija yo le podía ayudar —cuenta Hilda muy triste—. Dije que sí. Yo fui la que insistí en que estudiara. Él ya no quería. Es por eso que a veces me siento culpable de haberlo mandado. Si yo hubiera aceptado que no... He tenido muchos sueños. Lo he soñado golpeado, lo he soñado torturado... Yo creo que por tanta mentira que nos dijo el gobierno. Su *mentira histórica*. Hasta soñaba con *esa* atrocidad. Tal fue el impacto de las mentiras del gobierno que hasta soñaba con *esa* atrocidad, soñaba con *semejante cosa*" (Maldonado, 2017. En itálicas en el texto original).

comienzo del *Ocaso de los dioses mexicano* puesto que esta respuesta ocasionó una crisis política profunda. Manifestaciones masivas sin precedentes tuvieron lugar en México y en apoyo a este caso particular también hubo manifestacional alrededor del mundo. Se creía que esta vez sí podría haber una transformación profunda de un Estado-nación que sirve solo a unos cuantos. Sin embargo no fue así, pasado el escándalo todo volvió a su curso. Los privilegios siguieron quedando en manos de unos cuantos mientras *las valquirias* intentaban rescatar, arriesgándose, lo poco que quedaba del Estado de derecho. *La furia de los dioses* volvió a la carga. Luego de Ayotzinapa siguieron habiendo masacres por parte de las fuerzas públicas, por mencionar solo algunas: Apatzingán en enero del 2015, Tanhuato en mayo del 2015, Nochixtlán en junio de 2016, etc. Las desapariciones forzadas también siguieron ocurriendo tal como fue ejemplificado párrafos más arriba, a un ritmo que no decreció ni un ápice luego de las desapariciones de los estudiantes. El espiral de violencia no cesó de aumentar. Y todo esto ante la mirada incólume de los decidores políticos —y económicos— internacionales que no cesaron sus relaciones con el gobierno mexicano. Si la crisis de Ayotzinapa no cimbró las instituciones, ¿qué tendría que pasar entonces para que eso ocurriera? La pregunta aún no tiene respuesta.

Conclusión

La intervención estadounidense —y de sus países aliados— para acelerar el proceso de transición a la democracia como política continental con el objetivo de afianzar la instauración de economías neoliberales a lo largo de América Latina (Selser, 1990), en México trajo consigo una redistribución del poder que no necesariamente se reflejó en el ejercicio de una democracia efectiva. En lo formal-legal se transformaron diversas instituciones, se fortalecieron los organismos electorales y se dio una alternancia en los partidos políticos. Sin embargo, las prácticas políticas se mantuvieron incólumes. En términos generales el poder cambió de colores pero no de manos y además, al no haber una estructura fuerte como la que representaba el PRI, la asociación con racionalidades delictivas se diversificó llevando a una *cartelización* del país en la que diferentes grupos delictivos se asociaron y/o rinden cuentas a diferentes agentes del Estado —*macrocriminalidad*—, con un aumento, además, significativo de la violencia.

Por otra parte, a nivel internacional se dio un reacomodo en la producción y tráfico de estupefacientes en la cual México pasó a ocupar un lugar primordial, pasando de ser un país de paso a un país productor y consumidor. En paralelo, las economías criminales ampliaron su "mercado" de únicamente contrabando y producción y tráfico de drogas al de extorsión, secuestro, tráfico de personas, robo de combustible, piratería, etc. Esta "ampliación de mercado", en una fase avanzada de la economía, en el sentido más puro de la filosofía de la economía neoliberal, donde el Estado en su función de regulador está cada vez más ausente, en algunos casos llevó a que se considerase al ser humano mismo —en particular a las y los más vulnerables— como una mercancía, llevando incluso a hacer un uso predatorio de sus cuerpos.

En paralelo también, se dio una crisis de legitimidad en el país con la llegada de Felipe Calderon Hinojosa a la cabeza del ejecutivo. Éste, para poder gobernar, en el

discurso declaró la Guerra al Narcotráfico —el nuevo "enemigo" interno— y envió el ejército a las calles. Desde la Guerra Sucia y con mayor intensidad en el marco de la estrategia de contrainsurgencia contra el EZLN y el EPR, la formación al personal policiaco y militar por parte de la escuela estadounidense no cesó de aumentar. En el calderonato se diversificó esta formación atrayendo la escuela colombiana e israelí de las cuales los crímenes de lesa humanidad son bien conocidos. En consecuencia, en México los crímenes contra la humanidad aumentaron también.

Las desapariciones forzadas entonces se masificaron. Las cifras oficiales no se corresponden con la amplitud del fenómeno. A diferencia de la Guerra Sucia donde al menos existía la certeza de quien había sido el perpetrador, en la actualidad no es fácilmente identificable una casuística de la desaparición. El desconcierto aumentó con la misma intensidad que aumentó la saña sobre los cuerpos. Esta violencia que fue *in crescendo*, primero por una supuesta *Razón de Estado* en el marco de la Guerra Sucia y su impunidad, después contra el EZLN y el EPR y su impunidad también, se tornó *banal* cuando en la década de 1990, en el marco del TLCAN, se perpetró contra las mujeres de Ciudad de Juárez, sin ningún vínculo con una supuesta *Razón de Estado* y en total impunidad. En ese sentido, esta técnica originalmente de contrainsurgencia se "popularizó", salió del cerco exclusivamente militar y policiaco para ser reapropiada por agentes que no necesariamente están vinculados a estas corporaciones —aunque la mayoría de las veces sí actúan en connivencia con o por lo menos con su aquiescencia—. Las desapariciones por supuestas *razones de Estado* en el sentido liberal, entonces quedaron atrás y las desapariciones forzadas comenzaron a practicarse por motivos diversos para alimentar las economías predatorias y criminales. Se desaparece así con objetivos de comercio sexual, de trabajo forzado, de adopción ilegal, etc.

Por otra parte, muchas de las instituciones de las cuales los agentes del Estado están coludidos con grupos criminales en redes de macrocriminalidad, no representan

ninguna esperanza ni para dar con el paradero de quienes están desaparecidos ni para que se haga justicia. Quienes deciden buscar a sus ausentes se enfrentan a una maraña burocrática (González Villarreal, 2012) que les revictimiza y criminaliza. No hay dónde acudir. En ese sentido Jacobo Dayán, investigador de los crímenes de lesa humanidad de San Fernando 2010 y de Cadereyta 2011 sostiene:

> No hay por dónde confiar. Porque no hay una que dijeras... pues por eso al informe acabamos poniéndole *En el Desamparo* porque no hay una que dijeras, una institución, ni la CNDH, ni una que dijeras bueno, aquí se rescata algo. No hay ni una [...] Bueno, hay cosas más primitivas todavía, en San Fernando le entregaron a una señora piedras. Entregaron cuerpos equivocados en San Fernando, pero a una le entregaron piedras. Eso ya no es falta de capacidad, vamos, no hay manera. (Entrevista, el 9 de febrero del 2017).

En medio de esta sinrazón, en la cual la denuncia pública no lograba salir de los círculos de las personas afectadas y de algunos aliados y aliadas, en particular de los organismos de derechos humanos, sucedió un crimen que, de una manera sin precedente, cimbró al país. Un ataque masivo —en un hecho no aislado— a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Seis muertos, entre los cuales una persona desollada, decenas de heridos y 43 estudiantes desaparecidos. Este evento particular, por razones que serán analizadas en el capítulo V, llevó a una movilización sin precedentes tanto a nivel nacional como internacional y este evento en sí, logró, al fin, visibilizar ante la población y a nivel internacional la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país. Los desaparecidos entonces, *salieron a la calle* y tomaron un lugar en la agenda pública. Sin embargo, en el fondo muy poco se logró en cuanto a una transformación profunda institucional. En palabras de Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa:

> Y pues mucha gente sí, ya últimamente se ha sabido más porque pues también han perdido un poco más el miedo y han denunciado a partir de lo que sucedió [la desaparición de los 43 estudiantes] del 2014, ya mucha gente pues ya no se

> queda callada. Ahora sí hacen sus denuncias, ahora sí pues salen a exigir y a pedirle al gobierno que diga que dónde están sus personas, sus seres queridos que están desaparecidos. Muchos han, pues, después aparecen muertos, pero pues creo que sí, que esta marcha que hemos emprendido pues ha sido para, pues para decirle pues a la gente que no tenga miedo porque de lo contrario esto va a continuar. Sigue continuando, desgraciadamente esto no ha parado, pensamos que con tanta movilización y evidenciar al gobierno pues esto iba a parar pero no. Como lo decimos, la delincuencia organizada está protegida por el mismo gobierno. Aquí en Guerrero y en donde quiera está protegida. El gobierno sabe muy bien cuando sale la delincuencia. Aquí se andan paseando con sus armas afuera y la policía no les dice nada, no les hace nada porque están protegidos, pues aquí no hay una autoridad que proteja al pueblo. Al contrario, protege a la delincuencia (Entrevista, el 14 de enero del 2017).

De esta manera, estos dos últimos capítulos tuvieron por objetivo identificar cómo ha operado el mecanismo de la desaparición forzada de personas en el país, tanto en el pasado como en la actualidad y esto con la finalidad de poder comprender mejor en los capítulos consiguientes cuáles son las características particulares de los sujetos políticos que han surgido en torno a las desapariciones forzadas en cada contexto histórico y que cohabitan en la actualidad en el reclamo público por el regreso de los cuerpos ausentes. Al mismo tiempo, se tratará de comprender cuáles son las y los actores, procesos y acciones que lograron, al fin, poner en la agenda pública el problema de las desapariciones forzadas en el país y cómo interactúan estos actores con los órganos de gobierno, muchos de éstos compuestos por agentes que forman parte de las mismas redes de *macrocriminalidad* que desaparecen a quienes por ahora están ausentes.

CAPÍTULO IV

GÉNESIS E INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS SUJETOS POLÍTICOS EN TORNO A LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN MÉXICO

Introducción

En los dos capítulos precedentes —el segundo y el tercero— fue analizado qué es el dispositivo de la desaparición forzada, cómo opera y cómo llegó y se expandió por México. Desde que la desaparición forzada fue implementada como política *contrainsurreccional* en la llamada Guerra Sucia (1964-1982), hasta la supuesta Guerra contra el Narcotráfico (2006 en adelante), las y los actores involucrados en ella y las formas en cómo se ejecuta han ido cambiando. Éstas últimas se han transformado en función de los contextos históricos y los motivos por los que se recurre a ella, sin embargo, su esencia ha perdurado: mantener oculto el destino de las personas que fueron sustraídas a la protección de la ley con participación directa y/o indirecta de agentes del Estado. En ese sentido, los *sujetos políticos* que emergen para hacerle frente también poseen características particulares que les distinguen en función del contexto histórico en el cual se enfrentan a las desapariciones forzadas. Sin embargo, también su esencia se ha mantenido: reclamar el regreso de los cuerpos ausentes, combate llevado principalmente por mujeres.

Así, el objetivo de este capítulo es comprender en un primer momento cuál es la génesis de los sujetos políticos que se han configurado para hacerle frente a las desapariciones forzadas: cómo surgen, en qué momento se *objetiviza* la figura del

desaparecido y el dispositivo que le acompaña, cuál era su repertorio de acción colectiva en la década de 1970 y cómo éstos contribuyeron a llevar a la arena pública la disputa por los cuerpos ausentes. En un segundo momento, se analizará qué actores y actrices entran en escena a partir de la década de 1990 —la de la llamada transición a la democracia— cómo y por qué se profesionalizan y se internacionalizan. Una atención particular se prestará a las muertes y desapariciones de mujeres que ocurrieron a lo largo de toda esta década en Ciudad Juárez Chihuahua —en la frontera norte de México—, para argumentar que a pesar de que estas desapariciones tienen todas las características de una desaparición forzada, la articulación de actores y actrices en disputa que primó fue en torno a la figura del *feminicidio* y no en torno a las desapariciones forzadas. Esto debido, en primer lugar, a la violencia sistémica de género que caracteriza a estos crímenes de Ciudad Juárez, pero también se debió a las características específicas de las actrices y actores que se congregaron en las *coaliciones de causa* (Sabatier, 2010) en torno a este fenómeno.

Finalmente, como análisis transversal del capítulo se encuentra la desconfianza endémica expresada por estos actores sociales ante la acción deshonesta de los agentes del Estado, heredada de la tradición de cooptación priista. Desde diferentes voces y contextos se mantiene una constante: no permitir la infiltración. Paradójicamente las precauciones puestas en marcha para evitarlo le dieron fuerza al movimiento en un primer momento, pero en otras coyunturas les debilitaron, tal como será desarrollado en las siguientes líneas.

PRIMERA PARTE: *LAS NORNAS DEL PASADO*. GÉNESIS DE LOS SUJETOS POLÍTICOS EN TORNO A LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN MÉXICO

En el prólogo del *Ocaso de los Dioses*, la cuarta ópera de la tetralogía del *Anillo de los Nibelungos*, las *nornas* —quienes también son *valquirias*— son representadas como hilanderas que, al igual que los sujetos políticos, sintetizan —entrelazan— el pasado y el presente y se articulan con el futuro (Retamozo, 2011a). Las tres *nornas* más conocidas son *Urd*, quien representa el pasado; *Verdandi*, que representa "lo que ocurre ahora" y *Skuld* que simboliza "lo que debería de suceder" en el futuro. Si bien los designios de lo que ha ocurrido y está ocurriendo no dependen de las *nornas*, ellas son las denominadas para concatenar los hechos a través del entrelazamiento de los hilos, ya que son las únicas que tienen conocimiento consciente de los designios de determinaciones que les escapan —las condiciones estructurales—. Es en ese sentido que establezco el parangón con los sujetos políticos que han surgido en torno a las desapariciones forzadas.

En esta primera parte, las *nornas del pasado* —los primeros colectivos que se forman para la defensa de los derechos humanos—, ante la *experiencia límite* (Ramírez Zuluaga, 2015) que representan las violaciones a los derechos humanos, en particular la desaparición forzada, deciden organizarse en colectivos para la defensa de las víctimas. Éstos establecieron las bases de lo que sería la defensa de los derechos humanos en el futuro, bajo los preceptos de lo que *no* debería suceder "nunca más". Siendo, la mayoría de las veces, conscientes de las cuestiones estructurales que les

escapan, pero convencidas y convencidos de que su *agentividad* podría tener una cierta incidencia en las relaciones de poder a pesar de que éstas sean disimétricas.

Es así que emerge el sujeto político simbólicamente fuerte, el de la mujer-madre buscando a sus hijos, que al nombrar públicamente la experiencia de la desaparición y reconstruir el sentido de lo que ocurrió, abre paso a la experiencia epistemológica de la desaparición forzada y permite el reconocimiento ontológico de las y los desaparecidos (Gatti, 2008; Wright, 2018), al mismo tiempo que obliga a la inclusión en la disputa política, la dimensión de los sentimientos, en particular del dolor o sufrimiento. Sin embargo, la denuncia pública de las violencias de Estado en el terreno de lo político no estuvo exenta de intercambios dialógicos y conflictivos entre las y los actores ante los diferentes posicionamientos de la relación a establecerse con la política formal y las relaciones colaborativas y/o confrontativas con los diferentes órganos del Estado mexicano, cooptante casi por antonomasia. En ese sentido, en las líneas siguientes analizo en términos generales las características de los tres primeros colectivos de víctimas y de familiares de víctimas de las violencias políticas que se formaron a nivel nacional con sus especificidades, sus posicionamientos y tensiones entre sí y con el Estado. La acción de estos colectivos dio origen a los primeros perfiles de los sujetos políticos en torno a las desapariciones forzadas en México y que, además, muchos de sus miembros se mantienen en la arena de lo político aún en la actualidad, reclamando el regreso de los cuerpos ausentes y el acceso a la justicia de las víctimas de las violencias de Estado, que al igual que las *nornas*, están entrelazando "lo que fue", "lo que pasa ahora" y reiterando "lo que *no* debería de suceder" *nunca más*.

4.1 El Comité de familiares de presos, perseguidos y exiliados políticos

El movimiento por la defensa de los derechos humanos en América Latina se afianzó en el marco de las Guerras Sucias. De hecho, en este contexto es cuando se apuntala la conformación de una red internacional en defensa de los derechos humanos frente a la violencia política de la que estaban siendo víctimas muchos disidentes políticos (Keck y Sikkink, 2000) en el contexto de la doctrina del enemigo interno (ver capítulo II, *supra*). En México en particular, surge a principios de los años 1970 en el marco de la defensa de los presos políticos y se consolida a lo largo de la década de 1980 y de 1990 (Ansolabehere y Vázquez, 2017). El primer *Comité de familiares de presos, perseguidos y exiliados políticos* estaba constituido principalmente por mujeres, familiares de presos políticos. Se creó a finales de 1972 a iniciativa de 5 jóvenes, una estudiante de medicina, Blanca Hernández; Rosario, quien era obrera; Elsa Lecuona, quien era abogada; Tere, quien era estudiante de derecho y Lourdes, quien era diseñadora. Todas ellas eran parejas de presos políticos, luego se sumarían muchas madres, incluso hermanas, también de presos políticos miembros del movimiento armado socialista mexicano[146]. Éstos al estar detenidos en condiciones arbitrarias en la prisión de Lecumberri, eran sometidos a todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En particular aquellos que estaban recluidos en las crujías *M*—muchos de los militantes del movimiento estudiantil de 1968— y en la *O*, donde estaban recluidos los presos políticos que eran considerados de mayor peligrosidad (Castellanos, 2009, p. 250). En palabras de Blanca Hernández, cofundadora de este primer Comité de presos, exiliados y perseguidos políticos de México y que su pareja

---

[146] Otros nombres destacarían de este primer Comité: Eva Loperena, las Sra. Castañeda y la Sra. Zavala quienes tenían tres hijos recluidos cada una, la Sra. Salcedo, Doña Agustina, las hermanas Romero que eran originarias de Oaxaca y tenían un hermano recluido, el Sr. Estrada, el Sr. Moreno, el matrimonio Rentería (Hernández, 2017).

estaba recluída en la crujía *O*, es debido a que no avanzaban los procesos de sus familiares que decidieron movilizarse:

> Entonces es a partir de ahí con otra compañera, Rosario, que éramos compañeras, nos volvimos muy amigas. Ella era trabajadora, era obrera y platicando de cómo estaban, pues dijimos tenemos que hacer algo. Los procesos no se mueven. O sea, es un horror la justicia. Entonces pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver al procurador para ver, muy acá nosotras. Claro, uno se comía en esa época el mundo a mordidas. Pero vamos apuntarnos muchas para ser más. Entonces a la salida, los días de visita, nos quedábamos ahí preguntándoles a las que conocíamos —Ay, ¿tú de quién eres familiar? —Sí mira qué vamos a hacer para que se muevan [los procesos]. Ahí estuvimos convenciendo a las madres, a las hermanas, a las novias, a las parejas y luego tratar de encontrar a la gente de la *M*. También en la salida, a ver quién es familiar de preso político, quién sabe qué y quién sabe cuánto y bueno así y ya ¿no? (Entrevista, el 9 de febrero del 2017).

A partir de esta primera iniciativa de organización vendría un largo proceso de constitución de estas actrices como *sujeto político*. Dado que la conformación como colectivo fue motivada por la ausencia del debido proceso de sus compañeros, la primera línea de batalla que emprendieron fue la jurídica en alianza con dos abogados, uno de ellos refugiado español y otras alianzas coyunturales con algunos partidos políticos de oposición[147]. En palabras de Blanca Hernández:

> Entonces decidimos, se nos hizo muy fácil irnos a parar ante el procurador, que era Ojeda Paullada a solicitar cita. No nos hacía caso pero nosotras [señal de insistencia con las manos]. Luego, antes los diputados estaban aquí en Donceles, a buscar a los diputados [señal de insistencia con las manos] y luego a buscar abogados, porque si no cómo se iban a mover los procesos sino teníamos abogados. Empezamos a recorrer abogados nadie nos quería ayudar hasta que llegamos con unos refugiados de la República española, Carlos

[147] Muchos de estos partidos no tenían registro oficial, debido que la reforma política que les permitiría ser actores legítimos de las contiendas electorales vendría años después, luego de la reforma política de López Portillo del 7 de octubre de 1977.

> Hernández del Real y él nos mandó que él trabajaba junto con el licenciado también Guillermo Andrade Gressler. Entonces ellos fueron nuestros abogados (Entrevista, el 9 de febrero del 2017).

Una vez organizadas como comité tomaron varios acuerdos originados por la afronta que vendría con un Estado en el que no confiaban. La primera es que su defensa sería colectiva, no reivindicarían casos individuales y la segunda —reitero, ante la desconfianza de la tradición de cooptación priista—, una vez que su familiar saliera libre, podrían seguir apoyando las acciones del Comité, en el cual tendrían voz pero no voto. De acuerdo con Blanca Hernández:

> Entonces, pues decidimos varias cosas. Una, que nadie podía hablar por su familiar, que todas teníamos que pedir por todos, porque había muchos compañeros que venían de lejos, que sus padres o familiares no tenían dinero para visitarlos como nosotros que estábamos aquí [en la Ciudad de México] y que entonces teníamos que pedir siempre por todos, ¿sí? Y además, que si por alguna cosa, alguno de nuestros familiares salía, podíamos seguir apoyando al comité pero nosotros ya no teníamos voz, apoyamos pero no decidíamos. Porque no se diera malentendido, de que tú vienes a decir aquí qué se tiene qué hacer cosas porque ya te compraron. Entonces queríamos ser, muy vamos a decir, como mucha ética, ¿no? Y así lo hicimos (Entrevista, el 9 de febrero del 2017).

En paralelo, miembros de este primer Comité, como por ejemplo el matrimonio Rentería originario de Guadalajara quienes tenían un hijo preso, junto con otras mujeres —Mariquita Morales, Chela López, Doña Petus— comenzaron a conformar comités regionales como por ejemplo el Comité de Familiares en Defensa de Presos Políticos que fue fundado en Jalisco en 1974 (Castellanos, 2009, p. 307; Guillén, 2016). Paradójicamente el Comité del Distrito Federal tomó una dimensión realmente nacional a consecuencia de una aparente estrategia de dilación de la Procuraduría General de la República (PGR). Luego de varios años de insistencia, las integrantes del Comité lograron finalmente reunirse con el Procurador General de la República, Pedro Ojeda Paullada (1971-1976), quien les pidió que elaboraran una lista de todos los presos que ellas reivindicaban como presos políticos en el país. Entonces es a

partir de esta actividad que el Comité realmente tomó un carácter nacional. Según Blanca Hernández:

> Entonces bueno, así pasó el tiempo y por fin nos recibieron, ¿no? Decíamos de guasa que Ojeda Paullada sabía hasta el color de calzones de cuando los detuvieron y quería que nosotros les diéramos información que sí sabían, pero siempre lo que se vio ahí, es que el tipo cuando nos recibió empezó así de: —A ver, señora dígame, ¿quién es su hijo? Y la señora: —Yo no estoy aquí por mi hijo, yo estoy aquí por todos. Otra: —Yo no estoy aquí por nadie, estoy por todos. Y luego, caímos en la provocación, nos dijo que a quiénes representábamos. Y nosotras todavía le dijimos, que representábamos a todos los [presos políticos], que eran los familiares de todos los presos políticos del país ¡Bastante exageradas! Y nos dijo: —¿Ah, sí? Pues entonces quiero nombre y apellido y el número de proceso de cada uno de ellos. [...] Bueno, el caso es que hicimos las listas y eso, por andar de presuntuosas, lo que se hizo es que a ver: —¿De dónde viene tu mamá o tu hermana, o tu novia? —De Tamaulipas. —Órale te me vas a Tamaulipas y ves qué penal hay y si hay presos políticos. —Ah, y tú de Guadalajara, a Oblatos. —Y tú de Oaxaca pues... Y así, realmente formamos el Comité nacional. [...] Claro que los conseguimos de todos: —¿Y tú de dónde vienes? — De Guadalajara. —Pues te vas. —Es que no conozco. —Ah pues quién sabe, vas y consigues. Y así nos organizamos a nivel nacional realmente. (Entrevista, el 16 de marzo del 2017).

Posterior a esta reunión, el Comité buscó estructurarse mejor dando paso a la creación de comités con representación regional como en Guerrero, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí y el Distrito Federal (Sánchez Serrano, 2012). Pasaron varios años más y salvo porque algunos de sus compañeros salieron libres bajo fianza, los procesos no avanzaron realmente. Durante todo el período de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) —los años de mayor represión durante la Guerra Sucia— lograron muy pocos avances en cuanto a la interpelación de la acción del Estado y esto a pesar de haber movilizado un repertorio de acción colectiva variado: conferencias de prensa, mítines, aparición en actos oficiales del gobierno, alianzas con actores estratégicos, etc. Hasta este momento, para estos actores y actrices sociales, la categoría de *desaparecidos* aún no existía en el constructo de lo posible de

las violencias de Estado. Hablaban de perseguidos políticos, esta categoría surgiría después. De acuerdo con Blanca Hernández:

> No, todavía seguíamos hablando de perseguidos. No podíamos decir todavía desaparecidos porque no teníamos la certeza. Porque te digo como todo era tan hermético, entonces no sabíamos [que pasaba con] los compañeros que no habían llegado, lo que pasa es que los habían soltado y andaban otra vez en la guerrilla o estaban en sus casas o se habían ido a quién sabe dónde. Porque la situación era horrible, o sea te digo que hablábamos en sobreentendidos. (Entrevista, el 16 de marzo del 2017).

La objetivación de las desapariciones forzadas, en particular de la figura del *detenido-desaparecido*, surgiría a la par de la reconfiguración del Comité. Efectivamente, cuando José López Portillo llegó a la presidencia (1976-1982), en parte motivado por la presión de actores sociales como los grupos guerrilleros, los partidos políticos de oposición no reconocidos, entre otros, éste promete la reforma política y la ley de amnistía para guerrilleros y disidentes políticos, la cual fue promulgada el 28 de septiembre de 1978[148] (ver capítulo III, *supra*). Previo a la promulgación de la ley, en los primeros meses de su mandato, como Comité, por primera vez, lograron programar una reunión con el presidente de la república luego de al menos cinco años de movilización constante en la arena pública. Es aquí, en esta reunión, que Rosario Ibarra de Piedra, madre de Jesús Piedra Ibarra, un estudiante de medicina miembro del grupo guerrillero *Liga 23 de septiembre*, que fue desaparecido en Monterrey, Nuevo León, el 18 de abril de 1975, se vincula con este Comité y con ella *aparece* la

---

[148] El artículo 1° a la letra estipulaba: "Se decreta amnistía en favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, ante los Tribunales de la Federación o ante los Tribunales del Distrito Federal en materia de fuero común, hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, por los delitos de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión, o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país, que no sean contra la vida, la integridad corporal, terrorismo o secuestro". Dicha ley fue abrogada el 27 de enero del 2005, una vez que ya había cumplido su función.

figura política del *desaparecido* dentro del repertorio de las reivindicaciones colectivas contra las violencias políticas. Asociada, además, al dispositivo de la fotografía como representación. De esta manera es que en el incipiente movimiento por la defensa de los derechos humanos en México comienza a reivindicarse a la *víctima* en singular, pasando de una defensa que surge como agente colectivo: "Yo no estoy aquí por nadie, estoy por todos" y pasa a una defensa individualizada: el hijo desaparecido representado por su foto. En palabras de Blanca Hernández:

> En la reunión ahí que tuvimos de familiares. Ahí fue a donde conocí a la Señora Piedra, porque como dijimos que éramos representantes de todo el país, pues aunque no entraron familiares que aquí ya habían estado todo el tiempo con nosotros, ellos entendieron que era importante que entraran de Guerrero, de Oaxaca, de todas partes, de Guadalajara, de todos... Antes de entrar a la reunión quedamos que nadie iba a hablar nada, que lo importante era lo que decía López Portillo. Pues de todos modos, ya que habló Pedro [un expreso político], estábamos sincronizados, más los abogados y que hablará él, la Señora Piedra habló, ¡ay que mi hijo desaparecido!, y aquí está la foto. Pues no nos pareció, porque había un montón de gente que no había entrado que también tenía hijos que no habían tenido la oportunidad de hablar de sus hijos y lo que te decía antes, íbamos a la PGR, a donde fuera y todo mundo decía por todos, no por mi hijo, por todos (Entrevista, el 9 de febrero del 2017).

Es así como el desaparecido entró en las categorías de lo posible. Semanas después de esta reunión, dos de las líderes, Blanca Hernández y Teresa Álvarez, estuvieron detenidas-desaparecidas durante una semana (Proceso, 1977; Ulloa Bornemann, 2007)[149]. La detención arbitraria fue ejecutada por miembros de la Brigada Blanca y fueron interrogadas personalmente por el mismo Miguel Nazar Haro, el entonces director de la DFS (ver capítulo II, *supra*): "Estaba Nazar directamente: —¿Sabes quién soy? —Pues sí —¿Y cómo sabes? —Porque leo los periódicos. El caso es que

---

[149] Aquí la prensa aún no hablaba de *desaparecidos* o de *detenidos-desaparecidos*. La revista Proceso trató esta nota como si fuera un secuestro. De hecho, la nota se tituló "Secuestran a esposas de presos políticos" (Proceso, 1977).

decían que había un intento de fuga y que yo había metido [al reclusorio] los explosivos. Pues no". (Blanca Hernández, entrevista, el 13 de diciembre de 2017). Ambas fueron amenazadas para que dejaran de lado la defensa de los presos políticos si querían evitar que miembros de su familia fuesen agredidos. De acuerdo con Blanca Hernández, el objetivo era disuadirlas de seguirse involucrando en la defensa de los derechos humanos de los presos políticos: "Por eso, para meter miedo y que ya no siguiera uno haciendo nada. Porque me dijeron pobre de ti, y más que de mí de mi familia. Porque sí, cuando amenazaron a mi hija, ahí sí, sí. —La vamos a traer. Ahí sí me... perdí todo. Me dijeron: —Y pobre de ti donde vayas a hacer una declaración diciendo que te detuvieron" (Entrevista, el 13 de diciembre del 2017).

Casi dos años después de esta reunión, la ley de amnistía aún no se había promulgado pero muchos de las parejas y/o hijos de las líderes —"casualmente"— habían salido bajo fianza, limitando así su participación con el Comité, de acuerdo con las mismas reglas que ellas establecieron. En el proceso de reclamo de la amnistía que les fue prometida por López Portillo, este Comité inicial modificó su repertorio de acción, el cual fue liderado por Rosario Ibarra de Piedra, quien devendría un ícono en la defensa de los derechos humanos en México y de los detenidos-desaparecidos en particular. Su hijo Jesús, al momento de redacción de esta tesis aún está desaparecido.

4.2 El Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México — Comité Eureka

Después de más de cinco años de la creación del primer Comité, y ante la distancia que muchas de las líderes se auto-impusieron debido a la salida de prisión de sus familiares, Rosario Ibarra tomó el liderazgo. Como estrategia de disuasión de la participación en estos movimientos de defensa de derechos humanos, el Estado podía liberar a los presos políticos de la prisión, pero el objetivo mismo del dispositivo desaparecedor (Calveiro, 1998) era ocultar el destino de las personas, por eso los

desaparecidos no podían volver. Paradójicamente, esto le daría fuerza al movimiento. A partir de 1977, para demarcarse del primer Comité, en el marco de una reunión en Monterrey Nuevo León, esta organización tomaría el nombre de Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, diez años después tomaría el nombre de Comité Eureka. Según Blanca Hernández:

> Entonces después la Señora [Ibarra de Piedra] durante un tiempo estuvo usando también el mismo nombre, o sea ella se quedó, que es lo que decían las compañeras como ella la dirigente y entonces lo transformó de perseguidos a desaparecidos, pero los orígenes vienen de acá, quienes juntamos a la gente a nivel nacional, que hicimos el trabajo de años, de todo, de todo, al principio fuimos nosotros, que después nos fuimos poco a poco separando o se fueron saliendo y entonces ya después con la amnistía la gente fue saliendo (Entrevista, el 13 de diciembre del 2017).

Si durante el gobierno de Echeverría, Rosario Ibarra "peregrinaba" sola: "Mi persecución a Echeverría fue terrible: 39 veces hablé con él. De nada servía que anduviera como vendaval para todos lados y que me prometiera tantas cosas para no cumplirlas. Me agarraba la cabeza y le decía a Ojeda Paullada: 'Señor procurador ¿qué hacemos con esta pobre madre?' Hipócrita. Y como siempre estaba presente en todos sus actos, me saludaba de lejos. Cuando se acercaba, me preguntaba: '¿Cómo la tratan?' Me tratan bien, pero quiero a mi hijo, le respondía; era una especie de chantaje". (Entrevista a Rosario Ibarra en: Proceso, 1997). Cuando López Portillo llegó al poder, la interpelación a la figura presidencial ya no sería de manera individual, sino como sujeto colectivo a través del Comité. Sobre todo luego de la primera reunión que había sido concertada por las integrantes del primer Comité: "[A López Portillo] ya no lo seguí mucho. En ese tiempo habíamos formado ya nuestro Comité y fueron visitas formales. En una ocasión, cuando estábamos en un plantón en el Zócalo, nos mandó llamar, en vísperas de su último informe. Nosotras creímos que iba a solucionarse el problema; es más, creo que hasta Gutiérrez Barrios lo creyó,

porque nos habló muy apurado que el presidente nos buscaba [...] Pero tampoco hubo nada". (Entrevista a Rosario Ibarra en: Proceso, 1997).

En paralelo a la reconformación de este Comité en 1977, en América Latina, también surgían otros sujetos políticos en torno a las violencias políticas en general y a los cuerpos ausentes en particular. En Argentina, en abril de ese mismo año, las madres de la plaza de mayo, "las locas" como les apodaban desde el gobierno, comenzaban a forjar el sujeto político que se convertiría en el ícono de la defensa de los detenidos-desaparecidos a nivel mundial (Fabj, 1993). A pesar de que los flujos de comunicación no eran tan rápidos como en la actualidad, muchas de las acciones colectivas compartían el mismo repertorio en los diferentes países de América Latina. Por ejemplo, las huelgas de hambre de las madres —otra vez el cuerpo aparece como receptáculo del castigo— en torno a las violencias de Estado, serían una constante[150]. En agosto de 1978, luego de 10 años de la masacre del 2 de octubre de 1968, por

[150] En julio de 1977, 26 mujeres de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Chile tomaron el local de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y comenzaron una huelga de hambre para atraer la atención del Secretario General de la ONU, Kurt Waldheim (1972-1981), y exigir al gobierno dar explicaciones sobre la desaparición de sus familiares. Para el 22 de mayo de 1978 la huelga sería masiva y se reproduciría en tres iglesias, al igual que en el extranjero llevada a cabo por exiliados chilenos. Sería la primera vez desde que comenzó la dictadura (1973) que se establecía un movimiento público de oposición (Guillaudat y Mouterde, 1998). Por otra parte, en diciembre de 1977, a iniciativa de 4 mujeres trabajadoras mineras, entre ellas Domitila Barrios, comenzó una huelga de hambre en el centro de La Paz en Bolivia, luego de 13 años de regímenes militares y contra la dictadura del primer mandato presidencial de Hugo Banzer Suárez (1971-1978): "En principio, la idean para llamar la atención sobre su situación personal, pero luego, con algunos apoyos, hacia más amplios objetivos: amnistía total, derogación de la ley de Seguridad del Estado, normalización sindical, regreso de los exiliados y desaparición de la presencia militar en las minas" (El País, 1978). Pronto se les unirían alrededor de mil 500 personas, al mismo tiempo que se declaraban huelgas textiles y mineras y se reproduciría en al menos 6 de las más importantes ciudades de Bolivia. Contaban con el apoyo de la iglesia. El resultado fue que la amnistía tuvo que ser decretada y los exiliados políticos podrían volver. Ésta aceleró también la salida del poder de Banzer. Ver: (Lavaud, 2003). Las Madres de la plaza de mayo, por su parte, también recurrieron a las huelgas de hambre en repetidas ocasiones. Por ejemplo, en diciembre de 1981, dos grupos de las Madres de la Plaza de Mayo iniciaron una huelga de hambre en recintos del arzobispado católico en Quilmes y Neuquén (El País, 1981). Ver también: (Asociación Madres de Plaza de Mayo, 1996).

primera vez una manifestación política tomó lugar en el primer cuadro de la capital del país. La primera de muchas, pero esta primera tuvo resultados tangibles, como por ejemplo la aceleración de la promulgación de la ley de amnistía:

> El 28 de agosto de 1978, estos familiares encabezados por Rosario dieron un campanazo clave. A pocos días del segundo informe de José López Portillo, 84 mujeres y cuatro hombres entraron a la Catedral de México, a las 11 de la mañana, sacaron una manta con la leyenda "los encontraremos" y se instalaron en huelga de hambre. Curas y agentes los querían sacar, pero mucha gente los apoyó y defendió. Fue la primera manifestación en el Zócalo y la Catedral desde la matanza de 1968. Pero romper la veda no fue más importante. Tras cuatro días de ayuno y con una amenaza creciente de desalojo, la huelga terminó y, al día siguiente, el Presidente anunció la primera amnistía para presos políticos. Esa fue la primera de siete huelgas de hambre en los siguientes 10 años. La primera de tres amnistías que liberaron a mil 500 personas. Y que permitiría la presentación con vida de 148 desaparecidos (Carrión, 2015b).

La ley de amnistía se concretó gracias a la presión política de una diversidad de actores y actrices sociales, en la cual jugaron un rol importante los partidos de oposición, el primer Comité de Familiares de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos, así como del Comité Eureka. Ésta permitió la salida de más de mil quinientos presos políticos, el regreso de 57 personas que se encontraban en el exilio y en el transcurso de 10 años, la liberación de 148 personas que estuvieron en calidad de detenidas-desaparecidas (Proceso, 1997). Sin embargo, la represión no había cesado. Ante esto, Rosario Ibarra lideró la conformación del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) el 12 de diciembre de 1979, la cual fue la primera red interorganizacional que se creó en México en torno a la defensa de derechos humanos y que estuvo activa alrededor de 13 años (Albarrán Ledezma, 2015; Proceso, 1997). Este Frente estaba integrado por 54 organismos que incluían organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, sindicatos, organizaciones estudiantiles, etc. El objetivo principal era reclamar la presentación de las personas desaparecidas y la

abolición de la tortura, además de la defensa de las libertades democráticas y la libertad (Albarrán Ledezma, 2015; Díaz Tobar, 2015; Solís Esquivel, 2013).

Posteriormente a la conformación de esta coalición Rosario Ibarra decidió emprender una carrera política más convencional y se postuló en dos ocasiones, en 1982 y en 1988, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de inspiración trotskista, como la primera mujer candidata a la presidencia de la República en México, en ninguna de las dos ocasiones obtuvo la victoria. De 1985-1988 fue diputada federal por el mismo PRT y de 1994-1997 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). De 2006 a 2012 fue senadora también plurinominal por la Coalición Por el Bien de Todos, conformada por el PRD, el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia, y fungió como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. En su segundo periodo como diputada le tocó el levantamiento zapatista y mostró su apoyo abiertamente al movimiento y también formó parte de la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno federal por la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz ocurrida en mayo de 2007 (ver capítulo III, *supra*). En al menos tres ocasiones —1986, 1987 y 2005— fue candidata al premio Nobel de la Paz.

Como parte de las acciones del Comité Eureka, entre otras cosas, "Las Doñas" —como el movimiento les llama a las integrantes hasta la actualidad—, documentaron los casos de más de quinientas desapariciones forzadas que ocurrieron durante la Guerra Sucia y denunciaron lo que ocurría en México en instancias internacionales como la Liga Internacional por los Derechos del Hombre y Amnistía Internacional (Maier, 2001; Sánchez Serrano, 2012). Actualmente el Comité sigue existiendo pero no documentan ni siguen de cerca casos de desapariciones del periodo actual. Al igual que el primer Comité, éste retomó el acuerdo que estipulaba que sólo las y los familiares de víctimas de la violencia de Estado podían ser miembros activos. Así, más de 40 años después, el Comité sigue en pie y la desconfianza hacia la acción

deshonesta de agentes del Estado sigue existiendo. En palabras de Jorge Humberto Gálvez, miembro fundador del Comité, director del Museo-Casa de la Memoria Indómita que pertenece al Comité Eureka y yerno de Rosario Ibarra:

> En este Comité nada más somos familiares, nada más. O sea aceptamos la solidaridad de muchas personas que son maravillosas, ¿no? Pero las decisiones y las discusiones cerradas sólo somos los del Comité y sobre todo los que tenemos un miembro desaparecido, por seguridad. Es que en este país hay que tener presente eso. Ninguno de nosotros si tenemos un familiar desaparecido va a cometer una indiscreción, ninguno de nosotros va a traicionar. Yo con todo respeto lo digo de las otras organizaciones que sí es gente que es, que tiene ese sentimiento humanitario, pero si no tiene un familiar no lo siente igual y puede cometer una delación. Nosotros no. Entonces es un Comité muy cerrado, muy compacto. Porque las circunstancias tanto antes como ahorita así lo requieren, porque la política de terror de este Estado, un Estado criminal en el que estamos siempre es la misma y nosotros tenemos que actuar en consecuencia también. Porque las infiltraciones siempre existen, si te fijas en los mismos reportes de ellos, del CISEN [Centro de Investigación y Seguridad Nacional] que antes se llamaba Dirección Federal de Seguridad, ellos dicen cómo infiltran las organizaciones, cómo infiltran las marchas, cómo envían gente que violente las marchas. (Entrevista, el 12 de enero del 2017).

De esta manera, en estas dos últimas secciones, fue analizado el surgimiento de los comités pioneros en la defensa de los derechos humanos en México y sus líneas de ruptura y continuidad. En la siguiente sección, se analizará el surgimiento y estrategias del tercer comité en orden cronológico de conformación, así como sus especificidades y los puntos de tensión con el segundo comité del cual se desprendió.

4.3 La Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Entre los colectivos, a pesar de estar movilizados por una causa común, las diferencias tanto ideológicas, como las maneras como se entiende que se debe abordar lo político e incluso las relaciones personales, son muchas veces fuente de

conflicto o tomas de postura distante ante los liderazgos que surgen. Si eso sucede al interior de un mismo grupo, tal como lo estudió Rodríguez Ramírez (2011) en el seno del Comité Eureka en torno a las diferencias de participación y la politización, esto se potencializa en relaciones inter-colectivos. En el caso de Eureka, Rodríguez Ramírez (2011) afirma que entre las causas principales de estas diferencias de participación al interior de la organización se encuentra la edad y la antigüedad, la autosuficiencia económica, la escolaridad, la familia de origen y la clase social (Rodríguez Ramírez, 2011, p. 264-267).

En cuanto a las diferencias inter-colectivos, además de las anteriores podemos citar los posicionamientos ideológicos y el cómo se entiende la participación política, que algunas veces pueden ser el origen de rupturas. En ese sentido, en 1978, apenas unos meses después de que el Comité había adoptado un nuevo nombre, por razones principalmente ideológicas surgió una ruptura importante y algunos de las y los miembros decidieron formar el *Comité Nacional Independiente Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos,* donde la palabra independiente es clave para demarcarse del comité liderado por Rosario Ibarra (Sánchez Serrano, 2012, p. 184) y por ende de los partidos políticos (Mata Montiel, 2017). En 1982, ya que la reforma política había sido puesta en marcha, la cual permitía que los partidos políticos de oposición participaran de la contienda electoral, aunado a la candidatura por el PRT de Rosario Ibarra de Piedra, se originó una nueva ruptura entre quienes consideraban que este tipo de participación era hacerle el juego al sistema y tomaban una posición más radical. Es el caso de Felipe Martínez Soriano y Josefina Martínez Martínez, quienes decidieron reagruparse ahora en el *Comité Nacional Independiente Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos, Asesinados y Exiliados por Razones Políticas*, mejor conocido como CNI (Sánchez Serrano, 2012, p. 186). En palabras de Julio Mata, Secretario Ejecutivo Nacional de AFADEM:

> [El CNI] en los años setentas inicia primero denunciando, pero denuncia lo que se le llamaba en ese momento la denuncia política y acompañaba los procesos, pero acompañaba procesos de todo tipo de luchas, campesinas, obreras, estudiantiles, en todo lugar donde había una movilización social, en ese momento se le denominaban garantías constitucionales, donde había una movilización social ahí estaba el CNI, ¿no? En ese momento era CNI y así se va desarrollando hasta incluso la detención, la detención de Felipe Martínez Soriano[151], que es uno de los cofundadores y el exilio de Josefina Martínez Martínez. Se da el exilio de ella ya como presidenta del CNI y ella se asila en Francia. (Entrevista, el 31 de enero del 2017).

A pesar de que sus miembros fundadores habían sido desmovilizados por la detención y/o el exilio, el Comité continuó su rumbo. En 1997 también cambiaría de nombre al que se le conoce actualmente: Asociación de Familiares y Amigos Desaparecidos de México (AFADEM). Desde el principio y es una relación que han mantenido a lo largo de los años, el CNI decidió vincularse con la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) que confederaba a organizaciones de familiares de víctimas de las dictaduras del Cono Sur, por lo que siempre se presentan como AFADEM-FEDEFAM [152]. Esta organización, que estaba conformada principalmente por familiares de integrantes de la lucha armada, disidentes políticos y por exguerrilleros mismos, su posicionamiento siempre fue alejarse de los partidos políticos —mismo de oposición—, así como de cualquier credo religioso y apoyo monetario que les comprometiera (Sánchez Serrano, 2012, p. 187). La desconfianza ante la cooptación del Estado, se manifestó en este caso a través de la interdicción de participación política convencional: "[A]hora por estatutos decimos que nadie puede pertenecer a un partido [político] si quiere

---

[151] Para un análisis de la trayectoria de Martínez Soriano, ver: (Sánchez Serrano, 2012).

[152] Para la historia de FEDEFAM, ver: (Ayala, 2011).

pertenecer AFADEM, por estatutos decimos, nadie, nadie, ¿no? Y hasta ahorita pues se ha respetado" (Entrevista, el 31 de enero del 2017).

Durante la década de 1980, una vez que se creía que la llamada Guerra Sucia había quedado atrás, y luego del sismo que devastó la Ciudad de México en 1985, en el país se dio un crecimiento importante de las organizaciones de la sociedad civil en general, entre ellas, las de defensa de derechos humanos también se hicieron presentes (Keck y Sikkink, 2000, p. 158-159; Somuano, 2007). Estas nuevas organizaciones serían de corte más institucional y profesionalizadas. El CNI, ahora AFADEM, se había propuesto adaptarse a los tiempos y establecer alianzas con otros actores del ramo de la defensa de los derechos humanos con el objetivo de sumar fuerzas. Sin embargo, sobre esta organización pesaba una reputación de radicalidad al tener un repertorio de acción más confrontativo con el aparato de gobierno. Entre otras cosas por este estigma que pesaba sobre ellos es que deciden cambiar de nombre y de repertorio de acción colectiva sin comprometer, sin embargo, su independencia ante financiamientos, credos religiosos y/o partidos políticos. En palabras de Julio Mota Montiel:

> Yo visito a todas las ONGs aquí en México para que trabajen con nosotros. Nadie quería trabajar con el CNI [AFADEM] por la historia que traía atrás. Era una organización, en ese momento le llamaban confrontativa. Por eso, porque hacían mitin e iba la PGR y paraba la calle, por eso, ¿no? Pero era casi lo único que se hacía, entonces era una organización confrontativa. En ese momento incluso se tomaban embajadas y con la toma de embajadas se negociaba con la Secretaría de Gobernación y salieron presos mucha gente, ¿no? Porque era la presión internacional para liberar la embajada. Se tomó la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos], por ejemplo. Hicieron huelga de hambre dentro de la CNDH, ¿no? Y eso obligaba a la CNDH a recibir las denuncias, bueno el listado de desaparecidos que existían en México (Entrevista, el 31 de enero del 2017).

Al igual que el Comité Eureka, en un primer momento los miembros del CNI, luego ya como AFADEM-FEDEFAM también, se dedicaron a documentar los casos de las

violencias políticas armando expedientes de presos políticos y detenidos-desaparecidos, pero con un objetivo mayor, el de presentar denuncias jurídicas contra la acción del Estado ante el poder judicial. En esta tarea documentaron alrededor de 810 casos de detenciones-desapariciones que se ejecutaron en el país durante la Guerra Sucia, principalmente en el estado de Guerrero (Mata Montiel, 2017). Así, paradójicamente, el grupo que se presentaba como uno de los más radicales y anti-institucionales, decidió emprender como colectivo la búsqueda de justicia lo más institucionalmente posible, haciendo no solo denuncias públicas en las calles sobre las violaciones a los derechos humanos o ejerciendo únicamente defensa jurídica de presos políticos para obtener su libertad. El Comité decidió hacer denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), con el objetivo de que las víctimas tuvieran acceso al derecho a la reparación en sentido amplio: restitución, indemnización, readaptación, satisfacción y garantía de no repetición. Eso sí, siempre combinando esta forma de denuncia con formas de "participación política no convencional" (M. F. Somuano, 2010) como por ejemplo son las marchas, los mítines, el volanteo, etc., así como trabajo de base en las comunidades. En palabras de Julio Mata Montiel:

> Entonces en base a eso definíamos que no podíamos continuar en México solo con el mismo trabajo de marchas, mítines, plantones y todo eso. Empezamos a presentar denuncias jurídicas en Atoyac [Guerrero]. Presentamos un paquete de casos primero, luego presentamos un paquete en Chilpancingo, luego presentamos un paquete en la PGR y luego después a la PGR le pedimos que nos ratificara las denuncias en Acapulco y en Acapulco ya hicimos una marcha mitin del Zócalo hasta el ministerio público y le pedimos presentar más, más casos ahí. Y luego le pedimos que recibiera denuncias en Atoyac, la oficina de Atoyac y ahí en Atoyac ya pedimos a las radios locales spots gratuitos, visitamos a todas las comunidades y ya pusimos días para que los MP [agentes del ministerio público] fueran y se pudieran presentar denuncias. (Entrevista, el 31 de enero del 2017).

La coyuntura de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como la política continental impulsada desde Estados Unidos

que instaba a los países a converger hacia las transiciones democráticas para facilitar la instauración de las economías neoliberales (Selser, 1990) (Ver capítulo III, *supra*), aceleró la creación de un organismo de Estado destinado a la defensa de los derechos humanos, la CNDH, en junio de 1990, la cual en 1992 adquirió su carácter de organismo público autónomo (Sánchez Serrano, 2012). A partir de su creación, AFADEM, así como Eureka —desde sus trincheras y con poca o nula convergencia entre ellos—, coadyuvarían con este organismo para la creación de mecanismos especiales como fue el caso, entre otros, del Programa Especial de Presuntos Desaparecidos, creado el 19 de septiembre de 1990 y en 2001 de la Recomendación 026/2001 la cual instaba a la designación de un fiscal especial para los delitos de las violencias de Estado durante la Guerra Sucia, reparación del daño a familiares de víctimas de desaparición forzada, el establecimiento de un marco jurídico con estricto apego a los derechos humanos para el actuar del sistema de seguridad nacional, etc.

4.4 El Telar de las *nornas*

Los telares de las *nornas* eran tan extensos, que éstas podrían encontrarse en cualquiera de los puntos cardinales y sus tejidos tocarían otro punto cardinal. Sin embargo, aparentemente las *nornas* no tenían control sobre sus tejidos según sus deseos y/o creatividad, sino que ejecutaban los deseos de Orlog, una poderosa fuerza del universo informe sin principio ni fin. Los hilos y las puntadas eran muy finas y de muchos colores según la naturaleza de lo que ocurriría. Si un hilo negro atravesaba de extremo a extremo era señal de un mal presagio, de una fatalidad. El hilo negro ha atravesado el andar de los colectivos de familiares de víctimas de las violencias políticas. Si bien, uno de los objetivos de cada uno de ellos y de sus miembros, además de pedir la restitución de las víctimas, fue la garantía de no repetición, los designios de *Orlog* —del poder inasequible del Estado— fueron otra cosa. Décadas después estos crímenes, en especial el de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas no solo se exacerbarían de manera exponencial, sino que los

métodos serían más crueles y las afrontas con el Estado más deshumanizadas, hasta el punto de la ignominia.

La objetivación de lo que es una desaparición forzada, el "detenido-desaparecido" en la época, se realizaría gracias a estos sujetos políticos que le darían nombre a esta figura que desajusta los horizontes de sentido (Gatti, 2008) y al nombrarla les concertarían a los detenidos-desaparecidos una posibilidad ontológica[153]. De acuerdo con Melissa Wright (2018), en la línea también de Gatti (2006, 2008, 2011), en las desapariciones forzadas, la ausencia empírica —la ausencia del cuerpo y de la información de lo que pasó—, aquello que no se puede nombrar o aprehender, resulta en una ausencia de epistemología. Es decir, lo que no puede ser nombrado impide generar el conocimiento. En ese sentido, en la *gobernanza del terror* ante la ausencia de epistemología, no hay manera de entender la ontología (Wright, 2018), o sea la existencia de las personas desaparecidas en este estado liminal (Turner, 1973) en el que son colocadas de manera deliberada, al ejecutar sobre ellas un dispositivo que ha

[153] En el caso chileno, por ejemplo, Paola Díaz y Carolina Gutiérrez Ruiz (2009) analizaron el proceso de objetivación por el que se creó la figura del detenido-desaparecido en este país, el cual estaría constituido de tres acontecimientos significativos. El primero sería la publicación de la "lista de los 119" el 31 de julio de 1975, que es una declaración pública de los prisioneros políticos del campo de Melinka. El segundo evento sería la liberación en noviembre de 1976 de un número importante de prisioneros políticos de centros de detención no clandestinos, sin embargo, las personas que buscaban las y los miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) seguían sin aparecer. Finalmente, el descubrimiento en noviembre de 1978 de los restos de campesinos que habían sido señalados como detenidos, el ejército lo había negado y después sus cuerpos habían aparecido abandonados en un paraje rural. Estos acontecimientos permitieron objetivar una situación incierta e inédita en Chile: el arresto, la detención, la negación y la desaparición de personas. En ese sentido, las autoras argumentan que la experiencia de la desaparición era real pero no existía como experiencia pública y comunicable antes de estos eventos y que gracias a ellos pudo establecerse la categoría de detenido-desaparecido y su posterior difusión como categoría política. Agradezco a Ludivine Tomasso esta referencia.

sido ideado y planeado como tal. Por ende no hay posibilidad de comprensión del fenómeno[154].

Al nombrarlo, estos colectivos concertan la posibilidad ontológica tanto en el espacio privado como en el público, de restituirles un nombre y una representación a quienes han sido sujeto de desaparición forzada a través del dispositivo de la fotografía principalmente, pero también a través de otras formas de representación artística como la pintura y/o la plástica. Pero además, la dinámica misma de estos Comités al estar principalmente conformados por familiares de víctimas de las violencias de Estado, lograron hacer entrar en la política los sentimientos, en particular la dimensión del dolor como categoría de disputa pública. Por otra parte, las dinámicas propias de género harían que la histórica división del trabajo, del *care*, recayera nuevamente en las mujeres, pero esta vez saldrían del ámbito privado al público. Siendo en un primer momento las parejas de los presos políticos quienes organizaran la *acción colectiva* para su excarcelación, luego las madres tomarían el relevo en la escena pública para reclamar el regreso de sus hijos detenidos-desaparecidos una vez que esta categoría entró en el lenguaje de lo posible, pasando de *perseguidos* a *desaparecidos*. De esta manera, estas mujeres entraron en política en México como sujeto colectivo, trayendo con ellas diversas innovaciones como es la discusión de la dimensión subjetiva del dolor ante las violencias de Estado, vinculándose además con la política formal, ahí sí de manera individual, como en el caso de Rosario Ibarra de Piedra.

---

[154] Para un análisis de la construcción de sentido ante el "desajuste ontológico" que genera la desaparición forzada en los familiares de las víctimas, a través de su texto fundador *Botín de Guerra* (Nosiglia, 1985) de las Abuelas de la Plaza de Mayo, ver: (Quintana, 2014).

El sujeto político *familiar de víctimas de la violencias políticas* no estaría exento de fracturas y reconfiguraciones ante la disyuntiva de lo propio de lo político y de la política (Mouffe, 2011). Sin embargo, estos reposicionamientos permitieron desde diferentes frentes mantener en la agenda, mismo si de manera marginal, el reclamo público por el regreso de quienes habrían sido desaparecidos, la liberación de los presos políticos y el regreso del exilio de quienes se habían enrolado en la disidencia política. Pero además, en la misma línea que sus homólogas sudamericanas, en particular las chilenas y las argentinas, estos colectivos dieron un paso más, transitando de un posicionamiento de contención de las violencias de Estado hasta empujar las fronteras del derecho, logrando generar jurisprudencia en el derecho internacional. Concretamente me refiero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), o a mecanismos especiales en el Sistema de Naciones Unidas, como fue la creación en 1981 del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) para atender los casos chilenos en un primer momento o la implementación de legislaciones específicas en el caso argentino (Guest, 1990). Incluso la ciencia forense habría avanzado a instar de estas actoras y concretamente la investigación científica en torno al ADN se habría revolucionado para reforzar el trabajo de las Abuelas de la Plaza de Mayo en la búsqueda de sus nietos sustraídos por el régimen[155].

---

[155] Los exámenes de ADN para determinar la paternidad se implementaban desde la década de 1970. Sin embargo, en el caso de los nietos buscados por las abuelas, los progenitores estaban ausentes. En los primeros años de la década de 1980 las Abuelas visitaron centros de investigación y universidades de varias partes del mundo con la finalidad de averiguar cómo se podía identificar por el ADN una tercera generación. Fue en Estados Unidos que un grupo de investigadores aceptó ayudarles, entre ellos estaba la genetista norteamericana Mary Claire King y el argentino Víctor Penchaszadeh. A partir de este trabajo de investigación de más de un año, se logró desarrollar el "índice de abuelidad", gracias al cual, hasta abril de 2018, esta organización había logrado recuperar a 127 nietos y nietas apropiados durante la dictadura de 1976-1983. Ver: (Centenera, 2017; Salas, 2015).

En México, el trabajo realizado por estos comités de familiares tuvo una importancia relevante, logrando avances en el reconocimiento institucional como fue por ejemplo la creación de políticas específicas: Programa Especial de Presuntos Desaparecidos o la Recomendación 026/2001, ambos de la CNDH. Su trabajo fue también la base para la documentación de los casos de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) instaurada en México de 2000 a 2006 y de la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero (Ley 932, 2012). Años más tarde incluso —a finales de los años 1990 y principios del 2000—, AFADEM-FEDEFAM liderado en esta tarea por Tita y Andrea Radilla, junto con otros aliados —organismos formalmente constituidos de derechos humanos—, llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco (ver capítulo II, *supra*), logrando en 2009 que por primera vez el Estado Mexicano fuera sentenciado por un organismo multilateral por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Sucia.

Sin embargo, en el país, a pesar de esta constante presencia en la escena pública y batallas en la línea jurídica, estas actrices y actores no lograron establecer una *subida en generalidad* (montée en généralité) (Boltanski y Thévenot, 1991)[156] de su *causa* —

[156] El concepto de subida en generalidad, "*montée en généralité*", fue desarrollado por Luc Boltanski y Laurent Thévenot (1991) y hace referencia a cómo una causa particular puede convertirse en una causa pública. En su libro De *la justification, les économies de la grandeur* (1991) sostienen que las disputas pueden darse en dos sentidos, una *violenta* en donde los entes en disputa no buscan argumentar ni justificar, sino ésta se da únicamente en torno a una relación de fuerzas. La segunda categoría que desarrollan es la *disputa en justicia*, en la cual los entes en disputa buscan justificar sus argumentos públicamente y de manera "justa" en base a valores "universales". Cada ente moviliza un marco de argumentos generales que hacen referencia a *valores superiores comunes* definidos por el contexto, el tipo de sociedad, la temporalidad y la ubicación geográfica. En la argumentación de Boltanski y Thévenot, en la *subida en generalidad* el actor o la actriz que centra su discurso en torno a sus propios intereses, tendrá menos oportunidades de unir a su causa a las y los otros, que aquel o aquellos que se expresan a nombre de una causa o un valor reconocido como *valor superior común*. En ese sentido, no se convoca a defender únicamente una causa particular, sino un argumento de alcance general, que es válido para todas las situaciones similares. Así, las y los individuos dejan de defender su causa particular para apoyar los "valores de referencia generales" y hacer referencia a una concepción particular del bien común y de la justicia (Boltanski y Thévenot, 1991).

entendida última como "asuntos que se defienden"—, más allá de los actores colectivos previamente afectados por las violencias de Estado como por ejemplo los partidos políticos de oposición o del sector de la defensa de los derechos humanos. Más aún, a nivel internacional, debido al doble discurso que México mantenía hacía el exterior, recibiendo abiertamente a refugiados políticos de Centro y Sudamérica[157], pero al interior ejerciendo una política autoritaria con las mismas técnicas de las violencias de Estado que las dictaduras sudamericanas, a nivel internacional a estas actrices y actores también les fue difícil atraer a su causa la mirada internacional tanto de la sociedad civil como de los organismos internacionales, e incluso de los militantes de la misma causa de otros horizontes. En ese sentido Julio Mata Montiel explica:

> Bueno, uno de los objetivos que teníamos nosotros con el caso de Rosendo Radilla, no era Rosendo Radilla [en sí], sino llevar casos a la Comisión Interamericana, era el romper ese cerco. Primero el cerco informativo, por un lado nacional, pero por otro lado esa imagen que tiene el Estado mexicano de benefactor y de protector de los derechos humanos, de impulsor de la democracia de los derechos humanos. Cuando México da asilo al exilio español, al exilio de uruguayos, argentinos y todos estos. Y luego después de muchos años a nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, expone esa imagen, ¿sí? Pero al interior es otra la situación. Nosotros tuvimos que ir. Bueno nos tocó ir en algunos momentos a algunos eventos internacionales, a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua, a algunos lugares y no los dejaban denunciar que México violaba derechos humanos porque decían que pues el gobierno mexicano los apoyaba, los ayudaba y no podían morder, que entendiéramos pero no podían morder la mano del que les daba apoyo, ¿no? Entonces eso después de años nos llevó a que teníamos que hacer esa parte, llevar casos a la Comisión Interamericana, nos ayudaría romper esa parte. El

---

[157] El doble discurso llegaba a tal punto que, por ejemplo, la primera visita de la historia del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, las cuales se realizan únicamente a invitación expresa de los Estados miembros de la ONU, se realizó a México en 1982, apenas dos años después de su fundación. (Dulitzky, 2015, p. 7).

> caso Radilla nos ayuda mucho en ese sentido. (Entrevista, el 31 de enero del 2017).

En el mismo sentido, Jorge Humberto Gálvez de Eureka, argumenta que muchas de las tensiones que tuvieron con organizaciones homólogas de Centroamérica se debieron precisamente a la negativa de aceptar que en México también existían violencias de Estado y que una vez que organizaciones sudamericanas como las Madres de la Plaza de Mayo les reconocieron es que pudieron establecer una colaboración cordial:

> Sí y entonces empezaron a tener vínculos con FEDEFAM. Con FEDEFAM, bueno ahí hubo una lucha. No una lucha sino que los del sur y los centroamericanos no reconocían que aquí hubiera desaparecidos. Fue Laura Bonaparte, de las Madres de Plaza de Mayo, que ella lo dijo aquí en México, yo no voy a negociar mi visa por desconocer a las mexicanas, aquí hay desaparecidos en este país y aquí los tratan porque es la disidencia política y *raja*, *raja*, *raja*. Ella, aquí en México, lo dijo así *fun*, entonces ya empezó una relación muy cordial, muy cercana. Más con las suramericanas. (Entrevista, el 12 de enero del 2017).

Muchos y muchas de estas actrices y actores, se mantuvieron en la escena de lo político a lo largo de más de 40 años —vinculando el pasado, el presente y el futuro al igual que las *nornas*—, denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que han estado aparejadas con los diferentes gobiernos mexicanos. De esta manera, estos comités en un primer momento poco institucionalizados, auto-organizados, sin recursos externos, liderados principalmente por mujeres, sentaron las bases para la defensa de los derechos humanos en México y su vinculación con las causas políticas de la defensa de los derechos humanos a nivel continental, anticipándose una década a lo que sería la expansión de este tipo de organismos, tal como lo señalan Keck y Sikkink (2000):

> [L]a red internacional de derechos humanos que había surgido a mediados de los setentas no prestó atención al caso mexicano, ya que acaparaban su

> atención las violaciones cometidas en Centroamérica y en el Cono Sur, que eran más serias. México se mantenía fuera de la agenda de la red debido a su gobierno civil y electo, su postura progresista en cuanto a los derechos humanos internacionales (por ejemplo fue el puerto de refugio para los refugiados políticos del Chile de Pinochet, y más tarde fue un crítico firme frente a las violaciones a los derechos humanos en El Salvador) y a la ausencia de organizaciones mexicanas en pro de los derechos humanos. [...] Esta situación comenzó a cambiar a mediados del decenio de 1980, cuando la conciencia de los derechos humanos comenzó a penetrar en la sociedad civil mexicana. En 1984 sólo contaba con cuatro ONG en pro de los derechos humanos. Siete años después había 60. Para 1993 había más de 200[158] (Keck y Sikkink, 2000, p. 158-159).

Así, paradójicamente, los comités de familiares de víctimas de las violencias de Estado en México, a pesar de haber sido los primeros —en comparación con Chile y Argentina— en objetivar a mediados de la década de 1970 la figura del *desaparecido*, estos sujetos políticos no lograron posicionar su causa como legítima más allá de las fronteras nacionales. Debido principalmente a la relación de fuerzas con el doble discurso del Estado mexicano basado en la imagen que proyectaba hacia el exterior de "gobierno legítimo" y "en vías de la democracia". Éste por un lado recibía los exiliados políticos víctimas de las violencias de Estado en su propio país y mantenía un discurso de paz —muchos de los tratados de paz de Centroamérica habrían sido firmados en México (ver capítulo II, *supra*)—, mientras que al interior de las fronteras nacionales ejercía un feroz autoritarismo con la aplicación de las mismas

---

[158] Esto iba también acorde con el signo de los tiempos de implementación de la política de la economía neoliberal en el continente. Por ejemplo, el Informe Anual del Banco Mundial de 1991 propone entre las siete acciones prioritarias para aplicar el programa neoliberal, "la transferencia de la prestación de diversas funciones y servicios públicos a organismos no gubernamentales (ONG), actores más eficaces para promover la participación popular y la reducción de la pobreza" (Zibechi, 2013, p. 194-195). Al mismo tiempo que propone el concepto de gobernanza para regir las relaciones entre los gobiernos, las organizaciones sociales y las instituciones internacionales (Zibechi, 2013, p. 195). Esta directiva del Banco Mundial trajo consigo un despliegue de recursos de colaboración y como consecuencia una reproducción masiva de este tipo de organizaciones. Según los datos del mismo Banco Mundial, en América Latina se pasó de 15% de proyectos de colaboración con las ONG entre 1974-1989 a 50% en 1994 (Zibechi, 2013, p. 195).

técnicas de terrorismo de Estado que se utilizaban en las dictaduras del Cono Sur: vuelos de la muerte, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, etc.

SEGUNDA PARTE: NUEVOS ACTORES Y NUEVAS ESTRATEGIAS. LA CONSTITUCIÓN DE SUJETOS POLÍTICOS PROFESIONALIZADOS Y LA VINCULACIÓN CON LOS PROCESOS INTERNACIONALES

En la primera parte de este capítulo el objetivo fue identificar en qué momento y apartir de qué proceso se objetivizó la figura del detenido-desaparecido en México, así como la conformación en comités de los primeros sujetos políticos que surgieron para hacerle frente al autoritarismo y a las violencias de Estado. En esta segunda parte, el objetivo es analizar cómo a partir de la década de 1990 entraron en escena otros actores y actrices en la denuncia de las violencias de Estado, como por ejemplo los organismos de defensa de derechos humanos profesionalizados y con una perspectiva de internacionalización de las causas. Se analizará también el proceso de denuncia de las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua y cómo este proceso se objetivó a partir de otra figura de violencia ejercida hacia las mujeres, el *feminicidio.*

4.5 Los organismos de derechos humanos y su profesionalización, un nuevo sujeto político en torno a las desapariciones forzadas

El sismo del 19 de septiembre de 1985 marcó un hito en el proceso de constitución de las organizaciones de la sociedad civil en México. Es a partir de este evento fundador que se data el nacimiento de la sociedad civil organizada en el país. Antes del sismo, ya existían aproximadamente 3000 organismos no gubernamentales repartidos en el territorio nacional, los cuales estaban principalmente vinculados a comunidades eclesiásticas y de beneficencia. Sin embargo, el fenómeno no era visible y estaba confinado únicamente a comunidades de interés (Verduzco, 2001), las cuales muy rara vez reivindicaban acciones de orden político (M. F. Somuano, 2010). De hecho,

los antecedentes de orden político los encontramos en los Comités de familiares en defensa de las violencias de Estado durante la Guerra Sucia (López Pacheco, 2015, p. 98), los cuales fueron mencionados más arriba. Por el contrario, en la década de 1980, el 52% de las organizaciones formalmente constituidas estuvieron vinculadas al activismo político (López Pacheco, 2015, p. 98).

En cuanto a la defensa de los derechos humanos, los primeros dos organismos se crearon en 1984[159], pero es hasta la década de 1990 que se consolidaron como organizaciones de defensa de derechos humanos. Casi desde el principio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) orientaron su acción a litigios estratégicos y con ello comenzó un proceso de profesionalización y desarrollo de una *expertise* propia a las organizaciones de defensa de derechos humanos (Hincapié Jiménez y López Pacheco, 2016, p. 31). La estrategia sería mirar hacia los

---

[159] En cuanto a la defensa de los derechos humanos, los primeros dos organismos que se crearon en 1984 fueron la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, marcando desde el primer momento una distinción entre las organizaciones seculares vinculadas a las universidades y las eclesiásticas. Hacia finales de la década, se crearon el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) (1988) vinculado a la compañía de Jesús y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) (1989) que no estaba vinculada con ninguna iglesia. A nivel regional, también de la Compañía de Jesús, en 1989 se creó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. En 1994 se creó en Guerrero el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Todos estos centros hasta la actualidad son icónicos en la defensa y promoción de los derechos humanos a nivel nacional y regional. En 1991, a iniciativa del Centro PRODH, de la CMDPDH, del Fray Francisco de Victoria, se creó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) que vincula a todos estos centros. Los jesuitas también crearon diversos centros de defensa de derechos humanos en todo el territorio nacional para poder llegar a las comunidades alejadas del centro del país (López Pacheco, 2015, p. 99). Así, desde 1993 en el norte del país, como por ejemplo, en Nuevo León, Jalisco y Guanajuato se crearon: el Centro de Reflexión y Acción Laboral (1993), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (1993), Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (1993), Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos (1996), entre otros. Su objetivo era realizar una labor de acompañamiento de las víctimas, en particular a presos políticos, víctimas de tortura, etc. (Hincapié Jiménez y López Pacheco, 2016, p. 30).

organismos internacionales para la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en México, algo en lo que en la década precedente los comités de familiares no habían puesto el énfasis. Luego del levantamiento armado zapatista, y en parte gracias a la simpatía y solidaridad que el movimiento despertó a nivel internacional, lo que facilitó crear nuevas redes trasnacionales, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)[160] llevaría casos de las múltiples violaciones a los derechos humanos a los organismos internacionales. En 1994, la Red TDT participó en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington donde presentó un informe sobre Chiapas. El mismo año, en Ginebra, hicieron la misma denuncia ante el pleno de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Hincapié Jiménez y López Pacheco, 2016, p. 30).

El hecho de haber tenido derecho de hacerse escuchar en los organismos internacionales le dio legitimidad a las causas en sí mismas y a la voz de las y los querellantes. Antes de esto, en el país, sus reclamos eran minimizados producto de la criminalización que se hacía de las propias víctimas, y solo el "sentir" de las madres, el "pesar" que implicaban las injusticias sobre ellas había logrado colocar su causa en la arena pública. Es gracias a que las instancias más institucionalizadas de defensa de derechos humanos tomaron las causas como propias, poniendo de por medio una *expertise* profesional particular, que éstas comenzaron a hacerse de un lugar en la

---

[160] En 1991 cuando fue creada esta red, no había tomado en consideración el lenguaje incluyente en su nombre y se llamaba únicamente "Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos", excluyendo la palabra "todas". Es a partir de las consideraciones de las luchas feministas que esta palabra fue incluida. La red en 2018 está conformada por 84 organizaciones de 23 estados de la República Mexicana. Ver: https://redtdt.org.mx/. (Última consulta, 1 de mayo del 2018).

arena pública más allá de las comunidades de interés[161]. En ese sentido, Gaïti e Israël (2003)[162], en la línea de los estudios de *cause lawyering* (Sarat y Scheingold, 2006), sostienen que el hecho de que las causas sean retomadas por el campo del derecho abre nuevos campos de competencias sociales a los juristas, pero que al mismo tiempo favorecen a los movimientos sociales que reivindican causas particulares:

> [U]no de los puntos a destacar del análisis de *cause lawyering*, se debe probablemente a la creencia fundamental, propia de los juristas, de las capacidades del derecho (y de las profesiones que tienen el monopolio de su manejo) para ordenar el mundo social, para denunciar las injusticias y proponer su reforma. El *cause lawyering* se convierte en este aspecto en un reclamo de expansión del área de jurisdicción del derecho y de los juristas. En ese sentido se inscribe en las configuraciones de competencia renovadas con otros portadores de la causa, que son no solamente los dirigentes de organizaciones políticas, partidistas o asociativas, sino también otros expertos comprometidos con la causa. Decir que la causa se convierte en la del derecho, permite encontrar aquí el doble cuestionamiento que se ha seguido: lo que el derecho le hace a la causa por un lado, y se trata de volver a las condiciones de participación y la expresión del descontento que favorece; pero igual e indisociablemente lo que hace la causa le hace al derecho, y se trata de analizar la apertura de nuevos campos de competencias sociales que se abren a

---

[161] Karina Ansolabehere y Luis Daniel Vázquez Valencia reflexionan por ejemplo, ¿cómo es que las personas que no han sido víctimas de violaciones de derechos humanos se convierten en defensores o defensoras? Los autores argumentan que generalmente, en el estudio de estos fenómenos se centra la atención en los procesos de los movimientos sociales y que se deja de lado a los actores mismos, en este caso a las y los defensores. En ese sentido, los autores exploran la construcción identitaria de las y los defensores de derechos humanos en México. En el cual identifican un proceso de tres rasgos: "la formación de intuiciones iniciales de justicia que los lleva a rechazar situaciones de inequidad social y abusos de autoridad; un momento de ruptura que los lleva a dedicarse a la defensa de derechos humanos como opción de vida; y un proceso de consolidación como activista de derechos humanos" (Ansolabehere y Vázquez, 2017, p. 517).

[162] Agradezco a Ludivine Tomasso la sugerencia de esta lectura.

> los juristas y las transformaciones de las prácticas y las instituciones que provoca(Gaïti e Israël, 2003, p. 30.Traducción personal)[163].

En ese sentido y de acuerdo con Gaïti e Israël (2003), en lo que concierne concretamente a las desapariciones forzadas, si en la legislación nacional este crimen como tal no era reconocido, el hecho de que estas denuncias hayan sido retomadas por estos nuevos actores y llevadas al ámbito internacional, permitió legitimar tanto a nivel nacional como internacional la voz de las víctimas ante actores de organismos multilaterales. Así, en noviembre de 1994 la CIDH recibió la denuncia contra el Estado Mexicano sobre su presunta responsabilidad en el ataque perpetrado por agentes del Estado contra pobladores tzeltales del Ejido Morelia en Chiapas, desapareciendo y posteriormente asesinando a 3 de sus pobladores, Severiano y Hermelindo Santiz Gómez, y Sebastián Santiz López.

De acuerdo con Hincapié Jiménez y López Pacheco (2015, 2016), el hecho de que las organizaciones de defensa de derechos humanos se hubieran profesionalizado, las habilidades de movilización y de presión ante los órganos de gobierno también se fortalecieron. De esta manera, las estrategias jurídicas de denuncia tanto en el plano nacional como internacional se favorecieron de un nivel de especialización mayor que permitió una mejor documentación de los casos y del *análisis de contexto* (Hincapié

---

[163] En el mismo sentido, Virginia Vecchioli (2009) a partir de un marco teórico bourdieusiano estudia cómo el conocimiento experto en el campo de los derechos humanos en Argentina se profesionalizó a lo largo de los años. La autora sostiene que tanto la causa del derecho, como la causa militante, requieren cada vez más de un saber especializado que solicita además el manejo de competencias profesionales y técnicas que se han ido transformando en paralelo al espacio social de su práctica. En ese sentido, la autora traza un recorrido de los perfiles de los primeros abogados de los años 1960 – 1970, hasta las últimas generaciones que ejercen su profesión ya en democracia y que fundan su legitimidad en la obtención de diplomas especializados en derecho internacional de los derechos humanos. Estos diplomas son obtenidos principalmente en universidades norteamericanas, los cuales requieren la realización de pasantías en ONG transnacionales o en organismos interestatales como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA o incluso el Tribunal Penal Internacional. Esta nueva profesionalización requiere que desarrollen su expertise en un triple posicionamiento: académico, burocrático y de activismo transnacional (Vecchioli, 2009).

Jiménez y López Pacheco, 2016, p. 31; López Pacheco, 2015, p. 100). Por ejemplo, para 1994 ningún caso de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Sucia había sido llevado a ningún organismo internacional, sin embargo, aquellos que fueron cometidos en el contexto del levantamiento armado zapatista, el mismo año de los sucesos, ya habían sido escuchados en varias instancias internacionales. Esto se debe sin duda, a la difusión y acogida que el movimiento tuvo a nivel internacional, pero también a la *expertise* movilizada en este caso considerado "paradigmático".

En este caso, por ejemplo, como parte del *dispositivo desaparecedor* (Calveiro, 1998), el Estado Mexicano llegó a negar incluso la existencia de los tres tzeltales desaparecidos y asesinados por los agentes del ejército alegando que no tenían registro de actas de nacimiento ni de defunción. Fue gracias a la legitimidad de los organismos de derechos humanos y a la documentación especializada que se hizo del caso, que la CIDH asentó que ese argumento no era sostenible debido al análisis socioeconómico de la zona donde el registro de nacimiento y/o defunción, es poco factible de llevarse a cabo (CIDH, 1998; M. Gómez, 2015; Proceso, 1998)[164]. Finalmente, el caso no pasó a la Corte, pero la Comisión emitió una serie de recomendaciones, lo que sentó un precedente en sí mismo para las causas que vendrían detrás. Entre las recomendaciones estaban: realizar una investigación rápida

[164] El apartado 35 del Informe No. 48/97 del Caso 11.411 de la CIDH sobre el caso del ejido Morelia, a la letra dice: "En lo que respecta a la afirmación dada por México en el sentido que los supuestos agraviados pudieran encontrarse vivos de haber existido, puesto que en la dirección del Registro Civil del Estado de Chiapas no se cuenta con antecedentes del nacimiento y fallecimiento de los quejosos, la Comisión debe expresar que el argumento no es del todo sostenible, pues si bien dichos registros son la documental probatoria por excelencia del nacimiento o defunción de una persona, la inexistencia de las mismas no puede tener el valor único de plena prueba para desconocer que éstas existan o hayan dejado de existir, pues habría que analizar los hechos en cada caso en concreto para poder llegar a una conclusión certera. En efecto, cuando se analiza el contexto socioeconómico de la zona en la cual ocurrieron los hechos, se entiende el porqué en muchos casos el registro de nacimientos y defunciones es una realidad ilusoria poco factible de cumplir" (CIDH, 1998).

e imparcial a cargo de un fiscal especial; ejercer las acciones penales con la finalidad de ejercer un procedimiento judicial a los responsables; reparar a los familiares de las víctimas, incluyendo una indemnización adecuada; adoptar las medidas necesarias constitucionalmente con la finalidad de hacer efectivas las garantías judiciales y de protección judicial; etc. (Proceso, 1998).

A partir de aquí, los organismos de defensa de derechos humanos tomaron un rol mayor en el acompañamiento a colectivos de familiares y/o grupos de base en torno a las desapariciones forzadas como fue el caso de la masacre de Aguas Blancas en Guerrero, el cual era llevado por la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Estos centros de derechos humanos llegaron incluso a tener una voz protagónica en la imagen pública del manejo de los casos, poniendo el énfasis en la judicialización en vistas de alcanzar un acceso a la justicia. Incluso, los miembros de los comités de familiares de víctimas de las violencias de Estado durante la Guerra Sucia se acercaron a éstos con miras a llevar sus casos a los organismos internacionales. Tal como fue el caso de Rosendo Radilla Pacheco, retomado por la CMDPDH, para acompañar a AFADEM-FEDEFAM y a la familia Radilla en este proceso, el cual fue extremadamente largo[165], pero que al final concluyó con una sentencia resolutiva que incrimina al Estado mexicano. En palabras de Julio Mata Montiel:

> Nosotros como ya habíamos definido ir a una instancia internacional, ya nada más queríamos, estábamos presentando denuncias para que nos pusieran el sello de aceptado y llenar los trámites jurídicos nacionales. Empezamos a pedir los trámites a la Comisión Interamericana, para esto no conocíamos a nadie que llevara casos en ese sentido y yo conocía la Comisión Mexicana

[165] Luego de varios años de documentación y de recuperación de pruebas, el caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 15 de noviembre del 2001. El informe de admisibilidad fue emitido el 12 de octubre del 2005 y el informe de fondo fue emitido el 27 de julio del 2007. El 13 de marzo de 2008 el caso fue finalmente remitido a la Corte y la audiencia se celebró el 7 de julio del 2009. La resolución definitiva llegó en noviembre del 2009 (CIDH, 2009).

> [CMDPDH]. Por azar también me toca ir a la ONU, a Ginebra y allá conozco a Marieclaire Acosta. Allá FEDEFAM cita a Marieclaire Acosta para platicar con nosotros. FEDEFAM, AFADEM —todavía éramos CNI— y la Comisión Mexicana y este, y ahí empezamos a trabajar. No quería nadie, todavía estábamos en ese periodo en el que nadie quería trabajar con nosotros por la fama que veníamos arrastrando. Decían las organizaciones de derechos humanos que teníamos un historial negro, qué teníamos relaciones obscuras con grupos armados, porque los familiares pues eran, eran familiares de guerrilleros supuestamente ellos (Entrevista, el 31 de enero del 2017).

Sin embargo, el optar por la vía del litigio estratégico, no estuvo exento de tensiones al interior de los colectivos, debido a que era difícil convencer a los y las *dolientes*, que primaba un interés estratégico sobre un interés particular de buscar justicia por su familiar. En ese sentido Julio Mata, sostiene:

> La Comisión Mexicana nos decía que era muy difícil que la Corte, que la Comisión, pudiera meter más de un caso porque no tenían presupuesto, no tenían abogados, la Comisión [CMDPDH] tampoco lo tenía y además ellos tenían un programa que se llamaba algo así como litigio estratégico y dentro de ese programa de litigio estratégico nada más querían llevar un solo caso, ¿no? Entonces nosotros, yo en esa época estaba muy contrariado, porque para mí era muy complejo decirle a toda la gente, ¿cómo le hacemos, un volado? Sí nos metimos en muchos problemas allá en Atoyac para decirle a la gente, no es nada más un caso, ¿cuál es el importante? ¿Cuál es el que nos puede dar el plus, no? Y yo ya vivía allá con la gente, ¿no? Entonces, y hacíamos a veces reuniones diario, cada tercer día, yo iba a las comunidades, Tita y yo íbamos a las comunidades, subíamos, bajábamos (Entrevista, el 31 de enero del 2017).

Además de lo expresado por Julio Mata Montiel, como los procesos de la CIDH son largos, costosos y desgastantes, se requería de un caso que pudiera ser muy bien documentado, en el cual las y los familiares estuvieran dispuestos a mantener el ritmo, someterse a la presión por parte del Estado y que no declinaran hacia un convenio con el gobierno a medio proceso. De acuerdo con Julio Mata Montiel:

> [...] Pues empezamos a ver ahí en el interior, empezamos a poner filtros, ¿cuáles eran los compañeros que realmente tenían el compromiso? ¿No? ¿Cuáles eran los compañeros que tenían más documentación, o más

> documentado su caso? ¿Cuáles eran los compañeros que no nos iban a traicionar en un momento determinado, que no iban a negociar con el gobierno mexicano? [...] El de Rosendo era el que estaba mayormente documentado. No estaba documentado, tenía mucho material para documentar. Además había sido presidente municipal, además teníamos contacto con todas las hijas y el hijo (Entrevista, el 31 de enero del 2017).

Es así que los colectivos de familiares, menos especializados en un primer momento —en el periodo de la llamada Guerra Contra el Narcotráfico, será otra cosa—, se vincularon con estos centros de defensa y promoción de derechos humanos que nacieron profesionalizados y con una visión hacia la internacionalización de sus causas defendidas, los cuales trabajarían en red y muchos de sus miembros circularían entre las organizaciones como fuente de empleo. Además, con la profesionalización y *expertise* de la defensa de *causa*, surgirán otras áreas de especialización vinculadas con la labor propia de los centros como es el acompañamiento psicosocial de las víctimas (Correa, 2017; Moscoso, 2017) o incluso otros que son propios a todo el sector de las organizaciones de la sociedad civil como son las y los especialistas en la colecta de fondos para poder mantenerse como organización. Es así que los centros de defensa de derechos humanos, y sus abogadas y abogados especializados, se vincularon como sujetos políticos en sí mismos en torno a las desapariciones forzadas en México y se mantendrían presentes en la escena pública —y cada vez con más presencia— en la defensa de las víctimas ante estos crímenes.

4.6 El *feminicidio* como causa: los asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua durante la década de 1990

En México, a principios de la década de 1990, para el común, la desaparición forzada seguía siendo asimilada a la figura del detenido-desaparecido. Es decir, se consideraba una desaparición forzada solo si ésta había sido ejecutada por motivos políticos y por agentes del Estado en sus funciones de agentes de Estado. No había en el país legislación al respecto. Por su parte, en el derecho internacional la legislación

en cuanto a estos crímenes era incipiente a pesar de la visibilidad que muchos de los sujetos políticos ya habían adquirido en estas reivindicaciones como las Madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo.

La primera sentencia en cuanto a las desapariciones forzadas en el marco de las *guerras sucias* la emitió en 1988 la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Velásquez Rodríguez contra Honduras (ver capítulo I, *supra*), esta fue la primera vez que se creó jurisprudencia en el derecho internacional en ese sentido (CIDH, 2015; Duhaime, 2017). En 1992 se aprobó la Declaración de la Organización Estados Americanos sobre la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas. Luego, en 1994 se adoptó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En 1997 se adoptó el Estatuto de Roma, en éste, las desapariciones forzadas son consideradas crímenes de lesa humanidad cuando se ejecutan de manera sistemática contra civiles. Finalmente, en 2006 se adoptó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIDH, 2015; Duhaime, 2017) [166].

Por lo mismo, cuando en Ciudad Juárez, a principios de la década de 1990 comenzaron a desaparecer y asesinar mujeres, el fenómeno de lo que estaba ocurriendo no fue relacionado con la categoría de las desapariciones forzadas.

---

[166] México ratificó todos estos instrumentos, aunque en algunos casos se guardó algunas reservas. Por ejemplo, en cuanto a la Convención de la OEA de 1994, al momento de la ratificación en 2002, El Estado Mexicano interpuso una reserva al artículo 9 que permitía investigar y sancionar delitos de desaparición forzada en la jurisdicción militar. Dicha reserva fue retirada en febrero del 2014. En cuanto a la Convención de la ONU de 2006, el país interpuso una reserva al artículo 31, el cual estipula que el país signatario reconoce la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada "para recibir y examinar comunicaciones de o en nombre de las personas sujetas a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de violaciones por el Estado de las disposiciones de la Convención". En mayo del 2018 esa reserva aún no ha sido retirada a pesar de que colectivos de familiares y organismos de derechos humanos, así como la ONU-Derechos Humanos le han urgido a que lo haga. Ver: http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=688:comite-contra-las-desapariciones-forzadas&Itemid=269 (Última consulta: 3 de mayo del 2018).

Efectivamente, tan solo entre 1993 y 2008 más de 400 mujeres habrían sido asesinadas y más de 600 estaban en condición de desaparecidas (Segato, 2013, p. 2)[167]. Para 1993 cuando las primeras mujeres comenzaron a desaparecer y luego algunos de sus cuerpos fueron encontrados con signos de tortura en las inmediaciones de Ciudad Juárez, los pocos instrumentos en el derecho internacional existentes hubieran permitido vincular lo que estaba sucediendo en la ciudad con la figura de la desaparición forzada, ya que en los hechos estos crímenes contaban con todas las características de éstas definidas en la Declaración de 1992 y la Convención de 1994 de la OEA. En este caso, las víctimas principalmente eran mujeres y los crímenes estaban indiscutiblemente vinculados con una cuestión de género. Sin embargo, en ninguno de estos dos instrumentos se hacía referencia a grupos en condiciones particulares de vulnerabilidad como son los infantes, la desaparición en migración o las mujeres. Es tal vez por ello que la *causa* se enfocó más hacia reivindicar y legislar en torno a un concepto que fue creado por Marcela Lagarde para denunciar expresamente lo que pasaba en Ciudad Juárez. El concepto de *feminicidio* —el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer en el marco de una violencia sistémica hacia la mujer[168]—, de espectro más amplio, permitía salir del marco de Ciudad Juárez y aplicarse a las muertes violentas de las mujeres en general, más que al fenómeno de la desaparición que en ese momento, como fenómeno, estaba solamente circunscrito a una sola ciudad y no había un fuerte movimiento social detrás para denunciarlo.

---

[167] A pesar de que había más mujeres desaparecidas que asesinadas, la prensa, los órganos de gobierno e incluso los grupos de interés se referían más al fenómeno como "las muertas de Juárez" que las desaparecidas y/o las muertas y desaparecidas de Juárez.

[168] Para una revisión del concepto de feminicidio y su debate ver: (Devineau, 2012; Solyszko Gomes, 2013).

Ciudad Juárez, Chihuahua era una población con millón y medio de habitantes donde gracias a la movilización y denuncia de organismos de defensa de derechos se habían dado a conocer los crímenes cometidos contra mujeres a nivel nacional e internacional, vinculándolas con su trabajo en las maquiladoras. Sin embargo, en cuanto a los asesinatos violentos de mujeres —no así de las desapariciones—, el fenómeno no era exclusivo de la ciudad. El estado de Chihuahua en 2004 ocupaba el sexto lugar de denuncias de homicidios violentos contra mujeres y niñas. En palabras de Marcela Lagarde, académica y diputada federal (2003-2006) que llevó la causa al Congreso para legislar, afirma en ese sentido:

> En primer lugar, averiguamos que en México no sólo hay crímenes violentos contra mujeres en Ciudad Juárez, sino que también los hay en otras ciudades del país. [...] En todas partes a mí me preguntan por qué matan mujeres en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es un municipio de un millón y medio de habitantes, forma parte del estado de Chihuahua. En el año 2004, todo el estado de Chihuahua ocupó el sexto lugar en el país en cuanto a la tasa de homicidios de niñas y mujeres, es decir, cada 100 mil habitantes mujeres. [...] Sí, la primera en caerse de espaldas fui yo porque no sabía que en otros lugares del país la tasa [de asesinatos] era mucho más alta que en Ciudad Juárez, pero como no había protesta, no había familiares organizados, no había un movimiento que acompañase la tragedia, nadie lo sabía. En realidad, encontramos que no era tan excepcional y tan raro lo que pasaba en Juárez. Había corrido mucha tinta para explicar los crímenes contra mujeres de forma criminalística, pero se había hecho poco análisis social. Como comisión especial para investigar el feminicidio en México fuimos a buscar las causas y encontramos cosas muy interesantes: que en las regiones donde hay crímenes contra mujeres hay otras formas de violencia contra las mujeres que están presentes en la vida social, de forma constante, tolerada socialmente y por las autoridades, que crean un clima de impunidad. Las mujeres denuncian un clima violento contra ellas, las autoridades no responden y las mujeres quedan en mayor riesgo (Marcela Lagarde en entrevista con Carbajal, 2007).

De esta manera, el hecho de que hubiera habido una movilización local, que pudo establecer alianzas con figuras emblemáticas del movimiento feminista, las cuales tomaron la causa como propia —lo que en la teoría de movilización de recursos serían los *emprendedores de causa* (McAdam *et al.*, 1996; McCarthy y Zald, 1977)—,

como Marcela Lagarde por ejemplo, es que se pudo lograr la *subida en generalidad* en esta coyuntura. En ese sentido, en el caso concreto de los *feminicidios* en Ciudad Juárez, Chiara Calzolaio[169] (2012) analiza las disputas de actores y actrices no estatales en cuanto a la puesta en marcha de políticas públicas. Calzolaio afirma que la articulación de luchas feministas que se dio a partir de los años 1980, respaldada por organismos internacionales como la ONU, permitieron la institucionalización de un lenguaje común sobre la perspectiva de género y con ello la manera de aprehender las violencias machistas hacia las mujeres. En ese contexto internacional fue que pudo crearse el *referencial* (Muller, 2010)[170] del feminismo y asociarlo a la categoría sociológica y jurídica del *feminicidio*.

En México en particular, las luchas feministas se articularon al mismo *referencial* que las luchas feministas internacionales para tratar de traducir en políticas públicas sus demandas y en ese sentido, el hecho de que una académica feminista —Marcela Lagarde—, haya formado parte de la cámara de diputados en 2003, fue determinante para que se creara una comisión parlamentaria especializada en *feminicidios*, que contribuyó enfáticamente a que en 2006 se aprobara la "Ley general de acceso de las

---

[169] Agradezco a Anahi Morales Hudon la sugerencia de este texto.

[170] El concepto de *referencial* creado en el marco de los estudios sobre políticas públicas por Bruno Jobert y Pierre Muller (Ver: Muller, 2010), se refiere a un sistema de representación común al conjunto de políticas públicas, en su caso de estudio, Francia. El referencial se comprende como una visión del mundo compartida en la cual los actores y las actrices conciben los problemas y elaboran las soluciones. De acuerdo con Hassenteufel (2011), el concepto se inspira del concepto gramsciano de ideología. El concepto de referencial entonces se relaciona con la interconexión de un conjunto de valores y normas promovidas por actores clave en las políticas públicas sectoriales. La función del referencial es de decodificar los fenómenos observados a partir de marcos cognitivos y una función de recodificación que permite construir modelos normativos de acción concreta (Hassenteufel, 2011, p. 120-121). De esta manera, le proceso de construcción de un referencial es al mismo tiempo un discurso (producción de significado) y una toma de poder (estructuración de un campo de fuerza) (Hassenteufel, 2011, p. 121).

mujeres a una vida libre de violencia"[171]. Chihuahua, el estado donde había un fuerte movimiento social para denunciar feminicidios en el país y donde más movilizaciones había al respecto, fue en consecuencia el primer Estado de la república —a finales del mismo año— en votar una ley contra la violencia hacia las mujeres y que retoma muchos elementos de la ley federal. Calzolaio concluye que una confluencia de actrices estratégicas, las movilizaciones sociales, los reportes de expertos y expertas y las recomendaciones de organismos internacionales contribuyeron a un cambio en las políticas y en la actitud de las instituciones a nivel local para que el *feminicidio* fuera reconocido como un problema público —y esto a pesar de que las políticas que se implementaron no lograron incorporar la perspectiva de género como hubiera sido deseado y reprodujeron algunas representaciones de lo que es una "buena" feminidad—(Calzolaio, 2012, p. 76)[172].

---

[171] Sin embargo, sin bases sociales o un *referencial* más amplio, el hecho de acceder a roles de Estado o mismo a un escaño en el Congreso, no necesariamente significa lograr atraer a su *causa* una mayoría de voces. En México por las razones que fueron desarrolladas en parágrafos más arriba, en esta época no se había logrado establecer una *subida en generalidad* en torno a la denuncia de las desapariciones forzadas. Por lo mismo, aunque hubiera actrices y actores en órganos decisionales, no se logró que se legislará a nivel nacional sobre estos crímenes. Por ejemplo, Rosario Ibarra fue también diputada federal y senadora, y a pesar de haber promovido iniciativas de ley a escala federal y regional para prevenir y sancionar la desaparición forzada éstas nunca prosperaron (Proceso, 2000a). Lo más que logró fue en el año 2000 una adición al Código Penal del Distrito Federal que preveía penas de 15 a 40 años de prisión a servidores públicos del Distrito Federal que incurrieran en desapariciones forzadas (Amnistía Internacioal, 2000; Cámara de diputados, 2000). De igual manera, otras víctimas de las violencias de Estado como Abdallán Cruz Guzmán, exguerrillero, él mismo expreso político y que además cinco miembros de su familia fueron desaparecidos durante la Guerra Sucia (Guzmán Cruz y Pimentel Ramírez, 2011), también logró acceder a roles de agente de Estado. De 2003 a 2006 fue diputado federal por el distrito de Zacapu en la LIX Legislatura. En ese marco, promovió la iniciativa de "Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas y reformar los artículo del Código Penal Federal referidos a este delito" (Gaceta del Senado, 2010), la cual tampoco logró que fuera aprobada.

[172] Las luchas feministas a lo largo de varias décadas han logrado colocar sus reivindicaciones e incorporar la perspectiva de género en diferentes agendas, tal vez es de hecho el ejemplo más representativo de la disputa por lo público en la reivindicación de reconocimientos específicos. Existen varios ejemplos de políticas públicas especializadas o medidas específicas, sin que esto signifique

En ese sentido, dado que las luchas feministas habían logrado crear un *referencial* de acción pública, y dado que el foco de las agresiones en Ciudad Juárez eran las mujeres es que las y los *sujetos políticos* que surgieron en este contexto se configuraron en torno a las agresiones con una perspectiva de género y no únicamente en torno al dispositivo de la *desaparición forzada* como tal. Sin embargo, lo que visibilizó este movimiento en Ciudad Juárez a principios de la década de 1990 sería el preludio de lo que se potenciaría en el país casi dos décadas después, salvo que en la actualidad no solo serán las mujeres el flanco de ataque sino todos los grupos de población en situación de marginación.

En cuanto a la denuncia de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, en 1994 se creó la primera coalición de organizaciones para denunciar las desapariciones y asesinatos de mujeres, la Coordinadora en Pro de los Derechos de la Mujer (CPDM)[173], que le daría visibilidad nacional e internacional a los casos. Ésta se mantendrá activa durante los primeros años de su creación, pero hacia finales de la década de 1990 perdería fuerza (Pérez García, 2005). En 2001, luego del hallazgo de ocho cuerpos de mujeres, la CPDM se reactivaría, al mismo tiempo que surgirían las organizaciones de familiares de las víctimas, principalmente de madres. Efectivamente, pesar de que las desapariciones y asesinatos ocurrían desde los primeros años de la década de 1990, el primer colectivo conformado por familiares de

---

necesariamente un logro en cuanto a las prácticas. Para un análisis de la institucionalización de los movimientos feministas en México, ver: (Lang, 2003) (Carmona, 2015).

[173] Ésta estaba conformada por las organizaciones siguientes: "Comité Independiente de los Derechos Humanos de Chihuahua (CICH), Centro de Orientación de la Mujer Obrera (COMO), Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC), Organización Popular Independiente (OPI), Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO), Compañeros, Mujeres por Juárez, 8 de Marzo, Asociación de Trabajadores Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC), Comité de Lucha contra la Violencia, Centro de Estudios y Taller Laboral A.C. (CETLAC), Tonanzin, Voces sin Eco y Red de Mujeres" (Pérez García, 2005, p. 149).

las víctimas se llamó "Voces sin eco" y estuvo activo de 1998 a 2002. Los primeros años de la década de los 2000 fue cuando surgieron la mayoría de colectivos de familiares. En 2001 se creó el organismo "Nuestras hijas de regreso a casa", liderado entre otras por Norma Andrade[174], este es uno de los colectivos que tendría mayor visibilidad tanto a nivel nacional como internacional[175]. En el mismo 2002 surgió "Justicia para nuestras hijas" un organismo conformado principalmente por madres que buscaban llevar su caso ante la justicia. En 2003, "Integración de madres por Juárez" vio la luz también. Estos colectivos de familiares también se afrontaron a las mismas negativas del Estado a reconocerlas como víctimas, al igual que pasó con las víctimas de las violencias políticas de la década anterior. Por una parte, criminalizando a sus hijas en un primer momento al asociarlas indefectiblemente al comercio sexual o al tráfico de estupefacientes y, por otra parte, afrontando una burocracia del aparato estatal, principalmente de las procuradurías, que las revictimizaba (Pérez García, 2005).

En cuanto a los conflictos, la dinámica entre colectivos no fue diferente a la de aquellos conformados para denunciar las violencias políticas durante la Guerra Sucia

---

[174] La hija de Norma Andrade, Lilia Alejandra García Andrade desapareció el 14 de febrero de 2001 cuando tenía 17 años. Una semana después, el 21 de febrero, su cuerpo fue localizado con signos de torturas y de violación. Norma Andrade desde entonces se dedicó al activismo para denunciar las agresiones en Ciudad Juárez. Ella y su familia han sido amenazadas en diversas ocasiones. Norma ha sobrevivido a dos atentados. El primero en Ciudad Juárez donde fue herida de bala y el segundo en 2012 en la Ciudad de México donde fue atacada con una navaja en el rostro que le dejó una cicatriz permanente. Aún así, Norma continúa reclamando el regreso de "las hijas a su casa". En 2015, el caso de Lilia Alejandra ya fue aceptado por la CIDH y en mayo del 2018 continúa en el proceso para ser turnado a la Corte Interamericana. Ver: (Mayorga, 2015).

[175] En 2003, el gobierno de Francia les otorgó el premio Libertad-Igualdad-Fraternidad 2003, "por su destacada lucha en defensa de los derechos humanos de las víctimas de desapariciones y homicidios contra mujeres y sus familias" (Pérez García, 2005, p. 154).

—ni de aquellos de la actualidad, de hecho—. Por las dinámicas internas propias de la disputa por lo político, pero también por las externalidades que venían muchas de las veces orquestadas por el propio aparato estatal apostando por el desgaste. Por ejemplo, en 2003 supuestamente miembros del colectivo "Nuestras hijas de regreso a casa" interpusieron una demanda penal contra las dirigentes de la organización por un supuesto desvío de fondos que vendrían del extranjero para apoyo de la organización, en un momento en el cual el organismo aún no recibía fondos del extranjero (Proceso, 2003a). Esta demanda que fue atendida por la fiscalía con una premura inhabitual, llevó a un proceso jurídico en el cual la culpabilidad de las imputadas nunca pudo ser demostrada, pero sí les distrajo de sus actividades de reclamo de justicia mientras atendían el proceso judicial (Proceso, 2003a). De igual manera, muchas de las activistas de los diferentes colectivos también fueron hostigadas y amenazadas en diversas ocasiones, sometiendo a algunas a ser víctimas de desplazamiento forzado por su seguridad (Proceso, 2003a)[176].

Sin embargo, estos desafíos no impidieron que los comités de familiares se mantuvieran en la arena pública, se fortalecieran e incluso que establecieran alianzas estratégicas. Por ejemplo, en noviembre de 2001 fueron encontrados en las inmediaciones del Campo Algodonero de Ciudad Juárez, los cuerpos de tres mujeres que habían desaparecido entre septiembre y octubre del 2001, dos de entre ellas eran menores de edad, Claudia Ivette González (20 años), Esmeralda Herrera Monreal (15 años) y Laura Berenice Ramos Monárrez (17 años). Sus cuerpos presentaban signos de violencia sexual y se determinó que las tres mujeres estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte. A pesar de que las denuncias habían sido interpuestas en tiempo y forma, los organismos correspondientes se habían limitado a levantar el

[176] Para un análisis controversial y a la vez crítico de las reconfiguraciones de los colectivos y los liderazgos que emergen en este proceso, ver: (Ravelo Blancas, 2004).

expediente sin ningún otro procedimiento para buscarles cuando se encontraban desaparecidas, ni para llevar ante la justicia a los responsables una vez que sus cuerpos habían sido encontrados (CIDH, 2009).

El trabajo en red de diversos organismos como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A. C., el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana; el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A. C., que fungieron como representantes, permitió levantar un expediente rápidamente sobre estos hechos para ser presentados ante la CIDH. Gracias a la *expertise* movilizada, el expediente fue documentado con alta eficacidad, en apenas tres meses después de que fueron hallados los cuerpos. En febrero de 2002, la CIDH ya había emitido un informe de admisibilidad. En marzo del mismo año, ya había aceptado la petición formal.

El informe de fondo por parte de la CIDH tardaría en llegar varios años puesto que éste fue emitido en marzo de 2007. La fecha de audiencia ante la Corte fue programada para noviembre del mismo año. El veredicto con la sentencia inculpatoria llegaría dos años después, en noviembre del 2009. Sin embargo, a pesar de la demora, y más allá del acceso a la justicia que representaba para las víctimas esta resolución, esta segunda sentencia condenatoria al Estado Mexicano —la primera sería la del caso Rosendo Radilla—, a nivel colectivo y en cuanto a jurisprudencia, representó un gran avance en particular en materia de género.

El Estado fue condenado por haber violentado los derechos que fueron ratificados por México en tratados internacionales, como son el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal. A la no discriminación, y de acceso a la justicia y protección judicial, así como las garantías de las niñas y los niños (Olivares Alonso, 2009). Pero además, en este caso, fue la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó como categoría transversal el análisis de género y también fue la

primera vez que se dio un debate sobre la justiciabilidad de la Convención de *Belem do Para* —Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer— que México había ratificado en 1998. En ese sentido, el caso del Campo Algodonero fue un hito en las resoluciones de la Corte ya que por primera vez sentenciaría sobre *feminicidio* (Ferrer Mac-Gregor, 2011).

Esta construcción de la *causa* no hubiera sido posible sin todo el trabajo previo de denuncia en torno al *feminicidio* que se hizo desde los colectivos de familiares, las organizaciones de la sociedad civil formalmente constituidas, los centros de defensa de derechos humanos, académicos y académicas y algunos agentes aliados en su función de Estado como el caso de las feministas que lograron teorizar, denunciar y acceder a escaños legislativos —Marcela Lagarde, por ejemplo—. Es decir, se puede afirmar que en torno a los asesinatos y desapariciones de las mujeres en Ciudad Juárez se logró formar una verdadera *coalición de causa*[177] (Sabatier, 2010) que logró una *subida en generalidad* (Boltanski y Thévenot, 1991) más allá de los grupos de interés.

---

[177] Este concepto, desarrollado por Sabatier (2010) se inscribe en el análisis de las interacciones entre actores (y actrices) y parte de dos postulados. El primero es que las políticas públicas —en este caso, las acciones colectivas orientadas a incidir en la acción pública del Estado— son el resultado de interacciones entre diversas coaliciones de actores y actrices. En ese sentido hay cuatro niveles de análisis: los actores y las actrices, las coaliciones de actores llamadas de causa (advocacy coalition), el subsistema de la política pública particular —en este caso el sistema judicial infra y supraestatal— y el "medio ambiente". Las coaliciones de causa entonces, están compuestas de actores públicos y privados que actúan de manera coordinada a mediano plazo (o incluso más) y actúan en torno a un problema público en el cual buscan orientar su contenido. El subsistema que crean presenta elementos de autonomización, particularmente la existencia de instituciones y actrices y actores específicos y especializados, así como una experiencia compartida. Finalmente, el "medio ambiente" está compuesto de parámetros estables (los valores dominantes, la estructura social y las reglas constitucionales) y de elementos coyunturales (contexto socioeconómico, el estado de la opinión pública, el impacto de las acciones de los actores y actrices en los otros subsistemas). El segundo postulado es que las coaliciones están estructuradas por sistemas de creencias (*belief systems*) que llevan a la defensa de las causas, por lo tanto tienen un fundamento principalmente cognitivo (Hassenteufel, 2011, p. 143-144).

Sin embargo, a pesar de la resolución de la Corte y de todos los esfuerzos movilizados por diferentes actrices y actores, los crímenes de Ciudad Juárez no cesaron, al contrario, al igual que en todo el país se exacerbaron en el contexto de la *Guerra contra el narcotráfico* (a partir del 2006). Además, México no ha cumplido a cabalidad la sentencia de la Corte[178] y la impunidad sigue reinando[179].

---

[178] En el marco de la publicación "Análisis y propuestas para el seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano: Campo Algodonero", la Red Mesa de Mujeres y del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, en 2010 pusieron en línea un sitio Web para informar sobre el proceso del caso y al mismo tiempo para monitorear el cumplimiento de la sentencia a través de una dinámica de semáforos. En octubre del 2018, la mayoría de las disposiciones no han sido cumplidas. Ver: http://www.campoalgodonero.org.mx/condena (Última consulta, 8 de octubre del 2018).

[179] La deshonestidad de los agentes del Estado Mexicano ante la Corte quedó de manifiesto desde las primeras audiencias. Por ejemplo, cuando transcurría la sesión del 18 de octubre del 2002 miembros de la delegación mexicana y particularmente el procurador y su asesor estaban grabando de manera oculta e ilegal la sesión, aún teniendo claro que el registro bajo cualquier medio audio y/o audio visual estaba prohibido. El presidente de la sesión, tuvo que parar la sesión y pedirles que entregaran el casete (Proceso, 2003a). El 24 de marzo del 2018 fueron detenidos tres exfuncionarios por el caso del Campo Algodonero, entre ellos estaba el exsubprocurador. Éstos fueron acusados de abuso de autoridad e imputaciones falsas dentro de las investigaciones efectuadas en 2001 en el marco del expediente de las víctimas que fueron ante la CoIDH. La orden de aprehensión fue ejecutada en cumplimiento de una de las disposiciones de la sentencia (Excélsior, 2018). De esta manera, es que técnicamente las desapariciones de estas tres mujeres sí podrían ser consideradas como desapariciones forzadas puesto que en el proceso de la desaparición —incluida la maraña burocrática— sí hubo participación de agentes del Estado, aunque esta fuere de manera indirecta.

Conclusión

Las *nornas* del pasado, como *valquirias* que son, desde los primeros años en que se ejercieron las violencias de Estado en el marco de las guerras sucias, decidieron organizarse para el rescate de quienes no podían hacerlo por ellas y ellos mismos. Como colectivos tomaron muchas precauciones para no ser infiltrados por el poder del Estado y esto como la mayoría de fenómenos asociados con la desaparición forzada devino en una paradoja (Gatti, 2011). Por un lado, esta distancia con los poderes formales y de facto en algunas coyunturas como las acciones penales a nivel internacional les dio fortaleza, pero en otras, por las restricciones que ellas y ellos mismos decidieron autoimponerse al no permitir una participación activa a quien no tuviera un familiar en situación de víctima, les debilitó también, limitando la participación de agentes sociales que hubieran podido aportar *expertises* particulares a la causa.

La *experiencia límite* que representa la desaparición forzada, experimentada por las y los familiares, dio acceso a una epistemología particular, vinculada con el terrorismo de Estado. El poder darle un nombre a este nuevo "conocimiento", dio acceso a la experiencia ontológica que permitió aprehender el dispositivo, desconcatenarlo en sus componentes y así lograr comunicarlo, como violencia personal que desajusta los horizontes de sentido (Gatti, 2008), pero también como problema social de dimensiones más amplias. A partir de la defensa de las víctimas de ésta y otras violencias de Estado como son las detenciones arbitrarias, los prisioneros políticos y el exilio, estas mujeres entraron en política como sujeto colectivo tomando como propia la denuncia pública de estos hechos, reproduciendo ellas mismas el hacerse cargo del cuidado de las y los otros asociado al género, pero esta vez, llevarán el *care* al terreno de lo público, ejerciendo así una ciudadanía activa.

Las dinámicas de los colectivos variarán en función de los contextos en que se llevan a cabo las desapariciones forzadas. Si en un primer momento los colectivos estuvieron formados casi exclusivamente por familiares de víctimas por decisión propia, en la década de 1990, los organismos de defensa de derechos humanos entraron en escena profesionalizando la defensa de las causas al movilizar una *expertise* particular propia al campo del derecho. Esta entrada en escena permitió dar un paso más en las luchas llevadas por los colectivos de familiares denunciando al Estado mexicano ante organismos multilaterales como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este hecho permitió, además de instruir la reparación en sí a las víctimas, generar un antecedente de las violencias y crímenes de Estado en México y también contribuyó a ampliar la jurisprudencia internacional como en el caso de las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, lo que permitió legislar en torno a los feminicidios.

Pero más aún, el reivindicar el dolor como *causa* por la ausencia de su familiar ausente, las familias y los colectivos a nivel latinoamericano lograron que por primera vez se incluyera esta dimensión en los instrumentos internacionales y, con ello, a las familias de quienes han sido víctimas de desaparición forzada como víctimas también, debido a la afectación que este dispositivo les ocasiona. Por ejemplo, en la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la Organización de Naciones Unidas, se afirma:

> Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro (Art. 1; ONU, 1992).

Por otra parte, se puede afirmar que la construcción de las causas está dada por los agentes que entran en disputa, pero también por las alianzas que se generan en torno a ellas. En el caso de Juárez, el hecho de haber podido hacer un llamado a un *referencial* más amplio como es el feminismo, permitió a las actrices locales lograr una *subida en generalidad* y atraer a su causa otras y otros aliados que además de darle visibilidad a sus denuncias, atrajeron diferentes recursos —de expertises, humanos, económicos, etc.—, que permitieron establecer una *coalición de causa* y así salir del contexto de la denuncia local a la internacional.

Sin embargo, como es lo propio a lo político, desde los primeros comités, hasta la actualidad —de hecho—, los conflictos tampoco han estado ausentes de las diversas interacciones entre quienes deciden cruzar la barrera del dolor privado al reclamo público del regreso de los cuerpos. Por razones internas de tipo ideológico, de posicionamiento social, de acceso a diferentes recursos, etc.; o incluso por razones externas impulsadas por agentes del Estado, como fue el caso en Ciudad Juárez, Chihuahua, los diferentes comités han experimentado rupturas y recomposiciones. Esto, aunque decepcionante para algunas y algunos actores, no necesariamente es negativo si las y los agentes reconfigurados se mantienen en la arena pública y ejercen presión desde diferentes frentes. Ante una multiplicación de actores y actrices —tal como será desarrollado en el capítulo siguiente con las desapariciones en el marco de la política del Estado de "Guerra contra el narcotráfico"—, la cooptación, la infiltración y/o la represión se vuelve mucho más difícil por parte de los agentes de Estado para frenar el movimiento si las y los agentes están multiplicando las acciones desde diferentes frentes.

Efectivamente, en el capítulo siguiente, desarrollaré cómo las *nornas* del presente entrelazan sus hilos con las del pasado para denunciar que las violencias de Estado siguen presentes y se han incrementado. Se tratará de comprender cuáles son las características de estos nuevos sujetos políticos, cómo se vinculan entre ellas y ellos,

qué nuevos actores entran en disputa y cómo se posicionan políticamente ante el fenómeno de las desapariciones forzadas en la actualidad, que si bien éstas mantienen su esencia, tal como fue desarrollado en el capítulo III, en el *dispositivo* se han integrado algunas innovaciones que hacen más difícil aprehenderlo e identificar a los perpetradores.

CAPÍTULO V

LOS CUERPOS AUSENTES TOMAN LA ARENA PÚBLICA. LA POLITIZACIÓN DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN EL PERIODO DE LA ALTERNANCIA POLÍTICA

Introducción

Frente a la exacerbación de la violencia que se experimentó en el país a partir de la política de seguridad nacional implementada por el gobierno de derecha de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), la cual fue retomada por el priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), surgieron diferentes expresiones políticas para denunciarla. En un primer momento se formaron algunos colectivos de familiares en el norte y centro del país principalmente (ver anexo D, *infra*), además de algunas expresiones de denuncia individuales (ver anexo E, *infra*). Sin embargo, luego de casi cinco años de haberse puesto en marcha esta política, junto con sus *operativos conjuntos* que dejaron detrás de sí escenarios de crueldad y muerte (ver capítulo III, *supra*), no se habían logrado posicionar en la arena pública como uno de los principales problemas del país, las miles de víctimas que esta política estaba dejando a su paso.

En marzo del 2011 fue asesinado Juan Francisco Sicilia y gracias al llamado a la movilización de su padre, Javier Sicilia, surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) de inspiración cristiana, el cual tuvo la virtud de sacar a las víctimas del ostracismo y llevarlas a la palestra, entre ellas a las víctimas de desaparición forzada. Luego, en 2014, un ataque masivo y coordinado por parte de

agentes de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal, perpetrado a estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el grave problema de las desapariciones forzadas en el país tomó una relevancia sin precedentes. Entre ambos sucesos, colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada se habían mantenido de manera constante en la arena pública, intentando que sus demandas específicas permearan en las instituciones.

Así, el capítulo está dividido en dos partes. En una primera parte, se examinarán las particularidares del MPJD. Cómo surge, cómo se congregaron las víctimas en torno a la denuncia de la ausencia por medio del dolor, cómo se dio una relación movimiento social/sociedad civil organizada/Estado en esta conformación de tensiones y colaboraciones en torno a los cuerpos ausentes. Se analizará también cómo posteriormente las víctimas se disgregaron del MPJD y se reagruparon en diferentes colectivos a lo largo del país para fortalecer sus reivindicaciones particulares en un diálogo/presión con órganos de gobierno locales, estatales y federales. En la segunda parte se analizará el impacto del movimiento por Ayotzinapa en la agenda de las víctimas de desaparición forzada en un sentido amplio, así como las *coaliciones de causa* (Sabatier, 2010) que se formaron para presionar en la agenda legislativa para que se legislara en materia de desaparición forzada. Finalmente, se analizarán las formas contemporáneas de acción de algunos colectivos de familiares de personas desaparecidas para hacer que vuelvan los cuerpos ausentados y su interacción en torno a estas formas de acción con otros organismos relacionados con la defensa de derechos humanos.

Así, en este capítulo, el principal objetivo es comprender el proceso de politización de la denuncia de las desapariciones forzadas en el país. La politización es aquí entendida como el proceso por el cual subjetividades individuales despliegan un marco de significación y de referentes para desarrollar una consciencia colectiva de oposición en torno a las causas estructurales, culturales y/o sistémicas que llevaron a

la creación de estos marcos de significación (Krauss, 1998). De igual manera, serán analizados los rasgos característicos de los sujetos políticos que surgieron en torno a este proceso de politización, los cuales desarrollaron marcos de acción específicos para denunciar, evidenciar y politizar las desapariciones forzadas en el país y que han logrado mantenerlos en la arena pública a lo largo de varios años.

PRIMERA PARTE: LAS VÍCTIMAS TOMAN LA ESCENA PÚBLICA. EL MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD

Antes de 2011 y desde hacía varias décadas, los familiares de personas desaparecidas, los movimientos y organizaciones sociales, sobre todo de izquierda, y organismos de defensa de derechos humanos, no habían logrado colocar el tema de las desapariciones forzadas como un tema prioritario en la agenda pública y esto a pesar de múltiples esfuerzos desde diferentes plataformas. Acciones aisladas habían tomado lugar desde la denuncia pública, las cuales recordaban de vez en vez que el tema estaba ahí latente pero soterrado[180]. De esta manera, en esta primera parte, el objetivo será de analizar cómo el tema de las violencias políticas en general y de las desapariciones forzadas en particular, tomó un ímpetu importante a partir del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). En ese sentido se analizará

[180] Por ejemplo, en el año 2000 cuando a nivel nacional se tenía la esperanza de que con la victoria del PAN en el Ejecutivo Federal se avecinaba la consolidación democrática, a nivel regional era otra cosa. En Veracruz, por ejemplo, representantes del aparato represor de la Guerra Sucia como Fernando Gutiérrez Barrios, quien había sido titular de la DFS de 1964 a 1970, es decir, en el momento en que comenzaron a cometerse desapariciones forzadas como parte de las técnicas de contrainsurgencia, obtenía un curul como Senador de la República por Veracruz, al lado de Fidel Herrera, ambos por el PRI y Gerardo Buganza por el PAN. Para el 10 de julio del 2000, día de entrega de constancias de mayoría, uno de los consejeros electorales que debía participar de esa ceremonia, Ernesto Isunza Vera, imprimió cuatro playeras con la frase: "Desaparecidos, ¿dónde están?". Los otros tres consejeros optaron por no hacer este acto de protesta y no ponerse las playeras. En consecuencia, solo una persona en esa ceremonia apelaba a que la "transición no debía olvidar la historia" (Danell, 2000). Las razones por las que los otros consejeros decidieron no participar de las protestas pueden ser múltiples: eran épocas en las que aún se tenía miedo a las reminiscencias de la Guerra Sucia, estarían frente a un gran represor y temían represalias, porque se pensaba que esas violencias de Estado habían quedado atrás, por indiferencia, etc. Lo que sí es cierto es que los desaparecidos en ese momento preciso no eran una prioridad en la agenda pública, ni de la denuncia de las principales violaciones graves a los derechos humanos cometidas por los regímenes del pasado.

también cómo las dinámicas internas del movimiento llevaron después de un tiempo a la disgregación de las víctimas que se reagruparon en colectivos en todo el país. Esto por un lado debilitó la voz de las víctimas como una fuerza univoca nacional, sin embargo facilitó que se establecieran estrategias de trabajo localizadas para hacer avanzar la agenda de las víctimas con una interpelación a los organismos de gobierno de manera territorializada. El trabajo constante de estos grupos y de sus aliados y aliadas, reforzado por eventos coyunturales y movilizaciones puntuales, contribuyó de manera determinante a que luego de más de cuarenta años, el grave problema de las desapariciones forzadas en el país fuera reconocido tanto nacional como internacionalmente y deviniera un tema prioritario en la agenda pública en materia de violaciones graves a los derechos humanos.

5.1 La congregación de las víctimas: El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

En esta sección, el objetivo es analizar cómo es que se comenzaron a hacer visibles las graves violaciones a los derechos humanos que estaba dejando detrás de sí la política de seguridad nacional calderonista y cómo se formó un movimiento social para denunciarlas y reclamar justicia. Efectivamente, tras el asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo de Javier Sicilia, a finales de marzo del 2011 surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), el cual a través de las marchas y caravanas hacia el norte del país, el sur y una binacional en el norte de México y Estados Unidos, le daría visibilidad a las víctimas de la estrategia de gobierno calderonista, principalmente de las personas asesinadas, pero también de las desapariciones forzadas[181]. De acuerdo con diversas personas entrevistadas (Baca, 2017; Carmona, 2017; Fernández Martínez, 2017; García Laguna, 2017; González

[181] Para una síntesis de la trayectoria del MPJD ver anexo E.

Islas, 2017; Manzanares, 2017; Trujillo, 2017), el MPJD tuvo la virtud de congregar a las víctimas que estaban dispersas. Contribuyó a darles un espacio de expresión y de cohesión a quienes no encontraban eco en ningún lado. En palabras de Lucía Baca, madre de Alejandro Alfonso Moreno Vaca, quien fue desaparecido el 27 de enero del 2011, luego de haber pasado un retén militar entre Monterrey, Nuevo León y Nuevo Laredo, Tamaulipas:

> Nos unimos a la marcha de la Ciudad de México, cuando llegó dimos nuestro testimonio en el Zócalo, fue muy impactante. En ese tiempo yo ni siquiera podía hablar del tema porque es muy doloroso. Y fue el primer momento de confrontar y que tú veas que el Zócalo estaba lleno. Entonces pude empezar a escuchar a compañeros sobre el mismo tema, ¿no? Que estaban buscando a sus familiares desaparecidos y escuchabas que del Distrito Federal, que de diferentes lugares y al dar nuestro testimonio y que la gente te decía "no están solos", fue muy esperanzador pero muy doloroso. Puedo decirte que desde entonces ha sido un peregrinar. [...] Javier no había hecho duelo, nosotros las víctimas nos agarrábamos a él porque fue la única persona que nos dio cara, rostro, voz. Yo le vivo agradecida a Javier, porque él podía haber ido a llorar su pena y hacer el duelo y a lo mejor seguir reclamando, pero él fue una voz importante para todos. Nos sacó a la luz, si así somos invisibles, menos seríamos [visibles]. Eso nos buscó la oportunidad de reunirnos también, de conocer a los compañeros de este peregrinar (Entrevista, el 20 de febrero del 2017).

Juan Carlos Trujillo tiene a cuatro hermanos que fueron desaparecidos, Jesús Salvador y Raúl, desaparecidos en 2008 en Atoyac, Guerrero, por policías ministeriales en complicidad con grupos criminales y Luis y Gustavo desaparecidos por la policía intermunicipal de Poza Rica, Veracruz, en 2010. En el mismo sentido que Lucia Baca, afirma que gracias al MPJD lograron conformarse como *sujetos políticos* y salir del ostracismo:

> Nosotros somos una familia que nace dentro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad como sujetos de causa, ¿no? Estamos trabajando con

> Javier Sicilia. Mi mamá [María Herrera] estuvo en las caravanas, Norte, Sur y la de Estados Unidos. [...] Nosotros nos habíamos acercado a activistas como Isabel Miranda de Wallace, buscamos a Martí[182] con la esperanza de que nos pudieran ayudar en la búsqueda de mis hermanos porque sentíamos que eran personas que vivían nuestro proceso y que si hubiera alguien a quien le pudiera doler nuestro dolor serían a ellos. Por desgracia el camino fue largo entre ese intento de contactos pero jamás logramos que nos pudieran ayudar. Es más, jamás tuvimos un contacto con ellos. Entonces ya con claridad le decía a mi mamá: Es que no hay a quien le duela nuestro dolor, nuestro dolor nos duele a nosotros mismos. Eso no se va poder avanzar por ningún lado, ya lo vimos por la parte institucional, ya lo vimos por la parte delincuencial. [...] Para esto mi mamá ya se había dejado morir. Tenía mucha depresión. Tenía como dos meses que ya no comía, no se levantaba, se había dejado morir. En marzo del 2011 matan al hijo de Javier Sicilia, entonces a mi mamá le dicen de la intención de Javier de darle visibilidad a las familias, a las víctimas y entonces mi mamá nos pide que la apoyáramos para poder hacer, agrupar, buscar a Javier Sicilia. Mi mamá se va a las caravanas y cuando mi mamá regresa de la primera caravana yo le veo una luz distinta en sus ojos, la veo distinta, como muy animada. (Entrevista, el 1 de marzo del 2017).

La propia señora María Herrera enuncia cómo para ella el asistir a las marchas y caravanas le permitió ver lo que nadie decía, que las víctimas de las violencias en el período calderonista se contaban por miles:

> Cuando me enteré del problema de Javier Sicilia y llego y me le acerco y le pido con todo mi corazón que no me soltara, que no me dejara, que me ayudara a buscar a mis hijos, ahí fue donde yo sentí un abrazo fraterno, un abrazo sincero. Cuando anduvimos en las caravanas y que todo mundo salía y decía yo tengo a mi esposo desaparecido, yo tengo a mis dos hijos, yo tengo a mi hija. Ahí dije, Dios mío, ¿pues qué es esto? Y ahí fue donde yo entendí (María Herrera en Pie de Página, 2017).

---

[182] Para una breve descripción de las causas de movilización de estas dos personas —Wallace y Martí— ver el anexo E.

Es así como una persona, Javier Sicilia, líder carismático en el sentido *weberiano* y con un alto capital *social* y *simbólico* (ver Anexo E) que fue víctima de la política de Estado de la *Guerra contra el Narcotráfico*, dentro de la cual además se intentó —como en la inmensa mayoría de los casos— criminalizar a las víctimas —a su hijo—, decidió asumir un rol de *emprendedor de causa* (McAdam *et al.*, 1996; McCarthy y Zald, 1977). Es decir, el rol de una persona o grupo, que por su posición privilegiada, sus diversos recursos (simbólicos, materiales, económicos, etc.), sus *expertises* y/o competencias específicas, es capaz de movilizar a personas o grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad para denunciar públicamente una o varias situaciones que consideran injustas. El hecho de que Javier Sicilia haya decidido comunalizar sus demandas, ir más allá de su causa individual y además salir del centro del país para darle visibilidad a las violencias que se estaban viviendo en las regiones, permitió que las víctimas salieran a la luz pública y lograran congregarse (ver anexo E). Así, los diferentes capitales de Javier (carismático, social, simbólico), —además de los altos niveles de violencia que alertaban a ciertos sectores de la población más informados—, logró atraer a la causa a líderes sociales que militaban en otros espacios o que participaban de asociaciones civiles, ONG, organismos multilaterales, etc. Estas y estos líderes desde el primer momento se unieron al movimiento y trajeron consigo su capital social y político, lo que contribuyó a darle visibilidad al MPJD. En este contexto se pueden mencionar a defensores de derechos humanos que ya tenían una cierta trayectoria como Emilio Álvarez Icaza, Miguel Álvarez Gándara, Mariclaire Acosta, entre otros. Además de profesores investigadores de importante trayectoria como Pietro Ameglio, Sergio Aguayo; representantes de la iglesia católica como Raúl Vera y Alejandro Solalinde, de organismos multilaterales como Santiago Corcuera Cabezut, etc. De esta manera, las víctimas y sus aliados y aliadas, en un primer momento estarían agrupadas y agrupados en una sola voz, la del MPJD, pero poco a poco tomarían caminos distintos. Por una parte para regionalizar las reivindicaciones, pero, por otra, porque muchas de

las maneras en que comprendían el problema y cómo se posicionaban políticamente eran incompatibles las unas con las otras.

5.2 *Comunidades de dolor*, comunidades de lucha: la concatenación de los sujetos políticos

En esta sección, se analizará cómo el MPJD logró congregar a las víctimas. Cómo logró hacer que se reconocieran en un "espacio" común, fraternizar en el desconsuelo. Así es, en el MPJD, las víctimas que se congregaron en torno a él encontraron un intersticio que, después del *desajuste de sentido* (Gatti, 2011) que representa la desaparición forzada de un o una familiar les permite *re*hacer comunidad. El hecho mismo de congregarse representa ya una especie de fracaso para el *dispositivo desaparecedor* (Calveiro, 1998) pues logran romper el aislamiento que en parte tiene por objetivo esta técnica de control de las poblaciones (ver capítulo I, *supra*). El MPJD les sacó del ostracismo, les dio un lugar en la arena pública y entraron en comunicación —o confrontación— como colectivo con la representación de los poderes del Estado. Juan Carlos Trujillo, narra cómo sintió este espacio compartido de dolor y de solidaridad, cuando él se acercó por primera vez al MPJD acompañando a su mamá:

> Entonces [entramos ahí] y veo cómo todas las familias empiezan a abrazar a mi mamá, ¿no? Y Doña Mary para acá y Doña Mary para allá. Entonces yo sentí ahí la primer cercanía con las familias, como un abrazo sincero, a quien sí le dolía mi dolor. Entonces en ese momento me llené de energía. Dije, este es mi espacio, ¿no? Esto es lo que yo necesito. Entonces de nosotros surgió una esperanza de que por medio del Movimiento por la Paz pudiéramos encontrar a nuestros familiares. Ese día que vine yo, inclusive estaban trabajando sobre la temática que iban a ver con el Ejecutivo, con el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Entonces pasan, preparan todos los documentos que le iban a dar al Presidente de la República y deciden que sea mi madre quien represente a nivel nacional a las víctimas. Mi mamá ni siquiera traía lentes, "¿yo cómo voy a leer algo si no puedo ver?". Ahí le llovieron lentes.

> "No Doña Mary, ¿cómo va ser? Le conseguimos unos lentes" (Entrevista, el 1 de marzo del 2017).

Así, el MPJD —ante el fracaso de las negociaciones de los seis puntos iniciales del Pacto Social[183]— se había propuesto dos objetivos principales, visibilizar a las víctimas y que se legislara a favor de éstas. Luego de dos años de intensa presión ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y de algunos reveses por parte de éstos (Sicilia y Vázquez Martín, 2016), el MPJD logró que se promulgara la Ley General de Víctimas (LXII Legislatura, 2013)[184] (Gordillo García, 2015). Pero, para lograr esto como movimiento, con aliadas y aliados estratégicos, habían emprendido en paralelo una labor de fortalecimiento en cuestiones jurídicas, de comprensión de contexto, de politización y de derecho internacional dirigida a las y los miembros del movimiento y a las incipientes organizaciones de familiares de víctimas que habían comenzado a formarse. Es así como las víctimas comenzaron a fortalecerse como sujetos políticos en torno a las desapariciones forzadas del periodo de la alternancia política, es decir, de los periodos presidencias gobernados por el PAN (2000-2012) y el del retorno del PRI (2012-2018). De acuerdo con Ranabir Samaddar (2014), la pedagogía política tiene una función de lucha en la cual las y los individuos deben dotarse de los instrumentos políticos para enfrentarse al ejercicio del poder en turno. En ese sentido, las ONG y los organismos de derechos humanos previamente

[183] Los seis puntos eran: 1. Esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a cada una de las víctimas como ejercicio de restitución de dignidad y de memoria; 2. Poner fin a la estrategia de seguridad nacional que llevaba a una guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana; 3. Combatir la corrupción y la impunidad desde las instituciones; 4. Combatir la raíz económica y las ganancias del crimen; 5. Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social; 6. Democracia participativa real y no solo simulada. Para consultar el desglose de cada punto, ver: (Sicilia y Vázquez Martín, 2016, p. 80-84). Ver también el anexo E.

[184] Ésta fue aprobada con muchas deficiencias y tuvo que ser reformada el 3 de enero del 2017. La última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación está disponible en el siguiente enlace: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf (Consultado el 1 de septiembre del 2018).

constituidos jugaron un rol de suma importancia en este proceso. En palabras de Janet Carmona, acompañante psicosocial, miembra de Serapaz, organismo que a partir del 2011 y a raíz del MPJD se vinculó de manera sistemática con el tema de las desapariciones forzadas:

> [Empezamos a] trabajar sobre la experiencia que se estaba viviendo en ese momento, entender qué estaba pasando en el país, qué estaba pasando con las desapariciones, qué eran las desapariciones. Poner en contexto el tema desde las desapariciones forzadas y también entender qué es lo que estaba implicando para las familias tener sus familiares desaparecidos. Cuáles eran estas afectaciones, un poco la apuesta de esos primeros espacios era generar un diagnóstico, un análisis del contexto mexicano en cuanto a las desapariciones forzadas (Entrevista, el 21 de enero del 2017).

Estas formaciones de las que participaron personalidades de renombre internacional en el tema de desapariciones forzadas, como por ejemplo, Carlos Martín Beristain, Clemencia Correa, Janet Bautista, Rainer Huhle, Roberto Garretón, llegaron a tomar una dimensión más amplia pues se organizaron ocho encuentros nacionales contra la desaparición forzada entre 2011 y 2015 (Carmona, 2017). Incluso en temporadas hacían reuniones de seguimiento una vez por semana (Baca, 2017). Las formaciones contribuyeron así a que las familias de diferentes partes de la República Mexicana adquirieran herramientas para afrontar a los agentes del Estado tanto en las cuestiones legales, como de incidencia política en un sentido más largo. Pero además de la comprensión del problema, el objetivo era también crear comunidad, que las personas que atravesaban por la misma situación se dieran cuenta que no era un hecho aislado lo que vivían, que era un problema que se reproducía a lo largo del país y que debían fortalecerse mutuamente para poder afrontarlo. En palabras de Janet Carmona:

> Estos espacios además de comprender el problema, también permitían acercar las experiencias de las familias. Y que generaran vínculos en el sentido de no sentirse aisladas, el hecho de que algunas estuvieran viviendo una situación en Coahuila, mirar que también se estaba repitiendo en otros estados y que no era algo que sólo a ellas, sino que también lo estaban compartiendo. Compartían

> este dolor entre ellas este lenguaje. Entonces creo que eran espacios para no sólo entender el contexto del problema sino también conocer sus propias experiencias y herramientas, y sus herramientas de afrontamiento. Esas herramientas que cada una tenía y que podía compartir con las otras. Creo que eran espacios para dos ámbitos en un mismo proceso (Entrevista, el 21 de enero del 2017).

Así, el congregarse en torno al MPJD le permitió a las víctimas y a las y los familiares de víctimas que no encontraban otros espacios de comunalización de sus procesos tanto de búsqueda, jurídicos, de sometimiento a revictimización, de duelo y/o de duelo suspendido conformar lo que Gabriel Gatti y María Martínez (2017) —apoyándose en Veena Das (2008)— llaman *comunidades de dolor.* Este concepto hace referencia a las instancias en las que sujetos —y sujetas, claro— que han sido dañados y dañadas se agrupan con quienes han atravesado por situaciones similares y organizan formas de expresión y comunicación que les son propias. Es decir, en este caso, la situación límite que representa la desaparición de una persona, esta violencia de Estado, se convierte en motor de indignación y les transforma en sujetos políticos congregados en torno al dolor (Celis, 2012, p. 87). En estos espacios las y los *dolientes* no dejan de serlo y mutualizan entre ellas y ellos la experiencia del cuerpo —y el alma— adoloridos y, en los casos de desaparición, comunalizan también su historia, la cual *mantienen en suspenso* (ver capítulo I, *supra*) mientras no encuentran a quien buscan. Es decir, comunidades que son cohesionadas por lo que *a priori* debería diluirles (Gatti y Martínez, 2017). Solo que en el caso del MPJD la conformación de estas *comunidades de dolor* va más allá de únicamente comunalizar la pérdida. Es decir, las víctimas de desaparición activan la capacidad de agencia en quienes les buscan, su subjetividad *quebrada* les coloca en el espacio público (Irazuzta, 2017; Jelin, 2011). En este caso, este encuentro de *dolientes* es también para activar su agentividad y llevar al terreno de lo político lo que significa la ausencia, lo que comprenden como responsabilidad de Estado en la desaparición de su familiar y para organizar los diferentes frentes en el ejercicio de una ciudadanía activa.

5.3 Activistas del MPJD en la interacción de la relación movimiento social/ sociedad civil organizada/Estado

En esta sección el objetivo es analizar cómo las diferentes acciones de interlocución del MPJD, más o menos formales o informales según la estrategia y el marco de acción, contribuyeron a colocar las reivindicaciones de las víctimas en la arena pública e incluso sus demandas lograron permear en algunas instituciones, estableciendo mecanismos específicos en materia de desaparición forzada y en la aprobación de la Ley General de Víctimas (2013).

Así, desde un primer momento el MPJD se propuso incidir en la acción pública del país, primero a partir de los seis puntos del Pacto Social, luego a partir de la Ley General de Víctimas y sus reglamentos y los de Províctima[185], la cual fue creada por Calderón *a bote pronto*, para tratar de dar salida al MPJD y evitar que continuara tomando fuerza (Sicilia, 2016a). Más tarde incidieron también para lograr la exhumación de cuerpos en las fosas de Tetelcingo y Jojutla, Morelos (Brito, 2017b). Además, una vez que las familias de las víctimas habían comenzado a formarse en diferentes aspectos de la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos, criminalidad, etc., y que muchas otras personas ejercían medidas de presión

[185] La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Províctima) fue una dependencia creada el 6 de septiembre del 2011 por Felipe Calderón para dar salida a la crisis política que había emergido con el MPJD. Ésta tenía como mandato dar atención a "víctimas del delito" que no habían sido atendidas correctamente por las dependencias encargadas de darle seguimiento a sus demandas. Para un análisis de la paradoja que esta dependencia representaba, así como la creación de la categoría de "víctimas del delito" como parámetro de operación de la institución, ver: (Galaviz Armenta, 2012). En enero del 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto transformó Províctima en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito (CEAV), como un organismo autónomo, descentralizado y no sectorizado. La CEAV retomó prácticamente todas las funciones de Províctima, a excepción de la Subprocuraduría de búsqueda de desaparecidos que pasó a formar parte de la PGR. Ver: (Turati, 2014).

—sobre todo a nivel regional— a través de acción directa no violenta (Ameglio Patella, 2016); otras más se habían posicionado como voceras y/o interlocutoras del movimiento con órganos de Estado. Todo esto con el objetivo de seguir presionando para el cumplimiento efectivo de la legislación ya en vigor, para la puesta en pie de nuevas leyes y para la creación, implementación y seguimiento de mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas, de la acción de las y los agentes del ministerio público y de la acción pública en general con respecto a las víctimas de las violencias de Estado o generadas por decisiones políticas de éste.

En ese sentido, el MPJD como colectivo estableció una interlocución constante entre las demandas de las víctimas y la acción del Estado, pero, en otras, integrantes y/o militantes de éste lo hicieron a título personal pero con una visión de continuidad de las demandas del movimiento. En el caso del MPJD, uno de los principales mecanismos de interlocución informales y de oposición, se dio a través de las manifestaciones públicas en mítines, marchas y caravanas como parte de su *repertorio de acción colectiva* con la intencionalidad de abrir una puerta para hacer pasar sus demandas ante decidoras y decidores políticos, de sentarles al diálogo. También los medios de comunicación y las redes sociales jugaron un rol muy importante para mostrar la fuerza del movimiento sobre todo durante los primeros meses de las movilizaciones (García, 2017). La gran cobertura mediática de la que se favoreció el movimiento se debe en parte gracias al peso de las figuras de quienes se estaban involucrando en el MPJD, además del recurso al simbolismo de la figura de familiar-víctima que era fácilmente traducible en lenguaje de los medios de comunicación. Pero, también, porque muchas de las y los periodistas se sentían concernidos como gremio en un país donde en particular en los dos últimos sexenios han sido flanco de ataques haciendo de México el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo (Flores, 2017). Muchas y muchos de ellos acompañaron las marchas y caravanas y crearon proyectos de denuncia a partir del movimiento. Por ejemplo Mónica González Islas, reconoce la influencia de las

caravanas del MPJD en la concepción de uno de sus documentales: "*Geografía del dolor* sale de la idea de que queríamos visitar a cada una de las personas que yo había conocido en la cobertura de la caravana del Movimiento por la Paz en el sur y luego en el norte" (Entrevista, el 3 de febrero del 2017). Este y otros trabajos similares en prensa y audiovisuales, sin duda lograron darle visibilidad al movimiento y a las víctimas y con ello agrandar su impacto y su relación de fuerzas con agentes del Estado para sentarse a negociar. De esta manera, se puede afirmar que las redes sociales y los medios masivos de comunicación en este caso funcionaron también como vehículos para favorecer el diálogo Estado-Sociedad Civil.

Por otra parte, el peso de algunos actores y actrices en contextos determinados también contribuyó a que esta interlocución en marcos de intercambio formales e informales pudieran establecerse. En el caso de la Ley General de Víctimas el hecho de que personalidades como Santiago Corcuera Cabezut, miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Emilio Álvarez Icaza quien había sido *ombudspersona* de la capital del país y que posteriormente, en agosto de 2012 se fue a dirigir la CIDH, y el mismo Javier Sicilia con el peso que tenía como figura intelectual mexicana (ver anexo E), contribuyeron a que en un primer momento se pudieran establecer mesas de trabajo con la PGR y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia (SEIDO). Por ejemplo, Mesa de Casos, Mesa de la Ley General de Víctimas y la Mesa de Seguridad sin Guerra (García Laguna, 2017). Luego contribuyeron también de manera determinante en la redacción y recomendaciones a la iniciativa de Ley General de Víctimas, mismo si consideraban que ésta representaba un sinsentido en sí misma. En palabras de Javier Sicilia:

> La propia Ley de Víctimas es una contradicción. Es señal de que la ley que protege a todos los ciudadanos es una excepción. Entonces tuvimos que decir es que las víctimas también son ciudadanos y tienen derechos e inventamos una ley que acusa al Estado. No teníamos que haber inventado esa ley si se procede constitucionalmente. Entonces esta ley denuncia que el Estado es un

> Estado incapaz de proporcionarle seguridad a su gente e incapaz de mirar a una porción de la ciudadanía como susceptible de derechos. (Entrevista, el 28 de febrero del 2017).

Pero además, esta relación conflictual en su rol de interlocución no se limitó a estos mecanismos de participación formal. Las y los agentes jugaron también en el terreno de lo político asumiendo al mismo tiempo un rol de grupos de presión, haciendo cabildeo con las y los diputados y senadores para lograr una mayoría de votos que permitiera hacer pasar la iniciativa de ley. La estrategia era convencer a la oposición de que votara a favor de ésta, puesto que tenían información que les hacía suponer que la bancada del PAN —el partido en el poder— tenía la consigna de votar contra. En palabras de Lucía Baca:

> Yo estuve con Emilio Álvarez Icaza yendo al Senado y a la Cámara de Diputados para que se aprobara la ley de víctimas cuando el Movimiento por la Paz. He visto de la peor forma cómo el partido que sea, del color que sea, son mercenarios. Vi cómo se reparten el país: "tú apruebas esto y yo te apruebo esto". Por ejemplo, para la ley de víctimas fuimos y vimos a todos los senadores y diputados que no eran del PAN, porque había la consigna de que ninguno del PAN votara por la ley. Entonces fuimos a ver a todos los de los partidos para que se aprobara la ley. Estuvimos cuatro días porque no sabíamos en qué momento iban a subir al pleno para la votación. Vimos al PRI y a los que supuestamente podíamos convencer. Cabildeamos —te digo que en la peor forma he aprendido— para que saliera la ley. No pudieron con nuestra presencia. ¡No pudieron, no pudieron! Porque nos tuvieron siempre en una sala junto al pleno, estábamos como veinte familias para cuando saliera en el pleno saliéramos a la votación. Entonces cuando ya dijeron, ya ahora sí ya va a salir, nos dijeron ahora sí, pónganse hasta el frente y que los vean y empezamos. Fue muy fuerte vernos ahí gritando, ¿no? [...] Al final todos votaron, hasta los que estaban del PAN, todos. No pudieron yo creo con la carga de ver la cara de las víctimas. Gritábamos: "Ni un muerto más" "Ni un desaparecido más". Ay, hasta ahorita de recordarlo se me pone china la piel, yo creo a ellos también les impresionó. Hasta está una foto ahí en el periódico que estamos todos agarrados de la mano gritando (Entrevista, el 20 de febrero del 2017).

A pesar de que la ley fue aprobada a la unanimidad en el pleno, Felipe Calderón emitió una controversia constitucional para detener su promulgación, fue hasta los primeros días del mandato de Enrique Peña Nieto que ésta fue aprobada por decreto (ver anexo E). De ser cierto que la bancada panista tenía por mandato votar contra la ley, el estar frente a las víctimas les impidió hacerlo. Sin embargo, lo que interesa subrayar aquí es que de acuerdo con la interpretación de las y los integrantes del MPJD, el rol que jugaron las víctimas permitió, por una parte, rebasar el marco de acción racional para permitir entrar en el terreno de lo político los sentimientos —el dolor— en la toma de posición sobre la responsabilidad de las y los representantes de Estado —diputados y senadores— ante las víctimas. Así, el hecho de que estas actrices y actores hayan decidido moverse en dos espacios distintos de la relación de interlocución con el Estado, la formal-legal como asesores en la redacción y modificación de la ley y la informal, como grupo de presión, favoreció su aprobación, aunque en las relaciones disimétricas de poder el titular del ejecutivo haya podido "congelarla" durante su mandato (Aristegui Noticias, 2012a).

En otro rol de esta relación de interlocución con los organismos de Estado, el MPJD consintió que algunos y algunas de sus cuadros y militantes se introdujeran en órganos de gobierno para que desde ahí pudieran intermediar a favor de sus demandas. Entre otros, fue el caso por ejemplo de Eliana García Laguna quien tenía toda una trayectoria en la militancia por los derechos humanos pero también en el trabajo en órganos de gobierno. Por ejemplo, desde 1977 había sido militante del Comité Eureka (García Laguna, 2017). Ella misma había sido prisionera de conciencia entre noviembre de 1982 y agosto de 1985 por su militancia en el movimiento urbano popular de Guerrero, pero también había sido diputada federal por el PRD y había trabajado como asesora en el Senado (García Laguna, 2017). En 2011 se acercó al MPJD y desde ahí fue una de las personas de las que más se involucraron en el seguimiento, compilación de iniciativas de ley con respecto a las víctimas, comparación de éstas, redacción y cabildeo para que se aprobara la Ley General de

Víctimas en el Senado (Romo y Villanueva, 2016; García Laguna, 2017). Cuando Jesús Murillo Karam —uno de los senadores que había impulsado la Ley General de Víctimas (García Laguna, 2017)— fue llamado a trabajar a la PGR nombró a Ricardo García Cervantes a trabajar como Subprocurador de Derechos humanos y éste a su vez, invitó a Eliana García Laguna a integrarse a su equipo. En palabras de la misma Eliana García Laguna:

> Finalmente Murillo queda como Procurador empezando diciembre, y me llama Ricardo García Cervantes para invitarme a trabajar con él en la Subprocuraduría [de Derechos Humanos]. Entonces yo, que era del Movimiento por la Paz, consulto al Movimiento por la Paz y me dan como autorización de participar y hago una consulta de más de setenta, entre organizaciones de derechos humanos y personas con las que yo tenía trabajo. Le consulté a todas las organizaciones de derechos humanos y todas estuvieron de acuerdo, fueron más de setenta. Solamente una amiga de mi época de adolescente y de presa de consciencia me dijo que cómo iba a ir a trabajar con el espurio, pero yo le dije mira, yo creo que se puede hacer. Entonces pues acepté. Y desde mediados de diciembre sin estar aún en PGR empecé, consulté con varias de las organizaciones de derechos humanos con las que más cercanía tengo cómo entrarle al tema de desaparición (Entrevista, el 27 de febrero del 2017).

Así, en un país con una larga trayectoria de cooptación, en particular la priista, que era el partido que después de doce años de pausa regresaba al Ejecutivo Federal, el hecho de aceptar este tipo de colaboraciones era un riesgo que el MPJD decidió afrontar. En este caso que ejemplifico, el hecho de que García Laguna ocupara un puesto en la PGR —Encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad— contribuyó a darle visibilidad a las víctimas de desaparición forzada como ella misma lo narra, integrando desde el primer momento el enfoque de derechos. Es decir, a través de este ejemplo se puede destacar la capacidad de agencia de un individuo particular para modificar algunas cuestiones, por mínimas que sean, del sistema. Sin la intención de hacer una evaluación sobre la calidad del trabajo realizado por García Laguna como servidora

pública, ni del impacto de su gestión para contribuir a que se hiciera justicia, sí se puede afirmar que el hecho de que alguien sensible al tema ocupara un puesto de decisión, sí contribuyó a la puesta en marcha de mecanismos específicos que integraban a la sociedad civil organizada y a las víctimas directamente concernidas en los procesos de construcción de instrumentos. Por ejemplo, se puede citar el Convenio de la Comisión Forense el cual fue concebido en colaboración con organizaciones de madres de personas migrantes desaparecidas en México en el que participaron la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense; o el Mecanismo de Justicia Trasnacional que se puso en marcha en concertación con la FJEDD; al igual que los protocolos homologados de tortura y desaparición con participación de organizaciones de la sociedad civil organizada, para la cual la organización IDHEAS hizo el infograma; el protocolo de notificación a familiares, etc. Así, Eliana García Laguna desde su puesto decisional al interior de la estructura de gobierno, favoreció que se establecieran diferentes relaciones de interlocución y de acciones concretas entre las víctimas, el MPJD y la PGR. Luego de la crisis de Ayotzinapa, en mayo del 2015 Eliana García Laguna renunció a su puesto en la PGR y se reintegró a su puesto como asesora en el Senado y continuó militando con la organización Enlaces Nacionales la cual surgió a raíz del MPJD (García Laguna, 2017).

En otro registro de esta relación del MPJD de interlocución con órganos de gobierno está la exhumación de las fosas comunes de Tetelcingo y Jojutla en el estado de Morelos. Efectivamente, en septiembre de 2014, gracias a la insistencia de familiares por recuperar el cadáver de Olivier Wenceslao Navarrete Hernández que ya había sido identificado y que fue enviado a la fosa de Tetelcingo por un acto de negligencia de personal de la Fiscalía de Morelos (Milenio, 2016b), fue descubierta esta fosa clandestina la cual contenía 117 cadáveres que habían sido inhumados sin un debido registro para poder identificarles (Brito, 2016). A raíz del descubrimiento y

exhumación de los cadáveres que estaban en esta fosa, se supo que había otra más en la localidad de Jojutla, también en Morelos (Sicilia, 2016b).

En mayo de 2016 y marzo de 2017 comenzaron los trabajos de exhumación y reconocimiento de cadáveres de las fosas de Tetelcingo y Jojutla respectivamente. El MPJD fue una bujía para que se realizaran estas exhumaciones junto con el Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el cual se había echado andar en mayo del 2014 en un esfuerzo de colaboración estrecha entre el MPJD y la UAEM. Cabe destacar que en esta universidad laboraba Javier Sicilia, el programa era dirigido por un militante muy activo del movimiento, Roberto Villanueva y el mismo rector de la UAEM en ese periodo, Alejandro Vera, quien es cercano al MPJD y a Javier Sicilia, estuvo involucrado en este proceso. En el marco de los trabajos en Tetelcingo, a la par de las acciones de la PGR, la UAEM formó una Comisión Científica de Identificación Humana (CCIH) que fungió como una unidad de peritos independientes, con el objetivo de asignar una identidad —confiable para las familias— a los cadáveres que de las fosas serían exhumados. Gracias a este trabajo de colaboración entre el MPJD y la UAEM, junto con otras y otros aliados que se sumaron a este esfuerzo, es que se pudo devolver la identidad a las víctimas de desaparición forzada que por una maraña burocrática la fiscalía hizo que desaparecieran dos veces (González Villarreal, 2012, p. 27). Es decir, al momento mismo de la sustracción de la persona y al inhumarlos sin la posibilidad de identificación, ni de un correcto registro para que sus familiares puedan dar con su paradero. Así, este rol de interlocución que el MPJD decidió asumir junto con aliados y aliadas estratégicos, colaboró con otra veta para ejercer el derecho a la verdad de las víctimas y para ejercer presión sobre los órganos de gobierno para que realicen su labor. Además, a través del trabajo de peritos independientes como las y los expertos

de la CCIH, esta relación de interlocución contribuyó a fiscalizar los resultados que emergían de la propia PGR[186].

Así, el hecho de que militantes a título individual y el MPJD como colectivo hayan decidido asumir diferentes roles de interlocución, más o menos formales según el contexto, contribuyó de manera determinante a mantenerles en el centro de la atención de los medios de comunicación y las redes sociales, lo que contribuyó a su vez a mantenerles en la arena pública y así hacer prosperar sus demandas. Además, el hecho de que sus militantes hayan ocupado puestos estratégicos también coadyuvó a hacer avanzar y visibilizarse en la agenda legislativa, de investigación e impartición de justicia.

Sin embargo, interesa destacar que el hecho mismo de asumir un rol de interlocución no basta para lograr avances en las reivindicaciones de un movimiento y/o de una organización. En esta relación de fuerzas disimétricas, además de ocupar un rol de interlocución otros factores de coyuntura influyen para que un movimiento y/o sujetos políticos logren avanzar en sus demandas. Por ejemplo, en la misma línea del MPJD, Rosario Ibarra de Piedra y Abdallán Guzmán Cruz, así como la misma Eliana García Laguna en su rol de diputada federal, en diferentes momentos habían intentado que se legislara a favor de las víctimas de desaparición forzada (Proceso, 2000a). Sin embargo, al no gozar de una base social de apoyo más amplia, ni la cobertura mediática necesaria, estos proyectos no lograron prosperar en lo inmediato. Tuvieron que pasar varios años y favorecerles otras circunstancias para que las demandas que estas actrices y actores del pasado habían mantenido latentes —las *nornas del*

---

[186] Para un análisis de la violencia política y la ilegalidad en las fosas de Tetelcingo, ver: (Dayán, 2016; Robledo *y al.*, 2016). El informe de la CCIH está disponible en: (Comisión Científica de Identificación Humana, 2016).

pasado— fueran retomadas por otras y otros actores que gracias a coyunturas específicas lograron tener más presencia y así colocarlas en la agenda pública.

5.4 El Ocaso del MPJD y la disgregación de las víctimas: la colectivización de la búsqueda

En esta última sección de la primera parte, el objetivo es analizar cómo las fracturas internas del MPJD llevaron a su ocaso, pero al mismo los vínculos establecidos entre las víctimas y otros aliados y aliadas, así como las herramientas adquiridas en este proceso llevaron a la reconfiguración de actores y actrices en colectivos territorializados que tuvieron por objetivo la interpelación de instancias de gobierno locales. El trabajo constante de estos colectivos, a pesar de haber perdido mucha cobertura de la agenda mediática favoreció la concreción de relaciones Estado/sociedad civil y la puesta en marcha de políticas públicas o legislaciones regionales o locales en materia de búsqueda y reparación, por ejemplo.

En ese sentido, tal como fue señalado en las secciones precedentes, el liderazgo de Javier Sicilia logró atraer a la palestra a las víctimas de las violencias de las políticas de Estado que estaban disgregadas. Les abrió un espacio de comunalidad y de expresión de sus pérdidas. La noción de dolor tomó una dimensión política, dotó de sentido al movimiento y fue objeto de movilización. Se trataba de darle rostro a las víctimas que por la naturaleza misma de las políticas de Estado no encontraban un espacio de expresión, ni de denuncia efectivo. En el discurso oficial o eran "daños colaterales" o eran víctimas porque "lo merecían", por haber actuado de alguna manera en la "ilegalidad". Ante cualquier intento de denuncia, las víctimas y sus familias eran sistemáticamente criminalizadas para restarles credibilidad. El MPJD era así también un espacio en el que se buscaba restituirle la dignidad a las víctimas y a sus dolientes. En este movimiento las mujeres-madres en búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos regresaron con fuerza a la arena pública, representaron el

estandarte del dolor, al mismo tiempo que son a quienes se les otorgó la máxima legitimidad de la palabra. En el marco de los simbolismos movilizados por el MPJD, altamente influenciados por el cristianismo, no hay doliente más legítimo que una mujer-madre —la imagen de María— que con mucho dolor emprende la búsqueda de justicia para sus vástagos caídos y/o desaparecidos.

En un primer momento del movimiento, sobre todo durante los primeros meses, se dio una congregación de las víctimas del *tiempo presente*. Se sumaron al MPJD organizaciones que estaban recientemente constituidas (ver anexo D) como por ejemplo, CADHAC, Hasta Encontrarles, FUUNDEC o incluso la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada participó de las acciones, las movilizaciones y las formaciones (Cerezo Contreras, 2017) —los colectivos del pasado como Eureka y AFADEM no se unirán a este movimiento, como sí lo harán más tarde con las movilizaciones por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (ver *infra*)—. Así, en un primer momento, se pensaba que el MPJD podía ser un espacio de confluencia de los diferentes espacios de lucha, mismo si estaban claros que los posicionamientos políticos eran divergentes entre quienes consideraban que establecer el diálogo con el Estado era la vía, quienes preferían mantenerse en un espacio de confrontación o incluso quienes como Sicilia mismo apostaban por un discurso de pacificación que corría el riesgo de despolitizar las reivindicaciones.

En el transcurso del año 2013, dos años después de iniciado el movimiento, la cohesión del MPJD perdió considerablemente fuerza. Los enfrentamientos, las rupturas y los desencuentros entre quienes lideraban el movimiento aumentaron (ver anexo E), pero también entre las familias con estos últimos y entre las familias mismas por los liderazgos en disputa y por las tácticas y estrategias en las que no todos ni todas coincidían que debería ser la tendencia de la acción a seguir en el MPJD (Ameglio Patella, 2016). Comenzó entonces la segregación de las víctimas. Muchas de ellas se *recolectivizaron* en organizaciones de diferentes tamaños y con

diferentes objetivos específicos según la naturaleza de la victimización de quienes los conformaban y de cómo decidían relacionarse con el Estado. Pero, se puede afirmar que todos los colectivos que se formaron de personas en búsqueda de personas desaparecidas tenían como rasgo común el objetivo de dar con el paradero de sus cercanos o cercanas desaparecidas. Esto que parece una *verdad de Perogrullo* no lo es tanto. Si bien todos coinciden en que el objetivo es encontrar a quienes están desaparecidos o desaparecidas, los mecanismos, la interpelación al Estado, así como la búsqueda de la justicia o no, no son tan evidentes, tal como será desarrollado en las secciones siguientes.

Concretamente con respecto a la desaparición de personas, en prácticamente todo el país se comenzaron a constituir colectivos, la mayoría de familiares de víctimas de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada. Por ejemplo, Juan Carlos Trujillo, en el caso específico del colectivo que lleva el nombre de su madre, "Familiares en búsqueda María Herrera", tomaron la decisión de conformarlo porque sentían que en el MPJD ya habían agotado la vía de la denuncia y querían dar un paso más en la búsqueda de sus cuatro hermanos desaparecidos. Así lo expresa el mismo Juan Carlos Trujillo:

> En el 2013 viene Emilio Álvarez Icaza a México, mi mamá lo busca y le reclama: "Oye Emilio, ¿qué pasó? Estamos en el movimiento, hemos hecho grandes cosas, para acá y para allá, pero no encontramos a mis hijos. No pues me siento decepcionada, me siento triste". Y le dice Emilio en aquel momento: "No Doña Mary, el movimiento es el medio, no es el fin de su causa. O sea, ¿Usted qué es lo que quiere?" —"Pues buscar a mis hijos, buscar desaparecidos" —"Pues hagan una organización ustedes que se enfoque a la búsqueda de desaparecidos. Porque el movimiento abraza todas las causas y su causa es esa. Denle para allá y para arriba [...] Entonces a raíz de eso y con el trabajo con otras familias nace "Familiares en búsqueda María Herrera". (Entrevista, 1 de marzo del 2017).

Sin embargo, para Javier Sicilia, el hecho de que las víctimas se hayan "disgregado" constituye una "desgracia" ya que considera que la univocidad le hubiera dado fuerza a las víctimas mismas:

> Se formaron muchos colectivos por desgracia. Porque las víctimas compiten entre ellas y para el gobierno es importante tener dividido todo. [...] Los pone a pelear porque a unos los privilegia y a otros no y es la mejor manera de no solucionar nada. Si el Movimiento por la Paz tuvo fuerza fue porque fue la coalición que golpea directamente al gobierno y entonces entramos a un espacio político. El gobierno teme porque hay un movimiento político y entonces hace una ley de víctimas y entonces trata de responder al problema, pero al momento que se fractura ya no tiene por qué responder porque negocia. Negocia y no resuelve nada y las víctimas no entienden eso (Entrevista, el 28 de febrero del 2017).

A este razonamiento de Javier Sicilia se le puede encontrar razón puesto que desafortunadamente muchos de los colectivos que se formaron posteriores al MPJD fueron producto de rupturas con el MPJD mismo o entre militantes que disentían. Rupturas ocasionadas por las dinámicas internas o incluso motivadas por la intervención de los agentes del Estado. En palabras de Lucía Baca:

> Hay familias también que las utilizan por sus necesidades porque hay muchas necesidades. Entonces busca el Estado la forma de debilitar también a las familias porque así dividen. Entonces romper al movimiento es dividir ¡Tenía una fuerza! Rompieron la fuerza —éramos muchos—, la dividieron, la fracturaron. Has de cuenta que ese edificio lo partieron y se abrió, ¿no? Entonces se regaron, nos fuimos a donde podíamos. Por eso te digo, de las familias que estábamos en el movimiento se hicieron varias organizaciones [...] Pero también porque las necesidades de las familias son terribles y las utiliza el Estado y entonces encuentran un juego perverso. Empieza y te comenta: "hay es que la familia perenganita, ¿usted cree?". O sea, siempre busca la manera de saber con quién vas a [pelear] [...] O sea, siempre buscan la forma de estar dividiéndonos, ¿sí me entiendes? O sea, meten cizaña. Pero es la autoridad, sí. Ni caso tiene que me estén comentando del caso de la otra familia, ¿no? Para que veas hay una perversión terrible que busca la división. (Entrevista, el 20 de febrero del 2017).

Por supuesto que la división del movimiento debilitó la capacidad de interlocución con el Estado y generó rupturas importantes entre las familias, pero, por otra parte, el hecho de que se hayan formado una diversidad de colectivos que se posicionan en diferentes frentes, tal vez no es del todo negativo si en momentos coyunturales saben renuclearse para hacer una sola fuerza. Por ejemplo, en relación con las reparaciones a las víctimas de las desapariciones forzadas, Hepzibah Muñoz Martínez (2015) comparó los modos de acción del MPJD que tiene una envergadura nacional y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) que funciona en red por bloques estatales y del cual estudió el caso específico de Coahuila (ver anexo IV). Con un marco teórico basado principalmente en Négrier (2005) sobre los cambios de escala, pero también habiendo recurrido al marco teórico de MacAdam, Tarrow y Tilly (2001), la autora concluye que la estrategia del FUUNDEC es más efectiva para incidir en los agentes de las jurisdicciones subnacionales y así llegar a efectuar cambios puntuales en la legislación en materia de desaparición forzada. Esto debido a que su estrategia a escala le permite interactuar con las autoridades locales, sin olvidar una estrategia nacional y puntualmente en red con otras organizaciones. En contraparte, Muñoz Martínez coincide en que la estrategia del MPJD fue efectiva para posicionar el tema en la agenda nacional, para mediatizarlo y atraer la atención de aliados y aliadas, pero no para tener una incidencia en cambios en legislaciones locales.

Así, a partir de lo desarrollado en los parágrafos precedentes, se puede afirmar que el MPJD contribuyó a que se posicionaran en la arena pública nacional sujetos políticos —sujetas en su mayoría— que son víctimas de las violencias generadas por las políticas de seguridad nacional calderonista. Estas víctimas de Estado hallaron en el MPJD un lugar de encuentro, de formación y de lucha, tanto al interior del movimiento mismo como al exterior. Como resultado de la acción del MPJD se dieron grandes avances en materia de reconocimiento de las víctimas por parte del Estado, tal como consta la promulgación de la ley de víctimas. También se logró

atraer el interés de los medios de comunicación a la denuncia de los múltiples daños que la política de seguridad de Estado estaba generando. Sin embargo, pasado cierto tiempo, el MPJD fue perdiendo fuerza e interés para la agenda mediática. Además, las disputas internas fueron de tal envergadura que llevaron a la desarticulación de un solo movimiento para *re*organizarse en múltiples colectivos con resultados variados, pero que se mantuvieron en la arena de lo político para lograr el reconocimiento del problema en las regiones. Algunas de estas personas se posicionaron incluso en redes nacionales. Así, el trabajo sostenido de los colectivos de víctimas, mismo si ya no en una sola voz, hizo mantener el tema en los órganos de gobierno con el objetivo de seguir empujando para que se crearan mecanismos específicos de búsqueda de personas desaparecidas, pero desafortunadamente a pesar de todo el esfuerzo no lograron por mucho tiempo mantener el tema como prioritario en la agenda pública nacional.

De esta manera, entre finales de 2012 y finales de 2014 las víctimas fueron perdiendo visibilidad mediática pero se mantuvieron empujando en diferentes dependencias de gobierno y a diferentes escalas para que se les reconociera su condición de víctimas y se les hiciera justicia. Cuando sucedió la masacre de Iguala donde perecieron seis personas, al menos 27 resultaron heridas de gravedad y fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa (ver capítulo III, *supra*), el grave problema de las desapariciones forzadas en el país regresaría a la agenda mediática en primer plano y éstas serían visibilizadas como nunca antes en el país —ni en el continente—, generando movilizaciones de envergadura internacional sin precedentes. A partir de entonces y por lo menos hasta el momento de redacción de esta tesis —octubre de 2018—, las víctimas de desaparición forzada y sus familiares que les buscan han ocupado un lugar privilegiado en la agenda nacional —tal como será desarrollado en la segunda parte de este capítulo—. Sin embargo, a pesar de esta visibilización y puesta en la agenda pública, ni en el marco del MPJD, ni en el caso de Ayotzinapa, se logró disminuir la

violencia generalizada en el país ni tampoco la revictimización constante por parte de los agentes de Estado a las víctimas y sus familiares. Tampoco se lograron parar las masacres, ni la ejecución de desapariciones forzadas por acción directa o indirecta por parte de agentes de Estado, las cuales continúan reproduciéndose sin cese cada día.

SEGUNDA PARTE: El CASO AYOTZINAPA Y LA RECONFIGURACIÓN Y FOCALIZACIÓN DE LA LUCHA

En esta segunda parte del capítulo V, el objetivo es analizar cómo una vez que gracias al MPJD ya estaban puestas en la arena pública las violaciones a los derechos humanos y se habían establecido agendas de trabajo territorializadas en materia de desaparición de personas en algunos estados o municipios, en la agenda mediática las reivindicaciones de los colectivos y del movimiento había comenzado a perder fuerza. Sin embargo, las violencias de Estado y las violaciones graves a los derechos humanos no habían cesado. En septiembre de 2014 ocurrió una de ellas que conmocionó al país y al mundo, la desaparición forzada, colectiva, de 43 jóvenes estudiantes. Dada la trayectoria de lucha del sistema de educación al que pertenecían los estudiantes —las escuelas normales rurales—, en el imaginario social esta agresión no podía sino estar vinculada con el Estado. Además, en el estado de Guerrero la colusión de agentes del Estado con agentes delincuenciales tenía tiempo de ser considerada como común por lo que la imbricación de actores en esta desaparición parecía evidente (ver capítulo III, *supra*). La denuncia nacional e internacional dio un ímpetu sin precedente a la puesta en agenda pública de las desapariciones forzadas en el país. Prácticamente todas las fuerzas de izquierda y de los movimientos sociales recientes se sumaron a esta denuncia (ver anexo F).

A pesar de que este movimiento en particular tenía como eje de reivindicación únicamente la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, y que el posicionamiento del movimiento era de confrontación con el Estado y no de colaboración o interlocución con miras a intervenir en materia de política pública o legislación, éste generó un intersticio de oportunidad para los otros colectivos de familiares que tenían un trabajo permanente a nivel regional y local y se favorecieron

de esta coyuntura para fortalecer su trabajo con diversos organismos de Estado en materia de búsqueda de personas, de política pública y de legislación. Así, desde diferentes frentes, el movimiento por los desaparecidos estableció estrategias de presión hacia los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En materia legislativa, por ejemplo, surgió entonces el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México (MNDM), el cual fue coordinado y arropado por organizaciones no gubernamentales y de cooperación y tenía como principal objetivo incidir en la agenda legislativa para que se legislara en materia de desaparición de personas. Sin embargo, no todas las organizaciones de víctimas y sus aliados y aliadas tenían las mismas perspectivas de cómo se debía abordar el problema. Al interior de este proceso otras fuerzas que tenían pugnando desde hacía varios años porque se legislara en materia de desaparición forzada como la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada tenía una visión distinta a la avanzada por el MNDM. Desde su perspectiva —heredada del movimiento armado socialista mexicano—, se pensaba que en este proceso, debido a las definiciones y figuras de desaparición de personas, se estaba despolitizando la desaparición forzada como dispositivo de represión por parte del Estado, para dar cabida a figuras que no necesariamente corresponden a las violencias políticas. En este ámbito, diferentes fuerzas y posicionamientos políticos confluyeron para que, luego de un largo proceso, en noviembre de 2017, finalmente se promulgara la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual tampoco causó consenso. La ley entró en vigor en enero de 2018.

Por otra parte, la búsqueda de los estudiantes desaparecidos trajo en paralelo otro proceso en materia de búsqueda de personas desaparecidas: su búsqueda en fosas clandestinas. Efectivamente, motivados por la búsqueda de los estudiantes en las inmediaciones de Iguala, lugar de la desaparición, campesinos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) establecieron búsquedas

ciudadanas con el objetivo de dar con el paradero de los estudiantes. A su paso destaparon decenas de fosas dejando de manifiesto que había diversas regiones del país que habían devenido en cementerios clandestinos. A partir de ahí, diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas comenzaron con una nueva veta en la búsqueda de personas desaparecidas: su búsqueda en fosas clandestinas y comunes. Si la herencia de los movimientos que se gestaron durante la Guerra Sucia, tenían como estandarte de batalla la reivindicación de la aparición con vida de las personas que habían sido desaparecidas por el Estado —visión a la que adscribieron los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y que por ende ellos no participaron de las búsquedas—, el contexto actual de desconcierto ante quiénes son los perpetradores, llevó a las familias a establecer nuevas estrategias de búsqueda para hacer volver estos cuerpos ausentados como es la búsqueda de inhumaciones clandestinas. Como es lo propio de lo político, tal como será desarrollado en la última sección de este capítulo, esta nueva faceta del problema trajo consigo una serie de tensiones y disyuntivas entre los diferentes actores y actrices y los roles que deben cumplir en cuanto a la construcción de lo público en torno a esta problemática.

5.5 El impulso del movimiento por los 43 estudiantes de Ayotzinapa a la agenda de las víctimas: una relación en tensión

> El tema de los desaparecidos, que estaba presente y latente durante años, sostenido con algo mucho más que alfileres, por la lucha de los familiares aturdiendo los oídos finalmente sordos por la autoridad, se elevó a la enésima potencia con el caso Ayotzinapa
> José Reveles (2016, p. 7).

En esta sección el objetivo es analizar cómo el movimiento por Ayotzinapa le dio un impulso muy importante a la visibilización en la arena pública del problema de las desapariciones forzadas en México. La atención mediática y el flujo de movilizaciones tanto nacionales como internacionales no tienen precedente en la historia reciente del país. Sin embargo, a pesar de que este episodio contribuyó a colocar definitivamente el tema de la desaparición de personas en la agenda pública, esta atención particular que atrajo el caso de Ayotzinapa causó ciertas tensiones entre las otras víctimas quienes sentían relegados sus casos y la atención prestada a sus colectivos. Más allá de esta tensión, gracias a la visibilización de las violencias de Estado por la desaparición de los 43 estudiantes, la desaparición de personas devino en el tema prioritario de la agenda de los derechos humanos en México.

La noche del 26 de septiembre del 2014 cuando los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala, se produjo una movilización de fuerzas del Estado con un alto nivel de espectacularidad: todas ellas coordinadas para someter a los estudiantes (C. Grecko, 2015; T. Grecko, 2016; Hernández, 2016). Dada la trayectoria política y el espíritu combativo que caracteriza a las Escuelas Normales Rurales (Civera Cerecedo, 2006; Padilla, 2009), en un primer momento se pensó que el ataque fue originado por la acción política de los estudiantes (ver capítulo III, *supra*). Casi dos años después se supo que, al parecer sin ser su intención, los estudiantes habían tocado los intereses del narcotráfico —coludido con todas las fuerzas públicas que estaban presentes en Iguala—, al haber

requisicionado un autobús que aparentemente estaba cargado de heroína y que esta fue la razón que explica la saña con la que se orquestó la embestida (GIEI, 2016) (ver capítulo III, *supra*).

Mismo si la motivación de la desaparición no estuvo directamente relacionada con la actividad política de los estudiantes, era innegable la participación de agentes del Estado en ésta. La reacción en masa de la población para denunciar este hecho, que poco o nada se había movilizado hasta ese momento para evidenciar los diferentes tipos de violencia —incluidas las de Estado—, no tiene precedente (ver anexo F). Sin embargo, es difícil discernir qué es lo que realmente ocasionó esta decisión de denuncia pública masiva. Por ejemplo, entre el surgimiento del MPJD —el otro gran movimiento de denuncia— y *la noche de Iguala*, siguió habiendo masacres, ejecuciones extrajudiciales, desaparición por particulares y desapariciones forzadas con participación directa o indirecta de agentes del Estado y con diferentes grados de "espectacularidad". Por mencionar solo algunos casos: el 13 de mayo de 2012, 49 cadáveres mutilados fueron encontrados al lado de la carretera de Cadereyta, Nuevo León (Aguayo y Dayán, 2017). El 25 de enero de 2013, 17 integrantes del grupo musical Kombo Kolombia fueron desaparecidos en Hidalgo, Nuevo León; sus cuerpos con signos de tortura fueron encontrados días después (Proceso, 2014). El 25 de mayo del 2013, 13 jóvenes fueron desaparecidos tras una visita al bar Heaven en la capital del país, tres meses después sus cuerpos fueron hallados desmembrados en una fosa clandestina (Huffingtonpost, 2018b). El 30 de junio del 2014, en una bodega del municipio de Tlatlaya, 22 personas fueron ejecutadas por miembros del ejército mexicano cuando se encontraban maniatadas (Pérez Muñoz, 2015). Sin embargo, ninguna de estas agresiones y ni siquiera el MPJD mismo que agrupaba a centenas de víctimas y de familiares de víctimas habían logrado cimbrar al país como sí lo hizo la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La movilización masiva no se originó únicamente ni por la participación evidente de las fuerzas del Estado, ni por la masacre misma, tampoco por las decenas de heridos o por los asesinados —

aunque sí, las imágenes que circulaban del rostro desollado de Julio César Mondragón eran aterrorizantes e insinuaban en sí mismas escenarios posibles del destino de los estudiantes desaparecidos—, la movilización en el fondo se originó por la desaparición de los estudiantes, para reclamar su regreso.

Sin tener por intención escudriñar todos los factores que produjeron esta movilización y denuncia masiva, sí se pueden evocar algunos de los cuales pudieron haber contribuido. En primer lugar, en la memoria colectiva mexicana está muy presente la masacre a las juventudes perpetrada por el Estado mexicano el 2 de octubre de 1968, la cercanía de la fecha en la que ocurrieron los hechos —26 y 27 de septiembre— y que hayan sido jóvenes estudiantes, seguramente tuvo un impacto importante en la población, en particular la estudiantil, una sensación de *déjà vu*. Pero además, sin duda, la trayectoria misma de movilización de las normales rurales en México (ver capítulos II y III, *supra*), las cuales activaron sus redes desde el momento mismo en que se enteraron de la dimensión del ataque y que permitió emitir la alerta temprana, también es un factor importante. Estas redes incluían a las organizaciones de base, campesinas y movimientos urbano-populares quienes tradicionalmente tienen la capacidad de movilizar a grandes cantidades de personas. Por otra parte, algunas características identitarias de los estudiantes eran compartidas por los tres grandes movimientos sociales que habían surgido en los últimos tiempos en el país y sus bases también contribuyeron de manera determinante con la movilización tanto nacional como internacional. Por ejemplo, el movimiento Zapatista por la condición de indígenas de muchos estudiantes desaparecidos y la historia misma de las escuelas normales rurales y su relación con los movimientos guerrilleros. El MPJD por su condición de víctimas de desaparición forzada y el movimiento #YoSoy132[187] por su

---

[187] A mediados de 2012 en el marco de las campañas electorales, Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la presidencia de la República Mexicana, fue interpelado por estudiantes de la universidad privada Iberoamericana durante su participación en un foro en dicha universidad. Para desacreditar

condición de estudiantes. La movilización de estas bases sociales creó un efecto "bola de nieve" que puso por varios meses —incluso años— en el centro de la agenda pública nacional el tema de las desapariciones forzadas en el país, logrando que se diera efectivamente una *subida en generalidad* (Boltanski y Thévenot, 1991) de la causa que incluso rebasó las fronteras nacionales (ver anexo F)[188].

Años antes, en el marco del MPJD el tema de la desaparición de personas había comenzado a tomar relevancia pero ésta no era la reivindicación principal. Muchos de los colectivos que surgieron del MPJD, trabajaron arduamente para colocar y mantener el tema de las personas desaparecidas en la agenda pública, pero fue realmente hasta Ayotzinapa que públicamente se tomó conciencia de la dimensión de esta problemática y se comenzó a construir la percepción de que la desaparición de

---

esta intervención, el equipo de Peña Nieto aseguró que quienes habían realizado la acción eran agitadores pagados por partidos políticos de oposición y que ni siquiera eran estudiantes. En respuesta, 131 estudiantes de la Iberoamericana grabaron un vídeo con credencial de estudiante en mano para reivindicar su acción y mostrar que, contrariamente a lo que sostenía el equipo de campaña del candidato del PRI, que además era la versión que habían retomado los grandes medios de comunicación, efectivamente eran estudiantes. Inmediatamente en las redes sociales apareció el hashtag #YoSoy132 para respaldar la acción de las y los jóvenes y sumarse al movimiento. Poco a poco esta primera acción de denuncia de las versiones hegemónicas de los medios de comunicación se fue convirtiendo en un movimiento social organizado a través de las redes sociales, el cual logró consensar un pliego petitorio de seis puntos que en esencia buscaba la democratización de los medios de comunicación (Animal Político, 2012a). El movimiento alcanzó una dimensión internacional con la movilización de estudiantes mexicanos que estudiaban en el extranjero, organizados a través de "células" (Proceso, 2012b). Para un análisis del movimiento #YoSoy132, ver: (Rivera Hernández, 2016).

[188] Para un análisis del movimiento social por Ayotzinapa y su envergadura, entre otros, ver: (Avalos González, 2017; Gravante, 2018; Poncela, 2015; Reynoso y Alonso, 2015). Para un análisis de la trayectoria de vida de los estudiantes desaparecidos, entre otros, ver: (de Mauléon, 2015; Maldonado, 2015; Mónaco Felipe, 2017). Para un análisis político y/o periodístico de las violencias de Estado de estas desapariciones forzadas, entre otros, ver: (ACNUDH, 2018; Aguayo, 2015; Calveiro, 2018; Gibler, 2016; Hernández, 2016; T. Grecko, 2016; Valenzuela (coord.), 2015; Velasco-Yáñez, 2015). Para un análisis del rol del arte en la movilización, entre otros, ver: (Córdova Rojas, 2016; González Hernández, 2017). Finalmente, para un análisis de las implicaciones psicosociales de la desaparición de los estudiantes, ver: (Antillón Najlis, 2018).

personas en el país debía ser considerada como un problema público prioritario. En ese sentido, de acuerdo con Javier Sicilia, el MPJD exhibió el problema de los asesinatos y las ejecuciones forzadas, Ayotzinapa el de la desaparición de personas y faltaría aún señalar enfáticamente los desplazamientos forzados que la política presidencial calderonista trajo consigo:

> A raíz del asesinato de mi hijo y de sus amigos pues logramos convocar y darle voz a lo que estaba silenciado. Partimos de los asesinados porque mi hijo fue asesinado y lo que sube como tema fundamental son los asesinados, pero nosotros hablamos de desaparecidos, hablamos de desplazados, ¿no? Incluso teníamos entonces el recuento de 10 mil desaparecidos. Pero el tema aunque estaba allí no se llegó a posicionar ni en la consciencia política, ni en la conciencia ciudadana. Tuvo que llegar Ayotzinapa. Un poquito antes de Ayotzinapa ya había un recuento, había 150 o 120 mil, no sé, asesinados y 30 mil desaparecidos, una cuenta peregrina. Pasa Ayotzinapa y el tema de los desaparecidos se hace mucho más álgido. Al grado que ya rebasó los asesinados, ¿no? Ahorita el tema son los desaparecidos. Y falta el otro, no ha habido consciencia de los desplazados. (Entrevista, el 28 de febrero del 2017).

Si efectivamente el MPJD había comenzado a colocar el tema en la agenda, en el marco del movimiento por Ayotzinapa la denuncia pública se hizo masiva y transcurrió en un tono muy diferente al del MPJD que le antecedió. Los padres y madres de Ayotzinapa, herederos de la tradición de confrontación de los movimientos campesinos, del movimiento armado socialista mexicano y de los colectivos de familiares de víctimas que surgieron en la Guerra Sucia, desde el principio tuvieron clara su postura política y su emplazamiento de no negociación con el Estado ante la desaparición forzada de los muchachos fue firme. Ésta hacía eco a la consigna acuñada en los años 1970 en el marco de las denuncias del *terrorismo de Estado* (Radilla Martínez y Rangel Lozano, 2012): "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Los diferentes movimientos sociales que acompañaban el reclamo del regreso de los estudiantes, los organismos de defensa de derechos humanos que se sumaron a su causa, las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, respetaron esta postura (ver anexo F).

Los padres y madres de Ayotzinapa como colectivo decidieron no hacer uso de los beneficios institucionales que los movimientos sociales de víctimas que les antecedieron habían logrado, por ejemplo no aceptaron recibir los apoyos previstos en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) para las víctimas, puesto que su posición ante el Estado —identificado como responsable de la desaparición forzada de los estudiantes—, fue de confrontación y no de colaboración o de sumisión a sus estructuras. De hecho en diciembre de 2014, al lado del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del movimiento zapatista nombraron al Estado como el enemigo común (ver anexo F). Por otra parte, ante la revictimización constante de la que las y los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa habían sido objeto por parte del Estado y ante la desconfianza hacia las instituciones mexicanas por parte de las víctimas mismas y de la comunidad internacional que apoyaba el movimiento, se solicitó la ayuda de expertos internacionales en varios aspectos, lo que en sí mismo creó un precedente a futuro para otros casos. Por ejemplo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fue solicitado para realizar peritajes en el lugar que el gobierno señalaba como el destino final de los muchachos —versión que ha sido ampliamente desmentida por diferentes pruebas científicas, ver: (GIEI, 2016) (ver también anexo F)—; el análisis de ADN fue realizado por el Laboratorio Central de ADN de Austria adscrito a la Universidad de Innsbruck y, el mecanismo más significativo, es que la CIDH constituyó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación profunda del caso. Este último mecanismo, integrado exclusivamente por extranjeras y extranjeros[189], pionero en México, fue designado en común acuerdo entre las víctimas y sus representantes, el

---

[189] El equipo de cinco expertos estaba conformado por: Alejando Valencia (Colombia), Ángela Buitrago (Colombia), Claudia Paz y Paz (Guatemala), Francisco Cox (Chile), Carlos Martín Beristain (España). Sus trayectorias profesionales pueden consultarse en el siguiente enlace: http://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa/miembros-del-giei (Última consulta, 2 de agosto del 2018).

gobierno mexicano y la CIDH. Cabe destacar que en el momento de la designación de este grupo, Emilio Álvarez Icaza, activista del MPJD, fungía como Secretario Ejecutivo de la CIDH[190].

Así, sin duda alguna puede considerarse que Ayotzinapa puso en el centro de la agenda pública del país el problema de la desaparición de personas y que esto mismo atrajo la solidaridad de otros sectores de la población y permitió una extensión del marco de acción colectiva del movimiento por los desaparecidos en general (Morales Hudon, 2016). Sin embargo, el hecho de que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa haya beneficiado de tanta visibilidad y de mecanismos especiales, generó cierta incomodidad en otras víctimas que en algunos casos tenían varios años buscando a sus familiares y no habían logrado atraer a sus casos tanta atención mediática ni institucional. Esta sensación se traducía en frases del tipo "No solo es Ayotzinapa, somos miles" o "Son 43 y miles más". De hecho, el propio Javier Sicilia, sostuvo, por ejemplo: "Yo lo que le reprocho a Ayotzinapa es que no hicieron de los 43 el tema de la nación, de todos los desaparecidos de esta nación" (Sicilia, 2017). Este malestar lo hizo público en una "Carta abierta a los padres de Ayotzinapa" publicada en la revista Proceso (2015). El siguiente párrafo resume en esencia las preocupaciones enunciadas por Sicilia, quien también reivindicaba su condición de víctima:

> Desde que sucedieron sus tragedias personales me ha preocupado que ni ustedes ni las organizaciones que los acompañan directamente hayan abrazado, en el dolor de sus 43 hijos desaparecidos, el sufrimiento de las víctimas de

---

[190] Para los informes de la investigación del GIEI y sus recomendaciones al Estado mexicano, ver: (GIEI, 2015, 2016). Para una reflexión sobre el proceso de investigación del GIEI, la relación con las víctimas y las trabas del gobierno mexicano a su labor, ver: (Beristaín, 2017). Para una propuesta sobre metodologías de investigación en casos de violaciones graves a los derechos humanos a partir de la experiencia de investigación del caso Ayotzinapa, ver: (Beristain *et al.*, 2017).

> toda la nación, y que a partir de allí no hayan buscado una unidad nacional para proponer un programa político-económico mínimo que en un mediano plazo nos permita encontrar una política de justicia, de seguridad y de paz que deje de producirlas y que pueda salvar la vida democrática de la nación (Sicilia, 2015).

Por otra parte, en el mismo sentido que Sicilia, pero no tan solo en el ámbito de la visibilidad de los casos, sino con respecto a la atención institucional, para algunas organizaciones que acompañaban casos de desaparición en el orden de lo jurídico, la necesidad de algunas instituciones como la PGR de dar respuesta a la crisis política que se generó con Ayotzinapa, hizo que se detuvieran algunos procesos particulares. Por ejemplo, Rodolfo Córdova de la FJEDD, sostiene que un mecanismo como el GIEI, que se creó expresamente para Ayotzinapa, se tradujo en prácticas dilatorias de algunos de los procesos que ellos tenían en marcha. Por ejemplo, en el caso concreto de su trabajo con víctimas desaparición en migración y que al momento de los crímenes de Ayotzinapa estaban en vías de poner en marcha un mecanismo de justicia trasnacional en concierto con la PGR:

> Incluso lo de Ayotzi sí vino a paralizar mucho las cosas que teníamos en marcha porque la PGR vio eso como el caso prioritario y fue congelando todos los demás acuerdos que teníamos para casos de desaparecidos. Entonces aunque sí ha tenido un impacto en términos mediáticos, en nuestro caso no es algo que haya cambiado para bien. O sea que haya abierto más puertas, no, al contrario. Creo que el temor al GIEI, o sea, lo que hizo el GIEI fue evidenciar los riesgos que tenía la autoridad al dejar entrar a nuevas autoridades en los procesos de investigación. Entonces lo que hizo fue cerrar más [las puertas]. [...] Algunos [en PGR] sí nos decían está muy cabrón, déjenos avanzar en esto. Y si no pues nada más te daban largas, nos daban largas. (Entrevista, el 30 de enero de 2017).

Estos recelos por parte de las víctimas, en cierta manera entendibles, o estas coyunturas de postergación de casos a nivel institucional —que pudieron haberse dado por cuestiones de incapacidad de respuesta institucional o que fueron movilizadas como estrategias de dilación voluntarias—, generaron tensiones entre las

víctimas mismas y entre algunas de las organizaciones que les acompañaban. Carlos Martín Beristain, le encuentra razón al sentimiento de recelo de las familias que también tenían familiares en situación de desaparición y que no habían beneficiado de una visibilidad como la que los 43 estudiantes de Ayotzinapa tuvieron:

> Bueno yo entiendo perfectamente esa percepción de los familiares, ¿no? Ese sentimiento de los familiares. También creo que es una percepción que responde a que obviamente Ayotzinapa tuvo una fuerte movilización, generó una crisis política en el país, ¿no?, que no generan los otros casos que son igual de importantes, ¿no? Que sea un desaparecido, dos desaparecidos, son igual de importantes para sus familiares y para el propio hecho de desaparición. Pero Ayotzinapa tuvo la capacidad de generar una crisis política en el país de un caso al que había que dar respuesta y de un fenómeno más amplio que había que dar respuesta. Ayotzinapa tuvo digamos la audacia de que quienes formaron parte: los representantes de las víctimas, la Comisión Interamericana, los agentes del Estado, discutieron sobre la puesta en marcha de un mecanismo como el GIEI y obviamente eso dio una visibilidad. Y él cómo nosotros trabajamos también en el caso dio una visibilidad al caso mucho mayor. Hicimos una asistencia técnica con una dimensión pública y esa puso el caso digamos políticamente muy en el centro de la discusión en el país. (Entrevista, el 3 de febrero del 2017).

En este entramado de tensiones, Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, no está de acuerdo con estas críticas que les fueron dirigidas como movimiento. Ella sostiene que si bien es cierto que ellas y ellos reivindican el regreso particular de sus hijos, también están conscientes que en el país existen miles de personas desaparecidas y que sí han llamado a crear una agenda común, pero que las dinámicas mismas de cada uno de los grupos ha impedido que este llamado haya tenido un verdadero eco:

> Nosotros como padres hemos salido a difundir y les hemos dicho a todos que no se queden callados, que levanten la voz. Hemos llamado a la unidad, a que todos estemos unidos pero es difícil con las organizaciones. Cada quien, yo creo, tiene su objetivo o su manera de cómo llevar su lucha y ha sido complicado. Nosotros como padres pues nuestra exigencia siempre va a ser encontrar a nuestros hijos y eso quizá a muchos no les gusta, dicen por qué

> nada más hablan de los 43. Nosotros no hablamos nada más de nuestros hijos, hablamos de todos, sabemos que hay muchos desaparecidos. Oficialmente 27 mil desaparecidos [191]. Nosotros hablamos de nuestros hijos porque son nuestros hijos y porque tenemos que gritar el nombre, pero también sabemos que hay muchos desaparecidos, que hay muchas injusticias aquí en México, pues deberíamos de unirnos pero ha sido complicado. Llamamos a la asamblea para unificarnos pero cada quien trae su puntos de vista y es muy difícil ahora sí que hacer una sola unidad. Algunas personas ya tienen mucho tiempo que tienen personas desaparecidas y llevan su lucha muy aparte y está muy bien y hemos hablado con ellos y llevamos una buena relación pero ha sido un poco complicado ahora sí que unirse totalmente (Entrevista, el 14 de enero del 2017).

Así, si bien es cierto que el movimiento de Ayotzinapa no se fundió en una sola voz con los múltiples colectivos presentes en el país, su movilización sí dio apertura a espacios de visibilización y de incidencia de los otros grupos. Además, también se han hecho presentes en algunos momentos coyunturales para mostrar su apoyo y respaldar el movimiento por los desaparecidos en general y no solo por sus hijos en particular. Por ejemplo, cada año las madres de Ayotzinapa participan en la marcha que a iniciativa de FUUNDEC, las madres de personas desaparecidas realizan el 10 de mayo, día de las madres en México, para enfatizar la ausencia de sus hijos. También, por ejemplo, una comisión de madres y padres se hicieron presentes al momento de la exhumación de fosas en Tetelcingo para mostrar su sostén a las familias en este proceso, entre otras muchas acciones que muestran el respaldo que como colectivo dan a otras reivindicaciones específicas en pro de las víctimas de desaparición y desaparición forzada en el país.

De igual manera, en el marco de la fuerza que el movimiento por Ayotzinapa tomó, se pusieron en marcha diversos mecanismos que favorecieron una apertura de la

---

[191] Al momento de la entrevista, en enero del 2017.

estructura de oportunidades políticas[192] (McAdam *et al.*, 2001) que los otros grupos supieron asir. Por ejemplo, a poco más de un año de la desaparición de los jóvenes, para tratar de darle salida a la crisis, en diciembre de 2015, Enrique Peña Nieto como jefe del Ejecutivo, envío al Senado una iniciativa de ley para prevenir las desapariciones forzadas. Los padres y madres de Ayotzinapa decidieron mantenerse al margen de este proceso legislativo que consideraban como una simulación (Legideño, 2017), pero la mayoría de los otros colectivos sí decidieron entrarle por esa vía. Incluso crearon coaliciones para presionar a las cámaras alta y baja para que incluyeran en la discusión legislativa sus insumos propuestos para la iniciativa de ley. De hecho, esta fue una oportunidad que muchas organizaciones esperaban por lo menos desde finales de los años 1990, cuando se emitió la primera iniciativa de ley en ese sentido (Mata Montiel, 2017).

Por otra parte, por poner otro ejemplo, instituciones donatarias como la Fundación MacArthur México, a partir de los eventos de Iguala pusieron a disposición de las organizaciones de víctimas fondos extraordinarios para contribuir con su demanda de búsqueda de sus familiares y de acceso a la justicia. Este fondo especial por dos años, dio acceso a algunas organizaciones a vincularse por primera vez con esta fundación —a pesar de que llevaban años trabajando como organizaciones de la sociedad

---

[192] La estructura de oportunidades políticas hace referencia a las coyunturas que fomentan o desincentivan la organización de la acción colectiva a nivel nacional o subnacional. Este concepto pone el énfasis en los factores externos que permiten acceder, o no, a los organismos de decisión, a la posibilidad de contar con aliados y aliadas estratégicos e influyentes en el campo de lucha y a los ritmos políticos internacionales que pueden influir en el efecto bola de nieve (McAdam *et al.*, 2001). La ignominiosa coyuntura de Ayotzinapa y el movimiento social que surgió en torno a ésta, estableció un clima político favorable para que los otros colectivos de familiares pudieran hacer pasar sus demandas en la agenda mediática primero y en la estructura institucional después.

civil— y así obtener fondos para llevar a cabo sus proyectos. En palabras de Liliane Loya, Directora adjunta de la Fundación Mac Arthur México:

> En ese momento se puso en el mapa algo que ya venía sucediendo en desapariciones en México. Entonces a partir de 2015 la fundación anunció una convocatoria para apoyar el trabajo de organizaciones civiles que ayudan a familias en el proceso de justicia y de búsqueda de la verdad. [...] Fueron nueve [organizaciones que se apoyaron] en total. Ocho de las nueve recibían por primera vez el apoyo de la fundación. En Chihuahua, Justicia para Nuestras Hijas; Paso del Norte en Ciudad Juárez; en Nuevo León, CADHAC; en Coahuila, Fray Juan de Larios; en Guerrero, el Centro Morelos; CEPAD[193] en Jalisco; Voces Mesoamericanas en Chiapas; SERAPAZ a nivel nacional; también el Equipo Mexicano de Antropología Forense. La novena fue el Centro de Colaboración Cívica, a ellos ya los conocíamos. Su función ha sido facilitar reuniones, acercamientos entre las organizaciones, intercambio de experiencias sobre búsqueda, por ejemplo entre expertos de otros países de América Latina y las organizaciones. Preparar insumos para que las familias y organizaciones civiles puedan entender qué cosas hay que tomar en cuenta cuando se está hablando de Comisión Nacional de Búsqueda, de servicios periciales independientes, etcétera. (Entrevista, el 20 de marzo del 2017).

De esta manera, la grave coyuntura de Ayotzinapa, además de darle una amplia visibilidad en México y en el extranjero a la severa crisis de derechos humanos que atraviesa el país, contribuyó a colocar definitivamente en la agenda pública la emergencia humanitaria de las desapariciones de personas en México y dio apertura a espacios de incidencia directa de los otros grupos. Los mecanismos específicos que se pusieron en marcha para tratar de establecer una verdad jurídica para el caso, aunado al cúmulo de trabajo de los familiares de las víctimas que habían tratado de colocar en instituciones específicas esta problemática, el tema de la desaparición de personas y en particular el de la desaparición forzada, tomó una relevancia sin precedentes en el país. De esta manera, las y los familiares de las víctimas se afirmaron como sujetos

---

[193] Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A. C.

políticos, al mismo tiempo que ganaron importantes espacios de interlocución, sobre todo en la agenda mediática, en la agenda legislativa y en cuanto a medidas de reparación en esta pugna por el regreso de los cuerpos ausentes de sus personas cercanas.

5.6 *Coaliciones de causa*, la agenda legislativa por una ley general de desaparición forzada

En esta sección el objetivo es analizar cómo a partir de la puesta en agenda pública de las desapariciones forzadas como un tema de atención prioritaria en materia de violaciones a los derechos humanos, luego de varios intentos, éstas lograron ser posicionadas en la agenda legislativa favoreciendo la creación de *coaliciones de causa* (Sabatier, 2010) con la finalidad de legislar en la materia. Sin embargo, en el proceso de discusión de un proyecto de ley, los diferentes posicionamientos políticos frente al tema se hicieron latentes en donde los *sujetos políticos* desde su comprensión, sus posicionamientos y perspectivas del problema argumentaron sobre la pertinencia o no de incluir ciertas categorías jurídicas como por ejemplo, la *de desaparición de personas cometida por particulares*. Al final, la relación de fuerzas que se dio en esta coyuntura específica es la que determinó qué es lo que debía ser considerado cómo prioritario y desde qué perspectiva debía ser abordado el problema. En las líneas siguientes se analiza el proceso de construcción de esta ley y algunos de los posicionamientos que fueron expresados por las mismas organizaciones y colectivos en torno a este desarrollo.

En ese sentido, los colectivos de familiares de personas desaparecidas como movimiento nacional de víctimas —con sus diferentes tendencias—, una de las prioridades que se plantearon fue incidir en la agenda legislativa. Cuando en 2015 a raíz de la crisis política ocasionada por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto envió al Congreso —en su calidad de jefe del Ejecutivo—, la iniciativa de ley en materia de desaparición forzada, para muchas

organizaciones de víctimas representó una oportunidad que esperaban desde hacía tiempo y que no dejaron pasar. En el marco de ese proceso se formó una *coalición de causa* (Sabatier, 2010) que logró reunir a la mayoría de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, ONG, centros de derechos humanos, fundaciones, senadoras, asesores técnicos, etc., para lograr que dos años después fuera finalmente promulgada la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

A nivel estatal bajo el impulso de algunos movimientos sociales regionales ya existían leyes específicas en la materia, por ejemplo en Guerrero desde 2005 se había promulgado la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas, la cual había sido redactada en colaboración con el centro Tlachinollan (García Laguna, 2017). En el estado de Nuevo León, en noviembre de 2012, se aprobó la Ley contra la Desaparición Forzada de Personas a raíz de la presión ejercida por CADHAC, con asesoría para la redacción de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (Morales, 2018). En el estado de Coahuila, en mayo del 2014, se promulgó la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas bajo el impulso del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y FUUNDEC, también con asesoría de ACNUDH (Martínez Fernández, 2018). Sin embargo a nivel federal ningún esfuerzo en ese sentido había prosperado con satisfacción. Por ejemplo, con participación de la sociedad civil, en 1999 AFADEM-FEDEFAM había colaborado con un grupo legislativo para presentar una primera iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados (Mata Montiel, 2017), ésta no logró pasar al pleno. En el 2000, Rosario Ibarra en su calidad de diputada federal había enviado una propuesta de modificación al Código Penal Federal para que se incluyera el delito de desaparición forzada, lo cual se había logrado solo parcialmente (Mata Montiel, 2017). En el 2004 el Diputado Federal por el PRD Abdallán Guzmán Cruz, que tiene a cinco miembros de su familia desaparecidos del periodo de la Guerra Sucia, también había presentado una iniciativa

al Congreso para legislar sobre desaparición forzada (García Laguna, 2017; Cruz Guzmán, 2017), la cual tampoco fue discutida en el pleno. En 2012, luego de los encuentros nacionales de formación que se dieron a raíz del MPJD, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada también había redactado una iniciativa de ley con el objetivo de que diputados de la fracción de izquierda la retomaran (Cerezo Contreras, 2017), cosa que antes de 2015 no había sucedido[194].

Desde el Senado propiamente, la senadora Angélica de la Peña de la bancada del PRD, en al menos tres ocasiones —la primera incluso antes de los eventos de Iguala— había intentando colocar una iniciativa de ley en la materia ya que como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, recibía múltiples denuncias en cuanto a desapariciones de personas. Sin embargo, en un primer momento había presentado una propuesta de ley federal y fue a partir de que comenzó a incluir a

[194] De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), además de las iniciativas de ley que fueron trabajadas con la sociedad civil, el Diputado Juan Romero Tenorio, del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), presentó el 29 de septiembre del 2015, una iniciativa de Ley para prevenir y castigar la desaparición forzada. De igual manera, el 9 de diciembre del 2015, el Diputado Alejandro Ojeda Anguiano, de la fracción parlamentaria del PRD, presentó una iniciativa de Ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas. Asimismo, el 8 de septiembre de 2016, 36 diputados de la fracción parlamentaria de MORENA presentaron la iniciativa de Ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares; y reforma a los artículos 348 y 350 bis 3 a 350 bis 5 de la Ley General de Salud. En cuanto al Senado, la Senadora Angélica de la Peña, de la fracción parlamentaria del PRD, el 13 de febrero del 2014, presentó un proyecto de Ley federal para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas. El 18 de marzo del 2015, el Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN, presentó una iniciativa de ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición forzada. Nuevamente el 24 de marzo del 2015, la Senadora de la Peña, emitió una iniciativa de ley, pero esta vez en lugar de federal tenía la vocación de ser general: Ley general para prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada de personas. El 16 de abril del 2015 el Senador Omar Fayad Meneses, con el aval del grupo parlamentario del PRI, presentó la iniciativa de Ley general para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas. Finalmente, por tercera vez, la Senadora Angélica de la Peña, pero esta vez al lado de la Senadora Adriana Dávila Fernández (PAN) y Layda Sansores San Román, Partido del Trabajo (PT), presentaron el 8 de septiembre del 2015 el proyecto de decreto para una Ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas cometida por particulares. Ver: Sistema de Información Legislativa (http://sil.gobernacion.gob.mx). (Última consulta: 29 de julio del 2018). Agradezco a Mireya Landero Orduña por haberme enviado gran parte de esta información.

familiares de víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil en el proceso legislativo que dimensionó que una ley federal no bastaba y que había que abogar por una ley general[195]. En palabras de la misma Angélica de la Peña:

> Cuando yo llego en 2012 al Senado de la República encuentro una serie de reclamos que no habían sido atendidos y nos aprestamos a revisar el Código Penal Federal para hacer las adecuaciones que nos permitieran atender el problema de la desaparición forzada que estaba prácticamente invisibilizada en el sexenio pasado. Yo empiezo a recibir como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos una gran cantidad de personas que llegan a plantearme sus problemas. El acercamiento con familiares de personas desaparecidas empezó a crecer y pronto empiezo a atender a organizaciones, incluso familiares de personas desaparecidas que se integran con otras familias y empiezan a organizarse sobre todo a partir del Movimiento por la Paz [...]. Yo empiezo a revisar la legislación, me doy cuenta que el Código Penal Federal no es suficiente. Trabajo un proyecto de ley federal de desaparición forzada. Éste lo presento ante el pleno, invito a las organizaciones y a los especialistas, muchos de ellos con los que yo ya venía trabajando desde hace tiempo y empiezo a discutir con ellos este proyecto de ley federal y entonces todas me dicen que no era suficiente una ley federal, sino que se tenía que trabajar una ley única para todo el país. Yo les planteé que eso iba a ser muy complicado porque teníamos que reformar la Constitución y todos me dijeron pues hay que reformar la Constitución, usted puede (Entrevista, el 22 de marzo del 2017).

En ese sentido, por parte de las familias, desde que se había promulgado la Ley General de Víctimas, diferentes colectivos que se habían formado a lo largo del país a raíz del MPJD, habían tratado de impulsar la agenda legislativa desde diferentes espacios, incluso a partir de la misma Senadora Angélica de la Peña, sin obtener los

---

[195] Las leyes federales son aquellas que rigen a instituciones que tienen un carácter nacional y tienen un ámbito de competencia que comprende a toda la federación de manera estandarizada. Las leyes generales, por su parte, tienen ordenamientos jurídicos diferenciados que competen a los diferentes niveles de gobierno: federales, estatales y municipales, así como sectoriales: salud, educación, etc. Cada uno de los niveles de gobierno y sectores tiene facultades y obligaciones con funciones delimitadas, pero que en algunos casos previstos por la misma legislación pueden ser realizadas de manera conjunta. Ver: (Gutiérrez Parada, 2012).

resultados buscados. De esta manera, la coyuntura de la iniciativa de ley de Peña Nieto representaba entonces una oportunidad única para tratar de incidir en materia legislativa luego de múltiples intentos.

Una vez dadas estas condiciones, Angélica de la Peña retomó la iniciativa y lideró la puesta en marcha de mesas de trabajo que incluían a representantes de colectivos de familiares y asociaciones civiles. Estas mesas de trabajo trataban de ser inclusivas de todas las tendencias y posicionamientos políticos, al mismo tiempo que se buscaba integrar en un solo documento aspectos relevantes de todas las iniciativas de ley que habían sido presentadas al Congreso. En palabras de Angélica de la Peña:

> Esta propuesta, además de que debe dictaminar todas las iniciativas, incluida la mía, incluida la del Ejecutivo, incluidas las de las organizaciones, también empezamos a articular en el dictamen la discusión con las familias con las que yo mantengo una mesa de trabajo desde hace mucho tiempo y desde ahí estamos trabajando artículo por artículo, mecanismo por mecanismo para tener lo más pronto posible esta ley que es una ley muy compleja y muy completa. [...] Este grupo de trabajo que tenemos es un grupo plural y representa a las diferentes tendencias que hay en el propio movimiento porque efectivamente no es homogéneo, tiene diferentes características y puede haber incluso propuestas contrapuestas entre ellas mismas. Parte del reto de la política parlamentaria es que tenemos que escuchar a todas las voces y en la construcción de un precepto de ley, es muy importante buscar las coincidencias y dirimir en cómo resolver las diferencias y esas plasmarlas y concretarlas en un texto de ley (Entrevista, el 22 de marzo del 2017).

Efectivamente, las diferencias axiológicas y de posicionamientos políticos impidieron formar una sola alianza por parte de las víctimas. Los colectivos y las organizaciones de la sociedad civil si bien trabajaron en conjunto para que se legislara en materia de desapariciones forzadas, éstos se alinearon en al menos dos grandes coaliciones, además de la participación de otras organizaciones históricas —las *nornas* del pasado— que no se sumaron a ninguna de éstas. Todas las tendencias tuvieron la intención de tener una incidencia directa en las mesas de trabajo pero también presionar a través de otros espacios como las calles, participación en foros

académicos, los medios de comunicación y las redes sociales (Cerezo Contreras, 2017; Córtez González *et al.*, 2018). Por una parte estaba la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, conformada principalmente por organizaciones de base y del movimiento popular, la cual continuó reforzando su propuesta de ley que había comenzado a redactar desde 2012 (Cerezo Contreras, 2017). Esta campaña desde su formación en 2010 fue liderada principalmente por el Comité Hasta Encontrarlos y el Comité Cerezo (Ver anexo IV).

Por otra parte, en este contexto, como principal objetivo de incidir en materia legislativa, se conformó una alianza nacional bajo el nombre de Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), integrado por cerca de cincuenta colectivos de familiares e igual número de organizaciones acompañantes: ONG, Centros de derechos humanos, etc. (Córtez González *et al.*, 2018). Este último es cercano a la ideología católica y a las dinámicas de las ONG, y es principalmente coordinado por Serapaz. Bajo el hashtag #SinLasFamiliasNo, el MNDM más que presentar una iniciativa de ley en sí, presentó un decálogo de ocho puntos que la ley en materia de desaparición forzada debía contener. En ellos reclamaban el derecho de las familias a participar de todo el proceso legislativo, así como que debería quedar estipulado en la ley la facultad de la participación activa de las familias y organizaciones de la sociedad civil en los procesos de búsqueda, investigación e identificación[196].

Además, por otra parte y sin formar ninguna coalición, estaban las organizaciones históricas como AFADEM-FEDEFAM que tenían su propia agenda también. Por ejemplo, éstas pedían que se incluyeran en la ley consideraciones específicas para las

---

[196] Para un análisis de la conformación del movimiento, así como sus procesos internos y de incidencia política, ver: (Córtez González *et al.*, 2018).

personas desaparecidas durante la década de 1970 —los detenidos-desaparecidos— y que quedara estipulada en la ley la imprescriptibilidad de esta violación múltiple y continuada de los derechos humanos para que en ella cupiera la posibilidad de justicia a los crímenes del pasado (Mata Montiel, 2017).

Por otra parte, y también digno de mención, puesto que también ocupaban espacios en el espectro de lo político, estaban las organizaciones que no participaron de este proceso legislativo ya sea porque compartían la visión del movimiento por Ayotzinapa que consideraba este proceso como una simulación, tal como fue mencionado líneas más arriba, u organizaciones surgidas producto de las violaciones a los derechos humanos del pasado como el Comité Eureka o H.I.J.O.S. México. En palabras de Jorge Gálvez del Comité Eureka, por ejemplo:

> Cuando cambie la situación en este país, no necesitamos de tanta ley, aquí lo que se necesita es una voluntad de hacer justicia y la justicia no necesita tantas leyes. Entonces te modifican tu lenguaje, dicen levantón, si tú esa palabra la utilizas en un instrumento que supuestamente, tú crees que es jurídico, no lo es porque levantón no es nada. Tienes que hablar detención-desaparición. Otra de las cosas que están utilizando es la desaparición que cometen particulares, particulares entre particulares es secuestro, ¿sí? No es desaparición. Entonces te confunden términos para que no tengan el peso y que tú no puedes defender en una posición firme, en una posición clara de lo que es la detención-desaparición en este país. [...] Entonces aquí te digo, te cambian el lenguaje, te cambien todo eso para que tu discurso no tenga la misma potencia que debiera tener (Entrevista, el 12 de enero del 2017).

Efectivamente, tanto para el Comité Eureka, como para H.I.J.O.S. México, el participar de este proceso legislativo era otorgarle legitimidad a la acción del Estado y consideraban que en el marco de este proceso el concepto mismo de desaparición forzada estaba siendo diluido en otras categorías jurídicas que no necesariamente reflejaban las graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado como es la desaparición forzada de personas —este debate se dio de igual manera en el

marco del proceso legislativo mismo, con las organizaciones que sí participaron, tal como será desarrollado líneas más adelante—.

De esta manera, en este entramado de actores y actrices con posicionamientos, intereses e intencionalidades diversas y en algunos casos incluso contrapuestas, se llevó a cabo el proceso de legislación en materia de desaparición de personas. La idea de cómo debía hacerse, de qué elementos eran indispensables e incluso los términos que debería contener la ley, eran objeto de tensión puesto que en materia legislativa las palabras importan. Por poner un ejemplo, para las familias del MNDM la prioridad estaba puesta en el proceso de búsqueda, en que quedara estipulada la facultad de coadyuvancia de las familias y las organizaciones que les acompañan en la ley. Para las y los actores de la Campaña Nacional, por el contrario, una de las prioridades era que quedara estipulada la responsabilidad de la cadena de mando en la desaparición forzada de personas y las penas asociadas a ésta, así como las acciones de prevención, etc.

Pero además, desde la perspectiva de la Campaña, había que evitar a toda costa que se despolitizara el concepto de desaparición forzada plasmado en el derecho internacional humanitario y que perdiera su fuerza en la legislación nacional. Por ejemplo, la propuesta enviada desde el Ejecutivo llevaba en el título tres categorías de ausencia: desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y la de persona no localizada. En cuanto al último término, el de *persona no localizada*, había consenso entre la sociedad civil y las organizaciones de familiares que participaban del proceso, que incluir ese término en la ley sería un error ya que se corría el riesgo de despolitizar la denuncia de la práctica y que incluso podía llevar a prácticas dilatorias por parte de las fiscalías.

De entrada porque que una persona no sea localizada no implica que fue víctima de un delito y por lo mismo no "verían la necesidad" de abrir una carpeta de

investigación, por lo que el concepto fue rechazado por todas las partes. De hecho, Angélica de la Peña, en marzo del 2017 aún dudaba cómo poder integrar el concepto de *persona no localizada* en la propuesta legislativa que iría a dictaminación:

> Estamos intentando resolver cómo se entendería el concepto de la *persona no localizada*, que es ni más ni menos que una persona desaparecida de manera voluntaria. Siempre que hay indicios de que esta persona haya sido desaparecida de manera involuntaria simplemente no solo se activa la búsqueda, si no que se emprende ya la investigación a partir de que se abre la carpeta de investigación. El concepto si bien se entiende el contexto en que está inscrito, estamos intentando resolverlo a partir de que el sistema no nos vaya a tronar con la desaparición de manera voluntaria. De tal manera que sí hace mucho ruido el concepto, tenemos que buscar cómo haga menos ruido [...] Por supuesto, lo que sí tenemos ya totalmente aprobado en el proyecto de la ley es que el concepto, no aplicaría —si quedara—, no aplicaría de ninguna manera a las personas menores de 18 años de edad (Entrevista, el 22 de marzo del 2017).

Finalmente el concepto propuesto por el Ejecutivo no quedó en el proyecto de ley final ni en la promulgación. Si bien la necesidad de la exclusión del término de *persona no localizada* generaba consenso, no era el mismo caso para el término de *desaparición cometida por particulares*, lo cual tiene su explicación en diferentes aspectos. Lo primero que se puede destacar para entender estas posturas es el nombre mismo de cada una de las dos coaliciones. Por una parte, la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, heredera de los posicionamientos políticos de la Guerra Sucia —del *terrorismo de Estado* como ellas y ellos mismos le llaman—, en su nombre mismo explícita su postura: "contra la desaparición forzada". En su posicionamiento estas organizaciones entendían que la ley debería avocarse únicamente al tipo penal de la desaparición forzada que lleva implícito en su nombre la violación a los derechos humanos ya que se comete por parte del Estado. El hecho de que se incluyera otro tipo penal, que podría ser del fuero común, les parecía que le hacía perder fuerza al sentido original del concepto. Lo que generaba diferencias

entre las diferentes fracciones en disputa. Por ejemplo, en palabras de Héctor Cerezo, del Comité Cerezo y de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada:

> Hay diferencias hasta de cómo definir la desaparición forzada. Para nosotros decimos la desaparición forzada es lo que dice la convención internacional y para ellos dicen que no que ya no es de actualidad esa definición y que hay que modificar. [...] Ampliar la desaparición forzada a particulares. Nosotros no estamos de acuerdo en eso [...] el problema es que en el 2008, 2007 cuando empieza a haber desapariciones forzadas, la gente principalmente la que fue víctima en ese momento, era gente que no estaba organizada, que no estaba politizada, no pertenecía a ningún movimiento social, no tenía ni siquiera una tradición de lucha, etc. Entonces enfrentan primero que se los llevaron y lo primero que dicen se lo llevó el narco. Entonces viene la palabra levantón y toda la moda de los levantones, ¿no? Y mucha de la gente, cuando costó años realmente que se entendiera qué era la desaparición forzada, la diferencia entre la desaparición forzada y la privación ilegal de la libertad, el secuestro. Entonces cuando ellos decían, bueno es que desaparecieron a mi familiar. Y bueno, ¿quién fue? Fue el narco, ah bueno eso es un delito pero no desaparición forzada. O sea súper indignados porque decían "si se lo llevaron a la fuerza cómo no va ser desaparición forzada". Pero porque no se remitían a la definición de desaparición forzada. Entonces fue una discusión de decir bueno, entonces desaparición forzada ya no nos sirve, se terminó porque no sirve para defender o buscar a nuestros familiares. Adiós desaparición forzada aquí lo que está pasando es algo nuevo, inédito, nunca en el mundo pasó, etcétera, etcétera. (Entrevista, el 10 de enero del 2017).

Nadin Reyes Maldonado, miembra fundadora de Hasta Encontrarlos y de la coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, apunta en el mismo sentido debido a que sostiene que cuando se trata de una desaparición forzada la falta aún es más grave debido a que el Estado tiene la obligación de proteger y que la categoría de desaparición por particulares, despolitizaría el concepto:

> Sí, nosotros si bien entendemos que muchos de los casos son cometidos por particulares, lo que nosotros vemos en esta situación es un riesgo. Y ahorita lo estamos viendo en el Senado la discusión sigue siendo, ¿cómo integrar esta figura de desaparición cometida por particulares sin que se mezcle con otros delitos que ya están sancionados en el país como el secuestro? Esta nueva categoría desaparición cometida por particulares es igual al secuestro, porque

> también el secuestro lo cometen particulares. Entonces el riesgo que nosotros veíamos al establecer esta desaparición por particulares es también el deslinde de responsabilidades del Estado. Y lo retomamos por la experiencia que ha vivido Colombia específicamente. En su legislación Colombia integró la desaparición forzada. Ellos le llaman desaparición forzada cometida por particulares, que es otro riesgo mayor. Al decir que los particulares cometemos desapariciones forzadas es súper grave porque se está dando, en Colombia están responsabilizando de la mayoría de desapariciones a las FARC, a paramilitares, a civiles y decimos que haces un riesgo muy fuerte que puede pasar en México. Que ya se da en el discurso, el Estado dice no somos nosotros son los civiles quienes están desapareciendo. Entonces hay una situación fuerte, hay un conflicto, porque definitivamente entendemos la desaparición a las familias. Nosotros también somos familiares, sufrimos lo mismo pasamos por lo mismo, pero creemos que hay una situación de responsabilidades que es distinta. Hay una gravedad mayor cuando se trata de una desaparición forzada que es cometida por agentes del Estado porque se supone que el Estado es quien debería garantizar tus derechos, protegerte, y otra muy distinta es una desaparición que es cometida por particulares que decimos no es una violación a derechos humanos, es un delito. (Entrevista, el 18 de enero del 2017).

Por otra parte, el MNDM con una trayectoria de politización menor, el cual agrupa a familiares de víctimas de desaparición y desaparición forzada del giro neoliberal mexicano —la llamada Guerra contra el narcotráfico— comprende el fenómeno desde otra perspectiva e infiere que en el contexto mexicano actual se puede atenuar la responsabilidad del Estado si la desaparición no fue cometida por sus agentes directamente: desaparición cometida por particulares. Estas diferencias, intrínsecas, marcaban el tono del debate. Por ejemplo, en palabras de Janet Carmona, integrante de Serapaz y de la coordinación del MNDM:

> Hay muchas opiniones encontradas y posturas. Primero porque en las desapariciones forzadas en muchos de los casos está comprobada la participación tal cual directa de estos agentes [del Estado], ¿no? En otros casos no está comprobada aunque sabemos que sí hay una participación. Y entonces lo que decían es bueno si sólo se contemplan las desapariciones forzadas, ¿qué pasa con todos los casos en donde no está tan visible la participación del Estado, pero que al final está el Estado involucrado? Nos van a decir que no, que eso no nos corresponde a nosotros. Entonces cómo se hace

> para que también se castigue a quienes, o sea también se dé seguimiento a los casos en donde no se puede comprobar tan fácilmente, en donde todas las pruebas las han desechado. Entonces es como tratar de involucrar, o sea de que en esta ley se abarque a todos los casos y que no sólo se legisle para unos. Si no tenían pruebas [de la participación del Estado] o no señalaban esto no era una ley para ellos (Entrevista, el 21 de enero del 2017).

Finalmente en este campo de lo político, en donde las relaciones de fuerzas se miden no tan solo por la calidad de los argumentos sino por la posición que los agentes ocupan en el *campo* —en el sentido bourdieusiano—, el tipo penal *desaparición cometida por particulares*, quedó inscripto en la ley, debido entre otras cosas, a que quien lideraba la iniciativa lo consideraba como un acierto en sí mismo, como una innovación en la materia específica de la desaparición de personas. Si bien es cierto que la iniciativa de Peña Nieto llevaba en el título este tipo penal, la misma Angélica de la Peña ya lo había sometido como posibilidad desde su primera iniciativa de ley. En palabras de la legisladora:

> Yo presenté una iniciativa de ley, una ley general sobre desaparición forzada y cometida por particulares. Empezamos a discutir también el concepto que hay otro tipo penal además de la desaparición forzada, cuando no participa ningún agente del Estado, cuando no hay aquiescencia, cuando no hay ningún consentimiento, ninguna información de agentes del Estado, que es la desaparición cometida por particulares, que es perpetrada por las bandas delincuenciales que actúan con toda impunidad, es verdad, pero que en el caso de la desaparición no participa absolutamente ningún agente del Estado. Me parece que ese fue un gran acierto de la ley mexicana y empezamos a trabajar en la búsqueda de los consensos (Entrevista, el 22 de marzo del 2017).

De esta manera, toda esta discusión que fue evocada a título ilustrativo líneas más arriba, es elocuente en sí misma de cómo se construye la puesta en marcha de una política pública o de la promulgación de un marco legislativo. En esta disputa donde intereses particulares —simbólicos, materiales o de otro tipo— entran en juego, se ponen en marcha relaciones de poder en torno a estos intereses y que se consideren como insumos para la discusión o no, mucho va depender de la capacidad de las y los

actores para colocarlos como prioritarios. En los casos mencionados, no es el peso de a quien le asista la razón lo que prima, ni la calidad de los argumentos que se ponen en la mesa, sino lo que prima es la relación de fuerzas que se da en una coyuntura determinada donde en este caso las mismas víctimas van a asumir roles de grupos de presión y/o de interlocución.

En el caso específico de la legislación para prevenir y castigar la desaparición de personas en México, que finalmente fue promulgada en noviembre de 2017, bien pudieron haberse emitido dos leyes complementarias para que, por ejemplo, llegado el momento en que funcionarios y altos funcionarios del Estado tengan que ser llamados a enfrentar juicios por crímenes de lesa humanidad, en la legislación nacional estuviera claramente diferenciado este tipo penal o para que la responsabilidad de la cadena de mando en la legislación quedara debidamente delimitada. En esta relación de fuerzas lo que primó fueron las posiciones desde donde las y los interlocutores se situaban en el campo y en función de esto consideran, o no, que sus demandas fueron atendidas. Por ejemplo, la percepción de un *vaso medio lleno*, o un *vaso medio vacío*, una vez que fue aprobada y publicada la ley evoca estos posicionamientos políticos ante el mismo fenómeno. Por un lado el MNDM se congratuló de la aprobación de la ley y destacó el trabajo colectivo que por casi tres años más de 60 organizaciones habían orquestado para llegar a dicho instrumento jurídico. Reconocieron que el instrumento era "perfectible" pero "necesario y urgente como un primer paso para prevenir, erradicar, combatir y sancionar las desapariciones" (SERAPAZ-MNDM, 2017). Por otro lado, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, emitió varios comunicados de prensa donde aseguraban que la ley estaba incompleta y que si bien reconocían que la promulgación en sí misma era un avance, no la reconocían como "su ley" puesto que: "tal como se ha aprobado, no sólo seguirá siendo insuficiente para acceder a los derechos de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de No

repetición, si no que garantizará la impunidad a los perpetradores de las desapariciones forzadas en nuestro país" (Comité Cerezo, 2017).

De esta manera, se puede concluir que aunque el movimiento por Ayotzinapa decidió no participar del proceso legislativo, el cual se aceleró a partir de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, la fuerza de su movilización sí llevó a crear una coyuntura política favorable a la puesta en agenda de la problemática. Ésta dio lugar a la formación de diversas coaliciones de actores y actrices, de las cuales, de su interacción mediada por relaciones de poder —luego de tres años—, fue finalmente aprobada la ley. Así, finalmente, esta *coalición de causa* (Sabatier, 2010), conformada por asociaciones de víctimas, organizaciones de defensa de derechos humanos, ONG, fundaciones, etc., con aliados y aliadas estratégicas en la estructura gubernamental, lograron colocar en la agenda pública una demanda específica que logró concretamente cambiar estructuras administrativas y legislativas. De igual manera, como es lo propio de lo político, en estas relaciones de poder no todos los actores ni las actrices salieron completamente satisfechos de las negociaciones, pero lo que sí es innegable es que se posicionaron e interactuaron como sujetos políticos en este proceso.

5.7 Las *nornas del tiempo presente* al rescate de las almas del *Nibelheim*. Las búsquedas ciudadanas: del "vivos los queremos" al "cómo los encontraremos"

> Hoy una madre ha recibido la peor paz que una madre puede recibir: el cuerpo de su hijo. ¿En qué parte del infierno se ha visto esto? ¿En qué parte del infierno la certeza de la muerte de un hijo da alivio a una madre? ¿En qué parte del infierno una madre tiene que buscar a su hijo en fosas y encontrarlo en una?
>
> Javier Sicilia, 25 de agosto del 2017[197].

---

[197] Esta reflexión de Javier Sicilia fue publicada en la ~~página~~ Facebook del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a la ocasión de la identificación de los restos de Roberto Corrales Medina,

En la búsqueda de las personas desaparecidas, las *nornas del tiempo presente* —representadas por *Verdandi,* "lo que ocurre ahora"—, entre otras cosas, se demarcan de las *nornas del pasado* —representadas por *Urd*, "lo que ocurrió"—, porque para las *nornas del pasado* era impensable reivindicar la búsqueda de las personas desaparecidas en espacios de muerte. Es decir, ir a buscar a los *héroes caídos* más allá del *Nibelheim* —el reino de la niebla—, en la que eran subsumidas a partir de la desaparición de su familiar. Esto debido a que en su lectura de los designios del entrelazamiento de los hilos del destino, mismo si cabía la posibilidad de escenarios de muerte, era al Estado —que podría representarse en el dragón *Nidhogg*, "el que golpea con odio"—, al que le correspondía hacerles volver, puesto que si vivos se los había llevado, vivos los querían de vuelta.

Por supuesto que esto era un posicionamiento político, sin duda, que respondía también al tipo de lucha política de su familiar y del movimiento armado socialista mexicano, posicionamiento que buscaba mantener la dignidad del o la ausente, hasta las últimas consecuencias, aunque eso les representara vivir en la zozobra. Pero también tenía que ver con la experiencia del destino de los cuerpos ausentes. Los diferentes comités que se habían formado en el pasado sabían, casi con certeza, que eran directamente agentes del Estado quienes se habían llevado a su familiar y esto debido a su implicación política. Se sabía que los campos militares eran los principales centros de retención clandestina. Se sabía también que muchas y muchos habían sido vistos ahí luego de varios meses de que habían sido detenidos-desaparecidos y que entre las búsquedas que como familiares y comités habían emprendido, al menos 148 detenidos-desaparecidos habían vuelto con vida (Gálvez,

---

desaparecido el 14 de julio de 2014 en El Fuerte, Sinaloa. Roberto era hijo de Mirna Nereyda Medina Quiñones quien, en compañía del colectivo *Las Buscadoras de El Fuerte*, ella misma lo desenterró de una fosa clandestina el 14 de julio del 2017, al cumplirse el tercer aniversario de que fuera desaparecido.

2017) del más allá del *Nibelheim,* que en ese contexto podría representarse efectivamente situado en las bases militares.

Entonces, más allá del posicionamiento político —que insisto tenía un lugar primordial en su visión de las cosas—, también el hecho de que tuvieran la certeza de quién se los había llevado y por qué, reducía el campo de incertidumbre. Además de que en los tiempos de la Guerra Sucia el recurso a la desaparición forzada era mucho menos recurrente que en el presente, las posibilidades pragmáticas de buscarles al interior de los cuarteles militares eran mínimas, incluso prácticamente inexistentes. Las vías que se presentaban para recuperar a sus familiares eran o bien la confrontación con el Estado para que las y los regresara, ya fuera a través de la acción directa —violenta o no—, o la vía jurídica, como en el caso de Rosendo Radilla donde en la sentencia de la CoIDH se estipula que debe ser buscado de manera urgente y expedita, incluso en instalaciones militares (CoIDH, 2009; Dávila, 2015).

Para *las nornas del tiempo presente*, sin embargo, la certeza de quién se llevó más allá del *Nibelheim* a las y los *guerreros caídos* es aún más brumosa que para *las nornas del pasado*. En algunos casos mismo si es clara la participación de agentes del Estado, los motivos porque se las y se los llevaron son difíciles de discernir, puesto que muchas de las personas desaparecidas no tenían ninguna implicación política, solamente se encontraban de paso en algún lugar y/o mucho menos tenían algún tipo de relación con una red criminal. En otros casos, ni siquiera se tiene la certeza de quienes se las o se los llevaron y mucho menos por qué (ver capítulo III, *supra*). De igual manera, los escenarios de terror de cuerpos mancillados expuestos al aire libre o en *entrehumación* (Colombo, 2017), que en muchos casos aparecen en un estado tal que no pueden ser identificados o que estuvieron mucho tiempo desaparecidos, sugieren los escenarios posibles.

En ese sentido, en esta sección el objetivo es analizar cómo la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa trajo a la agenda pública, además de los aspectos arriba señalados, la búsqueda de cuerpos ausentes en la mayor parte del territorio nacional. Se analizará cómo es que estas búsquedas ciudadanas comenzaron a realizarse en las inmediaciones de Iguala para dar con "los 43" y cómo a partir de esta labor, esta *pedagogía del retorno de cuerpos* —en contraposición a la *pedagogía de terror*—, también se transmitió entre las y los familiares de las víctimas con el objetivo de hacer volver del *Nibelheim* a los cuerpos ausentados, llegando incluso a constituir redes nacionales de búsqueda. Se enfatizará también en que en esta nueva empresa, el Estado no tan solo no hace su labor, si no que por medio de recursos legales, obstaculiza las iniciativas de estas familias para dar con el paradero de sus allegados. Finalmente, se observará cómo estas acciones supletorias de las obligaciones del Estado no están libres de tensión, debido a que las racionalidades de las y los familiares que emprenden estas búsquedas y las organizaciones de la sociedad civil como son las ONG y fundaciones son distintas. Por una parte, las familias priorizan mitigar la angustia al dar con los restos de su familiar mismo si eso significa renunciar a la posibilidad del acceso a la justicia, mientras que las organizaciones de la sociedad civil privilegian fortalecer el Estado de derecho y desde ahí ejercer presión al Estado para que éste cumpla con sus funciones.

De esta manera, cuando los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron en la región Norte de Guerrero, imaginar que hubieran sido inhumados clandestinamente no era descabellado. En esta región, como en muchas otras partes del país, las desapariciones forzadas se habían vuelto cotidianas. El terror se había instalado en esta zona desde hacía varias décadas, pero la violencia se había agudizado desde la puesta en marcha de la política de seguridad calderonista —y continuada por Peña Nieto— y en Iguala había alcanzado su culmen en 2013 con la llegada a la presidencia municipal de José Luis Abarca (T. Grecko, 2016; Hernández, 2016). Las inmediaciones del municipio se habían convertido en un gran cementerio clandestino

en donde el descubrimiento de fosas no les era ajeno[198]. En ese marco, y debido a la violencia con que habían sido atacados los 43 estudiantes de Ayotzinapa —y Julio César Mondragón mismo— es que para el movimiento social, el pensar que sus cuerpos pudieran encontrarse en una fosa clandestina era una de las posibilidades.

Por un efecto de acumulación y por las movilizaciones sociales mismas, la desaparición masiva de los estudiantes había causado una tal indignación y expectación que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) —quienes también tenían miembros que habían sido desaparecidos en la región—, decidieron hacer su parte y politizar desde otra perspectiva las desapariciones forzadas: destapando fosas. A menos de 15 días de acontecidos los hechos, el 8 de octubre, 500 de sus miembros llegaron a Iguala para buscar a los normalistas. La consigna que se habían planteado era clara: "no abandonarán la ciudad de Iguala hasta encontrar vivos o muertos a los desaparecidos. Incluso dijeron que irán más allá, buscarán a personas desaparecidas aunque sean ajenas a Ayotzinapa y a la UPOEG" (El Sur, periódico de Guerrero, 2014). Es así que comenzaron a destapar socavones con decenas de personas dentro. En palabras de Citlali Miranda, miembra fundadora del *Comité los otros desaparecidos de Iguala:*

> Muchos de los cuerpos encontrados los encontraron los campesinos de la UPOEG, porque veían cosas raras y decían, mira, esto es muy raro. Y me decían: "mira, cuando los campesinos andamos en el campo, ¿qué nos llevamos? Una tortilla amarrada, ¿no? —el itacate famoso—, Y te llevas una botella de agua o te llevas un botellón de agua, ¿no? Y aquí mira, observa". Ahí había desechables de "Sabritas", de cervezas, de bebidas que venden en un Oxxo, en una tienda, y eso no lo come un campesino. Botellas de whisky, de tequila, esto no viene un campesino a tomárselo aquí en medio del cerro. En medio del cerro donde no hay nada, no viene una persona a hacer eso. Y ya

[198] Tan solo según las cifras oficiales —que están muy lejos de reflejar la realidad—, en 2013 en el estado de Guerrero al menos 36 fosas clandestinas con 45 cadáveres habían sido exhumados en la entidad (Flores Contreras, 2014b).

> empezaban a ver ellos y empezaban alrededor a buscar tierra removida. [...] Al principio cuando empezamos a subir era bien difícil y bien conmovedor porque al principio llegabas y encontrabas en el vil campo, en el medio de la nada, un grupo como de palitos, de ramitas amarrados con cuerdas. Entonces ellos decían —y tenían toda una explicación bien elaborada—, "yo creo que los tenían amarrados aquí a cielo abierto" y a los dos o tres pasos estaba una fosa. Y tú veías por ejemplo cuerdas que no encuentras en el campo, que no usan los campesinos, cables, cinturones, ves ropa y ves toda la basura de desechos que van generando (Entrevista, el 3 de febrero del 2017).

A partir de ahí, la búsqueda de personas desaparecidas en fosas devendría una práctica cotidiana en prácticamente todo el país, actividad en la cual las *nornas del tiempo presente* pretenden encontrar su paz. De esta manera, el movimiento por localizar a los estudiantes de Ayotzinapa, además de haber contribuido a colocar en primer plano de la agenda pública el grave problema de la desaparición de personas en el país y de haber acelerado el proceso de legislación en materia de desaparición de personas, también fue determinante para una nueva veta en la búsqueda de personas en México. Efectivamente, debido a la desaparición de los estudiantes y a la intervención de la UPOEG, otras personas que tenían familiares desaparecidos en Iguala se unieron a las búsquedas. Estas personas antes de esta coyuntura no se atrevían a denunciar o a alzar la voz públicamente debido al clima de terror que se había establecido en la región por la imbricación de las estructuras de gobierno y las economías criminales (T. Grecko, 2016; Hernández, 2016). Sin embargo, en un clima de terror generalizado, en un primer momento había sido difícil que las familias se acercaran a participar de las búsquedas. En palabras de Citlalli Miranda:

> Estamos hablando de que en Iguala era el miedo, o sea, a las 6:00, 7:00 de la noche ya no había gente en las calles, todo era muy hermético y toda la gente tenía miedo [...] Empezamos a participar con UPOEG, ellos empezaron a hacer la búsqueda de campo, a encontrar fosas clandestinas, a convocar a las familias que tuvieran desaparecidos, al pueblo en general y nadie llegó. Entonces un grupo de siete, ocho personas fuimos los únicos que empezamos a trabajar con ellos y empezamos como la búsqueda de los estudiantes de

> Ayotzinapa. Nosotros íbamos y participábamos a la búsqueda de fosas y encontraron ellos que los cuerpos que estaban ahí tenían mucho tiempo. Entonces empezaron a llamar a las familias pero nadie iba (Entrevista, el 3 de febrero del 2017).

Efectivamente, cuando UPOEG comenzó la búsqueda en campo, encontraron cuerpos que ya tenían mucho tiempo enterrados y que por lo tanto no pertenecían a los estudiantes. Sin embargo, los órganos de gobierno no quisieron hacerse cargo de la identificación de estos restos y los dejaron en las mismas fosas, expuestos a cielo abierto (Miranda, 2017). Ante este escenario, la UPOEG contactó una organización de la sociedad civil, conformada por familiares de víctimas, Ciencia Forense Ciudadana[199], para pedirles que se hicieran cargo de otorgarle una identidad a las osamentas y así, poder restituírselas a sus familiares. Además, hubo un cambio en la estrategia, en lugar de hacer las reuniones al aire libre como lo hacían al principio, se refugiaron en las iglesias, en particular la de San Gerardo en Iguala. Este cambio de escenario y el hecho de que les ofrecieran algo concreto a las familias hizo que éstas comenzaran a acercarse (Miranda, 2017).

La UPOEG se retiró de Iguala a principios de noviembre sin haber encontrado a los estudiantes, pero dejaron decenas de fosas descubiertas y sobre todo, abrieron brecha en lo que serían las búsquedas ciudadanas en todo el país. Gracias a la intervención de la UPOEG es que un grupo de personas, con y sin familiares desaparecidos, se organizaron para continuar con el trabajo iniciado por los campesinos. Es así que surgió el Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada, al que la prensa

---

[199] Ciencia Forense Ciudadana (CfC) es una organización creada en 2014 por activistas que tenían familiares desaparecidos y que trabaja por el derecho a la verdad y restituirles identidad a los restos. Entre sus ejes de acción está la creación y alimentación de un biobanco de ADN con muestras biológicas de familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de contribuir a su identificación. Para un análisis sobre la historia de la organización y su funcionamiento, así como sus expertises particulares, ver: (Schwartz-Marin y Cruz-Santiago, 2018).

le llamó *Los otros desaparecidos de Iguala* debido a que la atención del país estaba concentrada en los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que a veces la agenda mediática se olvidaba que eran miles de desaparecidos más. En palabras de Citlalli Miranda, una de las miembras fundadoras:

> No se llamaba *Los otros desaparecidos*. Nosotros bautizamos al grupo como Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada porque nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que se acercaron era porque su familiar había sido desaparecido por alguna autoridad. Entonces iban y decían, es que entraron los policías, es que el policía fulanito entró a mi casa, es que la última vez que lo vieron, lo vieron en barandillas, o sea, ¿no?, por eso. [...] Los periodistas eran los que decían son *los otros desaparecidos* y es entonces cuando surge ese nombre y eso es un poquito más pegajoso, más que Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada y por eso se le quedó ese nombre y que de hecho era el *Comité* y ya como entrecomillados "*los otros desaparecidos de Iguala*". Eso hacía una diferencia, ¿sabes? Á mí nunca me gustó porque hacía una diferencia entre los estudiantes de Ayotzinapa y los desaparecidos, ¿no? (Entrevista, el 3 de febrero del 2017).

A partir de ahí, el trabajo del *Comité los otros desaparecidos de Iguala* sería ampliamente mediatizado e inspiraría a nivel nacional a otras familias que estaban en búsqueda de sus desaparecidos a hacer lo mismo. Es decir, con picos y palas ir en búsqueda de osamentas con la finalidad de poder hacer el duelo y cerrar el ciclo de vida de su familiar. Por ejemplo, en palabras de Lucía Díaz Genao, fundadora del Colectivo Solecito Veracruz:

> Cuando vimos que las mamás de Iguala se iban a los cerros a buscar a sus hijos y yo veía las fotos que iban por el cerro, con unas chanclas, nada equipadas. O sea, cuando menos nosotras usamos botas y ellas, en chanclas en los cerros, buscando con machetes, con cualquier cosa, ¿no? y a nosotras eso nos inspiró y fuimos a Iguala, dos compañeras. Yo estuve ahí y fuimos a aprender cómo le hacían ellos para buscar. Entonces empezamos a prepararnos, hicimos ahorros, muchísimas cosas diferentes, para tener dinero, venta de ropa usada, rifas, donaciones, botanas que preparábamos nosotras mismas. Muchísimos mecanismos para acceder a fondos, ¿no? Y llegó un momento donde ya teníamos un capital y dijimos vamos a lanzarnos.

> Compramos herramienta, trajimos gente de Iguala y ahí empezamos. (Entrevista, el 8 de febrero del 2017).

Casi en paralelo a la conformación del *Comité los otros desaparecidos de Iguala,* pero con mucho menos atención mediática, en El Fuerte, Sinaloa, en septiembre del 2014 también surgió un grupo que realizaba estas búsquedas ciudadanas: *Las buscadoras de El Fuerte*. Éste fue fundado por Mirna Medina, quien buscaba a su hijo Roberto Corrales, quien había sido desaparecido en julio del mismo 2014. Su hijo fue encontrado exactamente en el tercer aniversario de su desaparición, siendo el cadáver número 93 que habían hallado. A pesar de que este hallazgo le trajo paz, Mirna Medina continúa acompañando a las madres en sus búsquedas. Palabras de Mirna Medina sobre la creación del colectivo:

> En septiembre de ese año (2014) conformamos un grupo de 34 familias que buscábamos a nuestros desaparecidos y ahí empezó toda nuestra labor. Al principio fue muy difícil porque nunca nos habíamos enfrentado con la muerte de esa manera, pero estábamos dispuestas a todo por encontrar a nuestros tesoros. Excavar en diferentes sitios hasta encontrar cadáveres, recuperarlos y entregarlos a las autoridades para que hicieran las respectivas labores forenses para dar con la identidad del cuerpo (Mirna Medina en Rincón Henao, 2018).

Por otra parte, desde las primeras búsquedas que las familias comenzaron a emprender, se presentó también la manifestación de *los testigos silenciosos*. Es decir, aquellas y aquellos, que tenían información sobre el paradero de algunos cuerpos y que por miedo, por expiar culpas, por proyectos políticos particulares, como por ejemplo el objetivo de evidenciar la inoperancia de algunos gobernantes en particular o con la finalidad de que se asentara alguna responsabilidad, se decidieron a proporcionar información a estos colectivos para que los cadáveres fueran desenterrados, lo que sin duda les ayudó con su tarea. En palabras de Citlalli Miranda:

> Alguien se te acercaba y te decía, ¿puedo hablar contigo? —No pues que sí. Ya te llevaban a parte y te decían es que yo te quiero decir que en tal lado yo sé que hay una fosa. Una vez que es lo que más recuerdo, más claro está, me

> dicen "se te cayó un papel". —No, no es mío. —"Sí se te cayó, vi que se te salió de la bolsa". Y yo dije, no, o sea, ese papel no es mío. —"Sí, se te salió de tu bolsa" —¿En serio? Y ya vas tú por el papel y ves que es un croquis. Y así, o sea, de que iba la gente y te entregaba un croquis. Cosa que no haces con las autoridades porque no confías en ellos. (Entrevista, el 3 de febrero del 2017).

Así, tanto las iniciativas de las búsquedas en fosas como la información proporcionada de manera anónima para encontrar osamentas, se expandirían como pólvora en prácticamente todo el país y diferentes colectivos de familiares más o menos organizados emprenderían esta vía. Entre octubre y noviembre de 2015, por ejemplo, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León (FUNDENL) y el Grupo VIDA de Torreón, coordinaron la Primera Brigada de Búsqueda Independiente realizada en Nuevo León (Martos y Jaloma Cruz, 2017). Siguiendo este ejemplo, se formaron redes nacionales de colectivos con este fin. En palabras de Juan Carlos Trujillo, fundador de Enlaces Nacionales:

> Cabe señalar y el reconocimiento a los compañeros de Iguala que con su trabajo empírico nos empujaron para poder salir directamente a las búsquedas, ¿no? [...] Familiares en búsqueda María Herrera, A. C. nace con un objetivo principal que es crear y darle vida a la Red de Enlaces Nacionales, ¿con qué objetivo? De poder unir varias organizaciones, las máximas posibles, a nivel nacional para comenzar a compartir buenas y malas prácticas en el tema de búsqueda. (Entrevista, el 1 de marzo del 2017).

A iniciativa de la Red de Enlaces Nacionales se realizaron tres brigadas nacionales de quince días cada una. Las dos primeras se realizaron en Veracruz en abril y julio de 2016 y la tercera en enero del 2017 en Culiacán, Sinaloa. Las tres fueron realizadas mediante fondeo en redes sociales (Trujillo, 2017). En ellas participaron familiares de diferentes partes del país. Tranquilina Hernández Lagunas, madre de Mireya Montiel, una joven de 18 años que fue desaparecida en Cuernavaca Morelos, en septiembre de 2014, explica su motivación para participar en las brigadas, mismo si sabe que existe una posibilidad muy remota de encontrar a su hija en esos lugares:

> Es como una escuela que vamos dejando, las personas que van continúan sus grupos, sus hallazgos y así ya hay varios colectivos en sus respectivos lugares que ya están empezando a buscar. O sea es algo que te reconforta, porque yo estoy segura que mi niña no la voy a encontrar en esos lugares, pero encontrar a alguien más y regresarles a sus familias. O sea, a mí me llena porque yo sé que algún día si no encuentro yo a mi niña, alguien más la va a encontrar. Entonces yo siempre he dicho que los desaparecidos son de todos. O sea, no nada más busco a mi hija, busco a todos (Entrevista, el 10 de febrero del 2017).

Es así como familiares de personas desaparecidas con sus propias manos remueven la tierra con el objetivo de encontrar su paz y crear comunidad. Nuevamente la imagen fuerte de la mujer-madre, la *valquiria*, dispuesta a enfrentarse a *Nidhogg* para recuperar a sus vástagos caídos regresa con fuerza y toma una nueva veta. La búsqueda de esta paz se hace a sabiendas que el proceso mismo de búsqueda puede dificultar un posterior acceso a la justicia debido que al momento de remover la tierra pueden estar removiendo también las pruebas que podrían inculpar a los perpetradores, sin embargo, en la inmediatez, esta zozobra constante les hace privilegiar el derecho a la verdad —mismo si este es parcial— a un acceso a la justicia futuro e incierto.

Sin embargo, incluso ante este escenario *dantesco* el Estado no solo no hace su labor, sino que le pone obstáculos a la acción de estas *valquirias*, a las *nornas del tiempo presente*. La búsqueda de las personas desaparecidas es una responsabilidad innegable del Estado, éste al no hacer su labor es suplantado por las familias mismas, pero ni así les quita las trabas, puesto que una vez que las osamentas han sido encontradas, las y los familiares no tienen derecho a exhumar los cuerpos por ellas y ellos mismos. En palabras de Citlalli Miranda:

> Empiezas con las limitantes del gobierno porque ya entonces ellos después de esa ocasión empezaron a acompañarnos y se comprometieron para hacer, nosotros ubicábamos una fosa y ellos destapaban y nos limitaban y ya nos dijeron ya no busques y nosotros sí lo hicimos. De alguna manera si ellos te quieren meter en un problema, te meten en un problema, te dicen: "está

> cometiendo un delito" y por eso seguimos, digamos que localizábamos las fosas, los sitios, ellos iban y empezaban a hacer la excavación de los restos. Tú ya no te puedes meter más allá, pero con ellos fue un proceso muy lento y hasta cierto punto desgastante (Entrevista, el 3 de febrero del 2017).

Efectivamente, parte del drama al que se enfrentan las familias es que el Estado es juez y parte de estas acciones. Mismo si ellas asumen las búsquedas, una vez que encuentran las osamentas únicamente los agentes ministeriales pueden intervenir el lugar. Además, una vez encontrados, restituirles la identidad a los cuerpos requiere de una expertise muy sofisticada y costosa que los colectivos no pueden asumir. En palabras de Mario Patrón, Director del Centro PRODH:

> Ha sido la organización de las propias víctimas quienes han intentado suplir en todas sus dimensiones al Estado. O sea, hoy los últimos movimientos que se organizan sobre todo a partir de 2016 de familiares, son movimientos de búsqueda ciudadana de personas desaparecidas. Entonces tienes contextos en donde en Guerrero, en Veracruz, en Chihuahua son las propias familias de personas desaparecidas quienes encuentran cementerios clandestinos, quienes encuentran fosas, quienes hacen investigaciones mucho más sesudas e incluso entregan datos a las autoridades. Incluso hasta en esa dimensión donde los padres y madres de familia o los familiares en su conjunto casi de alguna manera suplen al Estado en su obligación, hasta en eso necesitan del Estado, porque supongamos que encuentran osamentas, restos corpóreos, etc. Pues todo el entramado con la identidad genética y hacer el *match* con quienes están buscando de manera individual o de manera colectiva a sus familiares, pues los recursos los tiene el Estado, no las víctimas. No tienen laboratorios, no tienen genetistas, en fin (Entrevista, el 27 de enero del 2017).

Efectivamente, el Estado es quien puede atender todo el proceso de restitución de los cuerpos, sin embargo, constantemente revictimiza a las familias puesto que los cuerpos que son encontrados por ellas mismas o bien los acumulan en los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) o bien argumentan no contar con los recursos para realizar las pruebas de ADN y hacer el match (Díaz Genao, 2017). Así, a pesar de que las familias se están dando a la tarea de regresar a los cuerpos del más allá del *Nibelheim*, quienes representan al gobierno se empeñan en mantenerles ahí, sea por

negligencia o para evitar la búsqueda de justicia después de que el cuerpo es encontrado e identificado.

Además de esta encrucijada a la que se enfrentan estos grupos al efectivamente depender del Estado para completar el ciclo de identificación y restitución, para los colectivos de víctimas encontrar apoyos en organizaciones tradicionalmente aliadas ha sido complicado debido a que las racionalidades de actuación son muy distintas. Por una parte está la racionalidad de las familias que al realizar las búsquedas tienen como objetivo finalizar con un ciclo de dolor y el objetivo es la inmediatez. Pero, por otra parte, están las racionalidades institucionales, las cuales no todas se posicionaron de la misma manera. De un lado, están las que apoyaron abiertamente estas búsquedas y decidieron poner al servicio de la causa sus expertises, como por ejemplo, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana junto con Data Cívica y Human Rights Data Analysis Group, que crearon un "Modelo estadístico de predicción de fosas clandestinas en México"[200], con la finalidad de contribuir con los hallazgos. También se puede citar al Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF) del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) que acompaña a las Buscadoras de El Fuerte o que participó en la II Brigada Nacional de Búsqueda, con el objetivo de poner su *expertise* al servicio de las familias y de las búsquedas (Martos y Jaloma Cruz, 2017).

Sin embargo, de otro lado, en general ha sido más difícil obtener el apoyo de las ONG y fundaciones. En palabras de Juan Carlos Trujillo: "Pareciera ser que a las

---

[200] Dicho modelo recopila información de prensa nacional de dónde han sido encontradas fosas en el país y a partir de un algoritmo hace una proyección para "predecir" donde puede haber restos humanos inhumados de manera clandestina. Ver: (Meltis y Merino, 2017).

organizaciones civiles y a los activistas les causaba mucho escozor apostarle políticamente a una labor tan importante, que es esta, ¿no?" (Entrevista del 1 de marzo del 2017). Y esto, efectivamente, encuentra su explicación en una racionalidad distinta a la del dolor, puesto que el posicionamiento de estos organismos parte de una perspectiva de derechos a largo plazo. Es decir, la perspectiva de fincar la responsabilidad del Estado, tanto en la búsqueda inmediata, como en la impartición de justicia a futuro. Ya que, si bien quienes integran estos organismos comprenden a nivel humanitario lo que implica para las familias poderle poner fin a la incertidumbre y poder acercarse a la verdad del destino de sus familiares. También entienden que le corresponde al Estado hacerse cargo de las búsquedas y que al hacerse cargo las y los familiares es relevarle de su responsabilidad a este ente y, sin intención, contribuir a la impunidad en un futuro al intervenir el terreno y posiblemente alterar las pruebas. Por poner un ejemplo, desde la fundación Mac Arthur se posicionan por la perspectiva de favorecer el Estado de Derecho. En palabras de Liliane Loya, Directora adjunta de la Fundación Mac Arthur México:

> Ha sido un tema muy complejo, nuestra postura es, la hemos tomado del aprendizaje que hemos tenido con el equipo argentino [EAAF], digamos que seguimos su ejemplo y su pauta. Es decir, la fundación no va promover que las familias sean los forenses, eso no les toca a las familias, pero tampoco va oponerse. O sea, no les va a decir qué hacer, porque no es nuestro papel. Definitivamente a quien le toca hacer eso es a la autoridad, pero lo que estamos viendo es que la autoridad no está cumpliendo con su obligación legal de buscar a las personas, ni en vida ni en restos. [...] Entonces una de las maneras en las que hemos acompañado esta necesidad de las familias es apoyar al Equipo Mexicano de Antropología Forense [EMAF] que da talleres a las familias sobre los riesgos, las implicaciones, lo que significa la evidencia, la situación de las búsquedas y esperamos que con mayor información las familias estén mucho mejor capacitadas para tomar una decisión, que es algo personal. [...] Nosotros sí pedimos a las organizaciones que apoyamos que firmen, y lo hicieron, que firmaran una carta diciendo que el donativo no se va a utilizar a ayudar a las búsquedas. Es decir, no van a comprar palas y picos, ¿no? Desafortunadamente ese no es el papel ni de la Fundación ni del apoyo que se da. Todo lo que quieran para empujar a que las autoridades sean las que vayan y hagan los operativos de búsqueda, eso sí. O sea, reuniones de

> incidencia, pronunciamientos, desplegados, llamados al Senado, etc. (Entrevista, el 20 de marzo del 2017).

Así, se puede señalar que la propia acción de búsqueda, que puede considerarse en sí misma una intervención a carácter humanitario, no está exenta, como es lo propio de lo político, de estar sometida a tensión. Por una parte está la racionalidad del Estado quien tiene el monopolio del acceso a la justicia formal-legal, que al no responsabilizarse de su labor —en algunos casos por incapacidad y en otros por complicidad—, revictimiza a las familias y no les permite completar el ciclo de identificación y restitución. Por otra parte, las familias que se deciden por las búsquedas ciudadanas tienen la premura de concluir el ciclo de zozobra, de la historia suspendida, a sabiendas que eso puede implicarles el renunciar al acceso a la justicia en sentido amplio de su acepción, y por otra parte, están los organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, que si bien algunos apoyan y participan activamente en estas búsquedas, otros insisten en poner el énfasis en el Estado de Derecho y en las posibilidades de llevar ante la justicia —ya sea nacional o internacional— a las y los perpetradores que en el caso de la desaparición forzada involucra a agentes del Estado, ya sea por su participación directa o por aquiescencia.

De esta manera se puede enfatizar que la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa, también marcó un hito en cuanto a las búsquedas ciudadanas debido a que gracias a su búsqueda, colectivos de familiares y acompañantes se especializaron en búsquedas y adquirieron *expertises* particulares a través de una transmisión de conocimientos entre las víctimas. Por otra parte, esta *innovación* en la politización de las desapariciones forzadas en el país no estuvo exenta de relaciones dialógicas y conflictuales propias a los sujetos políticos. Desde el punto de vista de las tensiones está el posicionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, principalmente ONG, centros de derechos humanos y fundaciones de no descargar al Estado de sus obligaciones y de que las iniciativas de las víctimas y la ciudadanía en general,

deberían apuntar sobre todo a exigirle que imparta justicia pronta y expedita, lo cual incluye sin duda la localización, identificación y restitución de las personas desaparecidas, ya sea que se encuentren en vida o no. Por otra parte, las familias comprenden que lo ideal sería que el Estado tomara a cargo sus responsabilidades, pero la experiencia —y las cifras— les señala que la impartición de la justicia en México es una realidad aún lejana y que lo que necesitan en primera instancia es ponerle fin a la zozobra que les carcome y cerrar el ciclo de vida de su familiar. Pero además, las tensiones se dieron al interior de los sujetos políticos mismos, entre quienes pensaban que la opción era la búsqueda en cualquier condición, mismo en fosas, y quienes consideraban que no se debía claudicar ante el Estado sobre la exigencia de presentación de los desaparecidos, tal como será desarrollado en los parágrafos siguientes.

5.8 Las *nornas del pasado* vs. *las nornas del tiempo presente*, entre el *Nibelheim* y el *Walhala*: la disputa por las formas del regreso de los cuerpos ausentados

Las búsquedas ciudadanas que comenzaron a hacerse visibles a finales de 2014 y pronto se expandieron en todo el país, no han estado exentas de tensiones tanto entre organismos que tienen por mandato un enfoque de derechos con una perspectiva de acceso a la justicia a largo plazo, tanto como entre los colectivos de familiares mismos. Por una parte, las *nornas del pasado*, es decir, quienes se sitúan en un posicionamiento político cercano al de los colectivos que surgieron en el pasado, en el marco de la Guerra Sucia, se manifiestan en su mayoría contra estas prácticas y se han negado abiertamente a participar en ellas y/o apoyar su realización. Por otra parte, están las *nornas del tiempo presente*, quienes al enfrentarse al terror cotidiano de la incertidumbre, privilegian —sea como sea— cerrar el ciclo. Sus reflexiones en torno al fenómeno y cómo se posicionan ante éste parten de un *conocimiento situado* (Haraway, 2000), irremplazable. Es decir, para entender estos posicionamientos es indispensable observar desde el lugar del que se mira, ya que todo conocimiento y

posicionamiento político está vinculado a su contexto y a la propia subjetividad de quien lo emite. Tal como fue desarrollado en el capítulo I, la experiencia límite que implica la desaparición de una persona, y el acceso a un conocimiento específico al que se accede debido a esta experiencia, hace que se dé un proceso de desubjetivación primero de quien pasa por este proceso, para *re*subjetivarse cuando decide devenir en un sujeto político.

Todo el proceso de politización por el que atravesaron —y siguen haciéndolo— estas personas —la mayoría mujeres-madres—, influye de manera determinante en cómo se posicionan ante el fenómeno de manera individual, pero también como colectivo. El fenómeno de *colectivización* que surge posterior al MPJD da cuenta de esta multiplicidad de posicionamientos que, ya sea por factores internos o externos, de cohesión o divisionismo, han surgido y se han reconfigurado. Pero además, en este proceso de politización las mujeres-madres no están solas, ni sus decisiones dependen únicamente de sus preferencias y/o prioridades. Éstas están determinadas en primer lugar por decisiones que se toman en colectivo y donde no siempre caben todos los posicionamientos, pero también dependen de los diferentes tipos de recursos con los que cuenten: económicos, culturales, de conocimiento específico, de liderazgo, etc. Además, también dependen en gran medida de sus aliadas y aliados estratégicos y de los propios posicionamientos que éstos tomen, puesto que para las otras áreas de lucha —abogacía, transmisión de conocimientos, fortalecimiento, seguimiento de procesos, etc.—, dependen en gran medida de estas alianzas. De esta manera, en las líneas siguientes analizo algunas de las reflexiones en torno a la tensión entre "razones políticas" y "razones humanitarias" que generan estas búsquedas ciudadanas y la comprensión de éstas, dependiendo del posicionamiento del hablante, si son personas directamente afectadas por la desaparición de la persona y/o acompañantes y/o expertos y expertas en la materia.

Por ejemplo, para el Comité Eureka, uno de los íconos de la lucha contra las violencias de Estado de la Guerra Sucia, el realizar búsqueda en fosas o cualquier otra forma que no sea en vida está fuera de toda discusión, para ellas y ellos como colectivo la razón política debe primar sobre la humanitaria[201], además de que consideran que este posicionamiento resguarda la dignidad de la lucha armada que emprendieron sus familiares por los que desde hace 40 años no paran de clamar justicia, el resguardo de la memoria y su regreso. En palabras de Jorge Humberto Gálvez, miembro fundador del Comité Eureka:

> Nosotros no buscamos muertos. Entendemos ese dolor y por qué lo hacen y por qué lo han hecho, ese gran trabajo, ¿verdad? Pero nosotros no buscamos muertos y te voy a decir por qué: imagínate si los que acuñamos esa consigna que tú sabes ahorita "vivos los llevaron, vivos los queremos", que la han rescatado con fuerza los 43. Vivos los llevamos, vivos los queremos y andamos buscando muertos, ¿no crees que hay una contradicción? Política, ideológica, humanitaria. Entonces no vamos nosotros a andar en los cerros dejando parte de nuestra vida ahí y nuestra salud, nuestra fuerza en un cerro con la angustia que tienes, ¿verdad? [...] ¿Sabes por qué? Porque todos los casos que tenemos, tenemos pruebas de que fueron detenidos-desaparecidos por el ejército, por la policía Federal, por agentes del Estado. Si se lo llevaron con vida, con vida lo queremos [...] No, nosotros por eso te decimos también, no nos vamos a cansar. No vamos a olvidar, no vamos a perdonar. (Entrevista, el 12 de enero del 2017).

Sin embargo, para otros colectivos cercanos a estos posicionamientos, como por ejemplo H.I.J.O.S. México, ante la situación del país y la máquina de muerte que,

---

[201] Estas tensiones no son exclusivas del contexto mexicano. En el caso argentino, por ejemplo, a partir de 1985 se dio una escisión mayor al interior de las Asociación de las Madres de la Plaza de Mayo en torno a los cuerpos ausentes. Una división que fue prácticamente irreversible por los diferendos de postura ante la búsqueda en vida de las personas desaparecidas y otros tipos de búsqueda y/o la identificación de cuerpos. Así, la asociación se escindió en dos. Por una parte se quedó la fracción liderada por Hebe de Bonafini, la cual privilegiaba la razón política de las búsquedas, "vivos se los llevaron y vivos los queremos". Por otra parte, surgió la "línea fundadora", liderada por Laura Bonaparte la cual privilegiaba la búsqueda e identificación de cuerpos (Garibain, 2013, p. 31).

desde su perspectiva ha representado el Estado, no es la literalidad de la consigna de "vivos los queremos" lo que importa, sino subrayar el posicionamiento político de la responsabilidad del Estado en estas desapariciones. A continuación transcribo algunas líneas de su reflexión. Mismo si la cita es un poco larga, en ella se da cuenta de la perversidad del mecanismo de la desaparición y el por qué para este colectivo la exigencia tiene que pasar primordialmente por señalarle al Estado la responsabilidad que tiene de hacer retornar los cuerpos que han sido ausentados por él. En palabras de Ana Valentina López de Cea, miembra fundadora de HIJOS México:

> Nosotros respetamos, creemos que cada quien tiene su proceso de cómo lleva la desaparición de un familiar, ¿no? Pero, es algo demasiado complejo. O sea, entendemos que es un dolor muy particular. Nosotros no nos oponemos a las búsquedas que se están realizando, ¿no? Nosotros no hemos formado parte de ellas, pero tampoco las criticamos. O sea, creo que tiene que ver otra vez con esto, al ser un colectivo político o sea, pues eso, con que llevemos sobre todo desapariciones que tienen un carácter político y para nosotros "vivos los llevamos, vivos los queremos", no es solo la literalidad de la frase. Si no que tiene un trasfondo político mucho más grande. O sea, creo que tiene que ver por ejemplo con lo que decían las *doñas* del Comité Eureka, nosotros no los vamos a matar ni con el pensamiento. Si están muertos, el Estado tiene que decirlo porque el Estado se los llevó. Entonces creo que para nosotros, vivos los queremos sigue siendo una postura política también. O sea, no creo que pase tanto por la literalidad. Sabemos que existe la posibilidad de la muerte. [...] Sabemos de lo que es capaz el Estado, tenemos evidencia de sobra que incluso a mí me parece —mientras uno va leyendo y documentándose—, me parece hasta más perverso que en muchos casos sigan vivos. Y sabemos que pueden seguir vivos porque ha habido casos de gente que ha aparecido viva años después de su desaparición, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver también con la perversidad y también creemos que es justo el mecanismo de la desaparición forzada que sea tan perverso que la duda siempre queda, ¿no? No importa cuántos años pasen, la duda siempre va a estar ahí mientras no sepas la verdad. Entonces para nosotros "vivos los queremos" tiene que ver justo con eso, con decir bueno, nosotros no tenemos por qué hacerle el trabajo al Estado. [...] Entonces pues un poco por eso nosotros seguimos con esa consigna y porque creo que tiene también que ver algo con la esperanza, pues sí, es lo último que muere siempre. Pero eso, tampoco es que nos opongamos a las búsquedas, hasta hemos considerado incluso acompañar algunos

> familiares si se da la oportunidad, ¿no? Porque entendemos igualmente que es un proceso muy doloroso (Entrevista, el 18 de febrero del 2017).

En el mismo sentido, Nadin Reyes Maldonado, miembra fundadora de Hasta Encontrarlos, e hija de Edmundo Reyes Amaya, desaparecido por el Ejército Mexicano en mayo del 2017 —heredera también de la tradición del movimiento armado socialista mexicano—, aunque entiende la dimensión humanitaria de las búsquedas realizadas por los propios familiares, se posiciona por privilegiar el hecho de presionar al Estado para su presentación. Además de que tiene una perspectiva de búsqueda de la justicia a futuro basándose en la experiencia comparada de otros casos en América Latina:

> Nosotros siempre partimos de la exigencia de que se tienen que buscar vivos. Nosotros somos de la exigencia que tiene que haber un mecanismo incluso para buscar a las personas desaparecidas en cuarteles militares, en cárceles donde sabemos que muchas personas pueden estar. El problema aquí es, a quién le corresponde hacer esa labor y cómo. Y aquí es otro diferendo que tenemos nosotros con la responsabilidad del Estado de no buscar, de no identificar a muchos de los restos que ahorita se encuentran en fosas [...] Yo creo que también tiene que ver con una situación de que también el propio Estado manipula esa situación con los familiares y nosotros entendemos porque sí es algo muy angustiante. Incluso yo como hija te lo puedo decir, nuestra prioridad es sí saber qué pasó, en dónde están, que nos lo entreguen. Pero ha pasado algo que nos han compartido familiares de otros países, es cómo cambia o cómo percibes tú la situación una vez que ya tienes esos restos, si ya has encontrado tu familiar, cambia con el tiempo. Con el tiempo muchos de los familiares en Colombia, otros en Chile, nos comentaban que su exigencia a principios era eso, que nos entreguen a nuestros familiares sea vivos o sea muertos y ya. Pero, ¿qué pasaba cuando eran devueltos? En muchos de los casos los restos de sus familiares que los identificaban se quedaban con la sensación de impunidad, de que no se enjuicia, que no se castigaba los responsables y años después ellos querían seguir luchando y acceder a ese derecho (Entrevista, el 18 de enero del 2018).

Las expresiones anteriores dan cuenta de un posicionamiento político que va más allá de la movilización de la pena individual para exigir que se haga justicia, que el Estado responda por sus crímenes. Entienden lo complejo que es como familiar la

angustia de no saber dónde está la o el familiar desaparecido, pero también comparten la idea de que su presentación, con vida o no, le corresponde al Estado y en ese sentido debe ir la exigencia. Por otra parte, desde la perspectiva de derechos, también se comprende que la exigencia colectiva debe ir en ese sentido, pero también saben que los procesos de duelo suspendido en el que se está cuando se presenta un caso de desaparición de un familiar es muy complejo y que, cuando se toma un posicionamiento político de exigencia, en realidad son dos dimensiones las que entran en juego, la del proceso de duelo individual y la de reclamo colectivo sobre la responsabilidad del Estado ante estos crímenes. En palabras de Mario Patrón, Director del Centro PRODH:

> Son distintas dimensiones, para nosotros una identidad desde la Guerra Sucia es el "vivos se los llevaron, vivos los queremos" y es porque se asume que la desaparición es una acción del Estado, ¿verdad? Entonces eso genera un reflejo automático en términos de denuncia política, ¿verdad?, pero indudablemente las y los familiares de personas desaparecidas viven un proceso de elaboración desde la perspectiva psicosocial en donde hay algún momento en donde construyen consciencia sobre la oportunidad no solo de vida, sino también de muerte, pero además construyen consciencia de que cada vez que pasa más tiempo es más difícil encontrarlos con vida. Eso no quiere decir que en sus enunciados políticos renuncien a buscarlos con vida, pero en la elaboración de ese proceso cuando va madurando en realidad el compromiso de los familiares de las personas desaparecidas es con la verdad, aunque la verdad signifique la muerte (Entrevista, el 27 de enero del 2017).

Efectivamente, el compromiso es con la verdad, pero también con la necesidad de cerrar el ciclo, de poder retomar su vida sin la zozobra de pensar qué es lo que pasó con su familiar. Por ejemplo, Guadalupe Fernández Martínez, desde el día uno de la desaparición de su hijo, José Antonio Robledo Fernández, el 25 de enero del 2009, no pasa un solo día en que no haga por lo menos una acción para que se le haga justicia. Es de los pocos casos de desaparición de personas en el país que tiene a personas que están detenidas vinculadas al proceso, gracias a su labor de investigación y de presión constante a las instancias de gobierno. Para Guadalupe Fernández, las probabilidades

que su hijo se encuentre con vida las percibe como nulas y lo que ella quiere es poder dar con sus restos para darle sepultura y así poder cerrar el ciclo. Sin embargo ella no participa de las búsquedas en fosas, asegura que por cuestiones de edad. Guadalupe y su esposo José Antonio Fernández, quien se involucra activamente también en la búsqueda de su hijo, optaron por la vía legal. Presionan de manera determinante para que los agentes ministeriales sean quienes hagan ese trabajo. Hasta la fecha no lo han logrado, pero asegura que nunca dejará de insistir hasta encontrarlo (Martínez Fernández, 2017):

> Pues mire yo creo que él merece tener una morada digna. Merece volver, regresar con su familia. Blanquita [coordinadora de FUUNDEC] nos explicaba que el hecho de decir "vivos los queremos", es recuperar esa vida que nos quitaron, pero es la nuestra. O sea volver a vivir, porque pues nosotros sobrevivimos, ya no vivimos. Conforme pasan los años yo pensaba que esto podía ser pasajero, como que le apostábamos a que se fuera haciendo menos pesado, pero es al contrario. Mientras más pasa el tiempo, más recuerdo mi hijo y más lo extraño. Es una exasperación el no saber dónde está. Entonces para mí sería pues como poner un lugar. El lugar que le corresponde mi hijo, sino está con nosotros, sino late su corazón, el lugar que le corresponde porque quién sabe dónde quedó. [...] Yo creo que pues que es mejor no estar pensando que están sufriendo y que están siendo torturados y pensar que ya están con Dios para que podamos seguir caminando, podamos seguir pensando, podamos seguir más o menos sanos (Entrevista, el 22 de febrero del 2017).

Por otra parte, independientemente del posicionamiento político, dentro de la razón humanitaria misma que es evocada por los familiares ante la zozobra y el dolor de las y los familiares, está también la razón humanitaria por la persona desaparecida misma, tal como fue mencionado por Ana Valentina López de Cea de H.I.J.O.S. México, debido a la perversidad de la posibilidad de mantenerles en vida por largo tiempo en cautiverio. En ese mismo sentido, Lucia Baca reflexiona sobre el conflicto que surge entre "la razón y el corazón" ante la desaparición de su hijo, Alejandro Moreno, desaparecido en enero de 2012 en el estado de Nuevo León:

> Tan solo pensar que en mis oraciones siempre estoy pidiendo que esté con vida nos confronta porque decir, cómo puedo pedir que esté con vida si las condiciones, si está con vida, deben ser terribles, ¿no? ¿Cómo puedo pedir eso para una persona? Pero entonces también es mi fe lo que me mantiene porque digo bueno pues tú Dios, solamente tú puedes entender qué es lo mejor para Alejandro. Pero tampoco, a seis años yo digo, bueno... entra en conflicto la razón y el corazón. Mi corazón quiere que Alejandro esté bien, pero la razón me dice tantos años, ¿no? Y más ver en las condiciones en las que está el país, dices no, es una sinrazón, ¿no? Pero tampoco puedo yo matar a Alejandro, hasta que no me den el cuerpo, yo no puedo hasta que no me demuestren que no está con vida (Entrevista, el 20 de febrero del 2017).

Es entonces este dolor continuo lo que les motiva a muchas y muchos familiares de personas desaparecidas a optar por la búsqueda en fosas. De igual manera el proceso es tan complejo y el dolor inenarrable, que a veces la certeza de muerte trae esa paz tan anhelada. Para parafrasear a Javier Sicilia (2017): *¿En qué parte del infierno la certeza de la muerte de un hijo da alivio a una madre?* En el infierno de la desaparición. En ese sentido Citlalli Miranda evoca esta paradoja basada en la experiencia de acompañamiento a familiares en la búsqueda en fosas:

> Más fuerte es cuando te das cuenta que encuentran el cuerpo en una fosa y lo celebran, porque yo supongo que ya es tanto como el dolor, la angustia, el tiempo de la búsqueda, el desgaste emocional que implica eso, económico, ¿no? Y encontrarlo, es como ya por fin lo tengo, ya está aquí. [...] El hecho de "ya por Dios, aunque sea el cuerpo dame", o sea, cómo te cambia la visión de las cosas cuando ya lo estás viviendo tú y celebrarlo. Llegar al funeral de la persona a la que ya le entregaron su hijo, casi son hijos los desaparecidos, y los que los buscan son las mamás y papás y llegar y darte cuenta que van llegando los demás y los abrazan y les dicen, felicidades y está ahí el cuerpo, ¿no?, o los restos del hijo, eso es muy fuerte (Entrevista, el 3 de febrero del 2017).

Esta última cita es elocuente de lo que significa el mecanismo de la desaparición de personas para sus familiares. El saber que la persona querida ya no está en proceso de dolor da por supuesto alivio a las y los familiares, pero también —y sobre todo— a quien experimenta esta *pérdida ambigua* (Boss, 2001). Llega un momento en que la

necesidad de cerrar el ciclo es, en la inmediatez del dolor, más fuerte que la necesidad de presunción de vida, de verdad o de cualquier tipo de acceso a la justicia. Aunque, eso cambie con el tiempo, tal como fue señalado líneas más arriba en palabras de Nadin Reyes Maldonado, o a continuación en palabras de Clemencia Correa, experta internacional en acompañamiento psicosocial:

> Un caso por ejemplo, de una joven que están los papás busque y busque y busque, se van a la fiscalía. Hay más de 50 cuerpos acumulados en la fiscalía para entregarlos, entregan al azar algunos que sí, algunos que no. Me acuerdo mucho del testimonio de un papá que decía no estoy seguro si es ella. Lo que estoy seguro es que ya no aguanto más y si estos son los huesos que me están dando, estos son los huesos que voy a enterrar. Entonces no sé si te des cuenta lo que es esta complejidad. Entonces así es, hay tantas mentiras del Estado, "ya no sé si es, pero ya necesito cerrar esto. Ya no puedo más". Entonces necesito algo que me dé la certeza de que ella está muerta y con esta posibilidad poder enterrarla. La entierran, hacen todo un proceso aparentemente de duelo. Te voy a decir al año, empieza con mucha culpa y con mucha ansiedad de a quién está enterrando. [...] Entonces esto va haciendo que finalmente los familiares se encuentren en la imposibilidad de encontrarlo y la posibilidad de encontrarlo en todas sus dimensiones: el cuerpo, la historia, la vida. Porque la preguntas es cuántas personas que han ido buscarlos en fosas los han encontrado (Entrevista, el 17 de febrero del 2017).

Por otra parte, además de todas las implicaciones de estas búsquedas a nivel psicosocial y humanitario, están también las posibilidades de alterar las pruebas en esos procesos y hacer aún más inalcanzable la probabilidad de llevar ante la justicia a los responsables. Efectivamente, el Estado al no cumplir con su rol de búsqueda efectiva y justicia expedita, trae como consecuencia que las y los familiares, ante la desesperación, realicen de su propia iniciativa las labores de investigación, de búsqueda y localización de sus familiares. Sin embargo, para el proceso de exhumación y la plena investigación inevitablemente dependen del Estado mismo. Además, uno de los problemas de hacer la búsqueda por mano propia es, tal como fue señalado renglones más arriba, la probabilidad de la alteración de las pruebas, lo que

a largo plazo puede traer consigo mayor impunidad. En palabras de Carlos Martin Beristain, experto en acompañamiento psicosocial de víctimas de las violencias políticas y exmiembro del GIEI:

> Pero, eso tiene otros riesgos, está la cuestión de cómo se protegen las pruebas para evitar que eso genere más impunidad. También aplica para el caso de las fosas trabajadas por la PGR directamente, por la institución. No es una cosa sólo de fosas descubiertas por los familiares. Y también hay una cosa que no es fácil, para los familiares lo importante es saber del destino de su hijo, ¿no? Lo importante es la identidad, que se sepa la identidad. Si ahí fue asesinado, si esos restos corresponden a su hijo. Hay una demanda humanitaria que es clave y que para los familiares es la más importante. Pero, ahora, una exhumación también es, junto con los cuerpos, con identidades que se puedan identificar ahí, también se desvelan verdades. O sea, hay una verdad que sale con la exhumación, hay una verdad de que pasó en el *modus operandi*, del cómo fueron asesinados, del patrón de actuación de determinados grupos o los agentes (Entrevista, el 3 de febrero del 2017).

Efectivamente esta demanda humanitaria es clave para entender la acción de búsqueda directa de las y los familiares y del por qué es un posicionamiento político en sí mismo decidir hacerlo o no. Carlos Martin Beristain, al hablar de esta verdad que se devela con las búsquedas se refiere a una posibilidad de acceder a la justicia en un futuro no lejano, pensando en la aplicación de un marco de justicia transicional. Sin embargo, en lo inmediato, estas verdades que se develan con la intervención de terreno de las y los familiares les pone en riesgo al exponerse en las búsquedas, ya sea que la desaparición se haya realizado por los miembros del Estado directamente o con su aquiescencia. En ese sentido, a la par de las búsquedas ciudadanas comenzó también un discurso por parte de quienes realizaban estas búsquedas, de "no buscar justicia", si no solamente buscar encontrar cuerpos con el objetivo de dar con el paradero de sus familiares. Esto con la intención de no ponerse en mayor riesgo ante las y los perpetradores quienes consideran que actúan en complicidad con agentes del Estado. Por ejemplo, en palabras de Marisela Orozco Montalvo: "Sabemos que el Estado está con los malos. Entonces, siempre casi gritábamos: 'no buscamos

delincuentes, no buscamos nada, buscamos nada más restos. ¿Para qué? Pues para que transmitieran el mensaje y no nos atacaran'". (Entrevista, el 10 de febrero del 2017).

De esta manera, partiendo de la perspectiva de que el conocimiento es situado (Haraway, 2000) y que los posicionamientos políticos están en estrecha dependencia del lugar desde el que se aprehende un problema y de la *subjetividad* que le es propia a la sujeta o al sujeto, a través de las perspectivas citadas en los renglones anteriores, queda evidenciado que es difícil tomar una postura concluyente ante el proceso tan complejo por el que atraviesan las y los familiares ante este *estado liminal* (Turner, 1973) en el que quedan colocados al no saber qué ocurrió con su familiar y por qué no está. En este *continuum* de posicionamientos que van desde privilegiar la *razón* política a una dimensión humanitaria, al otro extremo que privilegia la *razón* humanitaria en la inmediatez de la necesidad de paz, aunque eso signifique renunciar como colectivo a un acceso a la verdad y, eventualmente a la justicia; la tensión que se genera en torno a estos cuerpos ausentes no es fácil de dirimir y continúa aún en la pugna de los sujetos políticos en la arena pública entre ellas y ellos y frente al Estado. En lo único en lo que sí parece haber consenso es en que no están dispuestos, ni dispuestas, a "doblar la página" hasta que no sepan, ¿dónde están?... y tarde o temprano se haga justicia.

Conclusión

La política de seguridad calderonista trajo consigo una ola de violencia generalizada en todo el país, dejando detrás de sí miles de víctimas de asesinato, ejecuciones extrajudiciales, desaparición de personas y desplazamientos forzados, etc. A pesar de todos estos estragos, tuvieron que pasar al menos cinco años para que *emprendedores de causa*, en el marco del MPJD, cuando fueron directamente afectados por esta violencia, decidieran movilizarse y convertir en denuncia pública un dolor privado. Así, las primeras violencias que se llevaron a la palestra fueron los asesinatos y las ejecuciones forzadas debido a la naturaleza misma de la que eran víctimas estos *emprendedores de causa*. En este contexto se abrieron oportunidades políticas que fueron aprehendidas por las víctimas de otras violencias como por ejemplo las víctimas de desaparición forzada que comenzaron a empujar una agenda específica en torno a su problemática.

Así, el MPJD contribuyó de manera determinante a poner en la agenda pública las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban viviendo en el país por parte de los diferentes órdenes de gobierno *so pretexto* de un combate al narcotráfico. En ese marco, las y los militantes del movimiento pugnaron porque se promulgara una Ley General de Víctimas, la cual sería un sinsentido en sí misma, si en México se respetara el Estado de Derecho. Al mismo tiempo, en el contexto del MPJD las y los sujetos políticos que surgieron en este contexto comenzaron a fortalecerse a través de formaciones específicas en diferentes materias como son los derechos humanos, la legislación nacional e internacional en cuanto a sus derechos, así como en acciones de incidencia política. Gracias a estos procesos, una vez que el MPJD perdió fuerza, estas actrices y actores pudieron mantenerse en la arena pública y seguir pugnando porque sus demandas específicas permearan en las instituciones. Al mismo tiempo, algunos miembros y miembras del MPJD establecieron diferentes relaciones de interlocución más o menos formales y a través de diferentes mecanismos con diversas

instituciones de gobierno, tanto a nivel regional como federal, con el objetivo de activar su *agentividad* e intentar modificar o incidir en las estructuras, lo cual se logró en algunos casos.

Este trabajo de presión a las instituciones se mantenía de manera constante cuando una coyuntura mayor vino a alterar de manera radical este orden. Los ataques perpetrados a los estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014, los cuales motivaron una movilización social sin precedentes en el país y con ella se generó una severa crisis política que obligó a las instancias de gobierno a reaccionar. Además de que se pusieron en marcha mecanismos específicos para intentar dar salida a la crisis como fue el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Las masivas movilizaciones "por los 43" llevaron a la aceleración de una agenda legislativa en materia de desaparición forzada de personas y desaparición por particulares. En el marco de esta agenda legislativa, se generaron *coaliciones de causa* con el objetivo de posicionar las diferentes inquietudes que tenían en la materia las diferentes fracciones del movimiento y los diferentes posicionamientos políticos frente al tema. Luego de dos años de incidencia, se logró finalmente que en noviembre del 2017 se promulgara la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La figura simbólica de la víctima, sublimada en la representación de la mujer-madre en búsqueda de sus hijos e hijas, contribuyó grandemente a mantener esta problemática en la agenda mediática y en las instituciones del Estado.

Pero además, la crisis misma de Ayotzinapa trajo consigo una nueva forma de politización en torno a esta problemática, ya que comenzó todo un movimiento alrededor de la búsqueda de las personas desaparecidas en fosas clandestinas. A diferencia de los posicionamientos políticos de los colectivos que se formaron en el pasado y que clamaban por la presentación con vida de las personas desaparecidas

por parte del Estado, ante los nuevos contextos de desaparición de personas en el país y la incertidumbre constante que ésta trae consigo, diferentes colectivos de familiares decidieron tomar esta vía con la finalidad de encontrar a su familiar en las condiciones que fueran, mismo si esto incluyera escenarios de muerte.

Como es lo propio de lo político, ninguno de estos procesos estuvo exento de tensión, lo que creó algunas rupturas y continuidades entre los movimientos sociales del pasado y del presente e incluso con aquellos del presente mismo. Sin embargo, esta multiplicidad de posicionamientos y estrategias de visibilización lograron construir y mantener como un problema de primera prioridad de la agenda pública, el grave problema de las desapariciones forzadas en el país. Para parafrasear a Javier Sicilia, mismo si en números estadísticos son mucho menores las desapariciones de personas que las asesinadas, hoy por hoy, la prioridad en la agenda pública es la desaparición de personas en el país y esto gracias al trabajo permanente y multiposicionado de los diferentes colectivos y sus aliados y aliadas que empujan esta agenda.

De esta manera, se puede concluir que la politización en torno a las desapariciones forzadas en el país se dio a través de un trabajo constante de denuncia e incidencia por parte de las víctimas desde diferentes ámbitos: protesta, trabajo legislativo, educación popular, etc., apoyado en momentos coyunturales específicos que reforzaron sus acciones y favorecieron la agenda mediática, lo cual les hizo tener mayor visibilidad y atraer aliadas y aliados estratégicas a su causa. Así, a través de posicionamientos en relaciones de interlocución con órganos de gobierno más o menos formales según el contexto, de *coaliciones de causa* y de alianzas estratégicas, es que las y los sujetos políticos del presente —las *nornas del tiempo presente*— lograron colocar en primer plano de la agenda pública de las víctimas, el problema de la desaparición de personas en el país. Sin embargo, a pesar de los importantes e innegables espacios ganados de interlocución con los órganos de gobierno y de legislación en la materia, la desaparición de personas en el país en particular y las

violencias políticas en general, no solo no han disminuido, sino que no han dejado de aumentar. He ahí otra de las paradojas del contexto político de México.

CONCLUSIÓN

La pregunta de investigación que motivó esta tesis fue: ¿Qué actores, procesos y acciones lograron poner en la agenda pública y construir como problema de acción política el fenómeno de las desapariciones forzadas en México? Para darle respuesta, partí de la intención de comprender cómo es que, si las desapariciones forzadas no eran un fenómeno reciente en México, en apenas menos de un lustro se habían politizado y tardíamente comenzaban a ocupar un lugar preponderante en la agenda de derechos humanos en el país. Entendía que éstas habían aumentado dramáticamente a partir de la política de seguridad nacional calderonista pero el aumento en volumen no bastaba para comprender este proceso. Entendía también que había habido eventos coyunturales que habían favorecido su mediatización y problematización pero que sin un trabajo previo y sostenido ante las instituciones, apoyándose en movimientos sociales —MPJD, Ayotzinapa—, éstas no hubieran sido consideradas como un problema de acción política. Partí del supuesto entonces de que los problemas públicos se construyen, pero quería establecer una ruta del qué y el cómo de este proceso particular.

Ruta de análisis

A lo largo de la tesis fue establecido un parangón con la tetralogía de Richard Wagner, *El anillo del Nibelungo*, debido a que existe la creencia de que A. Hitler se inspiró en esta ópera para emitir el decreto Noche y Niebla, el cual objetiviza el dispositivo de la desaparición forzada de personas. Esta analogía también guiará los subtítulos de esta síntesis explicativa de la ruta de análisis.

Noche y niebla: ya no hay nadie

Para poder dar respuesta a la pregunta de investigación, comencé por comprender qué era exactamente la desaparición forzada de personas, los componentes de este mecanismo y cómo se había construido esta categoría en el derecho internacional humanitario. Fui a buscar su genealogía para comprender que ésta databa de varias décadas y que había sido un mecanismo planeado para someter a las poblaciones en situaciones de conflicto, es decir, como una técnica de contrainsurgencia. Efectivamente, mismo si se pudo haber recurrido a asesinar personas y esconder sus cadáveres desde tiempos inmemorables, la objetivación de ésta como un proceso para someter adversarios y generar terror en las poblaciones data de la época de los nazis primero —mismo si éste no era su principal mecanismo en comparación con las cámaras de gases, por ejemplo (Huhle, 2015)—, pero fueron los franceses en el marco de la Guerra de Indochina (1945-1954) y luego en la Batalla de Argel (1956), quienes la afinaron como técnica de la Guerra Revolucionaria (Robin, 2004). Luego, ésta y otras técnicas como la tortura con la *gehgene*, por ejemplo, las exportarían como su nueva metodología de combate al *enemigo interno*.

Entrenar a Fafner para convertirlo en dragón

En América Latina fueron los franceses quienes introdujeron la desaparición forzada como técnica de la *guerra moderna*. Comenzaron por Argentina, donde brigadieres y paracaidistas franceses se instalaron, en el mismo edificio que el Estado Mayor Presidencial, para comenzar a formar escuela (Robin, 2004). Militares de toda América Latina pasaron por sus filas para integrar a sus propias prácticas la Doctrina Francesa Antisubversiva. Luego, los estadounidenses tomaron el relevo —y las técnicas— y en la Escuela de las Américas, bajo el pretexto del combate al comunismo formaron en la Doctrina de Seguridad Hemisférica a miles de integrantes de las fuerzas de seguridad de prácticamente todo el continente. En diversos

regímenes dictatoriales del Cono-Sur y de Centro-América se integró esta técnica de desaparición forzada casi al pie de la letra y por ejemplo, el deshacerse de los cuerpos por medio de los *vuelos de la muerte* se reprodujo en varios países como Argentina, Chile, Uruguay, México, entre otros.

La vernacularización del terror

En México las desapariciones forzadas se comenzaron a practicar como técnica de contrainsurgencia en el marco de la Guerra Sucia. Muchas de las personas que ahora se sabe que estuvieron involucradas en esos crímenes fueron formadas en las doctrinas de la Escuela Francesa Antisubversiva y en la de Seguridad Hemisférica. Muchas de éstas pasaron incluso por la Escuela de las Américas. Además, en ese marco habrían llegado a México militares brasileños a formar sobre el terreno a personal asignado a estas tareas (FEMOSPP, 2006, capítulo 5, p. 86). A partir de ahí, esta técnica se habría domesticado y practicado de manera selectiva pero sostenida, agudizándose en algunos periodos con especificidades según su contexto.

Además de la Guerra Sucia, destacan otros dos periodos con sus especificidades cada uno, habiendo rupturas y continuidades con respecto al periodo originario. En ese sentido, el segundo periodo que aquí fue analizado es el de la década de 1990, identificado como de "transición a la democracia" y en el marco del giro neoliberal mexicano, donde el recurso a esta técnica se dio en dos contextos. Por un lado, en el marco de los conflictos armados de Chiapas y Guerrero —EZLN y EPR—, el recurso a la desaparición forzada se aplicó en la misma línea que la doctrina de contrainsurgencia con la finalidad de desarticular bases de apoyo y obtener información. De hecho, muchos de los militares asignados a la zona de conflicto habrían participado de las acciones de la Guerra Sucia y muchos otros habrían sido formados en la Escuela de las Américas (Wood, 1998).

Por otro lado, en esta misma década y en el marco del giro neoliberal mexicano, comenzaron a asesinar y desaparecer mujeres en la frontera norte de México, en particular en Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquí, el recurso a la desaparición de personas respondió a otros objetivos y fue ejecutada por nuevos actores, es decir, fue *re*apropiada una vez que su eficacidad en el terreno y su impunidad fueron probadas. En este contexto, la *Razón de Estado* en su sentido tradicional, liberal, ya no sería el principal móvil de la desaparición, sino serían razones predatorias: apropiación del cuerpo de las mujeres por razones varias vinculadas a un uso y usufructo de su cuerpo contra su voluntad, la mujer como mercancía. Estas desapariciones serían el preludio de lo que vendría un poco más de una década después, la desaparición de personas en el marco de la política de seguridad nacional de Guerra contra el Narcotráfico, en el marco de la alternancia política partidista y de afirmación de la implantación de las políticas neoliberales en el país.

Así, el tercer periodo identificado en esta tesis donde se agudizaron las desapariciones forzadas fue en el marco de la Guerra contra el Narcotráfico que fue implementada por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y retomada por Enrique Peña Nieto (2012-2018), las violencias políticas se hicieron moneda corriente entre las cuales están las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura, etc. En este contexto, donde las fronteras del Estado con los intereses privados en el marco de la afirmación de un régimen neoliberal son cada vez más porosas, se generó un entorno de *macrocriminalidad* (Salcedo-Albarán y Garay Salamanca, 2016). Es decir, la interacción de funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno que desempeñan diferentes roles, con agentes del sector privado, principalmente económico, y agentes que actúan al margen de la ley, los cuales conforman un complejo sistema criminal que es muy difícil de asir debido a los dobles o triples roles que juegan muchos de los nodos de esta red criminal.

En este marco, el recurso a la desaparición de personas se incrementó a niveles críticos donde es muy difícil distinguir quién es el agente perpetrador y los objetivos por los que se desaparece a las personas. Sin embargo, en muchos casos de figura se pudo mostrar que se da una especie de "pedagogía del terror", ya que existe transmisión de conocimientos entre agentes que han sido formados en técnicas militares que luego pasan a formar parte de las filas de los grupos criminales o que desde su rol de agentes del Estado, en una relación de complicidad y/o aquiescencia, también dan formación a grupos criminales en técnicas de tortura y/o desaparición. En ese sentido, en el periodo actual donde se da todo un debate entre personal académico, del poder legislativo, personas defensoras de derechos humanos y las mismas familias de víctimas, sobre si se trata de desapariciones forzadas o no, debido a que muchas de ellas son cometidas por agentes criminales; en el marco de esta tesis se argumentó que dada su sistematicidad y generalidad, sí se pueden señalar como desapariciones forzadas, además de que en el entramado de este contexto *macrocriminal*, por acción directa, por connivencia o por aquiescencia, en muchas de las desapariciones de personas está involucrado al menos un agente del Estado.

En ese sentido, en el marco de la implementación de una economía neoliberal rapaz, aunado a una ausencia de Estado de derecho y en este contexto *macrocriminal,* se puede analizar que en el país se instauró un flujo comercial de personas que se basa en *economías predatorias* con participación de agentes estatales. Es decir, que ésta tiene su valor de cambio en los seres humanos, en particular en aquellos y aquellas que están en situación de vulnerabilidad: género, pobreza, desarraigo, proceso migratorio, traslados, etc., y que estos cuerpos que se hacen desaparecer corren el riesgo de convertirse en una "mercancía" de estas economías: trata de personas, trabajo forzado, etc. Pero además, en cuanto a las desapariciones de personas como moneda de cambio, en el análisis que se estableció sobre este periodo de desapariciones, se puede afirmar que también hay una continuidad con su uso en el pasado ya que actualmente se continúa a recurrir a ella para neutralizar a oponentes

políticos y frenar movimientos sociales, como por ejemplo, en el marco de la instauración de megaproyectos, extractivismo, etc. Así, en el contexto mexicano actual, casi cualquier persona es susceptible de desaparecer, sobre todo si se encuentra en situación de vulnerabilidad o si es un agente que perturba el orden del poder en curso o es una amenaza para la operacionalidad de las economías predatorias y/o entramados de corrupción. En un contexto tal, de impunidad y ausencia de Estado de derecho, algunas y algunos individuos se convierten en *homo sacer* (Agamben, 2005), es decir, en un o una persona sacrificable para la continuidad del orden económico y político establecido.

Las valquirias al rescate de los cuerpos ausentados

Entender el origen, funcionamiento, vernacularización y periodización en México del dispositivo de la desaparición forzada de personas, resultaba indispensable para comprender las características de los sujetos políticos que han surgido para hacerle frente y su proceso de politización. Una vez que este proceso fue reflexionado, se pudo establecer entonces una ruta de análisis de éstos en función de cada período, del contexto social y político y de sus estrategias de acción.

De esta manera, en este procedimiento, en un primer momento se analizó cuáles son las consecuencias del dispositivo de la desaparición forzada de personas en los círculos cercanos de las personas que se hacen desaparecer y esto tanto en su dimensión material, como psicosocial. El estado liminal (Turner, 1973) en el que es percibida la persona ausentada, la pérdida ambigua (Boss, 2001) que representa para sus familiares, pero sobre todo la incertidumbre constante, el estado de zozobra, entre otros factores, es lo que llevó al surgimiento de una figura política particular, simbólicamente potente, que es el de las mujeres-madres que activan su agentividad para salir al reclamo público de sus vástagos desaparecidos. Esta figura atraviesa todo el continente y en México todos los periodos de la desaparición forzada. Estas

mujeres-madres, se nuclean en *comunidades de dolor* (Das, 2008; Gatti y Martínez, 2017) para de manera organizada y en colectivo, salir al rescate de los cuerpos que han sido ausentados en el marco de este dispositivo.

Las nornas del pasado

La objetivación de esta violencia de Estado por parte de familiares de personas desaparecidas, dio acceso a una epistemología particular, vinculada con el terrorismo de Estado (Radilla Martínez y Rangel Lozano, 2012). El poder darle un nombre a este dispositivo de desaparición de personas, dio acceso a la experiencia ontológica que permitió aprehenderlo, desconcatenarlo en sus componentes y así lograr comunicarlo, como violencia personal que desajusta los horizontes de sentido (Gatti, 2008), pero también como problema social de dimensiones más amplias.

Los primeros colectivos de familiares de personas desaparecidas estaban integrados por personas cercanas al movimiento armado socialista mexicano y por tanto nacieron politizados. El reclamo estaba directamente dirigido al Estado, el cual era identificado como agente perpetrador. Sin embargo, posteriormente las dinámicas de los colectivos variarían en función de los contextos y los periodos en los que se llevaron a cabo las desapariciones forzadas.

Si en un primer momento las organizaciones estuvieron conformadas mayoritariamente por familiares de víctimas de las violencias de Estado, en el segundo período, en la década de 1990, los organismos de defensa de derechos humanos entraron en escena profesionalizando la defensa de las causas al movilizar una *expertise* particular propia al campo del derecho. La llegada de estos nuevos actores, contribuyó a la internacionalización de las reivindicaciones, denunciando al Estado mexicano ante organismos multilaterales como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte, la construcción de las causas está dada por los agentes que entran en disputa, pero también por las alianzas que se generan en torno a ellas. En el caso de las mujeres muertas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la década de 1990, el hecho de haber podido hacer un llamado a un *referencial* (Muller, 2010), más amplio como es el feminismo, y en torno al concepto de *feminicidio*, permitió a las actrices locales lograr una *subida en generalidad* (Boltanski y Thévenot, 1991) y atraer a su causa otras aliadas que además de darle visibilidad a sus denuncias, atrajeron diferentes recursos —de expertises, humanos, económicos, etc.—, que permitieron establecer una *coalición de causa* (Sabatier, 2010) y así salir del contexto de la denuncia local a la internacional.

Las nornas del tiempo presente

La llamada Guerra contra el narcotráfico trajo consigo una ola de violencia generalizada en todo el país, dejando detrás de sí miles de víctimas de asesinato, ejecuciones extrajudiciales, desaparición de personas y desplazamientos forzados, etc. En 2011 surgió un primer gran movimiento social para denunciar estas violencias, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), el cual contribuyó de manera determinante a poner en la agenda pública las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban viviendo en el país por parte de los diferentes órdenes de gobierno *so pretexto* de un combate al narcotráfico. De inspiración cristiana, pacifista y constitucionalista, además de organizar caravanas al norte y sur del país y una binacional con Estados Unidos; la estrategia se centró en la promulgación de una Ley General de Víctimas, misma que se logró a inicios de 2012.

Las y los sujetos políticos que surgieron en este contexto, recurrieron a la pedagogía política (Samaddar, 2014), para fortalecer su activismo a partir de formaciones específicas y adquirir herramientas en diferentes materias como son los derechos humanos, la legislación nacional e internacional en materia humanitaria y de derechos

humanos, así como en acciones de incidencia política. En parte gracias a estos procesos, una vez que el MPJD perdió fuerza, estas actrices y actores pudieron mantenerse en la arena pública y seguir pugnando porque sus demandas específicas permearan en las instituciones. Al mismo tiempo, algunos miembros y miembras del MPJD establecieron diferentes relaciones de interlocución más o menos formales y a través de diferentes mecanismos con diversas instituciones de gobierno, tanto a nivel regional como federal, con el objetivo de activar su *agentividad* e intentar modificar o incidir en las estructuras, lo cual se logró en algunos casos.

En esta coyuntura, pudieron distinguirse diferentes tendencias en el movimiento. Por una parte, estaban los familiares mismos de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa —los padres y madres—, los normalistas compañeros de los estudiantes desaparecidos, y las organizaciones de base que les acompañaban, quienes mantenían una relación de confrontación con el Estado y no buscaban incidir de manera directa en materia de política pública. Por otra parte, en el marco de una agenda que pugnaba porque se legislara en materia de desaparición de personas, se generaron *coaliciones de causa* con el objetivo de posicionar las diferentes inquietudes que tenían en la materia las diferentes fracciones del movimiento y los diferentes posicionamientos políticos frente al tema. Luego de dos años de incidencia, se logró finalmente que en noviembre del 2017 se promulgara la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En este mismo contexto, comenzó a darse un fenómeno importante de búsqueda de personas desaparecidas en fosas clandestinas en todo el país, proceso que generó tensiones en las diferentes tendencias del movimiento, entre quienes privilegiaban mantener un posicionamiento político de reclamo del regreso de las personas desaparecidas a imagen de la consigna: "vivos se los llevaron, vivos los queremos" y

quienes privilegiaban una postura humanitaria, que reclamaba el regreso de las personas ausentadas, aunque únicamente fueran sus cuerpos.

De igual manera, cabe destacar que ninguno de estos procesos estuvo exento de tensiones, lo que creó algunas rupturas y continuidades entre las vertientes del movimiento del pasado y del presente e incluso con aquellos del presente mismo. Pero más allá de eso, la multiplicidad de posicionamientos y estrategias de visibilización lograron construir y mantener como un problema de acción política la masiva desaparición de personas en el país como consecuencia de una política de Estado. En ese sentido, mismo si en números relativos las personas desaparecidas representan un menor porcentaje que las personas asesinadas o desplazadas, la prioridad actual en la agenda pública es la desaparición de personas y esto gracias al trabajo permanente y multiposicionado de los diferentes colectivos y sus aliados y aliadas que empujan esta agenda.

Las conclusiones de la ruta de análisis

De esta manera se puede concluir que la construcción de las desapariciones forzadas en México, como un problema de acción política, se logró gracias al trabajo sostenido por casi cincuenta años de los comités de familiares de búsqueda de personas desaparecidas, a los cuales se fueron sumando otras figuras como los centros de defensa de derechos humanos, los organismos internacionales, etc., fortalecidos por desafortunadas coyunturas políticas —MPJD, Ayotzinapa— que contribuyeron a colocar en el centro de la agenda pública el masivo y grave problema de las desapariciones forzadas en el país. Para lograrlo, adicionalmente, tuvieron que recurrir a alianzas con otros actores políticos y agentes dentro de las estructuras del Estado. Pero además, como es lo propio de lo político, las relaciones entre los actores y actrices mismas y entre los colectivos no estuvieron exentas de tensiones y reconfiguraciones a lo largo de todo este proceso, debido a dinámicas internas y

posicionamientos políticos, así como a los contextos particulares de desaparición de personas a los que les estaban haciendo frente. Estas reconfiguraciones no necesariamente fueron negativas puesto que pudieron establecer escalas de acción diferenciadas con los tres órdenes de gobierno, creando nuevamente alianzas en situaciones coyunturales, como por ejemplo, en el marco de las acciones para que se legislara en materia de desapariciones forzadas o en las búsquedas ciudadanas en escenarios de vida y de muerte de las personas víctimas de desaparición forzada para hacer volver los cuerpos ausentes.

Contribuciones

Las reflexiones desarrolladas en esta tesis aportan algunas contribuciones para este campo de estudio que pueden ser identificadas en una dimensión teórica, metodológica y empírica, así como una dimensión en cuanto a dos dinámicas de género, en particular de las mujeres, en torno a la problemática de las desapariciones forzadas de personas.

Contribuciones teóricas

A nivel de la reflexión teórica hay dos principales aportes sobre la desaparición forzada de personas. La primera es el análisis del *dispositivo* de la desaparición forzada (Calveiro Garrido, 1998) como mecanismo de *biopoder* que apunta en dos sentidos. El primer sentido ya ha sido ampliamente estudiado, comenzando por Pilar Calveiro (1998), en el sentido de que es un mecanismo de poder que tiene por objetivo despojar de su humanidad al sujeto-sujetado y que este proceso pasa muchas veces a través de la obturación de los sentidos, por medio de la tortura, que los perpetradores tienen la prebenda del poder de la vida o de la muerte sobre el otro sometido, etc.

Sin embargo, el análisis y desarrollo del segundo objetivo es uno de los aportes de esta investigación. Este es que, este dispositivo tiene como principal objetivo ejercer un *suplicio* en quien es testigo de estos crímenes, esto es, que el personaje principal es el "pueblo", cuya presencia es un requisito para su realización. El suplicio tiene que verse. Es decir, muestra la fuerza del poder soberano cayendo sobre el culpable (Foucault, 1989, p. 69). Si bien como fue desarrollado a lo largo de toda la tesis, la desaparición de personas está colmada de paradojas, esta es una de las mayores: para mostrar el poder, alguien o algo debe ser ocultado, ocasionando zozobra y desconcierto en quien observa la escena: "Noche y niebla, ya no hay nadie".

Por otra parte, otra de las paradojas de la desaparición forzada es que el miedo, la incertidumbre, el aislamiento social que tiene por objetivo este mecanismo, o bien llevan a la inmovilidad social, o bien se comunalizan —y he aquí la paradoja— y se lleva el reclamo del regreso de las personas ausentadas del espacio privado a la arena pública. Y es aquí aparece otra de las aportaciones de esta reflexión. La búsqueda de las personas desaparecidas llevó a la emergencia de un sujeto político particular, el de la mujer-madre en búsqueda de su progenitura desaparecida, donde la novedad del análisis radica en identificar la relación dialéctica que se establece con la representación de la corporeidad de quien no está, es decir, en resaltar esta doble naturaleza que habita el cuerpo: carne/alma pero también entidad social (García Selgas, 1994). Esta relación dialéctica que establecen quienes buscan con la/el *otro* desaparecido, pasa por un proceso de *de*subjetivación de su yo individual —emancipación de sí mismo (Foucault, 1988)—, que se reconfigura a través de un proceso de *re*subjetivación de los horizontes de sentido, como ente colectivo —códigos, imaginarios, formas de sentir y representaciones que se articulan en momentos determinados para hacer significativa una situación (Retamozo, 2011)—. Así, ante esta experiencia límite que representa la desaparición forzada de personas, esta *re*subjetivación, en una relación dialéctica con la persona desaparecida, le *autoriza* a quien busca —en general recae en la figura de la mujer-madre— para

hablar *en nombre de* quien está desaparecido o desaparecida y reclamar sus derechos como si fueran *para sí.*

Contribuciones metodológicas

Por otra parte, a nivel metodológico el recurso al análisis genealógico, con sus respectivas continuidades y rupturas de la trayectoria de las desapariciones forzadas en México, también es una de las novedades en este trabajo debido a que una empresa de este tipo aún no ha sido publicada. Es decir, el seguimiento de la pista del dispositivo de las desapariciones forzadas, de cómo llega al país desde una trayectoria europea en el marco de una política continental de "combate" al comunismo, cómo se vernaculiza y cómo se dan las reapropiaciones de los actores en el marco de las transferencias de esta pedagogía del terror en México, así como los diferentes períodos en los que el recurso a la desaparición forzada se ha incrementado, es una de las aportaciones de este trabajo.

Contribuciones a nivel empírico

En cuanto a los aportes a nivel empírico se pueden enumerar tres aportes principales. El primero es este análisis diacrónico y sincrónico de la construcción de este problema de la acción pública como problema político a través de la emergencia e interacción de sujetos políticos particulares nucleados en torno a comunidades políticas donde el eje rector es el dolor. El segundo, es la categorización de los tipos de desaparición de personas en México y los "usos" que se les da a los cuerpos en el pico histórico de desaparición de personas que se da en la actualidad, a partir de la alternancia política y del giro neoliberal mexicano. Por último el análisis de la conformación de alianzas y rupturas en torno a la agenda legislativa de las fuerzas políticas en presencia, así como las tensiones que se dan en torno a la búsqueda de los cuerpos: búsqueda en escenarios de vida y búsqueda en escenarios de muerte.

Dinámicas de género

Finalmente, en cuanto a las dinámicas de género en torno a la desaparición forzada de personas se pueden hacer dos observaciones particulares. La primera es la que se da en torno a la defensa de las víctimas de esta violencias de Estado, debido a que, la mayoría de las personas que buscan a quienes han sido desaparecidos o desaparecidas son las mujeres, en particular las mujeres-madres. El reclamo público del regreso de los cuerpos llevó a estas mujeres a la entrada en política como sujeto colectivo, reproduciendo la ética de los cuidados a la cual normalmente se asocia a este género, pero esta vez para activar su agentividad en el marco del ejercicio de una ciudadanía activa.

La segunda es sobre los posibles usos violentos con connotaciones sexuales específicas que se hace del cuerpo de las mujeres que se hacen desaparecer. Si bien a nivel mundial existe una tendencia a hacer desaparecer mayoritariamente hombres y en México esta tendencia se mantiene, también es cierto que las desapariciones de mujeres que son víctimas de desaparición forzada, de manera alarmante y que deja a la vista claramente el sesgo de género, son también víctimas de violencias sexuales. De esta manera, en este caso de figura, el cuerpo de las mujeres sigue considerándose, además de todas las otras vejaciones que de por sí representa la desaparición forzada de una persona, como un trofeo de guerra. Esto quedó particularmente de manifiesto en las denuncias de desapariciones de mujeres de la década de 1990 en la frontera norte de México, en el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero esta tendencia se mantiene en la desaparición de mujeres en la actualidad, sobre todo de niñas, adolescentes y jóvenes.

Límites de la investigación

En cuanto a los límites de esta investigación pueden ser señalados los siguientes. Por una parte, el haber dejado fuera del análisis el rol significativo que juega el arte en el proceso de politización del problema. Si bien es algo que apareció en filigrana a lo largo del trabajo de campo y en algunas de las entrevistas en particular, el rol que juegan el arte y las expresiones artísticas en el proceso de politización sería digno de un análisis en sí mismo. Por otra parte, otro de los aspectos que pudieron haberse explorado con mayor profundidad, es el recurso o no de la movilización del dolor como categoría en la estrategia de lucha entre los colectivos y organizaciones que estaban previamente politizados antes del evento de desaparición y quienes no lo estaban. Es decir, si esta diferenciación se hace latente en la lucha o no, y si sí cómo. Al enunciar esto pienso por ejemplo, en las organizaciones que surgieron en el marco de la Guerra Sucia a iniciativa de agentes y liderazgos cercanos y/o activos en el movimiento armado socialista mexicano, donde el discurso más que de dolor, estaba centrado en un enfoque de derechos.

El mismo caso de figura aparece con los padres y madres de Ayotzinapa, quienes sí manifiestan el dolor públicamente pero éste no es el primer estandarte de lucha, sino el acceso efectivo a sus derechos humanos y los de sus hijos. Es decir, privilegian un enfoque de derechos, politizado, a un enfoque humanitario. En la misma línea del caso Ayotzinapa, también se hubiera podido indagar más sobre esta especificidad en cuanto a la implicación en la búsqueda de los jóvenes de la figura de "padre" en particular, debido a que es una de las pocas organizaciones de víctimas en las que se les da un lugar en pie de igualdad a los padres y las madres y donde, tal como ya fue mencionado, la figura del dolor no es uno de los principales estandartes.

Otra dimensión que ha quedado marginalizada en este quehacer es el rol que las organizaciones migrantes con aliados institucionales están realizando y que

contribuyen con este proceso de politización o que incluso empujan las fronteras del derecho, como es el caso de la implementación del mecanismo de justicia trasnacional que la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho está impulsando en la PGR, en alianza con organizaciones de familiares de personas desaparecidas centroamericanas que desaparecieron en el país, con el objetivo de que puedan interponer directamente la denuncia de desaparición de sus familiares como ciudadanas y ciudadanos en oficinas regionales de la PGR en sus propios países, sin tener que pasar por la mediación de sus Estados, y que además, eventualmente puedan tener acceso a mecanismos de reparación. Es decir, una verdadera innovación en materia de derecho internacional de derechos humanos. Investigación que en sí misma ameritaría la escritura de una tesis. Finalmente, otra de las limitaciones de este trabajo, como fue anunciado desde la introducción, es que no todas las personas que afrontan la desaparición de una persona cercana deciden cruzar la barrera del dolor privado al reclamo público del regreso de los cuerpos, explorar los mecanismos que operan a nivel psicológico, sociológico y/o psicosocial para que se de esta diferenciación del paso a la politización o no, serían sin duda complementarios al análisis aquí desarrollado.

Perspectivas: *las nornas del futuro*

Finalmente, para realmente concluir y de acuerdo con las *nornas del futuro* quiero acotar que: lo que aquí fue escrito *no debería suceder nunca más*. Efectivamente, las *nornas del futuro*, quienes se representan en *Skuld*, a pesar de que están conscientes de las determinaciones que les escapan, tienen conocimiento lúcido del entrelazamiento de los hilos y concatenan los hechos para determinar lo que *debería de suceder en el futuro*. En ese sentido, tal como fue desarrollado en esta investigación, las *nornas del tiempo pasado* tienen ese conocimiento *clarividente* de que la impunidad de los crímenes del pasado favorece la impunidad del periodo actual. Las *nornas del tiempo presente*, al igual que las del *pasado*, desde su

entendimiento del problema, no escatiman esfuerzos para realizar acciones y presentar soluciones para que se detenga este sinsentido. En el contexto mexicano actual donde se espera a partir del 1 de diciembre de 2018 una transición política con tendencia de centro-izquierda, las *nornas del futuro* —las que resguardan la memoria—, comienzan a movilizarse articulando lo que pasó y lo que está pasando, para clamar lo que debería de suceder para que esto no se repita *nunca más*: la memoria es un deber y se debe llevar ante la justicia a los responsables poniendo especial atención en la cadena de mando y en la imbricación de actores en este contexto de macrocriminalidad. No puede haber proceso de paz sin dignidad y justicia y sin el regreso de los cuerpos ausentes —o mínimamente el acceso al derecho a la verdad—. En ese sentido, se abre todo un campo de análisis en torno a los procesos de implementación o no y del cómo, de un marco de justicia transicional en el contexto de esta nueva alternancia política que está por comenzar en México.

ANEXO A: *Damnatie memoriae*

Fotografía 1: Damnatie memoriae



*Fotografía tomada el 22 de abril de 1937 a Joseph Stalin, Kliment E. Voroshílov y Viacheslav M. Mólotov al lado de Nikolai Yezhov. Cuando Yezhov fue ejecutado en 1939 la fotografía fue retocada para que él no apareciera más en ella.
Fuente: http://davidwaidauthor.com/obliviate-damnatio-memoriae-in-history/
(Consultado el 13 de junio del 2017).

ANEXO B: La utopía está(ba) en el horizonte… y servía para caminar[202]

En el marco de la Guerra Fría, en occidente —y en América Latina también, debido a la influencia de Europa y en particular de la América del Norte anglófona—, la generación de la postguerra había alcanzado la edad de la juventud y sus condiciones sociales y económicas, que habrían sido diferentes a las de sus padres, dejaban lugar al nacimiento de diferentes utopías. Así, al igual que circulaban las ideas de represión, circulaban también las ideas de las diferentes estrategias de resistencia al poder. A finales de la década de 1960, diversos movimientos subversivos emergieron a lo largo del continente —México incluido—, tanto en el medio rural como urbano y esto debido a varios factores. La clase media se había ensanchado en el segundo tercio del siglo, debido a la estabilidad que proporcionaba el "equilibrio" entre las potencias y debido también a las políticas económicas exitosas, como fue, en el caso mexicano, la del *desarrollo estabilizador* (1952-1970), y por lo mismo, las brechas sociales se ampliaron entre el medio rural empobrecido y las nuevas clases medias urbanas. Al mismo tiempo, en México las políticas educativas implementadas durante este periodo dieron sus frutos, como fue el *Plan de 11 años*[203] y con ello se logró la

---

[202] Título retomado de la respuesta que Fernando Birri (argentino, 1925-2017) dio a un estudiante que le interpeló en la Universidad de Cartagena de Indias cuando se encontraba dando una conferencia junto con Eduardo Galeano (uruguayo, 1940-2015) y le pregunta, ¿Para qué sirve la utopía? Eduardo Galeano narra la respuesta que dio Birri de esta manera: "La utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar (Galeano, 2011).

[203] El *Plan de 11 años* fue una iniciativa del Secretario de Educación Jaime Torres Bodet (1958-1964) durante el periodo presidencial de Adolfo López Mateos. Ésta consistía en varias acciones para lograr llevar la educación a todo el país y lograr la alfabetización masiva. Por ejemplo, además de las

masificación escolar a nivel básico, tanto en el medio rural como urbano, lo que además trajo como consecuencia un incremento en la matrícula de la educación media, media-superior y superior (Bartolucci, 2000), —eso sí, la presencia de las mujeres, sobre todo en la educación superior, continuaba siendo de apenas del 17% (de Garay y del Valle-Díaz-Muñoz, 2012, p. 5) —.

Estas condiciones materiales y de acceso a la educación —además de fenómenos culturales y musicales que las acompañaron como el desarrollo del rock y la canción de protesta—, aunado al entusiasmo que generó la revolución cubana, propiciaron una importante revolución cultural en México —para el caso que interesa en esta tesis—, pero también en varios países del continente y del mundo. Un ejemplo característico de esta revolución cultural en diferentes latitudes del planeta son las movilizaciones del año 1968. Por ejemplo, en Estados Unidos las protestas masivas de la población contra la guerra de Vietnam; en Checoslovaquia, *la primavera de Praga*; en Francia lo que se conoció como el *Mayo francés*, y en México, por supuesto, la masiva movilización de estudiantes que concluyó con la matanza en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y que sentó las bases para las guerrillas urbanas con participación de estudiantes universitarios que se desarrollarían en la década siguiente (Scherer García y Monsivais, 1999).

Por otra parte, en el medio rural, la revolución mexicana de 1910 no había cumplido sus promesas y es lo que llevó a Pablo Gómez Ramírez (1926-1965), Arturo Gámiz García (1940-1965), Genaro Vásquez Rojas (1931-1972) y Lucio Cabañas Barrientos (1936-1974) —profesores rurales los cuatro—, a llamar a tomar las armas con la

---

normales oficiales y rurales ya existentes, se crearon institutos de capacitación para maestros a lo largo del país. Se creó además la Comisión de los libros de texto gratuitos, la cual editó ejemplares por millares, así como programas para incentivar que los padres llevaran a sus hijos a la escuela, como por ejemplo los desayunos escolares. Ver: (Bartolucci, 2000; Martínez Rizo, 2001; Schmelkes, 2010).

esperanza de hacer cambiar las condiciones estructurales de la pobreza y de sujeción del campesinado[204, 205]. Los dos primeros en el estado de Chihuahua, los dos últimos en el estado de Guerrero. Así, el 23 de septiembre de 1965 se llevó a cabo en Chihuahua una de las acciones insurreccionales más significativas del México postrevolucionario y que marcaría un hito del movimiento guerrillero de la segunda mitad del siglo. En un contexto de despojo por grandes terratenientes madereros y de represión por parte de las fuerzas armadas, diversos campesinos se organizaron para reclamar el acceso a la tierra. Agotados por una lucha de varios meses, miembros del Grupo Popular Guerrillero (GPG), liderados por Pablo Gómez Ramírez y Arturo Gámiz García, atacaron el cuartel militar de la población de Madera, llamando a esta acción el Asalto al cuartel de Madera[206]. En el asalto, la mayoría de los guerrilleros murieron. Sus cuerpos fueron paseados por la ciudad como escarmiento y, por órdenes del gobernador Práxedes Giner Durán (1962-1968) —él mismo terrateniente maderero—, fueron enterrados en una fosa común bajo la consigna: "Era tierra por lo

---

[204] Cabe señalar que en la década de los años 1950, en el estado de Morelos, tuvo lugar un movimiento armado, de inspiración zapatista y de bases campesinas e indígenas, liderado por Rubén Jaramillo (1900-1962), el cual fue rápidamente diezmado por el Estado (Montemayor, 2010). A pesar de considerársele pionero, en la literatura no se estima que las guerrillas de la década de 1960, tengan las mismas características que el movimiento jaramillista, aunque sí se reconoce que sirvió de inspiración, para el Partido de los Pobres (PDLP), por ejemplo. En realidad es el Asalto al Cuartel de Madera, el 23 de septiembre de 1965, el que se considera un hito para el movimiento armado socialista mexicano. De hecho, varios de los grupos subversivos llevarían en su nombre la fecha del 23 de septiembre. Ver: (Castellanos, 2009; Montemayor, 2010).

[205] Algunos de las y los miembros de las guerrillas podían tener una doble auto-identificación, como indígenas y como campesinos. Sin embargo, las reivindicaciones reclamadas durante este periodo y contexto particular eran primeramente de acceso efectivo a la tierra y contra la inequidad social y no tanto étnicas.

[206] El nombre y la acción se inspira del Asalto al cuartel Moncada llevado a cabo en Santiago de Cuba el 26 de julio de 1953 para derrocar a Fulgencio Batista, el cual fue liderado por Fidel Castro. Ver: (Rojas Gutierrez, 2015; Valdespino Soto, 1975).

que peleaban, ¿no? ¡Pues denles tierra hasta que se harten!" (Ferrer Vicario, 2014, p. 24).

Por su parte, casi en paralelo y sin haberse hablado nunca, Lucio Cabañas a partir de mayo 1967 —a través de la creación del Partido de los Pobres—, y Genaro Vásquez en abril de 1968 —después de su fuga de prisión en la que se encontraba desde mayo de 1966 por su participación en la Asociación Cívica de Guerrero (ACG)—, encabezaron dos movimientos armados de campesinos cansados de las hostilidades y abusos de las autoridades académicas y caciquiles de la región. A partir de entonces la armada nunca abandonaría la zona y el estado de Guerrero sería el epicentro de grandes represiones en el país a través del despliegue militar en la Costa Grande de Guerrero (Sánchez Serrano *et al.*, 2014). De hecho, el 24 de mayo de 1969 el ejército comenzó en el estado la "Operación rastrillo" que tenía por objetivo desarticular la organización armada campesina y capturar a sus principales líderes (Castellanos, 2009).

En el medio urbano, y particularmente en las grandes ciudades, las recientes matanzas de estudiantes —2 de octubre de 1968 y *Jueves de Corpus* de 1971— habrían contribuido a motivar la formación de diversos grupos guerrilleros. De esta manera, tanto en el medio rural y urbano, en la primera mitad de la década de 1970, los grupos que tomaron la vía armada se multiplicaron. De acuerdo con la profunda investigación periodística de más de seis años realizada por Laura Castellanos (2009)[207], los principales grupos guerrilleros en el país serían los siguientes: la

[207] De acuerdo con la misma Laura Castellanos, entre 1960 y 1970 más de una treintena de guerrillas se formaron en el país (p. 13). Arriba se citan únicamente las que tuvieron más impacto, ya que además, como afirma la autora: "no es fácil trazar una línea de separación clara entre los grupos armados propiamente dicho y las organizaciones populares activas, cambiantes y complejas que lucharon por las reivindicaciones agrarias, magisteriales o sindicales" (Castellanos, 2009, p. 6). Los grupos aquí citados son a título de ejemplo. Para una mejor comprensión de los movimientos subversivos durante

Asociación Nacional Cívica Revolucionaria, con Genaro Vásquez a la cabeza; la Brigada Obrera de Lucha Armada (Bola), dirigido por los hermanos de Arturo Gámiz; los Comandos Armados de Chihuahua fundado por Diego Lucero (1947-1972); los Comandos Armados del Pueblo en el Distrito Federal; los *Enfermos*, conformado por estudiantes universitarios de Sinaloa; el Ejército Popular Unido de América, en Morelos; las Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución, en Sonora; las Fuerzas Armadas Revolucionarias; el Frente Estudiantil Revolucionario, que surgió en la Universidad de Guadalajara; las Fuerzas de Liberación Nacional que surgieron en Monterrey; las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo —miembros de los cuales secuestraron al cónsul de Estados Unidos, Terrance Leonhardy y a Guadalupe Zuno Hernández, el suegro del presidente en funciones Luis Echeverria—; el Frente Urbano Zapatista dirigido por Francisca Calvo Zapata —una de las pocas organizaciones guerrilleras dirigidas por una mujer—; el Grupo Popular Guerrillero fundado en Chihuahua; los *Guajiros*, conformado por jóvenes de Mexicali, Tijuana y Baja California; los *Lacandones* con miembros del Instituto Politécnico Nacional; la Liga de Comunistas Armados, formada por estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León; el Movimiento de Acción Revolucionario creado en Moscú por un grupo de estudiantes becarios; el Movimiento Revolucionario del Pueblo conformado por personas de 9 estados; la Organización Nacional Revolucionaria formado por sobrevivientes del Asalto al cuartel de Madera; el Partido de los Pobres (PDLP) fundado por Lucio Cabañas; los *Procesos* que surgieron en la Universidad Autónoma de Nuevo León; la Unión del Pueblo, fundado por José María Ignacio Ortiz Vides (1941-), exguerrillero guatemalteco formado en Vietnam; los *Vikingos* de Guadalajara. El movimiento 23 de septiembre creado por estudiantes de Chihuahua; el Grupo 23 de septiembre formado por integrantes de las juventudes comunistas.

---

el periodo llamado como Guerra Sucia en México, además de Castellanos (2009), entre otros ver: (A. Bartra, 1985; Montemayor, 2010; Sánchez Serrano *et al.*, 2014).

Además, el 15 de marzo de 1973 surgió la más grande organización de la guerrilla urbana, la Liga Comunista 23 de septiembre (*la Liga*), la cual fue fundada en Guadalajara por dirigentes de diferentes grupos guerrilleros, algunos de los antes mencionados, y de ciudades como Guadalajara, Sinaloa, Chihuahua, Monterrey, México y Baja California. A su vez, *la Liga* estaba dividida en diferentes brigadas como son la Brigada Genaro Vásquez en Zihuatanejo, la Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata en Oaxaca y la Brigada Roja en la capital del país (Castellanos, 2009, p. 425-431). Esta última inspiraría el nombre por contraposición del grupo cuasi-paramilitar del Estado, la Brigada Blanca, que tendría por objetivo combatir a *la Liga* y que se convirtió en una maquinaria del terror.

Si bien es cierto que la motivación de la mayor parte de estos grupos era la utopía de revertir las relaciones estructurales que llevan a la inequidad social inspirados en los movimientos internacionales, en particular del cubano, también es cierto que el cómo hacerlo disentía en los diferentes grupos e incluso en las diferentes fracciones al interior de los grupos. Por ejemplo, los *Enfermos* surgieron como una facción radicalizada de la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias fueron producto de un cisma del Partido de los Pobres, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo surgieron de una división al interior del Frente Estudiantil Revolucionario o el Grupo 23 de septiembre que intentó unirse al movimiento armado de Lucio Cabañas, antes de que éste último los expulsara de su campamento. Incluso, la misma Liga Comunista 23 de Septiembre desapareció alrededor de 1990 después de un largo proceso de divisiones, fracturas y deserciones (Castellanos, 2009). Estas divisiones internas, aunado a que realizaban actos considerados como terroristas —secuestros, ataques a sucursales bancarias, asesinatos de contrincantes—, además de la fuerte represión del Estado y que una buena parte de la prensa reproducía el discurso oficial y por lo tanto influenciaba la opinión pública, no lograron hacer que una base social más amplia simpatizara con sus formas de

lucha o que el movimiento tomara una mayor amplitud. Es en este contexto que el terrorismo de Estado en el marco de la Guerra Sucia tomó fuerza.

ANEXO C: La (*¿fallida?*) transición a la democracia: la aceleración del proceso democrático, transitar en la circunferencia del círculo

Para muchos (Camp, 2000 ; Meyer y Reyna, 1989 ; Zermeño, 1996, entre otros), entre las principales causas del autoritarismo que se había vivido en México en las últimas décadas estaba la ausencia de la democracia representativa en los diferentes órganos de gobierno, por lo que era necesaria una transición a la democracia. En ese sentido, se pensaba que con la reforma política de 1977 instituida durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982), se había iniciado este proceso de transición, que no podía sino favorecer la soberanía del pueblo y la participación ciudadana en la toma de decisiones, reduciendo así la violencia política (Wondelberg, 2007, p. 99). Efectivamente, José López Portillo (1976-1982) llegó a la presidencia de la República Mexicana casi como candidato único. Su sólo rival fue Valentín Campa, un líder sindical del Partido Comunista Mexicano (PCM), partido que no tenía registro y por lo mismo los votos que obtuvo en las urnas fueron anulados, lo cual agudizó la crisis de legitimidad del régimen priista. Para paliar esta situación, López Portillo en su discurso de toma de posesión el 1 de diciembre de 1976, prometió dos leyes centrales, la primera era una reforma política que "brindara los espacios necesarios para la participación política dentro de esa ley" (FEMOSPP, 2006, p. 496) y una "ley de amnistía para integrar a la vida política del país a los presos, perseguidos y exiliados del movimiento armado" (FEMOSPP, 2016, p. 496). La aplicación de estas leyes fue encomendada a su Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, quien fuera presidente del PRI durante el sexenio de Echeverría. La reforma política se concretó con la modificación de 17 artículos de la Constitución publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 1977 y con la promulgación de la Ley Federal de

Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el 30 de diciembre del mismo año. Esta ley elevaba a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público, contemplaba la ampliación del sistema de partidos y su participación en el Congreso, además de introducir el sistema de representación proporcional, es decir diputados uninominales y plurinominales. La ley de amnistía entró en vigor un año después, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978.

En paralelo a este proceso en México, perfilándose hacia la conclusión de la bipolaridad del mundo con el fin de la Guerra Fría, el bloque de occidente, encabezado por Estados Unidos y a través de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsó cambios estructurales en las economías Latinoamericanas (Consenso de Washington, contratos de ajuste estructural, etc.) con la finalidad de afianzar la economía neoliberal en el continente. Para lograr esto, una de las condicionantes era la consolidación, o por lo menos poner en marcha, reformas estructurales que evidenciaran un proceso de transición a la democracia (Ver: Santa Fe Group y Heritage Foundation, 1980 ; Selser, 1988, 1990). En los Documentos de *Santa Fe II. Una estrategia para América Latina para la Década de 1990* redactados para el gobierno del presidente George H. W. Bush (1989-1993) —el padre—, el Grupo de Santa Fe se felicita "del éxito" —parcial— de esta estrategia del régimen precedente.

> El retorno a la democracia fue al parecer el mayor de los éxitos logrados por la administración Reagan[208] en América Latina. Esta conquista, aun teniendo

---

[208] Conviene recordar que el gobierno de Reagan tenía una política de *doble estándar* frente al apoyo a la democracia y a los derechos humanos en Latinoamérica en la que invertía recursos muy importantes para desestabilizar a los regímenes que no se alineaban con las políticas y preceptos de Estados Unidos, como por ejemplo el financiamiento otorgado a los *Contras* en Nicaragua. Ver capítulo II, *supra*.

> en cuenta su apoyo bipartidista, puede ser más frágil de lo que actualmente se piensa. Debe prestarse atención a las vulnerabilidades del régimen democrático. Nuestro concepto de régimen democrático comprende tanto al gobierno temporario como al permanente. En una democracia, el gobierno temporal reside en un funcionario elegido. El gobierno permanente lo constituyen las estructuras institucionales y las burocracias que no cambian como resultado de las elecciones, por ejemplo el ejército, el Poder Judicial y la burocracia civil. Para que se mantenga democrática, la sociedad debe demandar al régimen la consiguiente rendición de cuentas. Esto requiere una comprensión de la verdadera naturaleza del estatismo. Se produce el estatismo cuando la sociedad pierde o ha perdido la capacidad de exigirle cuentas al régimen (Selser, 1990, p. 132).

De esta manera, en estos documentos se afirmaba como nueva prioridad continental, ya no el combate al comunismo como en las décadas precedentes, sino la transición a la democracia en todo América Latina, como una voluntad del país hegemónico. México parecía ser una de sus prioridades. Por ejemplo, en este segundo Documento de Santa Fe están redactadas 5 propuestas que van en el sentido de reforzar regímenes democráticos en Latinoamérica. México es expresamente citado en la propuesta número 2:

> *Estados Unidos debe reconocer la necesidad de gobiernos dedicados a crear regímenes democráticos para contener a los partidos antidemocráticos.*
> El enfoque en el régimen democrático requerirá ir más allá de la democracia formal (por ejemplo las elecciones) y proporcionar, cuando sea posible, los medios para fortalecer las instituciones democráticas locales, tales como los sindicatos, grupos empresariales independientes, asociaciones comerciales y organizaciones educacionales. La Alemania post-hitleriana proporciona un ejemplo instructivo. Sólo mediante el fortalecimiento de grupos autónomos de autogobierno, tales como los grupos empresariales de México o la prensa independiente de Perú, podrá la sociedad desarrollar la voluntad democrática para derrotar al autoritarismo estatista. [...] En relación con nuestro compromiso con la autodeterminación latinoamericana, debemos aceptar el hecho de que en la mayoría de los regímenes latinoamericanos se va a producir una mayor concentración de poder en la rama ejecutiva y no en la

> legislativa[209]. La proclividad latinoamericana a marginar a las legislaturas mediante mecanismos ejecutivos tiene detrás una larga historia y en países como México y Perú esto significa que el verdadero control del Poder Ejecutivo proviene del interior del aparato del partido o del electorado. El elemento decisivo reside en sí el régimen es responsable o no lo es ante el pueblo (Selser, 1990, p. 143-144. En itálicas en el texto original).

Así, tal como se puede leer en la propuesta número 2, para México la invitación no es a fortalecer la sociedad civil para reforzar la democracia, sino, entre otros, la invitación es a fortalecer el "autogobierno" empresarial. Posteriormente, en la cuarta parte de este texto titulada "Las futuras crisis de los regímenes de América Latina y las responsabilidades de Estados Unidos", se mencionan 5 regímenes que Estados Unidos considera que representan ejemplos "significativos" de las crisis en curso en Latinoamérica. México encabeza la lista seguido de Colombia, Brasil, Cuba y Panamá. Concretamente para México se avanzan tres propuestas:

> Propuesta Número 1. A Estados Unidos le es indispensable encontrar vías y medios para estimular una oposición legítima. Se están incrementando los signos de oposición al predominio de un partido único. La reforma interna del

---

[209] En el caso mexicano caracterizado por el *presidencialismo*, la figura fuerte del jefe del ejecutivo se ha mantenido inerme incluso con la alternancia política. Sin embargo, la fuerza del PRI en el poder legislativo se mantuvo vigente incluso en los gobiernos del PAN, guardando la mayoría en la Cámara de Diputados en 3 de 4 periodos legislativos entre 2000 y 2012 y en 2 de 4 de la Cámara de senadores en el mismo periodo. Por ejemplo, durante el periodo de Vicente Fox (2000-2006) en la LVIII Legislatura (2000-2003), de un total de 128 senadores, había 59 del PRI, seguidos del PAN con 47. En la Cámara de Diputados, había 209 priistas de un total de 500, seguido del PAN con 206. En la LIX Legislatura (2003-2006) hubo 57 del PRI y el PAN se mantuvo con 47. En la de Diputados hubo 203 del PRI y el PAN perdió alrededor de 20% de sus escaños quedándose únicamente con 148 diputados. Durante el periodo de Felipe Calderón (2006-2012), en el periodo de la LX Legislatura hubo 52 senadores del PAN contra 33 del PRI y 206 diputados del PAN contra 106 del PRI. Por la primera vez, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) había logrado rebasar al PRI con 127 escaños. En el Senado, la misma tendencia se mantuvo en la LXI Legislatura con 52 senadores del PAN y 33 del PRI. Por el contrario, en la Cámara de Diputados, el PAN perdió prácticamente la mitad de sus escaños quedando únicamente con 142, mientras que el PRI obtuvo 242, el PRD tuvo únicamente 63. Con la vuelta del PRI a la cabeza del ejecutivo con Enrique Peña Nieto (2012-2018), el PRI mantiene la mayoría relativa en ambas Cámaras de las LXII y LXIII legislaturas. (Ver sitios Web oficiales de la Cámara de Diputados y de la Cámara del Senado).

> PRI (Partido Revolucionario Institucional) no será suficiente para contener el crecimiento de los partidos de oposición.
> Propuesta Número 2. Estados Unidos debe apoyar cualquier esfuerzo destinado a desprenderse de las empresas de propiedad estatal y desarrollar un mercado interno para enfrentar la deuda externa de la nación.
> Propuesta Número 3. Resulta de la máxima importancia cualquier apoyo que Estados Unidos pueda procurar para mejorar el corrupto y sobornador sistema judicial de México. Sin estas mejoras la guerra contra los narcóticos continuará siendo una broma siniestra (Selser, 1990).

Con respecto a estas tres propuestas sobre México en particular, en el diagnóstico de este mismo documento se afirmaba también que había buenas señales en el país para esta transición porque, entre otras cosas, al interior del PRI se habían realizado reformas con respecto al proceso de selección de los candidatos del partido y que incluso se habían realizado elecciones preliminares de manera interna. También señalaban que en respuesta a la caída del precio del peso en los mercados internacionales en 1982, el PRI había comenzado a hacer esfuerzos por favorecer su imagen ante la opinión pública. Daban cuenta también de la salida de Cuauhtémoc Cárdenas del PRI y de la fundación del PRD y de cómo en 1988, tanto Cárdenas como Manuel Clouthier, del PAN, proseguían impugnando la legitimidad de las elecciones, lo que les mantenía entusiastas de que este proceso empujara al PRI a una mayor apertura del proceso político y a instituir algunas reformas verdaderas. Por otra parte, instaban también a la aceleración de la privatización de las empresas paraestatales e instaban a "estimular" a los funcionarios que comulgaban con esta visión:

> El continuado estatismo del PRI ha provocado un desempleo o subempleo masivos que, a su vez, producen un mayor número de emigrantes. Estimado en un 40 por ciento de su fuerza laboral, este desempleo estructural requiere ser resuelto mediante la venta masiva de las empresas 'paraestatales'. Es probable que el 85 por ciento de la economía de México sea de propiedad estatal y que el restante sector privado sea dependiente de la benevolencia gubernamental. Existen indicios de que hay funcionarios mexicanos que

> reconocen el problema; ellos necesitan ser estimulados (Selser, 1990, p. 161 - 162).

¿Qué debemos entender por esto? Era evidente que daba la impresión que en los procesos internos del país, el PRI había agotado su capacidad de permanencia en el poder, parecía —al menos— que el sistema iba a implosionarse pronto y que las reformas internas del partido no habrían sido suficientes para lograr mantener al régimen[210]. Estados Unidos consideraba que "debía" asegurarse de que quien permaneciera en el poder se alineara con el programa neoliberal planeado para América Latina y que estuviera abierto a una economía de mercado —el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se firmaría en 1994 pero las negociaciones con México habían comenzado desde 1990—, por lo mismo se urgía al aceleramiento de la privatización de las empresas paraestatales que había comenzado en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, sin mucho éxito, y esto se agilizó considerablemente con Salinas de Gortari, el presidente que firma el TLCAN: 294 liquidaciones y extinciones, 72 fusiones, 25 transferencias y 155 empresas vendidas al sector privado o al sector social (Sacristán Roy, 2006, p. 57). Finalmente, las recomendaciones se concluían, sosteniendo que habría que "estimular" a los funcionarios mexicanos que *simpatizaran* con la aceleración de la venta de estas empresas de Estado, es decir, con la aceleración de la instauración de la economía neoliberal[211].

---

[210] Carlos Salinas de Gortari llegó al poder en medio de lo que parecía ser el mayor fraude electoral en México (ver anexo B) en un momento en que los partidos de oposición estaban formando coaliciones importantes. En ese contexto, desde los primeros meses del gobierno salinista se realizaron una serie de reformas internas en el partido con el objetivo de "democratizar su vida interna y hacerlo más eficaz en la contienda electoral". Para un análisis de estas reformas, ver: (Hernández Rodríguez, 1991, p. 223).

[211] En ese sentido, Dezalay y Garth (2002), analizan, a partir de 400 entrevistas a profundidad, cómo el concepto de gobernanza fue introducido por el Banco Mundial y posteriormente se lo reapropió la

En ese sentido, el deseo de la consolidación democrática en América Latina, era —y es, por supuesto— algo que es deseable *per se*, tautológico. Es algo que en teoría de partidos sería un "valence issue" (un problema de valencia)[212], es decir, algo que es intrínsecamente bueno y que en consecuencia nadie querría oponerse. Esa no es la discusión. De hecho, diferentes segmentos de la sociedad civil en México, incluso antes de las propuestas de los Documentos de Santa Fe II, ya reclamaban estas transformaciones políticas, prueba de ello es la conformación de los partidos políticos de oposición como son el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido Patriótico Revolucionario (PPR), el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y la Unión de la Izquierda Comunista (UIC), entre otras iniciativas. De igual manera, luego del sismo de 1985 y ante la ineficaz respuesta del gobierno, la sociedad civil mexicana tomó un ímpetu sin precedentes para resolver en un primer momento la crisis, luego para la reconstrucción. Es entonces a partir del sismo que las organizaciones de la sociedad civil comenzaron a reconocerse como un nuevo actor colectivo que representa el interés ciudadano, diferente a los sindicatos y corporaciones profesionales (Girardo *et al.*, 2012 ; Somuano, 2010 ; Verduzco *et al.*, 2009). Además, favoreciéndose de este

---

nueva generación de tecnócratas latinoamericanos que se habían formado en universidades estadounidenses, su mayoría a través de becas patrocinadas por USAID o por instituciones como la fundación Ford. Según los autores, la estrategia de formación de elites nacionales, así como la alianza con fundaciones y organizaciones de la sociedad civil fue una estrategia del Banco Mundial al obstáculo de la soberanía. En efecto, bajo el principio de no injerencia, los organismos del Bretton Woods no podían tener acceso a la gestión interna de los Estados, el principio de gobernanza fue entonces una manera de tener acceso a la información y de alguna manera también tener injerencia indirecta por medio de los organismos y funcionarios sobre los que tenían ascendencia (Dezalay y Garth, 2002, p. 288. En itálica en el texto).

[212] En teoría de partidos, un *valence issue* es algo en lo que la mayoría de los votantes van a estar de acuerdo: combate a la corrupción, prosperidad para la comunidad, mayor democracia, etc. Éstos son diferentes a los *position issues* que tienen más que ver, como su nombre lo indica, con un problema de posicionamiento ante un fenómeno o problema: decisiones en torno a la política exterior o las políticas públicas, control de las armas, interrupción legal del embarazo, etc. Agradezco a Manuel Balan el envío de esta referencia.

impulso, y luego de las alegaciones de fraude electoral de las elecciones de 1988, entre otros resultados, en 1990 se creó el Instituto Federal Electoral, el cual suponía ser un árbitro neutro en las elecciones y que desde 1994 estaría conformado por consejeros ciudadanos elegidos por el Congreso. Al mismo tiempo se crearon mecanismos para establecer Controles Democráticos No Electorales (CDNE) (Isunza Vera, 2017) con la idea de que la participación ciudadana estuviera presente en los diferentes órganos gubernamentales.

En síntesis, la transición a la democracia era deseada —y necesaria, por supuesto— y no fue solo impuesta desde arriba hacia abajo (*top down*), prueba de ello son las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que emergieron en este periodo. Sin embargo, esta intervención como política continental impulsada desde Estados Unidos, favoreció un flujo de recursos importante —agencias de cooperación (Usaid), fundaciones (la Ford y otras), organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, principalmente del Norte global—, que destinaron importantes recursos de todo tipo a las organizaciones sociales y gubernamentales. Esta intervención aceleró el proceso de transformación de instituciones como por ejemplo el IFE, el TRIFE, el INEGI, etc. (Peschard, 2013), contribuyendo a que éstas siguieran siendo una especie de *cajas vacías* para la participación y control ciudadanos, limitándose muchas veces a ser mecanismos consultivos de decisiones que ya habían sido tomadas desde el centro (Isunza Vera, 2017). Esto que sucedió en México es lo que se denomina como el fenómeno del *gatopardismo*: "Que todo cambie para que todo siga igual" (Azis Nassif, 2017). Es decir, estas reformas de las instituciones cambiaron los aspectos formales de la relación Estado-sociedad sin necesariamente transformar las prácticas políticas que se habían enquistado en más de 71 años del gobierno *dinástico* (Calzá Teruggi, 2000; Suárez Farías, 1993) del PRI.

De hecho, además de las prácticas neopatrimonialistas y autoritarias del PRI a nivel nacional y subnacional (Durazo Herrmann, 2012), otra de las características del

régimen priista fue su capacidad corporativista, clientelista y de cooptación. Por ejemplo, además de los tres sectores clásicos —digamos legales— obrero, campesino y popular con sus respectivas corporaciones históricas —Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP)—, tuvo la capacidad de controlar —y cooptar— las actividades ilícitas, tal como fue el caso de los poderes caciquiles regionales (Bartra *et al.*, 1978; Léonard y Velázquez, 2000; Maldonado Aranda, 2003) y a los grupos vinculados con el tráfico de drogas y el contrabando (Astorga Almanza, 2007; Maldonado Aranda, 2012; Serrano, 2007; Snyder y Durán Martínez, 2009), por ejemplo. Sin embargo, cuando los partidos llamados de oposición comenzaron a "hacerse" de los territorios, primero del norte, el PAN —Baja California en 1989—, y luego en el centro y sur del país tanto de las gubernaturas como de las municipalidades, PAN y PRD principalmente, entre otros; el PRI comenzó a perder ciertos aspectos del control del territorio, que serían retomados por algunos de los dirigentes de los partidos de oposición, quienes finalmente eran herederos de la escuela "del hacer política" priista. De hecho, muchos de ellos serían tránsfugas del PRI, es decir, que habrían militado durante varios años e incluso ocupado cargos públicos a través del PRI antes de "brincar" a otros partidos políticos —Gabino Cué en Oaxaca, Rafael Moreno Valle en Puebla, Mario López Valdés en Sinaloa, Ángel Aguirre Rivero en Guerrero, Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz, por citar solo algunos ejemplos—.

Por otra parte, el llamado crimen organizado vinculado al tráfico de drogas había existido desde hacía varias décadas y por lo menos desde los años 1970 se conocieron repetidos casos donde agentes del Estado del priismo y militar se habían vinculado con él (Flores Pérez, 2013; Snyder y Durán Martínez, 2009). Los ejemplos se multiplican. Por mencionar solo algunos de los que fueron procesados judicialmente: en el sexenio de Miguel de La Madrid (1982-1988) el ex–director de la DFS, José Antonio Zorrilla, fue detenido por el asesinato del periodista Manuel Buendía y

porque se le demostró tener nexos con el narcotráfico. Incluso narcotraficantes como Rafael Caro Quintero y sus allegados portaban credenciales de la DFS firmados por el mismo Zorrilla (Ravelo, 1998) (ver capítulo II, *supra*). De igual forma, el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fuera jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, fue destituido y vinculado a proceso porque tenía nexos con el Cártel de Juárez y protegía a Amado Carrillo Fuentes, alias *El señor de los cielos* (Milenio, 2013; Robledo Silvestre, 2017). El ex-gobernador priista de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, (1993-1999), estuvo varios años preso, luego de haber estado por largo tiempo prófugo de la justicia por delitos de lavado de dinero y por estar vinculado también al *Señor de los cielos* (Excelsior, 2017), etc.

Es decir, en cierto sentido, algunos agentes del régimen priista al vincularse con estos grupos habían mantenido bajo su control las transacciones de las organizaciones criminales (Snyder y Durán Martínez, 2009). Sin embargo, con la alternancia política, primero regional y luego federal, el control de este comercio ilícito comenzó a escapar a la estructura priista en una triangulación del sector privado empresarial, crimen organizado y poderes gubernamentales para dar paso a "la cartelización del país"[213]. Por otra parte, el contexto internacional cambió, con las reformas internas y de geopolítica, la producción y exportación en Colombia y Perú bajó (Snyder y Durán Martínez, 2009; Soberón Garrido, 2013). México entonces ocupó ese lugar dejando de ser un país únicamente "de paso" para convertirse en un país productor y consumidor (Muedano, 2017), llegando a ser el primer país productor de opiáceos, mariguana y heroína en Latinoamérica y segundo del mundo (ONUDC, 2017).

---

[213] Mientras que durante el sexenio de López Portillo se registraban 3 principales cárteles: El de Oaxaca (líder Pedro Díaz Parada), el del Golfo (líder Juan Nepomuceno Guerra) y la Organización de Sinaloa (Miguel Ángel Félix Gallardo), las cuales tenían operaciones en 10 estados del país, en el sexenio de Peña Nieto —luego de una alternancia de 12 años del PAN—, se cuentan al menos 9 grandes organizaciones criminales que son escisiones de las dos primeras —el Cártel del Golfo y la Organización de Sinaloa—, con presencia en 25 estados del país (Narco Data, Animal Político, 2015).

En el mismo sentido, a partir del año 2000, cuando finalmente llega la alternancia partidista a la presidencia de la república, el sexenio panista de Vicente Fox no cumplió con las expectativas puestas en este cambio, no hizo las transformaciones institucionales prometidas y no gobernó de forma diferente al PRI (Azis Nassif, 2017, p. 7). De hecho, la falta de pericia en el control del territorio, o las nuevas alianzas regionales con actores criminales, hicieron que en este sexenio la presencia de los cárteles se ampliara a más estados y se diera la primera escisión en el Cártel del Golfo, creándose así una de las organizaciones más sanguinarias en la historia del país, el Cártel de los Zetas (Grillo, 2012; Ravelo, 2014).

Para las elecciones presidenciales del año 2006, el candidato que representaba a "las izquierdas" —sea lo que sea que eso signifique en México—, Andrés Manuel López Obrador —expriista, quien militó en ese partido por más de 10 años—, se anunciaba como el virtual ganador de las elecciones presidenciales. Sin embargo, a pesar de fuertes indicios de fraude electoral y de amplias movilizaciones sociales que reclamaban el reconteo de votos, el Instituto Federal Electoral (IFE) le entregó a Felipe Calderón Hinojosa, quien contendió por el PAN, la constancia de presidente electo, convirtiéndose así en uno de los presidentes con mayor ilegitimidad al llegar a la silla presidencial.

De hecho, tanto en la entrega de su constancia de presidente electo, como en su *toma de protesta* como presidente, tuvo que entrar y salir por la puerta trasera de los recintos, generando incluso trifulcas al interior del palacio de San Lázaro (Garduño, 2006). Pero, hay más aún, en un hecho sin precedentes en la historia del país, la banda presidencial le fue entregada a Calderón en la residencia oficial de Los Pinos, 10 horas antes de la ceremonia tradicionalmente programada en el Congreso de la Unión, en una ceremonia castrense y en un ambiente "eminentemente marcial" (Vargas, 2006), lo que de hecho daría el tono de su mandato enviando el ejército a las calles.

En ese sentido, Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo Salcedo Albarán (2016) sostienen que la externalidad de la llegada del gobierno del PAN a nivel federal modificó las alianzas predominantes que reordenaron el escenario criminal.

> [S]e produjo una externalidad, es decir, un cambio de entorno que alteró el funcionamiento de las estructuras criminales predominantes en el país, lo cual seguramente afectó acuerdos entre funcionarios públicos, líderes políticos y criminales en el nivel local, a su vez modificando los equilibrios de poder que habrían podido establecer las redes criminales durante las siete décadas en las que un único partido se mantuvo en el poder a nivel nacional y en muchas regiones. Ello seguramente pudo conducir a un proceso de reordenación del escenario criminal, en el que redes criminales consolidadas tuvieron que defender su poder alcanzado, mientras otras intentaron incursionar a nuevos territorios y actividades. Un segundo cambio de entorno sucedió con la declaración de la guerra contra el narco durante la presidencia de Felipe Calderón, que posiblemente afectó aún más el entorno de funcionamiento de las estructuras criminales y condujo a un recrudecimiento de la confrontación violenta como mecanismo para defender o conquistar territorial poder criminal. (Salcedo-Albarán y Garay Salamanca, 2016, p. 161-162).

Efectivamente, apenas 9 días después de iniciado su mandato, y a través de una cadena televisiva, Felipe Calderón anunció su política de seguridad nacional de "Guerra al narcotráfico" iniciándose en su estado natal, Michoacán —estado que era gobernado por un partido de oposición, el PRD y a la cabeza estaba el hijo del "líder de las izquierdas", Cuauhtémoc Cárdenas Batel—. Esta "guerra" operaría a través de lo que se conoce como "Operativos Conjuntos". Es decir, a través de un despliegue de los diferentes cuerpos policiacos de los 3 órdenes de gobierno —municipal, estatal y federal—, y sobre todo por militares para asumir este "combate".

En ese sentido —y al parecer solo en el discurso y no en la práctica porque las alianzas con los grupos criminales, no solo se mantuvieron, sino en algunos casos se reforzaron—, a partir del 2006 con la instauración de la política de seguridad nacional de Felipe Calderón, en el discurso público oficial el *nuevo enemigo público interno*

sería el narcotraficante. Es decir, se dio un giro en la imagen pública de quién es el *Otro* a vencer. En este nuevo contexto donde la Guerra Fría había quedado un par de décadas atrás, ya no sería el guerrillero quien representara la amenaza al *statu quo*, tampoco el indígena que se oponía al *progreso*, ni el terrorista del post-11 de septiembre del 2001 estadounidense. En México, el nuevo enemigo público sería el narcotraficante y de hecho, cualquier persona que fuese víctima de la violencia de Estado en este periodo sería sistemáticamente acusada de estar de una u otra manera vinculada estos grupos —no delincuenciales en general, sino narcotraficantes en particular—. Por ende, estas figuras *narcotraficantes* serían merecedoras de cualquier tipo de crimen cometido contra ellas debido a que en el marco de esta "guerra" todo estaría permitido para acabar con el enemigo: desaparición, tortura, ejecución extrajudicial, etc.

De hecho, la estrategia puesta en marcha para "combatir" a este nuevo enemigo público, sería subrogando tareas de seguridad pública a la armada de México, con las graves violaciones a los derechos humanos que generalmente ello implica. Específicamente en cuanto a desapariciones forzadas, y de acuerdo con Chávez Vargas y Guevara Bermúdez (2017), se dio un aumento exponencial de éstas desde que Felipe Calderón tomó la presidencia y el ejército asumió la implementación de esta política:

> A partir de un ejercicio de sistematización y recalificación de las recomendaciones emitidas por la CNDH, encontramos que del 1 de diciembre del 2006 al 31 de diciembre del 2016 se tienen 42 documentos de recomendación que comprenden uno o más episodios de desapariciones transitoria o permanente que involucran a 116 víctimas (CMDPDH, 2017). En más de la mitad de los casos las desapariciones fueron ejecutadas por miembros de las fuerzas armadas y en ocasiones dentro de distintos operativos conjuntos, por ejemplo: Operación Conjunta Chihuahua, Operación Coordinada Veracruz Seguro, Operativo Blindaje Coahuila, Operativo Coahuayana, Operativo Conjunto Ciudad Juárez Seguro (CMDPDH, 2017). [...] Por su parte, 28 organismos públicos autónomos de derechos humanos

> registraron de 2006 a 2016 un total de 1070 quejas por la probable comisión de desaparición forzada. Hay que aclarar que la cifra es limitada, pues algunos organismos no otorgaron información completa con el argumento de que [*sic*] la ausencia de digitalización de los datos que solicitamos. No obstante, podemos observar que la tendencia de estas cifras desde 2006 es al alza. Además, si consideramos un periodo anterior, el aumento de las quejas por desaparición forzada es alarmante (Chávez Vargas y Guevara Bermúdez, 2017).

De esta manera, queda de manifiesto que el proceso de transición a la democracia en México, que se vio acelerado por medidas y recursos impuestos desde el exterior, como una nueva estrategia continental de hegemonía de las políticas de occidente, lejos de fortalecer las estructuras gubernamentales y favorecer una participación política efectiva de la población y hacer disminuir el autoritarismo, ocasionó un desequilibrio en la distribución de poderes. La llegada a la presidencia de un gobierno de derecha que buscó prolongarse en el poder ejerciendo las mismas tácticas priistas, entre otras de fraude electoral, generaron un descontento social generalizado. Ante esto, como medida de gobernabilidad, Felipe Calderón decidió enviar al ejército a las calles, declarando una supuesta guerra contra el narcotráfico, lo que trajo consigo una ola de violencia sin precedentes. En este contexto, se mezclaron los roles de agentes del Estado y de las economías criminales, hecho que ocasionó que se agudizaran las violencias políticas, entre ellas, el recurso a la desaparición de personas por parte de las fuerzas del Estado, pero también por parte de miembros de grupos delictivos que actuaron —y lo siguen haciendo— con la autorización, el apoyo y/o la aquiescencia de éstos.

ANEXO D: Características de los primeros colectivos de familiares de personas desaparecidas de la llamada "guerra contra el narcotráfico"

Desde los primeros años de la llamada Guerra contra el narcotráfico, las y los familiares de personas que fueron desaparecidas comenzaron a organizarse, principalmente en el norte del país, pero también en el centro y suroeste. En estos primeros años, además de mantenerse activas muchas organizaciones que surgieron en el pasado como AFADEM, EUREKA, H.I.J.O.S. México [214], Asociación

[214] Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S) es una organización que nace en Argentina el 3 de noviembre de 1995 conformada por hijos e hijas de personas detenidas-desaparecidas durante la última dictadura militar (1976-1983). Poco a poco en América Latina, se creó una red internacional de hijos e hijas de personas víctimas de las violencias de Estado, detenidos-desaparecidos y otros, con el objetivo de denunciar estas violencias. En México surge en el año 2000 a iniciativa de una de las integrantes de H.I.J.O.S. Córdoba, Argentina, Paula Mónaco Felipe. En palabras de Valentina López, una de las fundadoras: "Paula viene a México y coincide que ve una nota en el periódico La Jornada de dos hermanos que comentan que es el aniversario de la desaparición de su papá en México. Entonces ella descubre que también en México hay desaparecidos. Llama a La Jornada, pide el contacto de estos hermanos, los contacta y se conocen. Ella les cuenta de la existencia de H.I.J.O.S y deciden lanzar una convocatoria abierta a través del mismo medio para que todas aquellas personas que se sientan relacionadas con estas historias de exilio, de desaparición, de ser hijos de una generación particularmente reprimida se acerquen, ¿no? Y así es que surge H.I.J.O.S. Al principio había sobre todo hijos de argentinos. [...] En un principio era muy enfocado sobre todo a la historia de Argentina por esta misma conformación, también había hijos de guatemaltecos pero en un momento se toma la decisión de empezar a trabajar sobre todo con lo que tiene que ver con la desaparición forzada en México. No solo desaparición, también ejecuciones por razones políticas. [...] Somos un colectivo no solo de familiares o hijos de desaparecidos, de exiliados, de ejecutados por razones políticas y en México sino también gente que sin tener un vínculo sanguíneo asumimos esta historia como propia y nos asumimos como hijos de una generación que fue particularmente reprimida y reivindicamos además su lucha. Es decir, no es un colectivo que se dedique a los derechos humanos meramente sino que tenemos una postura política. (Entrevista personal con Valentina López, miembro fundadora de H.I.J.O.S. México. Ciudad de México, 19 de febrero del 2017).

Esperanza contra la Impuniudad A. C. (Baja California, Sonora y Sinaloa)[215] y las de Ciudad Juárez como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, etc.; identifico tres tipos de organizaciones pioneras en la búsqueda de personas desaparecidas: las de ciudadanas previamente politizadas y familiarizadas con las violencias de Estado (Hasta encontrarlos, Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas, Michoacán (COFADEM) [216], Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada), las de ciudadanos y ciudadanas que les alcanzó la violencia (Asociación Ciudadana contra la Impunidad A. C.) y las vinculadas a la iglesia católica (FUUNDEC, CADHAC-AMORES). Mismo si estas agrupaciones tenían por objetivo dar con el paradero de sus familiares, sus marcos de acción, sus repertorios de acción colectiva, así como la interacción con representantes de las instituciones de gobierno, estarían determinados por sus posicionamientos políticos, por su comprensión de quiénes son los perpetradores de las desapariciones y quién asume la responsabilidad de la búsqueda. En estos primeros años cuando la comprensión del contexto de la crisis de derechos humanos en la que estábamos subsumiéndonos aún era incipiente, estos colectivos pioneros —con aliadas y aliados estratégicos—, comenzarán a sentar las bases para colocar en la agenda pública el grave problema de las desapariciones forzadas que se estaba gestando en el país, acciones que tomarán fuerza en el marco del MPJD.

Sin tener la pretensión de elaborar una tipología, abordaré las características de algunos de los primeros colectivos de familiares que se formaron principalmente en el norte del país, en el marco de la alternancia partidista a nivel federal y de su política de seguridad nacional —la llamada "Guerra contra las drogas"—. En este primer

---

[215] La Asociación Esperanza contra la Impunidad A. C., surgió en abril de 2001 con el apoyo del Frente contra la Impunidad de Sinaloa, A. C., para denunciar principalmente casos de desaparición forzada. Para una semblanza de la organización, ver: (Limas Hernández, 2018).

[216] Para una semblanza de esta organización, ver: (Limas Hernández, 2018).

momento surgirán tres tipos de colectivos: aquellos que de alguna manera heredan la politización de los colectivos que se formaron en el marco de la *Guerra Sucia*, aquellos de ciudadanas y ciudadanos que sin experiencia de participación política previa les alcanzó la violencia y deciden organizarse y, finalmente, aquellos vinculados a los cultos religiosos, en particular a la iglesia católica. Dar cuenta de algunos de ellos en este anexo me parece relevante debido a que, además de que aún en la actualidad participan activamente en la denuncia de las desapariciones forzadas y son piezas claves en la politización del problema, las características de estos tres tipos de colectivos, pioneros, estarán presentes en aquellos que se crearon en las etapas posteriores, una vez que el movimiento fue reforzado e interactuarán igualmente como sujeto político en la disputa por lo público.

Hasta Encontrarlos

Una de las primeras organizaciones que se creó en este contexto es la que lleva por nombre "Hasta encontrarlos". Ésta surge a raíz de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos miembros del PDRP-EPR que fueron desaparecidos en Oaxaca en mayo del 2007 (ver capítulo III, *supra*). El colectivo fue conformado apenas un mes después del evento de la desaparición, el cual fue integrado en un primero momento por las dos familias y liderado por Nadin Reyes Maldonado, hija de Edmundo. En la actualidad *Hasta Encontrarlos* está integrado mayoritariamente por mujeres familiares de víctimas de desaparición forzada y por motivos políticos. En palabras de Nadin:

> Bueno a raíz de su desaparición forzada [de Edmundo y Gabriel] nos vimos en la necesidad de buscarlos, empezar a hacer las denuncias y bueno tanto mi familia como la familia del compañero de mi papá decidimos crear este Comité, como una forma primero de ayudarnos entre nosotros como familiares y posteriormente para poder también apoyar otras familias, que de momento no sabíamos que era esta situación, qué era una desaparición forzada. Pero en el camino empezamos a ver que obviamente no éramos las únicas

> familias y empezamos a hacer esta labor de acompañar a otros casos y pues la organización tiene como mandato acompañar casos específicamente de personas defensoras de derechos humanos o que por su actividad política hayan sido desaparecidas (Entrevista, el 25 de enero del 2017).

En el marco de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, se instauró una comisión de mediación entre el PDPR-EPR y el gobierno mexicano (SERAPAZ, 2010). En este contexto, por primera vez en el país se emitió una orden judicial para la búsqueda de personas desaparecidas en instalaciones militares. Mismo si ésta no se realizó en su debida diligencia, el posicionamiento de este colectivo, en concertación con otras fuerzas sociales como el PDPR-EPR, lograron establecer un precedente en el país para la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada en instalaciones militares. En palabras de Nadin Reyes Maldonado:

> En el caso de nuestros familiares se dio en el 2007 que permitieran el acceso, pero a unas partes del campo militar para buscarlos a ellos dos, pero obviamente eso fue una acción muy por las autoridades, porque la CNDH anunció con tiempo que iba a entrar. Haz de cuenta que nosotros nos enteramos en agosto que nuestros familiares habían sido vistos ahí y dos semanas antes, una semana antes de ir la CNDH les anuncia que por medio de un amparo solicitamos que el actuario vaya a las instalaciones del campo militar porque se dijo que ahí están. O sea tú no puedes hacer eso, no puedes avisarle a una autoridad que tú vas a ir porque mueves todo y eso fue lo que pasó. Ellos dijeron sí pasen. Obviamente no se dio acceso a todo el campo que es enorme, les dieron acceso a algunas partes del campo dijeron no pues aquí no hay nada. Cerraron y dijeron no pues no, no hay nada (Entrevista, el 25 de enero del 2017).

Desde el principio como colectivo tuvieron claro que su batalla sería por la línea jurídica en el marco del derecho internacional humanitario. Hacia el año 2010, ésta y otras organizaciones de base, populares y estudiantiles, que militan por diferentes órdenes de injusticias sociales, todas vinculadas con las violencias de Estado, como el Comité Cerezo, por ejemplo, crearon un frente al que le llamaron Campaña Nacional

contra la Desaparición Forzada. Desde su formación, una de sus principales reivindicaciones era la aprobación de una ley para prevenir y castigar la desaparición forzada, llegando incluso a partir de 2012 a elaborar ellas y ellos mismos una iniciativa de ley, con asesoría del abogado de derechos humanos Roberto Garretón Merino de Chile y con Rainer Uhule de Alemania, quien fuera presidente del Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas (Cerezo, 2017). Cuatro organizaciones habrían participado en la redacción de esta iniciativa: Comité Cerezo, Comité Hasta Encontrarlos, Comité Monseñor Romero y Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco).

El posicionamiento del Comité Hasta Encontrarlos se puede considerar como cercano a los comités de familiares de víctimas de las violencias de Estado de las décadas de los años 1970 – 1980 en el marco de la Guerra Sucia. Esto debido a que surge en un contexto de represión a grupos subversivos, con familiares previamente politizados los cuales tenían claro quién era el agente perpetrador de la desaparición, el Estado, como represión a una actividad política de sus familiares. Por lo mismo, el posicionamiento de este colectivo es de no remplazar las funciones del Estado en la búsqueda de sus familiares, sino obligarle a que cumpla con su deber. De acuerdo con Nadin Reyes Maldonado:

> El Estado mañosamente quiere establecer desde la ley, como la facultad de las familias de buscar. Entonces decimos también que eso es muy perverso, porque si estableces como legalmente las facultades para que la familia busque, entonces también ellos se deslindan del desarrollo [de la búsqueda] y entonces si todo falla va a ser responsabilidad nuestra, no de ellos. Y tratan mucho de separar búsqueda e investigación. Como si la búsqueda dicen ellos, es lo más importante, pero están dejando de fuera la sanción, la investigación y el enjuiciamiento a los responsables, [...] Lamentablemente muchas familias por la angustia, la desesperación, efectivamente lo que quieren saber es dónde está su ser querido, pero yo creo que no es que lo debas condicionar. Es responsabilidad del Estado también garantizarte el acceso a la justicia y en este caso quiere darte un hecho a cambio de otro (Entrevista, el 25 de enero del 2017).

El repertorio de acción colectiva de Hasta Encontrarlos, está también más cercano al del movimiento urbano-popular, que al de las ONG. Realizan muchas acciones de "concientización" callejeras, con poblaciones en situación de marginación: colonias populares, comunidades rurales, reivindicando como plataforma de su acción la cercanía con las bases sociales, pero también están en constante interlocución con diferentes organismos multilaterales y de gobiernos con el objetivo de ejercer presión tanto a nivel nacional como internacional.

Asociación Ciudadana contra la Impunidad A. C.

Otra de las primeras organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que les alcanzó la violencia surgió en el norte del país, en Tijuana, Baja California: la Asociación Ciudadana contra la Impunidad A. C. Ésta surgió a finales de 2007 a iniciativa de Fernando Ocegueda a quien su hijo le fue desaparecido en febrero de 2007 y de Cristina Palacios, quien su hijo había sido desaparecido hacía una década, en 1997. Al momento de su fundación, las y los miembros aún hablaban de secuestro y no de desaparición y/o de desaparición forzada. Desde sus inicios eligieron interpelar a los órganos de gobierno para exigir una búsqueda efectiva de sus familiares. Dentro de su repertorio de acción colectiva estaba el "cacerolazo" semanal. Cada viernes se plantaban frente a palacio municipal haciendo ruido con cacerolas con el objetivo de exigir a los funcionarios públicos que atendieran sus demandas (Gómez Durán, s. d.).

A diferencia de los colectivos que denunciaban las desapariciones forzadas de la Guerra Sucia, y para los cuales una de las principales consignas era "desaparecidos, presentación" o "vivos se los llevaron, vivos los queremos", esta organización planteaba como parte de sus exigencias al Estado la búsqueda de restos humanos y el análisis de ADN. Probablemente esta exigencia estaba inspirada en el contexto del norte del país, donde desde hacía por lo menos una década las desapariciones estaban más asociadas a actividades de orden económico vinculadas con el crimen organizado

que a la actividad política de las personas, además de que había evidencia de que los grupos criminales hacían desaparecer personas (ver capítulo III, *supra*). Tras años de insistencia y constante presión, en 2010 lograron establecer mesas de diálogo con el gobierno del estado de Baja California para programar un plan de acción en torno a las personas desaparecidas (Robledo Silvestre, 2012). Así, las búsquedas de cuerpos desaparecidos a través de exhumaciones en fosas comunes y fosas clandestinas comenzaran a ser una constante de esta organización. Estas búsquedas se realizarían en concertación con las representantes del gobierno estatal y federal y con la participación de familiares y peritos expertos. En julio de 2011, luego de la vinculación de Fernando Ocegueda con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y de divergencias al interior del colectivo sobre el rumbo que éste debería tomar, Ocegueda se deslinda de éste para vincularse a uno de los cercanos a la iglesia católica, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y así fundar el capítulo de Baja California (FUNDEBC) (Robledo Silvestre, 2012). El primer colectivo continúa así su rumbo bajo el liderazgo de Cristina Palacios[217].

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) y AMORES

La organización CADHAC está situada en Monterrey, Nuevo León, y fue fundada en 1993 siguiendo la tendencia en esta década de la creación de organismos de defensa de derechos humanos por comunidades religiosas en el país (ver capítulo 4, *supra*). Su fundadora y aún directora, la religiosa Consuelo Morales, "la hermana Consuelo", pertenece a la Congregación Nôtre Dame, Canónigas de San Agustín. CADHAC se

[217] Para un análisis profundo del proceso organizativo de este colectivo y sus dinámicas, ver la tesis doctoral: (Robledo Silvestre, 2012).

define como "una organización civil, independiente de partidos políticos, respetuosa de la pluralidad de credos, ideologías y preferencias sexuales, dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos" (Cedillo, 2018).

A partir de 2009 la organización comienza a acompañar a familias cuyos familiares habían sido víctimas de desaparición en un contexto de mucha violencia en el estado de Nuevo León. En palabras de *la hermana* Consuelo:

> De 2009 a 2012 fueron años de una violencia muy muy aguda. Los *levantones* se empezaban a dar, no sabíamos bien a bien qué estaba pasando y después las fuimos ubicando como desapariciones propiamente. Hay un aumento de violencia generalizada en el estado [de Nuevo León] y en donde el crimen organizado sin darnos cuenta nosotros, fue permeando todos los cuerpos policiales, municipales y funcionarios y además con el otro actor que fue la militarización, pues precisamente por esta Guerra del Narcotráfico que también ya se ha mencionado, pues se generan graves violaciones a los derechos humanos ¿Cuál es el entorno en ese momento en Nuevo León? Es un miedo paralizador. O sea, sean autoridades, sean familiares, seamos organización de la sociedad civil, el miedo nos paralizaba. Si se estaban llevando a una persona, a un grupo de gente y estaba un policía y se daba cuenta, el policía no volteaba, porque sabía que si volteaba también se lo llevaban (Versión estenográfica personal de la participación de Consuelo Morales en la mesa "Movimiento de víctimas y búsqueda de personas" el 13 de marzo del 2018 en las instalaciones de Flacso, México)[218].

El primer grupo de familias que se acerca a CADHAC en 2009, era un grupo de 12 familias que buscaba a policías que habían sido desaparecidos en 2007. *La hermana* Consuelo narra cómo —a pesar de su acompañamiento— y movilización constante, durante varios años no habían logrado colocar el tema en la agenda pública:

---

[218] Dicha mesa formó parte del foro "Desapariciones en las postransiciones a la democracia" organizado por el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, Ciudad de México, 13 de marzo del 2018.

> Nadie nos hacía caso. Ni los medios ni nadie sacaba absolutamente nada. Era la nula incidencia, no había dónde, no había cómo, ¿no? Y a pesar de eso, entonces ahí lo vimos como algo que teníamos que hacer, juntarnos cada semana y es así como desde 2009 cada miércoles, los familiares de personas desaparecidas nos venimos juntando en CADHAC, hasta hoy (Consuelo Morales, 13 de marzo del 2018, *Ibídem*).

Sin embargo, luego del paso de la Caravana del Consuelo del MPJD en junio de 2011 por Monterrey, Nuevo León (ver anexo E), y debido a la intervención directa del poeta Javier Sicilia y el ex*ombuds*persona Emilio Álvarez Icaza, entre otras personas que acompañaban la Caravana, es que el procurador en turno, Adrián de la Garza, les recibe y comienzan a elaborar una agenda de trabajo en conjunto con CADHAC y las familias de las víctimas:

> El Movimiento por la Paz el 11 de junio de 2011 empieza su caravana. Javier Sicilia con toda la gente que apoyaba, llegan a Monterrey ese día como a las 8 de la noche. Iban a llegar en la tarde y llegaron súper noche y en media noche habían quedado los familiares de exponer sus causas de las desapariciones y de siete personas que iban a exponerlas llegaron dos de Nuevo León, las demás fueron de fuera. O sea el miedo estaba, todavía nos tenía presos. Entonces recuerdo bien que esa noche dijo Sicilia, pues si el problema es que no les hacen caso, no les toman las averiguaciones, vamos a hablar con el procurador. Y yo dentro de mí dije: "sí cómo no". Pues sí cómo no, sí nos recibió, sí nos recibieron a media noche. Nos recibió Adrián de la Garza, el entonces procurador y ahí es donde las familias empiezan a hablar y ahí es donde digo, las autoridades se dejaron tocar por las familias y empezaron a investigar (Consuelo Morales, 13 de marzo del 2018, *Ibídem*).

Desde ese improvisado encuentro fue acordada una agenda de trabajo de reuniones bimestrales con el procurador, en donde cada vez se analizarían alrededor de 30 expedientes. A partir de este plan de acción que "ponía en el centro a las familias" es que las familias deciden crear la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES) para precisamente tener centralidad como víctimas: "Les decíamos —'¿Y por qué mujeres si también hay algunos hombres?' —'No pero nosotros somos la mayoría mujeres'.

—'Ándenle pues, bueno'. Y yo les decía: 'Un nombre pequeño'. —'No, porque tenemos que estar todas incluidas'. Total ellas fueron ahí haciendo su caminito (Consuelo Morales, 13 de marzo del 2018, *Ibídem*)[219].

Este esquema de colaboración de CADHAC, AMORES y la Procuraduría de Nuevo León, trajo resultados satisfactorios para las familias. De los 1413 casos de desaparición registradas por CADHAC, 170 personas fueron localizadas entre 2012 y 2015 como resultado de este trabajo conjunto. Entre 2011 y 2018 realizaron 30 reuniones en la Procuraduría de Nuevo León y 12 en la Procuraduría de Tamaulipas. Se revisaron los expedientes de 283 personas. Como resultado de estas diligencias 63 personas fueron consignadas, 21 sentenciadas —19 de ellas policías—, además de haber mantenido una constante interlocución con los funcionarios de las Procuradurías (Morales, 2018). Por otra parte, gracias a este trabajo conjunto, aunado al acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en el Congreso local de Nuevo León se logró colocar la iniciativa de ley para que en ese estado fuera tipificado el delito de desaparición forzada y lograron que se aprobara en 2012, al igual que el protocolo de búsqueda inmediata en 2014 y la declaración de ausencia en mayo del 2015 (Morales, 2018). Por otra parte, la labor de incidencia y cabildeo de las víctimas por la vía legislativa pero también de sensibilización de la población, trajo resultados concretos como por ejemplo que la Universidad Autónoma de Nuevo León otorgue una beca del 100% a los hijos e hijas de personas desaparecidas en el estado.

De esta manera podemos ver que CADHAC y AMORES lejos de elegir una postura de confrontación con el Estado, mismo a sabiendas que muchos de los perpetradores

---

[219] Para un análisis sobre los modos de activismo y sus semejanzas y diferencias entre CADHAC y AMORES, ver: (Irazuzta, 2017).

eran los mismos policías que trabajaban en coordinación con organizaciones criminales, decidieron colaborar con órganos de gobierno para hacer avanzar la legislación en el estado de Nuevo León e intentar que se hiciera justicia. Hoy por hoy es una de las organizaciones más sólidas en la defensa de personas víctimas de desaparición forzada en el norte del país y de las que tienen la información mejor sistematizada, lo que ha facilitado colaboraciones con otros organismos, como por ejemplo el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad.

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A. C. y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Coahuila (FUUNDEC)

El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A. C., fue fundado en Saltillo, Coahuila en 2004 por el fraile dominico José Raúl Vera López, apenas cuatro años después de que había sido nombrado obispo de esa diócesis. La trayectoria del Centro Fray Juan de Larios es muy similar a la de CADHAC, ya que fueron centros fundados inicialmente por religiosos con la finalidad de atender la defensa de los derechos humanos en el norte del país, una región profundamente asolada por la violencia, pero en el marco de la "Guerra contra el Narcotráfico" esa violencia llegó a niveles insospechados dejando tras de sí miles de víctimas. Ante la demanda de acompañamiento de familiares de personas desaparecidas, ambos centros también tuvieron que reorientarse y casi especializarse en la denuncia de las desapariciones forzadas y en la defensa de las familias de las víctimas, así como en establecer estrategias de acción para presionar a los congresos locales para que legislaran en la materia, es decir, tanto CADHAC como Fray Juan de Larios también optaron por la batalla en la vía jurídica.

A principios de 2009 el centro Fray Juan de Larios a través de una publicación en el periódico llamó a los familiares de víctimas de desaparición forzada a congregarse con la finalidad de documentar lo que estaba pasando en Coahuila en torno a estas

desapariciones. La primera reunión de víctimas se llevó a cabo en Saltillo Coahuila y allí llegaron familiares de víctimas de desaparición forzada de diversas partes del país. El único patrón que podía establecerse de este primer encuentro es que no había patrón más allá de que una buena proporción de las personas había desaparecido en carretera. En palabras de Guadalupe Fernández Martínez, una de las personas que acudieron a esa primera reunión y que describe los eventos de desaparición.

> Se dio el primer encuentro en Saltillo y ahí acudimos y conocimos a familias de Ecatepec, Estado de México. Ellos tenían doce personas que habían sido desaparecidas en Piedras Negras en dos camionetas en las que se trasladaban para vender pintura al cambaceo. De La Barca, Jalisco, cuatro personas que vendían piezas pequeñas de joyería de oro a plazos casa por casa. Habían desaparecido al salir de un hotel donde habían pernoctado en Nava, de Ciudad Altamirano, Guerrero. Un padre con un hijo desaparecido cuando circulaba por una carretera cercana a Saltillo en una camioneta que jalaba a otro vehículo adquirido por esa persona en la frontera, ya que se dedicaba a la compraventa de vehículos usados. Cuatro familiares originarios de Coahuila que tenían desaparecidos a hijos, esposos, hermanos y tíos. El evento fue en la carretera de Ramos Arizpe en camino al Aeropuerto de Monterrey. Otro caso fue el de un padre e hijo de Parras de la Fuente desaparecido en ese lugar. El caso de un licenciado en finanzas desaparecido en Torreón a finales de 2008. Otro caso más de un ingeniero industrial que desapareció junto con 2 personas más en Paredón. (Guadalupe Fernández Martínez, miembra fundadora de FUUNDEC, correo electrónico, 25 de junio del 2018).

En las primeras reuniones las familias planearon diversas acciones que tenían por objetivo visibilizar las desapariciones. Por ejemplo tratar de obtener entrevistas para medios locales para empezar a contar las historias de desaparición que en ese entonces no habían tenido aún gran cobertura mediática y por lo tanto no se sabía que estaban ocurriendo de manera masiva. Por otra parte, se habían propuesto sistematizar la documentación de los casos que fueran llegando y establecer las primeras estadísticas: quién se los había llevado, edades, lugares donde ocurrieron los hechos, a qué se dedicaban las personas desaparecidas, etc. También habían acordado comenzar a realizar las gestiones ante instancias del gobierno estatal para audiencias,

diligencias, etc. Por otra parte, decidieron organizar un encuentro nacional de víctimas en la ciudad de Chihuahua junto con otros colectivos y en colaboración también con Amnistía internacional. Decidieron de igual manera tener acercamientos con instancias internacionales para pedir apoyo de búsqueda inmediata. Así como una marcha que culminara en el Zócalo de la Ciudad de México.

A finales de 2009 las familias de las personas desaparecidas decidieron formar un comité que se dedicara exclusivamente a la búsqueda de las personas desaparecidas. Fue así que surgió el nombre Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) y desde ahí continuarían trabajando muy de cerca con el centro Fray Juan de Larios y el obispo Raúl Vera, pero serían independientes. Desde el inicio comenzaron a trabajar fuertemente para visibilizar la violencia que se estaba viviendo en el estado de Coahuila. En palabras de Guadalupe Fernández:

> En 2010 empezamos con los proyectos, lo primero que se dio fue venir a la Ciudad de México a manifestarnos y a hablar con autoridades como PGR, SEGOB [Secretaría de Gobernación], CNDH, y otras instancias para poner en la mesa nuestras demandas de búsqueda inmediata, ya que todos teníamos denuncia en Coahuila en la PGJEC [Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila], pero ninguna caminaba. Se habían gestionado algunas entrevistas a medios, nos plantamos en el Zócalo, éramos como 28 personas con mantas y fotos que no logramos la atención de casi nadie. SEGOB sí nos recibió y se nos dijo que se regresaran las familias que se les iban a agendar reuniones después. Aprovechamos el estar juntos e hicimos una peregrinación a la Basílica de Guadalupe ofició el Padre Pantoja, el centro Fray Juan de Larios prometió seguir gestionando para que nos dieran audiencia con el Gobernador de ese entonces, Humberto Moreira. (Comunicación por correo electrónico, el 25 de junio del 2018).

Al no haber obtenido audiencia con el gobernador, para el segundo semestre del 2010 decidieron comenzar a ejercer acciones directas no violentas con el objetivo de que el gobernador del estado de Coahuila les recibiera:

> El abogado que nos asesoraba gratuitamente nos informó de un Foro de dos días del Grupo Colosio del PRI en el Hotel Marquis de la Ciudad de México. En el segundo día supuestamente estaría el Gobernador Humberto Moreira. Entonces nos apersonamos mi esposo y yo desde el primer día del foro para estudiar cómo le haríamos para llamar la atención de los participantes y del propio mandatario estatal. Al segundo día ya íbamos preparados con mantas y fotos. Llamamos a Blanca Martínez [del centro Fray Juan de Larios], casualmente ella estaba en la CDMX y le informamos de la oportunidad. Blanca a su vez llamó a la gente de Ecatepec, a la de Querétaro que también algunos estaban en la ciudad por coincidencia. Nosotros quedamos de llamarles cuando ya faltara poco para la presentación de Moreira. Cuando esperábamos que se presentara vimos que en su lugar venía el Sub-procurador Jurídico de la PGJEC y no dejamos perder la ocasión. De todos modos nos levantamos mi esposo y yo y nos pusimos frente a él, y enseguida hicieron su aparición Blanca y como 8 personas más. El Lic. Juan José Yáñez que era el representante de Moreira se quedó sin habla. La moderadora le preguntó si iba a continuar con su exposición y él dijo que sí pero ya nadie lo miraba ni oía. Todas las miradas eran para nosotros, para las personas dolidas, cuando mucho éramos diez. Terminando su presentación nos llevaron a reunirnos con él y en ese momento se agendó la audiencia con el Gobernador, la cual llevábamos tratando de gestionar más de un año (Guadalupe Fernández Martínez, miembra fundadora de FUUNDEC, correo electrónico, 25 de junio del 2018).

Al igual que en el MPJD más tarde, desde el principio en FUUNDEC había una preocupación por dotar de herramientas a las familias para que tuvieran un mejor conocimiento sobre la legislación nacional y de derechos humanos, de su expediente y de cómo posicionarse políticamente: "El trabajo de Blanca seguía enlazándonos con otros colectivos, viendo su manera de trabajar, de visibilizar, haciendo talleres, capacitándonos en el tema, acercándonos a más medios de prensa y televisivos, con organismos como la ONU, Amnistía Internacional, etc." (Guadalupe Fernández Martínez, miembra fundadora de FUUNDEC, correo electrónico, 25 de junio del 2018).

El MPJD también reforzó el trabajo de FUUNDEC, luego del paso de la caravana y del encuentro entre víctimas que se encontraban dispersas en varios estados del país,

en 2011 en el colectivo deciden crear Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de México (FUNDEM) y a partir de ahí se fundarían diferentes capítulos en Nuevo León y Baja California, guardando una identidad propia en cada estado pero trabajando en red.

En Coahuila también en 2011, una vez que hubo cambio de gobierno —entre hermanos, Rubén Moreira sucedió la gubernatura de Humberto Moreira—, con el nuevo gobernador en turno y con la visibilización que habían alcanzado las víctimas gracias al MPJD, el trabajo de FUUNDEC fue mucho más cercano a las instancias de gobierno. Se realizaron reuniones periódicas y establecieron mesas de trabajo. También tuvieron incidencia directa en el trabajo legislativo y lograron colocar en la agenda pública del estado de Coahuila el grave problema de las desapariciones forzadas que se vivían desde el 2006 en la región.

> Los últimos años ya con Rubén Moreira se lograron agendar audiencias periódicas. Se formaron comisiones, se formó un Grupo de Trabajo como enlace de las familias con el Gobernador, se vieron las necesidades de las familias de salud y educación primordialmente y se formó una comisión para ello. Junto con varios organismos internacionales y activistas se hizo trabajo legislativo para que se promulgara la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, la cual se promulgó en el año 2014. Hubo presencia en foros como por ejemplo del Comité contra la Desaparición Forzada en la ONU en Ginebra, con la CIDH, al igual que en otras instancias internacionales en Europa y Estados Unidos. También hubo presencia en universidades para sensibilizar sobre el tema. El año pasado se llevó un informe del Caso Coahuila a la Corte Penal Internacional de La Haya, la cual se trabajó junto con otros colectivos. También en el marco del Movimiento por Nuestros Desaparecidos se trabajó duro para que se aprobara la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que se promulgó a finales de 2017 (Guadalupe Fernández Martínez, comunicación por correo electrónico, el 25 de junio del 2018).

Así se puede ver que FUUNDEC surgió como una organización cercana a la iglesia católica que precede al MPJD pero que, sin embargo, ésta toma fuerza con el

movimiento mismo[220]. Si bien es cierto que ya intentaban realizar algunas acciones contundentes antes de 2011, los mayores logros se darán después de que a nivel nacional las víctimas tomaran la escena pública y comenzaran a realizar su trabajo en red. FUUNDEC, al igual que CADHAC, se posicionaron entonces en una relación de denuncia a las violencias de Estado pero también abiertamente manifiestas a sentarse a la mesa a negociar y trabajar en colaboración con éste cuando lo consideran necesario.

---

[220] Para un análisis sobre la acción de FUUNDEC en relación con el MPJD, ver: (Muñoz Martínez, 2015).

ANEXO E: El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad[221]

Movilizaciones por las víctimas que antecedieron al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

En paralelo a la conformación de los primeros colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada (ver anexo D), a principios de julio del 2008, a nivel nacional se organizaron una serie de acciones colectivas, sobre todo marchas y manifestaciones, que tenían por objetivo denunciar la inseguridad en el marco de la política calderonista. Éstas, más que nada tenían por vocación mostrar una relación de fuerzas para denunciar un caso de secuestro en particular y pedir más protección para las élites. Las marchas y manifestaciones fueron convocadas en el marco del secuestro y posterior asesinato del adolescente de 14 años Fernando Martí, el cual había sido raptado junto con su chofer, Jorge Palma Lemus, y su escolta, Christian Salmones, con la participación en el plagio de altos mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP) (El Universal, 2013). Luego de que la familia pagó un rescate de seis millones de dólares, Fernando fue asesinado (El Universal, 2013) —Jorge Palma Lemus también fue asesinado, aunque su muerte fue invisibilizada—. El secuestro de Fernando fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación y Alejandro Martí movió sus diferentes tipos de capitales para instar a las movilizaciones bajo el lema "Si no pueden renuncien". Estas marchas y manifestaciones —algunas

[221] Para una historia detallada del MPJD, ver : (Sicilia y Vázquez Martín, 2016; Suaste Cherizola, 2017). Para una historia novelada, ver: (Sicilia, 2016c).

multitudinarias—, con la población vestida de blanco, fueron las primeras expresiones masivas de la población de rechazo a la política de (in)seguridad calderonista[222].

A nivel regional, con mucho menos impacto mediático y por mencionar solo algunas de las expresiones de denuncia y protesta de la ciudadanía, en 2009 el municipio de Galeana, Chihuahua, a raíz del secuestro de Eric Lebaron y los asesinatos de Benjamín Lebaron y su cuñado Luis Widmar Stubbs, miembros de la comunidad mormona, realizaron protestas y se organizaron en grupos de autodefensa ante la ausencia de protección del Estado (Sicilia y Martín, 2016). En 2010, María Dávila, se enfrentaba a Felipe Calderón y sus operativos conjuntos, desde el dolor y el reclamo aislado y poco o casi nada mediatizado, luego de que en Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez Chihuahua, un comando armado tirara a mansalva contra 60 estudiantes de preparatoria que se encontraban en una fiesta, 14 de ellos murieron y 10 más resultaron heridos de gravedad (Huffingtonpost, 2018a). Los dos únicos hijos de María Dávila forman parte de las víctimas mortales y el presidente Calderón, el mismo día de la masacre, sin ninguna investigación previa, sostuvo que todos los heridos, asesinados y presentes en la fiesta eran pandilleros (López, 2017). Desde entonces María Dávila no paraba de denunciar en cada espacio que le fuera posible la *guerra* de Calderón, sin que lograra que su causa fuera más allá de ciertas simpatías previamente sensibilizadas al problema de la violencia en el país.

---

[222] Posteriormente Alejandro Martí creó la organización México SOS y se mantuvo cercano al gobierno calderonista (Excélsior, 2011). Irónicamente, su organización junto con la de Isabel Miranda de Wallace "Alto al Secuestro" y la de María Elena Morera, "México Unido contra la Delincuencia", fueron las organizaciones de la sociedad civil que más de cerca trabajaron con las instituciones en el poder. En mayo del 2015 llamaron a organizar una marcha para protestar contra la violencia en el país, pero sobre todo en apoyo a la fuerzas federales "que han caído en la lucha contra los criminales" (Animal Político, 2015a).

Un año más tarde, la violencia seguía sin disminuir. En los primeros días de enero del 2011, diversos creadores de caricatura política —*moneros*— respondieron al llamado de Eduardo del Río —Rius— para conformar una campaña nacional que tenía por objetivo denunciar la política *calderonista*, la cual desde que envío el ejército a las calles a ejercer labores de seguridad pública no había significado más que masacres y violaciones graves a los derechos humanos a lo largo del territorio nacional. Con un diseño del ilustrador Alejandro Magallanes, que en mayúsculas escribió la palabra "'No' y colocó el signo de más y enseguida una mancha escarlata que simboliza la sangre" (Proceso, 2011), el logo fue rápidamente reproducido en diferentes medios de comunicación y se hizo presente en diferentes foros ciudadanos. El llamado era a que las frases "No más sangre" o "Basta de sangre" fueran reproducidas y pegadas en autos, ventanas, puertas y centros de trabajo y así inundar las ciudades con esta reivindicación (Montalvo, 2011). Una vez que el MPJD comenzó a gestarse, la campaña "No más sangre" se unió a éste, hasta que tuvieron desacuerdos del orden de lo axiológico, se dividieron y la fuerza de la campaña disminuyó lentamente.

El surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

> "Una tragedia personal se había convertido,
> por un extraño y horrendo milagro cívico,
> que nunca nadie podrá desentrañar por completo,
> en un reclamo de la nación"
> (Sicilia, 2016a, p. 40).

El 28 de marzo del 2011, Juan Francisco Sicilia Ortega fue encontrado asesinado junto con seis personas más, entre ellos tres amigos cercanos —Gabriel, Julio y Luis—. Los cuerpos presentaban signos de tortura y habían sido abandonados en un paraje en Temixco, Morelos. Javier Sicilia Zardain, padre de Juan Francisco, poeta, ensayista y periodista decide volcar su dolor en denuncia pública y para ello moviliza su importante *capital social y simbólico* (Bourdieu y Passeron, 1978) adquirido como

figura intelectual mexicana, que, además, se asume públicamente como militante del cristianismo —característica muy importante en un país 84% católico (INEGI, 2010)—. Los medios masivos de comunicación, los medios alternativos, así como las redes sociales dieron gran cobertura a este crimen. Al igual que en el caso Martí —y otros que le antecedieron—, en un régimen donde no hay Estado de Derecho no todos los cuerpos tienen el mismo peso, no todas las muertes son equivalentes[223]. En palabras del mismo Javier Sicilia:

> El peso político de la víctima, sí. Hay víctimas, por desgracia en este país, que generan una excepción del Estado de excepción, pero son víctimas porque tienen... pues porque en mi caso nunca se había tocado a un poeta, a un intelectual. Tenía a los periodistas de mi lado —soy periodista también—. Tenía a la comunidad intelectual de mi lado. Tenía a las organizaciones sociales de mi lado y eso permitió coaligar lo que estaba disperso, pero eso es una excepcionalidad. O el caso de los ricos como el caso Martí o el caso de Wallace[224], dos empresarios. Fuera de eso no hemos visto un gramo de justicia (Entrevista, el 28 de febrero del 2017).

---

[223] No en el mismo registro que en cuanto al Estado de Derecho que referimos arriba, pero en sociedades impregnadas de graves expresiones de racismo y clasismo, tampoco todos los cuerpos tienen el mismo peso. En el caso de desaparición de personas —que no necesariamente se trata de víctimas de desaparición forzada— desde 2005 se discute en Estados Unidos en los estudios de comunicación sobre lo que han denominado el *Síndrome de la mujer blanca desaparecida* (Missing White Woman Syndrome, MWWS). Este "síndrome" refiere a la atención desproporcionada que prestan los medios de comunicación a los casos de desaparición de mujeres blancas, clase media, jóvenes, que responden a los cánones de belleza anglosajones y la poca o nula cobertura que se le da los casos de mujeres desaparecidas que no responden a estos cánones. Para un análisis crítico sobre el MWWS y la cobertura en los medios de comunicación, ver: (Liebler, 2010; Stillman, 2007).

[224] En julio de 2005 supuestamente fue secuestrado el empresario Hugo Alberto Wallace Miranda. Su madre, Isabel Miranda de Wallace emprendió una gran campaña mediática al estilo marketing (pagando spots en radio, televisión, renta de espacios para anuncios espectaculares, etc.) para visibilizar el caso y contrató detectives privados para dar con su paradero. Varias personas señaladas por la investigación personal de la Sra. Wallace están hoy en prisión. Sin embargo, la autenticidad del plagio aún se discute. Diversas investigaciones periodísticas señalan que el secuestro jamás existió (Hernández, 2012b, 2014) y organismos de derechos humanos señalan que las personas que están en reclusión son inocentes y que han sido sometidos a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes (Ordaz, 2016). La Sra. Wallace, persona cercana al presidente Felipe Calderón, fue candidata por el Partido Acción Nacional para la Jefatura de la capital del país para el período 2012-2018.

Como poeta, Javier Sicilia posee un uso del lenguaje privilegiado, el cual también movilizó para transmitir su dolor y con ello atraer simpatizantes a la causa. Por ejemplo, el poema que escribió a su hijo en su vuelo de regreso a México desde Filipinas, donde se encontraba cuando se enteró del crimen y en el cual, decía, se despedía de la poesía: "El mundo ya no es digno de la palabra / nos la ahogaron adentro / Como te asfixiaron / Como te (desgarraron) a ti los pulmones / Y el dolor no se me aparta / Sólo queda un mundo / Por el silencio de los justos / Sólo por tu silencio / Y por mi silencio / Juanelo" (El Universal, 2014; Sicilia y Martín, 2016, p. 281). Desde entonces el poeta ya no escribe poemas, pero se sirve de la poesía para desarticular el discurso oficial. En palabras del propio Javier Sicilia:

> La poesía no es una condición del poema, es una condición de una mirada y de una gracia. El poeta mira, siente —yo ya no escribo poemas—, pero uno no puede dejar de expresarse de manera poética y toda expresión poética destruye la univocidad del discurso político porque toca la verdad. Los dos grandes movimientos de los últimos veinte años que ha habido, el Movimiento Zapatista, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, han estado mediados por poetas. Marcos, aunque le duela al gremio, es un poeta. Supo traducir lo que durante 500 años no había podido ser traducido y había sido ocultado por el lenguaje unívoco de la política y el Movimiento por la Paz supo, a través de [la poesía], delocalizar ese discurso con respecto a las víctimas, no estructurales, pero sí a las víctimas individuales que trajo la guerra de Calderón (Entrevista, el 28 de febrero del 2017).

Desde el regreso de Javier Sicilia de Filipinas, una ofrenda con los retratos de los jóvenes asesinados se colocó en la entrada del Palacio de Gobierno de Morelos y cada tarde se leía poesía. El 3 de abril Javier Sicilia publicó en la revista Proceso una "Carta Abierta a políticos y criminales" donde se enunció la frase que atravesaría al movimiento "Estamos hasta la madre" (Sicilia, 2011). A menos de una semana del asesinato de Juan Francisco, Javier convocó a una primera marcha de denuncia de la política de seguridad nacional calderonista, a casi cinco años de haber sido implementada: "Ni un joven, ni un niño más asesinado en este combate que emprendió el gobierno contra el crimen organizado" (El Universal, 2014). Esta

primera convocatoria, que se convertiría en un gran movimiento, congregó el 6 de abril a miles de personas que en diferentes ciudades del país marcharon y en varias ciudades de Sudamérica, Norteamérica y Europa se reprodujeron acciones de denuncia el mismo día (El Universal, 2014). A partir de ahí el movimiento tomaría fuerza con dos objetivos principalmente, visibilizar a las víctimas de la política de seguridad nacional del sexenio en curso y que se legislara a favor de éstas.

Las caravanas que recorren el país, la congregación de las víctimas y las rupturas

El 5 de mayo del 2011 se dio cita a la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. Doscientas personas partieron de Cuernavaca, Morelos y tenían como destino final el Zócalo de la Ciudad de México, al cual llegaron el 8 de mayo. Diferentes líderes sociales y morales de México —la reserva moral del país como le llamarían Sicilia y Pietro Ameglio, otro de los líderes del movimiento—, así como miembros de la campaña "No más sangre" acompañaron a las víctimas. Algunos nombres —por ser figuras públicas o que se habían movilizado por las víctimas con anterioridad— destacarían entre las y los marchantes: Julián Lebaron, el obispo Raúl Vera, quien había acompañado a familiares de desaparecidos en el norte del país (ver Anexo D), Eduardo Gallo, *Rius*, así como representantes del movimiento zapatista y de las Abejas de Chiapas, etc. (Sicilia y Vázquez Martín, 2016, p. 57-59). Una bandera de México y una propuesta de seis puntos para reconstruir el tejido social los cuales fueron consensados con algunas organizaciones sociales, a lo que le llamaron el "Pacto Social"[225], acompañaron la marcha. El 7 de junio, el movimiento zapatista,

---

[225] Los seis puntos redactados en segunda persona del plural eran los siguientes: 1. Exigimos esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas; 2. Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana; 3. Exigimos combatir la corrupción y la impunidad; 4. Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen; 5. Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social; 6. Exigimos

en la voz del Sub-Comandante Insurgente Marcos, envío una carta de apoyo al movimiento, a las y los familiares de las víctimas como símbolo de solidaridad entre las luchas. Ya en el Zócalo, ante una manifestación multitudinaria, con réplicas en distintas partes del país y del extranjero —tan solo el movimiento zapatista movilizó a veinte mil de sus miembros en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (Sicilia, 2016a, p. 41)—, Javier Sicilia pronunció un discurso a través del cual buscaba hermanar las diferentes luchas en lo que él llamaba la reconstrucción nacional. Por lo mismo los seis puntos del "Pacto Social" serían firmados en Ciudad Juárez, el "epicentro del dolor", como le llamaban en el movimiento: "en recuerdo de que allí fue donde, con los asesinatos de mujeres iniciados en Ciudad Juárez en 1993 y aún impunes, dio comienzo el horror" (Sicilia, 2016a, p. 41).

Un mes después de la primera manifestación en el Zócalo, con más gente simpatizando con el movimiento y éste marcado siempre por el manejo de simbolismos (banderas, fechas y lugares simbólicos, etc.), el 4 de junio más de quinientas personas partieron del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México hacia Ciudad Juárez en lo que llamaron la Caravana del norte, la Caravana del Consuelo. Ésta sería una caravana binacional puesto que llevaría el mensaje también al otro lado de la frontera, aunque el objetivo era establecer un diálogo que fuera más allá: "Lo hablábamos como binacional, pero desde el momento que el diálogo es con Estados Unidos es mundial y porque el tema del crimen organizado que es parte del neoliberalismo, es global. El crimen está globalizado" (Entrevista con Javier Sicilia, 28 de febrero del 2017). La caravana se había propuesto llegar el 10 de junio —día que se conmemora a las víctimas de la Guerra Sucia (1964-1982)— a Ciudad Juárez para, en ese día simbólico, proceder a la firma del Pacto Social. Al paso de la

---

democracia participativa. Para consultar el desglose de cada punto, ver: (Sicilia y Vázquez Martín, 2016, p. 80-84).

caravana por los diferentes estados del país en su camino hacia el norte, las víctimas y familiares de víctimas salían a su encuentro. Efectivamente, los templetes de toma de palabra, servían de consuelo. Muchas y muchos, por primera vez se daban la oportunidad de enunciar en un espacio público su duelo, su condición de víctimas.

Sin embargo, una vez en Ciudad Juárez comienzan los desencuentros entre el liderazgo de Javier Sicilia y sus posicionamientos políticos que promovían una idea de reconciliación nacional inspirada en los preceptos del cristianismo y del diálogo[226], y muchas y muchos de los representantes de las organizaciones que llevaban años explorando salidas a la crisis y sabían que el diálogo *vs* los grandes intereses económicos que se mueven en estos crímenes, sin Estado de derecho, no puede nada. A estos posicionamientos, Sicilia desde una perspectiva crítica y de desacuerdo les llamó —casi con desdén— "las izquierdas duras":

> El 10 de junio, Ciudad Juárez hierve. Pero el pacto no se cumple. Los malentendidos y cierta izquierda dura —esa cuya ideología, hecha no de crítica sino de consignas, vela la realidad; esa que no conoce la íntima relación entre medios y fines; esa que, en la apuesta por el todo o nada, divide y termina en el fracaso— revienta mesas. Los seis puntos se vuelven un galimatías de demandas absurdas. No hay manera de controlar ese desastre (Sicilia, 2016a, p. 42).

Entonces, en Ciudad Juárez, el "epicentro del dolor" —donde tenían años lidiando con el horror—, se firmó un Pacto que no correspondía con los seis puntos que se habían decidido desde el centro del país. Por lo que Sicilia y Emilio Álvarez Icaza —otra de las personas que se convertirían en íconos del movimiento—, decidieron, de

---

[226] Para un análisis de la espiritualidad como elemento constitutivo del MPJD, ver: (Galán Castro, 2017).

manera unilateral, no respetar lo firmado con las y los representantes de las víctimas de todo el país congregadas en Ciudad Juárez. Así, ya en El Paso Texas, decidieron continuar promoviendo sus seis puntos iniciales:

> [E]n El Paso, Texas, con la comunidad latina y las asociaciones estadounidenses, que apoyan al Movimiento, Emilio Álvarez Icaza, que lleva la operación política del MPJD, y yo nos decidimos: el pacto no es ese conjunto de disparates que se firmó en Ciudad Juárez, sino, como se había pactado, los seis puntos. Hay turbulencias en el MPJD y en algunas izquierdas duras. Pero la fuerza moral, la visibilización, el clamor de las víctimas y el realismo de los seis puntos son más fuertes (Sicilia, 2016a, p. 42).

Con un movimiento ya en tensión, el 24 de junio se realizó una primera reunión con el presidente Felipe Calderón, los "Diálogos de Chapultepec". Éstos se llevaron a cabo en medio de la desconfianza hacia los representantes del gobierno pero ahora también hacia quienes dirigen el movimiento. Sin embargo, en ese momento aún "pondera[ba]n el diálogo como el rostro de la democracia" (Sicilia, 2016a, p. 42). En estos diálogos Javier Sicilia dio un paso más con sus preceptos cristianos: besó la mejilla de Calderón[227]. Muchos sectores del movimiento aún no se lo perdonan. Se dio así la primera gran ruptura. Semanas después de los primeros "Diálogos de Chapultepec", se convocó a dos marchas en la Avenida Reforma en la Ciudad de México. Una liderada por el poeta y el MPJD, la otra convocada por los *moneros* del

---

[227] Este acto de besar que repitió en reuniones posteriores con otras y otros funcionarios públicos le fue ampliamente criticado a Javier Sicilia. En diversas ocasiones se vio obligado a explicarse: "En las primeras liturgias cristianas había dos momentos altos, la *conspiratio* —el equivalente hoy al saludo de la paz— y la *comestio* —el equivalente a la comunión. El primero era un beso en la boca, un intercambio de alientos, un respirar —en su sentido etimológico— con el otro. En ese momento profundamente somático la comunidad se hacía. Ya no había amo ni esclavo, ni judío ni gentil, sino un común creado en el amor de Cristo. [...] Cuando yo abrazaba y besaba hablaba de esa comunidad. Podemos diferir —decía con ese símbolo—, hablarnos con dureza, pero eso no significa la enemistad, sino la búsqueda en el amor, del común que debemos habitar. Quería decir también que quienes detentan el poder no están por encima de nosotros, como todo poder pretende, sino en un orden de igualdad: la de la comunidad humana" (Sicilia, 2016a, p. 43-44).

"No más sangre". De una acera a otra se gritan traición mutua: ¡Ni a besos ni abrazos se acaban los balazos! (Pok, 2011). A partir de ahí, la campaña "No más sangre" se distanció del movimiento y poco a poco ésta perdió fuerza.

Durante ese primer diálogo del 24 de junio, el MPJD acordó con el Ejecutivo comenzar la redacción de una Ley de Atención a Víctimas y se le encomendó esta tarea al Instituto Nacional de Ciencias Penales. Se establecieron mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación para atender los seis puntos del Pacto Social y el segundo "diálogo" con el Ejecutivo se convocó para el 14 de octubre. Entre tanto, el 5 de agosto se sentaron con representantes del Poder Legislativo. Para el 10 de agosto llamaron al diálogo al Poder Judicial pero éste les fue denegado.

La segunda caravana partió hacia el sur con más de seiscientas personas el 1 de septiembre —día del informe presidencial anual—. Recorrieron los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Puebla. Le llamaron la Caravana por la Paz. En esta caravana, la del sur, el MPJD quiso hacer un gesto solidario en reciprocidad con el zapatismo, se detuvieron así a dialogar en Chiapas con ellos y ellas. También visitaron la frontera con Guatemala para visibilizar a las víctimas migrantes centroamericanas tan vapuleadas y vulneradas en el país. Así, el 9 de septiembre atravesaron el río Usumacinta, para del otro lado de la frontera encontrarse con organizaciones de migrantes que les esperaban. En el sur se encontraron con la misma "desgarradura" que en el norte, solo que las víctimas estaban un poco más organizadas, tomaban el templete, sí, pero acompañadas de organizaciones de la sociedad civil (Sicilia, 2016a, p. 44).

De regreso a los diálogos de Chapultepec el 14 de octubre, las relaciones conflictuales y las tensiones aumentaron al interior y al exterior del movimiento. La Secretaría de Gobernación quería sentarles en la misma mesa que las ONG cercanas al gobierno: México SOS de Alejandro Martí y Alto al secuestro de Isabel Miranda

de Wallace, por ejemplo. El MPJD no aceptó. A la entrada del Palacio de Chapultepec, los guardias de seguridad quisieron impedir que las víctimas entraran con las fotos de sus familiares asesinados y/o desaparecidos. Se dio un *estira y afloje*, al final las víctimas entraron con sus fotos. Las mesas que se habían creado para dar seguimiento a los seis puntos fracasaron en ese "diálogo" y el único logro fue el borrador de una ley de víctimas redactada *a modo* del Ejecutivo. Las rupturas al interior del movimiento aumentaron también por las mismas fechas. Javier Sicilia decidió emprender una campaña para promover la anulación del voto para las elecciones presidenciales de 2012, no todas las vertientes del movimiento se sumaron a esa causa. De hecho el nombre de Emiliano Salinas Occelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, fue asociado al movimiento (Hernández López, 2012). El MPJD no lo confirmó pero tampoco lo negó, la prensa insistió mucho en ello. Incluso hubo suspicacias con respecto a esa campaña de Sicilia de anular el voto y su relación con Emiliano Salinas, puesto que el anular el voto en ese contexto, solo podía afectar a la izquierda (Hernández López, 2012). Por otros motivos de cocina interna, hubo desacuerdos en el núcleo duro del liderazgo del MPJD, por ejemplo Julián Le Baron se deslindó del movimiento.

El 26 de marzo del 2012 luego de una importante labor de cabildeo entre los dirigentes del movimiento con mayor experiencia política y las víctimas, lograron la aprobación a la unanimiad de la ley de víctimas, pero Calderón la entrampa a días antes de dejar la presidencia con una controversia constitucional y ésta no puede ser aprobada durante su mandato. Será Peña Nieto, el presidente entrante, quien el 9 de enero del 2012 promulgue finalmente esa ley.

Entre tanto, el 12 de agosto el MPJD, ya muy debilitado, conformó una caravana de alrededor de cien personas, la mayoría víctimas, para recorrer el norte del país y Estados Unidos. Esta caravana, también llamada de la Paz, parte así de Tijuana rumbo a Washington. Un mes de viaje, veintidós ciudades. El 12 de septiembre

estarían de vuelta, desgastados, diseminados, con muy poca energía. Fue la última caravana del movimiento. A partir de ahí el MPJD comenzaría a diezmarse a grandes pasos. La promulgación de la Ley General de Víctimas a principios del siguiente año sería considerada como el gran logro del MPJD.

Por otra parte y finalmente, en el andar del MPJD muchas y muchos de sus miembros fueron objeto de severas represiones. Hubo personas asesinadas, ejecutadas y desaparecidas en la búsqueda de la justicia y la verdad. Cierro este anexo recordándoles y para ello cito las palabras de los editores del libro de la historia del MPJD Sicilia y Vázquez Martín (2016):

> [E]s el caso de Pedro Leyva asesinado en Ostula, Michoacán, en 2011; el de Nepomuceno Moreno, padre de un hijo desaparecido y asesinado en Hermosillo el mismo año [luego de haber participado en los diálogos de Chapultepec y de haberle presentado a Calderón el caso de su hijo]; también en Ostula fue asesinado por paramilitares su líder Trinidad de la Cruz en presencia de compañeros de MPJD; asimismo fueron desaparecidos nuestros compañeros Eva Alarcón y Marcial Bautista, líderes de los Campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán en Guerrero. La comunidad purépecha de Cherán, cuyos líderes se sumaron al movimiento durante la Caravana del Consuelo, ha sumado también varios muertos; es el caso de Urbano Macías y Guadalupe Gerónimo. Ismael Solorio y Manuela Solís, fundadores de El Barzón-Chihuahua y compañeros del MPJD, fueron asesinados en 2012 (Sicilia y Vázquez Martín, 2016, p. 34).

ANEXO F: Ayotzinapa, fue el Estado

La respuesta institucional e internacional en torno a la desaparición de los estudiantes

En esta sección el objetivo es analizar la respuesta institucional que se dio al caso de Ayotzinapa y cómo las acciones del gobierno, en particular del Poder Ejecutivo, lejos de favorecer las condiciones para un acceso efectivo a la verdad y a la justicia, éstas se han enfocado a encubrir investigaciones que han sido señaladas como imparciales y que *de facto* ejercen efectos de revictimización sobre las personas directamente afectadas y sus familiares. Dado que el caso ha estado plagado de irregularidades, de idas y venidas en comunicación entre las partes y el flujo de interacciones ha sido intenso a lo largo de cuatro años, en este apartado únicamente se enuncian a título ilustrativo algunos de los acontecimientos más relevantes, sin tener la pretensión de que estas líneas sean exhaustivas de la complejidad de la interrelación Estado-víctimas que se ha presentado a lo largo de todo el proceso.

En ese sentido, a diferencia de otros eventos de desaparición, en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desde el mismo día en que ocurrió el ataque, las redes de las escuelas normales rurales se activaron para denunciar los hechos. En los primeros días no se sabía bien a bien cuántos estudiantes habían sido afectados —heridos, asesinados y/o desaparecidos—, debido a que muchos de ellos se habían escondido y tardaron varios días en volver a sus casas o a la normal. En la marcha conmemorativa del 2 de octubre, a cuatro días de ocurridos los hechos, el reclamo generalizado fue por la aparición con vida de los estudiantes y porque se hiciera justicia en este caso. Gracias a esta denuncia temprana los organismos de defensa de derechos humanos lanzaron acciones urgentes con llamamientos internacionales a reaccionar ante el caso.

Organismos internacionales y multilaterales se unieron a estas denuncias. Por mencionar solo algunos: apenas un día después de la marcha conmemorativa de la masacre de 1968 y a menos de una semana del ataque a los jóvenes, el 3 de octubre, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos tildó el caso como "uno de los sucesos más terribles de los tiempos recientes" (Animal Político, 2014b). El 6 de octubre, la CIDH intervino para pedir que se pusieran en marcha medidas cautelares de protección para el conjunto de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y para sus familiares. El 7 de octubre, la OEA, a su vez, calificó los hechos como "inhumanos y absurdos" (Animal Político, 2014b). El 8 de octubre Amnistía Internacional emitió ocho recomendaciones para la búsqueda y para la protección de las y los familiares de los estudiantes. Por su parte, el Papa Francisco, si bien no exigió la aparición con vida de los estudiantes, sí envió un "saludo" al pueblo de México y externó que en sus oraciones estaban los estudiantes (Animal Político, 2014b).

Por el contrario, la respuesta del Ejecutivo Federal no fue tan espontánea. Si bien la PGR atrajo el caso a una semana de los hechos, el Presidente de la República únicamente hasta once días después de ocurrido el ataque y en parte, por la amplitud que estaban tomando las denuncias a nivel nacional e internacional y el señalamiento de los organismos de derechos humanos, se expresó sobre el caso para decir que se sentía "profundamente consternado" pero no declaró tener la intención de poner en marcha ninguna medida especial para dar con el paradero de los estudiantes. El 7 de octubre, por parte del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados anunció una Comisión Especial de Seguimiento en torno al caso, la cual no estuvo muy activa, ni realizó acciones contundentes durante todo el proceso (Animal Político, 2014b). No fue hasta el 29 de octubre que los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos tuvieron una reunión en privado con el presidente Peña Nieto y esto gracias a las marchas multitudinarias y la presión internacional que a esas fechas ya mostraba su fuerza. Tras la reunión que duró aproximadamente cinco horas, el

gobierno federal asumió diez compromisos con respecto a la búsqueda de los estudiantes, entre los cuales estaban: fortalecer esfuerzos de localización, atención integral y apoyo a familias de las personas que perdieron la vida, establecimiento de una mesa de apoyo a las normales rurales, etc. (Animal Político, 2014a). Entre las repercusiones políticas y penales, el 4 de noviembre el alcalde de Iguala —lugar donde ocurrió la embestida—, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos y vinculados a proceso luego de haber estado prófugos durante más de un mes. Por su parte, el 23 de octubre, el gobernador Ángel Aguirre pidió licencia del cargo, sin que él ni ningún alto funcionario, al momento de depósito de esta tesis —octubre de 2018—, hayan sido procesados por su responsabilidad en estos hechos. En 2015 alrededor de 100 personas, entre policías y supuestos narcotraficantes, estaban detenidas bajo proceso por la investigación del caso (Hernández, 2016), sin que en octubre de 2018 se haya dictado ninguna sentencia.

Desde un principio, los padres y madres de los estudiantes fueron acompañados por dos centros de derechos humanos de gran trayectoria y credibilidad en el país, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con el abogado principal asignado al caso, Vidulfo Rosales, y el Centro PRODH, quien asignó cuatro abogados únicamente dedicados a este caso (Patrón, 2017). A pesar de eso, también desde un primer momento la relación con los representantes del gobierno estuvo plagada de anomalías y de revictimización. Por lo mismo, los familiares sostuvieron que no confiaban en la investigación del gobierno federal, por lo que hicieron un llamado a organismos internacionales a realizar peritajes independientes sobre el caso, como por ejemplo, el Equipo Argentino de Antropología Forense. Entre los ejemplos de anomalías y de revictimización, se puede citar que en un inicio hubo un intento por frenar el movimiento tratando de sobornar a los familiares ofreciéndoles casas y autos por medio del director de la misma Normal (Excélsior, 2015; Legideño, 2017; Hernández Rivera, 2017). Por otra parte, no se cumplieron los acuerdos establecidos ni con el titular del Ejecutivo Federal, ni con la PGR. La investigación efectiva nunca

se llevó a cabo y la PGR intentó darle salida al caso declarando a menos de dos meses de los sucesos, el 7 de noviembre, en voz de su titular Jesús Murillo Karam —el mismo que en su rol de Senador un año antes había impulsado la promulgación de la Ley de Víctimas—, la "Verdad Histórica". Ésta sostiene que los estudiantes habrían sido incinerados en un basurero en el municipio de Cocula (ver capítulo III, *supra*). Ante el rechazo de esta versión revictimizante y basada en declaraciones de las que hay fuertes indicios que se obtuvieron bajo tortura (ONU-DH, 2018), en el mismo mes de noviembre, mediante un acuerdo firmado entre la CIDH, el gobierno mexicano y representantes de las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se puso en marcha el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Entre sus principales mandatos estuvieron la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas y Análisis de la situación de la desaparición forzada en el país (GIEI, 2015; Beristain, 2017). El GIEI concluyó que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero y que muy probablemente el ataque se debió a que éstos habían requisicionado un autobús cargado con dinero o con heroína. Apuntó también a que en esta embestida habría habido intervención de todas las fuerzas públicas municipales, estatales y federales, incluido el ejército mexicano (GIEI, 2016). Ante estas conclusiones, una vez que el GIEI terminó su segundo mandato de seis meses, el gobierno mexicano se negó a renovar el acuerdo y en su lugar se estableció un Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa (MESA). Este último concluyó, entre otras anomalías de la investigación de la PGR, al igual que el GIEI, que la "verdad histórica estaba enterrada". Efectivamente, el 8 de junio de 2018 en la presentación del Informe de Balance del primer año del MESA (CIDH-OEA, 2018), Luis Ernesto Vargas, comisionado de la CIDH, sostuvo: "Eso de 'verdad histórica', de 'verdad procesal' y de 'verdad real' son eufemismos que se han estado creando para distorsionar los hechos. Yo sí considero que esa supuesta 'verdad histórica'

quedó sepultada. Quedó evidenciado que esa teoría del caso no era la correcta" (Centro PRODH, 2018).

A pesar de esta conclusión aportada por dos mecanismos diferentes de la CIDH —el GIEI y el MESA—, Enrique Peña Nieto, en el marco de un mensaje transmitido en cadena nacional, el 29 de agosto de 2018, con motivo de su Sexto —y último— informe de gobierno, afirmó: "Existen evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron incinerados por un grupo delincuencial. [...] Luego de una investigación profunda y amplia se llegó a la conclusión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula" (Robles, 2018). Ante todo el proceso y ante estas últimas declaraciones, queda claro entonces, que además del efecto revictimizante que pueden tener esos dichos en las y los familiares, que en el gobierno actual no hay una voluntad política por hacer efectivo el acceso al derecho a la verdad de los familiares, ni para que se conozca públicamente el destino de los estudiantes.

Por otra parte, y en el marco de estas violencias políticas, a principios de junio de 2018, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, ordenaron crear una Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa debido a que determinaron que la investigación de la PGR no fue pronta, efectiva, independiente e imparcial (Animal Político, 2018). Esta comisión se enfrentó a muchas reticencias desde diferentes instancias, comenzando por la PGR y finalmente fue frenada un mes después por resolución judicial de un magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial (Lastiri y Roldán, 2018). Dicha Comisión, de haber visto la luz, hubiera sido inédita en el país, porque en la sentencia misma se establecía la obligatoriedad de coadyuvancia de las familias de las víctimas, así como de la CNDH y del Ministerio Público de la Federación (Animal Político, 2018). Sin embargo, las víctimas y organizaciones sociales que les acompañan manifiestan tener la esperanza de que con el cambio de gobierno —

diciembre del 2018—, esta sentencia pueda ser retomada y se faciliten las condiciones institucionales para que ésta pueda llevarse a cabo. Esto debido a que el virtual titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, declaró tras una reunión con los familiares, que hay voluntad política para crear dicha comisión (Méndez y Muñoz, 2018). Finalmente, cabe mencionar que esta sentencia no se emitió en función de una demanda de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, si no de cuatro imputados por el caso, los cuales argumentan que fueron sometidos a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes (Animal Político, 2014b). De esta manera, las víctimas que se han generado en torno al caso, tanto las personas asesinadas, como las heridas y desaparecidas, pero también aquellas que han sido sometidas a tortura, fueron nuevamente revictimizadas debido a la inoperancia y falta de voluntad política de funcionarios públicos que están a la cabeza de las instituciones.

Además de los hechos arriba señalados, al igual que en muchos otros casos de desaparición de personas, hubo un intento por parte del Estado de criminalizar a las víctimas, de vincular a los estudiantes con un grupo de narcotraficantes apodados *Los Rojos*. Se investigó su vida y la de sus familias con el afán de descargar en ellos la responsabilidad de la ausencia de Estado de Derecho en el país (Abraham, 2017; Bautista, 2017; Campos, 2017; Cruz, 2017; Hernández Rivera, 2017). Si en el caso concreto de los estudiantes este discurso no logró permear en la sociedad, fue en parte debido a la gravedad de los ataques en las que estaban involucradas fuerzas públicas, pero también gracias a las importantes movilizaciones de protesta que desde los primeros días de la desaparición se organizaron tanto a nivel nacional e internacional, tal como será desarrollado en el siguiente apartado.

Las movilizaciones nacionales e internacionales por el esclarecimiento del caso Ayotzinapa

Tal como fue señalado renglones más arriba, la alerta temprana por parte de la red de escuelas normales rurales y de las organizaciones sociales de base, así como las acciones urgentes emitidas por organismos de defensa de derechos humanos, contribuyeron de manera determinante a que se activaran las movilizaciones sociales para denunciar la desaparición de los 43 estudiantes y reclamar su presentación con vida. Las características identitarias de los mismos contribuyeron también a que activistas de los últimos grandes movimientos sociales del país —zapatista, estudiantil y de víctimas— movilizaran sus bases para hacer llamados a acciones de protesta. Las acciones de las bases se dieron en dos vertientes principales. Por una parte, a diferencia del MPJD de inspiración cristiana (ver anexo E), los estudiantes de Ayotzinapa —y algunos aliados muy específicos—, en parte herederos de las reivindicaciones del movimiento armado socialista mexicano, a lo largo del tiempo del movimiento sí han incurrido en acciones directas violentas como medidas de presión. Por mencionar solo algunas, el 13 de octubre del 2014 incendiaron oficinas al interior del palacio de gobierno, así como el palacio municipal de Chilpancingo. El 11 de noviembre del mismo año, en Morelia, Michoacán, un grupo de jóvenes con el rostro cubierto atacó las oficinas del PAN destruyendo equipo inmobiliario. De igual manera, en la Secretaría de Finanzas de la misma ciudad, incendiaron la puerta rociándola con gasolina. En diversas ocasiones rociaron con aerosol y lanzaron huevos, piedras, cohetones y otros objetos a dependencias de gobierno y a personal que labora en éstas —PGR, Secretaría de Gobernación, instalaciones militares de Guerrero, etc.—. Por otra parte, en el marco de las acciones directas pero esta vez no violentas, el recurso a la toma de carreteras tanto estatales como federales como medida de presión fue una acción recurrente. Cabe mencionar de igual manera, que las fuerzas federales y estatales, también atacaron en diversas ocasiones a los manifestantes en acciones pacíficas, a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, así

como a los padres y madres. Sobre todo en el marco de protestas y de desplazamiento en carreteras. (Ver por ejemplo: Abril, 2017; Diario de Morelos, 2016; Regeneración, 2014; Tlachinollan, 2014).

Por otra parte, más allá de los círculos cercanos al núcleo duro del movimiento y/o a las víctimas, en torno a este caso se llevaron a cabo acciones que por su magnitud y multiplicidad, no tienen equiparación en la historia reciente del país. De hecho, diversas personas que nunca antes se habían movilizado, lo hicieron por primera vez en este contexto (notas del diario de campo, 2014-2015). Desde diferentes expresiones tanto artísticas como académicas o de *participación política no convencional* (M. F. Somuano, 2010), como son las marchas, mítines, plantones, etc.; en todo el país y en diferentes partes del mundo, la consigna acuñada en las movilizaciones durante la Guerra Sucia regresó con fuerza: "vivos se los llevaron, vivos los queremos". Intelectuales, artistas y universitarios pusieron sus *expertises* al servicio del movimiento lo que contribuyó, además de darle mucha versatilidad a las acciones, a hacerlas variadas e innovadoras. Creación de vídeos, documentales (Xavier Robles, Temoris Grecko, por ejemplo), performances, pinturas, papalotes (Francisco Toledo, por ejemplo), softwares de identificación de personas (Rafael Lozano Hemmer, por ejemplo), etc., e incluso gente del mundo del espectáculo hizo declaraciones públicas durante sus conciertos o ceremonias de entregas de premios: Calle 13, Sting, etc.

Las redes sociales sin duda fueron clave tanto para la organización de acciones como para su difusión. La mayoría de las manifestaciones se organizaron vía Facebook y Twitter. El flujo de información de las iniciativas y de las acciones fue cubierta solo parcialmente por los medios de comunicación tradicionales. La mayor parte de la información sobre todas las formas de expresión de solidaridad y de denuncia circuló principalmente por los medios de comunicación alternativos. Las páginas Facebook sobre Ayotzinapa se multiplicaron y entre otros, se creó un grupo de traductores con

la finalidad de facilitar el acceso a la información en varios idiomas sobre las noticias, las convocatorias a acciones y actividades y a su posterior difusión. En ese sentido, el movimiento #YoSoy132 ya había abierto el camino logrando establecer algunas redes internacionales, principalmente entre mexicanos viviendo en el extranjero jóvenes y universitarios, las cuales facilitaron la coordinación de las acciones, pero las movilizaciones por Ayotzinapa fueron más allá y rebasaron por mucho los nodos que el #YoSoy132 había creado.

Así, las movilizaciones y expresiones de denuncia tanto de manera física como virtuales comenzaron desde los primeros días de la desaparición de los estudiantes. Además de los eventos de conmemoración del 2 de octubre del 2014, desde el 8 de octubre del mismo año, miles de personas marcharon en la Ciudad de México, en al menos 28 ciudades del país y se realizaron acciones de protesta en otras ciudades del mundo como Londres, Berlín, Madrid, etc., en el marco del llamado a la Jornada de Acciones Globales por Ayotzinapa con el objetivo de denunciar estas violencias de Estado, pedir la ayuda internacional y reclamar la presentación con vida de los estudiantes (Avalos González, 2017). A través de las redes sociales, se organizaron acciones simultáneas en varios países. Las acciones iban desde tomarse una foto con una pancarta en un lugar turístico internacional como Machu Picchu o la Muralla China, hasta organizar eventos masivos como en La Paz Bolivia donde el 20 de noviembre de 2014 el rector de la Universidad Mayo de San Andrés encabezó una marcha de más de 3000 personas, o la de mayo de 2015 en Barcelona donde también participaron alrededor de 2000 personas (notas del diario de campo, 2014-2015).

El llamado era a que "cada quien desde su trinchera" apoyara la denuncia contra el gobierno mexicano. En ese sentido, se buscaba visibilizar la masacre y la no respuesta del Estado, pero también mostrar la fuerza del movimiento y ejercer presión sobre el gobierno mexicano a través del manejo de su imagen en el extranjero. Las y los activistas buscaban crear acciones que fueran originales y que tuvieran un alto

impacto, se buscaba que la acción pudiera tener un efecto espejo. Es decir, que se reprodujera en otros lugares, como por ejemplo las fuentes teñidas de color sangre en París para denunciar la invitación de honor de Peña Nieto para conmemorar el día de la toma de la Bastilla (Aristegui Noticias, 2015), que se reprodujeron en la Ciudad de México y Bélgica (notas de diario de campo, 2014-2015) o las acciones coordinadas con los retratos de los estudiantes inspiradas en *Inside Out Project* del artista JR (JR, 2015). En ciudades de países y continentes diferentes se organizaron proyecciones simultáneas de documentales como fue el caso "*Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado*" en el aniversario de la masacre, con una participación de más de 20 países y 150 ciudades del mundo (Ponce, 2015). Al mismo tiempo que se organizaron manifestaciones, conferencias, performances, etc., desarrollados de manera simultánea y coordinada pero en coordenadas geográficas diferentes. Se puede afirmar así que había una dimensión lúdica en la organización y en la convocación de las acciones. En ese sentido y de acuerdo con las investigadoras Keck y Sikkink (2000), el recurso a la utilización de nuevas estrategias discursivas (semióticas), en las cuales los activistas colectan, modelan y distribuyen la información contribuye a darle un máximo de impacto y mantener el interés en las reivindicaciones. En un principio, las acciones globales tenían lugar al ritmo de una vez por semana, poco a poco éstas se espaciaron a intervalos mensuales, cada 26 y 27 de cada mes, pero aún así —aunque cada vez con menor fuerza—, las acciones mensuales se han mantenido a lo largo de cuatro años.

El número 43 se convirtió en un símbolo que se trataba de movilizar de diferentes maneras, siempre con el objetivo de enfatizar que eran 43 personas que habían sido desaparecidas en ese ataque colectivo. Por ejemplo, el 3 de noviembre se organizó una caminata desde Iguala, Guerrero, hasta la Ciudad de México, con la participación de 43 personas de igual número de organizaciones con el objetivo de ejercer presión ante las instancias de gobierno y mostrar el volumen espacial y visual, que representaban esas 43 corporalidades que estaban ausentadas.

Por otra parte, a nivel internacional, en parte gracias a la diáspora mexicana y muchas veces a iniciativa de universitarios y universitarias, se realizaron acciones simbólicas de alto impacto. Por ejemplo, a menos de un mes del ataque, el 22 de octubre de 2014 fue publicada en los principales medios de comunicación mexicanos e internacionales una "Carta abierta desde el extranjero", la cual fue traducida en un tiempo récord a 5 idiomas y fue firmada por universitarios de más de 60 países y más de 500 universidades (Proceso, 2014). Los universitarios también organizaron conferencias, foros de discusión, mesas redondas, etc. que buscaban analizar el problema, pero también mantener viva la denuncia. Otro ejemplo de alto impacto a nivel internacional, es que en el marco de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz del año 2015, un joven estudiante mexicano, Adán Cortés Salas, apareció en la escena al momento de la entrega de la medalla, burlando toda la seguridad del acto, con una bandera mexicana teñida de color sangre. El tiempo que estuvo frente a las cámaras no duró ni 10 segundos antes de ser apresado, pero fue suficiente para ser primera plana en los periódicos de mayor circulación del mundo. De igual manera se procedió a tomas simbólicas de consulados y embajadas, se intervenían actos oficiales o comerciales donde hubiera representación consular o donde se promoviera la imagen de México como país de inversión o destino turístico o incluso en eventos deportivos como por ejemplo el 11 de noviembre en el marco del partido amistoso entre México y Holanda celebrado en Ámsterdam donde activistas ingresaron al estadio con mantas que rezaban "Todos somos Ayotzinapa" y "Fue el Estado". También en la conmemoración del día de los muertos, en diferentes latitudes como por ejemplo Berlín, Nueva York o Montreal se impidió que se realizaran las inauguraciones de las exposiciones de altares y festividades asociadas.

Con respecto a los padres y madres de Ayotzinapa, además de participar de las acciones directas tanto violentas como no violentas, otra de las acciones que realizaron para sumar apoyos a su causa, fue que salieron en diferentes delegaciones y en caravanas nacionales a diferentes estados del país con la finalidad de atraer

apoyos al movimiento del reclamo por la aparición con vida de sus hijos. Por ejemplo, el 13 de noviembre partió el primer contingente "Brigada Nacional de los 43 Desaparecidos" que visitó tres regiones del país. La primera recorrió Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco y Michoacán. La segunda partió hacia el sur: Chiapas, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala. Finalmente, la tercera se desplazó en Guerrero mismo: Tlapa, San Luis, Zacatlán, Ayutla, Tecoanapa, Zihuatanejo, Atoyac y Acapulco (Animal Político, 2014b).

Después de esta experiencia, a finales de diciembre del 2014 y en el marco del Festival de la Rebeldía y la Resistencia, celebrado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde participaron como invitados representantes de los padres y madres de Ayotzinapa, el Congreso Nacional Indígena se sumó a las denuncias. Por consenso se decidió que se haría un pronunciamiento conjunto para desconocer el Estado y nombrarlo como enemigo común (Henríquez, 2015). También decidieron que se boicotearía el proceso electoral de 2015 y que se elaboraría un listado de los presos políticos del país. Además de estos planteamientos, se resolvió que el CNI y el EZLN movilizarían sus redes internacionales para organizar caravanas internacionales y llevar la denuncia a otros países para atraer la atención de la comunidad internacional y solicitar que se ejercieran medidas de presión hacia el Estado mexicano. En ese sentido, se organizaron cuatro caravanas: Europa, Estados Unidos, Canadá y Sudamérica, las cuales recorrieron más de veinte países y numerosas ciudades. Todas financiadas por organizaciones locales anfitrionas.

Otra de las aportaciones del movimiento es que a nivel internacional se dio un juego de dos niveles (Keck y Sikkink, 2000). Es decir, que los actores expresaron demandas internas vinculadas a sus reivindicaciones internacionales. En muchos países el objetivo de la movilización fue que los residentes mexicanos se dirigieran al gobierno de su país de residencia para exigir el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Las peticiones iban en dos sentidos. Por un lado, se

pedía en un territorio extranjero la aplicación de los instrumentos internacionales en su relación con México, es decir, penalizaciones de orden económico debido a las violaciones graves de los derechos humanos. En ese sentido, las caravanas internacionales por Ayotzinapa contribuyeron en gran medida a posicionar esta doble agenda. Las delegaciones se sumaron a las reivindicaciones locales, al mismo tiempo que pedían el apoyo y la solidaridad de la sociedad civil de cada país para encontrar a los estudiantes y solicitarles que hicieran presión sobre sus gobiernos. Por ejemplo, en Berlín, se pedía la suspensión de la venta de armas a México. Se sabe actualmente que las armas que fueron utilizadas en el ataque a los estudiantes eran de facturación alemana. En ese sentido, la diputada Heike Hänsel del partido La Izquierda, se hizo una aliada del movimiento, ya que fue la primera parlamentaria de un país extranjero en visitar la región durante la primera quincena de noviembre de 2014. Hänsel llevó el debate sobre la venta de armas a México hasta el congreso alemán el 5 de noviembre de 2014 (Aristegui noticias, 2014). Esta denuncia llegó hasta los tribunales, donde el 18 de mayo de 2018 comenzó un juicio que durará hasta finales de octubre del 2018 (AFP, 2018), —la fecha de veredicto será posterior al depósito de esta tesis—. En el mismo sentido, en Londres se pedía la suspensión de los eventos programados en el marco de la celebración de 2015, Año de México en Inglaterra. En París, se pedía que se le retirara la invitación a Enrique Peña Nieto como invitado de honor a la conmemoración de los eventos del CCXXVI aniversario de la Toma de la Bastilla, máxima celebración en Francia por los derechos humanos (Aristegui Noticias, 2015). En Canadá se pedía que México fuera retirado de la Lista de países designados de origen. La cual fue creada en 2012 y se incluía en ella a países que "no producen habitualmente refugiados, que respetan los derechos humanos y ofrecen protección del Estado" (CIC, 2015). Entre los criterios que se tomaban en cuenta para seleccionar un país en esta lista estaban: La gobernanza democrática; la protección del derecho a la libertad y la seguridad de los ciudadanos; la libertad de opinión y de expresión; la libertad de culto y de asociación; prohibición de la discriminación y la protección de los derechos de los grupos en riesgo; la protección contra los actores no

estatales (lo que comprende la protección del Estado contra la trata de personas); el acceso a investigaciones imparciales; el acceso a un sistema de justicia independiente; acceso a un sistema de apelaciones (que comprende disposiciones legales y constitucionales (CIC, 2015).

México fue agregado a esta lista en febrero de 2013, y excluyendo a la libertad de culto, el país no cumple con ninguno de estos criterios y el gobierno mexicano actual no garantiza el Estado de Derecho. Esta lista, además de retirar el derecho de asilo político y humanitario a los ciudadanos de los países que la componen, legitima que los países que ahí figuran respetan los derechos humanos y garantizan la seguridad de sus ciudadanos. México aparecía en esta lista al lado de Noruega, Suiza, Suecia o Finlandia. Además, los mexicanos eran los únicos de esta lista que en su momento —entre 2009 y 2016— requerían de visa para entrar al país —El requisito de visa para mexicanos estuvo vigente entre 2009 y 2016—. En julio de 2015, gracias a la presión de diferentes grupos de migrantes, entre ellos los mexicanos, esta lista fue declarada inconstitucional por la Corte Federal y por lo tanto actualmente está sin efecto (CIC, 2015).

En ese sentido, sin tener la pretensión de haber abarcado todo lo que implicaron a nivel político las acciones y expresiones de solidaridad y de denuncia aquí enumeradas, este breve panorama permite dimensionar los alcances de estas movilizaciones. Éstas lograron mostrar al mundo el rostro represor del gobierno mexicano, el cual había hecho un gran esfuerzo por ocultarlo a través de diferentes estrategias, entre ellas por medio de la política de puertas abiertas a refugiados de todo América Latina durante las guerras sucias (ver capítulo III, *supra*) o por medio de la difusión de la cultura o incluso promoviéndose como destino turístico. Mismo si el posicionamiento del núcleo duro de Ayotzinapa apuntó a judicializar el caso y a no asumir tareas que en sentido estricto le corresponden al Estado, como la búsqueda efectiva de los estudiantes y, además, tampoco buscó coadyuvar directamente en la

transformación de las instituciones o en acciones de cabildeo y/o en las mesas de trabajo para que se legislara en materia de desaparición forzada; el impacto de visibilización de su causa y por ende de la grave crisis de derechos humanos por la que atravesaba —y sigue atravesando— el país, y la denuncia de la desaparición forzada en particular, le dio un gran empuje a la agenda de las víctimas.

APÉNDICE A: Lista de personas entrevistadas

Abraham, Bernabé. Padre de Adán Abraján de la Cruz, desaparecido entre el 26 y 27 de septiembre del 2018 en Iguala, Guerrero. Entrevista el 14 de enero del 2017.

Baca, Lucía. Madre de Alejandro Moreno Baca, desaparecido el 27 de enero del 2011 en una carretera al norte de Nuevo León. Integrante del MPJD, de FUNDEM y de Ciencia Forense Ciudadana. Entrevista el 20 de febrero del 2017.

Bautista, Cristina. Madre de Benjamín Ascencio Bautista, desaparecido entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero. Entrevista el 14 de enero del 2017.

Beristaín, Carlos Martín. Exmiembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH para el caso Ayotzinapa. Entrevista el 3 de febrero del 2017.

Bustos, Diana. Integrante del Equipo Mexicano de Antropología Forense. Entrevista el 17 de febrero del 2017.

Campos, Bernardo. Padre de José Ángel Campos Cantor, desaparecido entre el 26 y 27 de septiembre del 2018 en Iguala, Guerrero. Entrevista el 14 de enero del 2017.

Carmona, Janet. Miembra de Serapaz y del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Entrevista el 21 de enero del 2017.

Castañeda, Laura Beatriz. Madre de Diego Antonio Maldonado Castañeda y tía de Luis Enrique Castañeda Nava, desaparecidos el 22 de julio de 2011 en Paracho, Michoacán. Integrante de Hasta Encontrarlos. Entrevista el 28 de enero del 2017.

Cerezo Contreras, Héctor. Ex-prisionero de conciencia, responsable de comunicación del Comité Cerezo México. Entrevista el 10 de enero del 2017.

Corcuera Cabezut, Santiago. Miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (2013-2017), Presidente del mismo Comité de octubre 2016-septiembre 2017. Entrevista el 27 de febrero del 2017.

Córdova Alcaraz, Rodolfo. Subdirector ejecutivo de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Entrevista el 30 de enero de 2017.

Correa Restrepo, Clemencia. Experta en peritaje psicológico en víctimas de conflictos armados y especialista en acompañamiento psicosocial de víctimas de desaparición forzada. Integrante de Aluna acompañamiento psicosocial. Entrevista el 17 de febrero del 2017.

Cruz, Margarito. Padre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, desaparecido entre el 26 y 27 de septiembre del 2018 en Iguala, Guerrero. Entrevista el 14 de enero del 2017.

Dayán, Jacobo. Investigador, coautor de la obra *En el Desamparo* (Aguayo y Dayán, 2017). Entrevista el 9 de febrero del 2017.

de la Peña, Angélica. Senadora de la República de las LXII y LXIII legislaturas, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Entrevista el 22 de marzo del 2017.

Díaz Genao, Lucía. Madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, secuestrado y luego desaparecido el 28 de junio del 2013 en la Ciudad de Veracruz. Fundadora del Colectivo Solecito Veracruz. Entrevista el 8 de febrero del 2017.

Diez, Eloísa. Directora y productora en La Sandía Digital. Entrevista el 13 de enero del 2017.

Enamorado, Ana. Madre de Oscar Antonio López Enamorado, desaparecido en el estado de Jalisco en enero de 2010. Miembra del Movimiento Migrante Mesoamericano. Entrevista el 11 de marzo del 2017.

Fernández Martínez, Guadalupe. Madre de José Antonio Robledo Fernández, desaparecido el 25 de enero del 2009 en Monclova, Coahuila. Miembra fundadora de FUUNDEC. Entrevista el 22 de febrero del 2017.

Flores Santoyo, Beatriz. Madre de José Antonio Ángeles Flores, desaparecido en Piedras Negras, Coahuila, el 12 de febrero de 2011. Entrevista el 13 de febrero del 2017.

García Laguna, Eliana. Exsubprocuradora de derechos humanos de la PGR (junio 2014 – mayo 2015). Entrevistas el 27 de febrero y 6 de marzo del 2017.

González Contreras, Mario César. Padre de de César Manuel González Hernández, desaparecido entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero. Entrevista el 14 de enero del 2017.

González Islas, Mónica. Periodista de investigación, miembra de *Periodistas de a Pie*. Entrevista el 3 de febrero del 2017.

Guzmán Cruz, Abdallán. Exprisionero de consciencia, cinco miembros de su familia fueron desaparecidos durante la Guerra Sucia. Entrevista realizada junto con Anahi Morales Hudon el 10 de diciembre del 2017.

Hernández Lagunas, Tranquilina. Madre de Mireya Montiel Hernández, desaparecida el 13 de septiembre de 2014 en Cuernavaca, Morelos. Miembra de Enlaces Nacionales. Entrevista el 10 de febrero del 2017.

Hernández Rivera, Hilda. Madre de César Manuel González Hernández, desaparecido entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero. Entrevista el 14 de enero del 2017.

Hernández, Blanca. Cofundadora del Comité de presos, exiliados y presos políticos de México y presidenta de la Fundación Diego Lucero A. C. Entrevistas en diversas sesiones. El 9 de febrero, el 10 de marzo y el 12, 13 y 14 de diciembre del 2017. Las tres últimas fueron realizadas junto con Anahi Morales Hudon.

Hernández, Tania Paloma. Miembra de H.I.J.O.S. México. Entrevista el 19 de febrero del 2017.

Humberto Gálvez, Jorge. Miembro del Comité Eureka. Entrevista personal el 12 de enero del 2017.

Ibarra Martínez, Bárbara. Madre de Gabriela Arlene Benítez Ybarra, desaparecida el 13 de junio del 2011 en la ciudad de Xalapa, Veracruz. El cuerpo de Gabriela fue localizado el 23 de septiembre de 2011. Entrevista el 6 de enero del 2017.

Knapp Moreno, Luis Eduardo. Integrante del área legal de Artículo 19. Entrevista el 23 de febrero del 2017.

Lara Rivera, Jorge Alberto. Director de la Fundación Miguel Estrada Iturbide. Entrevista el 8 de febrero del 2017.

Legideño Vargas, Hilda. Madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, desaparecido entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero. Entrevista el 14 de enero del 2017.

López Casanova, Alfredo. Artista, creador de la pieza Huellas de la Memoria. Entrevista el 7 de marzo del 2017.

López, Valentina. Miembra fundadora de H.I.J.O.S. México. Entrevista el 19 de febrero del 2017.

Loya, Liliane. Directora adjunta de la Fundación MacArthur México. Entrevista el 20 de marzo del 2017

Manzanares, Patricia. Madre de Juan Hernández Manzanares, policía federal desaparecido el 25 de febrero de 2011 en Nuevo León. Miembra de FUNMED. Entrevista el 13 de febrero del 2017.

Mastrogiovanni, Federico. Sociólogo, periodista e investigador. Entrevista el 24 de enero del 2017.

Mata Montiel, Julio. Secretario Ejecutivo Nacional de AFADEM. Entrevista el 31 de enero del 2017.

Miranda, Citlalli. Miembra fundadora del "Comité los otros desaparecidos de Iguala". Entrevista el 3 de febrero del 2017.

Moscoso Urzúa, Valeria. Coordinadora del Área de Trabajo y Acompañamiento Psicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Entrevista el 9 de marzo del 2017.

Orozco Montalvo, Marisela. Madre de Gerson Quevedo Orozco secuestrado y luego desaparecido el 15 de marzo de 2014 en Medellín, Veracruz y de Alan Quevedo Orozco, asesinado al momento de ir a rescatar a su hermano. Marisela es integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y de la Red de Enlaces Nacionales. Entrevista el 17 de febrero del 2017.

Patrón, Mario. Director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH). Entrevista el 27 de enero del 2017.

Peñalosa del Valle, María Fernanda. Integrante de Cauce Ciudadano, A. C. Entrevista el 22 de marzo del 2017.

Pérez Rodríguez, Guadalupe. Hijo de Tomás Pérez Francisco, desaparecido el 1 de mayo de 1990 en Pantepec Puebla. Miembro de H.I.J.O.S. México.

Rangel Lozano, Claudia. Profesora-investigadora, Universidad Autónoma de Guerrero. Entrevista el 13 de enero del 2017.

Renaux, Jérémy. Subdirector de Idheas, Litigio Estratégico. Ciudad de México, 15 de febrero del 2017.

Reveles, José. Periodista y columnista, especialista en violencia política. Entrevista el 16 de marzo de 2017.

Reyes Maldonado, Nadin. Hija de Raymundo Reyes Amaya, detenido-desaparecido el 25 de mayo del 2007 en el Estado de Oaxaca. Co-fundadora de Hasta Encontrarlos. Entrevista el 18 de enero del 2017.

Salcedo Jiménez, Araceli. Madre de Fernanda Rubí, desaparecida el 7 de septiembre del 2012 en Orizaba, Veracruz. Miembra del colectivo Familiares

Desaparecidos en la región Córdoba-Orizaba. Entrevista el 10 de febrero del 2017.

Sánchez Serrano, Evangelina. Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Entrevista el 13 de enero del 2017.

Sicilia, Javier. Líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Entrevista el 28 de febrero del 2017.

Trujillo, Juan Carlos. Hermano de Jesús Salvador, Raúl, Gustavo y Luis Armando, desaparecidos. Los dos primeros el 28 de agosto del 2008, en Atoyac, Guerrero. Los dos últimos el 22 de septiembre de 2010 en Poza Rica, Veracruz. Miembro de Familiares en Búsqueda María Herrera, fundador de Enlaces Nacionales. Ciudad de México el 1 de marzo del 2017.

Ulloa Ziáurriz, Teresa. Directora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, (CATLAW, por sus siglas en inglés). Entrevista el 16 de enero del 2017.

APÉNDICE B: Guía de entrevista para trabajo de campo

La guía de entrevista que se presenta a continuación, es tal cual fue concebida y estandarizada antes de comenzar a realizar el trabajo de campo. Tal como fue explicado en la sección de metodología, una vez que comencé a realizar las entrevistas, la guía se fue adaptando, en función de información que fui obteniendo en el terreno y del conocimiento previo que yo tenía de cada actor/actriz a entrevistar y de sus roles específicos. Por ejemplo, a Carlos Beristain le fueron dirigidas preguntas específicas sobre el GIEI y su experiencia internacional, al igual que a Santiago Corcuera sobre su experiencia en el Comité de la ONU, etc. También, cuando se trataba de entrevistar a familiares de víctimas de desaparición forzada, comenzaba por preguntarles si querían hablar sobre los casos particulares de sus familiares o si preferían hablar de su organización o colectivo en primer lugar. En general las personas familiares de víctimas decidieron comenzar por hablar del evento de la desaparición de sus familiares, de sus procesos de búsqueda, de judicialización y de la revictimización constante de la que son víctimas por parte de los órganos de Estado y de la sociedad en general por la criminalización que se hace de sus familiares.

	Organizaciones sociales y colectivos	Órganos de gobierno y Organismos multilaterales
Historia de la institución	¿Cuándo se crea este organismo y por qué? ¿Cuáles han sido los casos más notorios en desaparición forzada que han defendido? ¿Quiénes son actualmente y quiénes han sido sus líderes? ¿De dónde vienen los fondos para su funcionamiento? ¿En un organismo formalmente registrado ante alguna instancia? Si sí, ¿cuál?	
Desaparición forzada de personas en México	¿Qué es la desaparición forzada de personas? ¿Desde cuándo se da la desaparición forzada en México? ¿Actualmente se da un fenómeno diferente en cuanto a la desaparición de personas en relación a las desapariciones forzadas del pasado? ¿Desde su organización desde cuándo se vinculan con este tema? ¿Quiénes son los autores de las desapariciones actualmente? ¿Cómo explica esto? ¿Desde el punto de vista de su organismo, el Estado tiene algún tipo de responsabilidad en la desaparición de las personas? ¿Por qué? ¿Quiénes son las personas que más se hacen desaparecer? ¿Qué rasgos característicos comparten? ¿Por qué, cree?	
Estrategias de posicionamiento	¿Cuáles son sus principales estrategias de acción? ¿Qué hacen ustedes en concreto para la búsqueda de personas desaparecidas? ¿Cómo lo hacen? ¿Con quiénes? ¿Desde cuándo? ¿Trabajan en red? ¿Con quiénes? ¿Por qué con estos organismos? ¿Hay algún grupo de búsqueda de personas desaparecidas con el que estén en discordancia? ¿Por qué? ¿Hay alguna manera de trabajar de algún grupo que les inspire? ¿Por qué?	¿Su organismo hace algo frente a este tema? ¿Qué? ¿Cómo lo hace? ¿Con quiénes? ¿Qué opina de que en el caso de Ayotzinapa no se autorice a que interroguen a los militares? ¿Cuál cree que sea el motivo? ¿Considera que es legítimo? ¿Conoce las diferencias entre la ley para prevenir la desaparición de personas enviada por Peña Nieto a las y los legisladores y la enviada por

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">¿Tratan de alguna manera de hacer públicas sus reivindicaciones? ¿Ante quienes principalmente? ¿Cómo lo hacen?
¿Su organismo participó en la redacción de la ley contra desapariciones forzadas? Si sí, ¿cuál fue su participación? ¿Cómo lo hizo? Si no, ¿por qué?
¿Creen que la aprobación de la ley que propone la campaña #SinLasFamiliasNo contribuiría a la solución del problema? ¿Por qué? ¿Qué haría falta?</td><td colspan="2">el Movimiento por Nuestros Desaparecidos? ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo se posiciona ante esto?

¿Qué cree que sería necesario hacer para frenar las desapariciones forzadas? ¿Cómo podría contribuir su organismo?</td></tr>
<tr><td>Senadora: Desde 1999 hasta la fecha, las Cámaras han recibido al menos 4 iniciativas de ley para prevenir y castigar las desapariciones forzadas, ¿Por qué considera que no se ha legislado en ese sentido? ¿Cuáles han sido las trabas administrativas en esa materia?</td><td>¿Dan asesoría a órganos de gobierno o a organizaciones sociales o a cuerpos policiacos mexicanos en torno a la problemática de la desaparición forzada de personas? ¿Por qué? Si sí, ¿cómo lo hacen?

¿A nivel internacional llevan a cabo alguna acción para frenar las desapariciones forzadas en México? ¿Participan en la creación de instrumentos específicos?

¿Cómo explica el retraso en comparación con otros países de la región en la legislación en torno a las desapariciones forzadas en México?

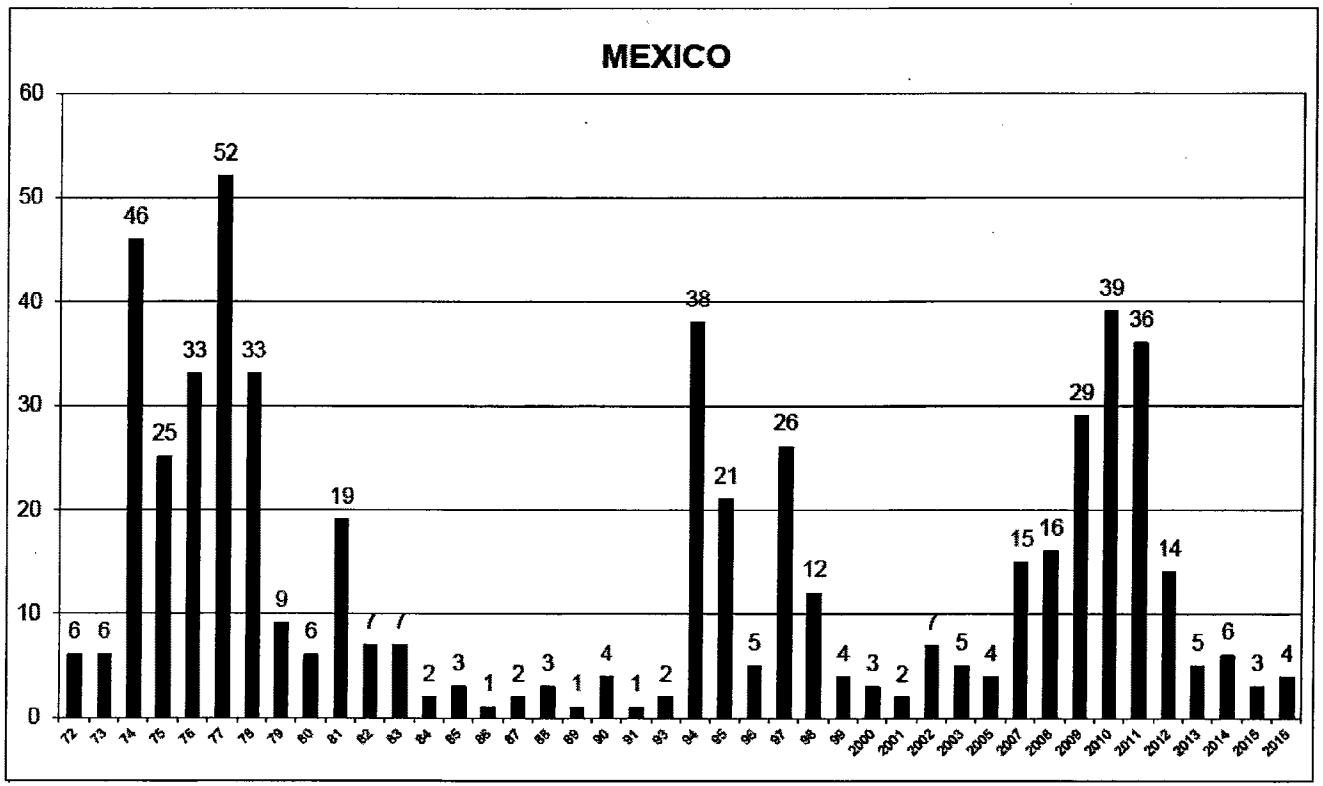
¿Existe alguna especificidad en la desaparición forzada de personas en México y en otros países de la región? Si sí, ¿cuál(es)? ¿Con otras partes del mundo?

¿Tiene algo que ver el sistema político mexicano?</td></tr>
</table>

Interlocutores legítimos	¿A quién cree que le corresponde resolver el problema de las desapariciones forzadas? ¿Quiénes son quienes deben reclamar el regreso de las personas desaparecidas? ¿Por qué? ¿Quiénes y qué organismos deberían intervenir? ¿Hay alguna persona en particular u organismo con quien se niegan a tener como interlocutor o interlocutora? ¿Por qué? ¿Su organización colaboraría con organizaciones sociales, organismos internacionales, órganos de gobierno, grupos policiacos para tratar de resolver las desapariciones forzadas? Si sí, ¿con cuáles sí y con cuáles no? ¿Por qué?
Logros	¿Considera que ha habido logros frente al tema de la denuncia de la desaparición forzada? ¿Cuáles serían?
Retos	¿Cuáles cree que sean los principales obstáculos para frenar la desaparición forzada de personas?
Recomendaciones	¿Qué recomendaciones haría usted para tratar de solucionar la desaparición forzada de personas? ¿A quiénes se las dirigiría? ¿Por qué?
Vínculos	¿Me podría recomendar alguien más para entrevistar? ¿Me podría recomendar literatura (libros, artículos, alguna publicación para ahondar sobre el tema? ¿Algún texto que considere importante conocer?
¿Quiere agregar algún comentario?	

APÉNDICE C: Casos de desaparición forzada en México aceptados por el GTDFI de la ONU (1972-2016)

Gráfica 1. Casos de desaparición forzada en México aceptados por el GTDFI de la ONU (1972-2016)



Fuente: Informe anual 2018, GTDFI de la ONU (A/HRC/39/46), p. 43.

BIBLIOGRAFÍA

Abril, E. (2017, 25 de abril). Agrede la policía federal a padres y madres de los 43 de Ayotzinapa. *Desinformémonos* (Ciudad de México). Disponible en: https://desinformemonos.org/agrede-la-policia-federal-padres-madres-los-43-ayotzinapa/

ACNUDH. (2018, marzo). *Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa*. Ciudad de México: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/MX/OHCHRMexicoReportMarch2018_SP.pdf

AFP. (2018, 16 de mayo). Juicio en Alemania por caso de venta ilegal de armas a México - El Sol de México. *El Sol de México*, Ciudad de México, sección Sociedad. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/juicio-en-alemania-por-caso-de-venta-ilegal-de-armas-a-mexico-1689578.html

Agamben, G. (2005). *Estado de excepción. Homo sacer, II, I*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

Aguayo Quezada, S. (2014). *La Charola: Una historia de los servicios de inteligencia en México*. México: Editorial Ink.

Aguayo Quezada, S. y Treviño Rangel, J. (2007). Fox y el pasado. La anatomía de una capitulación. *Foro internacional*, 709-739.

Aguayo, S. (2015, 24 de septiembre). *De Tlatelolco a Ayotzinapa: Las violencias del Estado*. Ciudad de México: Editorial Ink.

Aguayo, S. y Dayán, J. (2017, 16 de enero). *En el desamparo: Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)*. Ciudad de México: El Colegio de México.

Albarrán Ledezma, A. J. (2015). *Frente Nacional Contra la Represión: diversidades pro defensa de los derechos humanos ante el autoritarismo del Estado mexicano*. Guadalajara: Editorial Staudeg.

Alcántara, L. (2002, 19 de enero). Prevén fracaso de indagación sobre desapariciones. *El Universal*, México, sección Nación. Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/77010.html

Ameglio Patella, P. (2016, 9 de junio). Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: construir paz en la guerra de México. *Polis. Revista Latinoamericana*, (43). Disponible en: http://journals.openedition.org/polis/11539

Amigo, R. (2008). Aparición con vida: las siluetas de los detenidos-desaparecidos. En *El Siluetazo* (p. 203-239). Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

Amnistía Internacioal. (2000, 23 de agosto). *Por primera vez se penaliza en México la desaparición forzada*. (AMR 41/43/00/s). Ciudad de México: Amnistía Internacional. Disponible en: https://www.amnesty.org/download/Documents/132000/amr410432000es.pdf

Anderson, B. (2015, 7 de marzo). El departamento de telecomunicaciones del narco mexicano. En *Vice News*. Disponible en: https://www.vice.com/es_mx/article/vdae93/el-tecnico-informatico-de-los-carteles-de-droga

Anghel, V. J. (2002). L'écriture des murs: les fresques populaires à Santiago du Chili. Dans *Les écritures de l'engagement en Amérique Latine, 2002, ISBN 2-909596-23-0, págs. 171-186*. Actes du colloque Les écritures de l'engagement en Amérique Latine (p. 171-186). Presses Universitaires de Bordeaux. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2332761

Animal Político. (2012, 23 de mayo). "Yo soy 132": Declaratoria y pliego petitorio. (Ciudad de México). Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2012/05/declaratoria-y-pliego-petitorio-de-yo-soy-132/

Animal Político. (2012, 29 de octubre). Un sexenio, una ciudad a la fosa común. *Animal Político*, Ciudad de México, sección Seguridad. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2012/10/suman-24-mil-personas-enviadas-a-fosas-comunes-en-lo-que-va-del-sexenio/

Animal Político. (2014, 29 de octubre). EPN ofrece fortalecer la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa. *Animal Político*, Ciudad de México, sección Nacional. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2014/10/tras-6-horas-reunidos-padres-de-ayotzinapa-presentan-pliego-petitorio-epn/

Animal Político. (2014, 26 de noviembre). Normalistas cumplen dos meses desaparecidos: cronología del caso Ayotzinapa. *Animal Político*, Ciudad de México, sección Nacional. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2014/11/cronologia-el-dia-dia-del-caso-ayotzinapa/

Animal Político. (2015, 25 de mayo). Organizaciones llaman a marchar en apoyo a fuerzas federales. (Ciudad de México). Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2015/05/organizaciones-llaman-a-marchar-en-apoyo-a-las-fuerzas-federales/

Animal Político. (2015, octubre). NarcoData. En *NarcoData*. Disponible en: https://narcodata.animalpolitico.com/

Animal Político. (2018, 25 de febrero). Detienen a cuatro policías en Tecalitlán; confesaron que entregaron a italianos al crimen organizado. *Animal Político* (México). Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/02/detienen-policias-tecalitlan/

Animal Político. (2018, 4 de junio). Tribunal ordena crear Comisión para la Verdad en caso Ayotzinapa; no compartimos criterio de magistrados: PGR. *Animal Político* (Ciudad de México). Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/06/tribunal-ordena-creacion-comision-de-la-verdad-caso-iguala/

Ansolabehere, K., Frey, B. y Payne, L. (2017). La « constitución » de la desaparición forzada. Vinculos entre los significados legales y sociales de la desaparición. En: *Desde y frente al Estado: Pensar, atender y resistir la desaparición de personas en México* (p. 1-26). Ciudad de México: Centro de Estudios Constitucionales SCJN.

Ansolabehere, K. y Vázquez, L. D. (2017, diciembre). De la injusticia a los derechos: momentos en la construcción de identidad de defensores de derechos humanos. El caso de México. *Estudios sociológicos*, *35*(105), 517-545. doi: 10.24201/es.2017v35n105.1535

Anstett, É. (2017). Comparación no es razón: a propósito de la exportación de las nociones de desaparición forzada y detenidos-desaparecidos. En *Desapariciones. Usos locales, circulaciones globales* (p. 33-48). Bogotá: Siglo del hombre editores / Universidad de los Andes.

Antillón Najlis, X. (dir.). (2018). *Yo sólo quería que amaneciera. Informe de impactos psicosociales del caso Ayotzinapa*. Ciudad de México: Fundar. Disponible en: http://ayotzinapa.fundar.org.mx/wp-content/documentos/DocAyotziFINAL.pdf

Apuntes de The School of Americas. (s. d.). En *NO + Escuela de las Américas / SOA Watch*. Disponible en: http://www.soawlatina.org/prensa.html

Aquino Moreschi, A. (2013, diciembre). La subjetividad a debate. *Sociológica (México)*, *28*(80), 259-278.

Aranda, J. (2010, 26 de agosto). Zetas ejecutaron por la espalda a los 72 migrantes; no pudieron pagar rescate. *La Jornada*, Ciudad de México, sección Política. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/08/26/politica/002n1pol

Arévalo Naranjo, L. (2010, agosto). Atención y reparación psicosocial en contextos de violencia sociopolítica: una mirada reflexiva. *Revista de Estudios Sociales No.36*, (36), 29-39. doi: 10.7440/res36.2010.03

Aristegui Noticias. (2012, 24 de julio). 'Congelan' Ley de Víctimas por controversia constitucional. *Aristegui Noticias* (Ciudad de México). Disponible en: https://aristeguinoticias.com/2407/mexico/admite-scjn-controversia-por-ley-de-victimas/

Aristegui Noticias. (2012, 28 de noviembre). Textual: Carta de 'La Barbie' en la que acusa a Calderón y García Luna. *Atistegui Noticias* (México). Disponible en: https://aristeguinoticias.com/2811/mexico/textual-carta-de-la-barbie-en-la-que-exhibe-a-la-pf-y-a-garcia-luna/

Aristegui Noticias. (2015, 14 de julio). Fuentes teñidas de rojo en París. *Aristegui Noticias* (Ciudad de México). Disponible en: https://aristeguinoticias.com/1407/mexico/fuentes-rojas-en-paris-fotos/

Aristegui Noticias. (2018, 2 agosto). Estado mexicano debe investigar tortura contra Lydia Cacho, concluye ONU-DH. (Ciudad de México). Disponible en: https://aristeguinoticias.com/0208/mexico/estado-mexicano-debe-investigar-tortura-contra-lydia-cacho-concluye-onu-dh/

Artículo 19. (2018, 23 de enero). *La desaparición y desaparición forzada de quienes ejercen la libertad de expresión en México*. Ciudad de México: Artículo 19. Disponible en: https://articulo19.org/periodistasdesaparecidos/

Asamblea General ONU. (2006, 21 de diciembre). Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Organización de las Naciones Unidas. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx

Asociación Madres de Plaza de Mayo. (1996). *Historia de las Madres de la Plaza de Mayo*. Buenos Aires: Ediciones Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Astorga Almanza, L. (2015). *« ¿Qué querían que hiciera? »: Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón*. México: Penguin Random House.

Astorga Almanza, L. A. A. (2007). *Seguridad, traficantes y militares: el poder y la sombra*. México: Tusquets.

Austin, J. L. (1998). *Cómo hacer cosas con las palabras*. Barcelona: Paidós.

Avalos González, J. M. (2017). ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! Acciones globales por Ayotzinapa y activismo político juvenil en Guadalajara. *Intersticios sociales*, (14), 243-277.

Ávila, E. (2018, 15 de marzo). Fiscal niega ejecución extrajudicial en muerte de 2 menores en Veracruz. *El Universal*, Ciudad de México, sección Estados. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/estados/fiscal-niega-ejecucion-extrajudicial-en-muerte-de-2-menores-en-veracruz

Avilés, J. (2014). Prólogo. En *Ni vivos ni muertos. La desaparición forzada en México como estrategia de terror* (p. 9-22). México: Grijalbo.

Ayala, M. (2011, noviembre). FEDEFAM: 30 años de lucha contra la desaparición forzada, 1981-2011. (Entrevista con Judith Galarza CAMPOS. Caracas. Venezuela, abril de 2011). *Aletheia*, *2*(3). Disponible en: http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/front_page

Azis Nassif, A. (2017). Reformas, gatopardismo y regresión. En *Las razones del fracaso democrático. Rupturas, capturas y resistencias* (p. 2-26). Ciudad de México: CIESAS.

Balderas, Ó. (2013, 23 de julio). "El caimán", padrote de vieja escuela. *El Universal*, Ciudad de México, sección Estados. Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/91781.html

Balderas, Ó. (2016, 7 de noviembre). Con 14 años Ramiro va tras el rastro de su hermano: ¿Por qué los adultos no buscan? *VICE News* (México). Disponible en: https://news.vice.com/es/article/con-14-anos-ramiro-va-tras-rastro-hermano-por-que-adultos-no-buscan

Barrachina, C. y Hernández, J. I. (2012, marzo). Reformas del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México (2006 - 2011). Disponible en: repositorio.flacsoandes.edu.ec http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/3971

Bartolucci, J. (2000). Los actores de la universidad: ¿unidad en la diversidad? En *Masificación educativa, ampliación de oportunidades y régimen escolar en la UNAM.*, *III* (p. 127-142). México: UNAM.

Bartra, A. (1985). *Los herederos de Zapata: movimientos campesinos posrevolucionarios en México, 1920-1980*. México: Ediciones Era.

Bartra, R., Boege, E., Calvo, P., Gutiérrez, J., Martínez Vásquez, V. R. y Paré, L. (1978). *Caciquismo y poder político en el México rural*. México: Siglo XXI.

BBC Mundo. (2004, 23 de septiembre). Chile: « vuelos de la muerte ». *BBC Mundo*. Disponible en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3682000/3682026.stm

Becker, H. S. (1966). *Social problems: A modern approach*. Ann Arbor: J. Wiley and Sons.

Bejarano, C. L. (2002). Las Super Madres de Latino America: Transforming Motherhood by Challenging Violence in Mexico, Argentina, and El Salvador. *Frontiers: A Journal of Women Studies*, *23*(1), 126-150.

Bélanger, A.-J. (1998). Épistémologies de la science politique à vos marques ! Dans *Épistémologies de la science politique* (p. 14-58). Montréal : Presses de l'Université du Québec.

Bellinghausen, H. (2008). *Acteal: crimen de Estado*. México: La Jornada Ediciones.

Bello, F. G. (2017, 3 janvier). Heidegger en torno al error de la Modernidad: La crítica al dualismo cartesiano de cuerpo y alma (Sein und Zeit, parágrafos 19, 20, 21). *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, *0*(0), 89-98. doi: 10.6018/daimon/268651

Berger, P. L. y Luckmann, T. (1986). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Murguía.

Beristaín, C. M. (2017, 21 de marzo). *El tiempo de Ayotzinapa*. Madrid: Ediciones AKAL.

Beristain, C. M., Valencia Villa, A., Buitrago Ruiz, Á. y Cox Vial, F. (2017). *Metodologías de investigación, búsqueda y atención a las víctimas: Del caso de Ayotzinapa a nuevos mecanismos en la lucha contra la impunidad*. (1re éd.). FLACSO-México. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/j.ctt21kk17r

Boltanski, L. y Thévenot, L. (1991, abril). *De la justification: les économies de la grandeur*. Paris : Gallimard.

Boss, P. (2001). *La pérdida ambigua: cómo aprender a vivir con un duelo no terminado*. Barcelona: Gedisa, Editorial, S.A.

Bourdieu, P. (1986). L'illusion biographique. *Actes de la recherche en sciences sociales*, *62*(1), 69-72. doi : 10.3406/arss.1986.2317

Bourdieu, P. (2002). Les conditions sociales de la circulation internationale des idées. *Actes de la recherche en sciences sociales*, *145*(1), 3-8. doi : 10.3406/arss.2002.2793

Bourdieu, P. y Passeron, J.-C. (1978). *La reproduction: éléments pour une théorie du système d'enseignement*. Paris : Les Éditions de Minuit.

Breach, M. y Villalpando, R. (2006, 1 de junio). Murió El Egipcio, preso por feminicidios en Juárez. *La Jornada* (México). Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2006/06/02/index.php?section=sociedad&articl e=043n2soc

Brito, L. (2017, 1 de marzo). Entregan dos cuerpos más de las fosas de Tetelcingo. *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/476332/entregan-dos-cuerpos-las-fosas-tetelcingo

Brito, L. (2016, 29 de mayo). Fosas de Tetelcingo: Las historias de las víctimas. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/442122/fosas-tetelcingo-las-historias-las-victimas-video

Brito, L. (2017, 21 de marzob). Inician la exhumación de cuerpos de las fosas de Jojutla. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/478890/inician-la-exhumacion-cuerpos-las-fosas-jojutla

Buscaglia, E. (2013). *Vacíos de poder en México: el camino hacia la seguridad humana*. México: Debate.

Buscaglia, E. (2014, 5 de mayo). La paradoja mexicana de la delincuencia organizada: Policías, violencia y corrupción. *Revista Policía y Seguridad Pública*, *1*(2), 271-282. doi: 10.5377/rpsp.v1i2.1365

Butler, J. (1998). Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista. *Debate feminista*, (18), 296-314.

Cacho, L. (2015, 15 de septiembre). *Los demonios del Edén: El poder que protege a la pornografía infantil*. México: Penguin Random House.

Calveiro Garrido, P. (1998). *Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina.* Buenos Aires: Colihue.

Calveiro Garrido, P. (2010). *Violencias de Estado: la guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global*. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina.

Calveiro Garrido, P. (2018). Desapariciones: de la llamada Guerra Sucia a Ayotzinapa. En *Cartografías Críticas, I.* Los Ángeles, California: Karpa. 1 vol. Disponible en: http://www.calstatela.edu/al/karpa/p-calveiro

Calzá Teruggi, P. A. M. (2000). *¿Quién nos gobierna?: el grupo político en el poder en México y su proyecto de nación*. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana.

Calzolaio, C. (2012, 30 de mayo). Les féminicides de Ciudad Juárez : reconnaissance institutionnelle, enjeux politiques et moraux de la prise en charge des victimes. *Problèmes d'Amérique latine*, (84), 61-76.

Cámara de Diputados. (2000, diciembre). Dictámen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/58/2000/dic/DictaJusticia.html

Camp, R. A. (2000). *La política en México: el declive del autoritarismo*. México: Siglo XXI.

Campbell, J. (1991). *El poder del mito. En diálogo con Bill Moyers.* Barcelona: Emecé.

Canal 6 de Julio. (1995, 28 de junio). *Matanza de Aguas Blancas*. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Wut8XF07CM4

Carbajal, M. (2007, 25 de noviembre). El feminicidio, sus causas y significados. Entrevista a Marcela Lagarde. *Mujeres en Red. El Periódico Feminista* (Buenos Aires). Disponible en: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1228

Carmona, S. (2015, junio). La institucionalización del género en México. *Revista de El Colegio de San Luis, V* (9), 220-239.

Carrasco Araizaga, J. (2013, 12 de enero). El « pelotón de la muerte », soldados con licencia para matar. *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/330488/el-peloton-de-la-muerte-soldados-con-licencia-para-matar

Carrillo Viveros, J. y Hernández, A. (1985). *Mujeres fronterizas en la industria maquiladora*. México: SEP/Cefnomex.

Carrión, L. (2015, 18 de abril*a*). Rosario Ibarra: 40 años de búsqueda. *El Universal.mx* (Ciudad de México). Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/cono-de-la-madre-fiera-40-anios-de-lucha-49287.html

Carrión, L. (2015, 18 de abril*b*). Rosario Ibarra: 40 años de búsqueda. *El Universal*, Ciudad de México, sección Primera. Disponible en: /primera-plana/2015/impreso/cono-de-la-madre-fiera-40-anios-de-lucha-49287.html

Castellanos, L. (2009). *Le Mexique en armes*. Montréal : Lux Éditeur.

Castillo García, G. (2005, 12 de agosto). Solicitan aprehender a Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro. *La Jornada* (México D. F.). Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2005/08/12/index.php?section=politica&article=020n2pol

Castillo García, G. (2012, 22 avril). Jefe de la Brigada Blanca, persiguió a la Liga Comunista. *La Jornada*, México D. F., sección Política. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2012/04/22/politica/004n1pol

Cedillo, J. A. (2017, 17 de abril). Inician exhumación de cuerpos en fosas comunes de panteones de Coahuila. *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/482550/inician-exhumacion-cuerpos-en-fosas-comunes-panteones-coahuila

Cedillo, J. A. (2018, 21 de abril). Cadhac, 25 años de lucha en pro de los desaparecidos. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/530916/cadhac-25-anos-de-lucha-en-pro-de-los-desaparecidos

CEJIL. (2017, 12 de diciembre). Crímenes contra estudiantes de Ayotzinapa siguen en impunidad, seis años después. Disponible en: https://www.cejil.org/es/crimenes-contra-estudiantes-ayotzinapa-siguen-impunidad-seis-anos-despues

Celis, L. (2012). Renaissant de leurs cendres. Organisations de victimes des crimes d'État et mouvements sociaux populaires en Colombie. *Cahiers des imaginaires*, *7*(10), 86-101.

Celis Sánchez, R. y Aierdi Urraza, X. (2015, 1 de julio). *¿Migración o desplazamiento forzado? Las causas de los movimientos de población a debate*. Deusto: Universidad de Deusto.

Centenera, M. (2017, 18 de junio). El ADN, 30 años al lado de Abuelas para encontrar a los nietos robados por la dictadura. *El País*, Madrid, sección America. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2017/06/14/america/1497472745_062450.html

Cero Trata. (s. d.). Índice Mexicano sobre la Vulnerabilidad ante la Trata de Personas. Disponible en: http://www.cerotrata.org.mx/panorama-sobre-la-trata/panorama-nacional/

Chaney, E. M. (1979). *Supermadre: Women in Politics in Latin America*. Austin: University of Texas Press.

Chávez Vargas, L. G. y Guevara Bermúdez, J. A. (2017). La impunidad en México. Una mirada desde los derechos humanos y apuntes para su erradicación. En *Las razones del fracaso democrático. Rupturas, capturas y resistencias* (p. 54-72). Ciudad de México: CIESAS.

Chebili, S. (2009). Corps et politique : Foucault et Agamben. *L'information psychiatrique*, *85*(1), 63-68. doi : 10.3917/inpsy.8501.0063

CIC. (2015 juillet). Politique de pays d'origine désignés. Disponible en: https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/presenter-demande-asile-canada/demande/politique-pays-designes.html

CIDH. (1998, 18 de febrero). *Informe de fondo N° 48/97. Caso 11.411. Severiano y Hermelindo Santiz Gómez « Ejido Morelia » vs México.* [Informe de fondo]. (N° 48/97. Caso 11.411). CIDH. Disponible en: https://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/Mexico11.411.htm

CIDH. (2013, diciembre). *Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México*. (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13) (p. 287). Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: http://fundacionjusticia.org/cms/wp-content/uploads/2015/12/Informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf

CIDH-OEA. (2018). *Informe de Balance. Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa de la CIDH*. (OEA/Ser.L/V/II. Doc.82/18) (p. 52). Ciudad de México: CIDH. Disponible en : http://www.oas.org/es/cidh/docs/Mesa/InformebalanceAyotzinapa.pdf

Civera Cerecedo, A. (2006). El internado como familia: las escuelas normales rurales en la década de 1920. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México)*, *XXXVI*(3-4). Disponible en: http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=27036404

CNDH. (2011, 22 de febrero). *Informe especial sobre secuestro de migrantes en México*. (p. 108). Ciudad de México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

CNDH. (2013, diciembre). *CNDH - RECOMENDACIÓN No. 80/2013. "Caso de privación de la de la vida de 72 personas migrantes y atentados a la vida de los extranjeros en el municipio de San Fernando, Tamaulipas"*. (80/2013) (p. 53). Ciudad de México: Comisión Nacional de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/Rec_2013_080.pdf

CNDH. (s. d.). Desaparecidos - Derechos Relacionados con la Desaparición de Personas. Dans *Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México*. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/Desaparecidos_Derechos_Relativos

CNDH/HCHR. (2015, noviembre). La desaparición forzada en México: Una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas. Comisión Nacional de Derechos Humanos.

CNN Expansión. (2011, 15 de agosto). Edomex: supuesto líder de « La Mano con Ojos » planeaba matar al procurador. *Expansión*, Ciudad de México, sección Nacional. Disponible en: https://expansion.mx/nacional/2011/08/15/estado-de-mexico-entrega-al-lider-de-la-mano-con-ojos-a-la-procuraduria

CoIDH. (2009, 23 de noviembre). *Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos. Sentencia del 23 de noviembre del 2009 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)*. (p. 106).

Colombo, P. (2017). *Espacios de desaparición: Vivir e imaginar los lugares de la violencia estatal (Tucumán, 1975-1983)*. Buenos Aires: Miño y Dávila editores.

Comisión Científica de Identificación Humana. (2016, 22 de junio). *Informe sobre las fosas de Tetelcingo*. (p. 5). Cuernavaca: Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Disponible en: https://www.uaem.mx/sites/default/files/informe-sobre-las-fosas-de-tetelcingo-220616pdf.pdf

Comité Cerezo. (2017, 7 de octubre). Una Ley General sobre desaparición forzada amputada, que se queda corta ante las miles de desapariciones forzadas no es nuestra Ley. Disponible en: https://www.comitecerezo.org/spip.php?article2894

Comité contra las Desapariciones Forzadas ONU. (2015, noviembre). Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. En *La desaparición forzada en México: Una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas* (p. 16-29). Ciudad de México: CNDH/HCHR. Disponible en: http://www.hchr.org.mx/images/2015_DesapForz_CNDH_ONUDH_WEB.pdf

Comverdad. (2014, 15 de octubre). *Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero*. (p. 237). Chilpancingo, Guerrero. Disponible en: http://congresogro.gob.mx/files/InformeFinalCOMVERDAD.pdf

CONADEP. (1984). *Nunca Más - Informe Conadep*. Buenos Aires. Disponible en: http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/nuncamas/nmas0001.htm

Corcuera Cabezut, S. (2015). Desaparición forzada y trata de niñas. Visión jurídica desde Mesoamérica. En *Desapariciones forzadas de niños en Europa y Latinoamérica. Del convenio de la ONU a las búsquedas a través del ADN.* (p. 215-228). Barcelona: Universitat de Barcelona.

Córdova Rojas, A. C. (2016, 15 de diciembre). #RevueltasEstéticas: Del #yosoy132 a #Ayotzinapa. *Laocoonte. Revista de Estética y Teoría de las Artes*, *0*(3), 206-219. doi: 10.7203/laocoonte.3.3.9370

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (16 de noviembre de 2009). Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos y Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca. (2015). Desaparición Forzada. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 6. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33824.pdf

Corte Penal Internacional. A/CONF.183/9; A/CONF.183/9. Disponible en: http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

Córtez González, A., Cérdan Corona, A. P., Ordaz, G., Núñez Varón, J., Garcés Ocampo, M. F. y Aguilera García, S. (2018 août). *El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y su camino hacia la incidencia legislativa: la siembra colectiva, una apuesta por la esperanza*. Ciudad de México: Centro de Colaboración Cívica / Comisión de Derechos Humanos. Senado de la República. LXIII Legislatura.

Cubero, J. (2001). *Les Mères. Un nouvel acteur politique ?* Toulouse : Éditions Privat.

Cuevas, V. E., Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Chile) y Association for the Prevention of Torture. (2003). *Comisiones de la verdad: ¿un camino incierto? : estudio comparativo de comisiones de la verdad en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Sudáfrica desde las víctimas y las organizaciones de derechos humanos*. Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU.

Da Silva Catela, L. (2009). Lo invisible revelado. El uso de fotografías como (re) presentación de la desaparición de personas en Argentina. En *El pasado que miramos*. Buenos Aires: Paidós.

Danell, V. (2000, 10 de julio). La transición no debe olvidar la historia: Izunza. *Diario AZ*, Xalapa, Veracruz, sección Nacional.

Das, V. (2008). Lenguaje y cuerpo: transacciones en la construcción del dolor. En *Veena Das. Sujetos de dolor, agentes de dignidad* (p. 343-374). Bogotá: Pontifica Universidad Javeriana.

Dávila, P. (2015, 6 de noviembre). PGR inicia quinta excavación para buscar restos de Rosendo Radilla. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/420134/pgr-inicia-quinta-excavacion-para-buscar-restos-de-rosendo-radilla

Dayán, J. (2016 septiembre). Tetelcingo: Crímenes de lesa humanidad. *Resiliencia. Revista enfocada a los Derechos Humanos y la Atención a Víctimas*, (3), 24-29.

de Certeau, M. (1990). *L'invention du quotidien*. Paris : Folio.

De Cock, B. y Maturana, D. M. (2014). La expresión de la agentividad en el « Informe Rettig » (Chile, 1991) A la Memoria. *Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana*, *12*(1 (23)), 123-140.

de Garay, A. y del Valle-Díaz-Muñoz, G. (2012). Una mirada a la presencia de las mujeres en la educación superior en México. *Revista iberoamericana de educación superior*, *3*(6), 3-30.

de las Heras Herrero, B. (2009). La historia a través de la imagen: la fotografía como fuente de memoria. *Estudos da Lengua*, 7-1.

de Mauléon, H. (dir.). (2015). *Ayotzinapa, la travesía de las tortugas: la vida de los normalistas antes del 26 de septiembre de 2014*. Ciudad de México: Ediciones Proceso.

de Miguel Sanz, S. (2013, 24 de julio). 'El Caimán' y otros 'padrotes'. En *Reporte Indigo*. Disponible en: https://www.reporteindigo.com/reporte/el-caiman-y-otros-padrotes/

Delgadillo, M. y Reyes, N. (2017, 22 de septiembre). Encuentran cuerpos torturados bajo los escombros. *El Universal*, Ciudad de México, sección Opinión.

Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/colaboracion/mini-mochilazo-en-el-tiempo/nacion/sociedad/los-torturados-que-se-encontraron-bajo#.WcXO1S5XElQ.facebook

Demos Desarrollo de Medios SA. (2012, 27 de enero). *La Dirección Federal de Seguridad en tiempos de Nazar Haro*. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=oPeMar6I744

Devineau, J. (2012, 30 mai). Autour du concept de fémicide/féminicide : entretiens avec Marcela Lagarde et Montserrat Sagot. *Problèmes d'Amérique latine*, (84), 77-91.

Dezalay, Y. et Garth, B. G. (2002). *La Mondialisation des guerres de palais*. Paris : Seuil.

Diario de Morelos. (2016, 27 de junio). Agreden a pedradas a padres de los 43 de Ayotzinapa. En *Diario de Morelos*. Disponible en: https://www.diariodemorelos.com/noticias/agreden-pedradas-padres-de-los-43-de-ayotzinapa

Díaz, G. L. (2012, 21 de abril). El militar que a hierro mataba, un nombre asociado a la tortura. *Proceso* (México D. F.). Disponible en: http://www.proceso.com.mx/305056/el-militar-que-a-hierro-mataba

Díaz, G. L. (2014, 18 de octubre). Descendientes de Lucio Cabañas, entre los 43 desaparecidos. *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/385174/descendientes-de-lucio-cabanas-entre-los-43-desaparecidos

Díaz, G. L. (2015, 28 de octubre). Exigen disculpa pública a Duarte por trato a madre de joven desaparecida. *Proceso* (México). Disponible en: http://www.proceso.com.mx/419324/exigen-disculpa-publica-a-duarte-por-trato-a-madre-de-joven-desaparecida

Díaz, G. L. (2017, 13 de septiembre). "El Estado me robó a mi hija". *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/502980/me-robo-a-mi-hija

Díaz, P. et Gutiérrez Ruiz, C. (2009). Les détenus disparus, victimes ou résistants? Les catégories dans la mobilisation de l'Association chilienne des familles de

détenus disparus. Dans *Mobilisations de victimes* (p. 129-144). Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

Díaz Tobar, A. (2015, diciembre). Prácticas de conmemoración de la Guerra Sucia en México. *Athenea Digital, 15*(4), 197-221.

Diéguez Caballero, I. (2016). *Cuerpos sin duelo: iconografías y teatralidades del dolor*. México: Universidad Autónoma de Nuevo León.

Donatello, L. M. (2003). Religión y política: las redes sociales del catolicismo post-conciliar y los Montoneros, 1966-1973. *Estudios Sociales, 24*(1), 89-112.

Doyle, K. (2006, 26 de febrero). Informe Documenta sobre 18 años de « Guerra Sucia » en México. En: *The National Security Archive*. Disponible en: http://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm

Drouin, M. (2012). *La guerre contre-insurrectionnelle guatémaltèque. Sa généalogie, le déni des responsables et les sources historiques*. Montréal : Université de Montréal.

Duhaime, B. (2017, 11 octobre). *Notes du cours: Actualité du droit international - disparitions forcées*. Département de sciences juridiques. Cours, UQAM, Montreal.

Duhaime, B. et Thibault, A. (2018 July). Protection of migrants from enforced disappearance: A human rights perspective. *International Review of the Red Cross*, 1-19.

Dulitzky, A. (2015, noviembre). Prólogo - La desaparición forzada en México: Una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas. Ciudad de México: CNDH/HCHR. Disponible en: http://www.hchr.org.mx/images/2015_DesapForz_CNDH_ONUDH_WEB.pdf

Dulitzky, A. (2017, noviembre). *"Control...Sobre Todo el Estado de Coahuila" Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas*. (p. 60). Human Rights Clinic / University of Texas.

Durazo Herrmann, J. (2011). Procès de l'autoritarisme subnational : un regard sur l'Oaxaca. *Politique et Sociétés*, *30*(2), 71-92.

Eco, U. (2012). *Construir al enemigo*. Madrid: Penguin Random House Grupo Editorial España.

Edmonds, R. M. (2010, October). Transforming Loss into Action: Mothers from the Plaza de Mayo to Juarez, Mexico. *Journal of the Motherhood Initiative for Research and Community Involvement*, *1*(1). Avalaible in: jarm.journals.yorku.ca https://jarm.journals.yorku.ca/index.php/jarm/article/view/30920

El Big Data. (2017, 11 de noviembre). « Levantan » a medico para que atienda a narcotraficantes heridos. *El Big Data* (Chihuahua). Disponible en: https://elbigdata.mx/mexico/levantan-a-medico-para-que-atienda-a-narcotraficantes-heridos/

El Observador. (2011, 11 de abril). Cifran en 2.700 los registros de "vuelos de la muerte". *El Observador*. Disponible en: http://www.elobservador.com.uy/cifran-2700-los-registros-vuelos-la-muerte-n110743

El País. (1978, 10 de febrero). Reportaje: Una huelga de hambre cambió los planes de Banzer. *El País*, Madrid, sección Internacional. Disponible en: https://elpais.com/diario/1978/02/10/internacional/255913214_850215.html

El País, E. E. (1981, 16 de diciembre). Huelga de hambre de « madres de la plaza de Mayo » en dos obispados argentinos. *El País*, Madrid, sección Internacional. Disponible en: https://elpais.com/diario/1981/12/16/internacional/377305221_850215.html

El Sur, Periódico de Guerrero. (2014, 8 de octubre). Llegan 500 policías ciudadanos a Iguala a buscar a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. *El Sur, Periódico de Guerrero*, Chilpancingo, Guerrero, sección Guerrero. Disponible en: https://suracapulco.mx/impreso/2/llegan-500-policias-ciudadanos-a-iguala-a-buscar-a-los-estudiantes-de-ayotzinapa-desaparecidos/

El Tiempo. (2008, 19 de abril). Con avisos, narcos mexicanos buscan reclutar a exmilitares. *El Tiempo* (Nuevo Laredo). Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2903904

El Universal. (2013, 7 de abril). Cronología. El caso Fernando Martí. *El Universal*, Ciudad de México, sección Metrópoli. Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/915144.html

El Universal. (2014, 15 de enero). Cronología: Caso Sicilia, el crimen que sensibilizó al país. *El Universal*, Ciudad de México, sección Estados. Disponible en: /estados/2014/cronologia-sicilia-979830.html

El Universal. (2016, 25 de mayo). De 644 alertas Amber, 429 han tenido éxito: PGR. *El Universal*, Ciudad de México, sección Nacional. Disponible en: https://www.vanguardia.com.mx/articulo/de-644-alertas-amber-429-han-tenido-exito-pgr

Enadeau, C. (1999). *La paradoja de la representación*. Buenos Aires: Paidós.

Englander, N. (2010). *Le Ministère des affaires spéciales*. Paris : Plon

ENVIPE. (2012, 27 de septiembre). *Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública*. (339/12). Ciudad de México: INEGI. Disponible en: http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/enviperes2012.pdf

ENVIPE. (2018, 25 de septiembre). *Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública*. Ciudad de México: INEGI. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2018/

Epstein, M. (2009). La identidad como derecho inherente a los niños y las niñas. En V Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires: Facultad de ciencias sociales.

Ernst, F. (2017, 1 de octubre). Las desaparecidas de Veracruz. *Nexos*. Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=33903

Escudero Chauvel, L. et Lia, V. (2000 mars). Disparus, passiones et identités discursives dans la presse argentine (1976 - 1983). *Hermès*, (28), 155-174.

Esquivel, J. (2012, 2 de diciembre). Documentados en Washington, los nexos de García Luna con el narco. *Proceso*, México, sección Narcotráfico. Disponible

en: http://www.proceso.com.mx/326805/326805-documentados-en-washington-los-nexos-de-garcia-luna-con-el-narco

Esteban, M. L. (2017). Los cuidados, un concepto central en la teoría feminista: aportaciones, riesgos y diálogos con la antropología. *QuAderns-e de l'Institut Català d'Antropologia*, *2*(22), 33-48.

Excélsior. (2011, 23 de febrero). Los presidenciables 2012: Alejandro Martí. *Excélsior* (Ciudad de México). Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/node/716603

Excélsior. (2015, 4 de agosto). Director de la Normal de Ayotzinapa sobornó a padres de desaparecidos: padre de normalista. *Excélsior*, Ciudad de México, sección Nacional. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/04/1038153

Excélsior. (2017, 16 de enero). Mario Villanueva Madrid, los delitos que lo llevaron a prisión. *Excélsior*, México, sección Seguridad. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/16/1139886

Excélsior. (2018, 25 de marzo). Caen tres exfuncionarios de Chihuahua por caso del Campo Algodonero. *Excélsior*, Ciudad de México, sección Nacional. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/24/1228428

Fabj, V. (1993, March). Motherhood as political voice: The rhetoric of the mothers of Plaza de Mayo. *Communication Studies*, *44*(1), 1-18. doi: 10.1080/10510979309368379

Fazio, C. (2016, 31 mars). *Estado de emergencia: De la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto*. México: Penguin Random House Grupo Editorial México.

FEMOSPP. (2006). *Informe histórico presentado a la Sociedad Mexicana: fiscalía especial FEMOSPP.* México: Comité 68 Pro Libertades Democráticas A.C.

Ferrer Mac-Gregor, E. (2011). *Los feminicidios de Ciudad Juárez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Campo Algodonero: la segunda sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano*. México: Editorial Porrúa.

Ferrer Vicario, G. A. (2014). Madera, Chihuahua, 1964-1965. En *Del Asalto al cuartel de Madera a la reparación del daño a víctimas de la violencia del pasado* (p. 19-110). México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública / Universidad Autónoma de la Ciudad de México / Juan Pablos Editor.

FGE. (2017, 18 de agosto). Cifra de 3, 600 denuncias por personas desaparecidas corresponde al periodo 2006-2016: FGE. [Fiscalía General del Estado de Veracruz]. Disponible en: http://comunicacion.fiscaliaveracruz.gob.mx/cifra-de-3-600-denuncias-por-personas-desaparecidas-corresponde-al-periodo-2006-2016-fge/

Fierro, J. O. (2016, 22 de septiembre). Tomás Zerón "afectó el derecho a la verdad:" documento de la PGR sobre Ayotzinapa. En *Aristegui Noticias*. Disponible en: https://aristeguinoticias.com/2209/mexico/tomas-zeron-afecto-el-derecho-a-la-verdad-documento-de-la-pgr-sobre-ayotzinapa/

Fierro, L. (2017, 11 de noviembre). Cártel secuestra a médico para curar a sus heridos. *El Universal*, Ciudad de México, sección Estados. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/estados/cartel-secuestra-medico-para-curar-sus-heridos

Flores Contreras, E. (2014, 8 de abril*a*). Por posibles nexos con el narco, detiene la PGR a alcalde perredista en Guerrero. *Proceso*.

Flores Contreras, E. (2014, 17 noviembre*b*). En 2014 se duplicó hallazgo de fosas clandestinas y cadáveres en Guerrero. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/387989/en-2014-se-duplico-hallazgo-de-fosas-clandestinas-y-cadaveres-en-guerrero

Flores Contreras, E. (2015, 28 de marzo*a*). Los Aguirre: una dinastía de corruptos. *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/399702/399702-los-aguirre-una-dinastia-de-corruptos

Flores Contreras, E. (2015, 29 de septiembre*b*). Intactos, los negocios de los Abarca. *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/416780/intactos-los-negocios-de-los-abarca-dejar-en-borrador

Flores Contreras, E. (2016, 8 avril, 8 avril). Esclavizado por el narco. *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/436324/esclavizado-por-el-narco

Flores, E. (2017, 20 de diciembre). La lista de periodistas caídos en 64 años: el sexenio de Calderón es el más letal, le sigue el de EPN. *Sin Embargo*, Ciudad de México, sección Unidad de datos. Disponible en: http://www.sinembargo.mx/20-12-2017/3360109

Flores Nández, N. (2012). *La farsa detrás de la guerra contra el narco*. México: Océano.

Flores Pérez, C. A. (2009). *El estado en crisis: crimen organizado y política: desafíos para la consolidación democrática*. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Flores Pérez, C. A. (2013). *Historias de polvo y sangre: Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas*. Ciudad de México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Forbes. (2015, 29 de diciembre). México, el país más peligroso de América Latina para periodistas. *Forbes Mexico*. Disponible en: http://www.forbes.com.mx/mexico-el-pais-mas-peligroso-de-america-latina-para-periodistas/

Foucault, M. (1985). *La arqueología del poder*. México: Siglo XXI Editores.

Foucault, M. (1988, septiembre). El sujeto y el poder. *Revista Mexicana de Sociología*, *50*(3), 3-20.

Foucault, M. (1989a). *El poder: cuatro conferencias*. México: UAM-Azcapotzalco.

Foucault, M. (1989b). *Vigilar y castigar*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Foucault, M. (1994). *Dits et écrits III (1976-1979)*. París : Gallimard.

Foucault, M. (1999). *Entre filosofía y literatura*. México: Paidós.

Foucault, M. (2001). *Dits et écrits II: 1954-1988*. Paris : Editions Gallimard.

Foucault, M. (2005). *La hermenéutica del sujeto, Curso en el Collège de France (1981-1982)*. Madrid: Ediciones Akal.

Foucault, M. (2007a). *Historia de la sexualidad*. México: Siglo XXI.

Foucault, M. (2007b). *Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France (1978-1979)*. México: Fondo de Cultura Económica.

Frey, B. A. (2009). Los Desaparecidos: The Latin American Experience as a Narrative Framework for the International Norm against Enforced Disappearances. *HIOL: Hispanic Issues On Line*, (5), 52-72.

Gaceta del Senado. (2010, octubre). LXI/2PPO-168/27375. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=27375

Gaïti, B. et Israël, L. (2003). Sur l'engagement du droit dans la construction des causes. *Politix*, *16*(62), 17-30. doi : 10.3406/polix.2003.1274

Galán Castro, E. (2017, diciembre). Espiritualidad, identidad y acción colectiva en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. *El Cotidiano*, (26), 19-31.

Galaviz Armenta, T. (2012, diciembre). Províctima... ¿una paradoja? Análisis sistémico de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas. *Revista mexicana de sociología*, *74*(4), 561-585.

Galeano, E. (1967). *Guatemala país ocupado*. México: Editorial Fundamentos.

Galeano, E. (2011, 23 de mayo). Eduardo Galeano: ¿Para qué sirve la Utopía? Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GaRpIBj5xho

Galindo López, C., Gómez, M., Zepeda Gil, R., Cereceda, C. y Roberto, N. (2017, 10 de febrero). Seguridad interior: elementos para el debate. Disponible en: bibliodigitalibd.senado.gob.mx http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3344

Garay Salamanca, J. L. (dir.). (2008). *"La reconfiguración cooptada del Estado: más allá de la concepción tradicional de captura económica del Estado"*. Bogotá: Fundación Método /Transparencia por Colombia / Fundación Avina. 8 vol.

García, A. (2016, 5 de septiembre). Abrirán fosas comunes en Tamaulipas en busca de desaparecidos. En *La Silla Rota*. Disponible en:

https://lasillarota.com/estados/abriran-fosas-comunes-en-tamaulipas-en-busca-de-desaparecidos----------/123797

García, D. A. (2016, 22 de dicembre). Hermano de normalista, con « Los Rojos ». *El Universal*, Ciudad de México, sección Nación. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/12/22/hermano-de-normalista-con-los-rojos

García, D. A. (2017, 1 de marzo). Cae banda en Colombia ligada a cárteles de Sinaloa y Jalisco. *El Universal.mx* (México). Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/03/1/cae-banda-en-colombia-ligada-carteles-de-sinaloa-y-jalisco

García, J. (2018, 24 de febrero). Los escuadrones de la muerte en Veracruz. *El País*, Ciudad de México, sección México. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2018/02/24/mexico/1519432756_158531.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#comentarios

García, L. A. (2017, 13 de octubre). Los medios de comunicación y su relación con los movimientos sociales por la paz en México (2011-2013). *index.comunicación*, 7(3), 95-119.

García Rodríguez y Keller, O. (2017, 20 de noviembre). Dimensionando el problema de las fosas clandestinas en México. *Animal Político*, Ciudad de México, sección El Plumaje. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2017/11/20/dimensionando-problema-fosas-clandestinas-mexico/

García Selgas, F. J. (1994). El cuerpo como base del sentido de la acción social. *Reis: Revista española de investigaciones sociológicas*, (68), 41-84.

Garduño, S. (2018, 2 de enero). Destaca México... en desapariciones. *Reforma Diario*, Ciudad de México, sección Nacional. Disponible en: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1290742&md5=e1beb3ba2b4e3a1a2b6bc7468265cee5&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

Garibain, S. (2013). Buscar a los muertos entre los vivos: dar cuerpo a los desaparecidos de la dictadura argentina por el Derecho. En *Cadáveres*

impensables, cadáveres impensados (p. 29-40). Buenos Aires: Miño y Dávila editores.

Gatti, G. (2006, diciembre). Las narrativas del detenido-desaparecido (o de los problemas de la representación ante las catástrofes sociales). *CONfines*, *2*(4), 27-38.

Gatti, G. (2008). *El detenido desaparecido. Narrativas posibles para una catástrofe de la identidad.* Buenos Aires: Trilce.

Gatti, G. (2011). El lenguaje de las víctimas: silencios (ruidosos) y parodias (serias) para hablar (sin hacerlo) de la desaparición forzada de personas. *unih Universitas Humanística*, (72), 89-109.

Gatti, G. (2015 mai). *Surviving Forced Disappearance: Identity and Meaning (Gabriel Gatti) - YouTube*. University of Minessota: The Center for Holocaust and Genocide Studies (CHGS). Available in: https://www.youtube.com/watch?v=hfCm81k9nNA

Gatti, G. (2016). ¿Puede hablar la víctima?: Sobre dos textos para escapar de los encierros humanitarismo. *Nuevo Texto Crítico*, *29*(52), 181-190. doi : 10.1353/ntc.2016.0014

Gatti, G. (dir.). (2017). *Desapariciones. Usos locales, circulaciones globales*. Bogotá: Siglo del hombre editores / Universidad de los Andes.

Gatti, G. y Martínez, M. (2017 janvier). El ciudadano-víctima. Notas para iniciar un debate. *Revista de Estudios Sociales*, (59), 8-13. doi : 10.7440/res59.2017.01

Gibler, J. (2016, 8 de abril). *Una historia oral de la infamia: Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa*. Ciudad de México: Penguin Random House Grupo Editorial México.

GIEI. (2015). *Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa.* [OEA]. (I) (p. 525). Ciudad de México: Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B1ChdondilaHNzFHaEs3azQ4Tm8/view

GIEI. (2016, 22 de abril). *Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas*. Ciudad de México: Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/giei-informeayotzinapa2.pdf

Gil Olmos, J. (2011, 25 de julio). Los nuevos « esclavos » de los cárteles. *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/277056/los-nuevos-esclavos-de-los-carteles-2

Gilligan, C. (1982). *In a Different Voice*. Cambridge: Harvard University Press.

Gilligan, C. (2000). *La ética del cuidado*. Barcelona: Fundació Víctor Grífols i Lucas.

Girardo, C., Mochi Alemán, P. y Girardo, S. (2012). *Las organizaciones de la sociedad civil en México y la cooperación internacional para el desarrollo: enfoques y estrategias*. México: Colegio mexiquense.

Gómez Durán, T. (s. d.). Desaparecidos en Tijuana. *El Universal*, Ciudad de México, sección Archivo. Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/graficosanimados10/EU_fronteras/segunda3.html

Gómez, E. (2018, 14 de febrero). Policías de Veracruz violaban a mujeres de desaparecidos. *La Jornada*, Ciudad de México, sección Estados. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/02/14/policias-de-veracruz-violaban-a-mujeres-de-desaparecidos-824.html

Gómez, M. (2015, 17 de noviembre). Ejido Morelia: ¿justicia a plazos? *La Jornada*, México, sección Opinión. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/11/17/opinion/018a1pol

González, H. R. (2017, 1 de junio). *Cierran fosas de Jojutla, aún tenían cuerpos dentro*. Disponible en: https://lasillarota.com/estados/cierran-fosas-de-jojutla-aun-tenian-cuerpos-dentro/154341

González Hernández, M. F. (2017, agosto). El cuerpo en la protesta social por Ayotzinapa. Prácticas artísticas y activismo en la toma política y cultural del Palacio de Bellas Artes. *Andamios*, *14*(34), 115-135.

González Islas, M. (2015). *Geografía del dolor*. Sacbé Producciones / Conaculta / Fonca.

González Rodríguez, S. (2002, 31 de diciembre). Las muertas de Juárez. *Letras Libres*. Disponible en: http://www.letraslibres.com/mexico-espana/las-muertas-juarez

González, V. H. M. (2005). *Fisiones y fusiones, divorcios y reconciliaciones: La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 1989-2004*. México: Flacso México, Plaza y Valdés, FCPS-UNAM, FCA-UNAM.

González Villarreal, R. (2012). *Historia de la desaparición. Nacimiento de una tecnología represiva*. México: Terracota.

Gordillo García, J. J. (2015, septiembre). *Ley General de Víctimas, un resultado político del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad*. Ciudad de México: El Colegio de México. Disponible en: https://www.academia.edu/16150786/Ley_General_de_V%C3%ADctimas_un_resultado_pol%C3%ADtico_del_Movimiento_por_la_Paz_con_Justicia_y_Dignidad

Granados, O. (2016, 2 de agosto). TLCAN: los resultados, las lecciones y los pendientes. *Nexos*. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=29109

Grandin, G. (2011, 30 de julio). *The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War, Updated Edition*. (2 edition). Chicago ; London : University Of Chicago Press.

Gravante, T. (2018, agosto). Desaparición forzada y trauma cultural en México: el movimiento de Ayotzinapa. *Convergencia*, *25*(77), 13-28. doi : 10.29101/crcs.v25i77.9728

Grecko, C. (2015). *Mirar Morir. El ejército en la noche de Iguala*. [Documental]. Cuadernos de Doble Raya / Ojos de perro.

Grecko, T. (2016). *Ayotzinapa, mentira histórica. Estado de impunidad, impunidad de Estado*. México: Ediciones Proceso. Disponible en: https://issuu.com/aristeguinoticias/docs/ilovepdf_merged_7a6f9b8c0daafb

Grillo, I. (2012). *El narco. La montée sanglante des cartels mexicains*. Paris : Libela.

GTDFI. (2017, 28 July). *Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances on enforced disappearances in the context of migration*. (A/HRC/36/39/Add.2) (p. 21). Ginebra: UN Human Rights Council. Available in: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/226/72/PDF/G1722672.pdf?OpenElement

GTDFI. (2018, 30 julio). *Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias*. (A /HRC/39/46) (p. 49). Ginebra: UN Human Rights Council. Disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/226/72/PDF/G1722672.pdf?OpenElement

Guest, I. (1990). *Behind the Disappearances: Argentina's Dirty War Against Human Rights and the United Nations*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

Guillaudat, P. y Mouterde, P. (1998). *Los movimientos sociales en Chile, 1973-1993*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.

Guillén, A. (2016, 1 de febrero). Desaparecidos: la memoria de la búsqueda más dolorosa. En *ITESO | MAGIS*. Disponible en: https://magis.iteso.mx/content/desaparecidos-la-memoria-de-la-b%C3%BAsqueda-m%C3%A1s-dolorosa

Guillén Romo, H. (1984). *Orígenes de la crisis en México: inflación y endeudamiento externo (1940-1982)*. México: Ediciones Era.

Gutiérrez Parada, Ó. (2012, abril). *Qué caracterizamos bajo la locución "leyes generales": tratados internacionales de derechos humanos y estructura jerárquica del sistema jurídico mexicano*. Congreso REDIPAL. México. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-V-19-12.pdf

Guzmán Cruz, A. y Pimentel Ramírez, J. (2011). *Los Mártires de la Democracia. La larga lucha de una familia de la Comunidad Indígena de Tarejero por la verdad y la justicia*. México: (n. é.).

Guzmán, J. M. I. (2016, 25 de noviembre). Suman más de 70 mil migrantes desaparecidos en México: activistas. *El Universal*, Ciudad de México, sección

Estados. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/11/25/suman-mas-de-70-mil-migrantes-desaparecidos-en-mexico-activistas

Haraway, D. J. (2000, junio). *Ciencia, cyborgs y mujeres: La Reinvencion De La Naturaleza*. Madrid: Ediciones Catedra S.A.

Hassenteufel, P. (2011). *Sociologie politique de l'action publique*. Paris : Armand Colin.

Hasta Encontrarlos. (2016). *10 años de Desaparición Forzada por Motivos Políticos en México. Informe 2006-2016*. (p. 40). Ciudad de México: Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos.

Henríquez, E. (2015, 4 de enero). Discute CNI plan de apoyo a padres de Ayotzinapa. *La Jornada*, Ciudad de México, sección Política. Disponible en: http://www.jornada.com.mx/2015/01/04/politica/008n3pol

Hern, A. (2015, 6 de julio). Hacking Team hacked: firm sold spying tools to repressive regimes, documents claim. *The Guardian* (Londres). Disponible en: https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/06/hacking-team-hacked-firm-sold-spying-tools-to-repressive-regimes-documents-claim

Hernández, A. (2012, 15 de octubre). La historia secreta de "El Lazca". *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/322635/la-historia-secreta-de-el-lazca

Hernández, A. (2012, 1 de diciembre*b*). *México en Llamas: el legado de Calderón*. Ciudad de México: Penguin Random House Grupo Editorial México.

Hernández, A. (2014, 31 de mayo). El caso Wallace, más turbio que nunca. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/373616/el-caso-wallace-mas-turbio-que-nunca

Hernández, A. (2016, 28 de noviembre). *La verdadera noche de Iguala: La historia que el gobierno trató de ocultar*. Ciudad de México: Penguin Random House Grupo Editorial México.

Hernández Borbolla, M. (2018, 14 de marzo). Presumen ejecución extrajudicial de dos adolescentes en Veracruz a partir de una fotografía. *Huffingtonpost* (Ciudad de México). Disponible en: https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/03/14/fotografia-muestra-que-dos-adolescentes-pudieron-haber-sido-ejecutadas-por-policias-en-rio-blanco-veracruz_a_23386017/

Hernández Castillo, A. R. (2017, 29 de mayo). Hasta las madres... *La Jornada*, México, sección Opinión. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2017/05/29/opinion/018a1pol

Hernández Duarte, E. (2015, 26 de mayo). *Tierra de padrotes: Tenancingo, Tlaxcala, un velo de impunidad*. México: Tusquets Editores.

Hernández López, J. (2012, 23 de abril). Astillero. *La Jornada*, Ciudad de México, sección Opinión. Disponible en: http://www.jornada.com.mx/2012/04/23/opinion/008o1pol

Hernández Navarro, L. (1998). *Acuerdos de San Andrés*. México: Era.

Hernández Navarro, L. (2015, 6 de enero). El silencio de Lady Iguala. *La Jornada*, Ciudad de México, sección Opinión. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/01/06/opinion/017a2pol

Hernández Rodríguez, R. (1991). La reforma interna y los conflictos en el PRI. *Foro Internacional*, *32*(2 (126)), 222-249.

Hillary Clinton defiende su rol en el golpe de Estado en Honduras al ser cuestionada por Juan González. (2016, 13 de abril). En *Democracy Now! en español*. Disponible en: http://www.democracynow.org/es/2016/4/13/hear_hillary_clinton_defend_her_role

Hincapié Jiménez, S. y López Pacheco, J. A. (2016). Ciclos de movilización y crisis de derechos humanos. La acción colectiva de las ONG nacionales y los derechos humanos en México. *Revista de estudios sociales*, (56), 26-38.

Huffingtonpost. (2018, 30 de enero*a*). Villas de Salvárcar: 8 años de dolor Sigue la deuda pendiente con las familias de las víctimas. *Huffingtonpost* (Ciudad de México). Disponible en:

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/01/30/villas-de-salvarcar-8-anos-del-dolor_a_23348412/

Huffingtonpost. (2018, 26 de mayo*b*). A 5 años del asesinato de 13 jóvenes en el bar Heaven, madres siguen sin respuestas. *Huffingtonpost*, Ciudad de México, sección México. Disponible en: https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/05/26/a-5-anos-del-asesinato-de-13-jovenes-en-el-bar-heaven-madres-siguen-sin-respuestas_a_23444332/

Huhle, R. (2015). Noche y niebla. Mito y significado. En *Desapariciones forzadas de niños en Europa y Latinoamérica. Del convenio de la ONU a las búsquedas a través del ADN.* (p. 250-277). Barcelona: Universitat de Barcelona.

Irazuzta, I. (2017). Aparecer desaparecidos en el norte de México: las identidades de la búsqueda. En *Desapariciones. Usos locales, circulaciones globales* (p. 141-162). Bogotá: Siglo del hombre editores / Universidad de los Andes.

Irigaray, J. I. (2011, 16 de diciembre). El horror de los « vuelos de la muerte » de la dictadura argentina. Madrid, sección Mundo. Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/15/internacional/1323978934.html

Isunza Vera, E. (2017). Participación ciudadana y controles democráticos no electorales en México. La oferta participativa federal en el contexto del régimen de rendición de cuentas. En *Las razones del fracaso democrático. Rupturas, capturas y resistencias* (p. 94-120). Ciudad de México: CIESAS.

Jansen, M. et Petrov, N. V. (2002). *Stalin's loyal executioner: people's commissar Nikolai Ezhov, 1895-1940.* Stanford: Hoover Institution Press.

Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.A.

Jelin, E. (2011). Subjetividad y esfera pública: El género y los sentidos de familia en las memorias de la represión. *Política y Sociedad*, *48*(3), 555-569. doi: 10.5209/rev_POSO.2011.v48.n3.36420

Jiménez, B. (2015, 12 de julio). Desertan del Ejército soldados de élite. *Reforma*, México, sección Nacional. Disponible en: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=589250&

md5=bd84229af1ceba4fc30607a6af3ffb92&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=9bd71f85dcbabfa0a47edb28d72f27de

Jiménez, N. y Castillo, G. (2018, 8 de septiembre). En el país, 1,307 fosas clandestinas y 3,926 exhumados en 11 años: CNDH. *La Jornada*, Ciudad de México, sección Política. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2018/09/08/politica/003n1pol

JR. (2015, enero). *Why Ayotzinapa? | Inside Out Project*. Disponible en: http://www.insideoutproject.net/en/group-actions/france-paris-38

Kater, M. H. & Riethmüller, A. (2003). *Music and Nazism: art under tyranny, 1933-1945*.. Laaber: Laaber-Verlag.

Keck, M. y Sikkink, K. (2000). *Activistas sin fronteras*. México: Siglo XXI.

Krauss, C. (1998). Challenging power: Toxic waste protests and the politicization of white, working-class women. *Community activism and feminist politics: Organizing across race, class and gender*, 129-150.

La Crónica de hoy. (2005, 19 de noviembre). En Guerrero, la mina de oro más grande de Latinoamérica. *La Crónica de hoy* (Acapulco, Guerrero). Disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2005/212974.html

La Policiaca. (2011, 11 de marzo). El narco levantó a 10 alumnos de medicina. *La Policiaca. La nota roja de México* (Monterrey). Disponible en: https://www.lapoliciaca.com/nota-roja/el-narco-levanto-a-diez-alumnos-de-medicina/

La Silla Rota. (2018, 27 de febrero). Revelan cómo Duarte desaparecía personas con « vuelos de la muerte ». En *La Silla Rota*. Disponible en: https://lasillarota.com/javier-duarte-veracruz-desaparecidos-helicopteros/207831

Laborier, P. & Trom, D. (2003). Introduction. Dans *Historicités de l'action publique* (p. 5-22). Paris : Presses universitaires de France.

Laertes. (2014, 2 de abril). Los animales salvajes serán entregados a Semarnat: Bermúdez. En *Sociedad 3.0*. Disponible en:

http://sociedadtrespuntocero.com/2014/04/los-animales-salvajes-seran-entregados-semarnat-bermudez/

Lagarde, M. (2003). Mujeres cuidadoras: entre la obligación y la satisfacción. *SARE (2003). Cuidar cuesta: costes y beneficios del cuidado. EMAKUNDE. Victoria.*

Lakhani, N. (2016, 8 décembre). Impunity has consequences': the women lost to Mexico's drug war. *The Guardian*, section World-Americas. Avalaible in: https://www.theguardian.com/world/2016/dec/08/mexico-drug-war-cartels-women-killed

Lang, M. (2003). ¿Todo el poder? Políticas públicas, violencia de género y feminismo en México. *Iberoamericana, III*(12), 69-90.

Lascoumes, P. et Le Galès, P. (2012). *Sociologie de l'action publique* (2ème éd.). Paris : Armand Colin.

Lastiri, D. y Roldán, M. (2018, 5 de julio). Frenan comisión de la verdad en caso Ayotzinapa. Ciudad de México, sección Nación. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/frenan-comision-de-la-verdad-en-caso-ayotzinapa

Lavaud, J.-P. (2003). *La dictadura minada: La huelga de hambre de las mujeres mineras. Bolivia 1977-1978.* Lima: Institut français d'études andines.

Le Clerck Ortega, J. A. y Rodríguez Sánchez Lara, G. (2018 mars). *Índice Global de Impunidad 2018 (IGI-MEX). La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-MEX 2018.* Puebla: Universidad de las Américas Puebla. Disponible en: https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf

Le Goff, J. (2003). *Diccionario razonado del Occidente medieval.* Madrid: Ediciones Akal.

Leal Buitrago, F. (2003). La doctrina de seguridad nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur. *Revista de Estudios Sociales*, (15).

Lefebvre, H. (1983). *La presencia y la ausencia. Contribución a la teoría de las representaciones*. México: Fondo de Cultura Económica.

Léonard, E. y Velázquez, E. (dir.). (2000). *El Sotavento veracruzano: procesos sociales y dinámicas territoriales*. México: CIESAS.

Ley 932. (12 de marzo de 2012). Disponible en: http://i.administracion2014-2015.guerrero.gob.mx/uploads/2012/04/L932CCVIVDHGSASSEG.pdf

Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas. DOF 17-11-2017. (16 de enero del 2018). Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf

Liebler, C. M. (2010). Me(di)a Culpa?: The "Missing White Woman Syndrome" and Media Self-Critique. *Communication, Culture & Critique*, *3*(4), 549-565. doi : 10.1111/j.1753-9137.2010.01085.x

Limas Hernández, A. (2018). *La respuesta frente a la desaparición: Una mirada al trabajo de nueve organizaciones en diez estados de la República Mexicana*. Monterrey: CADHAC.

Lira, E. (2010). Trauma, duelo, reparación y memoria. *Revista de Estudios Sociales/Journal of Social Studies*, (36), 14-28.

Longoni, A. (2010). Fotos y siluetas: dos estrategias en la representación de los desaparecidos. En *Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983-2008)* (p. 43-65). Buenos Aires : Biblos.

Longoni, A. y Bruzzone, G. (2008). *El Siluetazo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

López Austin, A. (2009, 31 de agosto). El dios en el cuerpo. *Dimensión Antropológica*, *46*(0), 7-45.

López de la Torre, C. F. (2013). Miguel Nazar Haro y la guerra sucia en México. *Grafía*, *10*(1), 56-72.

López, M. A. (2017, 31 de enero). Villas de Salvárcar: así se criminalizó a las víctimas de la guerra contra el narco. *La Silla Rota* (Ciudad de México). Disponible en: https://lasillarota.com/especialeslsr/villas-de-salvarcar-asi-se-criminalizo-a-las-victimas-de-la-guerra-contra-el-narco/137492

López Merino, M. (2015). El «desaparecido» como sujeto político: Una lectura desde Arendt. *Franciscanum*, *57*(164), 67-95.

López Pacheco, J. A. (2015). El campo de las ONG de derechos humanos en México: recursos y agendas. *El Cotidiano*, (194), 97-106.

López y Rivas, G. (2012, 20 juillet). La farsa detrás de la guerra contra el narco. *La Jornada* (México). Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/20/opinion/021a1pol

LXII Legislatura. (9 de enero de 2013). Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/018_DOF_09ene13.pdf

Mahlbe, K. (2017). Figuraciones fantásticas de la desaparición forzada. En *Desapariciones. Usos locales, circulaciones globales.* (p. 75-97). Bogotá : Siglo del hombre editores / Universidad de los Andes.

Maier, E. (2001). *Las madres de los desaparecidos: un nuevo mito materno en América Latina?*. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Maldonado Aranda, S. (2003). Poder regional en el Estado de México: Entre "grandes hombres" y "pequeños caciques". *Relaciones. Estudios de historia y sociedad*, *XXIV*(96). Disponible en: www.redalyc.org http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=13709604

Maldonado Aranda, S. (2012, marzo). Drogas, violencia y militarización en el México rural: El caso de Michoacán. *Revista mexicana de sociología*, *74*(1), 5-39.

Maldonado, T. (2015, 15 de octubre). *Ayotzinapa. El rostro de los desaparecidos*. Ciudad de México: Grupo Planeta Spain.

Maldonado, T. (2017, 11 de abril). Las mujeres de Ayotzinapa (II). En *Emeequis*. Disponible en: //www.m-x.com.mx/2017-04-11/las-mujeres-de-ayotzinapa-ii-por-tryno-maldonado/

Malin, A. (1994). Mother Who Won't Disappear. *Human Rights Quarterly*, *16*(1), 187-213. doi : 10.2307/762416

Manjón-Cabeza Olmeda, A. (2012). 2012: Las posibilidades legales de la memoria histórica. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, *14*(12), 12:1-12:42.

Marichal, C. (2008). The Finances of Hegemony in Latin America. Debt Negotiations and the Role of the U. S. Government, 1945-2005. In *Empire and Dissent. The United States and Latin America* (p. 90-113). London : Dake University Press.

Mariottini, L. (2013). La expresión de la agentividad en los juicios orales y sus consecuencias interaccionales e institucionales. *Cuadernos AISPI: Estudios de lenguas y literaturas hispánicas*, (2), 99-113.

Martínez, J. H. (2010). *Operación Valkiria: 20 de julio de 1944. Objetivo:eliminar a Hitler. Todos los detalles del complot que pudo cambiar la historia del siglo XX.* Madrid : Ediciones Nowtilus S.L.

Martínez, P. (2012, 30 de octubre*a*). Esclavos del Narco: Los niños del hampa. *Animal Político* (Ciudad de México). Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2012/10/esclavos-del-narco-los-ninos-del-hampa/

Martínez, P. (2012, 30 de octubre*b*). Esclavos del narco: Profesionistas forzados. *Animal Político*, Ciudad de México, sección Nacional. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2012/10/esclavos-del-narco-los-esclavos-especializados/

Martínez Pineda, M. C. (2006). Disquisiciones sobre el sujeto político. Pistas para pensar su reconfiguración. *Revista Colombiana de Educación*, (50), 120-145.

Martínez Rizo, F. (2001). Las políticas educativas mexicanas antes y después de 2001. *Revista Iberoamericana de educación*, (27), 35-56.

Martos, Á. y Jaloma Cruz, E. (2017). Desenterrando el dolor propio: Las Brigadas Nacionales de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México. En *Desde y Frente al Estado: Pensar, atender y resistir la desaparición de personas en México* (p. 75-127). Ciudad de México: Centro de Estudios Constitucionales SCJN.

Mastrogiovanni, F. (2016). *Ni vivos ni muertos* (2da. éd.). México: Grijalbo.

Mayorga, P. (2015, 15 de febrero). A la CIDH, caso de feminicidio de hija de Norma Andrade. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/396050/a-la-cidh-caso-de-feminicidio-de-hija-de-norma-andrade

Mbembe, A. (1999). *Necropolítica*. Madrid: Melusina.

McAdam, D., McCarthy, J. D. & Zald, M. N. (1996). *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. [Comparative Perspectives on Social Movements]. Cambridge: Cambridge University Press.

McAdam, D., Tarrow, S. & Tilly, C. (2001, 10 septembre). *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.

McCarthy, J. D. & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, *82*(6), 1212-1241.

Mejía, M. y Pérez, S. (2018, 12 de julio). Realizó UA de C prácticas con 47 cadáveres sin identificar. *Capital Media*, Saltillo, Coahuila, section Capital. Disponible en: http://www.capitalcoahuila.com.mx/local/realizo-ua-de-c-practicas-con-47-cadaveres-sin-identificar

Mejía Rivera, J. A., Ramos, E. A., (dir.). (2016). *Seguridad ciudadana y políticas públicas frente a las violencias: compartiendo experiencias y visiones*. Tegucigalpa: Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Meltis, M. y Merino, J. (2017, 23 mars). Usar datos para desenterrar tragedias. *Animal Político*, Ciudad de México, sección Columna invitada. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2017/03/23/usar-datos-desenterrar-tragedias/

Méndez, A. (2014, 31 de diciembre). Guerreros Unidos tiene nexos con militares en retiro, dice el capo Sidronio Casarrubias. *La Jornada*, Ciudad de México, sección Política. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/12/31/politica/009n1pol

Méndez, E. y Muñoz, A. (2018, 1 de agosto). Confirma Encinas creación de Comisión de la Verdad para caso Iguala. *La Jornada* (Ciudad de México). Disponible en: http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/01/confirma-encinas-creacion-de-comision-de-la-verdad-para-caso-iguala-8524.html

Méndez, J. (2014, 29 de diciembre). *Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez*. (A /HRC/ 28/68 /Add. 3) (p. 21). Nueva York: Consejo de Derechos Humanos ONU. Disponible en: http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9930.pdf?view=1

Mendoza García, J. (2015). Memoria de las desapariciones durante la Guerra Sucia en México. *Athenea digital*, *15*(3), 85-108.

Merton, R. K. (1965). *Éléments de théorie et de méthode sociologique*. Paris : Plon.

Meyer, L. (2005). *Liberalismo autoritario. Las contradicciones del sistema político mexicano*. México: Océano.

Meyer, L. (2009, 20 de agosto). Petroestado, narcoestado y Estado fallido. *El Siglo de Durango*, Durango, sección Agenda ciudadana, p. 2.

Meyer, L. (2013, 30 de agosto). *Nuestra tragedia persistente: La democracia autoritaria en México*. México: Penguin Random House Grupo Editorial México.

Meyer, L. y Reyna, J. L. (1989). *Los Sistemas políticos en América Latina*. México: Siglo XXI.

Meza, A. y Gallo, B. G. (2017, 8 de diciembre). Matar al médico: Viviendo en la mira del narco. *Noticias Tele Mundo*. Disponible en: http://www.telemundo.com/noticias/2017/12/08/matar-al-medico-viviendo-en-la-mira-del-narco

Michel, V. H. (2012, 5 de noviembre). A la fosa común, 24 mil muertos en este sexenio. En *Nuestra aparente rendición*. Disponible en: http://nuestraaparenterendicion.com/index.php/red-de-periodistas-de-a-pie/item/1501-a-la-fosa-com%C3%BAn-24-mil-muertos-en-este-sexenio

Michel, V. H. (2013, 3 de noviembre). A la fosa común, seis cuerpos al día desde 2011. *Milenio Diario*, Ciudad de México, sección Política. Disponible en: http://www.milenio.com/politica/fosa-comun-cuerpos-dia_0_183582069.html

Milenio. (2013, 19 de diciembre). El zar antidrogas que protegió a un capo. *Milenio*, México, sección Policía. Disponible en: http://www.milenio.com/policia/zar-antidrogas-protegio-capo_0_211179349.html

Milenio. (2014, 8 de abril). El caso Casitas del Sur. México, sección Policía. Disponible en: http://www.milenio.com/policia/caso_Casitas_del_Sur-Casitas_del_Sur_0_277172831.html

Milenio. (2016, 20 de enero*a*). Policías entregaron jóvenes de Tierra Blanca a crimen organizado: testigo. *Milenio* (México). Disponible en: http://www.milenio.com/policia/jovenes_desaparecidos_veracruz-jovenes_tierra_blanca-fiscal_veracruz_0_668333545.html

Milenio. (2016, 24 de mayo*b*). Fue negligente llevar cuerpo identificado a fosa: fiscal de Morelos. *Milenio*, Ciudad de México, sección Policía. Disponible en: http://www.milenio.com/policia/negligente-cuerpo-identificado-fosa-fiscal-morelos

Milenio. (2017, 22 de agosto). Desapariciones de mujeres aumentan 168% en el Edomex. *Milenio Diario*, Ciudad de México, sección Estados. Disponible en: http://www.milenio.com/estadodemexico/estado_de_mexico-feminicidios-desapariciones-mujeres-ninas-i-dh-eas-milenio_0_1016298643.html

Minera, A. L. y Solalinde, A. (2017, 11 de diciembre). *Solalinde. Los migrantes del sur*. México: Los Libros del Lince.

Modonesi, M. (2011, agosto). México: el crepúsculo del PRD. *Nueva Sociedad*, (234), 112-128.

Molina Theissen, A. L. (1998). La desaparición forzada de personas en América Latina. *Estudios Básicos de Derechos Humanos*, *VII*, 64-78.

Mónaco Felipe, P. (2017). *Ayotzinapa: Horas eternas*. Ciudad de México : Eduvim.

Montalvo, T. L. (2011, 10 de enero). Caricaturistas mexicanos promueven la campaña « ¡Basta de sangre! » *Expansión* (México). Disponible en: https://expansion.mx/nacional/2011/01/10/caricaturistas-mexicanos-promueven-la-campana-basta-de-sangre

Montalvo, T. L. (2014, 22 de febrero). México, sin datos oficiales sobre migrantes desaparecidos. *Animal Político* (Ciudad de México). Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2014/02/mexico-sin-datos-oficiales-sobre-migrantes-desaparecidos/

Montemayor, C. (2010). *La violencia de Estado en México: antes y después de 1968*. México : Random House Mondadori.

Morales, A. y Pigeonutt, V. (2014, 2 de noviembre). Sobrino de Cabañas, entre desaparecidos de Ayotzinapa. *El Universal*, Ciudad de México, sección Nación. Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/sobrino-de-cabanias-entre-desaparecidos-de-ayotzinapa-1050951.html

Morales Hudon, A. (2016, 28 mai). *Alianzas y tensiones en la movilización social entorno a Ayotzinapa*. LASA 2016. Ponencia, New York.

Morales, N. y Hernández, A. (2018, 14 de febrero). Amor romántico: una forma de enganche en la trata para la explotación sexual de mujeres. Disponible en: http://www.cerotrata.org.mx/uncategorized/amor-trata-explotacion-sexual-mujeres/

Morales, P. (2017, 6 de septiembre). 106 ejecuciones extrajudiciales y 81 desaparecidos, el saldo del gobierno de EPN sobre defensores de derechos humanos. *Huffingtonpost*, México, sección México. Disponible en: http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/09/06/106-ejecuciones-extrajudiciales-y-81-desaparecidos-asi-el-saldo-del-gobierno-de-epn-sobre-defensores-de-derechos-humanos_a_23198181/

Morales, V. (2015, junio). La subversión del grito: Repensando la emergencia de las Madres de Plaza de Mayo. *Mora (Buenos Aires)*, *21*(1), 00-00.

Mosso, R. (2017, 30 de abril). Sentencian a 8 militares por nexos con Los Zetas. *Milenio*, México, sección Política. Disponible en: http://www.milenio.com/politica/militares-juzgados-nexos-los_zetas-26_anos-prision-narcotrafico-corrupcion-milenio_0_947905482.html

Mouffe, C. (2011). *En torno a lo político*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Disponible en: https://rfdvcatedra.files.wordpress.com/2014/08/mouffe-chantal-en-torno-a-lo-politico.pdf

Muedano, M. (2017, 3 de marzo). Droga en México ya no sólo está de paso. *Excélsior*, México, sección Seguridad. Dis´ponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/03/1149843

Muller, P. (2009). *Les politiques publiques*. Paris : Presses Universitaires de France.

Muller, P. (2010). Référentiel. Dans *Dictionnaire des politiques publiques. , 3e éd.* (p. 555-562). Paris : Presses de Sciences Po. 3e éd. vol.

Muñoz Martínez, H. (2014). *Derechos económicos y desapariciones en México. Declaración de ausencia y mejores prácticas internacionales*. (p. 39). FUUNFEC / Fondo de Investigación Universitario de la Universidad de New Brunswick, campus Saint John.

Muñoz Martínez, H. (2015 mai). The politics of scale, place, and mobility in the Mexican peace movement, 2006–2012. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes*, *40*(2), 157-175. doi : 10.1080/08263663.2015.1044717

Muñoz Ríos, P. (2002, 13 de agosto). Identifican los restos de Lucio Cabañas. *La Jornada* (México). Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2002/08/13/011n1pol.php?printver=0

MVS Noticias. (2017, 3 de marzo). Se reportan más de 30 mil personas desaparecidas en México: informe. *MVS Noticias*, Ciudad de México, sección Nacionales. Disponible en: http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/se-reportan-mas-de-30-mil-personas-desaparecidas-en-mexico-informe-759

Nájar, A. (2014, 22 de agosto). México: el hombre que disolvió en ácido a 300 personas. *BBC Mundo*, Ciudad de México, sección Mundo. Disponible en:

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140821_mexico_desaparecidos_pozolero_an

Nassif Aziz, A. e Isunza Vera, E. (2017). *Las razones del fracaso democrático. Rupturas, capturas y resistencias*. Ciudad de México: Ciesas.

Négrier, E. (2005). *La question métropolitaine. Les politiques à l'épreuve du changement d'échelle territoriale*. Grenoble : Presses Universitaries du Grenoble.

Nixon, R. M. (1969, 3 de noviembre). *« Silent Majority » Nixon Speech, Nov 3 1969*. Washington. Disponible en: https://www.c-span.org/video/?153819-1/silent-majority-speech

Nosiglia, J. E. (1985). *Botín de guerra*. Buenos Aires: Cooperativa Tierra Fértil.

Observatorio Nacional Ciudadano. (2017). Desapariciones forzadas. El registro estadístico de la desaparición: ¿Delito o circunstancia? Disponible en: http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2017/02/fasciculo-desapariciones_digital.pdf

Observatorio sobre desaparición e impunidad. (2017). *Observatorio sobre desaparición e impunidad. Informe sobre desapariciones en el estado de Nuevo León con Datos de CADHAC*. (p. 13). Ciudad de México : Flacso México / Human Rights Program de la Univesidad de Minnesota/ Universidad de Oxford. Disponible en: http://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/170616_resumen_informe_nl_vf.pdf

Observatorio sobre desaparición e impunidad. (2018). *Observatorio sobre desaparición e impunidad. Informe sobre desapariciones en el estado de Coahuila con Datos del Centro Diocésano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios*. Ciudad de México : Flacso México / Human Rights Program de la Univesidad de Minnesota/ Universidad de Oxford.

OEA (1994) *Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas*. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-60.html

Oikión Solano, V. (2007). El Estado mexicano frente a los levantamientos armados en Guerrero. El caso del Plan Telaraña. *Tzintzun. Revista de Estudios Históricos*, (45). Disponible en: www.redalyc.org http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=89804504

Olave Arias, G. (2013, 8 de mayo). El eterno retorno de Marquetalia: sobre el mito fundacional de las Farc-EP. *Revista Folios*, *0*(37), 149-166.

Olivares Alonso, E. (2009, 11 de diciembre). La Jornada: Violó el Estado mexicano derechos de 3 asesinadas en Juárez: CIDH. *La Jornada*, Ciudad de México, sección Política. Disponible en: http://www.jornada.com.mx/2009/12/11/politica/003n1pol

Olmos, J. G. (2014, 18 de octubre). Las normales le estorban al modelo neoliberal. *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/385188/las-normales-le-estorban-al-modelo-neoliberal

ONU. (1993a). *De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador. Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador*. Nueva York.

ONU. (1992). *Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*. Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2022.pdf

ONU. (2004). *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos*. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf

ONUDC. (2017). *Informe Mundial sobre las drogas 2017. Conclusiones y consecuencias en materia de políticas*. Viena: UNODC. Disponible en: https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_Booklet1_Exsum_Spanish.pdf

ONU-DH. (2018, 15 de marzo). *Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa*. (p. 65). Ciudad de México: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MX/OHCHRMexicoReportMarch2018_SP.pdf

Open Society Foundations. (2016). *Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México*. New York: Open Society Foundation. Disponible en: https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/undeniable-atrocities-esp-20160602.pdf

Ordaz, D. (2016, 11 de julio). Demandan comisión independiente para investigar el caso Wallace. En *Aristegui Noticias*. [Noticiario]. Disponible en: https://aristeguinoticias.com/1107/mexico/demandan-comision-independiente-para-investigar-el-caso-wallace/

Padilla, T. (2009). Las normales rurales: historia y proyecto de nación. *El cotidiano, 24*(154), 85-93.

Pailler, J.-M. et Sablayrolles, R. (1994). Damnatio Memoriae : une vrai perpétuité. *Pallas*, (40), 11-55.

Panizo, L. (2011). Cuerpos desaparecidos. La ubicación ritual de la muerte desatendida. En *Etonografías de la muerte. Rituales, desapariciones, VIH/SIDA y resignificación de la vida* (p. 17-40). Buenos Aires : Clacso/Ciccus.

Pavón, L. (2018, 19 de febrero). Expolicía revela detalles de desapariciones forzadas en Veracruz. En *Televisa News*. Disponible en: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2018-02-19/expolicia-revela-detalles-desapariciones-forzadas-veracruz/

Pérez García, M. E. (2005). Las Organizaciones No Gubernamentales en Ciudad Juárez y su lucha contra la violencia de género. *Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 15*(28). Disponible en: http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=85915208

Pérez Muñoz, D. M. (2015, 21 de julio). Les ponían contra la pared y les daban un balazo. *El País*, Ciudad de México, sección Internacional. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/07/12/actualidad/1436670176_597272.html

Pérez Oseguera, M. de L. y Espíndola Pérez, A. (2015). *Mujeres desaparecidas en Puebla: informe 2005-2009*. Puebla: Universidad Iberoamericana Puebla.

Pérez-Sales, P. y Navarro, S. (2007). *Resistencias contra el olvido*. España: Gedisa.

Peschard, J. (2013, agosto). Transición democrática, conflictividad política y la herida de la desconfianza. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, *58*(218), 271-276.

Petrich, B. (2016, 19 de enero). Nestora Salgado: aún guardo pruebas sobre red de trata infantil. *La Jornada*, México, sección Política. Disponible en: http://semanal.jornada.com.mx/ultimas/2016/01/19/nestora-salgado-aun-guardo-pruebas-sobre-red-de-trata-infantil-8234.html

Pie de Página. (s. f.). Crímenes. Dans *Cadena de mando*. Disponible en: http://cadenademando.org/crimenes.html

Pieper Mooney, J. E. (2007, 1 May). Militant Motherhood Re-Visited: Women's Participation and Political Power in Argentina and Chile. *History Compass*, *5*(3), 975-994. doi : 10.1111/j.1478-0542.2007.00435.x

Pinson, G. et Pala, V. S. (2007, 23 octobre). Peut-on vraiment se passer de l'entretien en sociologie de l'action publique ? *Revue française de science politique*, *57*(5), 555-597.

Pitarch, P. (2000, 31 de diciembre). Almas y cuerpo en una tradición indígena tzeltal. *Archives de sciences sociales des religions*, (112), 31-48. doi : 10.4000/assr.20245

Pitarch, P. (2011, enero). Los dos cuerpos mayas: Esbozo de una antropología elemental indígena. *Estudios de cultura maya*, *37*, 149-178.

Plumas Atómicas. (2018, 1 de marzo). Por cada marino que desertó en sexenio de Peña, lo hicieron tres soldados. *Plumas Atómicas*. Disponible en: https://plumasatomicas.com/2018/03/deserto-sexenio-soldados/

Pok. (2011, 15 de agosto). Discrepancias: Marcha del « Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad » y de « No más Sangre ». Disponible en: http://pok.news/2011/08/15/discrepancias-marcha-del-movimiento-por-la-paz-con-justicia-y-dignidad-y-de-no-mas-sangre/

Ponce, R. (2015, 23 de septiembre). Proyectarán "Ayotzinapa. Crónica de un crimen de Estado" en la UdeG. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/416269/proyectaran-ayotzinapa-cronica-de-un-crimen-de-estado-en-la-udeg

Poncela, A. M. (2015, 18 de agosto). Una mirada social general sobre el movimiento por Ayotzinapa. *Teknokultura*, *12*(2), 241-265. doi: 10.5209/rev_TK.2015.v12.n2.49630

Priest, D. (1996, 21 de septiembre). U.S. Instructed Latins on Executions, Torture. *Washington Post*. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1996/09/21/us-instructed-latins-on-executions-torture/f7d86816-5ab3-4ef0-9df6-f430c209392f/

Proceso. (1977, 16 de julio). Secuestran a esposas de presos políticos. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/4609/secuestran-a-esposas-de-presos-politicos

Proceso. (1997, 15 de marzo). Veinte años del Comité Eureka: los presidentes, los procuradores, los torturadores... *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/175100/veinte-anos-del-comite-eureka-los-presidentes-los-procuradores-los-torturadores

Proceso. (1998, 17 de enero). La CIDH echa abajo las argucias gubernamentales, y recomienda investigar y castigar las ejecuciones del ejido Morelia. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/177282/la-cidh-echa-abajo-las-argucias-gubernamentales-y-recomienda-investigar-y-castigar-las-ejecuciones-del-ejido-morelia

Proceso. (2000, 30 de septiembre*a*). Si Fox no aclara las desapariciones, se convertirá en cómplice: Rosario Ibarra. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/183859/si-fox-no-aclara-las-desapariciones-se-convertira-en-complice-rosario-ibarra

Proceso. (2000, 28 de octubre*b*). De su propia boca: Nazar Haro fue el creador de la Brigada Blanca. *Proceso*. (México). Disponible en: http://www.proceso.com.mx/184076/de-su-propia-boca-nazar-haro-fue-el-creador-de-la-brigada-blanca

Proceso. (2002, 13 de agosto*a*). Identifican restos de Lucio Cabañas. *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/244050/identifican-restos-de-lucio-cabanas

Proceso. (2002, 3 de noviembre*b*). México, precursor de los « vuelos mortales ». *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/188533/mexico-precursor-de-los-vuelos-mortales

Proceso. (2003, 26 de abril*a*). Dividir a ONG y familias, estrategia en caso Muertas de Juárez. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/252027/dividir-a-ong-y-familias-estrategia-en-caso-muertas-de-juarez

Proceso. (2003, 6 de julio*b*). Las sombras del 88. *Proceso* (México). Disponible en: http://www.proceso.com.mx/189822/las-sombras-del-88

Proceso. (2006, 21 de noviembre). Fallece de cáncer el general Quirós Hermosillo. *Proceso* (México D. F.). Disponible en: http://www.proceso.com.mx/223166/fallece-de-cancer-el-general-quiros-hermosillo

Proceso. (2008, 15 de junio). Cocina estilo « zeta ». *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/89289/cocina-estilo-zeta

Proceso. (2011, 10 de enero). ¡No más sangre! *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/260600/260600-no-mas-sangre

Proceso. (2012, 20 de abril*a*). Asesinan al general Mario Arturo Acosta Chaparro. *Proceso* (México). Disponible en: http://www.proceso.com.mx/304936/reportan-muerte-del-general-mario-arturo-acosta-chaparro

Proceso. (2012, 1 de agosto*b*). Se globaliza #YoSoy132; cuenta con 52 células en distintas partes del mundo. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/315804/se-globaliza-yosoy132-cuenta-con-52-celulas-en-distintas-partes-del-mundo

Proceso. (2014, 18 de marzo). Kombo Kolombia tocó por dos horas para Los Zetas antes de que los asesinaran. *Proceso*. Disponible en:

https://www.proceso.com.mx/367561/kombo-kolombia-toco-por-dos-horas-para-los-zetas-antes-de-que-los-asesinaran

Proceso. (2017, 3 de marzo*a*). Cifra oficial de desaparecidos "no representa gravedad del problema"; se denuncian dos de 10: activistas. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/476627/cifra-oficial-desaparecidos-representa-la-gravedad-del-problema-se-denuncian-dos-10-activistas

Proceso. (2017, 16 de marzo*b*). Policías de Culiacán entregan al crimen a un grupo de jóvenes detenidos (Video). *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/478277/policias-de-culiacan-entregan-al-crimen-a-grupo-de-jovenes-detenidos-video

Proceso. (2018, 14 de febrero*a*). Se aplaza juicio de la « Chapodiputada » en EU; juez fija nueva audiencia hasta abril. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/522537/se-aplaza-juicio-de-la-chapodiputada-en-eu-juez-fija-nueva-audiencia-hasta-abril

Proceso. (2018, 7 de septiembre*b*). Se han localizado mil 307 fosas clandestinas con tres mil 926 cuerpos desde 2007: CNDH. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/550089/se-han-localizado-mil-307-fosas-clandestinas-con-tres-mil-926-cuerpos-desde-2007-cndh

Quintana, M. M. (2014, 27 de mayo). Configuraciones discursivas de Abuelas de Plaza de Mayo: enunciación y mecanismos retóricos en « Botín de guerra ». *Kamchatka. Revista de análisis cultural.*, *0*(3), 11-25. doi: 10.7203/KAM.3.3577

Radilla Martínez, A. (2002). *Voces acalladas (vidas truncadas). Perfil biográfico de Rosendo Radilla Pacheco*. Chilpancingo, Guerrero : (n. e.).

Radilla Martínez, A. y Rangel Lozano, C. E. G. (2012). *Desaparición forzada y terrorismo de Estado en México*. México: Plaza y Valdés.

Ramírez, A. (2018, 28 de febrero). Vuelos de la muerte en Veracruz: helicópteros oficiales aventaban cadáveres. *El Dictamen*, Veracruz, sección Veracruz. Disponible en: https://www.eldictamen.mx/2018/02/veracruz/estatal/vuelos-de-la-muerte-en-veracruz-helicopteros-oficiales-aventaban-cadaveres/

Ramírez, E. (2016, 8 de agosto). El escandaloso archivo del ex secretario de Seguridad de Veracruz. *Milenio*, sección Policía. Disponible en: http://www.milenio.com/policia/arturo_bermudez_zurita-secretario-veracruz-corrupcion-yunes-milenio_0_787721394.html

Ramírez Zuluaga, L. A. (2015, dicimbre). El sujeto en los juegos del poder: subjetivación y desubjetivación desde Foucault. *Revista de Psicología Universidad de Antioquia, 7*(2), 133-146.

Rangel Lozano, C. E. G. y Sánchez Serrano, E. (2017). *La desaparición forzada en México: De marchas y huelgas de hambre a la juricidad de la ley general sobre desaparición forzada*. Latin American Studies Association (LASA). Ponencia, Lima.

Ravelo Blancas, P. (2004). Entre las protestas callejeras y las acciones internacionales. Diez años de activismo por la justicia social en Ciudad Juárez. *El Cotidiano, 19*(125). Disponible en: www.redalyc.org http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=32512503

Ravelo, R. (1998, 18 de abril). La Dirección Federal de Seguridad: un cuerpo de élite que trabajó en el filo del espionaje, el crimen y la represión. *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/177909/la-direccion-federal-de-seguridad-un-cuerpo-de-elite-que-trabajo-en-el-filo-del-espionaje-el-crimen-y-la-represion

Ravelo, R. (2014). *Zetas. La franquicia criminal*. México: Ediciones B.

Redacción. (2014, 27 de mayo). Cumple 19 años desaparecido Gilberto Romero; la OCSS pide su presentación. *El Sur, periódico de Guerrero* (Chilpancingo, Guerrero). Disponible en: https://suracapulco.mx/archivoelsur/archivos/151297

Redacción Nexos. (2011, 28 de enero). Una ayudadita de memoria para Felipe Calderón. Disponible en: https://redaccion.nexos.com.mx/?p=2571

REDIM. (2014). 2014, otro año más de discriminación y violencia contra la niñez mexicana: REDIM. [Red por los derechos de la infancia en México]. Disponible en: http://derechosinfancia.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=70&id_opcion=73

REDIM. (2017, noviembre). Infancia cuenta 2017 desafíos en el acceso a la justicia para niñas niños y adolescentes final. Red por los derechos de la infancia en México.

Reforma. (2018, 16 de marzo). Indaga la SEIDO a mando de Yunes. *Reforma Diario* (Ciudad de México). Disponible en: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1347406&v=5&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1347406&v=5

Regeneración. (2014, 20 de noviembre). Policías agreden a manifestantes en movilización por Ayotzinapa. *Regeneración* (Ciudad de México). Disponible en: https://regeneracion.mx/policias-agreden-a-manifestantes-en-movilizacion-por-ayotzinapa/

Retamozo, M. (2011a). Sujetos políticos: decisión y subjetividad en perspectiva posfundacional. *Ideas y Valores*, *LX*(147), 51-64.

Retamozo, M. (2011b). Sujetos políticos: teoría y epistemología Un diálogo entre la teoría del discurso, el (re)constructivismo y la filosofía de la liberación en perspectiva latinoamericana. *Ciencia Ergo Sum*, *18*(1), 81-89.

Retamozo, M. (2012). Constructivismo: Epistemología y Metodología en las ciencias sociales. En *Tratado de metodología de las ciencias sociales: Perspectivas actuales* (p. 325-351). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Reuters. (2010, 9 de junio). Hallada en Rusia una fosa común de la época de Stalin | Internacional. El País Vladivostok (Rusia), sección Internacional. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2010/06/09/actualidad/1276034414_850215.html

Reveles, J. (2012). *Levantones, narcofosas y falsos positivos*. México: Penguin Random House.

Reveles, J. (2015, 12 de noviembre). Iguala, el gran surtidor de heroína. *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/420527/iguala-el-gran-surtidor-de-heroina-dejar-en-borrador

Reveles, J. (2016, junio). Desaparecidos en México. La más perversa de las simulaciones. *Revista Mexicana de Comunicación*, *1*(138), 7-14.

Reyes Isidoro, A. (2012, 5 de marzo). Las desaparecidas en Veracruz. *Al Calor Político*, Xalapa, Veracruz, sección Prosa Aprisa. Disponible en: http://alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=3242&c=4#.V9ilb61SPQR

Reynoso, C. A. y Alonso, J. (2015). *Una fuerte indignación que se convirtió en movimiento: Ayotzinapa*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Rifà Valls, M. (2003). Michel Foucault y el giro postestructuralista crítico feminista en la investigación educativa. *Revista Educación y Pedagogía*, *15*(37), 69-83.

Rincón Covelli, T. (2005, agosto). La verdad histórica: una verdad que se establece y legitima desde el punto de vista de las víctimas. *Estudios Socio-Jurídicos*, *7*(spe), 331-354.

Rincón Henao, D. (2018, 1 de junio). Rastreadoras, mexicanas que buscan la tumba de sus hijos desaparecidos. *El Tiempo*, México, sección Latinoamérica. Disponible en: http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/colectivo-rastreadoras-del-fuerte-que-busca-los-desaparecidos-en-mexico-225170

Rivas, D. C. (1993). *Gringos, contras y sandinistas: testimonio de la guerra civil en Nicaragua*. Santa Fe de Bogotá: TM Editores.

Rivera Hernández, R. D. (dir.). (2016). *Del Internet a las calles: #YoSoy132, una opción alternativa de hacer política*. Chapel Hill : University of North Carolina Press. Disponible en : http://www.jstor.org/stable/10.5149/9781945234286_diegoriverahernandez

Rivera, R. (2015, 7 de julio). Cisen contrató a Hacking Team en 2015, responden a Segob; activistas muestran factura. *SinEmbargo MX* (México). Disponible en: http://www.sinembargo.mx/07-07-2015/1405794

Robin, M.-M. (2004). *Escadrons de la mort, l'école française*. Paris : La Découverte.

Robin, M.-M. (2008). *Escadrons de la mort, l'école française*. Arte-France.

Robledo, C., Escorcia, L., Querales, M. y García, G. (2016 septiembre). Violencia e ilegalidad en las fosas de Tetelcingo: Interpretaciones desde la antropología. *Resiliencia. Revista enfocada a los Derechos Humanos y la Atención a Víctimas*, (3), 8-23.

Robledo Silvestre, C. (2012). *Drama social y política del duelo de los familiares de desaparecidos en Tijuana en el marco de la Guerra contra el Narcotráfico (2006-2012)*. Tesis. Ciudad de México: Colegio de México. Disponible en: http://cei.colmex.mx/Estudios%20sobre%20violencia/Estudios%20Violencia%20M%C3%A9xico%20Materiales%20recibidos/Carolina%20Robledo,%20Tesis%20doctoral%20(Duelo%20en%20Tijuana%20por%20Guerra%20contra%20Narcotr%C3%A1fico).pdf

Robledo Silvestre, C. (2017). *Drama social y política del duelo. Las desapariciones de la guerra contra las drogas en Tijuana*. Ciudad de México: El Colegio de México.

Robles, I. (2018, 29 de agosto). Los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados; esa es mi convicción: EPN. *Aristegui Noticias* (Ciudad de México). Disponible en: https://m.aristeguinoticias.com/2908/lomasdestacado/los-43-normalistas-de-ayotzinapa-fueron-incinerados-esa-es-mi-conviccion-epn/

Rodríguez Castañeda, R. (2013). *El policía: La guerra sucia no se olvida*. México: Penguin Random House Grupo Editorial México.

Rodríguez, D. E. (2016, January 24). 43 legislators have been accused of having links with criminals. *El Universal* (Ciudad de México). Avalaible in: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/english/2016/02/24/43-legislators-have-been-accused-having-links-criminals

Rodríguez Ramírez, B. (2011). La ciudadanía como experiencia en las madres de Eureka. En *Mujeres y ciudadanía en México: Estudios de caso* (p. 235-274). Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Roitman, M. (2005). *Las razones de la democracia en América Latina*. México: Siglo XXI.

Rojas Gutiérrez, R. (2015). *Historia mínima de la revolución cubana*. México: El Colegio de México.

Romandía, S. y Covarrubias, A. (2011, 23 janvier). Niños indígenas, los más vulnerables a ser robados. *El Universal.mx*, México, sección Estados. Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/79342.html

Romo, P. y Villanueva, R. (2016, septiembre). Editorial. *Resiliencia. Revista enfocada a los Derechos Humanos y la Atención a Víctimas*, (3), 5-6.

Ruddick, S. (1989). *Maternal Thinking. Towards a Politics of Peace*. Boston: Beacon Press.

Ruiz, J. (2018, 13 de febrero). Hacen de la academia de Policía de Veracruz « cementerio » de desaparecidos en periodo de Bermúdez : Imagen del Golfo - Central de Noticias. *Imagen del Golfo* (Ciudad de México). Disponible en: http://imagendelgolfo.mx/resumen.php?id=41217499

Ruiz Tovar, J. (2011). Cuatro momentos de la doctrina en política exterior estadounidense: ¿Entre la teoría y la práctica? / Four moments from US foreign policy doctrine: Between theory and the practice? *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, (95), 165-187.

Sabatier, P. A. (2010, 22 décembre). Advocacy coalition framework (ACF). Dans *Dictionnaire des politiques publiques. , 3e éd.* (p. 49-57). Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.). 3e éd.

Sacristán Roy, E. (2006, diciembre). Las privatizaciones en México. *Economía UNAM*, *3*(9), 54-64.

Said, E. W. (1993, January). *Musical Elaborations*. New York: Columbia University Press.

Salas, J. (2015, 13 septembre). La ciencia de las Abuelas. *El País*, Madrid, sección Ciencia. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2015/09/04/ciencia/1441363331_846341.html

Salas Porras, A. (2014, septiembre). Las élites neoliberales en México: ¿cómo se construye un campo de poder que transforma las prácticas sociales de las élites políticas? *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, *59*(222), 1-33.

Salazar, F. (2004). Globalización y política neoliberal en México. *El Cotidiano, 20*(126). Disponible en: www.redalyc.org http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=32512604

Salcedo-Albarán, E. y Garay Salamanca, L. J. (2016). *Macro-Criminalidad: Complejidad y Resiliencia De Las Redes Criminales*. [Macro-Criminalidad]. (s. l.) : iUniverse.

Samaddar, R. (2014). La emergencia del sujeto político. *Política Común, 6*. doi: http://dx.doi.org/10.3998/pc.12322227.0006.007

Sánchez Serrano, E. (2012). AFADEM: Desaparecidos: Presentación. En *Desaparición forzada y terrorismo de Estado en México* (p. 177-207). Ciudad de México: UAG/Plaza y Valdés.

Sánchez Serrano, E., Ferrer Vicario, G. A., Rangel Lozano, C. E. G., Aréstegui Ruiz, R. y Solís Tellez, J. (2014). *Del asalto al cuartel de Madera a la reparación del daño a víctimas de la violencia del pasado. Una experiencia compartida en Chihuahua y Guerrero*. México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública / Universidad Autónoma de la Ciudad de México / Juan Pablos Editor.

Santa Fe Group y Heritage Foundation. (1980, mayo). Documento de Santa Fe I. Disponible en: http://www.offnews.info/downloads/santafe1.PDF

Sarat, A. & Scheingold, S. A. (2006). *Cause Lawyers and Social Movements*. Stanford : Stanford University Press.

Savoie-Zaic, L. (dir.). (2003). L'entevue semi-dirigée. Dans *Recherche Sociale. De la problématique à la collecte de données*. Québec : Presses de l'Université du Québec.

Scherer García, J. et Monsivais, C. (1999). *Parte de guerra*. México : Nuevo Siglo/Aguilar.

Schmelkes, S. (2010). *Torres Bodet, el Plan de Once años y los libros de texto gratuitos*. México: Instituto de Investigaciones para el desarrollo de la educación en la Universidad Iberoamericana.

Schoellkopf, S. (2017). The Disappearing of the Disappeared in the Plaza de Mayo. In *Mothers in Public and Political Life* (p. 269-286). Demeter Press.

Schrecker, E. (1998). *Many Are the Crimes*. New Jersey : (n. é.).

Schwartz-Marin, E. y Cruz-Santiago, A. (2018, marzo). Antígona y su biobanco de ADN: Desaparecidos, búsqueda y tecnologías forenses en México. *Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social*, *18*(1), 129-153. doi: 10.5565/rev/athenea.2260

Segato, R. L. (2013). *La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado*. México: Universidad del Claustro de Sor Juana.

Selser, G. (1988, enero). *El documento de Santa Fe, Reagan y los derechos humanos*. México: Alpa Corral.

Selser, G. (1990). *Los Documentos de Santa Fe I y II*. México: Universidad Obrera de México.

SERAPAZ. (2010). *Desapariciones Forzadas en México. Documentos del proceso de la Comisión de Mediación, el pdpr-epr y el Gobierno Federal*. (p. 460). México: Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ). Disponible en: http://www.cedema.org/uploads/COMED.pdf

SERAPAZ-MNDM. (2017, 12 de octubre). Las familias saludan la aprobación de la Ley General en materia de Desaparición de Personas, una herramienta para enfrentar la grave crisis de desapariciones e impunidad en México. Disponible en: https://serapaz.org.mx/las-familias-saludan-la-aprobacion-de-la-ley-general-en-materia-de-desaparicion-de-personas-una-herramienta-para-enfrentar-la-grave-crisis-de-desapariciones-e-impunidad-en-mexico/

Serrano, M. (2007). Narcotráfico y gobernabilidad en México. *Pensamiento iberoamericano*, (1), 251-278.

Sicilia, J. (2011, 3 de abril). Javier Sicilia: Carta abierta a políticos y criminales. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/266990/javier-sicilia-carta-abierta-a-politicos-y-criminales

Sicilia, J. (2015, 9 de julio). Carta abierta a los padres de Ayotzinapa. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/410063/410063-carta-abierta-a-los-padres-de-ayotzinapa

Sicilia, J. (2016*a*). Prólogo. En *El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad*. Ciudad de México.

Sicilia, J. (2016, 6 de agosto*b*). Las fosas de Jojutla, otro crimen pendiente. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/449811/las-fosas-jojutla-crimen-pendiente

Sicilia, J. (2016, 7 de octubre*c*). *El deshabitado*. Ciudad de México: Penguin Random House Grupo Editorial México.

Sicilia, J. y Vázquez Martín, E. (2016). *El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad*. Ciudad de México: Ediciones Era.

Sikkink, K. (1996). La red internacional de derechos humanos en América Latina: surgimiento, evolución, efectividad. En *Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina* (p. 71-96). Caracas: Nueva Sociedad.

Sin Embargo. (2011, 30 de septiembre). 10 Claves y dudas sobre la masacre de Boca del Río, Veracruz. *Sin Embargo* (México). Disponible en: http://www.sinembargo.mx/30-09-2011/48720

Slack, K. M. (1996). Operation Condor and Human Rights: A Report from Paraguay's Archive of Terror. *Human Rights Quarterly*, *18*(2), 492-506.

Smihula, J. (2003). *La Escuela de Las Américas (Documental)*. Estados Unidos. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=x3DrBsOwrDQ

Snyder, R. & Durán Martínez, A. (2009, July). Drugs, Violence, and State-Sponsored Protection Rackets in Mexico and Colombia. *Colombia Internacional*, (70), 61-91.

SOA Watch. (2006, May 1). *Of Juarez and the « Dirty War » in Mexico | SOA Watch: Close the School of the Americas*. Avalaible in:

http://www.soaw.org/category-table/2760-of-juarez-and-the-qdirty-warq-in-mexico

SOA Watch. (s. d.). *Father Roy's Biographical Information | SOA Watch: Close the School of the Americas*. Avalaible in: http://www.soaw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=413

Soberón Garrido, R. (2013, junio). Los intentos de reforma de las políticas sobre drogas en América Latina. *Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana*, (13), 27-39.

Solís Esquivel, E. (2013, 31 de diciembre). Redes de acción pública en México. Una breve historia. *Ação Midiática – Estudos em Comunicação, Sociedade e Cultura.*, (6). doi: 10.5380/am.v0i6.34646

Solyszko Gomes, I. (2013, agosto). Femicidio y feminicidio: Avances para nombrar la expresión letal de la violencia de género contra las mujeres. *GénEros*, *2*(13), 23-41.

Somuano, F. (2012). De por qué los mexicanos se asocian y participan en organizaciones civiles. *Foro Internacional*, *52*(4 (210)), 885-909.

Somuano, M. F. (2007). *Sociedad civil organizada y democracia en México*. México: El Colegio de México.

Somuano, M. F. (2010). Las organizaciones civiles: formación y cambio. En *Los grandes problemas de México. XIV Instituciones y procesos políticos*. México: El Colegio de México.

Soto, A. J. (2015, 23 de septiembre). A 10 años de "Los demonios del Edén", redes de trata siguen impunes: Lydia Cacho. *Proceso*.

Stillman, S. (2007). « The Missing White Girl Syndrome »: Disappeared Women and Media Activism. *Gender and Development*, *15*(3), 491-502.

Suárez Farías, F. (1993). Familias y dinastías políticas de los presidentes del PNR-PRM-PRI. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, *38*(151).

Suárez, J., Díaz, A., Knippen, J. y Meyer, M. (2017 juillet). *El acceso a la justicia para personas migrantes en México. Un derecho que existe sólo en el papel*. (p. 40). Ciudad de México: Fundación para la Justicia / Fundar / Wola /Casa del Migrante Saltillo /La 72 / Hermanos en el camino. Disponible en: http://fundacionjusticia.org/cms/wp-content/uploads/2013/06/Accesoalajusticia_Versionweb_Julio2017.pdf

Suaste Cherizola, J. (2017). *El país del dolor: historia del movimiento por la paz con justicia y dignidad*. Ciudad de México: Ediciones Proceso.

Takahashi, H. (2011, 4 de julio). Narcos mexicanos secuestran y esclavizan a hackers. *Excélsior*, Marbella, sección Global. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/2011/07/04/global/749995

Thede, N. (2003). Derechos en principio y en práctica: fundamentos teóricos para elecciones metodológicas e investigación comparativa cuantitativa en torno a la concretización de derechos. "Un Elogio al Indicador Imperfecto". En *Seminario Internacional sobre Indicadores y Diagnóstico en Materia de Derechos Humanos: El Caso de la Tortura en México* (p. 159-169). Mérida, Yucatán: Comisión Nacional de Derechos Humanos. Disponible en: http://stjtam.gob.mx/Cursos/libros/0000135.pdf

Tlachinollan. (2014, 14 de diciembre). Agrede Policía Federal a estudiantes y familias de Ayotzinapa. En *Tlachinollan | Centro de Derechos Humanos de la Montaña*. Disponible en: http://www.tlachinollan.org/comunicado-agrede-policia-federal-estudiantes-y-familiares-de-desaparecidos-de-ayotzinapa-durante-la-preparacion-de-jornada-cultural/

Topete, J. (2018, 13 de febrero). Hay cuerpos humanos debajo de edificios de la Academia, en El Lencero, acusa víctima. *Al Calor Polí-tico* (Xalapa, Veracruz). Disponible en: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hay-cuerpos-humanos-debajo-de-edificios-de-la-academia-en-el-lencero-acusa-victima-255690.html

Torliere, M. (2016, 8 de diciembre). Madres, estudiantes, trabajadoras... las víctimas de la narcoguerra en Veracruz: The Guardian. *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/465664/madres-estudiantes-trabajadoras-las-victimas-la-narcoguerra-en-veracruz-the-guardian

Treviño Rangel, J. y Valdivia, M. (2015). Gobernando el pasado: el proceso de justicia transicional en México, 2001-2006. *Foro Internacional*, *54*(1), 31-75.

Trinquier, R. (1961). *La guerre moderne*. Paris : La Table ronde.

Turati, M. (2014, 8 de enero). Transforman Províctima en Comisión de Atención a Víctimas. *Proceso*. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/361924/transforman-provictima-en-comision-de-atencion-a-victimas

Turati, M. (2016). +de 72. Disponible en: http://www.masde72.periodistasdeapie.org.mx/creditos.html

Turner Barragán, E. (2006). Influencia de la industria maquiladora y el TLCAN en la demografía y el desarrollo económico de la frontera norte de México. *Análisis Económico*, *XXI*(46), 369-396.

Turner, V. W. (1973). *Simbolismo y ritual*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ulloa Bornemann, A. (2007). *Surviving Mexico's Dirty War: A Political Prisoner's Memoir*. Filadelfia: Temple University Press.

Uncos, P. L. (2015). Los militares "globalistas" argentinos y su Guerra Fría en América Central: ¿alineamiento automático o autonomía heterodoxa? *Revista Análisis Internacional*, *6*(1), 95-111.

Valdespino Soto, J. J. (1975). *Proyección internacional de la revolución cubana*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro.

Valdez, N. (2018, 23 de febrero). Los tiraban en helicópteros! *Notiver* (Veracruz). Disponible en: http://www.notiver.com.mx/index.php/primera/453856.html?secciones=3&seccion_selected=3&posicion=7

Valencia Triana, S. (2016, 18 de agosto). *Capitalismo Gore*. México: Grupo Planeta.

Valenzuela (coord.), J. M. (dir.). (2015, 17 de noviembre). *Juvenicidio: Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina*. México: NED Ediciones.

Vecchioli, V. (2009, agosto). Expertise jurídica y capital militante: reconversiones de recursos escolares, morales y políticos entre los abogados de derechos humanos en la Argentina. *Pro-Posições*, *20*(2), 41-57. doi: 10.1590/S0103-73072009000200004

Vela, D. S. (2017, 6 de abril). Alto mando de la PF filtraba a los Beltrán tácticas de la DEA. *El Financiero*, México, sección Nacional. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/elemento-de-la-policia-federal-entregaba-informacion-a-narco-cns.html

Velasco-Yáñez, D. (2015). *Ayotzinapa y la crisis del Estado neoliberal mexicano*. Guadalajara: ITESO.

Veledíaz, J. (2008, 11 de mayo). La infantería ligera del 'Chapo'. *El Universal*, México, sección Nación. Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/159407.html

Veloso Roman, K. (2015, 19 septembre). *Esthétique et théâtralité du corps disparu : Chili, 1973-1989, 2011-2013*. Paris 8. Récupéré de http://www.theses.fr/2015PA080052

Venegas, J. M. (2004, 20 de febrero). Nazar y Acosta se creían indispensables. *La Jornada*, México. Sección Política. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2004/02/20/006n1pol.php?printver=1&fly=

Verbitsky, H. (2004). *El Vuelo*. Buenos Aires: Sudamericana.

Verduzco, G. (2001). La evolución del tercer sector en México y el problema de su significado en la relación entre lo público y lo privado. *Estudios Sociológicos*, *XIX*(1), 27-48.

Verduzco, G., Leal Trujillo, J. y Tapia Álvarez, M. (2009). *Fondos Públicos para las Organizaciones de la Sociedad Civil. Análisis del Programa de Coinversión Social*. México: Alternativas y capacidades.

Verstraeten, A. (2009, 1 de junio). À la charnière de l'intime et du social : quand des familles de « disparus » réélaborent leur rapport au corps et au langage. *Journal des anthropologues. Association française des anthropologues*, (116-117), 139-148.

Vice News. (2016, 9 de mayo). Así es como el gobierno mexicano escucha tus conversaciones privadas. *VICE News* (México). Disponible en: https://news.vice.com/es/article/asi-gobierno-mexicano-escucha-conversaciones-privadas

Vieytes, R. (2004). *Metodología de la investigación en organizaciones: mercado y sociedad. Espistemología y técnicas.* Buenos Aires: Editorial de las ciencias.

Villarreal Martínez, M. T. (2016). Los colectivos de familiares de personas desaparecidas y la procuración de justicia. *Intersticios sociales*, (11), 1-28.

Wagner, R. (1965). *El anillo de los nibelungos (primera parte)*. (s. l.): Codex.

Washington Valdez, D. (2005). *Cosecha de mujeres: safari en el desierto mexicano*. México : Océano.

Webb, G. (1999). *Dark alliance: The CIA, the contras, and the crack cocaine explosion*. New York: Seven Stories Press.

White, H. V. (1992). *El contenido de la forma: narrativa, discurso y representación histórica*. México: Paidós.

Woldenberg, J. (2007, agosto). La próxima reforma electoral. *Revista de la Facultad de Derecho de México*, *57*(247), 99-111.

Wolf, S. (2011). La guerra de México contra el narcotráfico y la Iniciativa Mérida: piedras angulares en la busqueda de legitimidad. *Foro Internacional*, *LI*(4), 669-714.

Wood, D. (1998, 20 mars). Première partie : École des Amériques. Dans *Nuevo Amanecer Press*. Récupéré de http://dignidad.free.fr/Zapatisme/Analyses/prem1.htm

Wood, D. (w. d.). Mexico Practices What the School of the Americas Teaches | SOA Watch: Close the School of the Americas. Dans *SOA Watch: Close the School of the Americas*. Avalaible in: http://www.soaw.org/index.php?option=com_content&id=1440

Wright, M. (2018, 13 de abril). *Detención, desaparición y democracia*. Actes du colloque Programa de vinculación con la sociedad. Universidad Americana de Acapulco. Chilpancingo, Guerrero. Disponible en: https://www.facebook.com/1050003621690054/videos/1858524210837987/

Yankelevich, J. (2017). Poder Judicial y desaparición de personas en México. En *Desde y frente al Estado: Pensar, atender y resistir la desaparición de personas en México* (p. 129-231). Ciudad de México: Centro de Estudios Constitucionales SCJN.

Yankelevich, J. (2018, 16 de marzo). La documentación independiente de la barbarie. *Animal Político*, Ciudad de México, sección Columna invitada. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/03/16/la-documentacion-independiente-de-la-barbarie/

Zamora, R. (2013, 23 de julio). Padrote de Tlaxcala alimenta a su caimán con carne de mujeres que no cubren su « Cuota ». *Diario de Morelos* (Cuernavaca). Disponible en: http://www.diariodemorelos.com/content/padrote-de-tlaxcala-alimenta-su-caim%C3%A1n-con-carne-de-mujeres-que-no-cubren-su-cuota

Zavaleta, N. (2018, 8 de febrero*a*). Detienen a exdirector de Fuerza Civil en Veracruz y a otros agentes por desaparición forzada. *Proceso* (Ciudad de México). Disponible en: http://www.proceso.com.mx/521748/detienen-exdirector-de-fuerza-civil-en-veracruz-y-otros-agentes-por-desaparicion-forzada

Zavaleta, N. (2018, 5 de marzo*b*). Detienen a seis policías en Veracruz por desaparición forzada y muerte de un joven. *Proceso* (Ciudad de México). Disponible en: http://www.proceso.com.mx/524861/detienen-seis-policias-en-veracruz-por-desaparicion-forzada-y-muerte-de-un-joven

Zavaleta, N. (2107, 11 de enero). Tristeza, rabia e impotencia, a un año de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca. *Proceso*. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/469615/tristeza-rabia-e-impotencia-a-ano-la-desaparicion-cinco-jovenes-en-tierra-blanca

Zermeño, S. (1996). *La sociedad derrotada: el desorden mexicano del fin de siglo*. México: Siglo XXI.

Zibechi, R. (2013). La lutte contre la pauvreté comme contre-insurrection. Dans *Être comme eux? Perspectives critiques sur le développement en Amérique latine* (p. 185-213). Lyon : Parangon.

(1979). *Pregunta a Videla sobre desaparecidos*. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3AlUCjKOjuc

(2003). *Hidden in Plain Sight*. [Documentary]. Avalaible in: http://www.imdb.com/title/tt0384994/

(2017, 7 de noviembre). *Ariel Dulitzky: Los Zetas descuartizaban vivas a sus víctimas en Coahuila*. En *Aristegui*. Ciudad de México. Disponible en: http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-aristegui-intvw-ariel-dulitzky-zetas-coahuila/